

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



AMPARO EN REVISIÓN

NÚMERO 623/2017

JUNIO/09/2017

12:07 (HORAS)

QUEJOSO: [REDACTED]

PROMOVENTE DEL RECURSO: QUEJOSO Y AUTORIDADES RESPONSABLES

CONTRA ACTOS DEL: CONGRESO DE LA UNIÓN Y DE OTRAS AUTORIDADES

ACTO RECLAMADO: LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ARTÍCULOS 83 A 96 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 4 DE AGOSTO DE 1994 Y LEY GENERAL DE SALUD, ARTÍCULOS 234, 235, ÚLTIMO PÁRRAFO, 237, 245, FRACCIÓN I, 247, ÚLTIMO PÁRRAFO, 248, 368 Y 479 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 07 DE FEBRERO DE 1984 Y OTROS

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO DECIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

JUICIO DE AMPARO: J.A. [REDACTED]

FECHA DE RESOLUCIÓN: 27 DE OCTUBRE DE 2016 13 JUN 2017

EL JUZGADO RESOLVIÓ: SOBRESEE Y NO AMPARA

MINISTRO PONENTE: JOSE RAMON COSSIO DIAZ RTA EXT.

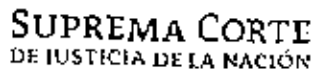
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA:

EXPEDIENTE QUE CONSTA DE: TRES CUADERNOS, DOS LEGAJOS, SOBRE AMARILLO CERRADO Y UN DISCO COMPACTO

ANTECEDENTE: REASUNCIÓN DE COMPETENCIA [REDACTED]

ADMINISTRATIVA

PRIMERA SALA



Expediente: 622/2017

Firma:

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the President of the Senate, dated January 1, 1901. The letter is signed by William McKinley and is addressed to John D. Long. The letter is a copy of a letter that was sent to the President of the Senate by the President of the United States. The letter is a copy of a letter that was sent to the President of the Senate by the President of the United States. The letter is a copy of a letter that was sent to the President of the Senate by the President of the United States.

REC'D:ESSORUQN-274072046

THE IRRAWADDY RIVER

EX-100-DISTRICT-5-2016-11E-MAY
OFFICE OF THE CLERK

1

**OFICINA DE CERTIFICACIÓN JUDICIAL Y DE CORRESPONDENCIA
BOLETA DE CONTROL PARA LA FORMACIÓN DE EXPEDIENTES**

TIPO EXPEDIENTE (PROVISIONAL) A.R.

FECHA 9 jun 17

FOLIO 020298

FIRMA DEL SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA RESPECTIVA MESA DE FORMACIÓN DE EXPEDIENTES PARA EFECTOS DE LA CLASIFICACIÓN PROVISIONAL DE ESTE EXPEDIENTE (LIC. JOSÉ OSCAR VILLEGAS TABARES, LIC. G. ROCÍO PÉREZ MAQUEDA, LIC. BRENDA M. PALMA MARTÍNEZ, LIC. ROMÁN MARÍN ENRIQUEZ, LIC. MARIO ENRIQUE CAMACHO MARTÍNEZ O LIC. AZHUR TEJADA FLORES)

FIRMA DEL TITULAR DE LA OFICINA - LIC. RODRIGO ROBLES ENRIQUEZ

TURNO AL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE FORMAR EL EXPEDIENTE Guadalupe Garza

PARA SER LLENADA POR EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE FORMAR EL EXPEDIENTE: (MIRIAM ÁVILA SALCEDO, ISIDRO ZUÑIGA SOLÓRZANO, GUADALUPE A. GARZA GUILLÉN, ERNESTO ALTAMIRANO LAGUNAS, CYNTHIA ROMÁN ARRIAGA, RICARDO ALEJANDRO RAMÍREZ PADILLA Y VÍCTOR HUGO ESPINOSA PIÑA)

NÚMERO ASIGNADO AL EXPEDIENTE 623/2017

ANTECEDENTES SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS RELATIVOS AL EXPEDIENTE QUE SE REGISTRA Rec. de Conf. 19/1/2010

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE FORMAR EL EXPEDIENTE A.R.

A TIPO DE EXPEDIENTE (CLASIFICACIÓN DEFINITIVA)

FIRMA DEFINITIVA DEL SUPERVISOR DE LA MESA DE FORMACIÓN DE EXPEDIENTES
SECRETARÍA DE JUSTICIA DE PANAMÁ
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE ACUERDOS

FIRMA DEFINITIVA DEL TITULAR DE LA OFICINA

INSTRUCCIONES

1. La presente boleta se utilizará y se agregará como primer foja a todo expediente que se forme en la Oficina de Certificación Judicial y de Correspondencia (OCJC).
2. En la boleta deberá indicarse la fecha de ingreso y el número de folio, así como el tipo de expediente que corresponda provisionalmente.
3. El supervisor de la mesa respectiva de formación de expedientes y el titular de la OCJC deberán suscribirla indicando la clasificación provisional. Posteriormente el referido supervisor turnará el material relativo al servidor público que formará el expediente respectivo y revisará los antecedentes.
4. El servidor público que forme el expediente deberá estudiar las constancias y en caso de duda sobre el tipo de expediente asignado lo hará del conocimiento del supervisor de la mesa respectiva de formación de expedientes, el cual de inmediato confirmará la clasificación asignada o, en caso de duda, lo consultará con el titular de la OCJC, este último deberá confirmar dicha categoría o, en su caso, consultar al titular de la Secretaría General de Acuerdos.
5. El servidor público responsable de formar el expediente respectivo asignará el número que corresponda, atendiendo a la categoría en que se ubica, revisará los ANTECEDENTES sobre asuntos relacionados con el asunto relativo al expediente que se forma, los indicará en esta boleta y la suscribirá.
6. El servidor público que forme el expediente lo entregará al supervisor de su mesa de formación de expedientes, el cual lo revisará e informará al titular de la OCJC cualquier situación que dé lugar a estimar incorrecta la clasificación de aquél, incluso la relevancia del asunto que justifique informe especial al Secretario General de Acuerdos.
7. Con base en lo anterior el titular de la OCJC suscribirá la presente boleta junto con el supervisor de la respectiva mesa de formación de expedientes y previa asignación del secretario auxiliar al que corresponda su estudio, remitirá el expediente a la Subsecretaría General de Acuerdos por conducto de la mesa de informes de la OCJC.



029298

SUMARIA DE FE DE
RECEPCIÓN

623/2017

2017 JUN 3 PM 12:07

OFICINA DE RECEPCIÓN
JEFATURA DE LA FISCALIA

- Recibido de un enviado en (1) foja con;
- Copia certificada de Testimonio resolutivo en (31) fojas, según su certificación.
 - Amparo en Revisión [REDACTED] en (391) fojas, según su último folio.
 - 1 disco compacto.
 - 2 legajos de pruebas sin foliar.
 - Juicio de Amparo [REDACTED] en (560) fojas, según su último folio.
 - 1 sobre amarrillo cerrado.
- 
- 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 8-1

3

AMPARO EN REVISIÓN:

R.A. [REDACTED]

QUEJOSO Y RECURRENTE:

[REDACTED]

RECURRENTE **ADHESIVO:**
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

MAGISTRADO **PONENTE:**
EUGENIO REYES CONTRERAS.

SECRETARIA: VANESA ZÁRATE
VERGARA.

Ciudad de México. Acuerdo del Décimo
Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, correspondiente
a la sesión de veinticinco de mayo de dos mil
diecisiete.

V I S T O S para resolver, los autos del
recurso de revisión número R.A. [REDACTED] y,

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado el
once de noviembre de dos mil dieciséis, en la
Oficina de Correspondencia Común de los
Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en
la Ciudad de México, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED],
solicitó el amparo y la protección de la Justicia
Federal, en contra de las autoridades y por los

actos que a continuación se transcriben (fojas 3 a 162 del juicio de amparo):

AUTORIDADES: --- 1. H. Congreso de la Unión --- -Cámara de Diputados; y --- -Cámara de Senadores. --- 2. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; --- 3. Secretario de Gobernación; --- 4. Comisionado Federal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; --- 5. Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y, --- 6. Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación.



ACTOS RECLAMADOS ---

1. Del Congreso de la Unión reclamo la expedición de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo del 14 de julio de 1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al 4 de agosto el mismo mes y año, en lo que concierne a los artículos 83, 84, 85 y demás relativos; con todas sus consecuencias y efectos.

2. Del Congreso de la Unión también reclamo la expedición de la Ley General de Salud del 26 de diciembre de 1983, publicada en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al 7 de febrero de 1984, en lo que concierne a los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248; con todas sus consecuencias y efectos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

3. Del Presidente de la República reclamo el decreto de 29 de julio 1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1994, que promulga y manda publicar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; con todas sus consecuencias y efectos.

4. Del Presidente de la República reclamo el decreto del 30 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, que promulga y manda publicar la Ley General de Salud; con todas sus consecuencias y efectos.

5. Del Secretario de Salud reclamo, en su calidad de titular y responsable del trámite y resolución de los asuntos que incumben a esa Secretaría en los términos de los artículos 1º, 2º, 14, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 1, 2º, 3º y 4º del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, todos los acuerdos, las ordenes, instrucciones, verbales o escritas, que como superior jerárquico cursó al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, como órgano desconcentrado de esa Secretaría, para negar, bajo la apariencia de un desechamiento, la solicitud de autorización sanitaria que formuló el quejoso para consumo personal con fines lúdicos o recreativos de la Marihuana, así como para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo de Marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de



Marihuana. Todos los efectos y consecuencias de los anteriores actos.

6. *Del Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios reclamo los actos de cumplimiento, observancia, trámite y ejecución atribuidos al Secretario de Salud, ya sea que los hubiere llevado a cabo por sí mismo o por conducto de su subordinado el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas; también reclamo los actos que de propio imperio dictó y no en cumplimiento de su superior jerárquico, consistentes en las órdenes, instrucciones o acuerdos, proveídos o resoluciones que giró a su subordinado, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para que, bajo la apariencia de un desechamiento, niega la solicitud formulada por el quejoso para autorización sanitaria para consumo personal con fines lúdicos o recreativos de la Marihuana, así como para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo de Marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana; todos los efectos, cumplimiento y ejecución de estos actos.*

7. *Del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios reclamo los actos de cumplimiento, observancia, trámite y ejecución atribuidos a sus superiores jerárquicos,*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

5

5

7

el Secretario de Salud, o bien, al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; reclamo igualmente los actos que de propia iniciativa haya realizado en la aplicación, concreta e implícita, de los numerales impugnados en la emisión y suscripción del oficio número [REDACTED] de ocho de julio de dos mil dieciséis, con el que, bajo la apariencia de un desechamiento, en realidad niega la solicitud de autorización sanitaria para consumo personal, con fines lúdicos o recreativos de la Marihuana, así como para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo de Marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana; con todos sus efectos y consecuencias. Asimismo reclamo cualquier acuerdo o determinación que haya tomado y ejecutado en relación con la solicitud formulada por el quejoso para la autorización sanitaria para consumo personal con fines lúdicos o recreativos de la Marihuana, así como para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo de Marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana; reclamo, también, el oficio de once de febrero de dos mil dieciséis en que requiere al hoy quejoso para que acredite su interés jurídico o

interés legítimo para formular su petición y ejercer los derechos que ahí hace valer el quejoso, apercibida que en caso contrario se desecharía la petición; también reclamo la confusión terminológica de carácter jurídico en que incurre para negar la petición al quejoso, bajo la apariencia de un desechamiento, pues al desgairé emplea tanto el interés jurídico como el interés legítimo como excusa para concluir con el desechamiento de la petición; con todos sus efectos y consecuencias, que se traducen de manera ejemplificativa y no limitativa en el desconocimiento y vulneración de los derechos sustantivos del quejoso.

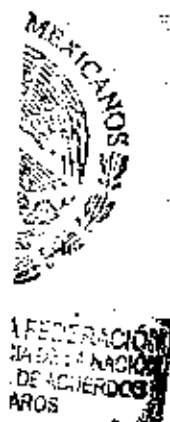
8. De todas las autoridades reclamo los actos tendentes a desconocer y vulnerar los derechos fundamentales inherentes a mi persona como individuo libre y autónomo, en el contexto de una sociedad democrática, que se expresa a sí misma como sujeto responsable, autoconsciente, racional y moral. Derechos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

SEGUNDO. El quejoso invocó como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1º, 3º, 4º, 13, 14, 16, 17 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y manifestó que no existía tercero interesado.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



TERCERO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo, al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular, mediante auto de treinta de marzo de dos mil dieciséis, radicó la demanda bajo el expediente número [REDACTED] y admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, la intervención que legalmente le corresponde; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 159 a 161 del juicio de amparo).

CUARTO. Seguido el trámite, el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, el **juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México**, celebró la audiencia constitucional y en la misma fecha dictó sentencia, al tenor de los siguientes puntos resolutivos (fojas 489 a 519):

PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, en términos de lo señalado en los considerandos tercero y quinto de este fallo.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a [REDACTED], por las razones y en los términos señalado en los considerandos séptimo y octavo de este fallo.

QUINTO. Inconforme con la sentencia anterior, la parte quejosa, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer a este Tribunal Colegiado de Circuito, el cual por auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se quedó registró con el número de expediente **R.A. [REDACTED]**, se ordenó dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento (fojas 163 a 164 del presente tomo).

SEXTO. Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, la presidencia de este Tribunal Colegiado de Circuito, admitió a trámite el **recurso de revisión adhesiva**, interpuesto por el delegado de las autoridades responsables **Presidente de la Republica y secretario de Salud**, se ordenó hacer del conocimiento de las partes la interposición del recurso, para los efectos legales procedentes (fojas 183 a 206 y 207 ídem).

SÉPTIMO. Luego, por autos de nueve de diciembre de dos mil dieciséis y cuatro de enero de dos mil diecisiete, se tuvieron por hechas las manifestaciones formuladas en vía de alegatos, por la parte quejosa en el juicio de amparo (fojas 176 a 181 y 182, 220 a 232 y 289).



OCTAVO. Mediante proveído de cinco de enero de dos mil diecisiete, en atención a lo solicitado por la Ministra Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía MINTERSCJN, relativo a la **reasunción de competencia** [REDACTED] de su índice, este Tribunal Colegiado, determinó que hasta en tanto se tuviera conocimiento de la determinación dictada por la Superioridad respecto de la reasunción de competencia aludida, se abstendría de dictar resolución en el presente juicio (foja 297).

NOVENO. Por auto de diez de febrero de dos mil diecisiete, este Tribunal Colegiado recibió el oficio remitido por la subsecretaría de acuerdos de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, vía MINTERSCJN, mediante el que informó que desechó la **reasunción de competencia** [REDACTED] por falta de legitimación de la parte promovente; por lo que se ordenó continuar con el trámite del juicio de amparo (foja 317).

DÉCIMO. Finalmente, por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, se turnó el presente expediente a la ponencia del Magistrado **Eugenio Reyes Contreras**, para la elaboración del proyecto respectivo (foja 321); y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e) y 84, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; 37, fracción II, 38 y 144, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en los puntos primero, fracción I, segundo, fracción I, numeral 1 y tercero, fracción I, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el quince de febrero de dos mil trece; toda vez que se recurre una sentencia definitiva dictada en la audiencia constitucional por un juzgado de Distrito, con sede dentro del ámbito territorial que tiene señalado este Tribunal como jurisdicción.

SEGUNDO. Este órgano colegiado debe verificar en primer lugar, la legitimación de quien



presentó el recurso de revisión, dado que la interposición de éste por parte legitimada para ello será la condición que hará posible que este Tribunal analice las cuestiones sometidas a su jurisdicción.

Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:

REVISIÓN, LEGITIMACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE EXAMEN PREVIO. Los Tribunales del Poder Judicial de la Federación a quienes corresponde conocer del recurso de revisión, conforme a las reglas de competencia establecidas para ese efecto, debe examinar previamente la procedencia de tal recurso y, desde luego, verificar la legitimación de quien lo interpuso, para después, al fallarlo, avocarse al examen del contenido de las alegaciones, al tenor de los agravios relativos, por que es la interposición del propio recurso por parte legitimada para ello, lo que hace posible que dichos Tribunales analicen las cuestiones sometidas a su jurisdicción, y de resultar que el recurso interpuesto es improcedente, quedarían, por ese solo hecho, impedidos para revisar la legalidad de los fallos impugnados, sin impugnar el contenido de los alegatos que se formulen en vía de agravio, así se invoque la operancia de alguna causa de improcedencia, pues admitir lo contrario sería como otorgar procedencia oficiosa a los recursos en el amparo y se violaría, lo expresamente dispuesto por el artículo 86 de la ley de la materia, que establece el principio de que la revisión únicamente procede a instancia de parte.

El recurso de revisión fue interpuesto por parte legítima, ya que lo presentó [REDACTED]

¹ *Semanario Judicial de la Federación*, página 143, Tomo 145-150, Primera Parte, Séptima Época



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

[Handwritten mark]

Por lo que el término de diez días previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, transcurrió del **viernes cuatro al jueves diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis**, descontándose los días veintinueve y treinta de octubre, cinco, seis, doce y trece de noviembre de dos mil dieciséis, por corresponder a sábados y domingos, respectivamente, que son inhábiles, en términos de lo dispuesto por los artículos 19, de la Ley de Amparo y 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, deben descontarse de dicho cómputo los días lunes treinta y uno de octubre, martes uno y miércoles dos de noviembre de dos mil dieciséis; en términos de la Circular 29/2016, emitida por el secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por ser inhábiles.



Por lo tanto, si el escrito de agravios fue presentado el **viernes once de noviembre de dos mil dieciséis**, en la Oficialía de Partes del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, como se puede constatar del sello impreso que obra en el documento de referencia (foja tres del presente toca), resulta evidente que el recurso de revisión se interpuso dentro del término legal establecido para tal efecto.

También fue presentado en tiempo el

recurso de revisión adhesiva, toda vez que el acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, por el que se admitió a trámite el recurso de revisión principal, se notificó a la autoridad responsable Presidente de la República, por medio de oficio, el **lunes cinco de diciembre de dos mil dieciséis**, como se aprecia del acuse de recibo del oficio **III-4130**, que obra a foja ciento sesenta y ocho de este tomo, consecuentemente, dicha notificación surtió efectos en esa misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo.

Por lo que el plazo de cinco días previsto en el artículo 82, de la Ley de Amparo, transcurrió del **martes seis al lunes doce de diciembre de dos mil dieciséis**, descontándose los días diez y once del mes y año citados, por corresponder a sábado y domingo, respectivamente, que son inhábiles, en términos de lo dispuesto por los artículos 19, de la Ley de Amparo y 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Entonces, si el oficio de agravios de la revisión adhesiva, se presentó el **lunes doce de diciembre de dos mil dieciséis**, en la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, como se desprende del sello impreso



que obra en el oficio de referencia (foja oiento ochenta y tres del presente toca), resulta evidente que el recurso de revisión adhesiva se interpuso dentro del término legal establecido para tal efecto.

CUARTO. Las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida están contenidas en las copias certificadas que se anexan a esta resolución.

QUINTO. En contra de la sentencia dictada por el **Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de Mexico**, la parte quejosa, ahora recurrente, expone como agravios los que obran a fojas veintiséis a ciento sesenta y dos del toca.

Mientras que los agravios expresados en el **recurso de revisión adhesiva**, expresados por las autoridades responsables **Presidente de la República** y el **Secretario de Salud**, obran de la foja ciento ochenta y tres a doscientos seis del presente toca.

SEXTO. Debe quedar firme el sobreseimiento decretado por el juez de Distrito, en el **considerando tercero**, que rige el primer punto resolutivo de la sentencia recurrida, en cuanto **sobreseyó** en el juicio de amparo con

fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia de los actos reclamados a las autoridades siguientes:

✓ **Secretario de Salud**, consistentes en las ordenes verbales o escritas al **comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para la Protección Contra Riesgos Sanitarios**, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso;

- ✓ **Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos sanitarios**, consistentes en la ejecución de las ordenes verbales o escritas giradas al Secretario de Salud, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso, ni las ordenes verbales o escritas al director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, con el mismo propósito;

✓ **Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, psicotrópicos y sustancias Químicas**, consistente en la ejecución de las órdenes verbales o escritas giradas al director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes,





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso.

Lo mismo ocurre con el **sobreseimiento** decretado por el juez de Distrito, en el **considerando quinto**, que rige el primer punto resolutivo del fallo recurrido, respecto de los actos siguientes:



- Oficio [REDACTED] de doce de febrero de dos mil dieciséis, al estimarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el **artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo**, en virtud de que dicho oficio es materia del diverso **juicio de amparo** [REDACTED], del índice del **Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México**, el cual a su vez fue recurrido en el **Amparo en Revisión** [REDACTED] (del índice de este Tribunal, en el cual en sesión de **dos de febrero de dos mil diecisiete**, se declara legalmente incompetente para conocer del problema de constitucionalidad y se ordenó remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación);
- Sobreseimiento que se hizo extensivo a los **artículos 234, 235, 237 y 368, de la Ley General de Salud**, pues fueron

combatidos con motivo de su aplicación, mediante el oficio antes aludido.

- Respecto de los **artículos 83 a 96, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo**, causal de improcedencia prevista en el **artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo**; toda vez que tales preceptos fueron reclamados con motivo de su primer acto de aplicación, sin que de las constancias de autos, se desprenda que fueron aplicados.
- La publicación de los artículos 234, 235, último párrafo; 237, 245, fracción I, 247, último párrafo 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108 de la Ley de Amparo; en razón de que la publicación de la ley en mención, no fue controvertida por vicios propios.

Lo anterior es así, toda vez que tales determinaciones, sólo afectan a la parte quejosa, hoy recurrente y ésta no expresa agravio en su contra, motivo por el cual deben de declararse firmes.

Sirve de apoyo a la determinación aquí tomada, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 62/2006,



aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación², que es del tenor siguiente:

REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES.

Cuando la sentencia recurrida se apoya en dos o más consideraciones desvinculadas entre sí y cada una de ellas sustenta la declaratoria de inconstitucionalidad de distintos preceptos o actos, no deben estimarse inoperantes los agravios expresados por la parte recurrente que controvierten sólo una de esas consideraciones, pues al tratarse de razonamientos que revisten autonomía, el recurrente se encuentra en posibilidad legal de combatir únicamente la parte de la sentencia que estime contraria a sus intereses. En ese orden de ideas, cuando alguna consideración de la sentencia impugnada afecte a la recurrente y ésta no exprese agravio en su contra, tal consideración debe declararse firme.

SÉPTIMO. En primer término, se analizará el **recurso de revisión adhesiva**, debido a que en él, las autoridades responsables **Presidente de la República y Secretario de Salud**, invocan causales de improcedencia que son de estudio preferente a los agravios del recurso de revisión principal en el que se combate el fondo del asunto.

² *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la página 185, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, Novena Época*

Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogía, la tesis de jurisprudencia P./J. 69/97, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación³, que es del tenor siguiente:

REVISIÓN ADHESIVA. CUANDO EN SUS AGRAVIOS SE PLANTEA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, ÉSTOS DEBEN ANALIZARSE PREVIAMENTE A LOS EXPRESADOS EN LA REVISIÓN PRINCIPAL.

La regla general es que si los agravios de la revisión principal no prosperan, es innecesario el examen de los expresados en la revisión adhesiva, o bien que primero se estudien los agravios en la principal y luego, de haber prosperado aquéllos, los de la adhesiva, por tener ésta un carácter accesorio de aquélla. Sin embargo, si en la revisión adhesiva se alegan cuestiones relativas a la improcedencia del juicio de garantías, éstas deben analizarse previamente a la revisión principal, por ser dicho estudio una cuestión de orden público, en términos del último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Pues bien, en una parte previa al capítulo de agravios del recurso de **revisión adhesiva** (PRIMERO), el **Presidente de la República** y el **Secretario de Salud**, señalan que respecto del artículo 479, de la Ley General de Salud, se debe sobreseer al actualizarse la causal de

³Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la página 117, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época



improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 5º, fracción I y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo; toda vez que el quejoso reclama el artículo 479, con motivo de su aplicación en el oficio número [REDACTED] expedido por el **director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios**, pero que en realidad, no existe un acto concreto de aplicación, para lo cual resultaba indispensable que el quejoso acreditara que consume personalmente cannabis sativa, indica o marihuana, además de que en dicho oficio, no se aplicó el referido precepto.

Más adelante, indican que en relación con los artículos 234, 235, último párrafo; 237; 245, fracción I; 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, procede se dicte el sobreseimiento en el juicio, porque el quejoso carece de interés jurídico/legítimo, de modo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que en el oficio reclamado, sólo se citaron los referidos preceptos legales sin que ello constituya acto de aplicación alguno.

Son **infundadas** las causas de improcedencia invocadas, de conformidad con las consideraciones siguientes:

El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, señala:

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

(...)

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;

El precepto legal transcrito, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.

Sobre el particular, conviene señalar que para la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica,





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁴, que es del tenor siguiente:



INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para

⁴ Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 60, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época

comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una



situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.

En el caso particular, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 234, 235, último párrafo; 237; 245,

fracción I; 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el oficio número [REDACTED] expedido por el director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

El oficio referido, es del tenor siguiente:

OFICIO: [REDACTED] --- Ciudad de México, a 8 de julio de 2016 C. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] --- [REDACTED]
--- Con fundamento en los artículos 4º, párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción I, 14, 17, 26 y 39 fracciones XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículos 1º, 3º, fracciones I, XXII y XXVIII, 4, fracción III, 13, inciso a) fracción IX, X, 17 bis, fracción IV, 194 último párrafo, 194 bis, 197, 204, 212, 221, 222, 222 bis, 223, 368, 371, 376, 376 Bis fracción I, 378 y 393 de la Ley General de Salud; 1, 2, 3, 15, 15-A y 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2 inciso c) fracción X, 15, 36 y 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 1, 3 fracción I, inciso b, fracción VII y XIII, 4 fracción II, inciso c, 11 fracciones VI, XI y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y el Artículo Vigésimo Sexto del



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

16

Acuerdo por el que se delegan facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. — Hago referencia al desahogo de la prevención respecto a la solicitud de autorización sanitaria "para consumo personal con fines recreativos del "Cannabís Sativa", (sativa, indica americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tetrahydrocannabinol, los isómeros $\Delta 6A$ (10a), $\Delta 6a$ (7), $\Delta 7$, $\Delta 8$, $\Delta 9$, $\Delta 10$, $\Delta 9$ (11) y sus variantes estereoquímicas) (conjuntamente, "Marihuana"), consistentes en la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión, transporte de las mismas y la importación y adquisición de la semilla, para que el peticionario pueda consumir Marihuana regularmente y de forma personal y con fines meramente lúdicos o recreativos. Asimismo, solicito la autorización para ejercer los derechos correlativos al auto-consumo de Marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal Marihuana por el peticionario, excluyendo expresamente los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma" (sic) presentado en el Centro Integral de Servicios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios el día 9 de , marzo de 2016 al que le correspondió el número de entrada [REDACTED] — Lo anterior, derivado de la contestación al oficio número [REDACTED] de

fecha 12 de febrero de 2016, a través del cual esta autoridad sanitaria, con fundamento en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 368 de la Ley General de Salud, emitió la prevención a su solicitud, para que en un plazo máximo de 5 días hábiles acreditara la existencia de dicho interés jurídico, esto es, allegar los medios de convicción que le permitiera a esta autoridad sanitaria pronunciarse de manera fundada y motivada acerca de la misma, o en el caso contrario, es decir, en el supuesto de que no existiera dicho derecho subjetivo, así como una facultad expresa de esta autoridad, lo procedente era que acreditara el interés legítimo de su solicitud de autorización sanitaria "para consumo personal con fines recreativos del "Cannabis Sativa", (sativa, indica americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol, los isómeros $\Delta 6A$ (10a), $\Delta 6a$ (7), $\Delta 7$, $\Delta 8$, $\Delta 9$, $\Delta 10$, $\Delta 9$ (11) y sus variantes estereoquímicas) (conjuntamente, 'Marihuana'), consistentes en la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión, transporte de las mismas y la importación y adquisición de la semilla, para que el peticionario pueda consumir Marihuana regularmente y de forma personal y con fines meramente lúdicos o recreativos. Asimismo, solicito la autorización para ejercer los derechos correlativos al auto-consumo de Marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana por el peticionario,





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



excluyendo expresamente los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma" (sic), previniéndole a efecto de que invocara la existencia de una norma constitucional en la que se estableciera o tutelara algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, que dicho acto transgrediera ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva, así como que probara pertenecer a dicha colectividad. — En este sentido, mediante escrito de fecha 9 de marzo de 2016, se desahogó la prevención en los siguientes términos: 'En respuesta al Oficio aclaro y respondo los siguientes puntos: — Facultad Para Solicitar que acredite el Interés Jurídico o Legítimo — En función del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esa autoridad carece de facultad para solicitar que acredite mi "interés jurídico y legítimo" para una autorización sanitaria. Efectivamente, tal numeral dispone que "la Administración Pública Federal no puede exigir más formalidades que las expresamente previstas en la ley." Así la Ley General de Salud y normatividad secundaria en materia de estupefacientes y psicotrópicos no establece como formalidad que los promoventes deban acreditar el interés jurídico o legítimo para hacer una petición. Luego entonces, esa autoridad no puede exigido discrecionalmente.' — Facultad para solicitar información adicional — Con fundamento en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la COFEPRIS carece de facultad para solicitar información adicional una vez transcurrida la tercera parte del término que tiene para dar respuesta a un trámite. La tercera parte

del término que tenía esa autoridad para dar respuesta feneció en la primera quincena de diciembre de dos mil quince. El Oficio se formuló más de dos meses después de haber fenecida la facultad de esa autoridad para requerir información adicional. Así las cosas, esa autoridad no se encuentra legitimada para solicitarme información alguna sobre la autorización solicitada. — *Interés jurídico para solicitar un registro sanitario* — Ahora bien, a efecto de coadyuvar a esa autoridad en su función administrativa, y sin que ello implique la renuncia a mis derechos reconocidos en la Constitución, aclaro que el interés jurídico que me asiste para solicitar una autorización sanitaria, o bien cualquier otra cosa, se desprende del artículo 8º del texto constitucional. Al tenor del derecho de petición puedo solicitar cualquier cosa a cualquier funcionario o empleado público, siempre que lo haga por escrito, de manera pacífica y respetuosa. — Como ciudadano Mexicano, en mayoría de edad y pleno ejercicio de mis derechos constitucionales, soy titular del derecho de petición reconocido en el artículo 8º del texto constitucional, que me asiste para pedir una autorización unitaria para el consumo personal de Marihuana y el ejercicio de los derechos correlativos a tal consumo. (Sic) — Paga un mejor proveer en la atención a la presente, se procede a contestar punto por punto el desahogo de la prevención multicitada por esta autoridad para que el solicitante acreditara el interés jurídico que le asiste o en su defecto el interés legítimo. — *Facultad Para Solicitar que acredite el Interés Jurídico o Legítimo* — En función del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esa autoridad carece



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

de facultad para solicitar que acredite mi "interés jurídico y legítimo" para una autorización sanitaria. Efectivamente, tal numeral dispone que "la Administración Pública Federal no puede exigir más formalidades que las expresamente previstas en la ley." Así la Ley General de Salud y normatividad secundaria en materia de estupefacientes y psicotrópicos no establece como formalidad que los promovente deban acreditar el interés jurídico o legítimo para hacer una petición. Luego entonces, esa autoridad no puede exigirlo discrecionalmente." — Es importante mencionar que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece tal y como lo menciona un principio de legalidad, mediante el cual la Administración Pública Federal no podrá exigir más formalidades que las expresamente previstas en la ley, bajo este contexto, la Ley que por un criterio de especialidad contempla los casos y requisitos así como las modalidades en las que se podrá emitir una autorización sanitaria es la Ley General de Salud, en este sentido la Ley Federal de Procedimiento Administrativo hace una remisión directa a esta normativa en salud para que las actividades relacionadas con la salud humana sean susceptibles de realizarse a través de un acto administrativo denominado autorización sanitaria, siempre y cuando dicho actuar se contemple en la Ley General de Salud. — Es importante considerar que, el acreditar un interés jurídico o legítimo para poder proveer una resolución por parte de la autoridad no es una formalidad, es un requisito de fondo referente a la existencia de un derecho subjetivo previsto por el conjunto normativo que el particular pueda ejercer o reclamar de la autoridad

del Estado. — Por lo anterior, esta autoridad se encuentra plenamente facultada para requerir el que se acredite un interés jurídico o legítimo que le asista al particular para reclamar de la misma el otorgamiento de una autorización ya que, dicho interés no constituye una formalidad sino un requisito de fondo sin el cual, no existe la posibilidad de emitir la propia autorización solicitada. — Ahora bien, en el segundo párrafo del artículo 368 de la Ley General de Salud, se establece que dichas autorizaciones sanitarias tendrán el carácter de licencias, permisos, registros o tarjetas de control sanitario, y a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en su diverso 368, se desglosan en diversos artículos de dicha disposición, los requisitos y formalidades que se deben cumplir para el otorgamiento de la autorización de que se trate. — Esto es, requieren de autorización de una **licencia sanitaria** los establecimientos para el proceso de los medicamentos que contengan estupefacientes y psicotrópicos, vacunas, toxoides, sueros y antitoxinas de origen animal, y hemoderivados; para la elaboración, fabricación o preparación de medicamentos, plaguicidas, nutrientes vegetales o sustancias tóxicas o peligrosas. — En el caso del otorgamiento de un **registro sanitario**, éste se da para medicamentos alopáticos, homeopáticos, herbolarios, biotecnológicos innovadores, biocomparables, de referencia, vitamínicos, genéricos, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

curación y productos higiénicos, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas. — Por lo que refiere a la emisión de un **permiso sanitario** para la prescripción de estupefacientes en recetas especiales y los libros de control de estupefacientes o sustancias psicotrópicas; la importación y exportación de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y productos o preparados que las contengan. — Y para **tarjetas de control sanitario** se expiden para las personas que realicen actividades mediante las cuales se pueda propagar alguna enfermedad transmisible, en los casos y bajo las condiciones que establezcan las disposiciones aplicables; el personal que preste sus servicios en cualquier establecimiento para la atención médica, cuyas actividades pudieran propagar alguna de las enfermedades transmisibles. — Por lo que, del desahogo a la prevención formulada en lo que refiere a la existencia de un interés jurídico, entendiendo éste como la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento legal objetivo, el cual faculta al titular para exigir una conducta de la autoridad mediante una norma, así como del análisis de todo el cuerpo normativo en materia de salud, no se desprende que se acredite el mismo, toda vez que ni siquiera se está ante la existencia de una autorización de la modalidad requerida, y por ende de un derecho subjetivo para la emisión de la misma, ya que en ninguna parte se establece una autorización sanitaria para "consumo personal con fines recreativos del "Cannabis Sativa", (sativa, indica americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como del

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FEDERACIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol, los isómeros $\Delta 6A$ (10a), $\Delta 6a$ (7), $\Delta 7$, $\Delta 8$, $\Delta 9$, $\Delta 10$, $\Delta 9$ (11) y sus variantes estereoquímicas) (conjuntamente, 'Marihuana'), consistentes en la siembra, cultivo, cosecha preparación, posesión, transporte de las mismas y la importación y adquisición de la semilla, para que el peticionario pueda consumir Marihuana regularmente y de forma personal y con fines meramente lúdicos o recreativos. Asimismo, solicito la autorización para ejercer los derechos correlativos al auto-consumo de Marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana por el peticionario, excluyendo expresamente los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma" (sic), consecuentemente esta autoridad no tiene facultades para pronunciarse sobre actividades no previstas en la Ley General de Salud y cuyos casos, modalidades y requisitos no estén definidos en la Ley de la materia. — Ahora bien, el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dispone que cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la



dependencia u organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite. -

-- En este sentido, las facultades de esta autoridad se encuentran apegadas a derecho, puesto que al no cumplirse con los requisitos aplicables para la emisión de una autorización "para consumo personal con fines recreativos del "Cannabis Sativa", (sativa, indica americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tetrahydrocannabinol, los isómeros $\Delta 6A$ (10a), $\Delta 6a$ (7), $\Delta 7$, $\Delta 8$, $\Delta 9$, $\Delta 10$, $\Delta 9$ (11) y sus variantes estereoquímicas) (conjuntamente, "Marihuana"), consistentes en la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión, transporte de las mismas y la importación y adquisición de la semilla, para que el peticionario pueda consumir Marihuana Regularmente y de forma personal y con fines meramente lúdicos o recreativos. Asimismo, solicito la autorización para ejercer los derechos correlativos al auto-consumo de Marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo; uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana por el peticionario, excluyendo expresamente los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma"(sic), derivado del hecho que ni siquiera existe el caso, ni la modalidad y mucho menos los requisitos, ésta autoridad en un principio de

legalidad al que están constreñidas todas las autoridades solicitó mayores elementos para poder dar contestación a su formulación, esto, en el supuesto de que aún y cuando no existiera una disposición normativa, pudiera existir un derecho subjetivo que le asistiera al particular y exigiera un actuar de esta autoridad sanitaria como un deber correlativo o en su defecto un interés difuso. — Es por ello que esta autoridad, en el marco de legalidad tiene las suficientes atribuciones para solicitar la información necesaria para la emisión de una autorización sanitaria, puesto que en la Ley General de Salud así como en el Reglamento de Insumos para la Salud y el "Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria" y sus ulteriores modificaciones, se establecen los requisitos que deben cumplirse para la emisión de las mismas, requisitos que pueden ser tanto técnicos como legales y entre los cuales no hay disposición expresa para la autorización que se está peticionando. — Por tanto, **resulta improcedente la solicitud "para consumo personal con fines recreativos del "Cannabis Sativa", (sativa, indica americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tetrahydrocannabinol, los isómeros $\Delta 6A$ (10a), $\Delta 6a$ (7), $\Delta 7$, $\Delta 8$, $\Delta 9$, $\Delta 10$, $\Delta 9$ (11) y sus variantes estereoquímicas) (conjuntamente, 'Marihuana'), consistentes en la siembra, cultivo, cosecha, preparación,**



posesión, transporte de las mismas y la importación y adquisición de la semilla, para que el peticionario pueda consumir Marihuana regularmente y de forma personal y con fines meramente lúdicos o recreativos. Asimismo, solicito la autorización para ejercer los derechos correlativos al auto-consumo de Marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte de importación y adquisición de semillas en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana por el peticionario, excluyendo expresamente los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma"(sic), toda vez que cumple con el contenido del artículo 368 de la Ley General de Salud, el cual señala que las autorizaciones sanitarias se emitirán en los casos y con los requisitos y modalidades que determine esta Ley y demás disposiciones generales aplicables. --- Facultad para solicitar información adicional --- Con fundamento en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la COFEPRIS carece de facultad para solicitar información adicional una vez transcurrida la tercera parte del término que tiene para dar respuesta a un trámite. La tercera parte del término que tenía esa autoridad para dar respuesta feneció en la primera quincena de diciembre de dos mil quince. El Oficio se formuló más de dos meses después de haber fenecido la facultad de esa autoridad para requerir información adicional. Así las cosas, esa autoridad no se

encuentra legitimada para solicitarme información alguna sobre la autorización solicitada. — A lo anterior ante la inexistencia de una autorización de la modalidad requerida, como anteriormente ya se expuso y ante la falta de una reglamentación y un procedimiento que contemple plazos y requisitos que atienda éste tipo solicitud, ésta autoridad sanitaria en ningún momento ha incurrido en actuaciones fuera de término, como lo es prevención de fecha 12 de febrero de 2016. — Ahora bien cabe señalar que dicha prevención fue en afán de que se acreditara un interés jurídico o legítimo derivado de que no se acreditó el mismo para realizar su solicitud en los términos pretendidos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 368 de la Ley General de Salud que define a la autorización sanitaria. — Aunado a que no se desprendió que en alguna de las disposiciones generales aplicables de la normatividad antes citada, se previera una solicitud como la presentada; por lo que fue en tesitura que se consideró necesario prevenir en los términos apuntados a fin de no dejar en estado de indefensión al peticionario en el ejercicio de su derecho de petición y por otra parte, contar con los elementos necesarios para dar una respuesta puntual y oportuna sobre la procedencia o improcedencia de su solicitud. — **Interés jurídico para solicitar un registro sanitario** — Ahora bien, a efecto de coadyuvar a esa autoridad en su función administrativa, y sin que ello implique la renuncia a mis derechos reconocidos en la Constitución, aclaro que el interés jurídico que me asiste para solicitar una autorización sanitaria, o bien cualquier otra cosa, se desprende del artículo





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

X



8º del texto constitucional. Al tenor del derecho de petición puedo solicitar cualquier cosa a cualquier funcionario o empleado público, siempre que lo haga por escrito, de manera pacífica y respetuosa. — Como ciudadano Mexicano, en mayoría de edad y pleno ejercicio de mis derechos constitucionales, soy titular del derecho de petición reconocido en el artículo 8º del texto constitucional, que me asiste para pedir una autorización sanitaria para el consumo personal de Marihuana y el ejercicio de los derechos correlativos a tal consumo. — Adicionalmente, cabe señalar que no se configura la hipótesis de un derecho subjetivo que obligue a esta autoridad a emitir una autorización de dichas características, pues es un principio general de derecho que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, y ya que la Ley General de Salud no contempla una autorización con las particularidades que refiere, lo conducente era que probara ser titular de un derecho subjetivo que, por un acto de autoridad, se veía afectado de manera personal y directa, lo cual no aconteció. — Al respecto, el suscrito reconoce que si bien es cierto que a su solicitud le asiste el derecho humano de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga el derecho a cualquier persona nacional o extranjera para formular una petición sobre cualquier materia y en cualquier sentido, dirigida a cualquier autoridad de nuestro país, en tanto la petición cumpla con las formalidades que el mismo precepto constitucional menciona, es decir, que se presente por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Para mayor precisión se transcribe el precepto referido: —

'Artículo 8º.' (se transcribe) — Más cierto es que esta porción normativa no obliga a la autoridad requerida a responder en un determinado sentido la solicitud que se le haya formulado, sino únicamente le obliga a que se acuerde y dé el trámite correspondiente en un breve término, con la libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso. — Lo anterior debe entenderse en el sentido de que, siendo que la petición se haya formulado con las características señaladas por el precepto citado, la obligación de la autoridad será la de otorgar una respuesta relacionada con lo pedido, en la forma que corresponda de acuerdo a los preceptos normativos que rigen la materia, y no así en el sentido de que es obligación de la autoridad el conceder precisamente lo peticionado por el particular, ya que existen procedimientos y trámites que deben seguir determinado cauce de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, por tanto, si bien es cierto que su derecho para formular una petición, cualquier que ésta fuere, se encuentra garantizado por el artículo 8º Constitucional, ello no significa que la autoridad deba reconocerle el interés jurídico que pretende para otorgarle una autorización cuyas características no corresponden con ningún presupuesto jurídico existente. — En apoyo a lo expuesto, el suscrito cita la Jurisprudencia número XXI.1º.PA J/27, visible en la página 2167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, marzo de 2011, misma que se transcribe en seguida: — Época: Novena Época — Registro: 162603 — Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito — Tipo de Tesis: Jurisprudencia — Fuente:



Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta —
- Tomo XXXIII, Marzo de 2011 — Materia(s):
Constitucional — Tesis: XXI. 1º.P.A. J/27 —
Página: 2167 — **'DERECHO DE PETICIÓN. SUS
ELEMENTOS.'** (se transcribe) — De igual manera,
el siguiente criterio de interpretación sustenta lo
explicado, y se transcribe para mayor precisión: ---
'Época: Novena Época — Registro: 171484 —
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito —
Tipo de Tesis: Aislada — Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta — Tomo
XXVI, Septiembre de 2007 — Materia (s):
Administrativa — Tesis: XV.3o.38 A — Página:
2519 — **'DERECHO DE PETICIÓN. LA
AUTORIDAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A DAR
RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE
TÉRMINO AL GOBERNADO, PERO NO A
RESOLVER EN DETERMINADO SENTIDO.'** (se
transcribe) --- Aunado a lo anterior, de las
manifestaciones vertidas en el desahogo tampoco
se desprende que se hayan aportado los
elementos necesarios para acreditar el interés
legítimo, como lo era la existencia de una norma
constitucional en la que se estableciera o tutelaré
algún interés difuso en beneficio de una
colectividad determinada, o que dicho acto
transgrediera ese interés difuso, ya sea de manera
individual o colectiva, ni que se probara pertenecer
a dicha colectividad. — En el particular, y
retomando lo ya planteado con anterioridad, es
preciso hacer notar al solicitante que, el interés
jurídico o legítimo que le fue requerido
acreditar, precisamente no aparece como parte
de los requisitos a que se refiere el artículo 15
de la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo, ya que no es un requisito de formalidad sino un requisito de fondo que entraña la existencia de un derecho sustantivo otorgado por el conjunto normativo que él particular pueda ejercer o reclamar de la autoridad del Estado. — Por lo anteriormente expuesto y fundado, su trámite de autorización "para consumo personal con fines recreativos del Cannabis Sativa", (sativa, indica americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol, los isómeros Δ^6A (10a), Δ^6a (7), Δ^7 , Δ^8 , Δ^9 , Δ^{10} , Δ^9 (11) y sus variantes estereoquímicas) (conjuntamente, 'Marihuana'), consistentes en la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión, transporte de las mismas y la importación y adquisición de la semilla, para que el petitionerio pueda consumir Marihuana regularmente y de forma personal y con fines meramente lúdicos o recreativos. Asimismo, solicito la autorización para ejercer los derechos correlativos al auto-consumo de Marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana por el petitionerio, excluyendo expresamente los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma"(sic) **se desecha** por no haber desahogado de manera satisfactoria el requerimiento de mérito. — SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. — DIRECTOR EJECUTIVO DE REGULACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS Y



SUSTANCIAS QUÍMICAS. — (rúbrica) —
RUMALDO ERNESTO NAVA SÁNCHEZ."

Como es de observarse, el **artículo 479, de la Ley General de Salud**, no fue citado en el oficio recién transcrito.

No obstante lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito, estima que sí existió aplicación del precepto legal referido.

Ello es así, porque, efectivamente, en la demanda de amparo, se expuso entre otras cuestiones de fondo, que los **artículos 234, 235, último párrafo; 237, 245, fracción I; 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud**, establecen la prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos del estupefaciente cannabis y el psicotrópico THC; que ello, resulta violatorio de diversos derechos humanos; y por ende, era indebido que se le hubiese prevenido para que acredite su interés legítimo cuando precisamente se reclama la omisión de establecer la posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo, así como que se hubiese determinado que no existe precepto alguno que establezca la posibilidad de obtener la autorización pretendida.

Por lo que si en el oficio reclamado se determina que efectivamente no existe derecho alguno para obtener la autorización pretendida y se le previene para que acredite su interés legítimo, **es evidente que éste constituye el acto de aplicación de las normas impugnadas.**

Tal y como ya precisó el juez de Distrito en la sentencia recurrida, que aun y cuando el quejoso no señaló los **artículos 234, 368 y 479 de la Ley General de Salud**, como actos reclamados en el capítulo respectivo a la demanda de amparo, lo cierto era que del escrito inicial de demanda, se advertían argumentos tendientes a combatir tales preceptos.

Por lo tanto, el oficio número [REDACTED] expedido por el **director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios**, constituye el acto de aplicación de las normas impugnadas, incluido el **artículo 479, de la Ley General de Salud.**

De ahí que en el caso concreto, no se actualizan las **causas de improcedencia invocadas.**



PODER EJECUTIVO FEDERAL



Por otra parte, el **Presidente de la República** y el **Secretario de Salud**, señalan que en relación con los artículos 234, 235, último párrafo; 237, 245, fracción I; 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, es improcedente conceder el amparo solicitado, porque implicaría múltiples violaciones a los derechos de la sociedad, así como a diversos ordenamientos legales, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 77, ambos de la Ley de Amparo, de modo que la concesión del amparo sería nugatoria para el quejoso ante la inexistencia de una plataforma política integral para autorizar el uso de marihuana con fines lúdicos.

Es **infundada** la causa de improcedencia invocada, de conformidad con las consideraciones siguientes:

El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone:

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

(...)

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.

Por su parte, el artículo 77, de la Ley de Amparo, establece:

Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y

II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho.

En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales.

En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia.

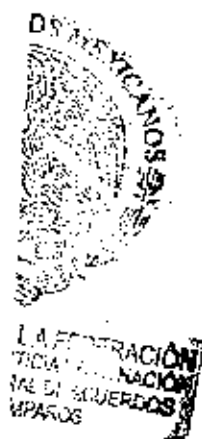




PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley.

De la interpretación armónica y relacionada de los preceptos legales transcritos, el último a contrario sensu, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no puedan concretarse los efectos del amparo.



Ahora bien, como ya quedó relatado con anterioridad, el quejoso reclamó la inconstitucionalidad de los 234, 235, último párrafo; 237, 245, fracción I; 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el oficio número [REDACTED], expedido por el **director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios**, al estimar que tales preceptos legales, establecen la prohibición para que la Secretaría de Salud, emita autorizaciones para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos del estupefaciente cannabis y el psicotrópico THC; que ello, resulta violatorio de diversos derechos humanos; y por ende, era indebido que se le hubiese prevenido para que acredite su interés legítimo, cuando precisamente se reclama la

omisión de establecer la posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo, así como que se hubiese determinado que no existe precepto alguno que establezca la posibilidad de obtener la autorización pretendida.

Bajo ese orden de ideas, los efectos de una eventual concesión del amparo, consistirían en vincular a la autoridad responsable, para que **deje insubsistente el oficio referido** y otorgue exclusivamente al quejoso, la autorización pretendida, en términos del artículo 77, de la Ley de Amparo.

Tan es así que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concedió el amparo en un asunto similar, al resolver el cuatro de noviembre de dos mil quince, el amparo en revisión [REDACTED], en el que se sostuvo lo siguiente:

En consecuencia, este Alto Tribunal procede a revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo para el efecto de que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, autoridad señalada como responsable en el juicio de amparo, otorgue a los quejosos la autorización a que hacen referencia los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud, respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia



anteriormente, en el entendido de que dicha autoridad no podrá utilizar las porciones normativas cuya inconstitucionalidad ha sido declarada en los términos antes expuestos como base para dictar la resolución respectiva.

Por lo tanto, no es verdad que una eventual concesión del amparo, implicaría múltiples violaciones a los derechos de la sociedad, así como a diversos ordenamientos legales, ni que la concesión del amparo sería nugatoria para el quejoso ante la inexistencia de una plataforma política integral para autorizar el uso de marihuana con fines lúdicos.

En ese orden de ideas, resultan infundadas las causas de improcedencia invocadas por el **Presidente de la República** y el **Secretario de Salud**, en el recurso de revisión adhesiva.

No habiendo otro motivo de improcedencia o sobreseimiento hecho valer por las partes en el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el **Presidente de la República** y el **Secretario de Salud**, sin que este Tribunal Colegiado de Circuito, advierta, de oficio, que opere algún motivo que torne improcedente la acción constitucional, lo procedente es analizar los agravios esgrimidos por la parte quejosa, en el recurso de revisión principal y, en su caso, los agravios del recurso de revisión adhesiva.

OCTAVO. Sin embargo, este Tribunal Colegiado de Circuito, estima que no es procedente analizar los agravios del recurso de revisión principal esgrimidos por la parte quejosa, ni los agravios del recurso de revisión adhesiva interpuesto por el Presidente de la República y el Secretario de Salud, por las razones que a continuación se exponen:

En principio, es necesario precisar que en los **considerandos séptimo** del fallo recurrido, el juez de Distrito, analizó y declaró **infundados** los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, negando el amparo y la protección de la Justicia Federal, respecto de los **artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I; 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud.**



Inconforme con la decisión anterior, en los agravios del **recurso de revisión principal**, el quejoso plantea que en la sentencia recurrida, no se realizó un análisis correcto de la normas reclamadas e insiste en que los **artículos 234, 235, último párrafo; 237, 245, fracción I; 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, son inconstitucionales.**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

269

Mientras que en los **agravios del recurso de revisión adhesiva**, interpuesto por el **Presidente de la República y el Secretario de Salud**, se defiende la constitucionalidad de los preceptos legales supramencionados.

De lo anterior, deriva que en el **recurso de revisión principal y adhesivo**, subsiste el problema de constitucionalidad respecto de los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud.

Sin embargo, este Tribunal Colegiado de Circuito, carece de competencia legal para resolver el problema de constitucionalidad que subsiste en el recurso de revisión principal y en el recurso de revisión adhesiva, esto es, los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I; 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud.

Lo anterior es así, porque de conformidad con los artículos 88, de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tal aspecto es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



ASOCIACIÓN
DE MAGISTRADOS
DE LA FEDERACIÓN

Si bien conforme a la esfera de competencia que establece el punto Cuarto, fracción I, incisos **A), B), C) y D)** del Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno del mes y año citados, se delegaron facultades a estos últimos para que conocieran asuntos de constitucionalidad de leyes, resulta que este tribunal se encuentra impedido para resolver el problema de fondo que subsiste en cuanto a la constitucionalidad de las disposiciones reclamadas, porque el tema del asunto no se encuentra comprendido en las hipótesis que dicho acuerdo prevé, según se expone a continuación:

- No existe jurisprudencia, incluso pendiente de publicación, del Pleno o de las Salas, respecto de los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud.
- Sobre el tema controvertido, no existen tres precedentes del pleno o de las salas, indistintamente, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, aun cuando no hubieran



alcanzado la votación idónea para ser jurisprudencia.

Por las razones expuestas y con fundamento en el punto Noveno, del Acuerdo General 5/2013, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo cuaderno de antecedentes, **procede remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales procedentes.**

Finalmente, en términos del punto Noveno, fracción II, del Acuerdo General 5/2013, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cabe mencionar que aun cuando corresponde al tribunal colegiado el estudio de las causas de improcedencia invocadas por las partes en el juicio de amparo, dicho aspecto fue colmado en el **considerando sexto** de la sentencia recurrida, mientras que en el considerando anterior de esta resolución, se analizaron las causas de improcedencia invocadas en el recurso de revisión adhesiva.

Se afirma que el juez de Distrito, se ocupó de analizar las causas de improcedencia invocadas por las partes en el juicio de amparo, conforme a lo siguiente:

Autoridades Responsables	Causas de improcedencia
--------------------------	-------------------------

Cámara de Senadores (fojas 168 a 169)	No propuso causas de improcedencia
Cámara de Diputados (fojas 171 a 151 del juicio de amparo)	No propuso causas de improcedencia
Comisionado Federal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas (fojas 204 vuelta a 224 vuelta del juicio de amparo)	<p>1) La prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia de los actos reclamados.</p> <p>2) La prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque no se afectan los intereses jurídicos del quejoso.</p> <p>3) La prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque el quejoso debió agotar los recursos ordinarios.</p> <p>4) La prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 73 y 77 de la Ley de Amparo, por no poderse concretizar los efectos del juicio de amparo.</p>
Secretario de Salud (fojas 279 a 280 del juicio de amparo)	1) La prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia de los actos reclamados.
Presidente de la República (fojas 374 a 400)	<p>1) La prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia de los actos reclamados.</p> <p>2) La prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción VIII, ambos</p>



30
20

	<p>de la Ley de Amparo, porque no se formularon conceptos de violación contra la promulgación de la ley reclamada.</p> <p>3) La prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 73 y 77, ambos de la Ley de Amparo, porque de concederse el amparo solicitado, se vulneraría el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo.</p> <p>4) La prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción I y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; pues no existe acto de aplicación de artículo 479, de la ley General de Salud.</p> <p>5) La prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 73 de la Ley de Amparo, pues la concesión del amparo, sería nugatoria para el quejoso, ante la inexistencia de una plataforma política para autorizar el uso de la marihuana.</p>
--	---

Al respecto, en el **considerando tercero**, el juez de Distrito, sobreseyó en el juicio de amparo, con fundamento en el **artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo**, por inexistencia de los actos reclamados al:

- **Secretario de Salud**, consistentes en las ordenes verbales o escritas al comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso;

- **Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos sanitarios**, consistentes en la ejecución de las ordenes verbales o escritas giradas al Secretario de Salud, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso, ni las ordenes verbales o escritas al director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, con el mismo propósito;

- **Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, psicotrópicos y sustancias Químicas**, consistente en la ejecución de las órdenes verbales o escritas giradas al director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

31
308

Asimismo, en el **considerando quinto**, estimó **fundadas** las causales de improcedencia, respecto de los siguientes actos:

- Oficio [REDACTED] de doce de febrero de dos mil dieciséis, al estimarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el **artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo**, en virtud de que dicho oficio es materia del diverso juicio de amparo [REDACTED] del índice del **Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México**, el cual a su vez fue recurrido en el **Amparo en Revisión** [REDACTED] (del índice de este Tribunal, en el cual en sesión de **dos de febrero de dos mil diecisiete**, se declara legalmente incompetente para conocer del problema de constitucionalidad y se ordenó remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación);
- Sobreseimiento que se hizo extensivo a los **artículos 234, 235, 237 y 368, de la Ley General de Salud**, pues fueron combatidos con motivo de su aplicación, mediante el oficio antes aludido.
- Respecto de los **artículos 83 a 96, de la Ley Federal de Procedimiento**

Administrativo, causal de improcedencia prevista en el **artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo**; toda vez que tales preceptos fueron reclamados con motivo de su primer acto de aplicación, sin que se desprenda que fueron aplicados.

- La publicación de los artículos 234, 235, último párrafo; 237, 245, fracción I, 247, último párrafo 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108 de la Ley de Amparo; en razón de que la publicación de la ley en mención, no fue controvertida por vicios propios.



Mientras que en el **considerando sexto** de la sentencia recurrida, el juez de Distrito, desestimó las causas de improcedencia referidas en el cuatro que precede, de la siguiente forma:

SEXTO. *...Por otra parte, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, al rendir su informe justificado, sostuvo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que a su consideración, el quejoso no acreditó fehacientemente que cuenta con el derecho a que se le otorgue la autorización para el consumo individual de cannabis, de forma personal y con fines lúdicos o recreativos; aunado a que no existe porción normativa que obligue a las autoridades sanitarias a la emisión de un acto de esa índole.*

Al respecto, cabe precisar que el análisis de dicha causa de improcedencia está estrechamente



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

318
34

relacionado con el fondo del asunto, pues el derecho a la autorización que refiere el quejoso requiere analizar la constitucionalidad de las disposiciones legales reclamadas, en relación con los conceptos de violación que hace valer en su demanda de amparo, ya que lo que reclama precisamente es el reconocimiento de esa prerrogativa, motivo por el cual combate lo dispuesto en los artículos 234, 235, último párrafo; 237; 245, fracción I; 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud.

En este sentido, el análisis de si el quejoso cuenta o no con interés jurídico o legítimo, necesariamente conduce a analizar el contenido de las disposiciones legales reclamadas, en relación con los derechos humanos cuya violación reclama, por lo que se **desestima** dicha causal de improcedencia.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 135/2001, de rubro: **"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE."**⁵

Por otra parte, dicha autoridad sostiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que a su consideración el quejoso debió agotar los medios ordinarios de defensa a su alcance, antes de acudir al juicio de amparo.

Para justificar lo anterior, es necesario tener presente que el precepto citado establece lo siguiente:

ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:
(...)

XX. Contra actos de autoridades distintos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.

⁵ [J], 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XV, Enero de 2002; Pág. 5. P./J. 135/2001.



No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.

Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;

De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos en contra de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados.

Ese principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y a la necesidad de evitar el abuso de dicha acción, de modo tal que el control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo deberá realizarse cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija.

En tal sentido, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes:

a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;

b) Que dicho acto deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado.

c) Que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado sin que se exijan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo.

d) Que el acto reclamado goce de fundamentación.

Asimismo, el principio de definitividad que prevé el citado precepto admite excepciones, algunas previstas legalmente y otras derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales. Al respecto, resulta conveniente remitir a la tesis 2a. LVI/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Julio de 2000, página ciento cincuenta y seis, de rubro y texto siguientes: **DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.** (se transcribe)



De conformidad con lo anterior, se estima que en el caso se actualiza una excepción al principio de definitividad, pues el quejoso reclama los artículos 234, 235, último párrafo; 237, 245, fracción I; 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, con motivo de su aplicación en el oficio [REDACTED] de ocho de julio de dos mil dieciséis, por lo que no estaba obligado a agotar los medios ordinarios de defensa a su alcance.

Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que en el diverso juicio de amparo [REDACTED] del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, se hayan combatido los mismos preceptos con motivo de su aplicación en el diverso oficio [REDACTED] de doce de febrero de dos mil dieciséis, pues a través de dicho acto, se previno al quejoso para que acreditara su interés jurídico, razón por la cual, no se trató del primer acto de aplicación, al tratarse de una prevención que no le depara perjuicio alguno al no afectarle en su esfera jurídica de manera actual y real.

Por otra parte, la citada autoridad y el Presidente de la República señalan que se actualiza la causa de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en los artículos 107, fracción II, de la Constitución General, en relación con el artículo 73 y 77 de la ley de la materia, pues el quejoso pretende que se le otorgue la protección constitucional para el efecto que en la Ley General de Salud sea permisible otorgar autorizaciones para el consumo lúdico y personal de marihuana, siendo que el juicio de amparo se rige por el principio de relatividad de las sentencias, bajo el cual las resoluciones que se dicten siempre serán tales que se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse el asunto, sin que pueda realizarse una declaratoria general respecto de la ley o acto que lo motive.

Los preceptos señalados establecen lo siguiente:

ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:
(...)

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.

ARTÍCULO 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de los personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado,

limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.(...)

ARTÍCULO 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y

II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho.

En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a procesa en delitos que la ley no considere como groves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales.

En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia.

En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada a cause estado por ministerio de ley.

ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

(...)

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.(...)

Del precepto legal transcrito en primer término se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo; del 73 de la Ley de Amparo y 107, fracción II, de la Constitución General, se desprende que las sentencias de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos (principio de relatividad); y, el 77 de la normatividad de la



materia, establece la finalidad de una sentencia protectora, así como los efectos que tendrá la concesión del amparo cuando el acto reclamado sea de carácter positivo o negativo.

Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando se controvierten actos de carácter positivo, el efecto de la concesión de amparo será el de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de que se efectuare la violación cometida, esto es, se dejará insubsistente el acto reclamado; mientras que de conformidad con la fracción II de dicho precepto, tratándose de actos de carácter negativo o que impliquen una omisión, el efecto de la concesión de amparo será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

En relación con el principio de relatividad de las sentencias de amparo, también conocido como "Fórmula Otero", éste se traduce en el hecho que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo deben ocuparse de los quejosos que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, sobre el caso especial sobre el que versa la demanda.

Tal principio constriñe a que, el efecto de la sentencia que conceda la protección de la justicia federal solicitada por el quejoso, de manera alguna puede ampliarse a quien no haya sido expresamente amparado ni puede beneficiarse con la apreciación que acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado haya expresado el juzgador en la mencionada sentencia, es decir, que quien no haya acudido al juicio de amparo ni, por lo mismo, haya sido amparado contra determinada ley o acto, está obligado a acatarlos no obstante que dicha ley o actos hayan sido estimados contrarios a la Constitución Federal en un juicio en el que aquél no fue parte quejosa.

La regla en cuestión, derivada de tal principio rector del juicio de amparo, señala que la sentencia que se dicte será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que versa la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

En el caso, el promovente reclama diversas normas generales con motivo de su aplicación a través del oficio [REDACTED] de ocho de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó una solicitud de autorización sanitaria, por lo que

los efectos de una eventual concesión de amparo consistirían, en todo caso, en inaplicar al quejoso los artículos que reclama, a efecto de que se le pueda otorgar la autorización que solicita, sin que lo anterior implique obligar a las autoridades legislativas a crear o modificar nuevas disposiciones normativas, motivo por el cual, resulta **infundada** tal causa de improcedencia.

Por otra parte, el Presidente de la República también aduce que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracciones VI y VIII, interpretados en sentido contrario, ya que a su consideración el quejoso omitió formular conceptos de violación en contra de la **promulgación** de las disposiciones generales reclamadas. Tales preceptos establecen lo siguiente:

ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:

(...)

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.

ARTÍCULO 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:

(...)

III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrenda del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (...).

En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en los casos en los que se promueva juicio de amparo contra normas generales, como es el caso, es obligación del quejoso señalar como autoridad responsables a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación, por lo cual, aun cuando no se planteen argumentos en contra de este acto en específico, ello no tiene como consecuencia el sobreseimiento del juicio de amparo, ya que el acto reclamado lo constituyen propiamente las normas generales que se combaten, y su contenido, el cual adquiere vida jurídica a través de los distintos actos del proceso legislativo que le anteceden, tal como la discusión,



la aprobación, la expedición y, desde luego, la promulgación del ordenamiento reclamado.

En este sentido, el hecho de que el quejoso no formule conceptos de violación en contra de la promulgación de las disposiciones reclamadas, por los vicios propios que pueda contener, no hace improcedente el juicio de amparo, con tal de que se formulen, como en el caso, argumentos dirigidos a controvertir las normas generales que se combaten. Por tanto, resulta infundada la causa de improcedencia propuesta.

Por otra parte, la autoridad responsable mencionada señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77 de la Ley de Amparo, así como con los artículos 1, 4, 15, 76, fracción I, 89, fracción X y 133 de la Constitución General, toda vez que la concesión del amparo sería nugatoria ante la inexistencia de una plataforma política integral para autorizar el uso de marihuana con fines lúdicos, por lo que la protección constitucional implicaría el incumplimiento de diversas normas legales, constitucionales y de compromisos internacionales del Estado.

Al respecto, debe precisarse que la determinación de los alcances que tiene el acto reclamado está relacionado con el estudio de fondo, pues ello conduce a analizar el contenido de las disposiciones legales reclamadas, en relación con los derechos humanos cuya violación reclama, por lo que se **desestima** dicha causal de improcedencia.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 135/2001, de rubro: **IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.**⁶

En el mismo orden de ideas, las autoridades responsables manifiestan que en relación con los artículos 234, 235, último párrafo; 237; 245, fracción I; 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que del oficio reclamado no se advierte que tales preceptos hayan sido aplicados; sin embargo, el quejoso formula sus conceptos de violación partiendo del hecho que el desechamiento de la solicitud de

⁶[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XV, Enero de 2002; Pág. 5. P./J. 135/2001.

*autorización sanitaria a través del oficio reclamado implica una aplicación implícita de los preceptos reclamados, por lo que una determinación en el sentido que tales normas no fueron aplicadas implicaría abordar cuestiones que involucran el fondo del asunto y, en tal sentido, es **infundada** dicha causa de improcedencia.*

Como es de observarse, el juez de Distrito, analizó y desestimó todas y cada una de las causas de improcedencia que invocaron las autoridades responsables anteriormente mencionadas, al tenor de las consideraciones transcritas, **sin que las mismas hayan sido impugnadas.**

Por lo tanto, al demostrarse que el juez de Distrito, examinó las causas de improcedencia que invocaron las partes en el juicio de amparo; que este Tribunal Colegiado de Circuito, ya analizó y desestimó las causas de improcedencia invocadas en el recurso de revisión adhesiva y al no advertir diversas hipótesis de improcedencia que se actualicen en el caso, procede enviar el asunto al Alto Tribunal del país

Por lo expuesto y fundado, se **resuelve:**

PRIMERO. Este Tribunal Colegiado se declara legalmente incompetente para conocer del problema de constitucionalidad que subsiste en el recurso de revisión principal de la quejosa respecto de los artículos 234, 235, último párrafo,





PODERA JAL DE LA FEDERACIÓN

67

R.A.

MA B-1

36
50 11

237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud y, en consecuencia, para analizar los agravios correspondientes, así como para examinar los agravios del recurso de revisión adhesiva interpuesto por el Presidente de la República y el Secretario de Salud, por las razones y fundamentos sustentados en el último considerando de esta resolución.

SEGUNDO. Remítanse el presente toca, así como el expediente de amparo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

NOTIFÍQUESE; personalmente a la quejosa y por oficio a las autoridades responsables; remítanse testimonio del presente fallo al juez de Distrito; fórmese cuaderno de antecedentes y envíese a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el archivo electrónico que contenga esta resolución.

Así, por **unanimidad** de votos de los magistrados: presidente José Antonio García Guillén, Eugenio Reyes Contreras y Arturo César Morales Ramírez; lo resolvió el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados.



DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
ENERGÍA DE ACUERDO
DE AMPAROS

Firman los magistrados que intervinieron, así como la secretaria de tribunal quien autoriza y da fe.

FIRMADO: MAGISTRADO PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, MAGISTRADO PONENTE EUGENIO REYES CONTRERAS Y ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, Y LA SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA ISIS NAYELI LANDEROS MUÑOZ. RÚBRICAS.

LA SUSCRITA SECRETARIA DE TRIBUNAL DEL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, MAESTRA VANESA ZÁRATE VERGARA, CERTIFICA: QUE LAS COPIAS QUE ANTECEDEN SON FIELMENTE REPRODUCIDAS DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, QUE CONSTAN DE TREINTA Y CUATRO FOJAS DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO R.A. [REDACTED], PROMOVIDO POR [REDACTED] PARA SER ENVIADAS COMO TESTIMONIO AL JUZGADO DECIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. EN CIUDAD DE MÉXICO A DOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.- DOY FE.

LA SECRETARIA DE TRIBUNAL:



MTRA. VANESA ZÁRATE VERGARA



SECRETARIA DE TRIBUNAL
DECIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
PRIMER CIRCUITO

37
80
CUADERNO PRINCIPAL
AMPAO NÚMERO

QUEJOSO:

RECURSO DE REVISIÓN.

C. JUEZ DÉCIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

[REDACTED] autorizado por el
quejoso, [REDACTED], según consta en los autos del juicio de
amparo al rubro indicado, respetuosamente comparezco y expongo:

En nombre de mi autorizante vengo a interponer recurso de
revisión contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional del juicio
de amparo al rubro indicado, toda vez que el quejoso no está conforme con
la misma. Fundo la interposición del recurso en las disposiciones de los
artículos 80, 81 fracción I, inciso e), 86, 88, 89 y demás relativos de la Ley
de Amparo en vigor, a cuyo efecto relato los siguientes antecedentes y
expresión de agravios.

**OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN
DEL RECURSO DE REVISIÓN.**

Para los efectos del cómputo de los 10 días hábiles a los que
alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, conviene tener presente que la
resolución del 27 de octubre de dos mil dieciséis se notificó por listas el
viernes 28 de octubre de dos mil dieciséis, la cual surtió efectos el jueves 3
de noviembre. De suerte que el primer día hábil para los efectos del término
establecido por la Ley de Amparo fue el viernes 4 del mes de noviembre,
para fenecer el jueves 17 de noviembre del mismo año.

ANTECEDENTES:

A.- Mediante escrito presentado en la oficialía de partes de los
Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito el 23 de
agosto de dos mil dieciséis, turnado al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en

Materia Administrativa en el Distrito Federal, el quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que seguidamente se transcriben:

AUTORIDADES:

1. H. Congreso de la Unión
 - Cámara de Diputados; y
 - Cámara de Senadores.
2. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;
3. Secretario de Gobernación;
4. Comisionado Federal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios;
5. Director Ejecutivo de Regulación de ~~Medicamentos~~, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la ~~Comisión Federal~~ para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y,
6. Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación.

ACTOS RECLAMADOS:

1. Del Congreso de la Unión reclamo la expedición de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo del 14 de julio de 1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al 4 de agosto del mismo año, en lo que concierne a los artículos 83, 84, 85 y demás relativos; con todas sus consecuencias y efectos.
2. Del Congreso de la Unión también reclamo la expedición de la Ley General de Salud del 26 de diciembre de 1983, publicada en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al 7 de febrero de 1984, en lo que concierne a los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248; con todas sus consecuencias y efectos.
3. Del Presidente de la República reclamo el decreto de 29 de julio de 1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1994, que promulga y manda publicar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; con todas sus consecuencias y efectos.

4. Del Presidente de la República reclamo el decreto del 30 de diciembre de julio de 1983, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, que promulga y manda publicar la Ley General de Salud; con todas sus consecuencias y efectos.
5. Del Secretario de Salud reclamo, en su calidad de titular y responsable del trámite y resolución de los asuntos que incumben a esa Secretaría en los términos de los artículos 1°, 2°, 14, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 1°, 2°, 3° y 4° del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, todos los acuerdos, las ordenes, instrucciones, verbales o escritas, que como superior jerárquico cursó al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, como órgano desconcentrado de esa Secretaría, para negar, bajo la apariencia de un desechamiento, la solicitud de autorización sanitaria que formuló el quejoso para consumo personal con fines lúdicos o recreativos de la Marihuana, así como para ejercer los derechos correlativos al auto-consumo de Marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana. Todos los efectos, consecuencias y efectos de los anteriores actos.
6. Del Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios reclamo los actos de cumplimiento, observancia, trámite y ejecución atribuidos al Secretario de Salud, ya sea que los hubiere llevado a cabo por sí mismo o por conducto de su subordinado el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas; también reclamo los actos que de propio imperio dictó y no en cumplimiento de actos de su superior jerárquico, consistentes en las ordenes, instrucciones o acuerdos, proveídos o resoluciones que giró a su subordinado, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para que, bajo la apariencia de un desechamiento, niega la solicitud formulada por el quejoso para autorización

4

sanitaria para consumo personal con fines lúdicos o recreativos de la Marihuana, así como para ejercer los derechos correlativos al auto-consumo de Marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana; todos los efectos, cumplimiento y ejecución de estos actos.

7. Del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios reclamo los actos de cumplimiento, observancia, trámite y ejecución atribuidos a sus superiores jerárquicos, el Secretario de Salud, o bien, al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; reclamo igualmente los actos que de propia iniciativa haya realizado en la aplicación, concreta o implícita, de los numerales impugnados en la emisión y suscripción del oficio número [REDACTED] de fecha 8 de julio de 2016, con el que, bajo la apariencia de un desechamiento, en realidad niega la solicitud de autorización sanitaria para consumo personal con fines lúdicos o recreativos de la Marihuana, así como para ejercer los derechos correlativos al auto-consumo de Marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana; con todos sus efectos y consecuencias. Así mismo reclamo cualquier acuerdo o determinación que haya tomado y ejecutado en relación con la solicitud formulada por el quejoso para la autorización sanitaria para consumo personal con fines lúdicos o recreativos de la Marihuana, así como para ejercer los derechos correlativos al auto-consumo de Marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana; reclamo, también,

el oficio de fecha 11 de febrero de 2016 en que requiere al hoy quejoso para que acredite su interés jurídico o interés legítimo para formular su petición y ejercer los derechos que ahí hace valer el quejoso, apercibida que en caso contrario, desecharía la petición; también reclamo la confusión terminológica de carácter jurídico en que incurre para negar la petición al quejoso, bajo la apariencia de un desechamiento, pues al desgaire emplea tanto el interés jurídico como el interés legítimo como excusa para concluir con el desechamiento de la petición; con todos sus efectos y consecuencias, que se traducen de manera ejemplificativa y no limitativa en el desconocimiento y vulneración de los derechos sustantivos del quejoso.

8. De todas las autoridades reclamo los actos tendentes a desconocer y vulnerar los derechos fundamentales inherentes a mi persona como individuo libre y autónomo, en el contexto de una sociedad democrática, que se expresa a sí mismo como sujeto responsable, autoconsciente, racional y moral. Derechos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS:

Los que reconocen los artículos 3º, 4º, 13, 14, 16 y 17, en relación con los numerales 1º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las disposiciones del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

B.- La demanda de amparo se admitió a trámite por auto del 25 de agosto de dos mil dieciséis; se tuvieron como autoridades responsables a las señaladas en el escrito de demanda, a quienes se les requirió su informe justificado, se dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional.

C.- Por escrito presentado en la oficialía de partes del Juzgado de Distrito el 27 de octubre de dos mil dieciséis, la quejosa ofreció pruebas en los términos siguientes:

B

1. **DOCUMENTAL PÚBLICA** consistente en las documentales que se anexaron al escrito inicial de demanda de fecha 23 de agosto de 2015. Dichos documentos obran en los autos del juicio de amparo.

Las documentales adjuntadas al escrito inicial de demanda están relacionadas con todos los conceptos de violación de la demanda de amparo. Concretamente, sirven para acreditar los actos de autoridad, así como para acreditar las violaciones alegadas en los diversos conceptos de violación.

2. **DOCUMENTALES PÚBLICAS** consistentes en los expedientes administrativos que fueron solicitados a la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios y que ha remitido al Juzgado mediante diversos escritos. Dichos documentos obran en los autos del juicio de amparo y son los siguientes:

"1.- Copia Certificada de las constancias que conforman el expediente administrativo que se integró con motivo de la solicitud que se promovió con fecha 11 de noviembre de 2015, para la autorización para el consumo individual del estupefaciente Cannabis Sativa (indica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) así como del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol, los isómeros Δ6a (10a), Δ6a (7), Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ9 (11) y sus variantes estereoquímicas) (conjuntamente "Marihuana" o "Cannabis"), con número [REDACTED]

"2.- Copia certificada de las constancias que integran el expediente administrativo que se abrió con motivo de la solicitud realizada el 6 de junio de 2013, por [REDACTED] y la [REDACTED] a esa Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para la autorización del consumo individual del estupefaciente Cannabis Sativa (indica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) así como del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol, los isómeros Δ6a (10a), Δ6a (7), Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ9 (11) y sus variantes estereoquímicas) (conjuntamente "Marihuana" o "Cannabis").

"3.- Copia certificada de las constancias que integran el expediente administrativo número [REDACTED] que se abrió con motivo de la solicitud por parte de [REDACTED], el 13 de noviembre de 2015, para el consumo personal de cannabis, con todos sus anexos."

40
88
A

Las constancias guardan estrecha relación con la materia del juicio de amparo. Tales constancias solicitadas guardan relación principalmente con el concepto cuarto de violación de la demanda de amparo, en el que se invoca una violación al derecho a la igualdad reconocido en los artículos 1º y 13 del texto constitucional.

Las documentales solicitadas se refieren, por un lado, a las solicitudes de uso personal de cannabis de [REDACTED] y la [REDACTED] de [REDACTED] y por otro lado a la solicitud de uso personal del Señor [REDACTED]. La solicitud formulada por los primeros es de junio de 2013 y la del último es del 11 de noviembre de 2015, posterior a las solicitudes de algunos de los quejosos. En tales supuestos, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios invocó expresamente los artículos de la política prohibicionista de la Ley General de Salud y negó las solicitudes de uso personal de cannabis.

A partir de los expedientes solicitados se fija un parámetro de comparación entre aquellos casos y los de los hoy quejosos. Sirven para establecer un criterio diferenciador en la actuación de la autoridad a cargo del control sanitario de estupefacientes y psicotrópicos en el país. Esto es, se proveen las pruebas para acreditar un trato desigual e inequitativo entre los quejosos y diversas personas en situación análoga.

Sin el parámetro de referencia establecido en los diversos expedientes administrativos solicitados, ese Juzgado no podrá analizar si todos los peticionarios de uso personal de cannabis han sido tratados en un mismo modo; o bien, si los quejosos han sido blanco de una trato discriminatorio u objeto de una estrategia litigiosa a modo, para impedir que accedan a la justicia constitucional y hagan valer sus derechos humanos. De tales constancias se desprenderá que las autoridades cuyos actos se reclaman no han aplicado la ley de forma neutral y objetiva.

3. **DOCUMENTAL PRIVADA** consistente en copia simple de la fe de hechos realizada por el notario Público número 102, de la Ciudad de México, por la que certificó la obtención del artículo denominado "CANNABIS POLICY: MOVING BEYOND STALEMATE", a través de la página de internet www.beckley.foundation.org, junto con el referido artículo en idioma inglés y español. Se acompaña como **Anexo 1**.

Dicha documental se ofrece con el objeto de demostrar que las políticas prohibicionistas de las drogas no han llevado a los países a reducir significativamente la escala en el mercado; los efectos negativos de éstas políticas en la sociedad; la ineficacia de las mismas y, a su vez, los diferentes caminos que existen para llegar a una legalización y verdadera regulación de las drogas.

4. **DOCUMENTALES PRIVADAS** consistentes en diversos artículos y estudios académicos en relación a diversos usos que tiene el Cannabis o Marihuana, tanto medicinal, terapéutico y personal, así como la diversa regularización que se le han dado en diversos países, sus consecuencias, así como artículos sobre los efectos de la regulación y descriminalización del cannabis en otros estados **Anexos 2 a 15.**

- i. Consumo medicinal de cannabis en los Estados Unidos: Perspectivas históricas, tendencias actuales y direcciones futuras. Aggarwal SK, Carter GT, Sullivan MD, Morrill R, Zumbunnen C, Mayer JD. *Medicinal use of cannabis in the United States: Historical perspectives, current trends, and future directions.* Journal of Opioid Management. 2009 Mayo; 5(3): 153-168. Cited in PubMed. PMID: 19662925.

Mediante esta prueba se acredita que el cannabis ha sido utilizado para fines médicos durante miles de años. El cannabis fue reemplazado en la medicina occidental por medicina química como la aspirina y luego criminalizado. Durante las últimas décadas se ha producido un renovado interés en su uso. Basado en el descubrimiento del sistema endocanabinoide controla el dolor, el tono muscular, el estado de ánimo, el apetito, la inflamación, entre otros. se analizó en este artículo la investigación de los mecanismos fisiológicos de los cannabinoides y sus aplicaciones en el manejo de padecimientos como el dolor crónico.

- ii. Impacto de las leyes estatales sobre marihuana medicinal en el uso de marihuana entre adolescentes. Esther K. Choo, M.D., M.P.H. a,* , Madeline Benz a , Nikolas Zaller, Ph.D. b , Otis Warren, M.D. c , Kristin L. Rising, M.D. d y K. John McConnell, Ph.D. The Impact of State Medical Marijuana Legislation on Adolescent Marijuana Use. Journal of Adolescent Health. 55(2), Abril 2014.

40-41
9
11

No hay diferencias estadísticas significativas en el uso de marihuana antes y después de un cambio de políticas en ninguno de los estados (EE. UU). En el análisis de regresión, no observaron una mayor probabilidad general de uso de marihuana asociado con el cambio de políticas.

De modo que se puede predecir que habida cuenta de una regulación adecuada de reducción de daños y de prevención, no habría razones para que hubiera una mayor prevalencia en el uso de cannabis si en México también se regulara el acceso a la planta para uso personal. En términos de los exámenes de escrutinio y proporcionalidad para las normas que restringen derechos humanos, esta prueba se debe emplear para concluir que la política prohibicionista no es medio adecuado, instrumental o idóneo, para reducir o evitar un incremento en la prevalencia en el uso de cannabis.

III. Estado de la Evidencia, uso de Cannabis y Regulación, Centro Internacional Para la Ciencia en Política de Drogas, agosto 2015 (Actualizado en septiembre 7, 2015). Comité Editorial Dr. Dan Werb, Dra. Tara Marie Watson, Mtra. Nazlee Maghsoudi.

Este documento elaborado por un cuerpo internacional de científicos analiza y desmiente trece presunciones sobre uso de cannabis y sobre su regulación. Concluye que ninguno de las trece suposiciones sobre el cannabis y su regulación está firmemente apoyada por evidencia científica. Este documento ayuda a separar la evidencia científica de las meras conjeturas.

Es un instrumento adecuado para desvirtuar el alcance y valor probatorio de las pruebas ofrecidas por las autoridades para justificar la política prohibicionista.

IV. Usando la Evidencia Para Hablar de Cannabis, Centro Internacional Para la Ciencia en Política de Drogas, agosto 2015 (Actualizado en septiembre 7, 2015), Comité Editorial Dr. Dan Werb, Mtra. Nazlee Maghsoudi.

El International Centre for Science in Drug Policy (ICS DP), una red global de científicos trabajando en asuntos relacionados con

política de drogas, emite el reporte para desmentir diversas presunción y falsas conclusiones sobre el uso y regulación del cannabis.

- v. Marihuana medicinal: disipar el humo. Grant I, Atkinson JH, Gouaux B, Wilsey B. (2012). *Medical marijuana: Clearing away the smoke*. The Open Neurology Journal, 6, 18-25. PMID: 22629287 PMCID: 3358713, 2012.

Ensayos clínicos recientes con marihuana fumada y vaporizada, así como otros extractos botánicos, indican la probabilidad de que los cannabinoides puedan resultar útiles en el manejo del dolor neuropático, la espasticidad por esclerosis múltiple y, posiblemente, otras indicaciones.

- vi. Políticas posibles para la legalización del cannabis: las ocho "P" como punto de partida. Beau Kilmer, PhD, *Policy Designs for Cannabis Legalization*. Centro de Investigación de Políticas sobre Drogas (Drug Policy Research Center), The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, v. 40, no. 4, July 2014, p. 259-261

Si la legalización del cannabis es positiva o negativa para la salud y la seguridad pública depende en gran medida de decisiones de índole regulatoria y el modo en que estas se implementen. Este ensayo presenta ocho de estas alternativas de diseño, que casualmente en inglés comienzan todas con la letra "P": producción (production), fin de lucro (profit motive), promoción (promotion), prevención (prevention), potencia (potency), pureza (purity), precio (price) y permanencia (permanency).

La simple despenalización no es suficiente para concluir que había una afectación en la salud de la población. Habría que analizar, en todo caso, la regulación adoptada por cada Estado.

- vii. Efectos de las Leyes Estatales sobre Cannabis Medicinal respecto al Consumo de Cannabis por parte de Adolescentes Lynne-Landsman, S. D., Livingston, M. D., III, & Wagenaar, A. (2013). *Effects of state medical marijuana laws on adolescent marijuana use*. American Journal of Public Health, 103, 1500 - 1506. DOI: 10.2105/AJPH.2012.301117.

4492
3

Las leyes sobre cannabis para uso médico no han afectado de una manera medible el consumo de cannabis por parte de adolescentes durante los primeros años de su promulgación.

- viii. Reevaluando el efecto trampolín del cannabis, Morral, A. R., McCaffrey, D. F. and Paddock, S. M. (2002), *Reassessing the marijuana gateway effect*. *Addiction*. Society for the Study of Addiction, 97: 1493-1504.

Los resultados demuestran que los fenómenos empleados para motivar la creencia en el efecto trampolín son consistentes con un modelo alternativo simple y plausible de factor común. No se requiere de un efecto trampolín para explicarlos. El modelo de factor común tiene implicaciones para la evaluación de políticas de control del cannabis que difieren significativamente de aquellas respaldadas por el modelo correspondiente al efecto trampolín.

En otras palabras, no hay razón para creer que el uso de cannabis conduce al uso de otras drogas con mayores daños probados a la salud.

- ix. Efecto de las leyes sobre marihuana medicinal en el delito: Evidencias de datos de panel estatales, 1990-2006, Morris RG, TenEyck M, Barnes JC, Kovandzic TV (2014) *The Effect of Medical Marijuana Laws on Crime: Evidence from State Panel Data, 1990-2006*. PLoS ONE marzo 26, 2014.

Estos hallazgos contradicen los argumentos que sugieren que la legalización de la marihuana con fines médicos representa un peligro para la salud pública en términos de exposición a delitos violentos y delitos contra la propiedad.

- x. Formular reglamentaciones de salud pública para la marihuana: Experiencias extraídas de los casos del alcohol y el tabaco. Rosalie Liccardo Pacula, Beau Kilmer, Alexander C. Wagenaar, Frank J. Chaloupka, and Jonathan P. Caulkins. *Developing Public Health Regulations for Marijuana: Lessons From Alcohol and Tobacco*, American Journal of Public Health: June 2014, Vol. 104, No. 6, pp. 1021-1028.

Aprendiendo de la regularización de alcohol y tabaco, una reglamentación de la marihuana para fines ajenos de los médicos debe mantener los precios altos en forma artificial; restringir y supervisar minuciosamente a las licencias y los licenciarios; limitar los tipos de productos en venta; procurar limitar la promoción comercial; restringir el consumo en público y medir y prevenir la conducción de vehículos bajo el efecto de sustancias.

En otras palabras, el artículo expone la forma en la que si se terminara con la política prohibicionista podría neutralizarse el potencial daño a la salud de los usuarios.

xi. Reporte DrugScience para la Organización Mundial de la Salud, noviembre 2016. Documento creado para la Organización Mundial de la Salud, Comité de Expertos del Comité de Drogas que Causan Adicción, para su reunión de trabajo en Ginebra, Suiza, del 14 al 18 de noviembre de 2016, por Drug science.

El cannabis y la resina de cannabis fueron incluidas en las listas I y IV de la Convención Única de Estupefacientes de 1961 sin que dicha decisión hubiese sido justificada por una revisión crítica de la evidencia científica disponible a cargo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo anterior, pese a que la agencia fue mandatada para hacerlo desde 1948 y a que la última evaluación se había realizado bajo la Liga de las Naciones en 1935. Ochenta años después, ni el cannabis ni su resina han sido sometidas a una nueva revisión que permita incorporar el progreso científico y reconsiderar su clasificación al interior de las Convenciones. Sin embargo, desde 2014, el Comité de Expertos en Drogodependencia de la OMS (ECDD por sus siglas en inglés) ha recomendado en su 35, 36 y 37 Periodo Ordinario de Sesiones realizar una pre-evaluación del cannabis con el fin de determinar si una nueva revisión crítica es necesaria y, en su caso, emitir recomendaciones sobre su lugar en las listas de fiscalización.

Aunque el ECDD ha decidido realizar dicha revisión en "futuras reuniones", el secretariado de la OMS no ha podido preparar el reporte de pre-revisión que se exige para su adecuada discusión por el ECDD. En su lugar, la OMS preparó en 2016 el informe "Los efectos sociales y en la salud del uso no médico del cannabis"

que, aunque útil, no fue concebido para satisfacer las necesidades del proceso de revisión por el Comité y no cubre todos los temas que se requieren para cumplir con el formato establecido por la propia agencia (Ver:

http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/GLS_WHOR_ev_PsychoactSubst_IntC_2010.pdf?ua=1, páginas 11 y 12). Con el objetivo de llenar este vacío, DrugScience -un grupo de expertos independientes con probado conocimiento y experiencia- preparó el "Reporte de pre-revisión sobre cannabis y resina de cannabis" mismo que cumple no sólo con todos los criterios establecidos por la "guía para la revisión de sustancias bajo control internacional", sino que fue preparado con el mismo rigor científico y metodológico que si se tratara de un informe preparado directamente por el secretariado de la OMS. El reporte será utilizado por el ECDD en su 38 periodo ordinario de sesiones, a realizarse en Ginebra del 14 al 18 de noviembre de 2016.

Entre otras cosas, de tal reporte se desprenden el potencial de dependencia (hoja 32), síndrome de abstinencia (hoja 33), usos terapéuticos, daños científicamente probados del uso (hoja 28), la imposibilidad para que conduzca a la muerte de sus usuarios (hoja 28), así como algunos efectos contingentes a la edad del usuario (hoja 30).

Es el reporte más actualizado sobre los efectos potenciales del cannabis y sus políticas públicas, que además cumple con todos los estándares de la OMS para ser tomado en cuenta en la evaluación del cannabis. Éste es el reporte con la más alta credibilidad para determinar los potenciales daños, científicamente probados, asociados con el cannabis.

- xii. Los efectos sociales y en la salud del uso no médico del cannabis. La OMS preparó en 2016 el informe "*The health and social effects of nonmedical cannabis use*" que, aunque útil, no fue concebido para satisfacer las necesidades del proceso de revisión por el Comité y no cubre todos los temas que se requieren para cumplir con el formato establecido por la propia agencia (Ver: http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/GLS_WHOR_ev_PsychoactSubst_IntC_2010.pdf?ua=1, páginas 11 y 12).

Reporte DrugScience para la Organización Mundial de la Salud, noviembre 2016, señalado en el numeral previo es un mejor reporte, con mayor credibilidad científica y política. No obstante, este reporte sigue siendo un mejor instrumento que cualquier de los remitidos por las autoridades cuyos actos se reclaman, para analizar los aspectos científicos y técnicos de la política prohibicionista.

Entre otras cosas, de tal informe se desprenden los efectos a corto plazo, a largo plazo y formas de prevenir el uso de cannabis.

xiii. La Declaración de Viena, "The Vienna Declaration".

Comunicado emitido por un grupo de expertos de la comunidad científica internacional en el año 2010.

En 2010, en el marco de la XVIII Conferencia Mundial del SIDA, realizada en la ciudad de Viena, Austria, un grupo de organizaciones líderes en el ámbito del VIH/SIDA, científicos y reconocidos expertos en salud pública hicieron un llamado a la comunidad internacional para reconocer el impacto negativo que el régimen global de fiscalización de drogas tenía (y tiene) sobre la expansión de la pandemia del VIH/SIDA. Con este objetivo en mente, y con miras a incidir en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA realizada en junio 2011, dichos actores redactaron una declaración en la que se expusieron las razones por las que los enfoques punitivos de control de drogas no sólo no cumplen con los objetivos de erradicar la disponibilidad y el consumo de sustancias controladas, sino que además contribuyen a la creación y profundización de otros daños a la salud (Para ver lista completa de redactores, incluyendo ganadores del Premio Nobel visite: <http://www.viennadeclaration.com/writing-committee/>).

A través de la Declaración de Viena, organizaciones de la talla de la Sociedad Internacional del SIDA, el Centro de Excelencia en VIH/SIDA de la Columbia Británica y el Centro Internacional para la Ciencia en Política de Drogas pidieron realizar una revisión transparente de las políticas de drogas actuales, instrumentar y evaluar un enfoque de salud pública para atender los daños individuales y sociales causados por el uso de sustancias ilícitas,

despenalizar el uso de drogas, apoyar y financiar la implementación del paquete de intervenciones sobre VIH/SIDA aprobado por la OMS, UNODC y ONUSIDA, e incorporar a las comunidades más afectadas en el desarrollo, monitoreo e implementación de servicios y políticas que afectan sus vidas. La Declaración obtuvo decenas de miles de adhesiones del público en general y logró el apoyo de cientos de científicos, profesionales del ámbito jurídico y de seguridad, así como de cientos de organizaciones alrededor del mundo (para ver lista completa de adhesiones visite:

<http://www.viennadeclaration.com/organizational-endorsements/>.

Este comunicado establece, entre otros aspectos relevantes, lo siguiente:

- "La actuación policial no ha podido evitar la disponibilidad de drogas."
- "No hay evidencia que incrementar la ferocidad de la actividad policial reduce de forma significativa la prevalencia en uso de drogas"
- Que la política de "guerra contra las drogas" ha resultado en "[b]illones de dólares desperdiciados en un enfoque de "guerra contra las drogas" para el control de drogas que no logra sus objetivos y, en cambio, directa o indirectamente contribuye a los daños"

De modo que es un documento adecuado para acreditar, dentro de los exámenes de escrutinio y proporcionalidad que (a) la política prohibicionista no es instrumental o idónea para reducir la demanda o disponibilidad de drogas y que, en cambio, (b) genera consecuencias adversas adicionales.

xiv. Marijuana & Road Safety: A call for Policies Based on Facts, Not Fear. "Marihuana & Seguridad en las Calles, Un llamado para políticas públicas basadas en hechos, no miedo". Drug Policy Alliance, 2016.

Este documento ofrece argumentos y evidencia para poner en tela de juicio la suposición de que el uso de cannabis genera accidentes de tránsito.

De las anteriores documentales se desprenden los daños reales, científicamente probados, asociados al uso de cannabis; que las políticas prohibicionistas de las drogas no han llevado a los países a reducir significativamente la escala en el mercado; los efectos negativos de estas políticas en la sociedad; la ineficacia de las mismas y, a su vez, los diferentes caminos que existen para llegar a una regulación basada en reducción de daños, prevención, información, dignidad y derechos humanos.

5. **DOCUMENTAL PRIVADA** consistente en un índice de estudios científicos utilizados por la Doctora Pasantes para formular una réplica al oficio [REDACTED] de fecha 13 de septiembre de 2016. La objeción de la Dra. se suscribe en el presente escrito de alegatos en el apartado "OBJECCIÓN DE PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS AUTORIDADES" El índice referido se adjunta como.

6. **INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES** en todo lo que favorezca a los quejosos.

7. **PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA** que se desprende de las constancias de autos.

D.- La audiencia constitucional se llevó a cabo el día 27 de octubre de dos mil dieciséis.

E.- Con motivo de la celebración de la audiencia de derecho, se publicó en la lista del viernes 28 de octubre de dos mil dieciséis, el sentido de la sentencia que pronunció el Juez de Distrito a quo.

ÍNDICE DE AGRAVIOS

1. VALORACIÓN DE PRUEBAS	24
2. VIOLACIÓN A LOS DERECHOS A LA PROPIA IMAGEN, LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y A LA DIGNIDAD HUMANA	27
2.1. TITULARIDAD DE LOS DERECHOS	28
2.2. ALCANCE DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD Y LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD	31
2.3. VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS A LA PERSONALIDAD, LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, PROPIA IMAGEN Y DIGNIDAD HUMANA	38
2.4. ANÁLISIS SOBRE LEGITIMIDAD DE LAS RESTRICCIONES	43

3. TRANSGRESIÓN DE LOS EXÁMENES DE PROPORCIONALIDAD Y ESCRUTINIO PARA NORMAS QUE RESTRINGEN DERECHOS HUMANOS	46
3.1. EXÁMENES DE PROPORCIONALIDAD Y ESCRUTINIO	48
3.2. APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE ESCRUTINIO Y PROPORCIONALIDAD	56
A. LEGITIMIDAD DEL FIN PERSEGUIDO	57
i. Finalidad de proteger la salud contra la voluntad	61
B. INSTRUMENTALIDAD MEDIO-FIN	64
i. <i>La prohibición no es un medio para mejorar la salud</i>	69
ii. <i>La descriminalización no genera mayor consumo</i>	73
iii. <i>No genera un daño a la salud, sino un mero riesgo de daño a la salud</i>	76
C. ANÁLISIS DE NECESIDAD: MEDIO MENOS RESTRINGITIVO Y RESTRICCIÓN DE LO EstrictAMENTE NECESARIO	79
1. No es la alternativa menos restrictiva	84
2. Restringe más de lo estrictamente necesario	90
D. PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO EstrictO, BALANCE DE EFECTOS	95
i. <i>Daños a la salud ocasionados por la prohibición</i>	97
ii. <i>Riesgo de ser lastimado o de perder la vida</i>	98
iii. <i>Generación de un mercado negro</i>	99
3.3. CONCLUSIÓN AL ESCRUTINIO	105
4. VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL, PLURALISMO Y A LA DIGNIDAD HUMANA	106
4.1. TITULARIDAD DEL DERECHO A LA DIGNIDAD	107
4.2. TITULARIDAD DEL DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL	110
4.3. ALCANCE DEL DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL, PLURALISMO Y LA DIGNIDAD HUMANA	111
4.4. VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL, PLURALISMO Y LA DIGNIDAD HUMANA	116
4.5. ANÁLISIS SOBRE LEGITIMIDAD DE LAS RESTRICCIONES	117
5. VIOLACIÓN AL DERECHO A LA DISPOSICIÓN DE LA SALUD PERSONAL	119
5.1. TITULARIDAD DEL DERECHO A LA SALUD	120
5.2. ALCANCE DEL DERECHO A LA DISPOSICIÓN DE LA SALUD PERSONAL	121
5.3. VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA DISPOSICIÓN DE LA SALUD PERSONAL	125
5.4. ANÁLISIS SOBRE LEGITIMIDAD DE LAS RESTRICCIONES	128
6. VIOLACIÓN AL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN PERSONAL Y CORPORAL, LIBERTAD INDIVIDUAL Y DE DIGNIDAD HUMANA	130
6.1. TITULARIDAD DEL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN	132
6.2. ALCANCE DEL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN	133
6.3. VIOLACIÓN AL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN	141
6.4. ANÁLISIS SOBRE LEGITIMIDAD DE LAS RESTRICCIONES	144

7. VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 16, 17 Y 17-A DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	146
1. Facultad Para Contestar Fuera de Tiempo	149
2. Facultad Para Resolver Desfavorablemente a Partir de Información Solicitada Fuera de Tiempo	151
3. Indebida Respuesta con Sustento en Elementos no Previstos en la Normatividad Aplicable	153
8. VIOLACIÓN A LA GARANTÍA IGUALDAD	154

ACLARACIÓN SOBRE LA POLÍTICA PROHIBICIONISTA

Las autoridades responsables de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios anuncian una resolución desfavorable a la solicitud formulada por el quejoso. De los argumentos vertidos en el oficio se desprende que el motivo de fondo es la existencia de la Política Prohibicionista y la prohibición en la Ley General de Salud para todos los usos del cannabis. Esto es, se trata en realidad es un oficio de negación y aplicación de la Política Prohibicionista en perjuicio del quejoso.

El Juez de Distrito arriba a la misma conclusión que el quejoso. El acto de autoridad constituye una aplicación implícita de la política prohibicionista, como se desprende de los siguientes extractos de la sentencia de amparo:

Hoja 33

"(...) se trata de una negativa implícita sustentada en los artículos 234, 235, último párrafo; 237; 245, fracción I; 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, que como más adelante se verá, establecen un sistema de restricciones administrativas relativas al uso de la marihuana."

Hoja 34

"(...) se desechó su solicitud de autorización sanitaria por falta de interés jurídico, pero que en realidad se trata de la **negación de un derecho**, pues al indicar que no tiene un derecho subjetivo para usar **cannabis** o requerir su uso y que las autoridades carecen de facultades para conceder una autorización para ello, en realidad, está negando la solicitud con base en la prohibición existente al respecto en la normatividad de la materia. De forma tal que, el desechamiento de la solicitud está directamente conectado con la prohibición para usar esa planta derivada de los

preceptos impugnados."

Hoja 59

"Al respecto, cabe mencionar que el análisis de los actos reclamados en el presente caso, partió de la premisa **-planteada por el propio quejoso-** que el desechamiento de la solicitud de autorización sanitaria para consumo personal de marihuana con fines recreativos, por estimar que el quejoso no contaba con un derecho tutelado para la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión, transporte de la semilla, **se trata en realidad de una negativa implícita** que tiene sustento, precisamente, en las restricciones contempladas en las normas reclamadas, pues de ellas no se desprende que un ciudadano pueda gozar de una autorización de tal naturaleza ni que la autoridad pueda otorgarla.

"Lo anterior se corrobora con el hecho que el razonamiento esencial a través del cual, la autoridad responsable contestó las solicitudes es que hasta el momento no está contemplado la posibilidad de otorgar autorización alguna para llevar a cabo tales actos, de conformidad con la Ley General de Salud, tal como se advierte del cuadro siguiente:

(Caso [REDACTED])	"(...) Conforme al artículo 235 y 237 de la Ley General de Salud indica: (se transcribe). Conforme al artículo 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud: (se transcribe). Por lo anterior expuesto hasta el momento, no puede ser expedida autorización alguna para la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso o consumo de cannabis sativa (...). "
(Caso [REDACTED])	
(Caso [REDACTED])	"(...) Por tanto, resulta improcedente la solicitud para (...) y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana por el peticionario (...), toda vez que cumple con el artículo 368 de la Ley General de Salud, el cual señala que las autorizaciones sanitarias se emitirán en los casos y con los requisitos y modalidades que determine esta Ley y demás disposiciones generales aplicables. (...) Adicionalmente, cabe señalar que no se configura la hipótesis de un derecho subjetivo que obligue a emitir una autorización de dichas características, pues es un principio general de derecho que las autoridades pueden hacer lo que la ley les permite, y ya que la Ley General de Salud no contempla una autorización con las particularidades que refiere, lo conducente era que probara ser titular de un derecho subjetivo que, por un acto de autoridad, se veta afectado de manera personal y directa, lo cual no aconteció."

" (...) el desechamiento es en realidad una negativa a otorgar la autorización sanitaria que se sustentaba exactamente en la misma razón (...)"

A mayor abundamiento, las autoridades responsables de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios llevan a cabo una aplicación implícita de los artículos de la Ley General de Salud reclamados y de la Política Prohibicionista. Esgrimen tres clases de argumentos relevantes para desentrañar la existencia de una aplicación implícita de la Ley General de Salud:

- a) Establecen que el quejoso no tiene un derecho subjetivo para usar cannabis o para requerir su uso.
- b) Expresan inequívocamente que la determinación sobre interés jurídico atiende a la existencia del derecho subjetivo que precisamente habían solicitado los quejosos
- c) Dispone que tales autoridades Cofepris no están facultadas para resolver sobre usos del cannabis.

Todas las afirmaciones son deónticamente equivalentes a establecer que la normatividad prohíbe los usos del cannabis. Todos esos argumentos son reformulaciones legales, equivalencias y eufemismos para concluir que la Ley General de Salud prohíbe categóricamente todos los usos del cannabis. Esto es, se aplicó la prohibición categórica para todos los usos del cannabis contenida en la Ley General de Salud.

A continuación se detalla el modo en que tales afirmaciones corresponden a una aplicación implícita de los artículos impugnados de la Ley General de Salud, en detrimento del quejoso.

a. Que supuestamente el quejoso no tiene un derecho subjetivo para usar cannabis

En diversas ocasiones dentro del acto de autoridad las autoridades de Cofepris disponen que el quejoso no es titular de un derecho subjetivo para acceder al cannabis:

"(...)del desahogo a la prevención formulada en lo que refiere a la existencia de un interés jurídico, entendiéndolo éste como la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento legal objetivo (...)"

Las autoridades de Cofepris reconocen su facultad para ejercer control sanitario sobre el cannabis, pero acomodaticiamente anuncian no ejercer tal control específicamente sobre el cannabis. Pero de la lectura cuidadosa del acto de autoridad se desprende que si ejercieron control

sanitario sobre el cannabis; que si dispusieron que el quejoso no tiene un derecho a usar la planta; que el supuesto desechamiento está directamente conectado con la prohibición para usar esa planta, y que Cofepris se encuentra vinculada por la prohibición de los artículos 235, 237, 245 y 247 que prohíben el otorgamiento de autorizaciones sanitarias sobre el cannabis, salvo para estudio científico.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria [REDACTED] ha aclarado que el control sobre las sustancias de los artículos 234 y 235 de la Ley General de Salud está sujeto a control por Cofepris:

"Efectivamente, de conformidad con los artículos 235 y 247, así como con el artículo 44 del Reglamento de Insumos para la Salud, cualquier persona que pretenda sembrar, cultivar, elaborar, preparar, acondicionar, adquirir, poseer, comerciar, transportar, prescribir médicamente, suministrar, emplear, usar, consumir y, en general, realizar cualquier acto relacionado con las sustancias listadas en los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud, o con cualquier producto que los contenga, deberá contar con una "autorización" de la Secretaría de Salud y solamente podrá realizar dichas acciones si las mismas tienen fines médicos y/o científicos.

"Ahora bien, el artículo 368 dispone que la "autorización sanitaria" es el acto administrativo mediante el cual la autoridad sanitaria competente permite a una persona pública o privada la realización de actividades relacionadas con la salud humana, en los casos y con los requisitos y modalidades que determine la propia Ley General de Salud y demás disposiciones generales aplicables. Sin embargo, los artículos 237 y 248 prohíben expresamente la expedición de la autorización a que se ha hecho referencia respecto de determinadas sustancias consideradas como un problema grave para la salud pública, entre las que se encuentran el estupefaciente "cannabis sativa, indica y americana o marihuana", así como el psicotrópico "tetrahidrocannabinol" (THC), los isómeros $\Delta 6a$ (10a), $\Delta 6a$ (7), $\Delta 7$, $\Delta 8$, $\Delta 9$, $\Delta 10$, $\Delta 9$ (11) y sus variantes estereoquímicas, sustancias materia de la controversia en el presente recurso de revisión."

Carecer de un derecho subjetivo, en el caso concreto es lo mismo que decir que no tiene un derecho. En caso de regulación sanitaria, como el uso de estupefacientes y psicotrópicos está sujeto a la obtención de una autorización sanitaria. De modo que si el quejoso no tiene un derecho subjetivo para acceder a tales sustancias mediante una autorización sanitaria, tiene prohibido realizar toda conducta asociada a las mismas.

El negar la titularidad de un derecho implica el reconocimiento y aplicación de una prohibición. En efecto, en ausencia de la prohibición, el quejoso tendría el derecho subjetivo respecto del cual la autoridad anuncia su falta de titularidad.

En otras palabras, establecer que el quejoso no es titular de un derecho subjetivo para acceder al cannabis, es tanto como afirmar que lo tiene prohibido. Se le han aplicado en su detrimento las normas que establecen el régimen de prohibiciones administrativas de la Ley General de Salud.

En conclusión, la determinación de que el quejoso no tiene un derecho subjetivo, es la determinación de que tiene prohibido hacerlo, en función de los artículos que lo prohíben. Es decir, la determinación de que el quejoso no es titular de un derecho subjetivo, es la determinación de que el artículo 235, 237, 245 y 247 lo prohíben.

Por consecuencia, la determinación de que el quejoso no es titular de un derecho subjetivo, es la aplicación de la prohibición establecida en tales artículos.

b. Análisis sobre interés jurídico es un análisis sobre el derecho subjetivo al uso del cannabis

Las autoridades de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios establecen que el análisis sobre interés jurídico es en realidad el análisis sobre la existencia de un derecho para acceder al uso del cannabis:

"Es importante considerar que, el acreditar un interés jurídico o legítimo para poder proveer una resolución por parte de la autoridad no es una formalidad, es un requisito de fondo referente a la existencia de un derecho subjetivo previsto por el conjunto normativo que el particular pueda ejercer o reclamar de la autoridad del Estado."

Mediante tal afirmación reconoce que la existencia sobre un interés jurídico está directamente asociado a la existencia de un derecho tutelado. Así, a la inversa, dispone que el quejoso no tiene interés jurídico para hacer la solicitud y, por consecuencia, tampoco tiene el derecho tutelado para el uso del cannabis. De modo que está afirmando que el quejoso no tiene derecho para hacer uso del cannabis y así invoca

implícitamente, una vez más, el régimen de prohibición administrativa en relación al cannabis contenido en la Ley General de Salud.

c. No tiene facultad para resolver concretamente sobre usos del cannabis

Finalmente, las autoridades responsables reiteran en numerosas ocasiones que no existen facultades para otorgar una autorización sanitaria sobre cannabis, así que no están previstos los requisitos y modalidades para otorgar una autorización tal:

"Adicionalmente, cabe señalar que no se configura la hipótesis de un derecho subjetivo que obligue a esta autoridad a emitir una autorización de dichas características, pues es un principio general de derecho que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, y ya que la Ley General de Salud no contempla una autorización con las particularidades que refiere, lo conducente era que probara ser titular de un derecho subjetivo que, por un acto de autoridad, se veía afectado de manera personal y directa, lo cual no aconteció."

"(...) en ninguna parte se establece una autorización sanitaria para "consumo personal con fines recreativos del "Cannabis Sativa (...)"

" (...) esta autoridad no tiene facultades para pronunciarse sobre actividades no previstas en la Ley General de Salud y cuyos casos, modalidades y requisitos no estén definidos en la Ley de la materia."

" (...) Ley General de Salud así como en el Reglamento de Insumos para la Salud y el "Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria" y sus ulteriores modificaciones, se establecen los requisitos que deben cumplirse para la emisión de las mismas, requisitos que pueden ser tanto técnicos como legales y entre los cuales no hay disposición expresa para la autorización que se está peticionando.

"Por tanto, resulta improcedente la solicitud (...) toda vez que no cumple con el contenido del artículo 368 de la Ley General de Salud, el cual señala que las autorizaciones sanitarias se emitirán en los casos y con los requisitos y modalidades que determine esta Ley y demás disposiciones generales aplicables."

26

No hay norma "que obligue a emitir una autorización" sobre consumo de cannabis. Tal enunciado es una alusión directa a los artículos 235, 237, 245 y 247 de la Ley General del Cannabis. En efecto, al decir que ninguna norma lo obligue o le permita a emitir una autorización sobre tal sustancia, está haciendo referencia a la norma que le prohíbe hacerlo.

Asimismo, cuando aduce que no existe norma que le faculte para resolver sobre la materia, que no hay una serie de requisitos expresos para que aquella los siga o que no hay un trámite específico, pues está invocando la norma que prohíbe los usos del cannabis.

La Ley General de Salud sí le faculta para resolver sobre autorizaciones para el uso de estupefacientes y psicotrópicos; el Reglamento de Insumos para la Salud y el "Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria" también establecen los requisitos generales para autorizar el uso de estupefacientes y psicotrópicos. De forma que la única razón por la que no puede autorizar concretamente el uso de cannabis es por la política prohibicionista, que invoca implícitamente el acto reclamado.

No cabe duda que Cofepris ejerce control sanitario sobre todos los estupefacientes y psicotrópicos establecidos en la Ley General de Salud. Tampoco que para hacer uso de los mismos se requiere una autorización sanitaria. La única razón por la que Cofepris no puede emitir una autorización, o bien, tiene prohibido hacerlo, es por la prohibición categórica hacia todos los usos del cannabis contenida en los artículos impugnados de la Ley General de Salud.

Así las cosas, al anunciar que no tiene facultades para otorgar el permiso, está parafraseando la existencia de una prohibición sobre tal efecto.

AGRAVIOS

PRIMER AGRAVIO.- VALORACIÓN DE PRUEBAS. Violación de las disposiciones de los artículos 74 fracción III de la Ley de Amparo, 222 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria,

conforme al texto del numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo; e inobservancia de la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva con justicia reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Juez a quo guardó silencio respecto al acervo de pruebas, y por lo mismo omitió valorarlas como un bloque armónico y bajo parámetros de sencillez y efectividad para hacer efectivo el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

En efecto, la autorizada del quejoso presentó en la Oficialía de Partes de ese Juzgado, el escrito con fecha del 27 de octubre de dos mil dieciséis, con la firma al calce, en el que ofrece las pruebas que se mencionan en el apartado letra C del capítulo de antecedentes del presente recurso.

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que ninguna de las pruebas ofrecidas y desahogadas fueron objetadas por autoridad alguna o por el Juez de Distrito.

En resumen, el Juez a quo violentó la regulación procesal trazada con carácter obligatorio para el Juzgador, en los artículos 123 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo; y después en la sentencia, también conculcó las normas procesales de los artículos 77 de la Ley de Amparo y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dicen:

"Artículo 123. Las pruebas se desahogarán en la audiencia constitucional, salvo aquéllas que a juicio del órgano jurisdiccional puedan recibirse con anterioridad o las que deban desahogarse fuera de la residencia del órgano jurisdiccional que conoce del amparo, vía exhorto, despacho, requisitoria o en cualquier otra forma legal, que podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la Firma Electrónica.

"Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.

"Artículo 74.- La sentencia debe contener:

"I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;

28

"II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios;

"III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio;

"IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer;

"V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplicencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; y

"VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobreseer el amparo y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa.

"El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma.

"Artículo 222.- Las sentencias contendrán, además de los requisitos comunes a toda resolución judicial, una relación sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales como doctrinarias, comprendiendo, en ellas, los motivos para hacer o no condenación en costas, y terminarán resolviendo con toda precisión, los puntos sujetos a la consideración del tribunal, y fijando, en su caso, el plazo dentro del cual deben cumplirse."

En estas condiciones, es incorrecto y violatorio de los preceptos legales invocados, así como del derecho humano a la tutela judicial efectiva garantizada por el artículo 17 constitucional, y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comúnmente conocida como "Pacto de San José", entre otros documentos Internacionales a los que la República se adhirió; decia y prosigo con el agravio, la negativa del amparo que decretó el Juez de Distrito resulta incorrecta y procede que se revoque la sentencia y se conceda el amparo impetrado.

Por todas las anteriores consideraciones resulta palmario que el señor Juez de Distrito a quo indebidamente omitió valorar y tomar en

29

cuenta el acervo probatorio que ofreció el quejoso como un bloque armónico y bajo parámetros de sencillez y efectividad; y, por otro lado, transgredió el derecho fundamental al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, y arribó a una denegación de justicia en agravio del quejoso.

No está por demás señalar que el derecho de acceso a la justicia es un derecho fundamental de aplicación inmediata y que es un elemento constitutivo del derecho al debido proceso, y, cuyo correlato es el deber de las autoridades jurisdiccionales, que, en calidad de garantes de los derechos humanos, tienen la obligación de promover las condiciones para que el acceso a dicho servicio público sea real y efectivo, con apoyo en el artículo primero constitucional y segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Así, el derecho de acceso a la justicia se vulnera cuando la autoridad jurisdiccional -el Juez a quo-, inadvierte el bloque de pruebas bajo parámetros de sencillez y efectividad y su entrelazamiento. De lo anterior se deriva, entonces, que el juez de amparo, más que contar con una facultad, tiene el deber de desplegar la actividad probatoria necesaria en aras de establecer la verdad de los hechos. Así lo disponen el artículo 1º constitucional.

Por lo demás, el derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado estándares sobre el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales. En tal sentido, la obligación de los Estados no es sólo negativa -de no impedir el acceso a esos recursos- sino fundamentalmente positiva, de organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos. A tal efecto, los Estados deben remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia.

SEGUNDO AGRAVIO. Violación a los principios de fundamentación y motivación adecuadas, congruencia y exhaustividad, en relación al concepto de violación tercero, apartado segundo (2.1-2.3) sobre los derechos humanos a la propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana.

Bajo el anterior esquema, la resolución viola las disposiciones de los artículos 74 fracción I de la Ley de Amparo, 222 y 352 del Código

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al texto del numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo; e inobservancia de la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el concepto de violación tercero, numeral segundo, de la demanda de amparo, el quejoso sostuvo que la aplicación en su perjuicio de los artículos que prohíben la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, posesión y otras conductas relacionadas con el autoconsumo de Cannabis (artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud) vulnera los derechos a la personalidad, dentro de los cuales se encuentran los derechos a la propia imagen, intimidad, libre desarrollo de la personalidad y, en términos generales, a la dignidad humana.

En tal concepto de violación, el quejoso alegó, en primer lugar, que es titular de los derechos a la propia imagen, intimidad, libre desarrollo de la personalidad y, en términos generales, a la dignidad humana; en segundo lugar, expuso cuál era el alcance normativo de tales derechos, y en tercer lugar, adujo que la Política Prohibicionista transgredía tales derechos.

El Juez de Distrito reconoció la titularidad del quejoso sobre los derechos a la propia imagen y el libre desarrollo de la personalidad; reconoció también el alcance normativo de los derechos, y concluyó que la política prohibicionista transgredía o restringía tales derechos.

2.1. TITULARIDAD DE LOS DERECHOS

El derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra tutelado en diversas disposiciones del texto constitucional, tales como las siguientes:

Artículo 19.-

"Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

"El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud."

Artículo 29.-

"...En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos."

Adicionalmente, los derechos de la personalidad, dentro de los cuales se encuentran los derechos a la propia imagen, intimidad y libre desarrollo de la personalidad, se encuentran implícitos en las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos que derivan del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues solo a través del pleno respeto de estos derechos de la personalidad podría realmente hablarse de un ser humano en toda su dignidad.

Como se sostuvo con anterioridad, el derecho al pleno respeto de la dignidad humana, del cual se desprenden todos los derechos de la personalidad, se encuentra dispuesto en los artículos 1º, 2º, 3º, 25 de la Constitución; preámbulo y artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 11 del Pacto de San José; preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En el mismo sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el Criterio judicial P. LXV/2009,

Novena Época, con número de registro 165813, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 8, del tenor siguiente:

"DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad."

(Subrayado y énfasis añadido)

Otro tanto ha expresado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el fallo del Juicio de Amparo en Revisión [REDACTED] resuelto el 4 de noviembre de 2015, en los términos siguientes:

"En el ordenamiento mexicano, esta Suprema Corte ha entendido que el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que deriva del derecho a la dignidad, que a su vez está previsto en el artículo 1º constitucional y se encuentra implícito en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país."

(Subrayado y énfasis añadido)

Respecto la titularidad de los derechos de la personalidad, tales como el de la propia imagen, intimidad y libre desarrollo de la personalidad, el Juez de Distrito concede su existencia y titularidad, en los términos siguientes del considerando SÉPTIMO de la sentencia recurrida:

"Pues bien, el derecho al libre desarrollo de la personalidad deriva del derecho a la dignidad, previsto en el artículo 1º constitucional, así como en diversos tratados internacionales de los cuales es parte el Estado mexicano."

Así las cosas, se encuentra demostrada la titularidad de los derechos de la personalidad, del derecho a la propia imagen, intimidad, libre desarrollo de la personalidad, así como el derecho y presupuesto básico del ordenamiento jurídico mexicano, a la dignidad humana.

2.2. ALCANCE DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD Y LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FEDERACIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria del Amparo Directo Civil 6/2008, definió por unanimidad el alcance y significado de los derechos de la personalidad, en los términos siguientes:

"[D]e la dignidad humana, se deriva la teoría de los derechos de la personalidad, que componen un sector, dentro del más amplio de los derechos humanos, en el cual se encuentran, entre otros, los derechos a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal.

"El individuo, sea quien sea, tiene derecho a elegir, en forma libre y autónoma, su proyecto de vida, la manera en que logrará las metas y objetivos que, para él, son relevantes.

"De ahí, el reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad, definida ésta por el Diccionario de la Real Academia Española, como la singularización, el distintivo de la persona. Por ende, el libre desarrollo de la personalidad es la consecución del proyecto de vida que para sí tiene el ser humano, como ente autónomo. Como ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, es decir, es la persona humana quien decide el sentido de su

propia existencia, de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera y que, por supuesto, como todo derecho, no es absoluto, pues encuentra sus límites en los derechos de los demás y en el orden público.

"Así pues, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, comprende, entre otras, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, así como en qué momento de su vida, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral; y, por supuesto, la libre opción sexual, pues todos estos aspectos, evidentemente, son parte de la manera en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo él puede decidir en forma autónoma."

"(...)"

"El derecho a la propia imagen, por su parte, implica la imagen que uno conserva para mostrarse a los demás y que, como tal, gran parte de la doctrina ubica, a su vez, dentro del derecho a la intimidad, constituyéndose como derechos personalísimos, pertenecientes al ámbito propio del ser humano, fuera de la injerencia de personas extrañas. El individuo tiene el derecho de decidir, en forma libre, sobre su propia imagen."

"Son derechos personalísimos, de los que se dispone con libertad, pero, a su vez, constituyen una obligación de los demás de respeto a ese derecho y, por tanto, se configuran como un derecho de defensa y garantía esencial para la condición humana, en tanto pueden reclamarse por la defensa de la intimidad violada o amenazada, cuanto se puede exigir del Estado que prevenga eventuales intromisiones que lesionen ese derecho personalísimo, de acuerdo con Osvaldo Alfredo Gozáini. En consecuencia, como todo derecho, no es absoluto y sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés superior."

(Énfasis y subrayado añadidos)

De la transcrita ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se desprende que los derechos a la personalidad, dentro de los cuales se encuentran los derechos a la propia imagen, intimidad, libre desarrollo de la personalidad y, en términos generales, a la dignidad humana, son parte integrante del régimen jurídico mexicano y son tan exigibles como cualquier otro derecho enunciado en el texto constitucional.

Adicionalmente, de la sentencia citada se desprende que corresponde a cada persona ejercer su singularidad, de conformidad con sus ideales de vida y modelos de vida buena, sin la intervención del Estado.

Así las cosas, mientras el derecho a la identidad personal (desarrollado en el agravio cuarto) implica la permisión de ser uno, con los atributos particulares propios, los derechos de la personalidad implicados en este concepto de violación se refieren a la obligación del gobierno de abstenerse de imponer modelos y estándares de vida buena que son ajenos a los particulares. Esto es, que el Estado no puede intervenir en aquellos asuntos de trascendencia personal y privada.

Ahonda en esa idea el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptado por unanimidad en el fallo 6/2008 antes citado, fue recogido en la tesis P. LXVI/2009, de la Novena Época, con número de Registro 165822 y visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, página 7, de diciembre de 2009, del tenor siguiente:

"DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE.

"De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente."

(Subrayado y énfasis añadido)

Pero el derecho al libre desarrollo de la personalidad no sólo ha sido desarrollado en sentido amplio, sino que también ha sido valorado en relación a actividades de ocio y esparcimiento y, en concreto, en relación la Política Prohibicionista y punitiva del Estado que prohíbe todas las conductas relacionadas al uso de cannabis.

"...el derecho fundamental en cuestión [libre desarrollo de la personalidad] permite *prima facie* que las

personas mayores de edad decidan sin interferencia alguna qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean realizar, así como llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección."¹

En otras palabras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el proyecto de vida respecto del cual los seres humanos tienen libre desarrollo incluye todo aquello que el individuo quiere hacer para con su vida y con su cuerpo, sin limitarse a la apariencia y profesión, sino también incluyendo actividades privadas, sociales, recreativas, culturales, de ocio y esparcimiento.

En el fallo [REDACTED] reconoce que los procesos mentales de las personas merecen especial protección frente a injerencias del Estado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desarrolla una sub-vertiente del libre desarrollo de la personalidad que en la academia ha sido llamada libertad cognitiva, en los términos siguientes:

"De esta manera, la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece indudablemente a la esfera de autonomía personal que debe estar protegida por la Constitución. Esa elección puede incluir, como ocurre en el presente caso, la ingesta o el consumo de sustancias que produzcan experiencias que en algún sentido "afecten" los pensamientos, las emociones y/o las sensaciones de la persona. En esta línea, se ha señalado que la decisión de fumar marihuana puede tener distintas finalidades, entre las que se incluyen "el alivio de la tensión, la intensificación de las percepciones o el deseo de nuevas experiencias personales y espirituales". Así, al tratarse de "experiencias mentales", éstas se encuentran entre las más personales e íntimas que alguien pueda experimentar, de tal manera que la decisión de un individuo mayor de edad de "afectar" su personalidad de esta manera con fines recreativos o lúdicos se encuentra tutelada prima facie por el derecho al libre desarrollo de ésta."²

(Subrayado y énfasis añadido)

La Corte reconoce la libertad del individuo frente a las intromisiones en el estado mental o de conciencia. Las interferencias en el

¹ Amparo en revisión [REDACTED] de 4 de noviembre de 2015, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

² Amparo en revisión [REDACTED] de 4 de noviembre de 2015, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Citando a su vez el voto disidente del juez Levinson a la sentencia de la Corte Suprema de Hawaii en el caso *Hawaii State v. Kantner*, 53 H.327,493 P.2d 306 (1972).

intelecto y procesos mentales del individuo merecen el grado más alto de protección, pues como dice la Corte, son las "más personales e íntimas."³ Mediante la cita anterior, la Corte reconoce la autonomía plena del individuo, no sólo sobre su persona, sino también sobre su estado de conciencia. Se reivindica inequívocamente por primera vez en la jurisprudencia nacional el dominio del ser humano sobre sus pensamientos y procesos mentales.

Con antelación al fallo [REDACTED] la jurisprudencia nacional había reconocido, a partir del libre desarrollo de la personalidad, el derecho a realizar aquellas conductas que definen y singularizan al ser humano, siempre que no se afectasen derechos de terceros. La novedad en la ejecutoria [REDACTED] es doble: por un lado, reconoce que el libre desarrollo de la personalidad también protege el uso recreativo de cannabis; por otro lado, reconoce una dimensión adicional al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho protege la libertad del ser humano para controlar y definir sus procesos mentales. Un avance significativo en materia de derechos humanos.

Con el desarrollo de la ciencia y tecnología se han ido creando maneras novedosas de controlar o incidir en los procesos mentales de los particulares. El control mental pleno de un individuo sigue siendo materia de ciencia ficción, de una novela George Orwelliana, o de teorías de la conspiración. No obstante, es difícil negar el cada vez mayor entendimiento científico que permiten a Estados e industria por igual mayor intromisión en los procesos mentales. El libre desarrollo de la personalidad de la mano del principio de libertad cognitiva, desarrollados en el fallo [REDACTED] podrán ser instrumentales para dibujar los linderos constitucionales entre, por un lado, el ejercicio legítimo de convencimiento y manipulación y, por el otro lado, las intromisiones indebidas en la volición y estado de conciencia.

En conclusión, el individuo puede ser insolente, inmoral, piadoso, traidor, ignorante o generoso, pero el Estado no puede imponer coercitivamente que sea de forma diferente, a menos que se vean involucrados derechos de terceros. Esta libertad cobra especial relevancia en los procesos de pensamiento y discernimiento. En este modo, los valores y virtudes sociales no pueden ser impuestos por el Estado, pues corresponden exclusivamente al coto vedado de la personalidad e intimidad de cada

³ *Ibidem*.

sujeto. Toda persona tiene derecho a desarrollar su personalidad libremente, sin más limitaciones que el respeto a derechos de terceros.

Se puede apreciar una extensa jurisprudencia nacional que protege al individuo de injerencias estatales cuando éste no afecta a terceros y realiza conductas que lo singularizan en sociedad. Pero Otros tribunales constitucionales también han abordado la definición y análisis del alcance del derecho a la intimidad y libre desarrollo de la personalidad. Los criterios de tribunales análogos pueden ser útiles y orientadores para el desarrollo y desenvolvimiento de la jurisprudencia nacional.

La Corte Constitucional de la República de Colombia en la sentencia No. T-090/96 dispone de manera pertinente lo siguiente:

"DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (...)

"La pretensión de que se respete la identidad sociocultural del individuo, se fundamenta en el derecho de autodeterminación que la Constitución le reconoce y garantiza. Las opciones de libertad que el individuo escoge a partir de las cuales construye su destino, le conceden a su ser un sello propio que no deja de incorporarse en su personalidad y que lo hace único e irrepetible"

La misma Corte en la sentencia No. T-401/92 determina lo siguiente:

"toda persona, en razón de su condición humana, exige igual consideración y respeto y debe reconocérsele capacidad de autodeterminación y posibilidad de goce de los bienes inapreciables de la existencia."

Asimismo, abundó en el tema con la sentencia No. C-221/94, sobre la despenalización del consumo de la dosis personal:

"Reconocer y garantizar el libre desarrollo de la personalidad, pero fijándole como límites el capricho del legislador, es un truco ilusorio para negar lo que se afirma. Equivale a esto: "Usted es libre para elegir, pero sólo para elegir lo bueno y qué es lo bueno, se lo dice el Estado".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina, también se ha pronunciado al respecto. En el fallo *Bazterrica* 308:1392, del 29 agosto 1986, dispuso lo siguiente:

"[A]dquiere una singular significación la prohibición constitucional de interferir con las conductas privadas de los hombres, prohibición que responde a una concepción según la cual el Estado no debe imponer ideales de vida a los individuos, sino ofrecerles libertad para que ellos los elijan, y que es suficiente por sí misma para invalidar el art. ..., cuya inconstitucionalidad se declara, en cuanto incrimina la simple tenencia de estupefacientes para uso personal."

Respecto al alcance de los derechos de la personalidad, tales como el de la propia imagen y libre desarrollo de la personalidad, el Juez de Distrito concede el alcance que el quejoso había expuesto en el primer concepto de violación (numerales 2.1 a 2.3) de la demanda de amparo. En concreto, respecto al alcance del derecho al libre desarrollo de la personalidad y derecho a la propia imagen, el Juez de Distrito afirma lo siguiente, en la hoja 50 del fallo:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER EJECUTIVO FEDERAL
SUPLENTE DEL JEF DEL PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECCIÓN DE AMPAROS

"Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo [REDACTED] determinó que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es el derecho de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida y que implica el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera.

"Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger la apariencia personal; la profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en aspectos que son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente.

"Así, en ese asunto, el Alto Tribunal falló en el sentido que la reasignación sexual que decida una persona, esto es la adecuación que busque de su estado psicosocial a su físico, y de vivir en el sexo con el que se identifique plenamente, constituye una decisión que forma parte del libre desarrollo de la personalidad. En otros precedentes, la Corte también ha considerado que la decisión de no continuar con el matrimonio también forma parte de un plan de vida elegido de manera autónoma, el cual no debe ser obstaculizado por el Estado ni por un tercero y, en consecuencia, forma parte del libre desarrollo de la personalidad.

"En lo que interesa al tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el

amparo en revisión [REDACTED] determinó que las acciones o actividades necesarias para materializar la elección de consumir marihuana -esto es, la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera- implicaban ejercer el derecho a decidir qué tipo de actividades recreativas o lúdicas se desean realizar, por lo que su obstaculización incide en el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

"Desde ese punto de vista, entendiendo tal derecho fundamental en el sentido que lo ha comprendido el Alto Tribunal, resulta incuestionable que las normas reclamadas inciden en la libertad del quejoso de decidir qué actividades lúdicas o recreativas quiere realizar y, evidentemente, en la forma en qué decide vivir su vida;"

En síntesis, el Juez concede los argumentos del quejoso y reconoce el alcance normativo de los derechos invocados en el segundo concepto de violación en la demanda de amparo. Así las cosas, la *litis* constitucional no versa sobre el alcance *ex ante* del derecho, sino en la aplicación concreta a la Política Prohibicionista y la restricción que tal política genera sobre los derechos del quejoso.

En conclusión, de los derechos de la personalidad, del derecho a la propia imagen, intimidad, libre desarrollo de la personalidad, así como del derecho y presupuesto básico del ordenamiento jurídico mexicano a la dignidad humana, se desprende la obligación del gobierno de abstenerse de imponer modelos y estándares de vida buena que son ajenos a los particulares. Esto es, que el Estado no puede intervenir en aquellos asuntos de trascendencia personal y privada. El Estado debe respetar la identidad sociocultural del individuo, la autodeterminación y las opciones de vida que cada individuo escoge y a partir de las cuales construye su destino.

2.3. VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS A LA PERSONALIDAD, LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, PROPIA IMAGEN Y DIGNIDAD HUMANA

Los artículos 234, 235, 237, 245, 248 y 368 de la Ley General de Salud prohíben la siembra, cultivo, cosecha, elaboración y cualquier otra conducta relacionada con el autoconsumo de Marihuana.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha resuelto que el Libre Desarrollo de la Personalidad tutela la realización de diversas conductas personales, no amparadas por otros derechos. A continuación se

exponen algunas circunstancias análogas en las que la Corte ha reconocido la protección del libre desarrollo de la personalidad.

a. Libre Desarrollo de la Personalidad y Reasignación Sexual

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya reconoció que el libre desarrollo de la personalidad protege a aquellos que desean someterse a una reasignación sexual, que incluso puede comprender una cirugía para tal efecto. El Máximo Tribunal emitió el criterio judicial P. LXIX/2009, en la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, página 17, de diciembre de 2009, del rubro y texto siguientes:

"REASIGNACIÓN SEXUAL. ES UNA DECISIÓN QUE FORMA PARTE DE LOS DERECHOS AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.

"Partiendo de que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica necesariamente el reconocimiento a los derechos a la identidad personal, sexual y de género, pues a partir de éstos el individuo se proyecta frente a sí mismo y dentro de una sociedad, se concluye que la reasignación sexual que decida una persona transexual para adecuar su estado psicosocial a su físico y de ahí, vivir en el sexo con el que se identifica plenamente y ser reconocido como tal por los demás, constituye una decisión que forma parte del libre desarrollo de la personalidad, en tanto es una expresión de la individualidad de la persona, respecto de su percepción sexual y de género ante sí mismo, que influye decisivamente en su proyecto de vida y en todas sus relaciones dentro de la sociedad."

A propósito del amparo directo [REDACTED] es importante notar la protección que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha otorgado mediante el libre desarrollo de la personalidad, incluso cuando el ejercicio de tal derecho conlleva riesgos a la salud. Los procedimientos médicos de reasignación sexual conllevan diversos riesgos a la salud del individuo, aun la posibilidad de perder la vida en el quirófano; no obstante, en tal situación se reconoció el derecho de identidad personal pese a los riesgos a la salud implicados, que son riesgos sumamente mayores al del consumo de Cannabis -como se desprende del estudio de la Fundación Beckley-. En efecto, a diferencia de cualquier procedimiento quirúrgico, mediante el consumo de Cannabis no se corre riesgo de perder la vida.

En otras palabras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha reconocido que diversas conductas asociadas a una reasignación sexual, con mayores implicaciones para la salud que el uso de cannabis, se encuentran tuteladas por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. De ahí se sigue que la protección del uso individual de cannabis no es una conducta en los márgenes del derecho, sino que se encuentra plenamente protegida por el mismo.

b. Libre Desarrollo de la Personalidad Divorcio

Por otro lado, en reiteradas ocasiones el Máximo Tribunal ha establecido que la decisión de terminar un matrimonio está protegida por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sirven de ejemplo los amparos directos en revisión [REDACTED] y [REDACTED]. A mayor abundamiento, el siguiente criterio adoptado por la Primera Sala de la Corte reconoce el derecho unilateral a terminar una relación de matrimonio. Me refiero al criterio 1a. LIX/2015 (10a.) adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Tomo II, página 1392, de febrero de 2015:

"DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. CONSTITUYE UNA FORMA DE EJERCER EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.

"En el divorcio sin expresión de causa, es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio para que el juez la decrete aun sin causa para ello, donde incluso no importa la posible oposición del diverso consorte, pues la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante, la cual no está supeditada a explicación alguna, sino simplemente a su deseo de ya no continuar casado, por lo que la sola manifestación de voluntad de no querer continuar con el matrimonio es suficiente. Así, dicha manifestación constituye una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues decidir no continuar casado y cambiar de estado civil, constituye la forma en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida; es decir, el modo en que decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida."

(Subrayado y énfasis añadido)

Así, el libre desarrollo de la voluntad también protege al individuo para que disuelva un matrimonio, sin que pueda oponerse el

50 57
41

consorte, o que el Estado pueda imponer mayores restricciones o impedimentos.

c. Libre Desarrollo de la Personalidad y el uso habitual y recreativo de cannabis.

Finalmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió de manera inequívoca que el consumo personal de cannabis está protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esto es, ya hay un criterio orientador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos siguientes:

"Ahora bien, una vez que se ha expuesto el marco regulatorio para el control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en la Ley General de Salud, así como el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad, esta Primera Sala está en posición de concluir que los artículos de dicho ordenamiento identificados por el Juez de Distrito como actos reclamados efectivamente inciden en el contenido prima facie del derecho fundamental, toda vez que constituyen un obstáculo jurídico que impide a los quejosos ejercer el derecho a decidir qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean realizar, al tiempo que también impide llevar a cabo lícitamente todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección a través del autoconsumo de la marihuana: siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etc."

(Subrayado y énfasis añadido)

En términos generales, el derecho al libre desarrollo de la personalidad protege la libertad para que cada particular pueda vivir su vida conforme a sus propios ideales de vida buena, haciendo todo aquello que para sí mismo sea correcto, siempre que no afecte derechos de terceros. En el caso concreto, la utilización de la vida, el cuerpo y el tiempo para consumir Cannabis es una conducta que desea desempeñar el quejoso, dentro de su propio proyecto de vida. Se debe entonces arribar a la conclusión que si el Estado les prohíbe llevar a cabo tal conducta les está vulnerando su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El fallo [REDACTED] aún no es vinculante para los Juzgados y Tribunales del fuero Federal, pero sí debe orientar su interpretación y aplicación del texto constitucional a la presente controversia. Se trata de un caso idéntico al actual: diversos mexicanos, en mayoría de edad y con

entendimiento de la experiencia y efectos previsibles del consumo de lúdico de cannabis deciden utilizarlo con fines recreativos. Tanto en aquel caso como ahora el quejoso entiende los daños razonablemente previsibles, molestias, inconvenientes y riesgos asociados con el consumo de cannabis. En ambos casos se trata de personas que en ejercicio de sus derechos constitucionales y que con pleno uso de razón deciden alterar su estado de conciencia para fines recreativos mediante el uso de cannabis.

Así las cosas, se puede apreciar que el derecho a la dignidad humana y los derechos de la personalidad, pero más en concreto el derecho al libre desarrollo de la personalidad y su vertiente concreta de libertad cognitiva, son exactamente aplicables a las conductas que desea realizar el quejoso y cuya prohibición le ha sido invocada por la autoridad sanitaria.

Como ya existe un precedente judicial de exacta aplicación al caso concreto, conforme al principio de *stare decisis*, y a partir de un ejercicio de honestidad intelectual, no se puede obviar lo dispuesto en el fallo [REDACTED]. En otras palabras, los Juzgados y Tribunales que resuelvan sobre uso recreativo de cannabis deben hacerlo al tenor de los argumentos y planteamientos del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hacerlo implicaría un retroceso en materia de desarrollo de la interpretación constitucional y en materia de derechos humanos.

En conclusión, si se resolviera que la prohibición de sembrar, transportar y auto consumir Cannabis fuera constitucional, tal parecería que la ventaja y derecho de disponer sobre el cuerpo propio solo se conferiría a quienes ejercen los derechos en la forma y términos que los órganos del Estado mejor lo consideran. Si solo se protegen los derechos del adepto y del partidario de la política de Estado, entonces no hay razón para considerar que existe el derecho a desarrollar la singularidad personal de manera libre, a disentir y a perseguir la propia visión de una vida buena.

Los artículos impugnados de la Ley General de Salud expresan que no se puede utilizar el cuerpo y la imagen para las metas y objetivos que uno considera relevantes; que no se puede disponer de forma libre y autónoma de la persona, y que el disidente y el opositor deben ser perseguidos penalmente. Esto es, los artículos impugnados son una señal inequívoca que el Estado abandona su papel de centinela y protector de los derechos humanos, para imponer coercitivamente una visión de lo bueno y de lo correcto.

58

De acceder a la visión de Estado que propugna la Ley General de Salud, los derechos a la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad se barren de todo sentido y relevancia en una sociedad liberal y democrática.

Solo bajo la plataforma del respeto al libre desarrollo de la personalidad es que se puede proteger la singularidad de todos los seres humanos. El individuo, sea quien sea, tiene derecho a elegir, en forma libre, informada y responsable su proyecto de vida, así como la manera en que logrará las metas y objetivos que, para él, son relevantes.

El Juzgador sostiene que *ex ante*, o bien en principio, la política prohibicionista restringe los derechos del quejoso:

"Desde ese punto de vista, entendiendo tal derecho fundamental en el sentido que lo ha comprendido el Alto Tribunal, resulta incuestionable que las normas reclamadas inciden en la libertad del quejoso de decidir qué actividades lúdicas o recreativas quiere realizar y, evidentemente, en la forma en que decide vivir su vida;"

(Énfasis agregado)

En consecuencia, se debe resolver que la prohibición a la siembra, transporte y para el autoconsumo de Cannabis viola los derechos a la propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana.

Hasta este punto el quejoso y el Juez de Distrito coinciden. Ambos concuerdan en la titularidad, alcance y violación a los derechos a la propia imagen, libre desarrollo de la personalidad. Pese a ello, el Juez de Distrito niega el amparo y protección al quejoso. La negativa se sustenta en los exámenes de escrutinio o proporcionalidad que lleva a cabo el Juez de Distrito. A juicio del *a quo* la restricción a los derechos humanos se encuentra justificada. Tales determinaciones se encuentran indebidamente fundadas y motivadas.

2.4. ANÁLISIS SOBRE LA LEGITIMIDAD DE LAS RESTRICCIONES DE LOS DERECHOS A LA PERSONALIDAD, LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

Inclusive si se adujera que los derechos a la personalidad, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana no



OFICIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CARRERA CENTRAL ALTO DE LA VIGILANCIA
JULIO MARÍA GARCÍA DE LOS RÍOS
SECCIÓN DE ANÁLISIS

son absolutos, los límites establecidos por la prohibición en la siembra, cultivo, preparación, posesión y demás conductas relacionadas con el autoconsumo de Marihuana, en los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247 en su último párrafo y 248, implican una restricción inconstitucional e ilegítima.

En efecto, para restringir un derecho fundamental se debe cumplir con los siguientes requisitos: primero, tener una finalidad válida dentro del ámbito constitucional; segundo, que la medida empleada sea necesaria e instrumental para alcanzar la finalidad deseada; tercero, que la medida sea la menos restrictiva para alcanzar la finalidad propuesta, y cuarto, la persecución de un objetivo constitucionalmente legítimo no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.⁴

Al llevar a cabo el examen respectivo resulta evidente que la medida adoptada restringe de manera excesiva el derecho a la personalidad, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana, por lo que de ningún modo pueden considerarse legítimas.⁵

En conclusión, la sentencia de amparo transgrede los principios de congruencia externa y exhaustividad, pues el análisis de proporcionalidad en sentido amplio llevado a cabo por el Juez se encuentra indebidamente fundado y motivado.

Primero, finalidad de la norma. El Juez de Distrito define indebidamente cuál es el objetivo de la política prohibicionista. El objetivo indebidamente es definido por el Juez de Distrito en su nivel más alto de abstracción como la "*protección de la salud y el orden público*." Pero tal afirmación es una exageración que trivializa el objetivo concreto de la política prohibicionista y el objeto del examen de proporcionalidad. En realidad, el objetivo de la política prohibicionista es "*proteger la salud de los*

⁴ RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Novena Época; Registro, 169209; Instancia, Primera Sala; Tesis Aislada; Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVIII, Julio de 2008; Materia, Constitucional; Tesis, 1a. LXVI/2008; pág. 462.

⁵ Ver el tercer concepto de violación, tercer agravio, en los que se exponen detalladamente la forma en que se restringe de forma sobre-incluyente los derechos aquí invocados, se exponen diversas alternativas para los fines buscados por el estado que son menos restrictivas a los derechos y se hace un balance de beneficios y perjuicios que genera la Política Prohibicionista.

particulares contra su voluntad y sancionar a los usuarios de cannabis". Un objeto que es diametralmente opuesto a los derechos humanos contenidos en el texto constitucional. El juzgador debe analizar el objetivo concreto de la norma, no así el objetivo general de toda la normatividad de salud.

Segundo, idoneidad o instrumentalidad de la medida. El Juez de distrito no lleva a cabo un análisis de instrumentalidad de la medida. En tal etapa del examen de escrutinio se debe hacer un estudio de los medios para determinar si son útiles para alcanzar el objetivo buscado. El Juez en cambio analiza si el cannabis genera algún potencial daño a la salud, lo que no tiene conexión o relevancia alguna para el examen de idoneidad.

Tercero, necesidad de la medida. El Juez de distrito no lleva a cabo un análisis de necesidad de la medida. Tampoco analiza el *a quo* si existen alternativas menos restrictivas o si se restringe más allá de lo estrictamente necesario. En cambio, reitera que asegurar la salud es muy importante para el Estado. Esto es, en lugar de llevar a cabo el examen que debía llevar a cabo, analiza una vez más la primera etapa del estudio, sobre la importancia del objetivo perseguido.

Cuarto, proporcionalidad en sentido estricto. Finalmente, el Juez de Distrito aduce que, aunque todos los usos de cannabis se encuentran prohibidos, el quejoso no iría a la cárcel si lo encuentran con menos de 5 gramos de cannabis, pues el artículo 479 de la Ley General de Salud descriminaliza tal cantidad. Tal argumento se refuta de la lectura de los artículos 234, 235, 237 y 479 de la Ley General de Salud. El artículo 479 no crea un permiso para que el quejoso utilice válidamente la planta, sino que únicamente elimina la sanción penal si lo hace en cantidades menores a 5 gramos. Todos los usos del cannabis se encuentran prohibidos, con independencia de la cantidad. Además, el Juez de Distrito omite analizar si la política prohibicionista se lleva a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Omite analizar cuáles son los efectos en la sociedad y en grupos vulnerables de la política prohibicionista. En otras palabras, no lleva a cabo un examen de proporcionalidad en sentido estricto.

En el agravio tercero se llevará a cabo un análisis detallado sobre la indebida fundamentación y motivación, así como violación a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia, en relación a los

exámenes de escrutinio. Por lo pronto, se debe concluir que el Juez de Distrito lleva a cabo un indebido examen de proporcionalidad o escrutinio.

Contrario al aserto del a quo, se debe concluir que los artículos impugnados de la Ley General de Salud son inconstitucionales y violan los derechos a la personalidad, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana. En consecuencia, se debe revocar y la sentencia recurrida y ordenar al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que permita que el quejoso pueda sembrar, cultivar, preparar, poseer suficiente Marihuana para su autoconsumo habitual y reiterado.

TERCER AGRAVIO. Violación a los principios de fundamentación y motivación adecuadas, congruencia y exhaustividad, en relación al concepto de violación tercero, apartado quinto (5.1 -5.2), sobre la transgresión de los exámenes de proporcionalidad y escrutinio formulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para las normas que restringen derechos humanos.

En tal marco conceptual, la sentencia impugnada viola las disposiciones de los artículos 74 fracción I de la Ley de Amparo, 222 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al texto del numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo; e inobservancia de la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el tercer concepto de violación, apartado 5 (5.1 a 5.2) de la demanda de amparo, el quejoso alegó que la aplicación en su perjuicio de la Política Prohibicionista, que prohíbe la siembra y autoconsumo de Cannabis no supera los exámenes de escrutinio formulados por la Suprema Corte para analizar restricciones a derechos fundamentales, en relación con los derechos a la autodeterminación, libertad individual y corporal, libre desarrollo de la personalidad, identidad personal y disposición de la salud propia, establecidos en los conceptos de violación primero a cuarto de la demanda de amparo, agravios segundo a quinto del presente recurso de reconsideración.

En la doctrina constitucional nacional y comparada existen diversos análisis alternativos que se pueden realizar para analizar las violaciones a derechos humanos. Algunos precedentes nacionales utilizan exámenes de escrutinio siguiendo la jurisprudencia de los Estados Unidos de América, mientras que otros siguen exámenes de proporcionalidad más similares a los empleados en la doctrina Continental Europea.

Hay cierto traslapo entre los estándares de los exámenes de escrutinio y de proporcionalidad. Pareciera incluso que en la jurisprudencia nacional se han fusionado exámenes de escrutinio y proporcionalidad para generar algunos exámenes singulares. En la elaboración del correspondiente concepto de violación, así como en el presente agravio, incluiremos las diversas acepciones y etapas bajo las cuales se clasifican los estándares de escrutinio y proporcionalidad a efecto de abordar las distintas concepciones a partir de las cuales nuestros tribunales constitucionales han valorado restricciones a derechos humanos. Lo importante es resaltar que con independencia de si se utiliza un modelo u otro (de escrutinio, proporcionalidad o una fusión mexicana), la conclusión es la misma: la Política Prohibicionista y Punitiva del Estado Mexicano viola injustificadamente diversos derechos humanos del quejoso. En el mismo sentido, se concluirá que, con independencia de un modelo de escrutinio o uno de proporcionalidad, la sentencia del *a quo* se encuentra indebidamente fundada y motivada respecto de tales exámenes.

En el concepto de violación referido, el quejoso alegó, en primer lugar, que siempre que una norma general restringe derechos humanos, tales normas deben ser analizadas a la luz de los exámenes de proporcionalidad o de escrutinio que ha dilucidado la suprema corte de justicia de la nación; en segundo lugar, se expusieron cuáles eran los exámenes de proporcionalidad y escrutinio que fijaba la suprema corte y cuál era su alcance y valor normativo; en tercer lugar, se expusieron las razones por las que la Política Prohibicionista no superaba los exámenes previamente referidos.

No obstante, el Juez de Distrito hizo caso omiso de la mayor parte de los argumentos vertidos por el quejoso y, respecto de los que sí dio respuesta, lo hizo de manera superficial, fundando y motivando indebidamente su aserto. Los razonamientos expuestos por el quejoso, respecto de los cuales el Juez fundó y motivó indebidamente su

sentencia y contravino los principios de congruencia externa y exhaustividad, son los siguientes:

3.1. EXÁMENES DE PROPORCIONALIDAD Y ESCRUTINIO

Cuando se vulneran derechos fundamentales, la intervención de los jueces constitucionales se vuelve imperativa. Pero como no toda restricción a un derecho humano es necesariamente inconstitucional, se debe analizar si las restricciones son válidas o legítimas a la luz de escrutinios elevados de constitucionalidad.

Con esa finalidad, la Primera y Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han fijado algunos exámenes con los que debe cumplir cualquier medida que restringe derechos humanos. Esto es, se ha fijado el escrutinio específico que se debe realizar ante la restricción a un derecho fundamental. Algunos de esos criterios son los siguientes:

i. Primer Examen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

"Novena Época; Registro, 169209; Instancia, Primera Sala; Tesis Aislada; Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo, XXVIII, Julio de 2008; Materia, Constitucional; Tesis, 1a. LXVI/2008; Página, 462.

"RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS.

"Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y, c) ser

proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática."

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE AMENOS

tesis dispone que para restringir un derecho fundamental (tal como los derechos a la autodeterminación, libertad individual, libre desarrollo de la personalidad, propia imagen, dignidad humana y libre disposición sobre la salud propia) se debe cumplir con los siguientes requisitos: primero, tener una finalidad válida dentro del ámbito constitucional; segundo, que la medida empleada sea necesaria para alcanzar la finalidad deseada; tercero, que la medida sea la menos restrictiva para alcanzar la finalidad propuesta, y cuarto, la persecución de un objetivo constitucionalmente legítimo no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.

II. Segundo Examen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

"Novena Época; Registro, 169489; Instancia, Segunda Sala; Tesis Aislada; Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo, XXVII, Junio de 2008; Materia, Constitucional; Tesis, 2a. LXXXIV/2008, y página: 440.

"IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA.

"La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio necesario para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual en cuestión. Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que quepa exigir que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya de modo alguno a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo exigible que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato

desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia.*

En síntesis, los pasos a seguir según este Segundo Examen son los siguientes: primero, definir si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida; segundo, determinar si la diferenciación es adecuada para lograr el fin (si es una categoría del art. 1º de la CPEUM la medida debe estar directamente conectada con el fin), y tercero, determinar si la medida resulta proporcional.

III. Tercer Examen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Novena Época; Registro, 174247; Instancia, Primera Sala; Jurisprudencia; Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo, XXIV, Septiembre de 2006; Materia, Constitucional; Tesis, 1a./J. 55/2006, y página: 75.

IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.

La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida; el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador; es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la

medida clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran importancia determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado.

En síntesis, los pasos a seguir según este Examen son los siguientes: primero, determinar si la distinción persigue una finalidad objetiva y constitucionalmente válida; segundo, analizar la racionalidad o adecuación de la distinción, y tercero, determinar si cumple con el requisito de proporcionalidad.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, citando lo establecido por su homóloga europea, a dicho lo siguiente:

"Una diferencia de trato en el ejercicio de un derecho establecido en la Convención no sólo debe buscar un fin legítimo (...) se viola igualmente cuando se establece de manera clara que no hay una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin que se busca llevar a cabo (párr. 90, citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos)."

Por otro lado, en la doctrina y práctica de los Estados Unidos de América se utiliza un examen que ha sido conformado en diversos precedentes por la Corte Suprema a través de una serie de casos.⁷ Así, la

⁶ CorteIDH, *Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados*, Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, Serie A No. 18., párr. 90.

⁷ *Pennell v. City of San Jose*, 485 U.S. 1 (1988); *U.S. Railroad Retirement Board v. Fritz*, 449 U.S. 166 (1980); *Allied Stores v. Bowers*, 358 U.S. 522 (1959); *Williamson v. Lee Optical*, 348 U.S. 483 (1955); *Craig v. Boren*, 429 U.S. 190, 197 (1976); *Lehr*

Corte Suprema de los Estados Unidos de América sostiene que las normas que discriminan deben ser analizadas a partir de tres niveles de escrutinio: primero, el "examen de racionalidad", el estándar mínimo que exige únicamente que la distinción este relacionada con un fin legítimo del gobierno y que los medios establecidos sean razonables en términos del fin buscado; en segundo lugar, el "escrutinio intermedio" mediante el cual únicamente es válida la distinción si tiene sustento en un fin sustancialmente importante para el gobierno y el medio está sustancialmente relacionado con la obtención del fin; y finalmente, el "escrutinio estricto". Éste es el máximo estándar y consiste en verificar que el fin sea esencial para el Estado y que el medio sea necesario para alcanzar ese fin, es decir, que la medida empleada sea la menos discriminatoria posible.⁸

Finalmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el examen a practicar, en los términos siguientes: "(iii) *determinar si la medida impugnada supera las cuatro gradas del test de proporcionalidad: (1) constitucionalidad de los fines perseguidos medida; (2) idoneidad; (3) necesidad; y (4) proporcionalidad en sentido estricto.*"⁹

De los exámenes aquí analizados, los pasos a seguir para determinar si una distinción es discriminatoria en términos de la Constitución y los tratados internacionales consisten en determinar lo siguiente:

1. Si el fin perseguido por el Estado es constitucionalmente legítimo.
2. Si la medida adoptada guarda una relación de instrumentalidad con la finalidad buscada.¹⁰ Esto es, si la restricción a los derechos humanos en la Ley General de Salud es un medio razonablemente adecuado para la consecución de

v. Robertson, 463 U.S. 248 266; *Adarand Constructors v. Peña*, 515 U.S. 200 (1995); *Sugarman v. Douglas*, 413 U.S. 634 (1973); *Sherbert v. Verner*, 347 U.S. 398 (1963).

⁸ Chemerinsky, Erwin, *Constitutional Law. Principles and Policies*, Tercera edición, Aspen Publishers, Nueva York, 2006, p. 540-541.

⁹ Amparo en Revisión [REDACTED] resuelto el 4 de noviembre de 2015, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¹⁰ El fallo del amparo en revisión [REDACTED] llama a esta etapa "análisis de idoneidad", pero consideramos que tanto en aquel fallo como en esta demanda nos referimos a un mismo concepto. Se trata de un análisis sobre la instrumentalidad de los medios empleados. Lo que para Aharon Barak es el examen de *Conexión Racional* ("Rational Connection") y para la jurisprudencia Norte Americana son exámenes de *Relación Substancial* ("Substantial Relation").

la finalidad perseguida por la política pública. O bien, si hay una instrumentalidad medio-fin.

3. Que la medida sea necesaria para alcanzar el fin perseguido. Esto se mide a partir del análisis de si la medida es la alternativa menos restrictiva posible, así como de un análisis sobre si la medida restringe más allá de lo estrictamente necesario.
4. Proporcionalidad de la medida en sentido estricto. Es decir, si la medida genera una afectación innecesaria a los derechos humanos y si se generan efectos perjudiciales a otros derechos.

Respecto de las gradas de análisis antes expuestas, debe aclararse que los precedentes judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no han expresado un orden de prelación unívoco entre los diversos pasos a seguir. En algunos precedentes judiciales el análisis de *suprainclusión*, *subinclusión* y sobre *alternativa menos restrictiva* forman parte de la segunda etapa (del análisis de medios), en lugar de formar parte de la tercer o cuarta etapa de análisis (proporcionalidad y medios menos restrictivos). Tal es el caso del proyecto inicial de Resolución [REDACTED] elaborada por el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que a la fecha de la interposición presente demanda no ha sido resuelto. En tal resolución, el análisis de *suprainclusión* se formula como parte de la segunda etapa del análisis de escrutinio, como parte del análisis de los medios empleados.

Con independencia del orden utilizado en esta demanda o cualquier otro, es menester que se haga un análisis completo de los requisitos que conlleva un análisis de escrutinio para una norma que restringe derechos humanos. Toda vez que una restricción a derechos humanos únicamente es válida cuando cumple con todos los requisitos de los exámenes de escrutinio, el orden con que los mismos no es del todo relevante.

Respecto a los exámenes de escrutinio y proporcionalidad que deben superar las normas que restringen derechos humanos, el Juez de Distrito afirma lo siguiente, en la hoja 52 de la sentencia recurrida:

"Así, para que las medidas impuestas con el propósito

de regular una restricción prevista constitucionalmente a un derecho fundamental sean válidas, deben satisfacer los siguientes requisitos:

"a) Que la restricción reglamentada por el legislador sea admisible por la Constitución. El legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de los derechos fundamentales en los casos y en las condiciones que la misma Constitución establece, como lo prescribe su artículo 1°. Por tanto, es claro que el legislador no tiene facultades para establecer limitaciones a derechos humanos adicionales a los que se derivan del mismo texto constitucional, y sus facultades de producción normativa sólo deben desplegarse para darles contenido exacto.

"b) Que la medida legislativa sea la idónea para su realización.

"c) Que sea necesaria, esto es, que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar por otros medios menos restrictivos de derechos humanos (fundamentales).

"d) Que sea proporcional, esto es, que exista una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la restricción, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales."

Esto es, de la transcripción anterior se desprende que el Juez de Distrito reconoce la existencia de los estándares y exámenes que el quejoso hizo valer en el quinto concepto de violación.

No obstante lo anterior, el Juez de Distrito omite hacer un examen de escrutinio y proporcionalidad, cuya aplicabilidad él mismo reconoce. Inclusive, omite dar respuesta a cada una de las razones por las que el quejoso dijo que la Política Prohibicionista no superaba los exámenes de escrutinio y proporcionalidad. En efecto, el señor Juez de Distrito aplicó con total laxidad y deferencia al legislador el examen, de forma tal que difícilmente se puede aducir que hubiera aplicado el examen. Esto demuestra una violación al principio de congruencia interna de las resoluciones judiciales. Si el Juez de Distrito anunció que debía aplicar tal examen de escrutinio y proporcionalidad, que es muy similar al que expuso el quejoso, debió de haber realizado tal análisis.

Se puede apreciar que, si el Juez de Distrito hubiera aplicado el examen, conforme a los parámetros por él mismo reconocidos y establecidos, se llegaría indefectiblemente a la conclusión que la Política

Prohibicionista es una restricción a derechos humanos que no supera los exámenes de escrutinio y que, por lo tanto, es inconstitucional.

El Juez de Distrito afirmó, sin fundamento alguno, por ejemplo, que la Política Prohibicionista perseguía un fin constitucionalmente legítimo; que la medida sí era instrumental a la finalidad buscada; que se trata de una medida proporcional; que no afecta derechos de manera innecesaria, y que es la medida menos restrictiva posible. En consecuencia, la sentencia impugnada contraviene el principio de congruencia y exhaustividad, toda vez que omite aplicar fielmente los exámenes de escrutinio y proporcionalidad fijados por la Suprema Corte, cuya existencia es reconocida por la sentencia de amparo, en relación a las normas que restringen derechos humanos.

3.2. APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE ESCRUTINIO Y PROPORCIONALIDAD

Así pues, conviene aplicar el examen de escrutinio o proporcionalidad a la restricción establecida por las normas impugnadas de la Política Prohibicionista. Primero, evaluaremos si la restricción pretende un fin constitucionalmente válido. Segundo, analizaremos si la medida adoptada por el legislador guarda una relación de instrumentalidad o de idoneidad con el fin perseguido. Tercero, apreciaremos si la medida es la alternativa menos restrictiva de los derechos vulnerados y si restringe los derechos vulnerados más de lo estrictamente necesario. Finalmente, se formulará un análisis de proporcionalidad en sentido estricto. Un balance sobre la afectación innecesaria o desmedida a otros bienes jurídicos relevantes.

Seguidamente expondremos el resultado de aplicar el examen de escrutinio y proporcionalidad, poniendo énfasis en las omisiones llevadas a cabo para tal análisis por el Juez de Distrito y señalando aquellos pasos del análisis que el Juez motivó indebidamente. Primero, evaluaremos si la restricción pretende un fin constitucionalmente válido. Segundo, analizaremos si la medida adoptada por el legislador guarda una relación de instrumentalidad o de idoneidad con el fin perseguido. Tercero, apreciaremos si la medida es la alternativa menos restrictiva de los derechos vulnerados y si restringe los derechos vulnerados más de lo estrictamente necesario. Finalmente, se formulará un análisis de proporcionalidad en

sentido estricto. Un balance sobre la afectación innecesario o desmedida a otros bienes jurídicos relevantes.

A. LEGITIMIDAD DEL FIN PERSEGUIDO

Para determinar si el establecimiento de la Política Prohibicionista persigue un objetivo constitucionalmente imperativo, primero debemos discernir y escudriñar el fin o fines que busca la Ley General de Salud al prohibir la siembra, cultivo, elaboración, preparación, acondicionamiento y transporte de Cannabis para el autoconsumo.

El Juez de Distrito aborda tal etapa en los términos siguientes, en la hoja 53 de la sentencia de amparo:

"Pues bien, tal como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión [REDACTED] la finalidad del marco regulatorio para el control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas previsto en la Ley General de Salud, de acuerdo con los distintos procesos legislativos de los preceptos impugnados, es la **protección de la salud y el orden público**.

"Así, al igual que lo hizo la Sala, se estima que tales finalidades son **constitucionalmente válidas**, ya que la protección de la salud no sólo es un objetivo que válidamente puede perseguir el Estado, sino que resulta imperioso desde el ámbito constitucional, al tratarse de un derecho fundamental en el artículo 4o constitucional. De igual forma, perseguir el orden público, entendido como el bienestar de la sociedad en general, resulta válido pues el Estado tiene interés en proteger el conglomerado social, lo cual puede hacer a través de decisiones legislativas o políticas públicas."

El Juez de Distrito define indebidamente cuál es el objetivo de la política prohibicionista. El objetivo es definido por el Juez de Distrito en su nivel más alto de abstracción como la *"protección de la salud y el orden público."* Pero tal afirmación es una exageración que trivializa el objetivo concreto de la política prohibicionista y el objeto del examen de proporcionalidad. El juzgador debe analizar el objetivo concreto de la norma, no así el objetivo general de toda la normatividad de salud.

Vistos en su nivel más elevado de abstracción, hasta las políticas de Estado más deleznales de la humanidad pueden encuadrarse en una finalidad legítima:

1. Japoneses Americanos durante la Segunda Guerra Mundial

Nivel más alto de abstracción:	Seguridad Nacional en tiempos de guerra.
Nivel intermedio de abstracción:	Reducir riesgos asociados con agentes enemigos encubiertos.
Nivel reducido de abstracción (Objetivo Concreto):	Detener en campos de internamiento a todas las personas en EEUU con ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial.

2. Leyes Jim Crow en Estados Unidos de América

Nivel más alto de abstracción:	Salud y orden público
Nivel intermedio de abstracción:	Asegurar la coexistencia pacífica de las distintas razas.
Nivel reducido de abstracción (Objetivo Concreto):	Prohibir las relaciones interraciales; separación de las razas; sometimiento y aislamiento de la comunidad afroamericana.

3. Esclavitud en Estados Unidos de América

Nivel más alto de abstracción:	Fortalecimiento de la economía nacional.
Nivel intermedio de abstracción:	Tutela, adiestramiento y cuidado de la comunidad afroamericana.
Nivel reducido de abstracción (Objetivo Concreto):	Trabajos forzados, sumisión, esclavitud de la comunidad afroamericana.

4. Nativos Americanos

Nivel más alto de abstracción:	Consolidación territorial y soberanía de EEUU.
Nivel intermedio de abstracción:	Reubicación geográfica de pueblos originarios americanos a reservas especiales.
Nivel reducido de abstracción (Objetivo Concreto):	Desplazamiento forzoso, exterminio y genocidio de pueblos nativos americanos.

5. Mujeres de solaz

Nivel más alto de abstracción:	Salud y orden público.
Nivel intermedio de abstracción:	Alivio de los impulsos sexuales de los soldados imperiales japoneses.
Nivel reducido de abstracción (Objetivo Concreto):	Secuestro de mujeres en territorios ocupados (Corea, China, Filipinas, Burma, Tailandia, Vietnam, Malasia, Taiwán, Indonesia, Timor del Este) para explotación sexual involuntaria en estaciones de solaz, para uso del Ejército Imperial Japonés.

6. Apartheid en Sudáfrica

Nivel más alto de abstracción:	Paz y seguridad en Sudáfrica
Nivel intermedio de abstracción:	Convivencia separada y pacífica de las diferentes razas.
Nivel reducido de abstracción (Objetivo Concreto):	Sometimiento y aislamiento de la población de raza africana, frente a las minorías blancas del país.

7. Campos de Exterminio en la Segunda Guerra Mundial

Nivel más alto de abstracción:	Salud y orden público
Nivel intermedio de abstracción:	Mantenimiento del mejor estado de salud genético de la población del Tercer Reich.
Nivel reducido de abstracción (Objetivo Concreto):	Aislamiento y exterminio de las comunidades de origen judío, así como otras comunidades minoritarias, en la Europa de la Segunda Guerra Mundial.

En su nivel más alto de abstracción, siempre hay una terminología o eufemismo que puede ser utilizado para justificar cualquier política pública lesiva de derechos humanos. Si se pretende hacer un análisis honesto de las finalidades de una política pública, ésta no puede ser analizada desde su nivel más elevado de abstracción. Lo que un tribunal constitucional debe hacer es analizar cuál es la finalidad concreta y real de la política; en este caso, la finalidad concreta y real de la prohibición categórica y sanción penal de todos los usos de cannabis.

La política prohibicionista y punitiva contra el cannabis también puede ser evaluada en diversos grados de abstracción, tales como los siguientes:

Nivel más alto de abstracción:	Salud y orden público (la suscrita por la sentencia)
Nivel intermedio de abstracción:	Proteger la salud coercitivamente
Nivel reducido de abstracción (Objetivo Concreto):	Prohibir el uso de cannabis, contra la voluntad de sus usuarios. Reprimir actividades que, sin afectar a terceros, realizan diariamente y a conciencia millares de minorías en situación de vulnerabilidad. La detención y encarcelamiento de clases sociales marginales mexicanas por el uso o posesión de cannabis. La imposición coercitiva de un estándar católico sobre cuerpo, sobre lo bueno y lo correcto.

Todas las últimas definiciones son más honestas y concretas del objetivo real de la política prohibicionista. De la apreciación de tales objetivos concretos de la política prohibicionista se puede apreciar que los mismos carecen de una justificación constitucional. Son objetivos inadmisibles en una democracia liberal y plural, que basa su régimen en principios constitucionales y de derechos humanos.

La finalidad de la política prohibicionista no es simplemente proveer la salud, como indebidamente señala el Juez de Distrito. Una reformulación sincera de la política pública bajo análisis no puede utilizar el grado más elevado de abstracción que torne inútil el ejercicio de proporcionalidad o escrutinio.

Pero incluso si utilizamos un grado intermedio de abstracción, la política prohibicionista carece de una justificación legítima en su objetivo. A continuación se ofrecen las razones por las que utilizando como punto de partida un grado intermedio de abstracción la política prohibicionista no contiene un objetivo constitucionalmente válido.

61
3
6

i. **Finalidad de proteger la salud contra la voluntad de los usuarios**

En la exposición de motivos de la Ley General de Salud se señala que la finalidad del Título Duodécimo es la regulación de las adicciones y la farmacodependencia:

"El Título Duodécimo regula las adicciones que actúan más desfavorablemente sobre la salud pública. El tabaquismo y la farmacodependencia.

"(...)

"La iniciativa da también particular importancia al combate del consumo indebido de estupefacientes y sicotrópicos, que se ha convertido en una de las adicciones que representan más graves problemas de salud pública."

De lo expuesto se aprecia que la finalidad de la prohibición categórica a la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación y consumo de Cannabis tiene el objetivo de proteger la salud de los usuarios de cannabis contra su voluntad.

La finalidad objetiva de la norma es la protección de la salud de todo particular en contra de la voluntad de éstos. No es una finalidad legítima para el Estado pretender velar por la salud de los ciudadanos, contra la voluntad de los mismos, a menos que estuvieren en juego derechos de terceros. Al respecto, Manuel Atienza afirma lo siguiente:

"[E]l Estado sí que tiene un deber positivo de velar por la salud y la vida de los ... ciudadanos en general; lo que ocurre es que no puede tomar medidas encaminadas a este objetivo que vayan en contra de la voluntad de los afectados."¹¹

No hay ningún interés legítimo para que el Estado proteja coactivamente la salud de los particulares contra su voluntad, cuando no hay derechos de terceros de por medio. No es legítimo, pues se parte de la premisa que el individuo no tiene la capacidad racional de disponer de su propio cuerpo, su mente y su persona. Así las cosas, podemos concluir que la finalidad de la prohibición a la siembra y preparación de Cannabis para el autoconsumo no es una finalidad constitucionalmente válida. El Estado no

¹¹ "Dossier: Huelga de Hambre de los <<Grapo>>, Derecho y Ética", *La argumentación jurídica en un caso difícil: la huelga de hambre de los presos del Grapo*, Manuel Atienza.

tiene un interés válido en proteger la salud de un individuo contra su voluntad, al no vulnerarse derechos de terceros.

La salud y la obligación del Estado de proveerla es importante, pero proveer servicios de salud de forma coactiva, contra la voluntad del destinatario, no es una obligación para el Estado Mexicano, sino que se le tiene estrictamente prohibido.

A esta conclusión arribó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su Observación general N° 14, en los términos siguientes:

"El derecho del disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)

"(...)

"8. El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genética, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales."¹²

Esto es, dentro del alcance del derecho a la salud no existe una obligación para el Estado Mexicano de proveer servicios de salud en contra de las decisiones y voluntad de sus beneficiarios. Ningún instrumento internacional, ni la interpretación que los órganos competentes para ello han hecho, autoriza la intromisión en las decisiones personales que los particulares toman sobre su cuerpo y su salud.

Es posible discernir, hipotéticamente, algunas situaciones en las que se podría sujetar a particulares a tratamientos de salud forzosos, como cuando de no llevar a cabo tales tratamientos forzosos se pudiera afectar la salud de diversas personas, mediante, por ejemplo, una pandemia. Así, el particular no puede oponerse a que un tratamiento médico o a ser intervenido si dejar de hacerlo pone en riesgo la vida o salud de las masas. No obstante, en el caso concreto, no existe ninguna evidencia científica de que el consumo de marihuana pueda afectar a alguien otro que

¹² Observación general N° 14 (2000). El derecho del disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). 22° período de sesiones, Ginebra, 25 de abril a 12 de mayo de 2000, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Naciones Unidas.

quien la consume. La marihuana es una sustancia cuyo consumo única y exclusivamente genera riesgos de salud para quien la consume. No tiene efectos contagiosos, no puede ser utilizada para dañar a terceros y no puede ser utilizada como arma. En resumidas cuentas, es una simple planta. Así las cosas, es absurdo afirmar que la autorización para su producción o consumo afecte a la "sociedad en general" o que se trate de alguna excepción al derecho a disponer sobre la propia persona y sobre la salud personal.

Si bien proteger la salud es una finalidad importante, proteger la salud contra la voluntad del individuo no lo es. Por el contrario, el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe a los estados a someter a los particulares a tratamientos médico no consensuados. La Política Prohibicionista no pasa el primer paso de los exámenes de escrutinio y proporcionalidad fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Juez de Distrito no interpreta la ley ni formuló un análisis de la finalidad de la Política Prohibicionista contemplada en la Ley General de Salud. En cambio, asume dogmáticamente que la finalidad de la Política Prohibicionista es la "protección de la salud y el orden público". El Juez emplea atajos interpretativos y omite analizar la finalidad de la Política Prohibicionista. Así las cosas, pasa por alto que la finalidad no sólo es proteger la salud, sino también hacerlo contra la voluntad de sus particulares, como se desprende de la Ley General de Salud y de su exposición de motivos, antes citados.

La finalidad concreta de la Política Prohibicionista, no es constitucionalmente válida. Pero incluso si lo fuera, se trata del primer obstáculo de los exámenes de proporcionalidad y escrutinio. La norma adicionalmente debe ser instrumental (o idónea) para alcanzar la finalidad deseada; debe ser necesaria para alcanzar la finalidad propuesta (la alternativa menos restrictiva y que no restrinja más allá de lo estrictamente necesario), y finalmente, debe ser proporcional en estricto sentido, la persecución de un objetivo constitucionalmente legítimo no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.¹³

¹³ RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Novena Época; Registro, 169209; Instancia, Primera Sala; Tesis Aislada;

B. INSTRUMENTALIDAD MEDIO-FIN / IDONEIDAD

Las normas emitidas por el legislador, con el propósito de restringir derechos fundamentales, como es el caso de la prohibición al autoconsumo de cannabis, deben ser instrumentales para conducir al objetivo que el legislador quiere alcanzar. Este análisis sobre instrumentalidad ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos siguientes:

En el primer examen se dispuso que "[p]ara que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: ... b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización..."¹⁴

Finalmente, el tercer examen aduce que "...es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador; es necesario ... constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido."¹⁵

Esto es, se debe analizar si la medida -la prohibición al consumo de Marihuana- es un medio apto para conducir al fin u objetivo de proteger la salud y combatir las adicciones.

Al respecto, el Juez de Distrito afirma lo siguiente:

"Así, en cuanto a la idoneidad de la medida, en el precedente de la Primera Sala invocado previamente, determinó que el examen relativo *"presupone la*

Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVIII, Julio de 2008; Materia, Constitucional; Tesis, 1a. LXVI/2008; pág. 462.

¹⁴ RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Novena Época; Registro, 169209; Instancia, Primera Sala; Tesis Aislada; Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVIII, Julio de 2008; Materia, Constitucional; Tesis, 1a. LXVI/2008; pág. 462.

¹⁵ IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. Novena Época; Registro, 174247; Instancia, Primera Sala; Jurisprudencia; Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo, XXIV, Septiembre de 2006; Materia, Constitucional; Tesis, 1a./J. 55/2006, y página: 75.

existencia de una relación empírica entre la intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busca el legislador". Al respecto, precisó que la idoneidad de los preceptos reclamados para perseguir los fines constitucionales previamente, se acredita en la medida en que exista una relación empírica que vincule al consumo de la marihuana con daños y afectaciones a la salud y al orden público, en relación con lo cual, es importante atender a las conclusiones a las que llegó la Sala:

- "Si bien la evidencia médica muestra que el consumo de marihuana puede ocasionar daños a la salud, se trata de afectaciones que pueden calificarse como no graves, siempre y cuando, los consumidores no sean menores edad.
- "Los consumidores de marihuana no califican necesariamente como farmacodependientes, existe un bajo grado de probabilidad de que la marihuana produzca dependencia, la posibilidad de que el consumo desencadene la dependencia está sujeto a factores preexistentes como son desórdenes conductuales y de personalidad.
- "Las implicaciones sobre la salud y las consecuencias sociales reportadas por quienes buscan controlar su consumo son mucho menos severas que aquellas reportadas por personas adictas a otras sustancias, como el opio o el alcohol.
- "La marihuana tiene un nivel de incidencia muy bajo en el consumo de otras drogas más riesgosas.
- "El consumo de marihuana no es un factor determinante en la comisión de crímenes, pues la correlación es estadísticamente muy pequeña para considerarse significativa.
- "La marihuana por sí misma no induce la comisión de delitos violentos, pues el consumo de marihuana inhibe los impulsos de agresión del usuario, ya que generalmente produce estados de letargo, somnolencia y timidez.
- "El consumo de marihuana disminuye las habilidades necesarias para manejar automóviles y, por tanto, aumenta las probabilidades de causar accidentes viales; sin embargo, la disminución de las habilidades para conducir cuando se consume marihuana son más variables que cuando se ingiere alcohol, pues sus efectos están sujetos a factores como la dosis, la tolerancia desarrollada por consumo frecuente, entre otros.

"De lo anterior, se advierte que no existe evidencia científica concluyente en el sentido que el consumo de la marihuana causa afectaciones graves a la salud, pero sí datos de los que se desprende que tal sustancia ocasiona daños de menor grado a la salud y al orden público, información que coincide con los datos aportados por la autoridad responsable, en el sentido

que el cannabis entraña un riesgo muy bajo de causar la muerte, pero que la intoxicación con dicha sustancias puede generar riesgo de ansiedad, deterioro de la atención y memoria, disforia, mayor disposición a sufrir accidentes y traumatismos, náuseas, pánico y paranoia.

"Bajo tal razonamiento, es posible concluir que las normas reclamadas contribuyen en algún modo y algún grado a lograr el propósito que busca el legislador, por lo que es posible concluir que tal medida resulta idónea."

Las afirmaciones del Juez de Distrito se encuentran indebidamente fundadas y motivadas. No aplica el estándar de análisis que el mismo invoca. El estudio sobre idoneidad o instrumentalidad es un análisis empírico de medios. En esta etapa no se debe analizar si los daños son altos o bajos, probables o improbables. En cambio, se debe analizar si las medidas adoptadas por el legislador son tales que reduzcan tales daños. Se trata del análisis que para Aharon Barak es el examen de *Conexión Racional* (*Rational Connection*) y para la jurisprudencia Norte Americana son exámenes de *"Relación Substantial"* (*"Substantial Relation"*). Así las cosas, el estudio de los daños plausibles constatados por la ciencia es una afirmación gratuita que nada tiene que ver con el examen de instrumentalidad o idoneidad.

La sentencia de amparo se encuentra indebidamente fundada y motivada, en relación al estándar de idoneidad, por dos motivos: primero, la sentencia se equivoca en la acepción o estándar de instrumentalidad que se debe utilizar. Segundo, en lugar de analizar si la medida es instrumental, analiza de nueva cuenta si persigue un objetivo legítimo.

1. Grado de conexión, para el análisis de la instrumentalidad

El Juez de Distrito se equivoca sobre cuán instrumental debe ser la política pública, medio-fin, para superar el estándar. No es suficientemente que la política pública *"esté potencialmente conectada con la consecución de tales objetivos"*,¹⁶ sino que debe estar *"directamente conectada"*¹⁷ al objetivo perseguido. Al respecto, el Juez de Distrito sostiene lo siguiente en la hoja 55 de la sentencia de amparo:

"Bajo tal razonamiento, es posible concluir que las

¹⁶ Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria del

¹⁷ *Idem.*

normas reclamadas contribuyen en algún modo y algún grado a lograr el propósito que busca el legislador, por lo que es posible concluir que tal medida resulta idónea."

(Énfasis agregado)

Así, es evidente que el Juez de Distrito pretende utilizar un estándar inferior al adoptado reiteradamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es suficiente que sea simplemente "*posible*" que la medida sea instrumental, o que tenga una aportación marginal, sino que debe acreditarse que sí contribuya efectivamente al objetivo perseguido. En otras palabras, cuando se restringen derechos humanos, se debe acreditar que la medida que los restringe al menos sea instrumental para asegurar el objetivo pretendido. No es suficiente que la medida sea *posible*, también debe ser *probable*.

Al respecto, Aharon Barak, Ministro de la Corte Suprema de Israel, define el examen de instrumentalidad (por él llamado examen de *conexión racional*) en los términos siguientes:

"El examen de *Conexión Racional* es un examen empírico. Formula una pregunta empírica en relación a la habilidad de los medios utilizados por la norma restrictiva para avanzar o realizar el objetivo pretendido."¹⁸

De modo que el Juez de Distrito echa mano de un estándar sumamente laxo de idoneidad, que no corresponde al establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por la jurisprudencia constitucional comparada. Peor aún, el Juez de Distrito utiliza un estándar que legitimaría prácticamente cualquier actuación del Estado, por más improbable fuera que alcanzara los objetivos del mismo.

2. Análisis de medios vs. Importancia del objetivo perseguido

Cuando el Juez analiza si el cannabis genera algún daño a la salud, realmente está llevando a cabo, de nueva cuenta, la primera etapa de los exámenes de escrutinio. Está analizando si el objetivo es legítimo,

¹⁸ Aharon Barak, *Proportionality, Constitutional Rights and Their Limitations*, Cambridge University Press, 2012, pág. 307. Traducción propia: "The rational connection test is a factual test. It asks an empirical question regarding the ability of the means used by the limiting law to advance or realize the proper purpose."

admisible o importante para el estado. No así, si la medida adoptada es un instrumento que asegura en cierto modo el bien tutelado.

El análisis sobre daños asociados con el uso de cannabis es un análisis sobre si es importante disuadir o impedir su uso. Nada tiene que ver con si las medidas adoptadas logran su cometido. Los daños reales ocasionados por el cannabis atienden a la discusión de si es importante regularla, no así a la discusión de si la política sirve, es idónea o instrumental para disuadir su uso. Tal extremo se desprende con claridad de la doctrina constitucional comparada en materia de exámenes de escrutinio y de exámenes de proporcionalidad. En efecto, el Juez de Distrito confunde su tarea en esta etapa del examen de escrutinio o de proporcionalidad. Como consecuencia de ello, omite responder por completo las siguientes preguntas asociadas con la idoneidad de la medida:

- ¿La medida adoptada por el Estado incide en las tasas de prevalencia en el uso de cannabis?
- ¿Las personas sancionadas a propósito de la política prohibicionista han dejado de consumir cannabis o mejoraron en salud personal?
- ¿Si la política prohibicionista y punitiva fuera substituida por una política de reducción de daños se modificarían las tasas de consumo?

Todas son preguntas relevantes que se deben atender para analizar la instrumentalidad de la medida. Sólo así posible determinar si la restricción al derecho fundamental al derecho en juego es constitucionalmente válida. No obstante, el Juez de Distrito hace caso omiso de los precedentes y doctrina constitucionales y reitera, sin más ni más, que el uso de cannabis sí genera algunos daños, si bien menores, a la salud.

Los argumentos sobre instrumentalidad e idoneidad que omitió estudiar el Señor Juez de Distrito a quo son los siguientes:

Partamos de la base que el consumo de Cannabis sí aumenta el potencial riesgo de una afectación a la salud de la persona y que, habida cuenta de un uso reiterado y habitual, puede conducir a la dependencia en el consumo. Pero eso no es suficiente para que haya instrumentalidad en la

política pública adoptada por el Congreso. En adición a la existencia de un riesgo de daño o vulneración de un bien jurídico tutelado, la medida adoptada (la Política Prohibicionista) debe tener una relación instrumental, medio-fin, para reparar el daño o lesión que se pretende evitar o corregir. A continuación se expone cómo la Política Prohibicionista no es instrumental para mejorar la salud personal, cómo la despenalización no genera un mayor consumo y cómo el consumo de marihuana no necesariamente genera un daño a la salud. Respecto de todos estos puntos la Sentencia de Amparo guarda silencio y asume dogmáticamente que la política sí asegura una mejora en la salud de la población en general.

1. La prohibición no es un medio para mejorar la salud

La Política Prohibicionista no es instrumental, pues tras varios años de su implementación, no solo no se ha disminuido el consumo de Cannabis, sino que, por lo contrario, el mismo se ha aumentado. De hecho, como las pruebas en el expediente lo acreditan, los lugares con mayor prevalencia en el uso de cannabis son los centros penitenciarios del país, donde hasta el 95% de los detenidos son usuarios.

Para analizar si la prohibición a la siembra y consumo de Marihuana combate los riesgos a la salud generados por el consumo de la misma, parece apropiado remitirnos al estudio formulado por la Fundación Beckley, que concluyó lo siguiente:

"Hay variaciones en el tiempo en los índices de consumo de cannabis entre países, pero esas variaciones no parecen verse afectadas por la probabilidad de arresto o sanciones por uso o cantidad, sin importar cuán draconianas sean las medidas."¹⁹

"Ha habido esfuerzos constantes para disuadir el uso de cannabis, mediante la prohibición y de policía. Esfuerzos para instrumentalizar la prohibición se han concentrado en el arresto de los consumidores. En los países desarrollados, con grandes poblaciones de consumidores de cannabis, las sanciones penales impuestas por posesión y consumo son usualmente modestas, en comparación con las que sería posible implementar. Más aún, la probabilidad de ser arrestado por un incidente relacionado con el uso de cannabis es en rango o menor de uno por cada mil. El

¹⁹ *Ibidem* pág. 179.

esfuerzo prohibicionista no ha tenido mucho éxito para disuadir el consumo.²⁰

En el mismo sentido, el Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, denominado "Guerra a las Drogas", de junio de 2011, dispuso la siguiente conclusión:

"Los líderes políticos y las figuras públicas deberían tener el coraje de articular públicamente lo que muchos de ellos reconocen en privado: que la evidencia demuestra de manera abrumadora que las estrategias represivas no resolverán el problema de las drogas, y que la guerra a las drogas no ha sido y no puede ser ganada. Los gobiernos tienen el poder de llevar a cabo una combinación de políticas que sean apropiadas para sus propias situaciones, y manejar los problemas causados por los mercados de drogas y el uso de drogas de una manera que tenga un impacto mucho más positivo sobre el nivel del crimen relacionado así como sobre los daños sociales para la salud."²¹

DE LA FEL
JEF. DE DIV. DE AC.
SECCION DE AMPAROS

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, también se ha pronunciado al respecto. En el fallo Bazterrica 308:1392, del 29 agosto 1986, dispuso lo siguiente:

"[N]o se encuentra aprobado, ni mucho menos, que la prevención penal de la tenencia, y aun de la adicción, sea un remedio eficiente para el problema que plantean las drogas."

Esto es, no se puede sostener razonablemente que la Política Prohibicionista sea un medio adecuado objetivamente destinado a reducir y combatir los riesgos a la salud generados por el consumo de Cannabis. La prohibición a la siembra, transporte, posesión y consumo para el autoconsumo de Cannabis no reduce el consumo de Cannabis, ni reduce riesgo alguno que se pudiera generar por su consumo.

En el mismo sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria del amparo en revisión [REDACTED] sostuvo lo siguiente:

"Si la relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria introducida por el legislador y el fin que éste pretende alcanzar no es clara, o si se llega a la

²⁰ *Ibidem*, pág. 180.

²¹ Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, "Guerra a las Drogas", junio 2011, pág. 10.

conclusión de que la medida es patentemente ineficaz para conducir al fin pretendido, será obligado concluir que la medida no es constitucionalmente razonable.

"De modo similar, será necesario determinar que la medida legislativa esté directamente conectada con la consecución de los objetivos constitucionales de envergadura antes mencionados, que sea realmente útil para su consecución, sin que pueda considerarse suficiente que esté potencialmente conectada con la consecución de tales objetivos."

En otras palabras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la medida adoptada debe ser un medio eficaz para la consecución del objetivo constitucionalmente válido que pretende perseguir el legislador.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó categóricamente que la Política Prohibicionista ha sido inefectiva en reducir el número de usuarios de Cannabis en el territorio nacional:

"Como ya se explicó, la prohibición del consumo de marihuana no ha reducido el número de consumidores y, en consecuencia, tampoco ha disminuido los daños a la salud asociados al consumo."²²

Así las cosas, si la política no reduce el número de consumidores, como tampoco impide el incremento de los mismos; de ahí que los artículos impugnados no constituyen un medio siquiera remotamente adecuado para evitar los riesgos a la salud que puede generar el consumo de Cannabis ni para combatir las adicciones.

No es suficiente que la Ley General de Salud tenga la finalidad de proteger la salud y combatir las adicciones, o que el uso de cannabis sí genere algunos riesgos menores a la salud, sino que la medida debe ser, de hecho, un medio mínimamente efectivo para conseguir esos fines. En otras palabras, no es suficiente que haya ciertos riesgos distantes asociados al uso crónico de cannabis, sino que además la medida adoptada para el Estado debe, de alguna forma, reducir tales riesgos potenciales. Lo que no sucede en el caso concreto, pues, como ya se mencionó, el número de

²² Evaluación de la necesidad de la medida impugnada. Amparo en Revisión resuelto el 4 de noviembre de 2015, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocando a su vez a Pérez Correa, Catalina, "Delitos contra la salud y (des)proporcionalidad en la legislación mexicana", en Pérez Correa, op. cit., p. 196.

consumidores de Cannabis en México no disminuye, sino que ha aumentado considerablemente en los últimos años, como se desprende de las siguientes estadísticas oficiales publicadas por la Encuesta Nacional de Adicciones 2011:

1. Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, el consumo de Marihuana a nivel nacional entre adultos de entre 18 y 34 años ha aumentado de 1.0% de la población en el año 2000 a 1.9% de la población en el 2011,²³
2. Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, el consumo de Marihuana a nivel nacional entre adultos de 35 a 65 años ha aumentado de 0.2% de la población en el año 2000 a 0.6% de la población en el año 2011.²⁴

A mayor abundamiento, la política prohibicionista no mejora la salud ni siquiera en aquellas personas que ya fueron sujetadas a una sanción de índole penal asociada con el uso de cannabis. Las personas sancionadas no han dejado de consumir cannabis dentro de prisión. En otras palabras, si fuera cierto que el cannabis genera un daño a la salud, sus usuarios siguen expuestos a tal daño a la salud aun dentro de prisión.

Las pruebas ofrecidas por Cofepris acreditan el mismo extremo. A decir de Cofepris las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios casi en su totalidad son usuarios de diversos estupefacientes y psicotrópicos:

"[E]l Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, se ha pronunciado al respecto, señalando lo siguiente:

"95 por ciento de los reclusos en centros penitenciarios del país son consumidores de algún enervante, y sólo 40 por ciento de ellos usaban dos sustancias en promedio antes de ser apresados, mientras que el resto empezó su consumo en la cárcel."²⁵

De modo que la propia autoridad reconoce que ni siquiera deteniendo e internando en centros penitenciarios a tales usuarios de

²³ Encuesta Nacional de Adicciones 2011, pág. 43

²⁴ *Ibidem*, pág. 44

²⁵ Informe Justificado de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

cannabis se mejora su salud, ni se previene que utilicen cannabis. Aquellos que no son usuarios de cannabis terminan por serlo cuando son internados en centros penitenciarios. Se puede apreciar, entonces, que la política prohibicionista no reduce el índice de consumo, sino que lo aumenta.

Así pues, la sentencia deja sin atender los argumentos del quejoso sobre la falta de instrumentalidad o idoneidad de la Política Prohibicionista y, en consecuencia, se transgreden los principios de congruencia externa y exhaustividad.

En conclusión, no es plausible sostener que la Política Prohibicionista a la siembra, cultivo, preparación, posesión y demás conductas relacionadas con el autoconsumo de Cannabis, prevista en los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247 en su último párrafo y 248, sea un medio eficiente para proteger la salud y, mucho menos, para combatir las adicciones. Los informes de la Fundación Beckley, de la Comisión Global de Políticas de Drogas, la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, así como el informe justificado de Cofepris y los demás artículos académicos ofrecidos por el quejoso son prueba irrefutable del ineffectividad y fracaso de la Política Prohibicionista. Así las cosas, la Política Prohibicionista no cumple con el segundo estándar de escrutinio y proporcionalidad. No es un instrumento, medio-fin, para alcanzar los fines esperados por la legislatura.

ii. La descriminalización del consumo de Marihuana no genera mayor consumo

Pruebas estadísticas sólidas (Encuesta Nacional de Adicciones 2011) y estudios empíricos de la más alta sofisticación (el de la Beckley Foundation y el de la Comisión Global de Políticas de Drogas) han concluido que la Política Prohibicionista no es un medio que instrumentalmente reduzca el número de personas que consumen Cannabis ni sirve para combatir las adicciones. A continuación se proporcionan razones empíricas que demuestran que en la experiencia comparada la despenalización del consumo de Cannabis tampoco tiene por efecto un incremento en el número de consumidores de la misma. Pruebas que el Juez de Distrito tampoco toma en cuenta. En ese tenor, el estudio Cannabis Policy: Moving Beyond Stalemate, formulado por la Fundación Beckley, determina lo siguiente:

"(...) la evidencia de los estudios evaluativos es que remover o reducir las sanciones para uso o posesión parece no tener efectos en las tasas de consumo."²⁶

"(...) Medidas para reducir sanciones o para descriminalizar la posesión y uso han sido adoptadas en numerosas jurisdicciones sin un incremento significativo en el uso. Adicionalmente, estas reformas han tenido éxito en mejorar las consecuencias negativas del prohibicionismo."²⁷

Esto es, la experiencia comparada antes citada nos demuestra que la regulación del consumo de Marihuana no tiene ningún efecto sobre el número de consumidores de Cannabis. Así, el temor de que un mayor número de personas consuman Cannabis no es razón para establecer prohibiciones categóricas, con sanciones penales. En efecto, diversos estudios han puesto en evidencia que la reducción o eliminación de sanciones no tienen ningún efecto en el índice de consumo.

Esto conduce a la conclusión de que la Política Prohibicionista es completamente irrelevante para el problema de riesgos de salud que se pudiera generar por el consumo de Cannabis. La Política Prohibicionista no ha disminuido el número de consumidores, no ha impedido que los consumidores aumenten y, a su vez, la ausencia de la Política Prohibicionista no implicaría un aumento en el número de consumidores.

Esta conclusión se fortalece por las pruebas que obran en el expediente. Entre las pruebas ofrecidas por el quejoso se encuentran los siguientes artículos académicos:

1. "Políticas posibles para la legalización del cannabis: las ocho "P" como punto de partida". Beau Kilmer, PhD, *Policy Designs for Cannabis Legalization*. Centro de Investigación de Políticas sobre Drogas (Drug Policy Research Center), *The American Journal of Drug and Alcohol Abuse*, v. 40, no. 4, julio 2014, p. 259-261.

Tal artículo demuestra que si la legalización del cannabis es positiva o negativa para la salud y la seguridad pública depende en gran medida de decisiones de índole regulatoria y el modo en que estas se implementen. Este ensayo presenta ocho de estas alternativas de diseño, que casualmente en inglés comienzan todas con la letra "P":

²⁶ Amanda Feilding Conyner, *op.cit.*, pág. 173.

²⁷ *Ibidem*, 180.

producción (production), fin de lucro (profit motive), promoción (promotion), prevención (prevention), potencia (potency), pureza (purity), precio (price) y permanencia (permanency). De modo que el grado de incidencia asociado con la regulación del cannabis depende, no de su regulación o prohibición, sino del modelo regulatorio que se adopte.

La simple despenalización no es suficiente para concluir que había una afectación en la salud de la población. Habría que analizar, en todo caso, la regulación adoptada por cada Estado o el modo en que es concedido el amparo.

2. "Impacto de las leyes estatales sobre marihuana medicinal en el uso de marihuana entre adolescentes". Esther K. Choo, M.D., M.P.H., Madeline Benz a, Nikolas Zaller, Ph.D. b, Otis Warren, M.D. c, Kristin L. Rising, M.D. d y K. John McConnell, Ph.D. *The Impact of State Medical Marijuana Legislation on Adolescent Marijuana Use. Journal of Adolescent Health*. 55(2), abril 2014.

No hay diferencias estadísticas significativas en el uso de marihuana antes y después de un cambio de políticas en ninguno de los estados (EEUU). En el análisis de regresión, no observaron una mayor probabilidad general de uso de marihuana asociado con el cambio de políticas.

De modo que se puede predecir que habida cuenta de una regulación adecuada de reducción de daños y de prevención, no habría razones para que hubiera una mayor prevalencia en el uso de cannabis si en México también se regulara el acceso a la planta para uso personal. En términos de los exámenes de escrutinio y proporcionalidad para las normas que restringen derechos humanos, esta prueba se debe emplear para concluir que la política prohibicionista no es medio adecuado, instrumental o idóneo, para reducir o evitar un incremento en la prevalencia en el uso de cannabis.

3. Finalmente, el artículo "Efectos de las Leyes Estatales sobre Cannabis Medicinal respecto al Consumo de Cannabis por parte de Adolescentes" Lynne-Landsman, S. D., Livingston, M. D., III, & Wagenaar, A. (2013). *Effects of state medical marijuana laws on*

adolescent marijuana use. American Journal of Public Health, 103, 1500 - 1506. DOI: 10.2105/AJPH.2012.301117.

Este artículo acredita que tampoco las leyes sobre cannabis para uso médico han afectado de una manera medible el consumo de cannabis por parte de adolescentes durante los primeros años de su promulgación.

En otras palabras, los índices de consumo de Cannabis son independientes de que haya o no una Política Prohibicionista al consumo de Cannabis. La Política Prohibicionista es un factor contingente e irrelevante para los índices de consumo de Cannabis. Esto es, se trata de una política pública que incumple con el segundo requisito de escrutinio. En resumen, es una política que no es instrumental para afrontar un problema de salud y que no combate adicción alguna.

Respecto a este punto, el Juzgado de Distrito guarda silencio. Se vulnera el principio de congruencia externa y exhaustividad, toda vez que no analizan los argumentos vertidos por el quejoso en relación a que sin la Política Prohibicionista no se generaría menor consumo de estupefacientes y que sin la misma tampoco habría un aumento en el consumo. Se hace caso omiso sobre la entera irrelevancia de la Política Prohibicionista para reducir o incidir en el grado de consumo de Marihuana en México.

iii. *El consumo de Marihuana no genera un daño a la salud, sino un mero riesgo de daño a la salud*

Por otro lado, los informes de la Fundación Beckley, antes citados, concluyen que el consumo de Cannabis genera un riesgo de daño a la salud. Esto es, que el consumo de Cannabis puede generar un daño a la salud, pero que no necesariamente lo hace. El Máximo Tribunal se pronunció sobre ese mismo punto en los términos siguientes:

"[L]a marihuana no supone un riesgo importante para la salud de las personas mayores de edad, toda vez que sus consecuencias permanentes son poco probables, mínimas o reversibles si su consumo no se inicia a edades tempranas."²⁸

²⁸ Amparo en Revisión [REDACTED] resuelto el 4 de noviembre de 2015, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para llegar a tal conclusión, la Corte invoca a su vez, entre otros más, los siguientes artículos académicos:

77
26175

Si el consumo de Marihuana no necesariamente genera un daño a la salud, una medida para evitar su consumo no necesariamente protege a los individuos de una afectación en su salud.

El efecto inmediato generado por el consumo de Cannabis (de conciencia alterada) no es un daño a la salud. La única manera de suponer que la Marihuana genera un daño a la salud, de forma inmediata y directa, es suponer que el cuerpo es algo sagrado que debe ser protegido de toda alteración, cambio de percepción, de ánimo, de estado de conciencia y de comportamiento. Pero el cambio de estado de conciencia no puede bajo óptica alguna ser considerado una afectación a la salud. Sobre los efectos inmediatos de intoxicación relacionados al consumo de cannabis y de si estos pueden ser considerados un daño a la salud ya se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de una evaluación de la literatura científica en la materia, en los términos siguientes:

"Las alteraciones temporales ocurren como consecuencia inmediata del consumo de la marihuana. Algunos de los efectos que pueden generar son pánico, reducción de la ansiedad, estado de alerta, tensión, incremento de la sociabilidad, reducción gradual de funciones cognitivas y motoras, percepciones intensificadas de la realidad —colores, sabores, sensaciones— o alucinaciones visuales y/o auditivas. Así, al tratarse de efectos que dependen del estado de intoxicación que produce la marihuana, las

1. Fischer, Benedikt, Jeffries, Victoria, Hall, Wayne, Room, Robin, Goldner, Elliot, Rehm J., "Lower Risk Cannabis Use Guidelines for Canada (LRCUG): A Narrative Review of Evidence and Recommendations", *Canadian Journal of Public Health*, vol. 102, núm. 5, 2011, p. 326;
2. Hall, Wayne, "The Adverse Effects of Cannabis Use: What Are They, and What Are Their Implications For Policy", *International Journal of Drug Policy*, 2009, vol. 20, pp. 458-466.
3. Hall, Wayne, y Degenhardt, Louisa, "The Adverse Health Effects of Chronic Cannabis Use", *Drug Testing and Analysis. Special Issue: Cannabinoids part II: The Current Situation With Cannabinoids*, vol. 6, núms. 1-2, 2013, pp. 39-45;
4. Ashton, Heather, "Pharmacology And Effects of Cannabis: A Brief Review", *The British Journal of Psychiatry*, vol. 178, núm. 2, 2001, pps. 104-105.
5. Douaihy, Antoine, "Cannabis Revisited", *UPMC Synergie*, 2013, pps. 1-9, p. 3.
6. Mehra, Berthiller, Julien, Straif, Kurt, Boniol, Mathieu; Voirin, Nicolas; Benhaim-Luzon, Veronique; Ayoub, Wided Ben, Dari, Iman, Laouamri, Slimane, Hamdi-Cherif, Mokhtar, Bartal, Mohamed, Ayed, Fehrat Ben, y Sasco, Annie, "Cannabis Smoking and Risk of Lung Cancer in Men: A Pooled Analysis of Three Studies in Maghreb", *Journal of Thoracic Oncology*, 2008, vol. 3, núm. 12, pps. 1398 y 1401;
7. Reena, Moore, Brent A., Crothers, Kristina, Tetrault, Jeanette; Fiellin, David A., "The Association Between Marijuana Smoking and Lung Cancer. A Systematic Review", *Archives of Internal Medicine*, vol. 166, 2006, pp. 1359-1367;
8. Hashibe, Mia, Morgenstern, Hal, Cui, Yan, Tashkin, Donald P., Zhang, Zuo-Feng, Cozen, Wendy, Mack, Thomas M., y Greenland, Sander, "Marijuana Use and the Risk of Lung and Upper Aerodigestive Tract Cancers: Results of a Population-Based Case-Control Study", *Cancer, Epidemiology, Biomarkers & Prevention*, vol. 15, núm. 10, 2006, pp. 1829-1834, p. 1829.

50

investigaciones indican que son reversibles y no representan un riesgo demostrado para la salud.²⁹

Como se desprende de la literatura anterior, los efectos inmediatos de intoxicación del uso de Cannabis no implican un daño a la salud. Por otro lado, las afectaciones a largo plazo o crónicas asociadas con el consumo de cannabis son inciertas y altamente discutidas en la literatura científica.

En este sentido, la Política Prohibicionista no cumple con el segundo estándar de escrutinio. No es una medida instrumental, medio fin, para alcanzar los fines esperados por la norma, toda vez que no se acredita que el consumo de Cannabis necesariamente genera un daño a la salud y, por lo tanto, la Política Prohibicionista no está ligada a la solución de una afectación en la salud.

En conclusión, la Política Prohibicionista no cumple con el segundo estándar de escrutinio. No es una medida instrumental, medio fin, para alcanzar los fines esperados por la norma, toda vez que no se acredita que el consumo de Cannabis necesariamente genera un daño a la salud, sino un mero riesgo de daño; no hay una relación entre la política prohibicionista y el número de personas que consumen Cannabis, y la política no reduce el número de consumidores o, al menos, impide el incremento de los mismos. Esto es, los artículos impugnados no constituyen un medio siquiera remotamente adecuado para evitar los riesgos a la salud que puede generar el consumo de Marihuana ni para combatir las adicciones.

De lo anterior se desprende que la sentencia impugnada contraviene los principios de debida fundamentación y motivación, toda vez que aplica indebidamente el estándar de instrumentalidad en las medidas que restringen derechos humanos, fijado por la Suprema Corte, y omite analizar los argumentos vertidos por el quejoso.

²⁹ Amparo en Revisión [REDACTED] dictado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 4 de noviembre de 2014, citando a Ashton, Heather, "Pharmacology And Effects of Cannabis: A Brief Review", *The British Journal of Psychiatry*, vol. 178, núm. 2, 2001, pps. 104-105. Citando también Douaihy, Antoine, "Cannabis Revisited", *UPMC Synergie*, 2013, pps. 1-9, p. 3.

79
5176

**C. ANÁLISIS DE NECESIDAD: MEDIO MENOS
RESTRICTIVO Y RESTRICCIÓN DE LO EstrictAMENTE NECESARIO**

El tercer paso del examen que se debe hacer respecto de las medidas emitidas por el legislador ordinario, con el propósito de restringir derechos fundamentales, es un examen de necesidad. Partiendo de los precedentes judiciales enunciados en párrafos precedentes, el análisis de necesidad implica lo siguiente: "[p]ara que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: ...que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales."³⁰



LA FEDERACIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALSA
FALSA DE ACUERDO

Por su parte, la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó los pasos a seguir en esta etapa en los términos siguientes:

"[E]l examen de necesidad implica corroborar, en primer lugar, si existen otros medios con un grado de idoneidad igual o superior para lograr los fines que se persiguen y, en segundo lugar, determinar si estas alternativas intervienen con menor intensidad el derecho fundamental afectado. El primer aspecto del test de necesidad es de gran complejidad, toda vez que supone hacer un catálogo de medidas alternativas y determinar el grado de idoneidad de éstas, es decir, evaluar su nivel de eficacia, rapidez, probabilidad y afectación material de su objeto."³¹

En otras palabras, para que las medidas adoptadas por el legislador cumplan con el estándar de necesidad se deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que la finalidad perseguida no se pueda alcanzar por medios menos restrictivos. Esto es, que la política pública constituya el medio menos restrictivo.
2. Que no se afecte en los derechos más allá de lo estrictamente necesario.

³⁰RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Novena Época; Registro, 159209; Instancia, Primera Sala; Tesis Aislada; Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVIII, Julio de 2008; Materia, Constitucional; Tesis, 1a. LXVI/2008; Página 462.

³¹ Amparo en Revisión [REDACTED] resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 4 de noviembre de 2015.

Es menester señalar que en los precedentes jurisprudenciales norteamericanos se han desarrollado otros dos criterios útiles para implementar el examen de proporcionalidad, a saber: la "excesiva inclusión" y la "insuficiente inclusión". El primero se refiere a que la norma no es adecuada si incluye en su supuesto casos que no debería de cubrir según el fin que se busca satisfacer con la misma. Esto es, que la norma no debe restringir el derecho en juego más allá de lo estrictamente necesario para su fin. El segundo concepto, el de "insuficiente inclusión", se refiere a lo contrario. Dispone que la norma no debe prever menos casos de los que debieran estar contemplados para alcanzar la finalidad que se busca con la regulación. Estos dos conceptos no son ajenos a los tribunales mexicanos.

El análisis de necesidad consiste en evaluar si la Política Prohibicionista a la siembra, cultivo, preparación, posesión y demás conductas relacionadas con el autoconsumo de Cannabis, en los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247 en su último párrafo y 248, está confeccionada a la medida, que no se afecte los derechos restringidos más allá de lo estrictamente necesario y que la medida empleada sea la menos restrictiva posible.

Al respecto, el Juzgado de Distrito afirma indebidamente que la medida sí es necesaria, pues sin ella se frustraría el objetivo de la Ley General de Salud. Esto es, que el objetivo de la política prohibicionista es tan importante, que mejor no practica la tercera grada del examen:

"Ahora bien, en lo que se refiere al requisito de **necesidad**, debe analizarse si las normas reclamadas constituyen una medida necesaria para proteger la salud y el orden público o si, por el contrario, existen medidas alternativas igualmente idóneas que afecten en menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

"Al respecto, no debe perderse de vista que la finalidad que persigue el Estado consistente en la protección de la salud resulta imperiosa, pues existe una obligación constitucional de garantizar positivamente la salud. Desde ese punto de vista, la determinación de la existencia de una medida alternativa que restrinja en el menor grado posible el libre desarrollo de la personalidad no puede ni debe centrarse de manera exclusiva en dicha libertad individual, pues debe considerarse que las normas pretenden dar eficacia a la dimensión social que tiene la protección de la salud, que impone al Estado el deber de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, entre los cuales se

consideró el consumo de marihuana.

"En ese panorama, no existe una medida igualmente idónea y menos restrictiva que la limitación de los actos consistentes en la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con marihuana, exclusivamente a los fines médicos y científicos, pues si su consumo se ha identificado como un problema de salud pública, resulta justificada la intervención estatal, máxime que el objetivo más amplio de la política de salud, persigue impulsar la protección a todos los mexicanos.

"En este aspecto, no pasa desapercibido que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el precedente citado, consideró que existían medidas menos restrictivas a la prevista en los artículos reclamados, sin embargo, desde el enfoque de salud pública apuntado, que implica una obligación constitucional en la materia, no es posible tomar esas medidas como alternativas.

"En efecto, si se considerara que los artículos en cuestión establecen una medida innecesaria y, por ende, se le otorgara al quejoso la autorización para el desarrollo de las actividades que solicita, se le estaría permitiendo el ejercicio de un derecho sin mayores lineamientos para ello, con los posibles riesgos que pueda implicar en relación con derechos de terceros, al no existir un marco regulatorio legislativo y administrativo que establezca modalidades para su ejercicio, cuando a nivel mundial, dado el impacto que tiene en la salud pública, la legalización del uso recreativo de la marihuana se ha dado mediante procesos de deliberación democrática y con marcos regulatorios integrales que hacen posible el ejercicio de ese derecho²⁶, garantizando así, las mejores condiciones para los usuarios y para terceros.

"Incluso, en el caso, la ausencia de esa estructura normativa conduce a que una eventual concesión de amparo para el efecto que se otorgue la autorización sanitaria al quejoso, por estimar que las restricciones reclamadas es innecesaria, lejos de constituir una reparación efectiva en el goce de los derechos vulnerados, dejaría al promovente en un completo estado de inseguridad jurídica, pues excluyó de su solicitud los actos de comercios y el presupuesto o parte inicial de la cadena de autoconsumo que es la adquisición de la marihuana, no tiene en la actualidad una vía lícita. De manera que, para poder tener los beneficios de la autorización respectiva sería necesaria la comisión de diversos delitos previstos en normas punitivas de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, que no formaron parte de la impugnación del quejoso.

"Así, atendiendo al marco jurídico vigente en el Estado mexicano, las restricciones reclamadas son necesarias para garantizar la protección de la salud y el orden público."

Son tres los argumentos suscritos por el Juez de Distrito:

- a. Que la persecución de la salud por el estado es muy importante y que, como consecuencia, no realizará un análisis de necesidad.
- b. Que el quejoso excluyó de su solicitud los actos de comercio y los necesarios para la obtención inicial de la planta o semilla de cannabis.
- c. Que si se le concediera el amparo y se le autorizara el uso personal de cannabis, podría afectar derechos de terceros.

Los argumentos del Juez de Distrito son irrelevantes a propósito de un análisis de necesidad de una política pública que restringe derechos humanos. A continuación se desvirtúan las razones de la sentencia de amparo:

a. **Supuesta importancia del objetivo pretendido.** Afirma el Juez de Distrito que, si el nivel o importancia del fin perseguido es muy importante, entonces puede omitir llevar a cabo el análisis de proporcionalidad, a partir del cual se analiza si la medida adoptada es la alternativa menos restrictiva.

Los precedentes de la Suprema Corte obligan a que se lleven a cabo los exámenes de escrutinio y proporcionalidad, independientemente de cuán importante sea la finalidad de la restricción llevada a cabo por el legislador. Cumplir con el primer paso del examen, la finalidad importante, no exime de la revisión de los demás pasos de tales exámenes. Así las cosas, se encuentra indebidamente motivada la sentencia de amparo.

b. **Supuesta imposibilidad para obtener la planta inicialmente.** Afirma el Juez de Distrito que el quejoso se encuentra impedido para adquirir la planta o semillas de la misma, pues en su solicitud ante Cofepris omitió requerir un permiso para la importación o adquisición inicial. Tal afirmación se deriva de una inadecuada apreciación

de la solicitud formulada por el quejoso para la obtención de una autorización para el uso de cannabis. La solicitud que generó el acto de autoridad es, en su parte medular, del tenor siguiente:

"Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1°, 4°, 8° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 234, 235, 237, 245, 248 y 368 de la Ley General de Salud, 3° y 14 del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, vengo a solicitar que se me expida autorización para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos del "Cannabis Sativa" (sativa, indica americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol, los isómeros Δ6a (10a), Δ6a (7), Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ9 (11) y sus variantes esterequímicas) (conjuntamente, "Marihuana") consistentes en la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión, transporte de las mismas y la importación y adquisición de la semilla. Esto es, solicito autorización sanitaria para que el peticionario pueda consumir Marihuana regularmente y de la forma personal y con fines meramente lúdicos o recreativos.

"Asimismo, solicito la autorización para ejercer los derechos correlativos al auto-consumo de Marihuana, tales como la importación y adquisición de semillas, siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación, y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana por el peticionario, excluyendo expresamente los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma."

(Subrayado y énfasis añadido)

De la lectura de la solicitud formulada por el quejoso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se desprende que expresamente solicitó autorización para la importación y adquisición inicial de la semilla de cannabis. Entonces, el quejoso no "excluyó de su solicitud los actos de comercio y el presupuesto o parte inicial de la cadena de autoconsumo que es la adquisición de la marihuana." La sentencia de amparo se encuentra indebidamente fundada y motivada sobre ese respecto.

c. **Supuesto a daños de terceros.** El Juez de Distrito afirma que, si se concediera al quejoso el uso de cannabis, podrían generarse daños a terceros. Si el uso de cannabis "genera daños a terceros" descansa en diversa información para la que se requieren conocimientos

científicos. Si para esclarecer tales puntos técnicos no se apela a los especialistas y científicos sobre tal materia, pues entonces el Juez no tiene otra alternativa que basar su resolución en prejuicios sociales y conjeturas sin sustento empírico o científico.

De las pruebas que obran en el expediente se desprende el consumo personal y razonado de cannabis no perturba o afecta las acciones de tercero alguno. Los efectos del cannabis los recibe, exclusivamente, la persona que la consume, sin que haya efecto pernicioso alguno para el resto de la sociedad. La afectación directa la sufre la persona que lo consume. Así las cosas, esa última afirmación también se encuentra indebidamente fundada y motivada.

Abordados los argumentos de la sentencia de amparo, se retoman las razones por las que la Política Prohibicionista no cumple los elementos del análisis de necesidad. En efecto, la finalidad perseguida se puede alcanzar por medios menos restrictivos, y se afectan derechos más allá de lo estrictamente necesario.

1. La Política Prohibicionista no es la alternativa menos restrictiva

Existen diversas alternativas menos restrictivas para alcanzar los fines que pretende perseguir el Estado. Es pertinente destacar las alternativas que otros países han adoptado o que se han utilizado en México para regular otras sustancias, para así contrastarlas con el modelo mexicano de prohibición al autoconsumo de Cannabis y determinar si la medida adoptada por nuestra ley es la menos restrictiva y proporcional entre el fin buscado y la afectación a los derechos humanos de los particulares.

1. Primera Alternativa, modelo holandés

Una primera alternativa para regular el consumo es el de restringir los lugares donde se puede comprar y consumir Cannabis. Se generan espacios donde el Estado tiene más control de la cantidad y calidad de las sustancias que se están consumiendo, pero sin anular el acceso al consumo de Cannabis.³²

³² Este es el modelo de los "Coffe Shops" holandeses.

En palabras de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"En Holanda existe un esquema diferente para la regulación del consumo de marihuana. Aunque en este país nunca se ha legalizado la producción, dicha actividad no se ha supervisado ni sancionado efectivamente. El comercio de la sustancia está restringido a los *coffee shops* —determinados centros de distribución— los cuales están sujetos a reglas muy específicas, como restricciones en las cantidades que pueden almacenar y vender a una persona."³³

(Se excluyen citas internas)

II. Segunda Alternativa, Modelo Uruguayo

Una alternativa para regular el consumo es la adoptada por la República Oriental del Uruguay.³⁴ El modelo del Uruguay es un mixto de producción y regulación por el Estado, así como autorización de producción limitada individual y clubes de consumo bajo inspección del Estado. Algunos rasgos distintivos del modelo Uruguayo son i) que sea el estado quien establezca lineamientos sobre calidad y especificaciones técnicas de producción nacional de cannabis; ii) el control sobre áreas de cultivo y proceso de producción; iii) otorgamiento de licencias y registro de productores de cannabis, y delimitación de los lugares en los que se puede producir; iv) hay clubes de cannabis de entre 15 y 45 miembros, con hasta 99 plantas cada club, y v) se permite una producción individual de hasta 6 plantas por persona.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificó el modelo de Uruguay como un modelo menos alternativo, menos restrictivo, en los términos siguientes:

"En Uruguay, en cambio, el Estado asume plenamente el control y la regulación de la comercialización, producción y distribución de la marihuana. Con todo, también se autoriza el cultivo reducido a un número mínimo de plantas en casas habitación, así como un número mayor en asociaciones que no excedan 45 miembros. También se expiden autorizaciones para productores que a su vez venden la marihuana el

³³ Necesidad de la Medida, Amparo en Revisión [REDACTED] resuelto el 4 de noviembre de 2015, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citando a su vez a Reuter, Peter H., "Marijuana Legalization. What Can Be Learned from Other Countries", Working paper, Drug Policy Research Center, 2010.

³⁴ Ley N° 19.172 "Marihuana y sus Derivados", publicado en el Diario Oficial 7 de enero 2014, de la República Oriental del Uruguay.

85
88

gobierno. En cuanto a su adquisición, una persona puede comprar hasta 40 gramos al mes y un instituto estatal fija el precio de la marihuana. Este instituto también lleva un registro confidencial de consumidores y un registro de productores. Al respecto, cabe aclarar que sólo los ciudadanos uruguayos o residentes permanentes pueden adquirir la marihuana. Por lo demás, está prohibido el cultivo, producción y venta no autorizada ni registrada ante dicho instituto.”³⁵

(Se omiten citas internas)

III. Tercera Alternativa, Tabaco y Alcohol

El exitoso sistema establecido por la Ley General para el Control del Tabaco. Esta ley genera un eficiente sistema de orientación, educación, prevención, producción, distribución, comercialización, importación, consumo y publicidad del tabaco. De igual forma, se protege de manera efectiva la salud de los fumadores de tabaco, informándoles explícitamente de los riesgos inherentes al consumo de cigarrillos, sin caer en el extremo intrusivo de prohibir a cada cual fumar o no.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha reconocido el modelo adoptado para el control Ley General para el Control del Tabaco como un “régimen de permisión controlada” y como alternativa menos restrictiva al adoptado por la Ley General de Salud, en los términos siguientes:

“De acuerdo con la Ley General para el Control del Tabaco, se encuentra estrictamente prohibido la venta, la distribución y el suministro de tabaco a menores de edad; prohibición que se extiende a las instituciones educativas públicas y privadas. Por otro lado, también se prohíbe el consumo de tabaco en los espacios 100% libres de humo de tabaco; escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior; lugares con acceso al público; y en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas. En cambio, la producción y comercio se sujeta a diversas disposiciones administrativas. Finalmente, sólo se permite la publicidad sobre su uso cuando está dirigida a mayores de edad a través de revistas para adultos, correo y dentro de establecimientos de acceso exclusivo para adultos.”³⁶

³⁵ Necesidad de la Medida. Amparo en Revisión [REDACTED] resuelto el 4 de noviembre de 2015, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

³⁶ Necesidad de la Medida. Amparo en Revisión [REDACTED] resuelto el 4 de noviembre de 2015, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo referencia a los artículos 17, 23, 26, 27, así como algunas otras restricciones para productores y vendedores de productos de Tabaco.

(Se excluyen citas internas)

En el mismo sentido, el Máximo Tribunal reconoció al régimen para el control en la venta de bebidas alcohólicas como una alternativa menos restrictiva e invasiva al contenido en la Ley General de Salud para el Cannabis:

"Del mismo modo, la Ley General de Salud establece prohibiciones para expender o suministrar *bebidas alcohólicas* a menores de edad. Como medida de control, la Secretaría de Salud establece además los límites de alcohol en sangre y en aire expirado para conducir automotores y manejar mecanismos, instrumentos, y aparatos o sustancias peligrosas. Respecto a la publicidad del producto, la ley establece que toda bebida alcohólica deberá ostentar en los envases la leyenda "el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud", escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal."³⁷

(Se excluyen citas internas)

iv. *Cuarta Alternativa, Políticas Educativas y de Salud*

Si el Estado Mexicano verdaderamente considera pernicioso para la salud el consumo de Cannabis, puede implementar políticas públicas que reduzcan efectivamente el consumo y que reduzcan los daños relacionados con la política de fiscalización. Incrementar la inversión en investigación y análisis del impacto de diferentes políticas de drogas. Remplazar la criminalización y el castigo de las personas que a conciencia utilizan drogas, por la oferta de servicios de salud y tratamiento para aquellos que los necesitan. Estas, por cierto, son algunas de las recomendaciones de la Comisión Global de Políticas de Drogas.³⁸

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, ahonda en ese punto, en los términos siguientes:

"Ahora bien, es importante señalar que tanto la legalización del consumo de marihuana en otros países, como la permisión del consumo de tabaco y alcohol en México, han ido acompañadas de políticas educativas y de salud. En este sentido, se han implementado diversas campañas de información sobre

³⁷ *Idem.*

³⁸ La Guerra contra las Drogas y el VIH/SIDA: Cómo la criminalización del uso de drogas fomenta la pandemia global. Informe de la comisión global de políticas de drogas, junio de 2012.

los efectos adversos a la salud del consumo de dichas sustancias, así como programas sociales para atender los daños a la salud de las personas que han desarrollado una adicción. Al respecto, puede decirse este tipo de políticas también formarían parte de una medida alternativa a la prohibición que ahora se analiza, la cual consistiría en términos generales en un régimen que sólo limita el consumo de marihuana en determinadas circunstancias y que paralelamente comprende la implementación de políticas públicas educativas y de salud.³⁹

(Se omiten citas internas)

v. Quinta Alternativa, prácticas focalizadas de reducción de daño

Adicionalmente, se pueden implementar políticas de salud para cada uno de los riesgos específicos que genera el consumo de Cannabis, como a continuación se expone:

- Si uno de los únicos riesgos plausibles para terceros es que los consumidores de Cannabis pudieran generar accidentes de tránsito, ya hay instrumentos —similares a los alcoholímetros— para determinar si un conductor está bajo la influencia del Cannabis. Regulación y operaciones para disuadir que los conductores manejen vehículos bajo la influencia del Cannabis pueden ser implementados con facilidad. Asimismo, los empaques de Cannabis podrían tener advertencias similares a las de diversos mecanismos que advierten sobre el uso de automóviles y de maquinaria pesada.
- Uno de los riesgos plausibles asociados con el consumo de Cannabis es el riesgo de generar enfermedades respiratorias. Este riesgo no está asociado con todo el consumo de Cannabis, sino exclusivamente con fumar Cannabis y en juntarlo con tabaco, mediante pipas, "cigarrillos" o "porros". Se *"pueden eliminar los riesgos respiratorios del uso del Cannabis al sustituir fumarlo por consumirlo oralmente. Si se insiste en fumar el Cannabis, se debe evitar la técnica de inhalar el Cannabis y retenerlo, pues aumenta la retención de partículas de materia y de alquitrán. Es posible minimizar los daños de fumar usando vaporizador"*⁴⁰. En otras palabras, uno de los pocos riesgos asociados con el consumo de Cannabis no es propio del consumo de Cannabis,

³⁹ Necesidad de la Medida. Amparo en Revisión [REDACTED] resuelto el 4 de noviembre de 2015, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

⁴⁰ Amanda Feilding Convenor, *op.cit.*, pág. 57.

sino de la forma específica de consumirlo fumándolo en "cigarrillos" o "porros".

Para tales riesgos se podrían elaborar campañas de salud que tuvieran por objetivo desincentivar fumar el Cannabis, pero no otras formas de consumo.

Si uno de los riesgos del consumo de Cannabis es la dependencia -- dificultad para disminuir el consumo o dejarlo--, entonces se debe desincentivar el uso excesivo o habitual del mismo. Al respecto, el estudio de la Fundación Beckley establece que para evitar estado de dependencia se debe reducir el consumo de Cannabis a una vez por semana o en menor cantidad.⁴¹ Esto es, el consumo moderado y esporádico, de una vez a la semana o menos, no genera dependencia, por lo que sería menos restrictivo, para combatir las adicciones, el acotar cualquier política pública a los consumidores que ya se encuentran bajo la dependencia del Cannabis, o aquellos consumidores de uso "intenso"⁴² que se encuentran bajo el riesgo de generar dependencia.

Sobre este punto la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha pronunciado:

"[U]na serie de elementos que podrían constituir una medida alternativa a la prohibición absoluta del consumo lúdico y recreativo de marihuana tal como está configurada por el "sistema de prohibiciones administrativas" impugnado por los quejosos: (i) limitaciones a los lugares de consumo; (ii) prohibición de conducir vehículos o manejar aparatos o sustancias peligrosas bajo los efectos de la sustancia; (iii) prohibiciones a la publicidad del producto; y (iv) restricciones a la edad de quienes la pueden consumir. Como puede observarse, se trata de medidas que vistas en su conjunto no prohíben el consumo de forma absoluta y, en contraste, sólo limitan la realización de las actividades relacionadas al autoconsumo de marihuana en supuestos muy acotados."⁴³

⁴¹ Los consumidores podrían minimizar el riesgo de dependencia reduciendo la frecuencia de uso a una vez por semana o menos y evitando el uso diario que acarrea el riesgo más alto de generar dependencia. (La traducción es nuestra) "Cannabis users could minimise the risks of dependence by reducing their frequency of use to weekly or less often, and by avoiding daily use which carries the highest risk of dependence." *Ibidem*, pág. 58.

⁴² El uso diario o casi diario. *Ibidem*, pág. 17

⁴³ Necesidad de la Medida. Amparo en Revisión [REDACTED], resuelto el 4 de noviembre de 2015, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como ya fue acreditado, existe una pluralidad de alternativas menos restrictivas de los derechos a la libre autodeterminación, libre desarrollo de la personalidad, libertad corporal y identidad personal, con mejores resultados en la consecución del fin perseguido por el Estado mexicano en la legislación que se combate.

Por ende, la Política Prohibicionista no cumple con el tercer requisito del examen de escrutinio de las normas que restringen derechos humanos. El prohibicionismo no es proporcional, toda vez que existen diversas alternativas menos restrictivas del derecho que podría emplear el Estado mexicano para obtener los resultados que persigue mediante la Política Prohibicionista.

2. Se restringe más de lo estrictamente necesario

Se debe analizar si la medida que afecta los derechos de autodeterminación, libre desarrollo de la personalidad, identidad personal, libertad individual y disposición sobre la salud personal, es aquella que restringe en menor medida los derechos del quejoso. En otras palabras, si la prohibición categórica fuese la alternativa menos viable, entonces se debe analizar si las medidas son confeccionadas a la medida y si no abarcan o restringen los derechos más allá de lo estrictamente necesario.

Debemos analizar si la Política Prohibicionista es sobre-incluyente en la restricción a los derechos del quejoso para perseguir los dos objetivos de la norma. Así, si el objetivo de la Política Prohibicionista es la protección de la salud y el combate a las adicciones, entonces solo se debe prohibir el consumo de Marihuana ahí donde pudiera generarse un daño a la salud o donde hay adicción o dependencia a la Marihuana. Como se expondrá a continuación, la Política Prohibicionista prohíbe mayor autoconsumo de Marihuana que el estrictamente necesario para proteger la salud y combatir su adicción.

Para llevar a cabo este análisis, es apropiado retomar el estudio formulado por la Fundación Beckley, que expresa los riesgos a la salud que puede generar el consumo de Cannabis:

"Un conductor bajo los efectos del cannabis tiene un mayor riesgo de chocar. Fumar cannabis probablemente aumenta los riesgos de desórdenes respiratorios. Consumidores regulares corren el riesgo

de generar dependencia en la droga -dificultad para disminuir el consumo o dejarlo. Entre las complejas interacciones entre cannabis y desordenes mentales, el uso de cannabis parece aumentar el riesgo de síntomas psicóticos.

"Claramente, en algunos mercados, el cannabis vendido se ha vuelto más fuerte en términos de contenido de THC en años recientes. Para un consumidor ingenuo, esto puede ser problemático, aunque es virtualmente imposible morir de sobredosis (con sólo dos muertes registradas a nivel mundial). Para un fumador que busca un estado particular de intoxicación, y cuantifica la dosis en concordancia, algunos han alegado que cannabis más fuerte es de hecho menos dañino para la salud, ya que el consumo del producto de la combustión potencialmente nociva es reducida. Algunas evaluaciones más rigurosas son necesarias para analizar las causas y consecuencias de superior contenido de THC y de los cambios en la racionalidad entre THC:CBC en el cannabis moderno

"Los daños a la salud por el cannabis son claramente suficientes para justificar regulación substancial sobre su disponibilidad y comercialización. Es importante que los riesgos a la salud por el cannabis sean comunicados a sus usuarios. Por otro lado, las políticas públicas deben tomar en cuenta los riesgos relativos en comparación a otras conductas comunes que generan ciertos riesgos. En un contexto comparativo, los riesgos son bajos. Por ejemplo, los daños a la salud asociados con el tabaco y el alcohol son claramente mayores que aquellos relacionados con el cannabis"⁴⁴

(Subrayado y énfasis añadido)

Se puede apreciar que el consumo de Cannabis genera algunos riesgos plausibles específicos a la salud, tales como los siguientes:

- Aumento de probabilidad de desordenes respiratorios.
- Riesgo de generar dependencia en consumidores regulares.
- Riesgo de síntomas psicóticos.
- Riesgo de generar accidentes si se maneja bajo la influencia del Cannabis.

Es necesario aclarar que los primeros tres son riesgos a hacia la salud propia y el último -sobre riesgo de accidentes de tránsito- es un riesgo tanto a la salud personal, como a la de terceros. Este último riesgo es el único que plausiblemente genera el consumo de cannabis hacia terceros. No obstante, este riesgo no es derivado exclusivamente del consumo de

⁴⁴ Ibidem, págs. 171-172.

24

Cannabis, sino de la conjunción entre el consumo de cannabis y el manejo de vehículos.

Además, algunas pruebas ponen en tela de juicio si el cannabis realmente genera accidentes de tránsito. El artículo "Marihuana & Seguridad en las Calles, Un llamado para políticas públicas basadas en hechos, no miedo". Drug Policy Alliance, 2016, concluye que las personas bajo la influencia de cannabis son conscientes de su estado alterado de conciencia y suelen manejar con más cuidado.

Sea como fuere, incluso si sí hubiera riesgos de accidentes de tránsito, entonces sólo las medidas directamente orientadas a reducir tales riesgos cumplirían con el examen que ahora se realiza. Sólo las medidas que se focalizaran en tales daños potenciales pasarían el análisis que se elabora sobre restricciones más allá de lo estrictamente necesario. Cualquier restricción adicional sería una medida sobre-incluyente que limitaría los derechos de los consumidores más allá de lo estrictamente necesario.

1. Riesgo de generar desórdenes respiratorios

Uno de los riesgos asociados con el consumo de Cannabis es el riesgo de generar enfermedades respiratorias. Este riesgo no está asociado con todo el consumo de Cannabis, sino exclusivamente con fumar Cannabis, en especial en conjunto con tabaco, mediante, por ejemplo, pipas, "cigarrillos" o "porros". Se *"pueden eliminar los riesgos respiratorios del uso del Cannabis al sustituir fumarlo por consumirlo oralmente. Si se insiste en fumar el Cannabis, se debe evitar la técnica de inhalar el Cannabis y retenerlo, pues aumenta la retención de partículas de materia y de alquitrán. Es posible minimizar los daños de fumar usando vaporizador"*⁴⁵. En otras palabras, uno de los pocos riesgos asociados con el consumo de Cannabis no es propio del consumo de Cannabis, sino de la forma específica de consumirlo.

Por lo tanto, cualquier medida orientada a salvaguardar la salud de los consumidores y evitar desórdenes respiratorios debería estar directamente orientada a disuadir el consumo reiterado y habitual de Cannabis, mediante "cigarrillos" y "porros", pero es sobre incluyente si también abarca el consumo oral y el consumo mediante vaporizadores. Así

⁴⁵*Ibidem*, pág. 57.

03
182
93
R

las cosas, la Política Prohibicionista restringe más allá de lo estrictamente necesario para prevenir desordenes respiratorios.

ii. Riesgo de generar dependencia

Si Consumidores regulares corren el riesgo de generar dependencia en la droga, entonces parecería apropiado regular el consumo reiterado, o bien, regular el consumo de las personas que ya son dependientes de la misma, pero no el consumo eventual. En efecto, un gran número de personas que consumen Cannabis no son dependientes de la misma.



Al respecto, el estudio de la Fundación Beckley establece que para evitar estado de dependencia se debe reducir el consumo de Cannabis a una vez por semana o en menor cantidad.⁴⁶ Esto es, el consumo moderado y esporádico, de una vez a la semana o menos, no genera dependencia. En consecuencia, la Política Prohibicionista que no distingue entre el consumo moderado que no genera dependencia y aquel que sí genera dependencia restringe los derechos invocados más allá de lo estrictamente necesario.

iii. Riesgo de generar desordenes psíquicos

Si el consumo de Cannabis puede aumentar el riesgo de síntomas psíquicos, entonces la restricción estrictamente necesaria sería aquella orientada a combatir los factores de riesgo para ese tipo de afectaciones. El estudio de la fundación Beckley manifiesta que los riesgos están comúnmente asociados con el consumo de Cannabis con alto grado de THC, que son más comúnmente encontrados en las formas genéticamente modificadas y en las formas cultivadas mediante hidroponía.⁴⁷

A todo esto, se deben llevar a cabo estudios para determinar si en efecto el Cannabis genéticamente-modificado o hidropónico genera síntomas psíquicos. Solo si se comprobase que estas especies pudiesen generar daños, se podrían llegar a regular. En este modo, la prohibición del consumo de Cannabis que no es genéticamente modificado ni cultivado

⁴⁶ Los consumidores podrían minimizar el riesgo de dependencia reduciendo la frecuencia de uso a una vez por semana o menos y evitando el uso diario que acarrea el riesgo más alto de generar dependencia. (La traducción es nuestra)
"Cannabis users could minimise the risks of dependence by reducing their frequency of use to weekly or less often, and by avoiding daily use which carries the highest risk of dependence." *Ibidem*, pág. 58.

⁴⁷ *Ibidem*, pág. 58.

mediante hidroponía es excesiva y restringe más de los derechos invocados de lo estrictamente necesario para combatir el riesgo de algunos síntomas psicóticos.

iv. Riesgo de accidentes de tránsito

Si manejar vehículos bajo los efectos de la Cannabis puede generar accidentes, entonces la prohibición estrictamente necesaria sería aquella que prohibiera simplemente consumir Marihuana cuando se fuera a conducir un vehículo o maquinaria peligrosa. Esto es lo que sucede actualmente con el alcoholímetro en la Ciudad de México, en relación con el alcohol, que ha funcionado satisfactoriamente. Así las cosas, la Política Prohibicionista restringe más allá de lo estrictamente necesario para proteger a los particulares de accidentes de tránsito.

Insistimos que la posibilidad de generar accidentes de tránsito es el único riesgo a la salud de terceros que plausiblemente podría generar el consumo de Cannabis. No obstante, este riesgo puede ser satisfactoriamente solucionado mediante la prohibición a la actividad conjunta de consumir Cannabis y manejar vehículos o maquinaria peligrosa.

De hecho, existen políticas alternativas a la Política Prohibicionista que son menos intrusivas y restringen en menor medida los derechos del quejoso. La Política Prohibicionista va más allá de lo estrictamente indispensable para combatir los riesgos a la salud plausibles generados por el consumo de Cannabis.

En consecuencia, la Política Prohibicionista no cumple con el tercer requisito del examen de escrutinio y proporcionalidad de las normas que restringen derechos humanos. No sólo pretende regular los usos problemáticos y que podrían generar riesgos a la salud, sino todos y cada uno de los usos de Cannabis. No sólo regula los usos específicos que pueden potencialmente generar desórdenes respiratorios, que pueden generar dependencia o accidentes de tránsito, sino que prohíbe todos los usos de Cannabis. Así, el prohibicionismo no es proporcional, toda vez que restringe los derechos humanos más allá de lo estrictamente necesario.

Se puede apreciar, entonces, que la sentencia de amparo viola en perjuicio del quejoso los derechos de fundamentación y motivación

84
95
7
1

adecuadas, así como el derecho de congruencia externa y exhaustividad. Contrario al aserto del Juez de Distrito, la Política Prohibicionista no cumple con el tercer requisito del examen de escrutinio.

D. PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO, BALANCE DE EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS

El Juez de Distrito omite llevar a cabo un balance de los efectos negativos y positivos de la Política Prohibicionista, conforme al examen de proporcionalidad en sentido estricto.

El último paso del examen que se debe hacer respecto de las medidas emitidas por el legislador ordinario, con el propósito de restringir derechos fundamentales, es un examen de proporcionalidad en sentido estricto. Partiendo de los precedentes judiciales enunciados, en el análisis de proporcionalidad se debe llevar a cabo el siguiente análisis:

En términos del primer examen de escrutinio, "[p]ara que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: ... c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos."⁴⁸

En el segundo examen, contemplado en los precedentes judiciales citados se dispone que "debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos."⁴⁹

⁴⁸RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Novena Época; Registro, 169209; Instancia, Primera Sala; Tesis Aislada; Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVIII, Julio de 2008; Materia, Constitucional; Tesis, 1a. LXVI/2008; pág. 462.

⁴⁹IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA. Novena Época; Registro, 169489; Instancia, Segunda Sala; Tesis Aislada;

95

Finalmente, en el tercer examen se sostiene que *"debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, ... habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos."*⁵⁰

Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el análisis de proporcionalidad en sentido estricto en los términos siguientes:

*"[E]n esta fase del escrutinio se requiere realizar una ponderación entre los beneficios que cabe esperar de una limitación desde la perspectiva de los fines que se persiguen con los costos que necesariamente se producirán desde la perspectiva de los derechos fundamentales afectados."*⁵¹

En síntesis, para que las medidas adoptadas por el legislador sean proporcionales se debe hacer un análisis de ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos.

El análisis de proporcionalidad consiste en evaluar si la Política Prohibicionista a la siembra, cultivo, preparación, posesión y demás conductas relacionadas con el autoconsumo de Cannabis, en los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247 en su último párrafo y 248, manifiesta un desequilibrio en la medida Prohibicionista y Punitiva y se afectan más bienes tutelados constitucionalmente de los que se protegen.

La Política Prohibicionista no solo no aporta un beneficio a la procuración de la salud y al combate de las adicciones, sino que genera un

Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo, XXVII, Junio de 2008; Materia, Constitucional; Tesis, 2a. LXXXIV/2008, y página: 440.

⁵⁰IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. Novena Época; Registro, 174247; Instancia, Primera Sala; Jurisprudencia; Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo, XXIV, Septiembre de 2006; Materia, Constitucional; Tesis, 1a./J. 55/2006, y página: 75.

⁵¹ Proporcionalidad en Sentido Estricto de la Medida. Amparo en Revisión [REDACTED], resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 4 de noviembre de 2015.

riesgo latente a la salud, seguridad e integridad personal de los consumidores de Cannabis y sus familias. En efecto, dada la actual Política Prohibicionista, para obtener y consumir Cannabis es necesario involucrarse con el crimen organizado y con los narcomenudistas.

Por lo tanto, puede afirmarse válidamente que el ejercicio a la autodeterminación, libertad individual y corporal, libre desarrollo de la libertad, mediante la disposición del propio cuerpo para el consumo de Marihuana sujeta a los consumidores a un riesgo mayor de perder su vida, ser víctimas de abusos y de consumir sustancias de mala calidad. Consecuencias que se apartan del mandamiento constitucional en el artículo primero, en el sentido de buscar la protección más amplia para las personas.

Algunos factores negativos asociados con el prohibicionismo son los siguientes:

1. Daños a la salud ocasionados por la prohibición

Se ha generado un consenso que los enfoques punitivos del mundo generan más riesgos a la salud que el uso mismo de estupefacientes y psicotrópicos. En 2010 un grupo de expertos de la comunidad científica internacional emitieron La Declaración de Viena, "The Vienna Declaration".

En el marco de la XVIII Conferencia Mundial del SIDA, realizada en la ciudad de Viena, Austria, un grupo de organizaciones líderes en el ámbito del VIH/SIDA, científicos y reconocidos expertos en salud pública hicieron un llamado a la comunidad internacional para reconocer el impacto negativo que el régimen global de fiscalización de drogas tenía (y tiene) sobre la expansión de la pandemia del VIH/SIDA. Con este objetivo en mente, y con miras a incidir en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA realizada en junio 2011, dichos actores redactaron una declaración en la que se expusieron las razones por las que los enfoques punitivos de control de drogas no sólo no cumplen con los objetivos de erradicar la disponibilidad y el consumo de sustancias controladas, sino que además contribuyen a la creación y profundización de otros daños a la salud (Para ver lista completa de redactores, incluyendo ganadores del Premio Nobel visite: <http://www.viennadeclaration.com/writing-committee/>).

A través de la Declaración de Viena, organizaciones de la talla de la Sociedad Internacional del SIDA, el Centro de Excelencia en VIH/SIDA de la Columbia Británica y el Centro Internacional para la Ciencia en Política de Drogas pidieron realizar una revisión transparente de las políticas de drogas actuales, instrumentar y evaluar un enfoque de salud pública para atender los daños individuales y sociales causados por el uso de sustancias ilícitas, despenalizar el uso de drogas, apoyar y financiar la implementación del paquete de intervenciones sobre VIH/SIDA aprobado por la OMS, UNODC y ONUSIDA, e incorporar a las comunidades más afectadas en el desarrollo, monitoreo e implementación de servicios y políticas que afectan sus vidas. La Declaración obtuvo decenas de miles de adhesiones del público en general y logró el apoyo de cientos de científicos, profesionales del ámbito jurídico y de seguridad, así como de cientos de organizaciones alrededor del mundo (para ver lista completa de adhesiones visite: <http://www.viennadeclaration.com/organizational-endorsements/>).

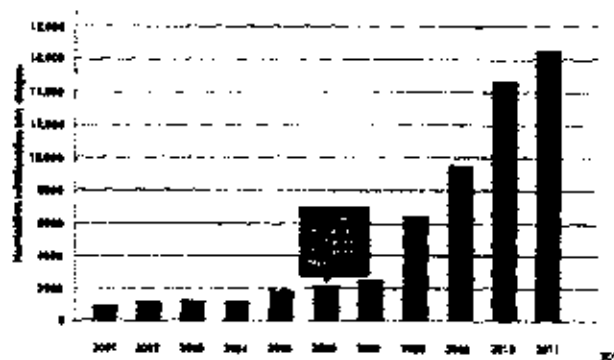
ii. Riesgo de ser lastimado o de perder la vida

El incremento al riesgo de ser víctima de un delito o, incluso, de ser privado de la vida se ha aumentado en la medida que se ha intensificado la Política Prohíbilista de consumo de Marihuana, como se acredita con la siguiente tabla:

FIGURA 8.

Estimaciones de homicidios relacionados con drogas en México antes y después de la ofensiva del gobierno contra los cárteles de drogas.

Fuente: Encuentros del gobierno y actores involucrados en la respuesta por el fenómeno criminal. "Violencia por Drogas en México" y la Comisión HIC. "Mujeres y Drogas" 2011.



Así las cosas, la Política Prohíbilista ha generado que las personas que consumen o quieren consumir Cannabis estén sujetas a un riesgo mayor al ser víctimas de actos de violencia relacionados con las drogas, grupos criminales y autoridades policiacas. Por lo que deviene

⁵² La Guerra contra las Drogas y el VIH/SIDA: Cómo la criminalización del uso de drogas fomenta la pandemia global. Informe de la comisión global de políticas de drogas, junio de 2012.

inconstitucional, pues no se favorece en todo tiempo la protección más amplia, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución.

iii. *Generación de un mercado negro*

Como se señaló anteriormente, la Política Prohibicionista no es un factor que influya en el índice de personas que consumen Cannabis. Pues bien, toda vez que los usos del Cannabis están prohibidos, los consumidores de la planta se ven obligados a acercarse a los mercados negros de la sustancia, para satisfacer su deseo de consumir Cannabis. Esto somete a los consumidores de Cannabis en elevados riesgos a su integridad personal, salud y vida.

Esto es, como la Política Prohibicionista no tiene el efecto de disuadir del consumo de Cannabis, si genera mercado negro, con efectos nocivos para los consumidores y, en general, para la población, tales como los siguientes:

- Precio elevado por el Cannabis: *"Un mercado negro es aquel en el que se venden los productos, ilegalmente, a un precio mayor que el precio tope."*⁵³
- Asimetría en la información. En el mercado negro los vendedores de Cannabis, narcomenudistas y cárteles, no tienen ningún incentivo para informar de la calidad de su producto. Lo que en muchas veces ocasiona que los consumidores compren y consuman Cannabis de baja calidad, adulterada y que, inclusive, puede ser dañina para la salud.
- Riesgo a ser privado de la libertad. El ejercicio de la autonomía personal y la disposición sobre el cuerpo propio mediante el consumo de Cannabis puede conducir a ser víctima de la Política Prohibicionista y ser sancionado por delitos contra la salud.

Bajo el anterior orden de ideas, el análisis de efectos positivos y negativos de la Política Prohibicionista debe llevar a la conclusión de que la prohibición a la siembra posesión y consumo de Cannabis no tiene ningún beneficio y que, por lo contrario, genera una multiplicidad de perjuicios de carácter personal y social. No se genera ningún beneficio, pues como se

⁵³ Microeconomía, Antonio Bassols Zalceta, Ed. Cengage Learning, 2010, Ixtapaluca, Edo. de México, pág. 119.

desprende de las pruebas estadísticas elaboradas por la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y por el estudio empírico de la Fundación Beckley, la Política Prohibicionista no reduce el número de consumidores de Cannabis.

Nuestro aserto se confirma claramente de las siguientes observaciones:

*"Hay variaciones en el tiempo en los índices de consumo de cannabis entre países, pero esas variaciones no parecen verse afectadas por la probabilidad de arresto o sanciones por uso o cantidad, sin importar cuán draconianas sean las medidas."*⁵⁴

*"Ha habido esfuerzos constantes para disuadir el uso de cannabis, mediante la prohibición y de policía. Esfuerzos para instrumentalizar la prohibición se han concentrado en el arresto de los consumidores. En los países desarrollados, con grandes poblaciones de consumidores de cannabis, las sanciones penales impuestas por posesión y consumo son usualmente modestas, en comparación con las que sería posible implementar. Más aún, la probabilidad de ser arrestado por un incidente relacionado con el uso de cannabis es en rango o menor de uno por cada mil. El esfuerzo prohibicionista no ha tenido mucho éxito para disuadir el consumo."*⁵⁵

En el mismo sentido, el Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, denominado "Guerra a las Drogas", de junio de 2011, llegó a la siguiente conclusión:

*"Los líderes políticos y las figuras públicas deberían tener el coraje de articular públicamente lo que muchos de ellos reconocen en privado: que la evidencia demuestra de manera abrumadora que las estrategias represivas no resolverán el problema de las drogas, y que la guerra a las drogas no ha sido y no puede ser ganada. Los gobiernos tienen el poder de llevar a cabo una combinación de políticas que sean apropiadas para sus propias situaciones, y manejar los problemas causados por los mercados de drogas y el uso de drogas de una manera que tenga un impacto mucho más positivo sobre el nivel del crimen relacionado así como sobre los daños sociales y para la salud."*⁵⁶

Insistimos, aun bajo el riesgo de ser reiterativos, que la Política Prohibicionista genera un mercado negro que propaga toda suerte de daños a los consumidores de Cannabis y a la población en general, y que, entre

⁵⁴ Amanda Feilding Convenor, op. cit., pág. 179.

⁵⁵ *Ibidem*, pág. 180.

⁵⁶ Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, "Guerra a las Drogas", junio 2011, pág. 10.

80-87
103

otros perjuicios, se produce el riesgo incrementado de perder la vida, o bien, de ser víctima de un delito, de perder la libertad o de consumir Cannabis adulterado.

El Juez de Distrito no alude en su sentencia a los efectos negativos invocados en la demanda de amparo, en violación a los derechos procesales del quejoso. El Juez de Distrito, en cambio, ofrece una razón por la que a su juicio la Política Prohibicionista sí es proporcional en sentido estricto, en los términos siguientes:

"Por último, en cuanto al requisito de **proporcionalidad**, no debe perderse de vista que el artículo 479 de la Ley General de Salud, establece que para efectos del capítulo previsto en dicha normatividad relativo a *"Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo"*, se entiende que la marihuana está destinada **para su estricto e inmediato consumo personal**, cuando su cantidad no exceda de cinco gramos.

"Bajo esa perspectiva, el sistema normativo combatido opera bajo la posibilidad de que cualquier persona consuma una cantidad mínima de dicho estupefaciente, por lo que no es posible sostener que el beneficio colectivo en materia de salud y orden público, que se obtiene con las restricciones establecidas, afecta desmedidamente la libertad del quejoso para consumir tal sustancia.

"En efecto, si bien no se desconoce que la libertad personal es un derecho fundamental de alto rango, es claro que puede ser intervenido o restringido si existen razones especiales de gran peso, por lo que tales restricciones son admisibles si así lo requiere la protección de terceros o el interés común, como acontece en el caso concreto.

"Por lo tanto, este juzgador considera que el sistema normativo previsto por los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, persigue una finalidad constitucionalmente válida, resulta idóneo, necesario y proporcional.

"Así, ante lo infundado de los conceptos de violación, se debe **negar el amparo y protección** de la Justicia Federal solicitados en contra de las normas reclamadas de la Ley General de Salud.

El Juez de Distrito lleva a cabo un análisis inadecuado e insuficiente sobre la última etapa del examen de proporcionalidad. Aduce que la Política Prohibicionista es proporcional en sentido estricto por dos razones:

1. Primero, porque a su juicio sí está permitido poseer y consumir cannabis hasta en 5 gramos, a partir de la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud.
2. Segundo, porque sin tal medida no se lograrían los fines buscados por el legislador.

A continuación se abordan ambas razones del Juez de Distrito, para acreditar su indebida fundamentación y motivación:

α. Excluyente de Responsabilidad de los artículos 478 y 479 de la Ley General de Salud

El Juez de Distrito lleva a cabo una desafortunada interpretación de los artículos 478 y 479 de la Ley General de Salud. Considera el a quo que el quejoso sí tiene derecho o permitido consumir y portar cannabis porque hay una excluyente de responsabilidad penal en los artículos invocados.

Pasa desapercibido que una excluyente de responsabilidad, como la que invoca, no es una autorización o permisión legal. El quejoso no tiene permitido portar ni consumir cantidad alguna de cannabis bajo el régimen jurídico mexicano.

Adicionalmente, habida cuenta que un "cigarrillo" o "porro" contiene aproximadamente .75 gramos de Cannabis⁵⁷, esto quiere decir que existe una eximente de responsabilidad penal para poseer aproximadamente 6 "cigarrillos" o "porros" de Marihuana. Una cantidad que no tiene una justificación racional o científica.

Al respecto ya se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adujo que los artículos 478 y 479 de la Ley General de Salud no implican una autorización para uso personal de Cannabis, sino una excluyente de responsabilidad penal:

"En este orden de ideas, es importante señalar que si bien el artículo 478 de la Ley General de Salud, en relación con el artículo 479, señala que el Ministerio Público no ejercerá acción penal en contra de quien posea hasta cinco gramos de marihuana, esta Suprema Corte ha interpretado que dicha disposición contiene una excluyente de responsabilidad, lo que únicamente significa que en esos casos no debe

⁵⁷ Amanda Feilding Convenor, op.cit., pág. 17

aplicarse la pena a quien haya cometido el delito en cuestión, pero no consagra de ninguna manera una autorización o un derecho al consumo personal en los términos en los que lo solicitan los quejosos, puesto que además de que únicamente se limitan a despenalizar el consumo en una cantidad muy pequeña, dichos preceptos no permiten de ningún modo la realización de las otras actividades correlativas al autoconsumo, como siembra, cultivo, cosecha, preparación, transporte, etc.⁵⁸

(Subrayado y énfasis añadido)

Así las cosas y contrario a las conclusiones del Señor Juez de Distrito a quo, el quejoso no tiene permitido realizar conducta alguna con cantidad alguna de cannabis. Cuando el Juez de Distrito afirma que porque no hay una sanción puede consumir hasta 5 gramos, realmente está invitando al quejoso a violar la ley.

El Juez de Distrito no tiene razón en definir a los artículos 478 y 479 como un espacio dentro de la legislación que autoriza a los usuarios de cannabis para su consumo. La Ley General de Salud establece una prohibición categórica a toda conducta relacionada con el Cannabis. Los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud (conjuntamente "Política Prohibicionista") prohíben la "siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado" con el Cannabis o cualquier producto que los contenga.

Desde luego, la despenalización de dosis mínimas del artículo 479 de la Ley General de Salud es insuficiente para ejercer los derechos y conductas invocados en la demanda de amparo y para permitir que el quejoso pueda sembrar, cultivar, preparar, poseer, almacenar y otras conductas relacionadas con el autoconsumo de Cannabis de forma habitual y reiterada.

Además, la despenalización de la posesión de 5 gramos o menos no soluciona el problema que para los consumidores de Marihuana, pues deben recurrir a un mercado ilegal, o bien producirlo. Si el quejoso sembrara una planta de Marihuana para su autoconsumo, ésta generaría una cantidad mucho mayor a 5 gramos, lo que los situaría bajo la

⁵⁸ Amparo en revisión [REDACTED] dictado el 4 de noviembre de 2016, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

prohibición genérica de la ley general de salud y los haría merecedores de una sanción penal.

De modo que los artículos 478 y 479 de la Ley General de Salud no tornan la Política Prohibicionista en una política proporcional en estricto sentido. La afectación a los derechos del quejoso es desmedida y no existe recoveco alguno en la ley que le permita ejercerlos de forma segura legal y libre de persecución.

b. Que sin la Política Prohibicionista no se lograrían los propósitos buscados por el legislador.

El análisis sobre si los medios empleados conducen al objetivo deseado por el legislador es propio de la segunda etapa del examen de proporcionalidad. Corresponde a la etapa sobre idoneidad o instrumentalidad analizar si los medios conducen al objetivo planteado por el legislador. Esto es, la sentencia de amparo confunde las razones propias de cada etapa del examen de proporcionalidad o escrutinio.

Contrario a lo que afirma el Juez de Distrito, la eliminación de la Política Prohibicionista sólo podría frustrar los objetivos de protección a la vida y a la salud -como lo sostiene la sentencia- si en efecto la Política Prohibicionista fuera instrumental para evitar esos riesgos. Si la política no es instrumental o adecuada para evitar riesgos a la salud o que la gente consumo Cannabis, pues el eliminar tal política no frustra nada.

En todo caso, si las autoridades responsables o, en su caso, el Juez de Distrito pretendían acreditar que la Política Prohibicionista sí era instrumental, medio-fín, debieron de haber proporcionado pruebas directas que acreditaran tal extremo. Para mayor abundamiento sobre la deficiencia de la Política Prohibicionista para asegurar el objetivo de la misma, hacemos referencia al segundo apartado del examen de proporcionalidad.

En resumen, la Política Prohibicionista no cumple con el cuarto requisito del examen de escrutinio de las normas que restringen derechos humanos. El prohibicionismo no es proporcional, toda vez que genera mayores perjuicios que beneficios para los particulares y para la sociedad en general.

3.3. CONCLUSIÓN AL ESCRUTINIO

En conclusión, la prohibición en la siembra, cultivo, preparación, posesión y demás conductas relacionadas con el autoconsumo de Cannabis, previstas en los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247 en su último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, deviene en una inconstitucionalidad, pues inhibe los derechos humanos a la autonomía, libre desarrollo de la personalidad, identidad personal y a no gozar de buena salud, por lo siguiente:

En primer lugar, la Política Prohibicionista no tiene una finalidad legítima, pues proteger la salud de una persona contra su voluntad viola los derechos a la autonomía, libre desarrollo de la personalidad, identidad personal y libertad individual. En segundo lugar, la Política Prohibicionista no es instrumental para prevenir posibles riesgos a la salud ni para combatir las adicciones, ya que el número de consumidores de Cannabis ha aumentado en los últimos años y hay pruebas objetivas que muestran que el despenalizar el consumo no generaría un aumento en el consumo de la misma. En tercer lugar, existen alternativas menos restrictivas de los derechos humanos para proteger la salud de los consumidores y suprime más allá de lo estrictamente necesario los derechos restringidos. Finalmente, la Política Prohibicionista no es proporcional, pues en balance genera mayores perjuicios que beneficios.

Por todo lo anteriormente expuesto, se debe concluir que la sentencia viola en perjuicio del quejoso los principios de congruencia y exhaustividad, en relación al tercer concepto de violación, apartado 5 (5.1 - 5.2) de la demanda. En consecuencia, es procedente revocar la sentencia de amparo impugnada, declarar que los artículos impugnados de la Ley General de Salud son inconstitucionales y se debe ordenar al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que permita al quejoso sembrar, cultivar, preparar, poseer suficiente cannabis para su autoconsumo habitual y reiterado, excluyendo todo acto de comercio.

CUARTO AGRAVIO. Violación a los principios de fundamentación y motivación adecuadas, congruencia y exhaustividad, en relación al concepto de violación tercero, numeral uno, sobre los derechos humanos a la identidad personal, pluralismo y la dignidad humana.

Bajo tal parámetro, el Juez a quo viola de las disposiciones de los artículos 74 fracción I de la Ley de Amparo, 222 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al texto del numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo; e inobservancia de la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el concepto de violación tercero, numeral 1, de la demanda de amparo, el quejoso sostuvo que la aplicación en su perjuicio de los artículos que prohíben la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, posesión y otras conductas relacionadas con el autoconsumo de Cannabis (artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud) vulnera los derechos a la identidad personal y pluralismo, derivada de la dignidad humana.

En dicho concepto de violación, el quejoso alegó, en primer lugar, que era titular del derecho a la identidad personal y de pluralismo, derivados del derecho a la dignidad humana; en segundo lugar, expuso cuál era el alcance normativo de tales derechos; y en tercer lugar, adujo que la Política Prohibicionista transgredía tales derechos.

No obstante, el Juez de Distrito hizo caso omiso de los argumentos vertidos por el quejoso y sostuvo lo siguiente, sin más ni más:

"Ahora bien, el quejoso señala que los preceptos reclamados vulnera el derecho a la identidad personal, al pluralismo -entendido como el derecho que tiene cada individuo para distinguirse de los demás-, la dignidad humana, propia imagen, disposición a la salud personal y autodeterminación personal y corporal, libertades que están comprendidas en el derecho al libre desarrollo de la personalidad."

(Subrayado y énfasis agregado)

Sin una justificación aparente, en la sentencia se aduce que los derechos humanos invocados conforman parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Se puede apreciar, entonces, que la sentencia de amparo no analiza el concepto de violación tercero, numeral 1.

Hay un alcance sobrepuesto entre, por un lado, los derechos humanos a la identidad personal y dignidad humana y, por otro lado, el libre desarrollo de la personalidad. No obstante, tales derechos varían a partir de casi cualquier métrica de evaluación sobre derechos humanos. Difieren en su anclaje constitucional y convencional; en su alcance normativo; en su desarrollo jurisprudencial; en el trato en la doctrina constitucional comparada, y en la asimilación y reconocimiento de fuerza normativa en el imaginario colectivo y fuero interno de los jueces constitucionales del país.

Tales distinciones se pueden apreciar de un contraste entre el apartado en el que se desarrolla el alcance del derecho a la identidad, pluralismo y dignidad (concepto de violación tercero apartados 1.1 y 1.2) y en el que se expone el alcance del libre desarrollo de la personalidad (concepto de violación tercero apartados 2.1 y 2.2).

Así que se debe concluir que la sentencia de amparo omite analizar los argumentos sobre dignidad, identidad personal, pluralismo, en relación a la política prohibicionista. Los razonamientos expuestos por el quejoso y que omitió tomar en cuenta el Juez de Distrito son los siguientes:

La aplicación implícita y en perjuicio del quejoso de los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, que impide el consumo de Cannabis, vulneran los derechos a la identidad personal, principio de pluralismo y de dignidad humana.

4.1. TITULARIDAD DEL DERECHO A LA DIGNIDAD

El reconocimiento de la dignidad de la persona es un derecho reconocido y tutelado, entre otras normas, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también

conocida como el Pacto de San José y el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Sociales y Culturales, que a continuación transcribimos, para mejor referencia:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 1º.-

"... Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atenten contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".

Artículo 2º.-

"... A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: (...)

"II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes."

Artículo 3º.-

"Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

"La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

"(...)

"Además:

"(...)

"c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; (...)"

Artículo 25.-

"Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución."

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Preámbulo. -

"Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

...
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;"

Artículo 1.-

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros."

Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Pacto de San José"):

Artículo 11.-

"Protección de la Honra y de la Dignidad"

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques."

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

Preámbulo. -

"Los Estados Partes en el presente Pacto,

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,

Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana, (...)"

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

Preámbulo.

"Los Estados partes en el presente Pacto,

"Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,

"Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana, (...)"

Como se puede apreciar, tanto el texto constitucional como las convenciones más importantes sobre derechos humanos de las que el Estado Mexicano es parte sostienen la existencia del derecho a la dignidad como condición inherente a todo ser humano.

4.2. TITULARIDAD DEL DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho a la identidad personal forma parte de los derechos humanos tutelados implícitamente por el orden constitucional y que se desprende del derecho a la dignidad humana. En efecto, en el amparo en Revisión [REDACTED] resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 26 de octubre de 2011, se sostuvo lo siguiente:

"Así, de la dignidad humana se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que el hombre desarrolle integralmente su personalidad. De esta manera, la dignidad humana comprende los derechos de la personalidad, entre los que encontramos al derecho a la identidad."

En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional de la República de Colombia, que en la Sentencia No. C-239/97, que se transcribe en la parte pertinente, dijo:

"(...) la dignidad humana... es en verdad principio fundante del Estado, ... es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos garantías contemplado en la constitución. Este principio atiende necesariamente a la superación de la persona, respetando en todo momento su autonomía e identidad."



JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CL. DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
RETA...
SECCIÓN ULTIMAROS

Así también se pronuncia la misma Corte Constitucional colombiana en la sentencia T-090/96:

"Si bien la Constitución de manera expresa no consagra un "derecho a la identidad", éste puede deducirse de sus principios y de los restantes derechos reconocidos positivamente en su texto."

En síntesis, se puede apreciar que el derecho a la identidad o identidad personal ha sido reconocido tanto en el orden jurídico mexicano, como en general en las democracias constitucionales, como una consecuencia del derecho a la dignidad humana.

4.3. ALCANCE DE LOS DERECHOS A LA IDENTIDAD PERSONAL, PLURALISMO Y LA DIGNIDAD HUMANA

Diversos precedentes judiciales han conceptualizado y definido el alcance de estos derechos que se invocan violados. Por ejemplo, en el amparo en Revisión [REDACTED] resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 26 de octubre de 2011, se definió el derecho a la identidad personal, en los términos siguientes:

"El derecho a la identidad personal, ha sido definido por el Tribunal Pleno de esta Suprema corte como el derecho de la persona a tener sus propios caracteres, físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad. Así, la identidad personal es el conjunto y resultado de todas aquellas características que permiten individualizar a una persona en la sociedad, es todo aquello que hace ser "unos mismo" y no "otro" y se proyecta hacia el exterior, permitiendo a los demás conocer a esa persona y, de ahí, identificarla.

"En consecuencia, el derecho a la identidad personal, se define como el derecho que tiene toda persona a ser quien es, en la propia conciencia y en la opinión de los otros. Es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad."

Luego, la identidad personal será a partir de la cual la sociedad identifica a cada individuo y lo distingue de los demás, a través de elementos o datos como la filiación, el género, la sexualidad, la edad, la profesión, los hábitos, los atributos intelectuales o físicos, o bien, de la conjunción de todos o algunos de estos elementos.

En el mismo sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria del Amparo Directo Civil [REDACTED] dispuso por unanimidad lo siguiente:

"[D]e la dignidad humana, se deriva la teoría de los derechos de la personalidad, que componen un sector, dentro del más amplio de los derechos humanos

"(...)

"Dentro de los derechos personalísimos, se comprende necesariamente el derecho a la identidad personal, es decir, la persona con sus propios caracteres, físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad. Así, la identidad personal es el conjunto y resultado de todas aquellas características que permiten individualizar a una persona en la sociedad, es todo aquello que hace ser "uno mismo" y no "otro" y se proyecta hacia el exterior, permitiendo a los demás conocer a esa persona y, de ahí, identificarla.

"Por consiguiente, el derecho a la identidad personal, relevante para la problemática que nos ocupa, se define como el derecho que tiene toda persona a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los otros. Es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad. Por ello, se encuentra relacionado estrechamente con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ..."

En resumen, de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación citados se desprende que el derecho a la identidad personal es, en esencia, el conjunto de características que individualizan al sujeto en sociedad, en propia conciencia, y por oposición a cualquier otro individuo. Así, solo se respeta la identidad personal de cada sujeto si se le permite actuar en consecuencia a sus propios rasgos, cosmovisiones, concepciones de la vida buena y elementos que, a su juicio, lo definen y singularizan.

93
82
115

En el mismo sentido, se puede invocar el siguiente precedente judicial:

"Época, Novena Época; Registro, 165821; Instancia, PLENO; Tipo Tesis, Tesis Aislada; Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Localización, Tomo XXX, diciembre de 2009; Materias, Civil y Constitucional; Tesis, P. LXVII/2009, Pág. 7.

"[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, diciembre de 2009; Pág. 7

"DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA.

"Dentro de los derechos personalísimos se encuentran necesariamente comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia imagen, así como a la identidad personal y sexual; entendiéndose por el primero, el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos; a la propia imagen, como aquel derecho de decidir, en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás; a la identidad personal, entendida como el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo; y que implica, por tanto, la identidad sexual, al ser la manera en que cada individuo se proyecta frente a sí y ante la sociedad desde su perspectiva sexual, no sólo en cuanto a sus preferencias sexuales sino, primordialmente, en cuanto a cómo se percibe él, con base en sus sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y que, de acuerdo a ese ajuste personalísimo en el desarrollo de cada individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos, privado y público, por lo que al ser la sexualidad un elemento esencial de la persona y de su psique, la autodeterminación sexual forma parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, la parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros o del conocimiento público. Por consiguiente, al constituir derechos inherentes a la persona, fuera de la inferencia de los demás, se configuran como derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana, ya que pueden reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los lesionen por lo que, si bien no son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés superior."

(Énfasis añadido)

Del criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se concluye que el derecho a la identidad personal es un derecho de defensa para salvaguardar el derecho de ser uno mismo a proyectarse en sociedad, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones. En otras palabras, el derecho a la identidad personal es una salvaguarda para que el Estado Mexicano no homogenice a los individuos ni pretenda restringir sus caracteres, acciones, hábitos y particularidades que constituyen a cada individuo como un ser autónomo y singular en su desenvolvimiento y proyección en sociedad. Es el reconocer valor en la diferencia y el valor intrínseco de cada cual en hacer de su vida lo que mejor considere, según su propia convicción de la vida buena, sin intervención del Estado.

Todo individuo tiene derecho a elegir, en forma libre y autónoma, su proyecto de vida y la manera en que logrará las metas y objetivos que para él son relevantes.

Así las cosas, el Estado no puede llevar a cabo acción alguna tendiente a socavar o suprimir las acciones que realice cualquier individuo para individualizarse en sociedad, a menos que exista un interés superior para ello, tal como la existencia de un peligro concreto para terceros o una afectación a los derechos de éstos. Lo que no sucede en el caso concreto, pues el consumo individual de Cannabis no afecta a terceros.

Otros tribunales constitucionales también han abordado la definición y análisis del alcance del derecho a la identidad personal. A falta de una jurisprudencia nacional extensa en este derecho, los criterios de tribunales análogos pueden ser útiles y orientadores para el desarrollo y desenvolvimiento de la jurisprudencia nacional.

La Corte Constitucional de la República de Colombia en la sentencia No. T-090/96 dispone de manera pertinente lo siguiente:

"PRINCIPIO DEL PLURALISMO- IDENTIDAD
PERSONAL/DERECHO A LA DIFERENCIA-
IDENTIDAD PERSONAL

"Además de miembro de la comunidad, el individuo como persona tiene derecho a ser portador de una

diferencia específica y a apoyarse en ella para proseguir su curso vital. Apagar, silenciar, desconocer y en fin, hacer caso omiso, del verdadero ser social de la persona, equivale a negar el derecho a la diferencia y, por ende, soslayar el significado profundo del pluralismo"

"El principio de la dignidad de la persona humana, no sería comprensible si el necesario proceso de socialización del individuo, se entendiera como una forma de masificación y homogeneización integral de su conducta, reductora de toda traza de originalidad y peculiaridad. Si la persona es en sí misma un fin, la búsqueda y el logro incesantes de su destino conforman su razón de ser y a ellas por fuerza acompaña, en cada instante, una inextirpable singularidad de la que se nutre el yo social, la cual expresa un interés y una necesidad radicales del sujeto, que no pueden quedar desprotegidas por el derecho a riesgo de convertirlo en cosa.

"El principio de pluralismo, sustento de la convivencia pacífica y factor normativo determinante de la riqueza espiritual, requiere que se respete la diversidad étnica y cultural de la nación y de sus miembros. Bajo el manto del ciudadano, se procura la igualdad política y la vigencia de la democracia, pero ésta no agota las posibilidades de la persona y por tanto sus derechos. Además de miembro de la comunidad, el individuo como persona tiene derecho a ser portador de una diferencia específica y a apoyarse en ella para proseguir su curso vital. Apagar, silenciar, desconocer y, en fin, hacer caso omiso, del verdadero ser social de la persona, equivale a negar el derecho a la diferencia y, por ende, soslayar el significado profundo del pluralismo."

En efecto, un estado plural que respeta la identidad personal no pueda afirmar el deber absoluto de tratar el cuerpo humano bajo determinada óptica, en oposición al titular del cuerpo. Inclusive, si la mayoría de los mexicanos, a través de sus representantes en el Congreso, ven como obligatorio el deber de proteger el cuerpo humano, en función de sus creencias religiosas o morales, no pueden pretender que esa moralidad se haga coercitivamente exigible a todos. Máxime que el quejoso en reconocimiento de los riesgos involucrados, con plena conciencia y en ejercicio de la identidad personal, pretenden utilizar su cuerpo y su persona de determinada forma, bajo la óptica de su individualidad y de lo que resulta correcto y deseable.

4.4. VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL, PLURALISMO Y LA DIGNIDAD HUMANA

La sentencia de amparo omite hacer un análisis sobre la infracción al derecho a la identidad personal, pluralismo y a la dignidad humana. Así, en la sentencia de amparo se pasa por alto que los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud prohíben la siembra, cultivo, cosecha, elaboración y cualquier otra conducta relacionada con el autoconsumo de Marihuana.

No obstante, el autoconsumo de Marihuana no es sino la proyección que hace uno mismo de sus preferencias y rasgos que lo diferencian y singularizan del resto de las personas. La prohibición de la siembra, transportación y autoconsumo de Marihuana en la Ley General de Salud es una forma inequívoca de apagar, silenciar y desconocer el verdadero ser social de la persona y negar el derecho a la diferencia.

En efecto, *"[l]os rangos de uso actual han fluctuado en los últimos 40 años, pero se puede decir que el cannabis es una droga que forma parte de la cultura, usada particularmente durante la etapa de la vida de exploración juvenil y de emancipación, en una gran cantidad de países ricos."*⁵⁹

El consumo de Cannabis y la alteración consecuente del estado de ánimo se lleva a cabo por una pluralidad de motivaciones. El Cannabis se consume por curiosidad, búsqueda espiritual, búsqueda de placer, por aburrimiento, enajenación social e, inclusive, por búsqueda de identidad.⁶⁰ Todas éstas son motivaciones orientadas a la definición del propio Yo en sociedad y a la singularidad personal.

En síntesis, la prohibición del consumo de Cannabis para quien de manera consciente decide utilizarla implica, no solo proscribir el uso de una sustancia particular, sino también la negación y supresión de conductas que confieren al individuo una diferencia específica de acuerdo a su singularidad y a sus propios caracteres y acciones. Por lo anteriormente

⁵⁹ (La traducción es nuestra) "Rates of recent use have fluctuated in the last 40 years, but it can now be said with some confidence that cannabis is an enculturated drug, used particularly during the life stage of youthful exploration and emancipation, in a large number of rich countries." *Ibidem*, pág. 169.

⁶⁰ Dorothy E. Dusek y Daniel A. Girdano, "Drogas: un estudio basado en los hechos", (trad. Del inglés: Pilar Candela Martín), México, SITEA, 1990, Cap. 2, pp.23-31

expuesto, la prohibición a la siembra, transportación y autoconsumo de Marihuana debe ser declarada inconstitucional.

4.5. ANÁLISIS SOBRE LA VALIDEZ DE LAS RESTRICCIONES DEL DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL, PLURALISMO Y DIGNIDAD

En el tercer agravio se formula un análisis detallado sobre proporcionalidad y escrutinio. Ahí se establecen las razones por las que las restricciones a derechos humanos, tratando de la política prohibicionista, no son adecuadas, ni cumplen con los estándares fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A continuación se ofrece una síntesis de los argumentos vertidos en el tercer agravio del presente recurso de revisión:

Inclusive si se adujera que los derechos a la identidad personal, al principio de pluralismo y dignidad humana no son absolutos, los límites establecidos por la prohibición en la siembra, cultivo, preparación, posesión y demás conductas relacionadas con el autoconsumo de Marihuana, en los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247 en su último párrafo y 248, implican una restricción inconstitucional e ilegítima. En la sentencia de amparo se omite hacer un análisis sobre si la restricción a los derechos a la identidad personal, pluralismo y dignidad.

En efecto, para restringir un derecho fundamental, conforme a los exámenes de escrutinio y de proporcionalidad empleados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se debe cumplir con los siguientes requisitos: primero, tener una finalidad válida o legítima dentro del ámbito constitucional; segundo, que la medida empleada sea instrumental (o idónea) para alcanzar la finalidad deseada;⁶¹ tercero, que la medida sea necesaria para alcanzar la finalidad propuesta (la alternativa menos restrictiva y que no restrinja más allá de lo estrictamente necesario), y cuarto, proporcionalidad en estricto sentido, la persecución de un objetivo constitucionalmente

⁶¹ El fallo del amparo en revisión [REDACTED] llama a esta etapa "análisis de idoneidad", pero consideramos que tanto en aquel fallo como en esta demanda nos referimos a un mismo concepto. Se trata de un análisis sobre la instrumentalidad de los medios empleados. Lo que para Aharon Barak es el examen de *Conexión Racional* ("Rational Connection") y para la jurisprudencia Norte Americana son exámenes de "Relación Substantial" ("Substantial Relation").

legítimo no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.⁶²

En primer lugar, la política prohibicionista no tiene una finalidad legítima, pues coaccionar a una persona a gozar de buena salud contra su voluntad bajo ninguna óptica puede ser permitido. La imposición de un estándar único de una vida saludable no es admisible para un estado liberal, que basa su existencia en el reconocimiento de la singularidad e independencia humana. La salud del individuo es algo que no atañe a nadie salvo a él y no puede ser impuesta contra su propia voluntad. En segundo lugar, la política prohibicionista no es instrumental o idónea para prevenir posibles riesgos a la salud ni para combatir las adicciones⁶³, ya que el número de consumidores de Cannabis ha aumentado en los últimos años y hay pruebas objetivas que muestran que el despenalizar el consumo no generaría un aumento en el consumo de la misma⁶⁴. Esto es, resulta evidente que la Política Prohibicionista no es un medio adecuado para conseguir el fin deseado. En tercer lugar, la política no es necesaria, pues 1) suprime más allá de lo estrictamente necesario los derechos restringidos, y 2) existen alternativas menos restrictivas de los derechos humanos para proteger la salud de los consumidores. Finalmente, la Política Prohibicionista no es proporcional, toda vez que genera mayores daños que beneficios.⁶⁵

En conclusión, la sentencia de amparo transgrede los principios de congruencia externa y exhaustividad, pues omite analizar si los derechos humanos a la identidad personal, pluralismo y la dignidad humana fueron legítimamente restringidos. Así las cosas, se debe declarar que los artículos impugnados de la Ley General de Salud aplicados implícitamente por la autoridad son inconstitucionales y violan los derechos a la identidad personal, principio de pluralismo y dignidad humana. Se debe, pues, como efecto de la sentencia que confiere el amparo al quejoso, ordenar al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que permita que el quejoso pueda

⁶² RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Novena Época; Registro, 169209; Instancia, Primera Sala; Tesis Aislada; Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVIII, Julio de 2008; Materia, Constitucional; Tesis, 1a. LXVI/2008; pág. 462.

⁶³ Amanda Feilding Convenor, op. cit., pág. 10.

⁶⁴ Encuesta Nacional de Adicciones 2011, pág. 43

⁶⁵ Ver el tercer agravio, tercer concepto de violación (apartado 5) en el que se expone detalladamente el análisis de proporcionalidad y escrutinio.

sembrar, cultivar, preparar, poseer suficiente Cannabis para su autoconsumo habitual y reiterado.

QUINTO AGRAVIO. Violación a los principios de fundamentación y motivación adecuada, congruencia y exhaustividad, en relación al tercer concepto de violación, numerales 3.1 a 3.3, sobre el derecho humano a la disposición de la salud personal.

Bajo tal parámetro, el Juez a quo viola de las disposiciones de los artículos 74 fracción I de la Ley de Amparo 222 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al texto del numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo; e inobservancia de la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En concepto de violación referido el quejoso sostuvo que la Política Prohibicionista vulnera el derecho a la salud, en su aspecto negativo, como la facultad o potestad de disponer de la salud personal, inclusive para no gozar buena salud. El quejoso alegó, en primer lugar, que era titular del derecho a la salud; en segundo lugar, expuso cuál era el alcance del derecho a la salud, en su aspecto negativo, como la obligación del Estado de respetar las decisiones y disposición de la salud que hace cada cual sobre su propio cuerpo; y en tercer lugar, se adujo que la Política Prohibicionista transgredía el derecho a la salud en la dimensión aquí expuesta.

No obstante, el Juez de Distrito hizo caso omiso de los argumentos vertidos por el quejoso y sostuvo lo siguiente, sin más ni más:

"Ahora bien, el quejoso señala que los preceptos reclamados vulneran el derecho a la identidad personal, al pluralismo -entendido como el derecho que tiene cada individuo para distinguirse de los demás-, la dignidad humana, propia imagen, disposición a la salud personal y autodeterminación personal y corporal, libertades que están comprendidas en el derecho al libre desarrollo de la personalidad."

(Subrayado y énfasis agregado)

Sin una justificación aparente, en la sentencia se aduce que los derechos humanos invocados conforman parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Se puede apreciar, entonces, que la sentencia de amparo no analiza el concepto de violación tercero, numeral 3.

Hay un alcance sobrepuesto entre, por un lado, el derecho humano a la disposición de la salud personal y, por otro lado, el libre desarrollo de la personalidad. Finalmente, todos los derechos humanos son interdependientes. No obstante, tales derechos varían a partir de casi cualquier métrica de evaluación sobre derechos humanos. Difieren en su anclaje constitucional y convencional; en su alcance normativo; en su desarrollo jurisprudencial; en el trato en la doctrina constitucional comparada, y en la asimilación y reconocimiento de fuerza normativa en el imaginario colectivo y fuero interno de los jueces constitucionales del país.

Tales distinciones se pueden apreciar de un contraste entre el apartado en el que se desarrolla el alcance del derecho a la disposición de la salud personal (concepto de violación tercero apartados 3.1 a 3.3) y en el que se expone el alcance del libre desarrollo de la personalidad (concepto de violación tercero apartados 2.1 y 2.2).

Así que se debe concluir que la sentencia de amparo omite analizar los argumentos sobre el derecho a la disposición de la salud personal, en relación a la política prohibicionista. Los razonamientos expuestos por el quejoso y que omitió tomar en cuenta el Juez de Distrito son los siguientes:

5.1. TITULARIDAD DEL DERECHO A LA SALUD (SALUD EN SU ASPECTO NEGATIVO)

El quejoso es titular del derecho a la salud, en términos de lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución, artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 10 del Protocolo de San Salvador, que a continuación se transcriben para mayor referencia:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 4°.-

"...Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución..."

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 25.-

"1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios..."

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales:

Artículo 12.-

"1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental."

Protocolo de San Salvador

"Artículo 10.-

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.
(...)"

Así las cosas, queda suficientemente probada la titularidad del derecho a la salud del quejoso.

5.2. ALCANCE DEL DERECHO A LA DISPOSICIÓN DE LA SALUD PERSONAL

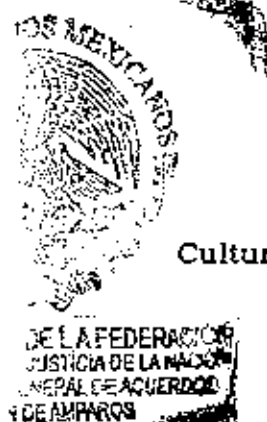
La Ley General de Salud desarrolla el alcance del derecho a la salud de la siguiente manera:

Artículo 20.-

"El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

"I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

"II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;



"III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuvan a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

"IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

"V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población."

Asimismo, el Protocolo de San Salvador establece lo siguiente:

Artículo 10.-

"Derecho a la Salud.

"1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social."

Para analizar de manera integral el derecho a la salud y su complejidad, es preciso hacer referencia a la naturaleza del derecho a la salud como un derecho subjetivo, tanto de recibir servicios de salud como de no recibirlos; de tener un alto nivel de bienestar físico y de no tenerlo.

Daniel Mendonca, en su libro "Los Derechos en Juego" propone una definición de derecho subjetivo, en los términos siguientes:

"[D]ecir que alguien tiene un derecho a hacer algo es decir que tiene la libertad de hacerlo. Esa circunstancia se presenta, fundamentalmente, a partir de la concepción de la libertad como la situación en la cual un sujeto tiene la posibilidad de obrar o de no obrar, sin ser obligado a hacer u omitir: una libertad es lo opuesto a una obligación. Esta manera de entender la libertad y, consiguientemente, los derechos, consiste, pues, en la ausencia de impedimento o la ausencia de constricción. Pero si se entiende por <<impedir>> no permitir a otros hacer algo y por <<constreñir>> obligar a otros a hacer algo, ambas direcciones parecen parciales, puesto que la libertad, así concebida, comprende, por lo común, tanto la ausencia de impedimento como la ausencia de constricción. De este modo, de acuerdo con el primer componente, un sujeto puede obrar por que no existe norma que prohíba la acción que él considera deseable y, de acuerdo con el segundo

componente, el sujeto puede abstenerse de obrar porque no existe norma que imponga la acción que él considera no deseable. Una persona, en suma, está en libertad, o tiene un derecho, para hacer algo cuando no tiene la obligación de hacerlo u omitirlo.⁶⁶

Ahora bien, parafraseando a Daniel Mendonca, alguien tiene derecho a la salud, y no una mera obligación a la salud, cuando tiene la posibilidad de recibir asistencia médica o de rechazar asistencia médica; cuando tiene la posibilidad de recibir servicios médicos y de oponerse a los mismos; y cuando puede ser ayudado para evitar los riesgos asociados al consumo de Cannabis y puede rechazar cualquier ayuda y asumir los riesgos del consumo de Cannabis.

Por su parte, Eduardo García Máynez, en su libro *Filosofía del Derecho*, explica que los derechos subjetivos tienen una implicación normativa derivada de su carácter optativo, esto es, aun cuando la norma otorgue un solo derecho, de manera implícita está otorgando un segundo derecho, el de escoger entre el ejercicio del derecho o no. Esto implicaría que el derecho a gozar de buena salud conlleva un segundo derecho a disponer de la propia salud y, si uno lo desea, gozar de mala salud.

Así, cuando hablamos del derecho a la salud, forzosamente tenemos que reconocer que el mismo implica la posibilidad de ejercer el derecho a la salud y el de no hacerlo. Con ello se respeta el derecho a la salud como un verdadero derecho y no como una mera obligación jurídica.

Considerar lo contrario, es decir, que el derecho a la salud no incluye la posibilidad de elegir no ejercer el derecho u oponerse a las prestaciones de salud pública, llevaría al absurdo de afirmar que el derecho a la salud tiene el carácter de obligación.

Para explicar este argumento se demuestran aquí las implicaciones lógicas de un derecho y una obligación:

⁶⁶ Mendonca, Daniel, *Los Derechos en Juego, Conflicto y Balance de Derechos*, Ed. Tecnos, Madrid, 2003, pág. 23

Derecho	D= Px y P-x	Donde "P" es permitido, y "x" es la conducta, Derecho es igual a permitido llevar a cabo la conducta y permitido no llevar a cabo la conducta.
Obligación	O= Px y Ph-x	Donde "P" es permitido, "Ph" es prohibido y "x" es la conducta, Obligación es igual a permitido llevar a cabo la conducta y prohibido no llevar a cabo la conducta

En este sentido, es claro que la única manera en la que se puede interpretar o disgregar el derecho a la salud es de la siguiente manera: el derecho a la salud implica que la persona titular del derecho tiene permitido disfrutar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, y, a su vez, que tiene permitido no disfrutar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

A la misma conclusión arriba el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su Observación general N° 14, en los términos siguientes:

"El derecho del disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)

"(...)

"8. El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer inferencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales."⁶⁷

En el mismo sentido, es preciso traer a colación la distinción de Isaiah Berlin entre la libertad positiva y la libertad negativa.⁶⁸ La libertad negativa consiste en que nadie interfiera en mi actividad o fin, esto es, se viola mi libertad en sentido negativo cuando se me impide hacer algo más allá de lo admisible, que de otra manera podría llevar a cabo. Por otro lado,

⁶⁷ Observación general N° 14 (2000). El derecho del disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). 22° período de sesiones, Ginebra, 25 de abril a 12 de mayo de 2000, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Naciones Unidas.

⁶⁸ Berlin, Isaiah, *Dos conceptos de libertad y otros escritos*, Alianza Editorial, Madrid 2011, p. 43-114.

la libertad positiva consiste en el autogobierno, en la posibilidad de conducir mi vida según mi razón y mis deseos.

Adicionalmente, para Norberto Bobbio la libertad negativa es *"la situación en la cual un sujeto tiene la posibilidad de obrar o de no obrar, sin ser obligado a ello o sin que se lo impidan otros sujetos"*, mientras que la libertad positiva es *"la situación en la que un sujeto tiene la posibilidad de orientar su voluntad hacia un objetivo, de tomar decisiones, sin verse determinado por la voluntad de otros."*⁶⁹

Así, a pesar de que todos los hombres tienen derecho a la libertad, existe un límite intrínseco al derecho, esto es, la libertad de las demás personas. Es decir, al vivir en sociedad, se deben de establecer ciertos límites en aras de que cada uno pueda gozar y ejercer dicha libertad. Porque el Estado establece normas o leyes que regulen la relación entre los hombres, para no caer en una situación de injusticia en que unos cuantos disfruten de la libertad a expensas de la libertad de otros.

No obstante la legitimidad de estas limitaciones, lo cierto es que hay una esfera del actuar de un sujeto que le corresponde únicamente a él; esto es, una esfera donde no hay afectación a ningún tercero y por lo tanto no resulta válida la intervención de nadie, ni siquiera del Estado.

En conclusión, el Estado no puede interferir en la libertad del sujeto para controlar su salud y su cuerpo; no puede interferir en la libertad inherente al derecho a la salud para disponer de la salud propia. Asimismo, el sujeto tiene un derecho a no ser sometido a tratamientos o injerencias médicas con en aras de proteger su salud, si no consensua y admite las mismas. Sobre el alcance del derecho a la disposición de la salud personal el Juez de Distrito guarda silencio.

5.3. VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA DISPOSICIÓN DE LA SALUD PERSONAL (SALUD EN SU ASPECTO NEGATIVO)

La sentencia de amparo omite hacer un análisis sobre la infracción al derecho a la libre disposición de la salud personal, como derecho a la salud en su aspecto negativo o la permisión a gozar de una mala salud. Así, en la sentencia de amparo se pasa por alto que el derecho a

⁶⁹ Carbonell, Miguel, *Diccionario de Derecho Constitucional*, T. II, Ed. Porrúa, tercera edición, México 2009, pp. 876 y 878.

la salud implica necesariamente que como titular del mismo puedo elegir no ejercer dicho derecho.

La Política Prohibicionista al consumo de Marihuana, contenida en los artículos antes citados de la Ley General de Salud, fue establecida para *"combatir el consumo indebido de estupefacientes y sicotrópicos"* como consecuencia de que el mismo se ha convertido *"en una de las adicciones que representan más graves problemas de salud pública."*⁷⁰

Lo anterior significa que el objetivo de la política establecida por el legislador es proteger el derecho a la salud. El problema es que ignora absolutamente el derecho a disponer sobre la salud personal y consumir Cannabis y con ello ejercer el derecho a no perseguir el *"bienestar físico, mental y social"*.

Esto es, el legislador adopta una postura paternalista y opta por no permitir a los ciudadanos gozar de uno de los elementos fundamentales de su derecho a la salud, pues considera que en tratándose del consumo de Cannabis los ciudadanos no cuentan con el derecho de elegir ejercer su derecho o no.

En consecuencia, la Política Prohibicionista que prohíbe la siembra, preparación, posesión y otras conductas relacionadas con el Cannabis vulnera el derecho a disponer sobre la salud propia, pues supone que la salud personal es una obligación y no un derecho subjetivo, el cual los particulares pueden elegir disfrutar o no.

El Estado justifica la política de prohibición al consumo de las sustancias referidas, en la protección a la salud de los ciudadanos. De esta manera, actúa de una manera paternalista injustificada e incurre en un desconocimiento de la racionalidad, madurez intelectual, derechos y dignidad de sus gobernados.

- *La prohibición parte de prejuicios basados en valoraciones morales*

El uso de Cannabis ha sido repudiado legal y moralmente. La cuestión es que se ha generado un estereotipo en torno al consumo de estas sustancias, que parte de suposiciones que son altamente cuestionables. Lo

⁷⁰ Exposición de Motivos de la Ley General de Salud, 15 de noviembre de 1983.

cierto es que la política prohibicionista no está sustentada en un estudio científico del daño que genera el consumo de Cannabis a los particulares, sino en juicios morales con una aparente neutralidad ética, para que la sociedad crea que no hay alternativas para decidir sobre el uso de la Marihuana, como si fuera una decisión entre el bien y el mal, decisión de rechazo que un ser moral no puede dejar de tomar; decisión que no puede recaer en la conciencia del sujeto ludente. En otras palabras, el Estado adopta una actitud panglosiana -según la cual, el rechazo es el mejor de los mundos posible- y procede a engrasar los engranajes del mecanismo social que fija la selección de repudio. En última instancia, ser moral no es adoptar la decisión del Estado, sino que consiste en saber libremente que las cosas pueden ser buenas o malas. Pero no significa saber, y mucho menos saber con certeza, qué cosas son buenas y qué cosas son malas.

En este sentido, se podría decir que la prohibición es más de tipo moral que de salud pública. Esto es, el Estado busca implementar cierto tipo de ideologías y formas de vida buena que considera adecuadas, a expensas de los deseos, ideas y creencias de cada persona.

• *Implicaciones de la postura paternalista en torno a la salud*

Ahora bien, si consideramos que entre los fines legítimos del Estado está el proteger la salud de los gobernados mediante la prohibición del consumo y producción de sustancias como el Marihuana, forzosamente tenemos que aceptar que esta medida estatal es legítima respecto de cualquier sustancia que cause daños a la salud.

En este sentido, sería legítimo prohibir sustancias como el tabaco y el alcohol, e incluso el Estado podría decidir prohibir el consumo de azúcar porque causa diabetes; el consumo de grasa, porque causa colesterol; el consumo de cafeína porque causa dependencia, etc.

Por reducción al absurdo, si el Estado decide tratar a sus ciudadanos como seres que no son suficientemente racionales y maduros para tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo y persona, entonces podría suprimir cualquier derecho y libertad con la que cuentan e imponer exclusivamente un modelo de vida buena. Así caeríamos en el absurdo de pensar que el Estado puede suprimir el derecho a votar, el derecho a contraer matrimonio o a procrear, sin mayor limitación que la coyuntura

política de cada momento y la elección de las mayorías en las asambleas legislativas.

5.4. ANÁLISIS SOBRE LA VALIDEZ DE LAS RESTRICCIONES DEL DERECHO A LA SALUD EN SU ASPECTO NEGATIVO

En el tercer agravio se formula un análisis detallado sobre proporcionalidad y escrutinio. Ahí se establecen las razones por las que las restricciones a derechos humanos, tratando de la política prohibicionista, no son adecuadas, ni cumplen con los estándares fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A continuación se ofrece una síntesis de los argumentos vertidos en el tercer agravio del presente recurso de revisión:

Inclusive, si se adujera que el derecho a la salud, en su vertiente de la libre disposición sobre la salud propia o la permisión de gozar de una mala salud, no son absolutos, los límites establecidos por la prohibición en la siembra, cultivo, preparación, posesión y demás conductas relacionadas con el autoconsumo de Marihuana, en los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247 en su último párrafo y 248, implican una restricción inconstitucional e ilegítima.

En efecto, para restringir un derecho fundamental, conforme a los exámenes de escrutinio y de proporcionalidad empleados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se debe cumplir con los siguientes requisitos: primero, tener una finalidad válida o legítima dentro del ámbito constitucional; segundo, que la medida empleada sea instrumental (o idónea) para alcanzar la finalidad deseada;⁷¹ tercero, que la medida sea necesaria para alcanzar la finalidad propuesta (la alternativa menos restrictiva y que no restrinja más allá de lo estrictamente necesario), y cuarto, proporcionalidad en estricto sentido, la persecución de un objetivo constitucionalmente legítimo no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.⁷²

⁷¹ El fallo del amparo en revisión [REDACTED] llama a esta etapa "análisis de idoneidad", pero consideramos que tanto en aquel fallo como en esta demanda nos referimos a un mismo concepto. Se trata de un análisis sobre la instrumentalidad de los medios empleados. Lo que para Aharon Barak es el examen de *Conexión Racional* ("Rational Connection") y para la jurisprudencia Norte Americana son exámenes de *Relación Substancial* ("Substantial Relation").

⁷² RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Novena Época; Registro, 169209; Instancia, Primera Sala; Tesis Aislada;

En primer lugar, la política prohibicionista no tiene una finalidad legítima, pues coaccionar a una persona a gozar de buena salud contra su voluntad bajo ninguna óptica puede ser permitido. La salud, a menos que haya derechos de terceros en conflicto, como en el caso de una epidemia, es un área voluntaria, sujeta al consentimiento informado y restringida exclusivamente al individuo. La imposición de un estándar único de una vida saludable no es admisible para un estado liberal, que basa su existencia en el reconocimiento de la singularidad e independencia humana. La salud del individuo es algo que no atañe a nadie salvo a él y no puede ser impuesta contra su propia voluntad.

En segundo lugar, la política prohibicionista no es instrumental para prevenir posibles riesgos a la salud ni para combatir las adicciones,⁷³ ya que el número de consumidores de Cannabis ha aumentado en los últimos años y hay pruebas objetivas que muestran que el despenalizar el consumo no generaría un aumento en el consumo de la misma.⁷⁴ Adicionalmente, la política no es instrumental, pues no hay evidencia que todo el consumo de Cannabis genere adicción o que necesariamente genere un daño a la salud. En tercer lugar, la Política Prohibicionista no es necesaria, pues suprime más allá de lo estrictamente necesario del derecho a la salud, y existen alternativas menos restrictivas de los derechos humanos para proteger la salud de los consumidores. Finalmente, la Política Prohibicionista no es proporcional, toda vez que genera mayores perjuicios que beneficios.⁷⁵

Así las cosas, se debe declarar que los artículos impugnados de la Ley General de Salud son inconstitucionales y violan el derecho a disponer sobre la salud propia. Se debe, pues, como efecto de la sentencia que otorgue el amparo, ordenar al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que permita que el Quejoso pueda sembrar, cultivar, preparar, poseer suficiente Marihuana para su autoconsumo habitual y reiterado.

Puente, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*; Tomo XXVIII, Julio de 2008; Materia, Constitucional; Tesis, 1a. LXVI/2008; pág. 462.

⁷³ Amanda Feilding Convenor, *op.cit.*, pág. 10.

⁷⁴ Encuesta Nacional de Adicciones 2011, pág. 43

⁷⁵ Ver el tercer concepto de violación, tercer agravio, en el que se expone detalladamente el análisis de proporcionalidad y escrutinio.

Si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales garantizan nuestro derecho a la salud y el derecho a la disposición sobre la salud propia, es obligación del Estado garantizar y respetar ambos. En el caso que aquí nos ocupa, esto implicaría la permisión de sembrar, producir, poseer Cannabis para autoconsumo si a nuestro parecer no causan daños suficientes a la salud para disuadir que por iniciativa propia lo consumamos.

En este sentido, queda claro que los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud que prohíben consumo de Cannabis o cualquier producto que los contenga, viola el derecho a disponer sobre la salud propia por las siguientes razones:

- 1) Por no contemplar que el derecho a la salud implica la permisión a no ejercer dicho derecho y no buscar el bienestar físico, mental y social; y
- 2) Por no respetar el derecho a la salud y prohibir realizar conductas que solo afectan el ámbito estrictamente privado, adoptando una postura paternalista contraria a los ideales de un Estado liberal respetuoso de los derechos y dignidad de sus ciudadanos.

En conclusión, la sentencia de amparo transgrede los principios de congruencia externa y exhaustividad, pues omite analizar el alcance, restricción y validez de la restricción del derecho a la salud, en su vertiente de la libre disposición sobre la salud propia o la permisión a gozar de una mala salud. Por lo anteriormente expuesto, se debe declarar que los artículos impugnados de la Ley General de Salud son inconstitucionales y violan el derecho a la disposición de la salud propia. Se debe ordenar que el Quejoso pueda sembrar, cultivar, preparar, poseer suficiente Marihuana para su autoconsumo habitual y reiterado.

SEXTO AGRAVIO. Violación a los principios de fundamentación y motivación adecuadas, congruencia y exhaustividad, en relación al concepto de violación tercero, numeral cuarto (4.1 - 4.3), sobre el derecho a la autodeterminación personal y corporal, libertad individual y de dignidad humana.

En el concepto de violación tercero, numeral cuarto, de la demanda de amparo, el quejoso alegó que la aplicación en su perjuicio de los artículos de la política prohibicionista vulnera los derechos a la autodeterminación, libertad individual y de dignidad humana.

En dicho concepto de violación, el quejoso alegó, en primer lugar, que era titulares del derecho a la autodeterminación, libertad individual y de dignidad humana; en segundo lugar, expuso cuál era el alcance normativo de tal derecho; en tercer lugar, se adujo que la Política Prohibicionista transgredía los derechos invocados, y finalmente, que la Política Prohibicionista no cumplía con los estándares de escrutinio fijados por la Suprema Corte para las leyes que transgreden derechos humanos.

No obstante, el Juez de Distrito hizo caso omiso de los argumentos vertidos por el quejoso y sostuvo lo siguiente, sin más ni más:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
LA CORTE DE AMPAROS DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE AMPAROS

"Ahora bien, el quejoso señala que los preceptos reclamados vulnera el derecho a la identidad personal, al pluralismo -entendido como el derecho que tiene cada individuo para distinguirse de los demás-, la dignidad humana, propia imagen, disposición a la salud personal y autodeterminación personal y corporal, libertades que están comprendidas en el derecho al libre desarrollo de la personalidad."

(Subrayado y énfasis agregado)

Sin una justificación aparente, en la sentencia se aduce que los derechos humanos invocados conforman parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Se puede apreciar, entonces, que la sentencia de amparo no analiza el concepto de violación tercero, numeral 4.

Hay un alcance sobrepuesto entre, por un lado, los derechos humanos a la autodeterminación personal y corporal, así como libertad individual y, por otro lado, el libre desarrollo de la personalidad. No obstante, tales derechos varían a partir de casi cualquier métrica de evaluación sobre derechos humanos. Difieren en su anclaje constitucional y convencional; en su alcance normativo; en su desarrollo jurisprudencial; en el trato en la doctrina constitucional

comparada, y en la asimilación y reconocimiento de fuerza normativa en el imaginario colectivo y fuero interno de los jueces constitucionales del país.

Tales distinciones se pueden apreciar de un contraste entre el apartado en el que se desarrolla el alcance de los derechos a la autodeterminación personal y corporal, libertad individual y de dignidad humana (concepto de violación tercero apartados 4.1 a 4.3) y en el que se expone el alcance del libre desarrollo de la personalidad (concepto de violación tercero apartados 2.1 y 2.2).

Así que se debe concluir que la sentencia de amparo omite analizar los argumentos sobre autodeterminación personal y corporal, libertad individual, en relación a la política prohibicionista. Los razonamientos expuestos por el quejoso y que omitió tomar en cuenta el Juez de Distrito son los siguientes:

6.1. TITULARIDAD DEL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN

Como se sostuvo con anterioridad, el derecho al pleno respeto de la dignidad humana, del cual se desprenden todos los derechos de la personalidad, se encuentra dispuesto en los artículos 1º, 2º, 3º y 25, de la Constitución, preámbulo, y artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por su parte, el derecho a la libertad individual se desprende del listado de libertades enunciado en toda la parte sustantiva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José, en los términos siguientes:

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Preámbulo. -

"Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e

102
135
133
inalienables de todos los miembros de la familia humana;

"(...)

"Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;"

Artículo 1.-

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros."

San José):
Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Pacto de

Artículo 11.-

"Protección de la Honra y de la Dignidad"

"1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad."

"2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación."

"3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques."

6.2. ALCANCE DEL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN

La sentencia de amparo omite tomar en cuenta que el alcance y valor del derecho a la autodeterminación se nutre de los principios a la libertad personal y dignidad humana, así como del desarrollo de la filosofía moral que ha sostenido y justificado la creación de las democracias liberales modernas.

En efecto, la filosofía moral liberal y libertaria, presente en nuestro régimen constitucional parte del presupuesto que los seres humanos son intrínsecamente dotados de valor y merecedores de respeto. Se parte de que las instituciones básicas de la sociedad se construyen en torno al presupuesto que los seres humanos son seres morales capaces de vivir vidas responsables y auto-dirigidas. Así, el fundamento de la dignidad

67

es la capacidad de cada cual para tomar control responsablemente sobre su propia vida.

En consecuencia, se socaba la dignidad de la persona por cualquier conducta orientada a interferir con la vida responsablemente auto-dirigida o aquella que trivializa las elecciones que cada cual toma respecto de su propia vida y persona.

El derecho a ser soberanos sobre nuestra persona ha sido mejor desarrollado por los países del *Common Law*, pero es inherente a todas las democracias liberales que fundan sus ordenamientos en el ideal sustantivo de la dignidad humana y de la libertad individual, como principio rector del Estado.

Las nociones contemporáneas sobre libertad y autonomía encuentran su fuente en la filosofía moral de John Locke y de John Stuart Mill. La concepción de libertad de John Locke permeó la cosmovisión de la América colonial e influyó en la redacción tanto de la Constitución de los Estados Unidos, así como en los diversos ensayos constitucionales mexicanos del siglo XIX y la subsecuente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Entre otros componentes, la filosofía de John Locke postula que *"las leyes de la naturaleza disponen que cada individuo tiene un interés inherente de propiedad sobre su persona y tiene la capacidad y el derecho para auto-determinarse racionalmente, lo que debe ser promovido y protegido por la sociedad civil y por las instituciones políticas"*⁷⁶.

En el mismo sentido, John Stuart Mill sintetizó el derecho a la autonomía individual en los términos siguientes:

"el único objeto, que autoriza a los hombres, individual o colectivamente, a turbar la libertad de acción de cualquiera de sus semejantes, es la propia defensa; la única razón legítima para usar de la fuerza contra un miembro de una comunidad civilizada es la de impedirle perjudicar a otros; pero el bien de este individuo, sea físico, sea moral, no es razón suficiente."

"Ningún hombre puede, en buena lid, ser obligado a actuar o a abstenerse de hacerlo, porque de esa actuación o abstención haya de derivarse un bien para"

⁷⁶ (La traducción es nuestra) "[T]he laws of nature require that each individual has an inherent property interest in his own person and has the capacity for and the right of rational self-determination which must be promoted and protected by civil society and political institutions." *Armstrong v. State*, 1999 MT 261, 296 Mont. 361, 989 P.2d 364, pp. 30.

él, porque ello le ha de hacer más dichoso, o porque, en opinión de los demás, hacerlo sea prudente o justo. Estas son buenas razones para discutir con él, para convencerle, o para suplicarle, pero no para obligarle o causarle daño alguno, si obra de modo diferente a nuestros deseos. Para que esta coacción fuese justificable, sería necesario que la conducta de este hombre tuviese por objeto el perjuicio de otro. Para aquello que no le atañe más que a él, su independencia es, de hecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su espíritu, el individuo es soberano.⁷⁷

(Énfasis agregado)

Decir que uno es soberano sobre su cuerpo es decir que el sujeto, y solo éste, puede decidir qué hace con el mismo. Es una autoridad discrecional de elección y de toma de decisiones.

También concepciones más modernas sobre la libertad defienden un coto vedado de libertad de todos los individuos, sobre cualquier consideración política o mayoritaria que se pretendiera oponer. Robert Nozick (1938-2002), el principal expositor de las teorías libertarias, sostiene su teoría a partir de la idea del *self-ownership* o de la auto-propiedad. Desde el prefacio de su principal libro, *Anarquía, Estado y Utopía*, sostiene que hay un cúmulo de derechos inviolables de todos los individuos.

*"Las personas no deberían ser usadas como un simple medio para el bienestar de los demás, porque de ese modo se viola el derecho fundamental de ser el dueño de uno mismo."*⁷⁸

Para el libertario, toda vez que cada cual es dueño de su propio cuerpo y de su trabajo, éste puede hacer lo que quiera con el mismo, incluyendo el consumo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes.

De cualquier forma, podemos encontrar un lugar común entre todas las teorías de la justicia modernas, que hay una esfera de protección al individuo, en la que se debe respetar su autonomía y su libertad. Así, el derecho a la autonomía protege a los ciudadanos frente actos del Estado que interfieren con la autonomía y voluntad de cualquier individuo para tomar decisiones que solo a ellos incumben.

Es el derecho a que cada uno, en su cuerpo, persona y pensamientos no pueden ser afectados por la acción estatal, salvo casos

⁷⁷ John Stuart Mill, *Sobre la Libertad*, Madrid, Alianza Editorial, 2001.

⁷⁸ Michael J. Sandel, *Justicia*, Editorial Debate, España 2011, pág. 121

138

excepcionales como la afectación a terceros y solo bajo la óptica del más exigente escrutinio.

Implicito en el derecho a la autonomía personal y corporal se encuentra el derecho y responsabilidad moral de cada cual para decidir el respeto que su cuerpo merece y actuar de conformidad con sus propias concepciones, sobre la santidad del cuerpo y su situación particular.

Si no aceptamos esta dimensión del derecho a la autonomía, nos podríamos situar bajo el absurdo que el Estado podría, por ejemplo, prohibir el que un individuo rehusara tratamiento médico, el derecho a decidir si procrear o, bien, el derecho a decidir si trabajar o no.

Mientras no se considere que la autonomía individual tiene una dimensión normativa, la protección a la esfera personal del individuo no tendrá más protección que aquella que le permita la coyuntura política del momento y la próxima elección democrática.

En el mismo sentido se han pronunciado otros tribunales constitucionales. La Corte Constitucional colombiana, en la sentencia C-239/97, sobre el homicidio por piedad, dispuso lo siguiente:

"La Constitución se inspira en la consideración de la persona como un sujeto moral, capaz de asumir en forma responsable y autónoma las decisiones sobre los asuntos que en primer término a él incumben, debiendo el Estado limitarse a imponerle deberes, en principio, en función de los otros sujetos morales con quienes está avocado a convivir"

La Constitución mexicana también se inspira en la dignidad humana y en la consideración de la persona como sujeto moral, capaz de asumir de forma responsable y autónoma las decisiones sobre los asuntos que en primer término a él incumben. Así las cosas, en el autoconsumo de Cannabis, que no afecta, sino exclusivamente a quien la consume, hay un límite al Estado mexicano. En efecto, si la manera en que los individuos ven su cuerpo refleja sus propias convicciones, ellos no pueden ser forzados a no consumir sustancias que los alteren o les cambien el ánimo, con el argumento inadmisibles de que una mayoría lo juzga un imperativo religioso o moral.

La misma Corte Constitucional de la República de Colombia ahondó en el derecho a la autonomía, en la Sentencia No. C-221/94, sobre la despenalización del consumo de la dosis personal de Marihuana:

***DROGADICCIÓN- Comportamiento personal**

"Dentro de un sistema penal liberal y democrático, como el que tiene que desprenderse de una Constitución del mismo sello, debe estar proscrito el peligrosismo, tan caro al positivismo penal, hoy por ventura ausente de todos los pueblos civilizados. Porque a una persona no pueden castigarla por lo que posiblemente hará, sino por lo que efectivamente hace. A menos que el ser drogadicto se considere en sí mismo punible, así ese comportamiento no trascienda de la órbita más íntima del sujeto consumidor, lo que sin duda alguna es abusivo, por tratarse de una órbita precisamente sustraída al derecho y, a fortiori, vedada para un ordenamiento que encuentra en la libre determinación y en la dignidad de la persona (autónoma para elegir su propio destino) los pilares básicos de toda la superestructura jurídica. Sólo las conductas que interfieran con la órbita de la libertad y los intereses ajenos, pueden ser jurídicamente exigibles. No se compadece con nuestro ordenamiento básico la tipificación, como delictiva, de una conducta que, en sí misma, sólo incumbe a quien la observa y, en consecuencia, está sustraída a la forma de control normativo que llamamos derecho y más aún a un sistema jurídico respetuoso de la libertad y de la dignidad humana, como sin duda, lo es el nuestro"

"(...)

"El legislador no puede válidamente establecer más limitaciones que aquellas que estén en armonía con el espíritu de la Constitución. La primera consecuencia que se deriva de la autonomía, consiste en que es la propia persona (y no nadie por ella) quien debe darle sentido a su existencia y, en armonía con él, un rumbo. Si a la persona se le reconoce esa autonomía, no puede limitársela sino en la medida en que entra en conflicto con la autonomía ajena. El considerar a la persona como autónoma tiene sus consecuencias inevitables e inexorables, y la primera y más importante de todas consiste en que los asuntos que sólo a la persona atañen, sólo por ella deben ser decididos. Decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen. Cuando el Estado resuelve reconocer la autonomía de la persona, lo que ha decidido, ni más ni menos, es constatar el ámbito que le corresponde como sujeto ético: dejarla que decida sobre lo más radicalmente humano, sobre lo bueno y lo malo, sobre el sentido de su existencia. Que las personas sean libres y autónomas para elegir su forma de vida mientras ésta no interfiera con la autonomía de las

otras, es parte vital del interés común en una sociedad personalista, como la que ha pretendido configurar la Carta Política que hoy nos rige.

(Subrayado y énfasis agregado)

* * *

La Corte profundiza en el mismo tema en la sentencia No. C-221/94, sobre la despenalización del consumo de la dosis personal, páginas 17 a 19:

"Es el reconocimiento de la persona como autónoma en tanto que digna ... es decir, un fin en sí misma y no un medio para un fin, con capacidad plena de decidir sobre sus propios actos y, ante todo, sobre su propio destino. La primera consecuencia que se deriva de la autonomía, consiste en que es la propia persona (y no nadie por ella) quien debe darle sentido a su existencia y, en armonía con él, un rumbo. Si a la persona se le reconoce esa autonomía, no puede limitársela sino en la medida en que entra en conflicto con la autonomía ajena."

"El considerar a la persona como autónoma tiene sus consecuencias inevitables e inexorables, y la primera y más importante de todas consiste en que los asuntos que sólo a la persona atañen, sólo por ella deben ser decididos. Decidir por ella es arrebatárle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen."

"Cuando el Estado resuelve reconocer la autonomía de la persona, lo que ha decidido, ni más ni menos, es constatar el ámbito que le corresponde como sujeto ético: dejarla que decida sobre lo más radicalmente humano, sobre lo bueno y lo malo, sobre el sentido de su existencia. Si la persona resuelve, por ejemplo, dedicar su vida a la gratificación hedonista, no injerir en esa decisión mientras esa forma de vida, en concreto, no en abstracto, no se traduzca en daño para otro. Podemos no compartir ese ideal de vida, puede no compartirlo el gobernante, pero eso no lo hace ilegítimo. Son las consecuencias que se siguen de asumir la libertad como principio rector dentro de una sociedad que, por ese camino, se propone alcanzar la justicia."

(Subrayado y énfasis agregado)

De los párrafos transcritos se aprecia que del derecho a la autonomía personal y corporal o del principio de auto-propiedad se desprende que los humanos somos seres responsables por nuestras conductas y que somos libres para disponer de nuestro cuerpo, persona e imagen en la manera y términos que mejor consideremos. Cada cual es libre

a decidir las cuestiones más privadas e importantes de nuestras vidas. El derecho a discernir lo que constituye una vida buena y la concepción que tenemos sobre nuestro cuerpo es un derecho que no puede ser arrebatado por el Estado.

En otras palabras, reconocer la autonomía de la persona, sobre su cuerpo y sobre sus bienes, pero admitiendo que cualquier capricho del legislador es un límite válido, es un juego de palabras para negar la existencia de la autonomía. Es tanto como decir que uno es libre, pero solo para hacer lo que el Estado determine que es correcto y bueno.

El reconocimiento de la autonomía individual sobre el cuerpo y persona no se puede acotar a las Cortes Constitucionales progresistas, como la de la República de Colombia, sino que es extensivo a todas las Cortes Constitucionales maduras. En efecto, la Suprema Corte de Estados Unidos, en *Planned Parenthood v. Casey*, 505 U.S. 833, 851 (1992), sobre el derecho a decidir si procrear un hijo, dispuso lo siguiente:

*"... asuntos, que involucran las decisiones más íntimas y personales que una persona puede tomar en su vida, decisiones centrales para la dignidad y autonomía de una persona, son fundamentales para la libertad que protege el Artículo Catorce. En el corazón de la libertad se encuentra el derecho de que cada persona defina su concepto de existencia, su significado, del universo y del misterio de la vida humana. Creencias sobre estos asuntos no podrían definir los atributos de la personalidad cuando son creados de forma coactiva por el Estado. [505 U.S. 833, 852]"*⁷⁹

De la sentencia en *Planned Parenthood v. Casey*, se concluye que la libertad humana solo se protege al respetar una esfera de autonomía libre de toda injerencia del Estado. Esa esfera debe estar compuesta, cuando menos, por la toma de decisiones íntimas de la persona y por el derecho para que cada cual se forme su propia concepción y cosmovisión del universo, del ser en cuanto tal, de sus propiedades y principios. Los seres humanos solo podemos singularizarnos y ser considerados seres libres al permitírsenos formar nuestra propia concepción de lo bueno y de la vida buena, así como al permitírsenos actuar en consecuencia con éstas.

⁷⁹(La traducción es nuestra) "...matters, involving the most intimate and personal choices a person may make in a lifetime, choices central to personal dignity and autonomy, are central to the liberty protected by the Fourteenth Amendment. At the heart of liberty is the right to define one's own concept of existence, of meaning, of the universe, and of the mystery of human life. Beliefs about these matters could not define the attributes of personhood were they formed under compulsion of the State." [505 U.S. 833, 852] *Planned Parenthood v. Casey*, 505 U.S. 833, 851 (1992).

142

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Estados Unidos ha establecido, en la sentencia *Union Pac. Ry. Co. v. Botsford*, 141 U.S. 250, 251 (1891), lo siguiente:

"Ningún derecho es más sagrado o es resguardado de forma tan cuidadosa por el common law como el derecho de cada persona física de poseer y controlar su propia persona, libre de restricciones o interferencias de otras salvo por autoridad clara e incuestionable de la ley. Como bien dijo el Juez Cooley: "El derecho de una persona puede ser visto como un derecho de completa inmunidad; de ser dejado solo." Cooley en Responsabilidad Civil 29."⁸⁰

De la sentencia en *Union Pacific Railway Company v. Botsford*, se establece que en el Common Law, en consonancia con todos los regímenes fundados en la libertad del individuo, el valor protegido con mayor cuidado y recelo es el derecho de todo sujeto a poseer y controlar su propia persona, libre de ataduras y de imposiciones ajenas al individuo.⁸⁰

La Suprema Corte de Estados Unidos en el caso *Cruzan v. Director, MDH* - 497 U.S. 261 (1990), sobre el derecho a rehusar tratamiento médico, dispuso lo siguiente:

"Todo ser humano de edad adulta y con capacidad de raciocinio tiene el derecho de determinar qué puede hacerse a su propio cuerpo, (...)

"En balance, el derecho de autodeterminación generalmente tiene más peso que cualquier interés contrario del estado y las personas competentes generalmente se encuentran permitidas para negar tratamiento médico, incluso cuando exista riesgo de muerte. En la mayoría de los casos en los que se indica lo contrario, salvo que involucre el interés de proteger a terceros inocentes, ha prevalecido la competencia del paciente para tomar una decisión racional y considerada."⁸¹

⁸⁰ (La traducción es nuestra) "No right is held more sacred or is more carefully guarded by the common law than the right of every individual to the possession and control of his own person, free from all restraint or interference of others unless by clear and unquestionable authority of law. As well said by Judge Cooley: "The right to one's person may be said to be a right of complete immunity; to be let alone." Cooley on Torts 29." *Union Pac. Ry. Co. v. Botsford*, 141 U.S. 250, 251 (1891).

⁸¹ (La traducción es nuestra) "Every human being of adult years and sound mind has a right to determine what shall be done with his own body, ... On balance, the right to self-determination ordinarily outweighs any countervailing state interests, and competent persons generally are permitted to refuse medical treatment, even at the risk of death. Most of the cases that have held otherwise, unless they involved the interest in protecting innocent third parties, have concerned the patient's

En la sentencia *Cruzan v. Director* (sobre el derecho a rehusar tratamiento médico) se dispone que cualquier balance de derechos, el derecho a la autodeterminación tiene mayor peso a cualquier otro derecho, incluso bajo el riesgo de muerte, a menos que se vieran involucrados los derechos de terceras personas. Esto es, que todo sujeto se considera capaz para tomar decisiones racionales sobre su persona, incluso si sus decisiones lo conducen a un daño o, en el extremo, la muerte.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República de Argentina, vincula la existencia del derecho a la autodeterminación con el derecho a la libertad individual. En concreto, en el fallo particular del Dr. Petracci, en el fallo *Bazterrica* 308:1392, del 29 agosto 1986, se dispuso lo siguiente:

"la libertad individual protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad, están reservadas al propio individuo."

6.3. VIOLACIÓN AL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN

La sentencia de amparo omite hacer un análisis sobre la infracción al derecho la autodeterminación personal y corporal y libertad individual. Así, en la sentencia de amparo se pasa por alto que artículos 234, 235, 237, 245, 248 y 368 de la Ley General de Salud prohíben la siembra, cultivo, cosecha, elaboración y cualquier otra conducta relacionada con el autoconsumo de Marihuana.

No obstante, la elección a consumir Cannabis es una decisión que es profundamente personal. Es el individuo quien toma la decisión y quien se ve afectado en su condición anímica. Solo el sujeto padece un cambio de percepción, ánimo y estado de conciencia al consumir Cannabis. Adicionalmente, es el sujeto quien responsablemente debe vivir con las consecuencias producto de su decisión.

El derecho a la autodeterminación personal y corporal implica que los seres humanos tienen para sí el derecho moral y la responsabilidad jurídica de afrontar las decisiones más importantes sobre el significado y valor de sus propias vidas. No es legítima la intervención por el Estado sobre la base de que se esté protegiendo moral o físicamente al individuo, contra su propia voluntad. El derecho a la autodeterminación o autonomía personal garantiza al individuo el trato de adultos responsables que pueden asumir el control de sus vidas y afectar concienzudamente su integridad corporal y salud personal.

Por otro lado, el consumo personal y razonado de Cannabis no perturba o afecta las acciones de tercero alguno. Los efectos de la Cannabis los recibe, exclusivamente, la persona que la consume, sin que haya efecto pernicioso alguno para el resto de la sociedad. La afectación directa la sufre la persona que lo consume.

Si partimos de la máxima de que "[s]obre sí mismo, sobre su cuerpo y su espíritu, el individuo es soberano",⁸² la prohibición a la siembra y auto-consumo de Marihuana es inconstitucional y viola el derecho humano a la autodeterminación personal y corporal.

La prohibición al consumo de Marihuana en la Ley General de Salud es una prueba clara de la forma en que desde el poder legislativo se han impuesto sobre la persona concepciones particulares de la santidad del cuerpo humano y se ha legislado en asuntos de conciencia personal, creencias, elección y autonomía personal.

Toda vez que la Ley General de Salud vulnera la autonomía individual de el quejoso, debe ser revisada desde la óptica de un escrutinio severo. La Ley General de Salud prohíbe el consumo de Marihuana con el objeto de proteger la salud. Lo hace, pues considera su labor el disuadir, a su juicio, malos hábitos que pudieran afectar la salud particular del individuo. Esto es, el Estado asume que el individuo no tiene la capacidad racional de disponer de su cuerpo, de su mente y de su persona.

Si bien existe consenso en que la protección a la vida, la salud e integridad de los seres humanos son algunas finalidades importantes y necesarias de todo Estado, éstas no son las únicas finalidades del Estado ni pueden protegerse a costa de otros intereses de la misma jerarquía. La

⁸² John Stuart Mill, *"On Liberty"*, *op.cit.*

Protección de la Salud, suponiendo que en el caso concreto estuviere en juego, puede ser un propósito valioso del Estado, pero no sagrado ni desprovisto de límites.

Los artículos impugnados de la Ley General de Salud plasman la concepción metafísica proveniente del Estado, que lo envuelve todo, en relación con la integridad del cuerpo humano y de la persona. Estos artículos suponen que el cuerpo de los individuos y su estructura no depende sustancialmente de la voluntad reservada o abierta del individuo, sino que debe ser protegido de toda alteración, cambio de percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento. Adicionalmente, los artículos impugnados configuran una situación donde nada puede sustraerse del acto decisorio del Estado, por encima de cualquier interés o derecho humano.

Si el derecho contra-mayoritario a la autodeterminación significa algo, es al menos una protección frente a la modernidad gestora del Estado para imponer valores sociales y la fijación de criterio y parámetros respecto de la vida buena y del uso apropiado del cuerpo humano.

En efecto, la obligación del Estado para defender la salud no está exenta de la confrontación con otros valores constitucionales y con regularidad debe ceder ante otros intereses, como en el caso de la muerte con dignidad, en el caso de los derechos reproductivos, libertad de culto, cuando está en juego la autonomía, la auto-propiedad, la identidad personal, el libre desarrollo de la personalidad y la propia imagen.

Desde una perspectiva secular y pluralista, que respete la autonomía moral del individuo y las libertades y derechos, no se puede admitir que el legislador imponga coercitivamente una visión de lo que es valioso para cada individuo. En efecto, a partir del derecho a la autodeterminación personal y corporal se debe admitir que cada persona puede decidir de qué forma vive, el trato que da a su cuerpo y los valores, metas y conductas bajo los cuales es digno tratar la vida y a la persona.

La disposición que uno hace sobre su propio cuerpo corresponde única y exclusivamente a cada particular. Cuando, como en el caso concreto, el Congreso interfiere con la esfera privada de autonomía, bajo el argumento de proteger la salud del individuo, pero, en realidad, impone una ideología acorde con la concepción política que no pertenece a

la esfera del yo, sino a la esfera decisoria del Estado, entonces la intervención en la autonomía personal y corporal no solo es inconstitucional, sino también intelectual y moralmente indefendible.

6.4 ANÁLISIS SOBRE LA VALIDEZ DE LAS RESTRICCIONES DEL DERECHO LA AUTODETERMINACIÓN PERSONAL Y CORPORAL Y LIBERTAD INDIVIDUAL

En el tercer agravio se formula un análisis detallado sobre proporcionalidad y escrutinio. Ahí se establecen las razones por las que las restricciones a derechos humanos, tratando de la política prohibicionista, no son adecuadas, ni cumplen con los estándares fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A continuación se ofrece una síntesis de los argumentos vertidos en el tercer agravio del presente recurso de revisión:

Inclusive, si se adujera que los derechos a la autodeterminación personal y corporal, libertad individual y dignidad humana no son absolutos, los límites establecidos por la prohibición en la siembra, cultivo, preparación, posesión y demás conductas relacionadas con el autoconsumo de Marihuana, en los artículos 234, 235, 237, 245, fracción I, 247 en su último párrafo y 248, implican una restricción inconstitucional e ilegítima.

En efecto, para restringir un derecho fundamental, conforme a los exámenes de escrutinio y de proporcionalidad empleados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se debe cumplir con los siguientes requisitos: primero, tener una finalidad válida o legítima dentro del ámbito constitucional; segundo, que la medida empleada sea instrumental (o idónea) para alcanzar la finalidad deseada;⁸³ tercero, que la medida sea necesaria para alcanzar la finalidad propuesta (la alternativa menos restrictiva y que no restrinja más allá de lo estrictamente necesario), y cuarto, proporcionalidad en estricto sentido, la persecución de un objetivo constitucionalmente

⁸³ El fallo del amparo en revisión [REDACTED] llama a esta etapa "análisis de idoneidad", pero consideramos que tanto en aquel fallo como en esta demanda nos referimos a un mismo concepto. Se trata de un análisis sobre la instrumentalidad de los medios empleados. Lo que para Aharon Barak es el examen de *Conexión Racional* ("Rational Connection") y para la jurisprudencia Norte Americana son exámenes de "Relación Substantial" ("Substantial Relation").

legítimo no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.⁸⁴

Como se señaló en los conceptos de violación anteriores, si se lleva a cabo el examen de escrutinio respectivo, se llega a la conclusión que la medida consistente en la Política Prohibicionista resulta una restricción ilegítima de nuestros derechos constitucionales, como a continuación se sintetiza:

NOVI
E
ECON

En primer lugar, la Política Prohibicionista no tiene una finalidad legítima, pues coaccionar a una persona a gozar de buena salud contra su voluntad bajo ninguna óptica puede ser permitido. Adicionalmente, la imposición de un estándar único de una vida saludable no es admisible para un estado liberal, que basa su existencia en el reconocimiento de la singularidad e independencia humana. La única excepción válida para la autodeterminación es el que estén en juego derechos de terceros, lo que no sucede en el caso concreto. En segundo lugar, la Política Prohibicionista no es instrumental para prevenir posibles riesgos a la salud ni para combatir las adicciones,⁸⁵ ya que el número de consumidores de Cannabis ha aumentado en los últimos años y hay pruebas objetivas que muestran que el despenalizar el consumo no generaría un aumento en el consumo de la misma.⁸⁶ Esto es, de la medida impuesta no se siguen los fines buscado, por lo que no se puede hablar de instrumentalidad de la medida. En tercer lugar, la política no es necesaria, pues 1) suprime más allá de lo estrictamente necesario los derechos restringidos, y 2) existen alternativas menos restrictivas de los derechos humanos para proteger la salud de los consumidores. Finalmente, la Política Prohibicionista no es proporcional en sentido estricto, toda vez que genera mayores daños que beneficios.⁸⁷

En conclusión, la sentencia de amparo transgrede los principios de congruencia externa y exhaustividad, pues omite analizar los

⁸⁴ RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Novena Época; Registro, 169209; Instancia, Primera Sala; Tesis Aislada; Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVIII, Julio de 2008; Materia, Constitucional; Tesis, 1a. LXVI/2008; pág. 462.

⁸⁵ Amanda Feilding Convenor, *op.cit.*, pág. 10.

⁸⁶ Encuesta Nacional de Adicciones 2011, pág. 43

⁸⁷ Ver el tercer concepto de violación, tercer agravio, en el que se expone detalladamente la forma en que se restringe de forma sobre-incluyente los derechos aquí invocados, se exponen diversas alternativas para los fines buscados por el estado que son menos restrictivas a los derechos y se hace un balance de beneficios y perjuicios que genera la Política Prohibicionista.

argumentos sobre los derechos humanos a la autodeterminación personal y corporal y libertad individual. Así las cosas, se debe declarar que los artículos impugnados de la Ley General de Salud son inconstitucionales y violan los derechos a la autodeterminación personal y corporal, libertad individual y dignidad humana. Se debe pues, como efecto de la sentencia que concede el amparo, ordenar al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que permita que el quejoso pueda sembrar, cultivar, preparar, poseer suficiente Marihuana para su autoconsumo habitual y reiterado.

SÉPTIMO AGRAVIO. - Violación de los principios de fundamentación y motivación adecuadas, congruencia y exhaustividad, en relación al quinto concepto de violación sobre legalidad, fundamentación y motivación.

Las autoridades responsables de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios violan en perjuicio del quejoso el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica, pues sin fundamento y motivo justificado alguno decide resolver desfavorablemente la solicitud de consumo personal del quejoso.

El primer párrafo del artículo 16 constitucional consagra el derecho humano de que "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."

En el concepto de violación quinto se sostuvo que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios transgrede los derechos del quejoso, pues, entre otras cosas, (a) solicitó extemporáneamente que el quejoso acreditara el requisito de interés jurídico o legítimo; (b) contestó pasados los tres meses desde la solicitud del quejoso; (c) resolvió desfavorablemente con sustentó en la información solicitada fuera de tiempo; y (d) solicitó que el quejoso cumpliera con requisitos no previstos en la normatividad aplicable.

- Como no está permitido otorgar una autorización para el uso de cannabis, no hay un término en la ley y, por consecuencia, no se actuó fuera de término.
- Que porque la prevención se formuló con el afán de acreditar un requisito que consideró importante, entonces tenía permitido violar los términos procesales.
- Para dar una respuesta puntual y oportuna.

I. Primero, el que esté prohibido el uso de cannabis en la Ley General de Salud no se sigue que la COFEPRIS no tenga un plazo máximo para prevenir al quejoso. Al respecto, el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece inequívocamente que el plazo máximo para que COFEPRIS respondiera a la solicitud de consumo personal era de tres meses. Adicionalmente, el 17-A dispone que el plazo máximo para que requiriera información adicional era de una tercera parte del plazo primigenio. En otras palabras, COFEPRIS tenía como máximo un mes para solicitar información adicional. Plazo que corrió en exceso.

El que no hubiera un plazo específico para contestar la solicitud formulada por el quejoso hace incluso más evidente la aplicabilidad de los artículos 17 y 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

II. En segundo lugar, Cofepris alega que debido a que la prevención se formuló con el *"afán de que se acreditara un interés jurídico o legítimo"*, entonces había una excepción que le permitía actuar fuera de término. Al respecto, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en sus artículos 17 y 17-A, no establece la excepción invocada por la autoridad. Como norma supletoria de la Ley General de Salud, no permite que Cofepris solicite información adicional fuera de término, incluso si a juicio de la autoridad la información faltante es importante.

III. Finalmente, Cofepris sostiene que la solicitud de información adicional se llevó a cabo para dar respuesta *"puntual y oportuna"* a la solicitud del quejoso, entonces podía hacer una solicitud extemporánea de información.

La indebida fundamentación y motivación es evidente. Para dar respuesta puntual y oportuna debe seguir los plazos y tiempos establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no violarlos.

Sobre este punto, la sentencia de amparo afirma lo siguiente:

"2) Existe una indebida fundamentación y motivación de la facultad para solicitar extemporáneamente la acreditación del interés jurídico y legítimo para resolver sobre la autorización sanitaria. (...)

"En cuanto a los argumentos planteados en los incisos 2), 4), 5) y 6), si bien aparentemente se refieren al oficio reclamado, lo cierto es que tales planteamientos están sustentados en el hecho que la autoridad responsable previno al quejoso fuera del plazo previsto en la ley, determinación que se realizó en el oficio "de doce de febrero de dos mil dieciséis, respecto del cual se sobreseyó en el considerando respectivo de este fallo, motivo por el cual, tales argumentos resultan inoperantes."

Es incorrecta la afirmación de la sentencia de amparo. Pese a que se haya sobreesido la demanda de amparo respecto del oficio del 12 de febrero de 2016, la extemporaneidad de tal oficio sigue siendo relevante para la litis planteada. La extemporaneidad de tal actuación es una premisa importante para concluir que el acto de autoridad (la resolución desfavorable sobre el uso de cannabis) también es extemporánea, que se sustentó en información solicitada fuera de tiempo y que se basa en requisitos no previstos en la normatividad aplicable.

De modo que el análisis sobre la extemporaneidad del oficio de 12 de febrero de 2016 sí es relevante para analizar la legalidad del acto de autoridad. En consecuencia, la sentencia de amparo se encuentra indebidamente fundada y motivada en relación a la fundamentación y motivación del acto de autoridad.

1. Facultad Para Contestar Fuera de Tiempo

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece tres meses plazo máximo para dar resolver cualquier solicitud. Tal extremo se desprende del artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Pese a que el quejoso formuló la solicitud de consumo personal de cannabis en noviembre de 2015, la autoridad notificó su respuesta desfavorable en agosto de 2016. Esto es, violó el artículo 17 de la ley en comento.

Sobre tal punto, el Juez de Distrito responde lo siguiente:

"4) Desechó extemporáneamente porque el plazo para resolver cualquier solicitud en términos de la Ley del Procedimiento Administrativo es de tres meses. (...)

"En cuanto a los argumentos planteados en los incisos 2), 4), 5) y 6), si bien aparentemente se refieren al oficio reclamado, lo cierto es que tales planteamientos están sustentados en el hecho que la autoridad responsable previno al quejoso fuera del plazo previsto en la ley, determinación que se realizó en el oficio ** de doce de febrero de dos mil dieciséis, respecto del cual se sobreseyó en el considerando respectivo de este fallo, motivo por el cual, tales argumentos resultan **Inoperantes.**"

El argumento de la sentencia descansa sobre la premisa equivocada que el quejoso está combatiendo el oficio de doce de febrero de 2016. Se trata de un argumento infundado, pues tal apartado de la demanda de amparo hace referencia inequívocamente a la extemporaneidad acto de autoridad de agosto de 2016.

El plazo de tres meses para dar respuesta a una solicitud es una regla de suma importancia para la Administración Pública Federal. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que los servidores públicos que incumplen por dos veces lo dispuesto en el artículo 17 serán sujetos a destitución e inhabilitación por un año para desempeñar cargos en el servicio público:

"Artículo 70-A.- Es causa de responsabilidad el incumplimiento de esta Ley y serán aplicables las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En todo caso se destituirá del puesto e inhabilitará cuando menos por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público:

"I. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o comisión, incumpla por dos veces lo dispuesto en el artículo 17;"

Así las cosas, no es una falta menor la cometida por las autoridades de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Contestó casi diez meses después de que el quejoso hubiera realizado la solicitud para uso personal de cannabis. Esto es, se excedió por casi siete meses del plazo máximo autorizado por el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Lo conducente es resolver que la sentencia de amparo se encuentra indebidamente fundada y motivada sobre

44/12
151

el incumplimiento al artículo 17 de la ley en comento. En el mismo sentido, se debe resolver que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios respondió de forma extemporánea, para que después pueda el quejoso acudir a las instancias administrativas correspondientes y asegurar la sanción y remoción de los funcionarios involucrados.

2. Facultad Para Resolver Desfavorablemente a Partir de Información Solicitada Fuera de Tiempo

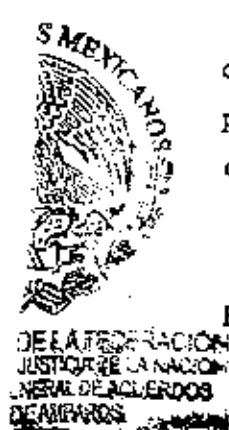
El Oficio de Negativa para usos del Cannabis pretende resolver desfavorablemente la solicitud de consumo personal de cannabis precisamente con base en la información adicional que solicitó en el Oficio de Prevención.

El Oficio de Negativa transgrede el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, del tenor siguiente:

"Artículo 17-A.- Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite.

"Salvo que en una disposición de carácter general se disponga otro plazo, la prevención de información faltante deberá hacerse dentro del primer tercio del plazo de respuesta o, de no requerirse resolución alguna, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito correspondiente. La fracción de día que en su caso resulte de la división del plazo de respuesta se computará como un día completo. En caso de que la resolución del trámite sea inmediata, la prevención de información faltante también deberá hacerse de manera inmediata a la presentación del escrito respectivo.

"De no realizarse la prevención mencionada en el párrafo anterior dentro del plazo aplicable, no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. En el supuesto de que el requerimiento de información se haga en tiempo, el plazo para que la dependencia correspondiente resuelva el trámite se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en el que el interesado conteste."



151

Del artículo citado se desprende que la autoridad únicamente podía solicitar que se cumplieran con requisitos adicionales dentro del primer tercio del plazo para que este diera respuesta al trámite. A su vez, en el tercer párrafo del artículo se establece que, si se violó con el plazo para solicitar requisitos adicionales, pues entonces no se puede resolver desfavorablemente el trámite por insuficiencia de tal información o por no haber acreditado.

En contravención al artículo invocado, la autoridad solicitó extemporáneamente que acreditara el interés jurídico o legítimo para su solicitud y, posteriormente, en el acto de autoridad afirmó resolver desfavorablemente la solicitud por no haber acreditado el supuesto requisito faltante. En consecuencia, la autoridad transgrede el artículo 17-A, párrafo tercero, en relación con su párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El Juez de Distrito sostiene que este argumento es inoperante porque en la demanda se pretendía impugnar el oficio de doce de febrero de 2016.

"5) Desechó a partir de información solicitada fuera de tiempo. (...)

"En cuanto a los argumentos planteados en los incisos 2), 4), 5) y 6), si bien aparentemente se refieren al oficio reclamado, lo cierto es que tales planteamientos están sustentados en el hecho que la autoridad responsable previno al quejoso fuera del plazo previsto en la ley, determinación que se realizó en el oficio ** de doce de febrero de dos mil dieciséis, respecto del cual se sobreseyó en el considerando respectivo de este fallo, motivo por el cual, tales argumentos resultan inoperantes."

Contrario a tal afirmación, el quejoso no impugna que el oficio de 12 de febrero hubiera sido extemporáneo. En cambio, afirma que el acto de autoridad, de agosto de 2016, pretendió resolver desfavorablemente a partir de información fuera de tiempo. La extemporaneidad de la prevención es relevante para alegar que la resolución desfavorable es ilegal, pero no constituye por sí el acto reclamado. Se puede apreciar entonces que la sentencia se encuentra indebidamente fundada y motivada y que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios sí transgredió el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

3. Indebida Respuesta con Sustento en Elementos no Previstos en la Normatividad Aplicable

El Oficio de Negativa se funda en más requisitos que los establecidos en la normatividad relevante. Conforme al principio de legalidad, tutelado en los artículos 14 y 16 del texto constitucional, las autoridades no pueden realizar conducta alguna salvo las expresamente facultadas. Tal principio es plasmado en materia administrativa en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, del tenor siguiente:

"Artículo 15.- La Administración Pública Federal no podrá exigir más formalidades que las expresamente previstas en la ley."

En contravención al principio de legalidad, así como el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la autoridad no podía exigir requisitos no previstos en la normatividad para responder la solicitud de consumo personal del quejoso. Sin embargo, en el Oficio de Negativa ofrece la siguiente justificación para exigir un requisito no previsto en ley alguna:

"En el particular, es preciso hacer notar al solicitante que, el interés jurídico o legítimo que le fue requerido acreditar, precisamente no aparece no aparece como parte de los requisitos a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que no es un requisito de formalidad sino un requisito de fondo que entraña la existencia de un derecho sustantivo otorgado por el conjunto normativo que el particular pueda ejercer o reclamar de la autoridad del Estado."

El aserto de Cofepris se encuentra indebidamente fundado y motivado, pues el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no distingue entre supuestos requisitos de formalidad y requisitos de fondo.

Se puede apreciar, entonces, que las autoridades responsables de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios violan en perjuicio del quejoso el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica, pues sin fundamento y motivo justificado deciden resolver desfavorablemente la solicitud de consumo personal del quejoso.

251

Por su parte en la sentencia de amparo se aduce que estos argumentos son inoperantes porque supuestamente impugnan el oficio de 12 de febrero de 2016.

"6) Solicitó información de elementos no previstos en la normatividad aplicable, en contravención al artículo 15 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

"En cuanto a los argumentos planteados en los incisos 2), 4), 5) y 6), si bien aparentemente se refieren al oficio reclamado, lo cierto es que tales planteamientos están sustentados en el hecho que la autoridad responsable previno al quejoso fuera del plazo previsto en la ley, determinación que se realizó en el oficio (...), de doce de febrero de dos mil dieciséis, respecto del cual se sobrescuyó en el considerando respectivo de este fallo, motivo por el cual, tales argumentos resultan inoperantes."

Se reitera que el quejoso no impugna que el oficio de 12 de febrero hubiera solicitado información no prevista por la regulación administrativa. En cambio, afirma que el acto de autoridad, de agosto de 2016, pretendió resolver a partir de información y documentación no prevista en la normatividad administrativa. Esto es, se alega en la demanda de amparo que el acto de autoridad de agosto de 2016 (no así el de febrero del mismo año) es el que contraviene el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por todo lo antes expuesto, se debe concluir que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios violan en perjuicio del quejoso el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica. La autoridad (i) contestó pasados los tres meses desde la solicitud del quejoso; (ii) desechó con sustentó en la información solicitada fuera de tiempo; y (iii) resolvió con sustento en requisitos no previstos en la normatividad aplicable.

OCTAVO AGRAVIO. - Violación de los principios de fundamentación y motivación adecuadas, congruencia y exhaustividad, en relación al cuarto concepto de violación sobre igualdad.

En el cuarto concepto de violación se alegó una afectación al principio de igualdad constitucional contenido en los artículos 1º y 133 del texto constitucional. Ahora bien, el derecho a la igualdad encierra una

prohibición de discriminación y exige que a supuestos de hecho iguales les sean aplicadas unas consecuencias jurídicas que sean también iguales.

Constituida como una obligación de tratar por igual a los que se encuentran en idéntica situación, la igualdad arroja, así, otra característica: la de ser un límite a la actuación de los Poderes Públicos. De igual manera, el reconocimiento constitucional de la igualdad erige un valladar a la actuación de los Poderes Públicos, que no lo pueden franquear, incluyendo a los organismos legislativos.

Ahora bien, los actos reclamados de las autoridades responsables de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios viola los artículos 1° y 13° de la Constitución Federal pues trata de forma desigual a sujetos que se ubican en la misma situación jurídica. Además, el trato que las normas impugnadas confieren al quejoso no cumple con los criterios establecidos por la jurisprudencia de nuestros tribunales federales, como tampoco con la que han pronunciada los Tribunales internacionales. Estos criterios son en el sentido de que el trato desigual sólo puede darse si existe un fundamento objetivo y razonable para hacerlo, que en el presente caso no existe.

Con base en lo antes señalado, es claro que el quejoso soporta en su perjuicio un trato desigual e injustificado; que dicha discriminación tiene por objeto menoscabar sus derechos y libertades y que no existe razonabilidad alguna para las distinciones en trato generadas por las autoridades, pues en casos similares ha resuelto expresamente por la negativa a la solicitud de autorización para el consumo de la marihuana, en tanto que para el quejoso decidió rechazar la solicitud.

Así pues, enfrentamos una patente desigualdad proijada por los actos de las autoridades de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, pues ésta, ante dos situaciones fácticas iguales, las trata en forma distinta, sin ninguna justificación.

Además, los actos de las autoridades responsables quebrantan los derechos humanos reconocidos en los artículos 1° y 13 Constitucionales, debido a que crean una situación discriminatoria y un tratamiento desigual en perjuicio de la promovente del juicio de amparo, al desechar su solicitud de autorización para consumir responsablemente la marihuana, en tanto que a otra personas físicas, como a [REDACTED]

[REDACTED] y la persona moral [REDACTED] y [REDACTED], atendió su petición sin mayores requisitos y les resolvió negando su petición.

En efecto, el 6 de junio de 2013 [REDACTED]

[REDACTED] y la [REDACTED] solicitaron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios una autorización para el consumo individual del estupefaciente Cannabis Sativa (indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) así como del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol, los isómeros Δ6a (10a), Δ6a (7), Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ9 (11) y sus variantes estereoquímicas) (conjuntamente "Marihuana" o "Cannabis"). Esto es, solicitaron autorización sanitaria para que los peticionarios y los asociados de la [REDACTED] pudieran consumir Marihuana regularmente, de forma personal y con fines meramente lúdicos o recreativos.

Mediante oficio de fecha 13 de junio de 2013, el C. Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios negó a las personas referidas en el párrafo que antecede, la autorización solicitada para el autoconsumo de Marihuana, así como a sus asociados en lo particular, en los términos siguientes:

"Conforme al artículo 235 y 237 de la Ley General de Salud indica "Queda prohibido en el territorio nacional, la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo de las siguientes sustancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, indica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormifera, papaver bacteatum y erithroxylon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones".

"Conforme al artículo 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud se indica "Queda prohibida la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo, de las sustancias incluidas en la fracción I del Artículo 245" entre las

115
159

sustancias enlistadas en la fracción I del Artículo 245 se encuentra el THC (Tetrahidrocannabinol).

"Por lo anterior expuesto hasta el momento no puede ser expedida autorización alguna para la siembra cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso o consumo de Cannabis Sativa (indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y THC (Tetrahidrocannabinol)."

En el caso de [REDACTED], el 13 de noviembre de 2015 solicitó la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios la autorización para consumo personal de cannabis, y obtuvo la respuesta el 24 del mismo mes y año. Efectivamente, el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios negó la autorización solicitada por el [REDACTED] a través del Oficio número [REDACTED] del veinticuatro de noviembre de dos mil quince, del tenor siguiente:

"Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, 17 y 39 fracciones XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracciones XXIV y XXX, 4 fracción III, 17 bis fracciones IV y VI, 194, 194 bis, 244, 245, 247, 283, 284, 285, 289, 290, 368, 369, 371 y 375 fracción IX de la Ley General de Salud; 1, 2, 3, 15 y 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 2, inciso C fracción X, 36 y 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 45, 133, 145, 153, 155, 156, 195 y 196 del Reglamento de Insumos para la Salud; 3°, fracción I, inciso j y VII y 14 fracción I y VII del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y en relación con su solicitud con número de entrada [REDACTED] de fecha 13 de noviembre de 2015, en la que solicita autorización para que el petionario, el C. [REDACTED] pueda consumir Cannabis Sativa (indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como THC (tetrahidrocannabinol), al respecto se informa:

"Conforme al artículo 235 y 237 de la Ley General de Salud indica "Queda prohibido en el territorio nacional, la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo de las siguientes sustancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, indica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormifera, papaver bacteatum y erithroxilon novogratesco o coca, en cualquiera de

140

sus formas, derivados o preparados".

"Conforme al artículo 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud se indica "Queda prohibida la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo, de las sustancias incluidas en la fracción I del Artículo 245" entre las sustancias enlistadas en la fracción I del Artículo 254 se encuentra el THC (tetrahidrocannabinol).

"Por lo anterior expuesto hasta el momento no puede ser expedida autorización alguna para la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso o consumo de Cannabis Sativa (indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como THC (tetrahidrocannabinol).

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.

"EL COMISIONADO DE AUTORIZACIÓN SANITARIA

"JUAN CARLOS GALLAGA SOLORZANO."

Viene el caso precisar que la solicitud del hoy quejoso se presentó ante las autoridades de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios con mucha antelación a la presentada por [REDACTED] no obstante, esta última fue respondida a la semana de presentada.

El Juez de Distrito resuelve infundados los argumentos sobre igualdad de la demanda de amparo. Establece que tanto en el caso del abogado [REDACTED] como en el supuesto del quejoso hubo una aplicación de los artículos de la política prohibicionista. A su juicio, el trato es el mismo y, por consecuencia, no se transgrede la garantía de igualdad:

"Al respecto, cabe mencionar que el análisis de los actos reclamados en el presente caso, partió de la premisa **-planteada por el propio quejoso-** que el desechamiento de la solicitud de autorización sanitaria para consumo personal de marihuana con fines recreativos, por estimar que el quejoso no contaba con un derecho tutelado para la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión, transporte de la semilla, **se trata en realidad de una negativa implícita** que tiene sustento, precisamente, en las restricciones contempladas en las normas reclamadas, pues de ellas no se desprende que un ciudadano pueda gozar de una autorización de tal naturaleza ni que la autoridad pueda otorgarla. (...)

"Así, al considerar que el desechamiento es, en realidad una negativa a otorgar la autorización sanitaria que se sustenta exactamente en la misma razón y al basar la violación a la garantía de igualdad en el hecho que su solicitud fue desechada, mientras que a otros solicitantes les fue negada, es evidente que resulta infundado el concepto de violación."

Tiene razón el Juez de Distrito cuando afirma que en el presente caso y en el caso de [REDACTED] fueron aplicados los artículos de la política prohibicionista. Si bien, como bien señala el Juez de Distrito, en ambos casos hay una ampliación en detrimento del solicitante de la política prohibicionista, el trato dista de haber sido equitativo.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALLO
JEFATURA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA FISCALÍA
FONDO DE DEFENSA

La aplicación de la política prohibicionista en detrimento de los quejosos no es el único parámetro de comparación entre unas y otras personas. El Sr. [REDACTED] ha recibido un trato dispar y preferencial diverso del que recibió el quejoso. En la siguiente tabla se pueden apreciar algunos criterios diferenciadores entre la forma en que el quejoso y el diverso sujeto fueron tratados por las autoridades de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios:

Solicitud del 13 de noviembre de 2015	Solicitud del 13 de noviembre de 2015
Aplicación expresa de la política prohibicionista	Aplicación implícita de la política prohibicionista
Respuesta definitiva sin prevención en noviembre de 2015	Solicitud de información adicional en febrero de 2016
Respuesta definitiva sin prevención en noviembre de 2015	Respuesta definitiva diez meses después de la solicitud, en agosto de 2016

Pese a tratarse de situaciones idénticas, en las que ambos sujetos formularon solicitudes de uso personal de cannabis en la misma semana, recibieron un trato claramente diferenciado.

A partir del contraste del expediente administrativo del Sr. [REDACTED] y del quejoso, se puede apreciar una clara desigualdad. Se puede apreciar así que el quejoso ha sido blanco de una trato discriminatorio u objeto de una estrategia litigiosa a modo, para impedir que acceda a la justicia constitucional y haga valer sus derechos humanos. De tales constancias se desprenderá que las autoridades cuyos actos se reclaman no han aplicado la ley de forma neutral y objetiva.

Por todo lo anterior concluimos que los actos de las autoridades responsables antes señaladas son violatorios de los derechos

humanos a la igualdad y no discriminación que reconoce el artículo 13 constitucional, pues no cumple con los criterios necesarios para llevar a cabo distinciones entre sujetos.

A la vista de todo lo expuesto, lógica y jurídicamente debemos de concluir que los actos reclamados de la autoridad responsable, Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, conllevan un tratamiento de desigualdad que perjudica al quejoso.

Por todas las anteriores consideraciones resulta palmario que el señor Juez de Distrito a quo ilegalmente desestimó los conceptos de violación de la demanda de amparo, cuando debió declararlos fundados, y pido que se corrija este error in judicando, y se declaren fundados dichos motivos de disconformidad y se conceda al quejoso el amparo que impetra.

En mérito de lo expuesto y fundado, a usted, C. Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México atentamente pido se sirva tener por interpuesto el presente recurso de revisión contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional, disponga mandar distribuir las copias del escrito de expresión de agravios que acompaño, y ordene que se remitan los autos originales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que conozca del presente recurso.

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atentamente pido, se sirva admitirlo, y en su oportunidad dicte ejecutoria en que revoque la negación que pronunció el Juez de Distrito a quo, y entrando al fondo del asunto, conceda al quejoso el amparo impetrado.

PROTESTO LO NECESARIO

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2016.

[Firma manuscrita]

autorizado del quejoso.



09:009m
13 Diciembre 2016
020 copia

UNIDAD ADMINISTRATIVA
COMITÉ DE LOS
JUECES

116 117
8438
183

ASUNTO: Se interpone a Revisión Adhesiva
Expediente: [REDACTED]

ANTECEDENTES: Relacionado con el recurso de revisión promovido por la parte quejosa en contra de la sentencia definitiva dictada por el C. Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Juicio de amparo número [REDACTED], promovido [REDACTED]

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2016.

H. Décimo Segundo Titular de Materia Administrativa del Primer Circuito.
P. [REDACTED]

Carlos Alberto Larios Bernal, delegado de las autoridades señaladas como responsables CC. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud, personalidad que tengo debidamente acreditada en autos del juicio de amparo citado al rubro y en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo; ante Ustedes CC. Magistrados, con el debido respeto comparezco para exponer:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 82, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, vengo a interponer Revisión Adhesiva al medio de impugnación promovido por la parte quejosa en contra de la sentencia definitiva dictada por el C. Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en la que se determinó sobreseer y no amparar en el juicio de amparo que nos ocupa, manifestándose para tal efecto lo siguiente.

PROCEDENCIA DEL RECURSO

Si se toman en consideración los requisitos previstos por 82 y 94 de la Ley de Amparo establecidos en relación con el presente medio de impugnación, se concluye que el recurso de revisión adhesiva procede atendiendo a los siguientes requisitos.

- a) Puede ser promovido por la parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo.
- b) La promovente se adhiere a la revisión interpuesta por otra de las partes en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo de que se trate.

COPIAS: 20
EXPEDIENTES: 0
ANEXOS: 0
OTROS: No
FIRMA: [REDACTED]
RECIBIDO: Llc. Nancy de la Cruz Carbajal

VALUUD

- 2 -

- c) Se promueve dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la admisión del recurso, esto es, se contabilizan dichos días a partir de que el tribunal Colegiado correspondiente notifica la admisión del recurso de revisión.
- d) Se deben expresar los agravios correspondientes.

Lo anterior encuentra sustento en la Tesis XIV.2o.39 K, de la Novena Época, Instancia Segundo tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, Materia común, página 1784, cuyo rubro es: **"REVISIÓN ADHESIVA. EL PLAZO PARA PROMOVERLA ES EL DE CINCO DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN."** (Sic.)

En el caso en particular [REDACTED], interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo citado al rubro, en la cual se sobreseyó y no amparo, por lo que resulta evidente que mis delegantes obtuvieron sentencia favorable, cubriéndose por tanto los requisitos señalados en los incisos a) y b) que anteceden.

Asimismo, es de señalar que se notificó a mis delegantes el pasado 5 de diciembre del 2016, los oficios número III-4130 y III-4133, dictados en el [REDACTED] el cual contiene inserto el auto de 29 de noviembre del año en curso, por el que se admitió a trámite el recurso de revisión promovido por el referido quejoso en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en comento, por lo que el término para interponer el presente recurso de revisión adhesiva corre del 6 al 12 de diciembre del año en curso, descontando de ellos los días 10 y 11 por ser inhábiles, por lo que se cubre el requisito señalado en la fracción c) que antecede.

Finalmente por lo que respecto al inciso d), es de mencionar que los respectivos agravios se manifestaran en líneas posteriores. Por lo anterior, es de concluir que el presente medio de impugnación es procedente y debe ser admitido por sus Señorías al estar promovido en tiempo y forma de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley de Amparo vigente, aplicable al presente asunto.

Previo a la expresión de agravios correspondientes, y atendiendo a la prelación lógica que establece el artículo 93 de la Ley de Amparo vigente, me permito hacer valer ante esa Superioridad las causales de improcedencia que se actualizan en el presente juicio de amparo, mismas que se exponen a continuación:

117
118
189

PRIMERO. Respecto del artículo 479 de la Ley General de Salud, se destaca que procede dictar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII y XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, y 107, fracción I, todos del ordenamiento legal citado con anterioridad. En efecto, tales disposiciones normativas establecen lo siguiente:

Artículo 50. Son partes en el juicio de amparo:

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 10 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

(...)

XII. Contra **actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso**, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 50 de la presente Ley, y **contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;**

(...)

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.

Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

(...)

V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.

Artículo 107. El amparo indirecto procede:

I. Contra **normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso;**

(...)

(El énfasis es propio)

De la transcripción anterior se obtiene que el legislador hizo la distinción para la

improcedencia del juicio de amparo por falta de interés jurídico de la parte quejosa, entre aquellas normas generales que causan perjuicio por su sola entrada en vigor y aquellas que para que entrañen una afectación en la esfera de derechos del gobernado, requieran irreductiblemente de un acto posterior de aplicación.

Además, los artículos transcritos evidencian dos supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado consiste en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, a saber: que la disposición relativa se reclama a partir de su entrada en vigor; o bien que se reclame con motivo del primer acto de aplicación, siempre y cuando en ambos casos se irrogue perjuicio al quejoso.

En el primer supuesto, cuando se reclama la disposición normativa por su sola entrada en vigor, esto es, en su carácter de autoaplicativa, para acreditar el interés que permita reclamar tal acto, el quejoso debe demostrar que se ubica en la hipótesis de la norma reclamada, es decir, que obligue a hacer o dejar de hacer una determinada conducta, lo cual le irrogaría un perjuicio, sin que sea necesario un acto de aplicación por parte de la autoridad.

Para precisar la manera en que se han de distinguir las disposiciones que por su sola vigencia causan perjuicio (autoaplicativas), así como aquellas que para actualizar el perjuicio requieren de un acto concreto de aplicación (heteroaplicativas), es conveniente transcribir el contenido de la tesis de Jurisprudencia número P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 198200 del IUS y en la página 5, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:

LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las

obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.

Conforme al criterio jurisprudencial indicado, para distinguir cuándo se está en presencia de normas autoaplicativas o heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada, que atiende a la manera en que se producen los efectos de la disposición impugnada, ya sea que éstos se actualicen de manera inmediata, o bien que para hacerlo se requiera de algún acto o evento (condición) que origine la actualización de la norma.

Por lo que se concluye, que cuando se reclama la ley por considerarla como autoaplicativa es necesario demostrar que los efectos de la disposición impugnada irrogan una afectación en la esfera de derechos del gobernado que se actualiza de manera inmediata a partir de su entrada en vigor. Consecuentemente, si la norma en cuestión prevé alguna carga u obligación para el particular, pero el nacimiento de esa carga u obligación depende de alguna condición prevista en la ley, es claro que se está en presencia de una norma heteroaplicativa.

En el caso, la parte quejosa reclama el artículo 479 de la Ley General de Salud, **en su carácter de heteroaplicativo**, pues considera que con la emisión del oficio No. [REDACTED] signado por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, se aplicó con el segundo el aludido ordenamiento legal, irrogándole perjuicio en la esfera de sus derechos humanos.

Sin embargo, en primer lugar, no debe pasar desapercibido que dicha disposición legal tildada de inconstitucional, **no vincula al accionante de amparo a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia ya que no crea, transforma o extingue la situación concreta de derecho del quejoso**, aunado de que requieren de la actualización de una condición, por lo que es permisible afirmar que el acto admitido por mi delegante, tiene el carácter de heteroaplicativo, sin que a la fecha exista un acto concreto de aplicación.

Esto es así ya que para determinar la aplicación de lo dispuesto por los preceptos

SALUD

- 6 -

normativos en cita, resulta indispensable que **la parte quejosa acredite que consumie personalmente cannabis sativa, indica o mariguana**, lo que deja de acreditar con prueba alguna permitida por la Ley de la materia.

Sin que pase por inadvertido que la impetrante de amparo exhibió copia del oficio [REDACTED], **no obstante en dicho documento no se aplicó el artículo 479 de la Ley General de Salud**, lo cierto es que de la propia documental que exhibe la accionante de amparo en su escrito inicial de demanda, se advierte que no se le está aplicando en su perjuicio dicho ordenamiento legal impugnado y **es de precisar que su solicitud que formuló le es desechada**, aunque como más adelante se expondrá le da el carácter de un acto con el que se le niega a su parecer un derecho.

De lo que se colige, que dicho ordenamiento legal no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, debiéndose sobreseer en el juicio por el artículo 479 de la Ley General de Salud, **al dejarse de acreditar plenamente el acto de aplicación de la norma, o bien, que el accionante sea consumidor de dicho estupefaciente**. Corroborar lo manifestado en las líneas que anteceden, la tesis número II.36.C.3 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en el registro 191475 del IUS y en la página 1205, del tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica:

LEY HETEROAPLICATIVA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS ANTE JUEZ DE DISTRITO, SI NO EXISTE EL ACTO DE APLICACIÓN.

En el juicio de amparo existen dos vertientes para establecer el momento oportuno para reclamar la inconstitucionalidad de una ley; primero, cuando se trata de una ley autoaplicativa y segundo, cuando se refiere a una ley heteroaplicativa. Para distinguir el instante en que una u otra pueden ser impugnadas se debe atender al concepto de individualización incondicionada, esto es, determinar si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en forma condicionada o incondicionada. La condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización. De esta forma, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualiza condición alguna, se está en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones que impone la ley no surgen en forma automática (con su sola entrada en vigor), sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se está frente a una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada. Consecuentemente, si no existe el hecho que actualice la condición para que una ley heteroaplicativa sea reclamable mediante el juicio de amparo indirecto, es evidente su improcedencia.

Segundo En relación con los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 todos de la Ley General de Salud, es improcedente conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión, en virtud de que el otorgamiento implicaría múltiples violaciones a los derechos de la sociedad general, así como a diversos ordenamientos legales. Lo anterior de conformidad con el artículo 61, fracción XXII, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, 1, 4, 15, 76, fracción I, 89, fracción X, 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su concesión sería nugatoria para al quejoso ante la inexistente de una plataforma política integral para autorizar el uso de marihuana con fines lúdicos, tal y como a continuación se acredita:

1. Por una parte los ordenamientos legales antes citados establecen a la letra lo siguiente:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

SALUD

- 8 -

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Párrafo adicionado DOF 13-10-2011

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Párrafo adicionado DOF 03-02-1983

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Párrafo adicionado DOF 28-06-1999. Reformado DOF 08-02-2012

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Párrafo adicionado DOF 08-02-2012

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá las instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Párrafo adicionado DOF 07-02-1983

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estas derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

Párrafo adicionado DOF 17-06-2014

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Párrafo adicionado DOF 18-03-1980. Reformado DOF 07-04-2000, 12-10-2011

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

Párrafo adicionado DOF 07-04-2000. Reformado DOF 12-10-2011

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Párrafo adicionado DOF 07-04-2000. Fe de erratas al párrafo DOF 12-04-2000

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de las bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con plena respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Párrafo adicionado DOF 30-04-2009

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Párrafo adicionado DOF 12-10-2011

Artículo reformado DOF 31-12-1974

Reforma DOF 14-08-2001: Derogó del artículo el entonces párrafo primero (antes adicionado por DOF 28-01-1992)

Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellas delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

Reforma DOF 06-12-1977, 12-02-2007

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 25-10-1993, 12-02-2007

Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

Fracción reformada DOF 11-05-1988, 12-02-2007, 10-06-2011

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Artículo reformado DOF 18-01-1934

De los anteriores ordenamientos legales se advierte lo siguiente:

SAUD

- 10 -

- ✓ Que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece;
- ✓ Que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia;
- ✓ Que toda persona tiene derecho a la protección de la salud;
- ✓ Que es facultad exclusiva del Senado, entre otras, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;
- ✓ Que es facultad y obligación del Presidente de la República, entre otros, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado.
- ✓ Que en la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos:
 - Autodeterminación de los pueblos;
 - No intervención;
 - Solución pacífica de controversias;
 - Proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales;
 - Igualdad jurídica de los Estados;
 - Cooperación internacional para el desarrollo;
 - Respeto, protección y promoción de los derechos humanos; y,
 - Lucha por la paz y la seguridad internacionales;
- ✓ Que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren

por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

✓ Que los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

2. El accionante de amparo solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, específicamente con el objetivo de que se ordene a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, que deje de observar el contenido de los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 todos de la Ley General de Salud, y se le autorice el consumo individual del estupefaciente cannabis sativa (indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) así como el psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los isómeros $\Delta 6a$ (10a), $\Delta 6a$ (7), $\Delta 7$, $\Delta 8$, $\Delta 9$ (11), y sus variantes estereoquímicas, conjuntamente "marihuana o cannabis", específicamente para siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso, consumo y en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico u personal de marihuana.

3. Los artículos 61, fracción XXIII y 77, ambos de la Ley de Amparo, establecen a la letra lo siguiente:

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.

Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho.

De lo que se colige que el amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley, y que en caso de que el efecto de la concesión del amparo, se trate respecto de un acto

SALUD

- 12 -

de carácter negativo, como en el caso en particular, el juzgado deberá determinar con precisión los efectos del mismo, obligando a la autoridad a respetar el derecho de que se trate, en el caso en análisis, a decir del quejoso, sería el libre desarrollo de su personalidad.

Sin que pase por inadvertido, que en la exposición de motivos de la Ley de Amparo vigente, se dejó claro que un presupuesto básico de la democracia es la dignidad de la persona humana, **racional y libre**, garantizada a través de un catálogo de derechos, valores y principios, en el cual se estableció:

En ese sentido, el juicio de amparo tiene por objeto específico hacer real y eficaz la autolimitación del ejercicio de la autoridad por parte de los órganos del Estado.

Un presupuesto básico de la democracia es la dignidad de la persona humana, racional y libre, garantizada a través de un catálogo de derechos, valores y principios tales como la libertad, igualdad y pluralidad, que estén reconocidos en una Constitución o Norma Fundamental, los cuales deben ser garantizados y protegidos ante su desconocimiento a través de los instrumentos jurisdiccionales que la propia Constitución prevea.

Es en ese sentido de que mediante el juicio de amparo se protegen de manera directa, además de garantías que actualmente prevé nuestra Constitución, los derechos humanos reconocidos por ésta así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."

4. Que actualmente la política pública en relación con el consumo lúdico de marihuana se encuentra prohibida e incluso tipificada como delito, su adquisición, comercialización u obtención por cualquier vía de la citada droga. Lo anterior, es así ya que tanto en la Ley General de Salud, como en el Código Penal Federal, prevalecen otras infracciones administrativas y penales que necesariamente tendrían que cometerse para que en el caso que nos ocupa, el amparo pueda surtir efectos, pues no existe hoy día una autorización para poseer drogas como la cannabis en cantidades mínimas y necesarias para el consumo personal e inmediato, sólo puede concluirse que implícitamente se tolera o permite la adquisición ilícita del producto a consumir (artículos 192, 477, 478 y 479, todos de la Ley General de Salud).

En este entendido, resulta evidente que en el sistema penal vigente, la posesión de marihuana, aún en cantidades mínimas (hasta 5 gramos), sigue constituyendo una conducta típica de delito, y que si bien, de acreditarse que el poseedor es farmacodependiente o consumidor, el Ministerio Público no ejercerá acción penal, ello sólo implica la existencia de una excluyente que debe probarse, pero de ninguna

forma una autorización para consumir marihuana o para adquirir la misma o su semilla.

Actualmente se encuentra prohibido el uso lúdico de marihuana, de conformidad con la Ley General de Salud, concretamente los artículos 234, 237, 245, 247, 248, 456, 474, 478 y 479, y en particular, su posesión está sujeta a los límites estrictos de la cantidad (5 gr.) establecida en la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato, prevista en el artículo 479 del aludido ordenamiento.

Asimismo, dicha droga es regulada, entre otros ordenamientos legales, en los siguientes:

- Títulos Décimo Sexto y Décimo Séptimo de la Ley General de Salud, relativos a autorizaciones y vigilancia sanitaria;
- Código Penal Federal, en sus artículos 84, fracción III, inciso c), y 90, fracción II, inciso d), 194, 195, y 195 bis, fracción II;
- Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, artículo 2, fracción I, y otros;
- Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972;
- Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971;
- Convención de las Naciones Unidas en contra del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.
- NOM-028-SSA2-2009. Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

Conclusión.

Una concesión del amparo, acorde a lo estrictamente solicitado por el quejoso, en nada le beneficiaría, pues podría implicar la comisión de uno o más delitos, o cuando menos, la continuación de los efectos de delitos ya cometidos, así como violación a diversos ordenamientos legales administrativos, e incluso internacionales. Ello, porque aunque se autorice la siembra o cosecha de marihuana, la obtención de una semilla, que resulta indispensable para dichos procesos, sigue constituyendo un ilícito.

En suma, no es material y jurídicamente viable cumplir una ejecutoria de amparo, si el presupuesto necesario para garantizar el consumo de marihuana, conlleva la comisión de un delito por parte de quienes vendan, suministren o entreguen por cualquier medio dicha droga o su semilla a quien la consumirá; la posible comisión de delitos por parte del propio accionante de amparo al recibir la droga o la semilla necesaria para

SALUD

- 14 -

su siembra y cosecha, e incluso, la eventual comisión de ilícitos diversos por parte de la autoridad que deba dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

Ante las circunstancias expuestas, no es permisible conceder el amparo al quejoso, ya que se insiste, el presupuesto necesario para que pudiese, en su caso, realizar los procesos para los que se solicita el amparo, derivados de la propia demanda de amparo, consistentes expresamente en sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar marihuana, **implicarían necesariamente la comisión previa de uno o más de los delitos previstos en normas punitivas no impugnadas de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal**, esto es así ya que al día de hoy no se encuentra regulada la forma lícita para adquirir, importar ni acceder a la marihuana o a su semilla, y al no existir una regulación específica para uso con fines lúdicos o recreativos de marihuana, al permitir esta conducta, **no se garantiza la protección de terceros, incluida el núcleo esencial de la sociedad mexicana, la familia.**

A mayor abundamiento, sólo podría sembrarse, cultivarse y cosecharse marihuana, si existe como presupuesto la obtención de una semilla de dicha planta, a la vez que sólo podría prepararse, poseerse o transportarse la misma, si existe como presupuesto la adquisición o importación de dicha droga, conductas que finalmente, siguen constituyendo ilícitos penales previstos en normas que no fueron impugnadas ni por tanto, materia de análisis en el presente juicio.

Máxime que tampoco se solicitó a la autoridad sanitaria, autorización para adquirir o importar marihuana, ni menos se solicitó el suministro de la misma por parte del Estado, lo que deriva en el hecho de que aun concediéndose el amparo para la siembra, consumo y demás efectos previstos en la sentencia, prevalece la ilicitud en el acceso a la droga que nos ocupa.

De ahí que, si para sembrar o realizar cualquiera de las conductas planteadas por los solicitantes del amparo, debe previamente cometerse un delito por el quejoso o por quienes le provean la marihuana o su semilla, e incluso infringir tratados internacionales, por lo que resulta inconcuso que existe un impedimento grave para la emisión de un pronunciamiento de orden constitucional.

El artículo 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo, sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el presente asunto en caso de concederse el amparo al quejoso, no quedan exentos de la comisión de un delito ni quién le provea de la droga,

ni el propio quejoso en virtud de que no solicito la protección del amparo para efectos de adquirir la marihuana.

A la vez, un principio del juicio de amparo, es que no puede archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional; lo que así se ordena en la fracción XVI del artículo 107 constitucional. En estos términos, sólo puede concederse la protección de la justicia federal a partir del juicio de amparo, mediante una sentencia que sea de posible cumplimiento, por lo que si la ejecutoria de amparo se dictará en el extremo de ordenar algo que conllevará la comisión de un delito o la continuación de sus efectos, me parece que ello destruye de origen la posibilidad de conocer de un juicio con dichas implicaciones.

Por lo tanto, cuando, como en el caso, sólo se pidió autorización administrativa para ciertos efectos relacionados con el consumo de marihuana, quedan excluidos de la litis de amparo factores vinculados con el comercio y adquisición de la droga, luego entonces, es evidente que de conocerse el planteamiento que formulo el quejoso, la sentencia que se dictare, sólo podría suponer que se parte de la comisión de un delito.

Es decir, si una persona solicita autorización para sembrar, cosechar, poseer, transportar y consumir marihuana, es de suponerse que ya cuenta con la misma o que eventualmente accederá a la misma para poder realizar dichos actos; pero si hoy día, no existe vía lícita de adquisición de la marihuana o de su semilla, luego entonces, resulta jurídicamente imposible restituirlos en el goce del derecho al auto consumo lúdico de la marihuana que alegan.

Como he apuntado, distinto sería el supuesto si en el juicio que nos ocupa, hubiese sido también materia de análisis el proceso de adquisición, comercio o recepción del narcótico, a la vez que el sistema punitivo relacionado; sin embargo, ello no fue el caso, y deriva en un impedimento para conocer del asunto.

El artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XXIII, señala que el juicio de amparo es improcedente, en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución o de la propia ley citada, por lo que si el propio artículo 214 de la propia ley, señala que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución, en el caso, nos encontramos ante un supuesto que actualiza dicha improcedencia.

Así, si en el caso, la materia para la ejecución de la sentencia dictada, es que se ordene el otorgamiento de una autorización para el consumo de marihuana, a la que hoy, sólo puede accederse ilícitamente, luego entonces, **es de concluir que el quejoso no podrá ejercer el derecho que solicita, o al menos, no dentro de la ley, pues sigue penalizada la adquisición de marihuana**, así como todas las posibles vías para que acceda al narcótico o a su semilla.

Aunado a lo anterior, es de resaltar que dicha imposibilidad también deriva del contenido del artículo 89, Constitucional, en donde se establece como facultad del Presidente de la República celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado, y en el caso en particular, nuestra país ha signado diversos convenios en materia de drogas, en los cuales se incluye la marihuana, de tal manera que constitucionalmente, sólo el C. Presidente Constitucional es el único facultado para suspender o modificar dichos convenios.

México es parte del "Sistema Internacional de Control de Drogas" (SICD), que se encuentra respaldado por tres tratados internacionales, a saber: La Convención Única sobre Estupeficientes de 196, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupeficientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

Respecto la Convención Única sobre Estupeficientes, enmendada por el protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única, vale mencionar que ha influido en las leyes sobre prohibición de drogas en todo el planeta. Actualmente, cerca de 153 países han ratificado este instrumento y lo han incorporado a su derecho nacional. Las finalidades de la Convención Única son: *"limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefocientes a los fines médicos y científicos"*. Este tratado dispone de un marco conceptual de sustancias sujetas a control, entre las que se encuentran el cannabis, la hoja de coca, el opio, etcétera.

La Convención Única contempla a dos organismos internacionales especializados de llevar a cabo el control de las sustancias: La Comisión de Estupeficientes del Consejo Económico Social y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupeficientes. Entre las funciones de la primera, destacan la modificación de las listas de estupeficientes y la emisión de recomendaciones; en contraste, las funciones de la segunda versan con la comprobación de obligaciones para limitar el cultivo, la producción, la fabricación y

12-125
191

el uso de estupefacientes para fines médicos y científicos. **En caso de incumplimiento, la Junta Internacional de Fiscalización puede ejercer sus facultades para solicitar explicaciones a un gobierno** cuando considere que la convención corre un grave peligro porque un país o territorio no ha cumplido con el tratado.

En segundo lugar, tenemos la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. Este tratado incluyó nuevas sustancias en un listado de cuatro tablas y su propósito es limitar a fines médicos y científicos, la fabricación, exportación, importación, distribución, existencias, comercio, así como el uso y posesión de las sustancias de psicotrópicas.

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, misma que ya contempla una obligación para los Estados que sean parte de dicho tratado de: *"(...) adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales cuando se cometan intencionalmente, la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal (...)".*

Bajo tal contexto, resulta improcedente el presente juicio de amparo que tiene por objeto declarar inconstitucionales varios de los artículos de la Ley General de Salud, que apuntaban la negativa de la COFEPRIS de emitir autorizaciones para la realización de una serie de conductas relacionadas con el consumo personal de marihuana con fines recreativos. De ahí que sus efectos rebasen los fines médicos y científicos a los que alude el SICD, particularmente la Convención Única de 1961 y la Convención de Estupefacientes de 1988. Por lo tanto, es de advertir que, **de concederse el amparo al quejoso, dicha acción genera el incumplimiento de obligaciones internacionales que ha suscrito el Estado mexicano.**

Tercera. En relación con los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, procede se dicte el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, pues el hoy quejoso también carece de interés jurídico/legítimo, ello con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo.

Lo anterior, ya que si bien la parte quejosa manifiesta que se ve afectada por la actuación de la autoridad ejecutora que señala en el presente juicio de amparo, pues a su decir con los ordenamiento legales citados, se le veda su derecho a la identidad personal, dignidad humana, autodeterminación personal y corporal, siendo que la

política prohibicionista no tiene un fin legítimo y no es proporcional.

Sin embargo, lo cierto es que en el oficio emitido por el C. Director Ejecutivo Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, sólo se citaron los referidos artículos 235, 236, 237, 368, 369, 370, 371, 372, y 479 de la Ley General de Salud, sin que ello constituya acto de aplicación alguno.

Esto es así en virtud de que a través de dicho documento sólo se citó los ordenamientos legales de referencia, informándole que "... la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamientos, posesión, transporte e importación, y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación, y, en general, todo lo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana por el peticionario, excluyendo expresamente los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma. " (Sic); y al no definirse los requisitos en la citada normatividad para la emisión de la misma, es claro que no existe un interés jurídico al respecto" (Sic).

De lo anterior es evidente que por medio del oficio en cita, la responsable dio respuesta a la consulta formulada por la ahora recurrente en el sentido de que por el momento no podía ser expedida la autorización solicitada; de ninguna manera se puede considerar que dicho oficio obligue a la quejosa a realizar acción alguna, que se le sancione, o bien se vea derecho alguno adquirido por la accionante de amparo.

Apoya la anterior conclusión la tesis 1a. V/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, página 425, que establece:

LEYES. SU SOLA CITA NO CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN. Las normas jurídicas contenidas en leyes constituyen prescripciones que obligan, prohíben o permiten a las personas la realización de una conducta específica. Ello lo hacen al enlazar una consecuencia determinada, como efecto, a la realización de cierta conducta, como causa. Así, ante la actualización de la hipótesis o supuesto previsto en la ley, el orden jurídico prescribe la aplicación de las consecuencias previstas también en la misma. De esa manera, una ley sólo se puede considerar aplicada cuando el órgano estatal correspondiente ordena la realización de la consecuencia jurídica que se sigue del cumplimiento de sus condiciones de aplicación, por considerar, precisamente, que esas fueron satisfechas. En consecuencia, la sola cita, en una resolución, de un artículo de una ley constituye un dato que, por sí solo, resulta insuficiente para acreditar tal cuestión; pues lo relevante para ella consiste en demostrar que, en el caso concreto, fueron aplicadas las consecuencias jurídicas que siguen a la configuración de la hipótesis normativa descrita en la ley.

Es de resaltar que con motivo de los citados artículos de la Ley General de salud, no se afecta la esfera jurídica/legítima de la parte quejosa.

Se realiza tal afirmación porque si bien es cierto que la quejosa arguye que ser una persona física, mayor de edad en pleno uso de sus derechos de libertad individual, autonomía, dignidad, libre desarrollo de la personalidad y salud quien pretende se le autorice el consumo individual del estupefaciente cannabis sativa (indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) así como el psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los isómeros $\Delta 6a$ (10a), $\Delta 6a$ (7), $\Delta 7$, $\Delta 8$, $\Delta 9$ (11), y sus variantes estereoquímicas, conjuntamente "marihuana o cannabis", específicamente para siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso, consumo y en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico u personal de marihuana, también es cierto que el impetrante de amparo no acredita fehacientemente con documento idóneo la afectación de su interés jurídico-legítimo.

Ahora bien, de acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I, del artículo 107 constitucional y 73, fracción V de la Ley de la Materia, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que resulta desconocido o violado a través de algún acto de autoridad, derivado de lo cual se otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea restituido.

En el caso que nos ocupa, el quejoso acude al juicio de amparo reclamando la inconstitucionalidad de los artículos 234, 235, 236, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, sin embargo, no acredita con prueba alguna que la emisión de tales ordenamientos legales le causen perjuicio o agravio alguno en su esfera de derechos fundamentales, pues para empezar, no acredita de manera fehaciente que efectivamente lleve a cabo el consumo individual del estupefaciente cannabis sativa, así como el psicotrópico THC conjuntamente "marihuana o cannabis", específicamente para siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso, consumo y en general, todo acto relacionado con su consumo lúdico y personal de marihuana.

Así, al no existir elementos de convicción palpables e idóneos con los que la impetrante acredite de qué forma su esfera jurídica se ve afectada, este H. tribunal Colegiado debe sobreseer el presente juicio de amparo, ya que no es suficiente,

para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla, situación que acontece en el presente asunto. Sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia I. 1o. A. J/17, Gaceta del SJF, 8 a. época, Tomo: 60, Diciembre de 1992, página 35, cuyo rubro es el siguiente: **"INTERES JURIDICO, NOCION DE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO". No debe pasar por inadvertido a ese H. Tribunal de alzada que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia**, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, **es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor**, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme, por lo que resulta procedente se valore la causal de mérito bajo los argumentos apuntados. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J.122/99, Del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Noviembre de 1999, visible a página 28, cuyo rubro y texto es el siguiente:

IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por

128 127
193

actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme.

AGRAVIOS

PRIMERO.- Los agravios Segundo a sexto vertidos por la quejosa recurrente son infundados, por lo que la determinación del A quo no puede ser modificada o revocada, esto es así ya que la impetrante de amparo señala en su recurso que:

a) El quejoso alegó... que eran titular del derecho a la identidad personal y la dignidad humana... El Juez de Distrito hizo caso omiso de los argumentos vertidos por el quejoso y se limitó al derecho a la salud..." (Sic);

b) El accionante de amparo, reitera los razonamientos que expuso en su demanda de amparo.

c) "En el caso concreto... sino que se prohíbe toda conducta relacionada con el mismo". (Sic).

Dichos argumentos son infundados por un lado y por otro inoperantes, pues en el caso en particular efectivamente la Cannabis se encuentre restringido por la Ley impugnada, resaltando que las autoridades en materia de salud tomaron la medida de prohibir dicha sustancia para proteger el derecho a la salud, lo cual debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. Una de estas acciones puede ser el desarrollo de políticas públicas y otra, el establecimiento de controles legales, como es el caso.

Tiene aplicación al respecto la Tesis: 1a./J. 50/2009 de la Novena Época Instancia: Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Abril de 2009, visible en la página: 164, Materia(s): Administrativa, que establece lo siguiente:

DERECHO A LA SALUD. SU PROTECCIÓN EN EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD. El derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud

- 22 -

de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como la exigencia de que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. De lo anterior se desprende que para garantizar el derecho a la salud, es menester que se proporcionen con calidad los servicios de salud, lo cual tiene estrecha relación con el control que el Estado haga de los mismos. Esto es, para garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para proteger el derecho a la salud, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. Una de estas acciones puede ser el desarrollo de políticas públicas y otra, el establecimiento de controles legales. Así, una forma de garantizar el derecho a la salud, es establecer regulaciones o controles destinados a que los prestadores de servicios de salud satisfagan las condiciones necesarias de capacitación, educación, experiencia y tecnología, en establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, tal como dispone el legislador ordinario en el artículo 271, segundo párrafo de la Ley General de Salud.

Además, la parte quejosa no acreditó con medio de convicción alguno lo que sostiene, es decir, que con las acciones tomadas por las responsables, contenidas en los artículos impugnados por este medio, no se protege, ni se promueve la salud de las personas, y que el uso de dicha sustancia constituya un medio más seguro para proteger la salud de las personas, benéfico para la sociedad y menos oneroso para el sector salud.

Por otro lado es de resaltar que la quejosa omitió exhibir constancias para demostrar su dicho; por consiguiente no acredita su interés jurídico legítimo, pues deja de exhibir documentos idóneos que demuestren su interés para realizar el consumo lúdico que pretende no cause afectación a terceros. Esto es, si bien el quejoso manifiesta que en caso del consumo lúdico que pretende solo generaría un perjuicio a su persona, de ello no se sigue que efectivamente sea cierto para asumir que se ubica en el supuesto de prohibición.

Así, su situación de índole particular, en principio se considera que es una simple expectativa de derecho de la que quisiera gozar el quejoso, esto es, consumo individual del estupefaciente cannabis sativa, así como el psicotrópico THC conjuntamente "marihuana o cannabis", específicamente para siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso, consumo y en general, todo acto relacionado con su consumo lúdico y personal de marihuana, sin embargo dicho insumo no es lícito de conformidad con lo

establecido en los artículos 234, 235, 236, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud,, por lo que el entorno jurídico del quejoso en cuanto a que no va a poder comercializar el producto que defiende por esta vía, no puede jurídicamente pretenderse que, amén al vacío legislativo, garantía de todas las manifestaciones de libertad del individuo y que por tanto tutele intereses particulares o individuales, este por encima de los intereses públicos o de la comunidad, ya que no se explica razonablemente la prerrogativa a favor de un individuo, cuando se afecte de manera notoria a la sociedad como lo evidencio el A quo, en el considerando Séptimo de la sentencia que se impugna.

Esto se robustece, por las razones que la informan, con el contenido de la tesis A.445 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1786 tomo XXI, Enero de 2005, Novena del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

INTERÉS PÚBLICO. FACULTA PARA RESTRINGIR UN PRIVILEGIO QUE DEVINO ILEGAL, AL ESTABLECERSE CONDICIONES CONCRETAS PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO QUE AFECTA AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO.

La seguridad jurídica, concretamente la proscripción de la retroactividad, no puede llegar al extremo de proteger un derecho o privilegio que es opuesto a lo lícito o es ilegal, por ser inconveniente a la sociedad y, por ende, susceptible de restringir, incluso, la libertad de trabajo, industria o comercio. Por lo que, si se expide un permiso para exhibir cetáceos sin taxativas, y después de su emisión ese derecho está condicionado a obrar conforme a una disposición que establece las condiciones concretas para regular la conservación de mamíferos marinos en cautiverio, con el surgimiento de esta norma se restringió a la agraviada el margen de libertad que el orden público imperante ha determinado, deviniendo en ilegal lo que se oponga y facultando la consecuente limitación de la autorización que tenía, esto es, cambió el contexto en que se le expidió el permiso, sin que tal proceder pueda estimarse violatorio del artículo 14 constitucional. Lo anterior, porque el nacimiento, permanencia y vigencia de un derecho de índole particular, está determinado y regido por el contexto del entorno normativo que fija, por lo que, no obstante que el vacío legislativo sea la cuna y garantía de todas las manifestaciones de libertad del individuo, ese privilegio tutela intereses particulares o individuales que ceden frente a los públicos y de la comunidad, ya que no se explica, razonablemente, la preeminencia de un individuo cuando su status afecte de manera ostensible a la sociedad. Por tanto, si bien es cierto que el particular contaba con autorización para la exhibición de cetáceos, también lo es que, posterior a la emisión de la autorización, la autoridad consideró urgente y vital establecer determinadas condiciones concretas a través de una norma oficial mexicana, respecto de cómo garantizar la protección y bienestar de los mamíferos marinos en cautiverio, prohibiendo

AFEDERACIÓN
ICIA DE LA NACIÓN
AL DE ACUERDO
BRAROS

IL
MTO

SALUD

- 24 -

su exhibición temporal o itinerante, circunstancia que de ninguna manera puede estimarse que viola el artículo 14 constitucional, pues con el surgimiento de esa norma la autorización que tenía la agraviada para realizar este tipo de actividad quedó limitada, razonablemente subordinada y reducida a preservar los intereses de la comunidad.

Luego, no es correcto pretender basar la inconstitucionalidad de una norma obligatoria, en situaciones hipotéticas o particulares de la quejosa, dada la característica de generalidad con que cuentan las leyes o normas administrativas como las que se reclaman en la especie.

Así, si el quejoso aduce que la sentencia impugnada por este medio, transgrede la garantía prevista en el artículo 14 Constitucional de debido proceso legal, porque pretende siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso, consumo y en general, todo acto relacionado con su consumo lúdico y personal de marihuana, **para lo cual solicitó autorización a la Comisión Federal para la Protección** **Contra Riesgos Sanitarios, es una supuesta situación de autoconsumo lúdico debido a que ni siquiera consta en autos que el quejoso efectivamente sea** **un consumidor de dicho** psicotrópico (agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento), **de tal suerte que resulta ser un dato incierto; luego, de ser una situación particular y propia del quejoso, no puede oponerse a la naturaleza de carácter general, abstracto e impersonal de todo ordenamiento legal, ni puede fundarse su inconstitucionalidad en circunstancias particulares como las argumentadas por la quejosa.**

Sirve de apoyo al anterior argumento, por analogía, la tesis 2a./J. 88/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 43, tomo XVIII, Octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que expresa:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA. Los argumentos que se hagan valer como conceptos de violación o agravios en contra de algún precepto, cuya inconstitucionalidad se haga depender de situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas, deben ser declarados

inoperantes, en atención a que no sería posible cumplir la finalidad de dichos argumentos consistente en demostrar la violación constitucional, dado el carácter general, abstracto e impersonal de la ley."

Finalmente, es de resaltar que las razones expuestas por la parte quejosa no se encuentran encaminadas a combatir los razonamientos establecidos por el A quo en la sentencia hoy combatida, por lo tanto, los agravios hechos valer por la parte quejosa deben desestimarse por inoperantes. Como ha quedado demostrado, no guardan relación alguna con las consideraciones jurídicas que sirvieron como base para determinar negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

Esto es así, ya que la quejosa a lo largo de escrito de revisión, sólo reitera las manifestaciones que vertió en los conceptos de violación de la demanda inicial de amparo, situación que torna inoperantes sus argumentos. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis de jurisprudencia, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Agosto de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 109/2009, Página: 77, que a la letra dice:

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente por los términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- De manera particular en los agravios, Segundo a Sexto y Octavo la quejosa argumenta en esencia:

a) Que el A quo omite analizar el derecho con que cuenta el quejoso como persona física, respecto de los derechos a la propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana, a la disposición a la propia salud personal, a la autodeterminación, pues carece de objetividad y vulneran los principios de congruencia externa y exhaustividad, pues tales derechos se defienden desde el punto de vista subjetivo del quejoso quien manifiesta estar consiente de disponer de

SALUD

- 26 -

su cuerpo y su vida conforme a su propia concepción de lo es que bueno para él, mediante el consumo responsable y consciente de Cannabis.

b) El A quo en la sentencia impugnada, viola el derecho del quejoso a disponer de la salud propia, respetando las decisiones de salud personal.

c) Los únicos argumento que vierte la sentencia de amparo nos refieren a la violación al derecho a la disposición de la salud propia, sino a la supuesta facultad del Estado para restringir tal derecho, reiterando los argumentos que vertió en su escrito inicial de demanda relativo al derecho que le asiste, consistentes en titularidad del derecho de autodeterminación, libertad individual.

d) El A quo omite analizar el argumento de los quejosos, relativo a que sin la política prohibicionista no se generaría menor consumo de estupefacentes y que sin la misma tampoco habría aumento en el consumo, esto es así ya que la prohibición no es una forma efectiva para combatir las adicciones y el consumo. Además, señalan que dicha políticas sólo han generado un mercado ilegal.

e) El A quo dejo de valorar que el autoconsumo de Marihuana no perturba a la sociedad, el mero consumo no genera ningún efecto nocivo sobre la sociedad en general, no frente a terceros, es el consumidor quien recibe todos los perjuicios o beneficios del consumo de tal planta.

f) El A quo realiza una indebida valoración de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, pues con dicho documento no se acredita que la política prohibicionista cumple con los exámenes de escrutinio y proporcionalidad a los que deben ser sometidos las normas que restringen derechos humanos.

g) El A quo realiza omitió analizar que los artículos reclamados aplican una política prohibicionista para la siembra y autoconsumo de cannabis sativa que no superan los exámenes de escrutinio formulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar la restricción de derechos fundamentales en relación con los derechos de autodeterminación, libertad individual y corporal, libre desarrollo de la personalidad, identidad personal y disposición de la salud propia.

En relación con dichos argumentos, es de señalar que las restricciones impuestas en la Ley General de Salud están debidamente justificadas de conformidad con lo establecido por nuestro máximo órgano de control constitucional en la Tesis Ia.LXVI/2008, cuyo rubro es **"RESTRICCIONES A LOS DERECHOS**

FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VALIDAS, atendiendo a lo siguiente:

1. Son admisibles, en tanto y cuanto se dirigen a proteger el derecho a la salud de la sociedad en general, consagrado en el Artículo 4º. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo el de los propios consumidores.

La restricción contenida en la Ley General de Salud, en materia de drogas, busca garantizar los derechos fundamentales contenidos en los párrafos cuarto, séptimo y octavo del artículo 4º Constitucional, los cuales establecen lo siguiente:

Artículo 4º. (Primer párrafo derogada.)

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federales materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. **El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.**

De tales disposiciones constitucionales, se advierte, en primer término, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y que especial cuidado merece la salud de los niños y las niñas por ser un sector vulnerable de la población, siendo sus padres o tutores los obligados a preservar tal derecho, estando obligado el Estado a proveer lo necesario para propiciar el ejercicio pleno de tales derechos. En cumplimiento a tal obligación, se establecieron los ordenamientos legales impugnados en el juicio de amparo en comento.

2. Son necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción, es decir, en el caso en particular está demostrado científicamente que los efectos del consumo de Cannabis y/o THC, es perjudicial a la salud física y psíquica de las personas, por lo que prohibir su consumo y las actividades

SALUD

- 28 -

relacionadas con dicha planta, se encuentra válidamente justificada y necesaria para evitar el deterioro a la salud de las personas que la consumen y a la de los consumidores pasivos que inhalan el humo generado del consumo. Lo anterior es así, ya que no consumir dicha droga es la forma idónea para evitar perjuicios físicos o psíquicos a las personas, no hay posibilidad de que exista algo menos restrictivo, es decir, que su consumo sea permitido dado que con alguna otra cosa se pueda contrarrestar los efectos negativos de su consumo, pues no existe forma de evitar el deterioro físico (DE LA SALUD) de las personas con el consumo de Cannabis y/o THC, incluso en algunos casos puede tener efectos irreversibles, Lo anterior es así, ya que de conformidad con la información proporcionada por el Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), el estímulo de receptores de Cannabinoides puede dar lugar a las siguientes respuestas:

- ❖ Sensación de euforia, sedación y relajación;
- ❖ Alteraciones de la percepción temporal;
- ❖ Actividad analgésica y antiinflamatoria;
- ❖ Actividad orexígena y antiemética;
- ❖ Ataxia, debilidad muscular;
- ❖ Disminución de la presión intraocular;
- ❖ Hipotermia;
- ❖ Broncodilatación;
- ❖ Hipotensión y taquicardia;
- ❖ Efectos neuroendócrinos;
- ❖ Inmunoestimulación a dosis bajas e inmunosupresión a dosis altas;
- ❖ Efectos antiproliferativos.

Respuestas que indiscutiblemente, no otorgan al individuo una integridad personal ni lo ayudan a desarrollarse como persona; careciendo por tanto de un alto nivel de vida físico y psíquico. El consumidor de dichas drogas, no actúa con libertad, sino impulsado por una fuerza sensitiva, pierde su libre albedrío y está sometido a la fuerza sensitiva. No puede haber libertad contra la dignidad. Aun cuando sea un acto privado, el consumo de drogas no constituye un acto indiferente sino lesivo contra el bien común y desconocedor del interés general. Por lo tanto la ley debe prohibirlo, a fin de lograr los fines del Estado Social de Derecho, y evitar que se vulnere la dignidad humana.

3. Son proporcionales, porque el grado de la restricción sobradamente es recompensada por los efectos benéficos que tiene desde una perspectiva preocupada en garantizar la salud de la población en general y en especial la de los menores de edad, tal y como se demuestra a continuación:

- 120 131
197
- Actualmente, el Instituto Nacional de Salud Pública (<http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001538>) realiza estudios en donde quedan acreditados:
 - a) Que "En general existe poca tolerancia social para el consumo de drogas, más de 90% de los varones y de las mujeres afirmaron que sus papás, y 83 y 91% que sus amigos verían mal si ellos o ellas usaran drogas; la percepción sobre la aceptación del consumo entre los jóvenes es mayor, 38% de los varones y la misma proporción de mujeres consideraron que los jóvenes en general ven bien o, con indiferencia, el consumo. Sin embargo, al analizar la relación entre la percepción de aceptación y el consumo de drogas se encuentran diferencias interesantes, **siendo más frecuente el uso cuando el menor percibe aceptación social hacia el consumo**; solamente 3% de quienes perciben poca tolerancia en sus padres aceptaron consumir drogas, en comparación con 14% de quienes perciben tolerancia; la misma tendencia se observa en relación con la tolerancia por parte de amigos cercanos, 1.8 y 5.2% entre hombres y mujeres, respectivamente" (sic)
 - b) Que "**Uno de los factores que más consistentemente se ha asociado con el consumo de drogas es la disponibilidad**"^{8,26} cada vez más jóvenes experimentan con drogas por tenerlas disponibles en su medio, de hecho los datos de la encuesta señalaron que a 35% de los adolescentes les era fácil obtener drogas y que el riesgo de experimentar con ellos se incrementaba 1.89 veces cuando esto ocurría" (sic)
 - Además, de acuerdo con la información proporcionada por la Directora de Vinculación y Coordinación Operativas de la CONADIC (http://www.conadic.salud.gob.mx/prensa/2013/legalizacion_090813.html):
 - a) **Hay cifras oficiales que muestran una fuerte asociación entre las conductas ilícitas y el consumo de drogas**, pues a escala nacional el 60 por ciento de los delitos son cometidos por consumidores de sustancias psicoactivas;
 - b) 95 por ciento de los reclusos en centros penitenciarios del país son consumidores de algún enervante, y sólo 40 por ciento de ellos usaban dos sustancias en promedio antes de ser apresados, mientras que el resto empezó su consumo en la cárcel;
 - c) 65 por ciento de quienes están privados de su libertad son poli-consumidores (ingieren alcohol y al menos dos drogas más), y 55 por ciento de

los menores infractores reportan el uso de alguna sustancia ilícita o de bebidas embriagantes.

- Asimismo, se tienen datos de que no sólo se carece de la infraestructura médica necesaria para atender la demanda de atención, sino de los recursos económicos suficientes para otorgar a esa población una rehabilitación integral. El sistema de salud cuenta con un presupuesto de mil 200 millones de pesos, para atender 112 millones de personas con algún grado de adicción o predisposición.

Bajo esta óptica, por defender la libertad individual no se puede atropellar los bienes fundamentales de los asociados como los derechos a la vida, a la paz, a la salud, a la seguridad, a la convivencia, al bienestar, etc.; lo anterior es así ya que no puede haber libertad sin racionalidad.

Aunado a lo anterior, es necesario tomar en consideración:

- Que el derecho a la protección de la salud y el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, son garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a todo individuo, mismas que no pueden suspenderse ni restringirse.
- La gravedad del consumo de Cannabis y/o THC en México donde diariamente del 100% de las causas de fallecimiento de las personas, el 7 % son atribuibles al consumo de dicha droga (Según tabla de CONADIC/SSA/DGA5, Pág. 20); además de ocasionar un perjuicio contra la salud, el medio ambiente y el gasto en salud;
- Que el uso de los productos del cannabis constituye uno de los problemas más importantes de salud pública en el mundo, causando una gran proporción de mortalidad, morbilidad y discapacidad prevenibles.
- Que el humo de Cannabis y/o THC de segunda mano, compuesto por más de 6 mil sustancias tóxicas es una grave amenaza para la salud de los no fumadores expuestos, causando enfermedades graves en los adultos y, en particular, en los niños. (Información de CONADIC Pág. 44-45)
- Que la mayoría de los fumadores comienzan a fumar a una edad muy temprana, que no son conscientes del grado y de la naturaleza del daño causado por los productos de Cannabis y/o THC, y que debido a las propiedades adictivas de este

121 B2
(98

y otros componentes son a menudo incapaces de dejar de fumar aun cuando estén sumamente motivados a hacerlo (dependencia).

- Que ningún país puede cubrir lo que cuesta el consumo de Cannabis y/o THC en vidas, así como en recursos financieros que podrían ser reorientados a un sinnúmero de otros problemas de salud urgentes que son menos prevenibles.

Es de advertir que en diversos países se ha tratado de usar la marihuana y/o THC con fines médicos para diversos tratamientos, no obstante a la fecha no se ha demostrado la efectividad que tienen los compuestos en comparación con los fármacos habituales empleados, contrario si está demostrado que se generan un elevado número de eventos adversos de diversa gravedad, así como dependencia.

Finalmente, es de resaltar como una consideración *prima facie*, que se advierte que el cúmulo de derechos fundamentales contenidos en los artículos que la quejosa invoca le son vulnerados, se contienen los derechos de identidad personal, principio de pluralismo, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación personal y corporal, libertad individual, dignidad humana y derecho a la salud, no obstante, se circunscriben única y exclusivamente en relación con el ser humano, conceptuado como persona física, como atinadamente lo estableció la A quo en la sentencia dictada en el juicio de amparo citado al rubro.

En efecto, si bien el párrafo primero del artículo 1º de la Constitución Federal, establece que "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece."; se entiende que el término persona, *lato sensu*, refiere tanto a personas físicas así como a personas morales o jurídico colectivas.

Sin embargo, existen derechos fundamentales inherentes y atinentes única y exclusivamente a la persona física como centro de imputación normativa y titular de derechos concernientes a sí misma, pero dichos derechos no pueden estar por encima de los de la colectividad y de los grupos vulnerables.

Así la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser

respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se derivan todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Es aplicable el criterio sustentado en la tesis P. LXV/2009, página 8, tomo XXX, diciembre de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; cuyo rubro y texto disponen:

"DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad."

Bajo ese contexto, debe señalar que el concepto de "dignidad humana" es propio de la "naturaleza humana", a la que hizo referencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-4/84, de diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y cuatro (atinenta a la "propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica, relacionada con la naturalización"), la cual establece, en lo que interesa, lo siguiente:

152133
199

"55. La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio, o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incurso en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza.

"56. Sin embargo, por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona, es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana.

AL SE
NOA DE
SALUD
MAY

Ya la Corte Europea de Derechos Humanos basándose en los principios que pueden deducirse de la práctica jurídica de un gran número de Estados democráticos definió que sólo es discriminatoria una distinción cuando 'carece de justificación objetiva y razonable' [Eur. Court H.R., Case 'relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium' (merits), judgment of 23rd July 1968, pág. 34].

Existen, en efecto, ciertas desigualdades de hecho que legítimamente pueden traducirse en desigualdades de tratamiento jurídico, sin que tales situaciones contraríen la justicia. Por el contrario, pueden ser un vehículo para realizarla o para proteger a quienes aparezcan como jurídicamente débiles. Mal podría, por ejemplo, verse una discriminación por razón de edad o condición social en los casos en que la ley limita el ejercicio de la capacidad civil a quienes, por ser menores o no gozar de salud mental, no están en condiciones de ejercerla sin riesgo de su propio patrimonio.

NA "57. No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana."

Criterio consultivo que es conforme a los artículos 62 y 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen:

"Artículo 62 "1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.

2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser

presentada al secretario general de la Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al secretario de la Corte.

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en las incisos anteriores, ora por convención especial."

En el caso en particular la quejosa impugna los artículos 234, 235, 236, 237, 245, 247, 248, 368 y 479, todos de la Ley General de Salud, del análisis sistemático de tales preceptos, se advierte que dicha Ley, considera como un estupefaciente la **cannabis sativa**, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas, así como sus isómeros o cualquier otro producto derivado o preparado que contenga tal substancia, los de naturaleza análoga o cualquier otra substancia que determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General.

Asimismo, se precisa que la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga, en este caso la **cannabis sativa**, está sujeto a las disposiciones de la propia ley y que tales actos sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requieren autorización de la Secretaría de Salud.

Además, se impone una prohibición absoluta en el territorio nacional para la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo, entre otras substancias, de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, ello en virtud de contener, en términos de la propia ley, escaso o nulo valor terapéutico y poder constituir un grave problema para la salud.

Así, del ejercicio de ponderación y análisis entre las disposiciones legales que contienen los derechos fundamentales transgredidos en relación con los artículos de la Ley General de Salud, tildados de inconstitucionales a la luz de los motivos de disenso expuestos, debe señalarse que éstos resultan **inoperantes**, dado que el quejoso no es titular de los derechos fundamentales que dice se transgreden en su contra, ya que éstos son personalísimos y de tipo subjetivo e inherentes a la naturaleza humana es aplicable, por el criterio que informa la tesis P. LXVI/2009,

133
134
200

página 7, tomo XXX, diciembre de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; que señala:

"DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo, de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente." (Lo resaltado es propio)

En tal virtud, toda vez que el quejoso no es titular de los derechos fundamentales absolutos que considera se transgreden en su perjuicio al ser incompatibles con su naturaleza jurídica, se reitera, devienen inoperantes los motivos de disenso que expuso. Es aplicable la tesis de jurisprudencia I.4o.A. 7/33, página 1406, tomo XX, agosto de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; que señala:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES SI NO SE REFEREN A LA PRETENSIÓN Y A LA CAUSA DE PEDIR. Los conceptos de violación o agravios deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como antecedente conviene puntualizar el contenido de la frase "pretensión deducida en el juicio" o petitum al tenor de lo siguiente: a) La causa puede ser una conducta omitida o realizada ilegalmente, o bien, el acto ilícito que desconoce o viola un derecho subjetivo que es motivo de la demanda y determina la condena que se solicita al Juez que declare en su sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación del interés ajeno al propio; b) La pretensión o petitum es la manifestación de voluntad de quien afirma ser titular de un derecho y reclama su realización; c) El efecto jurídico perseguido o pretendido con la acción intentada y la tutela que se reclama; y, d) El porqué del petitum es la causa petendi consistente en la razón y hechos que fundan la demanda. Así las cosas, los conceptos de violación o agravios deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al que se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas (que son la base de lo debatido). La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida, tal

como lo establecen los artículos 81 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En tal orden de ideas, si la quejosa no señala la parte de las consideraciones de la sentencia que reclama, motivo de controversia, o se limita a realizar meras afirmaciones, bien sean generales e imprecisas o sin sustento o fundamento, es obvio que tales conceptos de violación son inoperantes y no pueden ser analizados bajo la premisa de que es menester que expresen la causa de pedir."

Finalmente, es de resaltar que para el caso que sus Señorías, consideren analizar las violaciones que esgrime el quejoso, relativas la violación de sus derechos humanos, es de resaltar que no existe una prohibición como tal, de consumir cannabis sativa, en virtud que de conformidad con el artículo 479 de la Ley General de Salud existe permisión de consumo personal de acuerdo con la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato de diferentes sustancias, en el caso, de cannabis sativa, índica y americana o marihuana, en una cantidad de 5 (cinco) gramos, la citada autorización atiende al contenido de la exposición de motivos que prevé la necesidad de dar atención a las adicciones, sin descuidar la organización de la estructura punitiva contra las organizaciones criminales que promueven el consumo de drogas entre nuestra juventud; así como de dar un combate más eficiente al narcotráfico en su modalidad de narcomenudeo que lacera en lo más profundo las redes sociales y familiares de nuestra sociedad y al sector más vulnerable de la misma que son las niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, se precisa que la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga, en este caso la cannabis sativa, está sujeto a las disposiciones de la propia ley y que tales actos sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.

También, se impone la prohibición absoluta en el territorio nacional, para la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo, entre otras sustancias, de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, en virtud de contener, en términos de la propia ley, escaso o nulo valor terapéutico y poder constituir un grave problema para la salud.

De conformidad con los artículos 1, 2 y 3, fracción XXI, de la Ley General de Salud, se deduce que el objeto de la Ley General de Salud es, entre otros, la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos, en este sentido, la constitucionalidad de

los artículos impugnados no puede hacerse depender de la situación personal del quejoso, al tratarse de una norma de carácter general, impersonal y abstracta, cuya finalidad es ser garante del derecho constitucional a la protección de la salud, entendida como el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; y la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuvan a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social.

De esta forma, la prohibición contenida en los artículos impugnados no son arbitrarias, ni caprichosas; no constituyen una intromisión al derecho a la intimidad, pues ~~no~~ obliga al quejoso a revelar aspectos de su vida no conocidos por otros y que, por tanto, cada sujeto puede decidir revelar, esto es, el reconocimiento del ámbito propio y reservado del individuo ante los demás no se ve violentado con los artículos reclamados, en virtud de que éstos no interfieren en el poder de decisión de los quejosos sobre datos relativos a su persona, quedando intacta la disponibilidad sobre su vida y decisión de lo que puede revelar de su intimidad a los demás.

Tampoco, no se vulnera en perjuicio del quejoso el desarrollo de su personalidad, pues las normas impugnadas no limitan en forma alguna la libertad de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral; y, por supuesto, la manera en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo él puede decidir en forma autónoma.

De igual forma, no existe violación a la intimidad de su persona, pues los numerales que consideran inconstitucionales no pretende coartar su libertad de decidir qué aspectos de su vida deciden revelar, pues la disponibilidad sobre su vida y la decisión de lo que puede revelar de su intimidad a los demás no se ve afectada, sin que ello signifique ocultar información, sino que puedan desarrollar su vida con libertad y con la posibilidad de resolver, a voluntad propia, qué aspectos de su vida admiten exponer al conocimiento de otros, para salvaguardar su dignidad humana.

Ciertamente, en el caso, no se observa que los principios de identidad personal, intimidad, imagen y desarrollo de la personalidad que se encuentran ligados al derecho fundamental de la dignidad humana se encuentren limitados o vulnerados, pues la finalidad de los preceptos legales que nos ocupan, como quedó establecido en la exposición de motivos de la Ley General de Salud, es de dar cumplimiento a la obligación del Estado de proteger la salud de toda persona en términos del artículo 4º

constitucional, bajo el respeto de la dignidad humana de las personas, evitando trasgresiones al orden público, preservando derechos de terceros y del orden público, pues el individuo tiene y conserva el derecho de decidir, en forma libre, sobre su propia imagen.

Asimismo, no existe violación al principio de autodeterminación, porque, se reitera, la obligación del Estado es la de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho, en este caso, el de la salud.

De concluir que las normas impugnadas atentan contra la dignidad humana y cualquiera de los derechos fundamentales de los gobernados, entonces, no sería razonable la prohibición contenida en los mismos, trátase de la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con sustancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, pues debe tenerse en cuenta que la protección de la salud, en definitiva, es una previsión constitucional sobradamente importante para operar como objetivo justificador de la limitación a la libertad de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con sustancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga.

Así la dignidad humana, está situada en casi cualquiera de sus ámbitos de ejercicio en el centro de un entramado regulatorio muy intenso, destinado a garantizar ése y otros muchos contenidos constitucionalmente relevantes, cuya protección se vería puesta en peligro por un ejercicio de la misma no debidamente limitado desde la perspectiva de objetivos e intereses públicos como los que las previsiones legislativas impugnadas sitúan en el centro de sus propósitos.

Así, contrario a lo señalado por el quejoso, no existe violación al derecho fundamental de la dignidad humana en perjuicio de persona alguna, reclamado éste con los principios de personalidad, intimidad, libre desarrollo de la personalidad igualdad, pues como quedó señalado, en la exposición de motivos de la Ley General de Salud, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer en el párrafo tercero del artículo primero que "queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas", atiende a la dignidad de la persona humana que fundamenta la diferencia en el trato de las personas y las cosas, subrayando que la jerarquía de la persona humana es algo que se establece en relación con los demás seres corpóreos, pero no en relación de unas personas con otras; esto es, cuando se habla de la dignidad en relación de unas personas con otras no existe ese significado de superioridad, sino un significado de igualdad, pues la dignidad la poseen todas las personas por el mero hecho de tener naturaleza humana.

Así, las disposiciones impugnadas de ninguna manera ponen en peligro el derecho fundamental de la dignidad de las personas, pues el hecho de prohibir la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con sustancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, como se puso de manifiesto en párrafos anteriores, no genera riesgo alguno en la subsistencia digna de los destinatarios de la norma, ya que no tiene como finalidad imponer modelos y estándares de vida que sean ajenos a los particulares, pues no se vulneran los principios de personalidad, propia imagen, intimidad, desarrollo de la personalidad y autodeterminación, esto es, no se interfiere en aquellos asuntos de trascendencia personal y privada, para imponer coercitivamente una visión de lo bueno y de lo correcto, máxime que las normas reclamadas no imposibilitan a los destinatarios ejercer todos sus demás derechos fundamentales necesarios para desarrollar integralmente su personalidad.

En este orden, es obligación del Estado proporcionar a toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a través de la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, como en el caso, de las adicciones y la lucha contra ellas, con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, derecho que no podrá ser objeto de restricciones salvo cuando estas se hallen previstas en la ley y sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público y la salud.

En ese sentido, es infundado el concepto de violación hecho valer, pues la dignidad humana es un valor supremo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una calidad única y

SALUD

- 40 -

excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna.

Por otra parte, respecto al tema del derecho a la salud, la prohibición contenida en los artículos impugnados es una medida instrumentalmente apta para alcanzar los objetivos de protección a la vida y a la salud que el legislador legítimamente busca proteger, por tanto, no se viola en perjuicio de ninguna persona sus derechos de identidad personal, autodeterminación y disposición de la salud propia; pues contrario a lo señalado por los quejosos, no se imponen modelos y estándares de vida que sean ajenos a los particulares, esto es, no se interviene en aquellos asuntos de trascendencia personal y privada, para imponer coercitivamente una visión de lo bueno y de lo correcto.

Además, cabe recordar, que el Estado tiene la obligación positiva de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho, en este caso, el de la salud, así el fin inmediato del Estado es proveer de salud en las mejores condiciones posibles, y la impetrante de amparo pretende defender el derecho a la salud en su aspecto negativo, máxime que el consumo de marihuana no es un derecho fundamental; de ahí que la restricción contenida en los artículos impugnados debe considerarse como constitucionalmente válida, ya que en términos del artículo 3° de la Ley General de Salud, es obligación del Estado la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos.

De modo que el propósito último de tales disposiciones reside no sólo en contribuir al bienestar físico y mental del hombre sino evitar que se genere la proliferación de sustancias nocivas, lo que es justificable con el fin que se pretende, ya que la autorización para su producción, puede generar afectación a la sociedad en general, es decir, la disminución en los valores que coadyuvan a la creación, conservación y disfrute de las condiciones de salud.

Así, la salud es una necesidad primordial en la vida de las personas, como sustento para el pleno desarrollo de las capacidades humanas, tanto físicas como intelectuales; por tanto, la salud es imprescindible en la realización personal que se logra mediante la convivencia armónica, el trabajo, la educación, la cultura y el entretenimiento, en otras palabras, es el primer requisito para el bienestar.

Ahora, dado que la salud es un derecho fundamental del ser humano, el uso y abuso de psicotrópicos y estupefacientes representa una preocupación creciente para el Gobierno Federal, entidades federativas y la sociedad en general, de ahí que contrario

a lo señalado por la parte quejosa sea necesario mantener un estricto control en su manejo a efecto de evitar un uso inadecuado de los mismos que puede causar problemas tan graves como la drogadicción.

Además, en sentido contrario a lo que aduce la quejosa, los preceptos que impugna, si bien es cierto establecen una prohibición, ésta se sujeta al principio de menor restricción, ya que no todos los habitantes del país requieren consumir cannabis o marihuana y sí, por el contrario, necesitan que se garantice **(EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PROTECCION A LA) su salud**, de modo que la afectación que la peticionaria de amparo pudieran resentir, encuentra justificación constitucional, más aún cuando lo que se procura es garantizar el derecho a la salud de ~~terceros~~, por los motivos que se han venido señalando en el presente.

Así el derecho de acceso a la salud no se relaciona directamente con el derecho de autodeterminación, libertad individual y corporal, libre desarrollo de personalidad, identidad personal y disposición de la salud propia, porque, se reitera, la obligación del Estado es la de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho, en este caso, el de la salud.

Sin que pase por desapercibido para ese H. Tribunal, que la quejosa sostenga que el consumo de marihuana no genera graves daños a la salud, sino un riesgo de daño a su salud; porque tal afirmación se trata de una situación particular de la quejosa, la que pretende darle el carácter de derecho negativo, con el fin de obtener una autorización en su beneficio; sin que en este caso se encuentre demostrado lo aducido por ésta, y sí, por el contrario, permitiría que gozará de una autorización que puede llegar a afectar a la salud de la población en general, por ejemplo en su consumo con la emisión de humo de segunda mano que afectara a las personas a su alrededor, lo que no es jurídicamente permisible y que tampoco genera la inconstitucionalidad de la ley, el derecho del particular, debe ceder ante el interés público.

En relación a que existen alternativas menos gravosas que permitirían alcanzar los fines del Estado, y que son menos restrictivas de los derechos a la autodeterminación, libertad individual y corporal, libre desarrollo de personalidad, identidad personal y disposición de la salud propia y que darían mejores resultados en la consecución del fin perseguido por el Estado; pero, contrario a lo aducido, no hay motivos para reprochar la opción del legislador construida sobre la base de la prohibición reclamada, que permitan establecer que la medida no es proporcional para alcanzar

SAUD

- 42 -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECCION DE AMPARO

los resultados deseados, en virtud de que el nivel de protección contra las adicciones es claramente más alto que lo pretendido por la accionante de amparo.

Además, cabe señalar además que la quejosa parte de un premisa errónea, pues considera como un derecho la siembra, cultivo de marihuana, sin embargo, la prohibición contenida en los artículos impugnados es constitucionalmente válida, toda vez que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte lo han constituido como un derecho; por tanto, los artículos impugnados no son inconstitucionales, en virtud de que no se puede hablar de una restricción de un derecho cuando éste no existe como tal, de ahí que contrario a lo señalado por el impetrante de amparo, los artículos impugnados no deban cumplir con los requisitos necesarios para restringir un derecho.

Aunado a lo anterior es de resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.

Este criterio se desprende del texto de la tesis número 1a. LXV/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; página 457, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen XXVIII, Julio de 2008, Novena Época, cuyo rubro es **"DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."**

Es decir, el derecho a la salud protegido constitucionalmente incluye, entre otras cosas, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad, cuyo contenido e interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encuentra compatibilidad con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.

Así, se observa de los siguientes ordenamientos, el párrafo 1º del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido también como "Protocolo de San Salvador", 6, 24, 25 y 26, de la

11/38
204

Convención sobre los derechos del niño, que han establecido entre otros de los puntos a destacar, lo siguiente:

- a) Que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;
- b) Que los Estados Parte en dichos Pactos, Tratados y Convenciones, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física, mental y social;
- c) La reducción de la mortalidad y de la morbilidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
- d) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables;
- e) El reconocimiento por parte de los Estados, del derecho de los niños al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades, la rehabilitación de la salud.

Concomitantemente, es necesario traer a colación que en el Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I, del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron, entre otros, el artículo 1º de la Constitución Política, incorporando al texto constitucional la protección de los derechos humanos reconocidos tanto en dicha Ley Suprema como en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Para optimizar la aplicación de dicha enmienda, el Constituyente puntualizó en los párrafos segundo y tercero del artículo 1 de la Constitución Política, que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, **tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.** En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Luego entonces, todas las autoridades del país deben atender a cabalidad proteger los derechos humanos de los habitantes de México, como una obligación inherente, en términos del artículo 1º, Constitucional y en términos de la tesis número P.

LXI/2010, cuyo rubro es el siguiente: "DERECHO A LA VIDA. SUPUESTOS EN QUE SE ACTUALIZA SU TRANSGRESIÓN POR PARTE DEL ESTADO".

En este orden, la protección del derecho a la salud, exige entre otras de las obligaciones de los Estados, que para garantizar el pleno, libre y efectivo ejercicio de los derechos humanos, adopte medidas positivas para preservar ese derecho en el ámbito legislativo, judicial y administrativo.

Lo mismo se desprende de la Observación General No. 14, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la cual no es una mera declaratoria, sino que constituye una obligación de hacer para el Estado Mexicano al ser uno de los 51 miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas, que firmaron la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945, dicha disposición establece lo siguiente:

Observación General No. 14

33. Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres tipos o niveles de obligación a los Estados Partes: la obligación de respetar, proteger y cumplir. A su vez, la obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar, proporcionar y promover. La obligación de respetar exige que los Estados se abstengan de injerirse directamente o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger requiere que los Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías previstas en el artículo 12. Por último, la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud.

En este orden, en cumplimiento al artículo 4º, constitucional y los diferentes ordenamientos internacionales que México ha suscrito, entre ellos los citados por la demandante, el poder legislativo emitió los artículos 235 en su último párrafo, 237, 245, fracción I, 247 en su último párrafo y 248, de la Ley General de Salud, en donde se respeta el derecho a la salud, ya que se protege a la sociedad, previniendo e inhibiendo la venta de marihuana que ocasiona daños fatales e incluso irreversibles a largo plazo.

Por lo anterior, ese H. Tribunal Colegiado debe confirmar la sentencia recurrida y en su caso, subsidiariamente, negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos por los citados argumentos.

TERCERO.— El agravio Primero vertido por la quejosa recurrente es infundado, por lo que la determinación del A quo no puede ser modificada o revocada, esto es así ya

que la impetrante de amparo señala en su recurso que:

a) El quejoso alega que existe una violación al artículo 74 fracción III de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 222 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con lo que se viola en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, porque el A quo guardó silencio respecto al acervo de pruebas porque a su parecer omitió valorarlas.

Dichos argumentos son infundados por un lado e inoperantes, pues en el caso en particular del análisis que haga esta superioridad podrá advertir que la sentencia que se tilda de inconstitucional podrá advertir que desde el Considerando segundo, se señalan los medios probatorios de los que se duele el quejoso de falta de pronunciamiento, pues el A quo al respecto analizó medios probatorios que le fueron remitidos de diversos juzgados, y con letra de pie de página enunció una serie de informes en los que se basó para sus argumentaciones.

Asimismo, el A quo en la sentencia dictada también analizó diversas manifestaciones en torno a diversos criterios que cito el mismo quejoso como aplicables al presente caso y determinó porque estos no eran procedentes en cuanto a la causa de pedir del amparo, por lo que tales manifestaciones resulta infundadas e inoperantes, por lo que debe confirmarse la sentencia en estudio.

CUARTO. El agravio Séptimo vertido por la quejosa recurrente es infundado, por lo que la determinación del A quo no puede ser modificada o revocada, esto es así ya que la impetrante de amparo señala en su recurso que:

El quejoso alega que existe una violación los principios de fundamentación y motivación adecuados, congruencia y exhaustividad en relación con el concepto de violación sobre legalidad, fundamentación y motivación.

El quejoso manifiesta que ello se materializa a través del oficio de resolución desfavorable a su solicitud emitido por la autoridad de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), porque para su emisión previamente medio un oficio de prevención por parte de funcionario de la COFEPRIS con el que se le requirió información para acreditar su interés jurídico, por lo que se considera transgredido el artículo 17 de la Ley Federal del Procedimiento administrativo.

En este sentido el A quo analizó que la emisión del oficio número [REDACTED]

- 46 -

de fecha 8 de julio de 2016 emitido por el Director Ejecutivo de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la COFEPRIS, reclamado, en cuanto al análisis de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, aplicados fueron los artículos 1, 2, 3, 15, 15-A y 17-A, sin que se considerara que los diversos artículos 83 al 96 de dicha normatividad se aplicaran de manera implícita pues se tratan de normas que regulan el recurso de revisión, sin que quedará acreditado que se tramitaba dicho medio de impugnación, por lo que se determinó que la parte quejos carece de interés jurídico siendo procedente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 83 al 96 Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

Ahora bien dado las manifestaciones del quejoso en el sentido de las transgresiones al artículo 17, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en sentido de que la autoridad responsable de la COFEPRIS, previno al quejoso fuera del plazo en la Ley del Federal del Procedimiento Administrativo, ello fue analizado de manera conjunta por el A quo, al haber aplicado el quejoso al respecto argumentos inoperantes, esto es reclamo dichas violaciones alegando fundamentación que era propia para el recurso de revisión previsto en dicho cuerpo normativo, sin que quedará acreditado que se tramitaba aludido medio de impugnación con motivo de la emisión del que la emisión del oficio número [REDACTED], por el Director Ejecutivo de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la COFEPRIS, pues para ello bastara analizar los conceptos de violación vertidos en el escrito de demanda.

Efectivamente, la parte quejosa pretendió en su escrito de demanda que se analizara la constitucionalidad del acto reclamado (oficio número [REDACTED]) sólo bajo la óptica del recurso de revisión; sin embargo, olvida establecer que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como toda normativa emitida por el órgano legislativo, a su vez debe prever el derecho fundamental de acceso a la justicia y el cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento, máxime si partiendo de aquella legislación pueden derivarse actos de molestia en contra de los gobernados, de ahí que para respetar tales principios fundamentales, el legislador debe consignar en las normas que emita, instancias, recursos o medios de defensa que permitan a los particulares ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga.

Entonces, para determinar si un ordenamiento legal respeta los aludidos derechos fundamentales, es necesario analizar el bloque normativo y andamiaje jurídico que constituye una unidad armónica, es decir, que el estudio de cada uno de los anteriores preceptos impugnados por la quejosa, no puede llevarse a cabo en forma aislada,

fuera del contexto normativo del que forman parte, sino que su interpretación y aplicación debe hacerse de manera relacionada, sistemática y armónica, en función de los otros diversos artículos que integran el sistema normativo al que pertenecen, con el propósito de fijar correctamente su sentido y alcance; de ahí que aunque la parte quejosa trate de sustentar su reclamo en el simple hecho de que las normas impugnadas únicamente prevén al recurso de revisión como medio de defensa ante los actos emitidos por autoridades administrativas, dejando fuera la posibilidad de comparecer ante la misma a efecto de ofertar pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, dentro de plazos razonables establecidos para ello, resultan a todas luces infundadas dichas afirmaciones, puesto que, se insiste, su análisis no debe integrarse de forma aislada.

De lo anterior se advierte con extrema claridad que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, particularmente dentro del "Capítulo Noveno. De la Tramitación", visible en el "Título Tercero. Del Procedimiento Administrativo", integrado por los artículos 46 a 56, contrario a lo que sostiene el quejoso, sí garantiza el derecho fundamental de audiencia y el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento en favor de los gobernados, al brindarles la posibilidad de presentar sus defensas y alegaciones a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que si el gobernado sostiene determinado punto sobre una cuestión en particular, tiene la posibilidad de demostrarlo, y a su vez quien estime lo contrario, cuenta también con el derecho de acreditar tal contradicción, alegando lo que haya a lugar una vez agotada dicha etapa probatoria y pudiendo impugnar la determinación tomada por la autoridad administrativa a través del recurso correspondiente.

Por lo anterior se colige que la serie de actos procesales señalados y regulados dentro de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lejos de vulnerar los derechos fundamentales de los gobernados, se encuentra establecidos para garantizar los mismos, conforme al marco constitucional derivado de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo expone el impetrante de amparo ahora en su recurso de revisión, difiriendo totalmente de los conceptos de violación alegados en el escrito de demanda.

Por lo expuesto y fundado, a usted **C. Magistrado Presidente**, atentamente pido:

Primero.- Tenerme por presentado en tiempo y forma, interponiendo Revisión Adhesiva al recurso promovido por la impetrante de amparo en contra de la resolución definitiva citada.

SAIUO

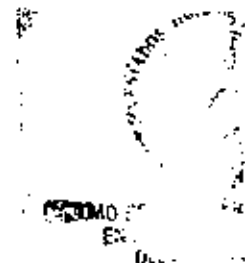
- 48 -

Segundo.- Admitir a trámite la presente revisión adhesiva.

Tercero.- Atendiendo los argumentos contenidos negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa.

**Atentamente.
El Delegado.**


Carlos Alberto Larios Bernal.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

140
141

QUEJOSO: [REDACTED]
AMPARO EN REVISIÓN NUMERO:
623/2017
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y
DEMÁS ASUNTOS

Licenciado David Espejel Ramírez, subsecretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, -----

C E R T I F I C A: -----

Que el presente documento constante de ciento cuatro fojas, al que se agrega esta certificación, es versión impresa fiel de la electrónica del escrito de expresión de agravios del quejoso, así como del recurso de revisión adhesiva de las autoridades responsables Presidente de la República y Secretario de Salud, ingresados mediante el uso de la FIREL a la versión electrónica del expediente del asunto citado al rubro, en términos del párrafo quinto del artículo 3º de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 12, inciso g) del Acuerdo General Conjunto 1/2013, el cual dispone "los documentos digitalizados ingresados a los sistemas electrónicos por los servidores públicos de los órganos del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica tendrán el mismo valor que los impresos", que obran en el expediente impreso del amparo en revisión [REDACTED] del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y se certifican para agregarse al expediente impreso del asunto señalado al rubro. Doy fe.

Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecisiete

Revisó y cotejó:
Lic. Edgar Tejada Martínez

ETM/nabuc



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE AMPAROS

142
141

BOLETA DE RADICACIÓN Y TURNO

AMPARO EN REVISIÓN

623/2017

14/06/17

1) TIPO DE TURNO.

DADAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL ASUNTO, ÉSTE DEBE TURNARSE EN¹:

PLENO ☒ **PRIMERA SALA** ☐ **SEGUNDA SALA** ☐

NOTIFICACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO

Adscrito al Tribunal ☐ Remite copia para el ☐ De autos o del oficio no se desprende ☒
Colegiado adscrito a la SCJN

2) MATERIA DEL TURNO.

ADEMÁS, EL TURNO CORRESPONDE A LA INSTANCIA SEÑALADA EN:

- 2.1 ADMINISTRATIVA² ()
2.2 PENAL Y CIVIL (PRIMERA SALA) ()
2.3 LABORAL, AGRARIA Y ADMINISTRATIVA³ (SEGUNDA SALA) ()
2.4 TURNO CRONOLÓGICO ()
2.5 TURNO RELACIONADO _____
2.6 TURNO POR DETERMINACIÓN DEL PLENO O SALA. ()
2.7 EL ASUNTO PERTENECE A ALGUNA COMISIÓN ()

Tema de la Comisión: _____

OBSERVACIONES:

SECRETARIO AUXILIAR	SUPERVISOR
LIC. EDGAR TEJADA	LIC. DAVID DELGADILLO

3) TURNO.

TOMANDO EN CUENTA LO ANTES PRECISADO POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS INDICADOS, EL TURNO QUE CORRESPONDE AL PRESENTE ASUNTO, CONSIDERANDO EL QUE SE ASIGNÓ A LOS DOS ANTERIORES DEL MISMO TIPO DE ASUNTO, ES EL SIGUIENTE:

ANTERIORES	INSTANCIA	MINISTRO
613/2017	Pleno	Loynez
617/2017	Pleno	Piro
TURNO QUE SE OTORGA	INSTANCIA	MINISTRO
623/2017	Pleno	Cossio

for pinto
reclamadoro
el A.R. 671/2016

LIC. MONICA FERNANDA ESTEVANE NUÑEZ

¹ MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN SELECCIONADA.

² SE TURNARÁN EN PLENO LOS ASUNTOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LOS QUE SUBSISTE EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES FEDERALES E INCLUSO DE LOCALES CUANDO EL PLENO HAYA REASUMIDO COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS MISMOS.

³ SE TURNARÁN EN SEGUNDA SALA LOS ASUNTOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LOS QUE SUBSISTE EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES GENERALES CON RANGO INFERIOR A LEY O EN ESA MATERIA SEA NECESARIO REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE CONTENGAN NORMAS DE DERECHOS HUMANOS. EN EL SUPUESTO DE QUE EN MATERIA ADMINISTRATIVA SUBSISTA EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD TANTO DE LEYES FEDERALES COMO DE DISPOSICIONES DE RANGO INFERIOR A ÉSTAS, EL TURNO RESPECTIVO DEBERÁ ASIGNARSE EN SEGUNDA SALA.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

QUEJOSO: [REDACTED]

AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO: 623/2017

SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS
ASUNTOS

En la Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecisiete, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
1. Oficio II-1581 de dos de junio del año en curso, del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con el folio 029298.	Original
2. Resolución de veinticinco de mayo último, dictada por el órgano colegiado citado en líneas precedentes, en el amparo en revisión [REDACTED]	Copia certificada
3. Juicio de amparo [REDACTED]	Un cuaderno
4. Amparo en revisión [REDACTED]	Un cuaderno
5. Pruebas relativas al mencionado juicio de amparo.	Dos legajos ✓
6. Disco compacto.	Una pieza
7. Sobre amarillo cerrado.	-----
Contiene acuse de recibo a OJ PJF.	

Las constancias anteriores se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de junio de dos mil diecisiete. Conste.

Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecisiete.

En términos de la normativa aplicable, con el oficio de remisión de los autos y la copia certificada de la ejecutoria de

cuenta, fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes al toca de revisión relativo al juicio de amparo promovido por el quejoso citado al rubro, **contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades. Acúsesse recibo, en la inteligencia de que la versión digital de este proveído, que se remita al órgano jurisdiccional mencionado en la cuenta, por medio del MINTERSCJN a que se refiere el Acuerdo General Plenario 12/2014, hará las veces de dicho acuse.** Con copia autorizada de este proveído fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable. **Obténganse y agréguese para que surtan los efectos legales conducentes,** copia certificada de la versión electrónica del escrito de expresión de agravios del quejoso, así como del recurso de revisión adhesiva de las autoridades responsables Presidente de la República y Secretario de Salud, que obran en el expediente electrónico, y que corresponden al expediente impreso del amparo en revisión

Ahora bien, **vista la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, pronunciada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el indicado toca de revisión** [REDACTED] **y, en el caso el autorizado del solicitante de amparo, hace valer recurso de revisión contra la** ~~sentencia~~ **de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo** [REDACTED] **en el que se planteó la**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

149
FORMA A-04
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

inconstitucionalidad de la promulgación, publicación y expedición de los artículos 83 a 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; los diversos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud; las órdenes verbales o escritas al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso y su ejecución; las órdenes verbales o escritas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso y su ejecución; el Oficio [REDACTED] de ocho de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la autorización sanitaria solicitada por el quejoso y el diverso [REDACTED] de doce de febrero de ese mismo año, a través del cual se requirió al quejoso que acreditara su interés jurídico; en la sentencia recurrida se sobreseyó respecto de los actos atribuidos al Secretario de Salud, consistentes en las órdenes verbales o escritas al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso; del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, consistentes en la ejecución de las órdenes verbales o escritas giradas al Secretario de Salud, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso, ni las órdenes verbales o escritas al director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, con el mismo propósito; del Director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes,

psicotrópicos y Sustancias Químicas, consistente en la ejecución de las órdenes verbales o escritas giradas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso; asimismo, los artículos 83 a 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, negó el amparo con relación a los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud y, toda vez que el Tribunal Colegiado del conocimiento dejó a salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal para que se haga cargo del estudio de los invocados artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, se impone que asuma su competencia originaria.

Por otra parte, como el delegado del Presidente de la República y del Secretario de Salud, interpone adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado del quejoso, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo, de igual forma este Máximo Tribunal asume su competencia originaria respecto de dicha adhesión.

Consecuentemente, tomando en consideración que los recursos de que se trata son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 83, 86 y 91 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), y 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto Segundo, fracción III, aplicado en sentido contrario y Tercero



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

145
149
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, se acuerda:

I. Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hace valer el autorizado del quejoso al rubro mencionado, así como de la adhesión al recurso de revisión principal que formuló el delegado del Presidente de la República y del Secretario de Salud.

II. Con apoyo en los artículos 81, párrafo primero y 86, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificado mediante instrumento normativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero de dos mil doce, túrnese el expediente, para su estudio, al Ministro José Ramón Cossío Díaz, y envíense los autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que la Presidenta de ésta dicte el acuerdo de radicación respectivo. En lo que atañe al expediente electrónico, éste será consultable por el coordinador de la ponencia y por los demás servidores públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea agregado a la lista de notificación respectiva.

III. Hecho lo anterior, si se considera necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, con fundamento en el numeral 87 del referido Reglamento, previo dictamen o acuerdo que se emita, recibido el asunto en la subsecretaría general de acuerdos, con la certificación del titular de ésta, radíquese en Pleno y remítase al Ministro designado ponente para los efectos legales correspondientes; mismo procedimiento debe llevarse a cabo en el caso de que el expediente ya se encuentre radicado en Pleno y se solicite que lo resuelva la Sala de su adscripción.

IV. Las partes en el juicio, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

V. La autorización para recibir notificaciones electrónicas deberá solicitarse expresamente por vía impresa o electrónica proporcionando igualmente la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

VI. **Notifíquese**, haciéndolo por medio de oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, a quien deberá acompañársele copia de los pliegos de expresión de agravios, por no existir constancia de que el Tribunal Colegiado del conocimiento le haya hecho entrega del mismo; y al mencionado órgano jurisdiccional, por medio del referido MINTERSCJN, en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

1416
FORMA A-54
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, **Ministro Luis María Aguilar
Morales**, quien actúa con el secretario general de acuerdos que
da fe, licenciado Rafael Coello Cetina.



Esta hoja corresponde al amparo en revisión número
623/2017, deducido del amparo en revisión [REDACTED] promovido por
[REDACTED] Conste.

RCC/DDV/ETM

En 27 JUN 2017 por lista de la misma fecha, se notificó la
resolución anterior al(os) interesado(s) de conformidad con lo
establecido en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de
Amparo. Doy fe.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de envío

Destinatario: DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fecha de envío: 27/06/2017 11:59:04

Tipo y Núm. de Exp. en SCJN: AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

Núm. de oficio en SCJN: MI/PL/SSGA/1/3819/2017

Fecha de ingreso de acuerdo: 23/06/2017 16:54:49

Fecha de acuerdo: 14/06/2017

Tipo de acuerdo: ACUSE DE RECIBO, ADMISIÓN Y TURNO, PARA CONOCIMIENTO

Síntesis del acuerdo: ...I. Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión...

térnese el expediente, para su estudio, al Ministro José Ramón Cossío Díaz..

VI. Notifíquese...

Detalle y constancias remitidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)

Tipo y núm. exp. en órgano destinatario

Constancia remitida

Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente

Acuerdo

AMPARO EN REVISIÓN

(9) ORIGINAL

Fecha de acuerdo: 14/06/2017

* En el cómputo de número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

1418
 1417

Firmante	Nombre:	GUSTAVO ENRIQUE BASAÑEZ GONZALEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	BAGG870711HDFSNS08			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000037f	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	27/06/2017T16:59:08Z / 27/06/2017T11:59:08-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	20 c6 8e 6c f0 43 06 88 2e 41 63 fe 57 1a 8a 3f 30 36 04 29 b6 37 95 39 9c 85 5a cd 79 cc 43 28 b4 53 8f 37 d3 d8 ae c9 6d 92 5e d0 4c 96 37 0d 46 b7 54 f4 04 70 bf b7 8e 3e 9d 4c e7 0f df 70 45 de 25 e6 8e 64 3b ad 0f 4c c8 a4 46 ab cc f4 8b f2 06 bc c1 97 78 26 a8 a3 be 10 a9 b9 94 13 21 17 8e e0 31 36 e5 79 4a 03 5d 07 22 32 69 f9 fd b6 fb 98 86 f3 14 63 aa 97 56 49 21 05 65 be 7e a7 11 b8 96 d6 ba a9 1a 2f a4 83 69 a6 2d d7 68 10 85 b4 35 4b 80 43 d8 09 58 a9 b9 97 05 19 23 9f e6 c9 bb 01 db 58 a8 bf f7 61 dc de be 6c 72 08 70 db fa d0 02 e2 b4 ed 72 65 74 5d 97 57 3c 6b 14 61 03 1b b8 1f 56 50 f2 d4 f7 f6 14 d7 f4 73 dd d3 2a ba 5f 48 fb b0 72 93 2e 92 01 0c ef ce 0f 1a 70 52 c2 0b 5c cd c1 85 de 0d 99 bd 47 c1 3b e8 a3 56 2f c5 19 0e e9 df d0 d7 d2 3e			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	27/06/2017T16:59:09Z / 27/06/2017T11:59:09-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000037f			
SP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	27/06/2017T16:59:08Z / 27/06/2017T11:59:08-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	1417054			
	Datos estampillados:	BD1182361775C2B4CAF6A097D46E0FF2C3E475B3			



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de envío

Destinatario: JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha de envío: 27/06/2017 11:59:04

Tipo y Núm. de Exp. en SCJN: AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

Núm. de oficio en SCJN: MI/PL/SSGA/13820/2017

Fecha de ingreso de acuerdo: 23/06/2017 16:54:49

Fecha de acuerdo: 14/06/2017

Tipo de acuerdo: ACUSE DE RECIBO, ADMISIÓN Y TURNO, PARA CONOCIMIENTO

Síntesis del acuerdo: ...I. Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión...

Turnese el expediente, para su estudio, al Ministro José Ramón Cossío Díaz..

VI. Notifíquese...

Detalle y constancias remitidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)

Tipo y núm. exp. en órgano destinatario

Constancia remitida

Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente

Acuerdo

AMPARO INDIRECTO

(9) ORIGINAL

Fecha de acuerdo:
14/06/2017

* En el cómputo de número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

150
 11/11

Firmante	Nombre:	GUSTAVO ENRIQUE BASAÑEZ GONZALEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	BAGG870711HDFSNS06			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000000037f	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	27/06/2017T16:59:15Z / 27/06/2017T11:59:15-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	1f 13 8c 72 49 49 cd 94 6a 05 b0 ff 07 2c 6c 17 99 c5 3f 12 1b 86 19 1c f7 35 69 71 a0 ab ab 7a 76 46 d4 51 c3 d5 92 99 01 09 33 f3 9f ee c0 30 17 48 95 72 1c d4 49 63 9b c1 8b 4f f0 de 38 83 6a 4e 71 88 06 3e ec ce 0e 6c 76 98 cb 74 77 8b 44 a8 86 e4 ee ca 1b d2 24 58 40 c8 10 a3 72 40 3f 7f 7f e1 9f cf 1d 95 27 11 8f 64 a3 30 c1 bf b7 e8 88 5f 18 c8 6d dc f5 4b ec 5a bf 59 29 5c 78 8e 80 7a 82 9b b5 72 dd a0 52 fa 9e 65 84 21 cc b4 72 e6 26 23 2b ed 03 b4 d3 ae 8e a0 8b ec f0 f4 eb 4f 5b fc 13 af 70 f7 c0 26 f4 8d e2 c6 e0 49 e7 f9 87 65 59 5d c2 90 7a a6 1c 2d c4 59 28 d0 28 db e2 3a b2 f0 a2 bf b0 04 96 9b 9a f1 25 af 73 8a cc 8e 92 31 63 bd df e1 a5 21 0c 4b 8c 06 0c 66 33 c0 ea 95 9b 46 cf a5 c7 65 6e 88 fa 4e 09 ef 68 2e 13 18 f3 52 11 e9 ad fd 0c c7			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	27/06/2017T16:59:16Z / 27/06/2017T11:59:16-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000000037f			
SP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	27/06/2017T16:59:15Z / 27/06/2017T11:59:15-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	1417057			
	Datos estampillados:	3D2C572EB600321ED8B9FDFEB4D4163224677285			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

151
170
170

QUEJOSO: [REDACTED]
AMPARO EN REVISIÓN NUMERO:
623/2017
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y
DEMÁS ASUNTOS

En la misma fecha, para notificar el acuerdo que
antecede, se giraron los siguientes oficios:

- OF. SSGA-I-25189/2017.-CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
- OF. SSGA-I-25190/2017.-CÁMARA DE SENADORES DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
- OF. SSGA-I-25191/2017.-PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR CONDUCTO
DE LA SECRETARÍA DE SALUD.
- OF. SSGA-I-25192/2017.-SECRETARIO DE SALUD.
- OF. SSGA-I-25193/2017.-COMISIONADO FEDERAL PARA LA
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
(COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25194/2017.-COMISIONADO DE AUTORIZACIÓN
SANITARIA DE LA COMISION FEDERAL PARA LA
PROTECCIÓN CONTRA RIEGOS SANITARIOS
(COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25195/2017.-DIRECTOR EJECUTIVO DE
REGULACIÓN DE ESTUPEFACIENTES,
PSICOTRÓPICOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LA
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25196/2017.-AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Ciudad de México, a veintiocho de junio de dos mil diecisiete.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE AMPAROS

ACTUARIA JUDICIAL
C. CLAUDIA FLORES DÍAZ

ET/ma/c



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN
623/2017

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

QUEJOSO: [REDACTED]
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
623/2017

- OF. SSGA-I-25185/2017.-CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
- OF. SSGA-I-25190/2017.-CÁMARA DE SENADORES DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
- OF. SSGA-I-25191/2017.-PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD.
- OF. SSGA-I-25192/2017.-SECRETARIO DE SALUD.
- OF. SSGA-I-25193/2017.-COMISIONADO FEDERAL PARA LA
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
(COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25194/2017.-COMISIONADO DE AUTORIZACIÓN
SANITARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
(COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25195/2017.-DIRECTOR EJECUTIVO DE REGULACIÓN
DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS Y
SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LA COMISIÓN
FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25196/2017.-AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE
LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

En el expediente que se menciona al margen, el
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el
acuerdo siguiente:

"QUEJOSO: [REDACTED]
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
623/2017
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
AMPAROS, CONTRADICCIONES DE
TESIS Y DEMÁS ASUNTOS

En la Ciudad de México, a catorce de junio de dos
mil diecisiete, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
1. Oficio II-1581 de dos de junio del año en curso, del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con el folio 029298.	Original

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

2. Resolución de veinticinco de mayo último, dictada por el órgano colegiado citado en líneas precedentes, en el amparo en revisión [REDACTED].	Copia certificada
3. Juicio de amparo [REDACTED]	Un cuaderno
4. Amparo en revisión [REDACTED]	Un cuaderno
5. Pruebas relativas al mencionado juicio de amparo.	Dos legajos
6. Disco compacto.	Una pieza
7. Sobre amarillo cerrado.	-----
Contiene acuse de recibo a OJ PJF.	

Las constancias anteriores se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de junio de dos mil diecisiete. Conste.

Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecisiete.

En términos de la normativa aplicable, con el oficio de remisión de los autos y la copia certificada de la ejecutoria de cuenta, formense los expedientes impreso y electrónico correspondientes al toca de revisión relativo al juicio de amparo promovido por el quejoso citado al rubro, contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades. Acúseme recibo, en la inteligencia de que la versión digital de este proveído, que se remita al órgano jurisdiccional mencionado en la cuenta, por medio del MINTERSCJN a que se refiere el Acuerdo General Plenario 12/2014, hará las veces de dicho acuse. Con copia autorizada de este proveído fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable. Obténganse y agréguese para que surtan los efectos legales conducentes, copia certificada de la versión electrónica del escrito de expresión de agravios del quejoso, así como del recurso de revisión adhesiva de las autoridades responsables Presidente de la República y Secretario de Salud, que obran en el expediente electrónico, y que corresponden al expediente impreso del amparo en revisión [REDACTED].

Ahora bien, vista la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, pronunciada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el indicado toca de revisión [REDACTED] y, en el caso el autorizado del solicitante de amparo, hace valer recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo [REDACTED] en el que se planteó la inconstitucionalidad de la promulgación, publicación y expedición de los artículos 83 a 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; los diversos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud; las órdenes verbales o escritas al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso y su ejecución; las órdenes verbales o escritas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para negar la solicitud de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

153
FOLIO 52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

autorización sanitaria formulada por el quejoso y su ejecución; el Oficio [REDACTED] de ocho de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la autorización sanitaria solicitada por el quejoso y el diverso [REDACTED] de doce de febrero de ese mismo año, a través del cual se requirió al quejoso que acreditara su interés jurídico; en la sentencia recurrida se sobreseyó respecto de los actos atribuidos al Secretario de Salud, consistentes en las órdenes verbales o escritas al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso; del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, consistentes en la ejecución de las órdenes verbales o escritas giradas al Secretario de Salud, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso, ni las órdenes verbales o escritas al director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, con el mismo propósito; del Director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, psicotrópicos y Sustancias Químicas, consistente en la ejecución de las órdenes verbales o escritas giradas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso; asimismo, los artículos 83 a 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, negó el amparo con relación a los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud y, toda vez que el Tribunal Colegiado del conocimiento dejó a salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal para que se haga cargo del estudio de los invocados artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, se impone que asuma su competencia originaria.

Por otra parte, como el delegado del Presidente de la República y del Secretario de Salud, interpone adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado del quejoso, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo, de igual forma este Máximo Tribunal asume su competencia originaria respecto de dicha adhesión.

Consecuentemente, tomando en consideración que los recursos de que se trata son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 83, 86 y 91 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), y 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto Segundo, fracción III, aplicado en sentido contrario y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil trece, se acuerda:

I. Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hace valer el autorizado del quejoso al rubro mencionado, así como de la adhesión al recurso de revisión principal que formuló el delegado del Presidente de la República y del Secretario de Salud.

II. Con apoyo en los artículos 81, párrafo primero y 86, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificado mediante instrumento normativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero de dos mil doce, tórnese el expediente, para su estudio, al Ministro José Ramón Cossío Díaz, y envíense los autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que la Presidenta de ésta dicte el acuerdo de radicación respectivo. En lo que atañe al expediente electrónico, éste será consultable por el coordinador

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

de la ponencia y por los demás servidores públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea agregado a la lista de notificación respectiva.

III. Hecho lo anterior, si se considera necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, con fundamento en el numeral 87 del referido Reglamento, previo dictamen o acuerdo que se emita, recibido el asunto en la subsecretaría general de acuerdos, con la certificación del titular de ésta, radíquese en Pleno y remítase al Ministro designado ponente para los efectos legales correspondientes; mismo procedimiento debe llevarse a cabo en el caso de que el expediente ya se encuentre radicado en Pleno y se solicite que lo resuelva la Sala de su adscripción.

IV. Las partes en el juicio, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

V. La autorización para recibir notificaciones electrónicas deberá solicitarse expresamente por vía impresa o electrónica proporcionando igualmente la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

VI. Notifíquese, haciéndolo por medio de oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en los artículos 28, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, a quien deberá acompañarse copia de los pliegos de expresión de agravios, por no existir constancia de que el Tribunal Colegiado del conocimiento le haya hecho entrega del mismo; y al mencionado órgano jurisdiccional, por medio del referido MINTERSCJN, en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación.

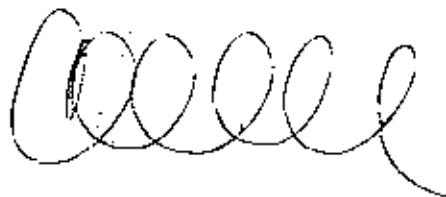
Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar Morales, quien actúa con el secretario general de acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina." FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto inserto.

Protesto a usted mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a veintiocho de junio de dos mil diecisiete.

SN
ETM/vn/nc



**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN

623/2017

RECIBIDO

2017 JUL 10 PM 1 37

AMPAROS CONTRA ACTOS
CONSTITUCIONALES

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

QUEJOSO: [REDACTED]
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
623/2017

- OF. SSGA-I-25189/2017.-CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
- OF. SSGA-I-25190/2017.-CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
- OF. SSGA-I-25191/2017.-PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD.
- OF. SSGA-I-25192/2017.-SECRETARIO DE SALUD.
- OF. SSGA-I-25193/2017.-COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25194/2017.-COMISIONADO DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25195/2017.-DIRECTOR EJECUTIVO DE REGULACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25196/2017.-AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

En el expediente que se menciona al margen, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el acuerdo siguiente:

"QUEJOSO: [REDACTED]
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
623/2017
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
AMPAROS, CONTRADICCIONES DE
TESIS Y DEMÁS ASUNTOS

En la Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecisiete, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
1. Oficio II-1581 de dos de junio del año en curso, del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con el folio 029298.	Original

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

Las constancias anteriores se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de junio de dos mil diecisiete. Conste.

En términos de la normativa aplicable, con el oficio de remisión de los autos y la copia certificada de la ejecutoria de cuenta, fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes al toca de revisión relativo al juicio de amparo promovido por el quejoso citado al rubro, contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades. Acúsese recibo, en la inteligencia de que la versión digital de este proveído, que se remita al órgano jurisdiccional mencionado en la cuenta, por medio del MINTERSCJN a que se refiere el Acuerdo General Plenario 12/2014, hará las veces de dicho acuse. Con copia autorizada de este proveído fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable. Ohténganse y agréguese para que surtan los efectos legales conducentes, copia certificada de la versión electrónica del escrito de expresión de agravios del quejoso, así como del recurso de revisión adhesiva de las autoridades responsables Presidente de la República y Secretario de Salud, que obran en el expediente electrónico, y que corresponden al expediente impreso del amparo en revisión [REDACTED]

Ahora bien, vista la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, pronunciada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el indicado toca de revisión [REDACTED] y, en el caso el autorizado del solicitante de amparo, hace valer recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo [REDACTED] en el que se planteó la inconstitucionalidad de la promulgación, publicación y expedición de los artículos 83 a 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; los diversos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud; las órdenes verbales o escritas al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso y su ejecución; las órdenes verbales o escritas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para negar la solicitud de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

155
FC-52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.
autorización sanitaria formulada por el quejoso y su ejecución; el Oficio [REDACTED] de ocho de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la autorización sanitaria solicitada por el quejoso y el diverso [REDACTED] de doce de febrero de ese mismo año, a través del cual se requirió al quejoso que acreditara su interés jurídico; en la sentencia recurrida se sobreseyó respecto de los actos atribuidos al Secretario de Salud, consistentes en las órdenes verbales o escritas al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso; del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, consistentes en la ejecución de las órdenes verbales o escritas giradas al Secretario de Salud, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso, ni las órdenes verbales o escritas al director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, con el mismo propósito; del Director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, psicotrópicos y Sustancias Químicas, consistente en la ejecución de las órdenes verbales o escritas giradas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso; asimismo, los artículos 83 a 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, negó el amparo con relación a los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud y, toda vez que el Tribunal Colegiado del conocimiento dejó a salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal para que se haga cargo del estudio de los invocados artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, se impone que asuma su competencia originaria.

Por otra parte, como el delegado del Presidente de la República y del Secretario de Salud, interpone adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado del quejoso, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo, de igual forma este Máximo Tribunal asume su competencia originaria respecto de dicha adhesión.

Consecuentemente, tomando en consideración que los recursos de que se trata son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 83, 86 y 91 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), y 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto Segundo, fracción III, aplicado en sentido contrario y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, se acuerda:

I. Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hace valer el autorizado del quejoso al rubro mencionado, así como de la adhesión al recurso de revisión principal que formuló el delegado del Presidente de la República y del Secretario de Salud.

II. Con apoyo en los artículos 81, párrafo primero y 86, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificado mediante instrumento normativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero de dos mil doce, tórnese el expediente, para su estudio, al Ministro José Ramón Cossío Díaz, y envíense los autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que la Presidenta de ésta dicte el acuerdo de radicación respectivo. En lo que atañe al expediente electrónico, éste será consultable por el coordinador

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

de la ponencia y por los demás servidores públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea agregado a la lista de notificación respectiva.

III. Hecho lo anterior, si se considera necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, con fundamento en el numeral 87 del referido Reglamento, previo dictamen o acuerdo que se emita, recibido el asunto en la subsecretaría general de acuerdos, con la certificación del titular de ésta, radíquese en Pleno y remítase al Ministro designado ponente para los efectos legales correspondientes; mismo procedimiento debe llevarse a cabo en el caso de que el expediente ya se encuentre radicado en Pleno y se solicite que lo resuelva la Sala de su adscripción.

IV. Las partes en el juicio, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

V. La autorización para recibir notificaciones electrónicas deberá solicitarse expresamente por vía impresa o electrónica proporcionando igualmente la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

VI. Notifíquese, haciéndolo por medio de oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, a quien deberá acompañársele copia de los pliegos de expresión de agravios, por no existir constancia de que el Tribunal Colegiado del conocimiento le haya hecho entrega del mismo; y al mencionado órgano jurisdiccional, por medio del referido MINTERSCJN, en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar Morales, quien actúa con el secretario general de acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina. FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto inserto.

Protesto a usted mi, atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a veintiocho de junio de dos mil diecisiete.

EJMN/c

[Firma manuscrita]





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

156
FORMA 52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

QUEJOSO: [REDACTED]
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
623/2017

AMPARO EN REVISIÓN
623/2017



LA SECRETARÍA DE SALUD
RECIBIÓ
EL 10 JUL 2017

- OF. SSGA-I-25189/2017.-CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
- OF. SSGA-I-25190/2017.-CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
- OF. SSGA-I-25191/2017.-PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD.
- OF. SSGA-I-25192/2017.-SECRETARIO DE SALUD.
- OF. SSGA-I-25193/2017.-COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25194/2017.-COMISIONADO DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25195/2017.-DIRECTOR EJECUTIVO DE REGULACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25196/2017.-AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

En el expediente que se menciona al margen, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el acuerdo siguiente:

QUEJOSO: [REDACTED]
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
623/2017
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS

En la Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecisiete, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
1. Oficio II-1581 de dos de junio del año en curso, del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con el folio 029298.	Original

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

2. Resolución de veinticinco de mayo último, dictada por el órgano colegiado citado en líneas precedentes, en el amparo en revisión [REDACTED]	Copia certificada
3. Juicio de amparo [REDACTED]	Un cuaderno
4. Amparo en revisión [REDACTED]	Un cuaderno
5. Pruebas relativas al mencionado juicio de amparo.	Dos legajos
6. Disco compacto.	Una pieza
7. Sobre amarillo cerrado.	-----
Contiene acuse de recibo a OJ PJF.	

Las constancias anteriores se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de junio de dos mil diecisiete. Conste.

Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecisiete.

En términos de la normativa aplicable, con el oficio de remisión de los autos y la copia certificada de la ejecutoria de cuenta, fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes al toca de revisión relativo al juicio de amparo promovido por el quejoso citado al rubro, contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades. Acúsese recibo, en la inteligencia de que la versión digital de este proveído, que se remita al órgano jurisdiccional mencionado en la cuenta, por medio del MINTERSCJN a que se refiere el Acuerdo General Plenario 12/2014, hará las veces de dicho acuse. Con copia autorizada de esto proveído fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable. Obténganse y agréguese para que surtan los efectos legales conducentes, copia certificada de la versión electrónica del escrito de expresión de agravios del quejoso, así como del recurso de revisión adhesiva de las autoridades responsables Presidente de la República y Secretario de Salud, que obran en el expediente electrónico, y que corresponden al expediente impreso del amparo en revisión [REDACTED]

Ahora bien, vista la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, pronunciada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el indicado toca de revisión [REDACTED] y, en el caso el autorizado del solicitante de amparo, hace valer recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo [REDACTED] en el que se planteó la inconstitucionalidad de la promulgación, publicación y expedición de los artículos 83 a 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; los diversos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud; las órdenes verbales o escritas al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso y su ejecución; las órdenes verbales o escritas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para negar la solicitud de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

157
FÓRMULA - 52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.
autorización sanitaria formulada por el quejoso y su ejecución; el Oficio [REDACTED] de ocho de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la autorización sanitaria solicitada por el quejoso y el diverso [REDACTED], de doce de febrero de ese mismo año, a través del cual se requirió al quejoso que acreditara su interés jurídico; en la sentencia recurrida se sobreseyó respecto de los actos atribuidos al Secretario de Salud, consistentes en las órdenes verbales o escritas al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso; del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, consistentes en la ejecución de las órdenes verbales o escritas giradas al Secretario de Salud, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso, ni las órdenes verbales o escritas al director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, con el mismo propósito; del Director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, psicotrópicos y Sustancias Químicas, consistente en la ejecución de las órdenes verbales o escritas giradas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso; asimismo, los artículos 83 a 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, negó el amparo con relación a los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud y, toda vez que el Tribunal Colegiado del conocimiento dejó a salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal para que se haga cargo del estudio de los invocados artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, se impone que asuma su competencia originaria.

Por otra parte, como el delegado del Presidente de la República y del Secretario de Salud, interpone adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado del quejoso, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo, de igual forma este Máximo Tribunal asume su competencia originaria respecto de dicha adhesión.

Consecuentemente, tomando en consideración que los recursos de que se trata son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 83, 88 y 91 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), y 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto Segundo, fracción III, aplicado en sentido contrario y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil trece, se acuerda:

I. Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hace valer el autorizado del quejoso al rubro mencionado, así como de la adhesión al recurso de revisión principal que formuló el delegado del Presidente de la República y del Secretario de Salud.

II. Con apoyo en los artículos 81, párrafo primero y 86, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificado mediante instrumento normativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero de dos mil doce, tórnese el expediente, para su estudio, al Ministro José Ramón Cossío Díaz, y envíense los autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que la Presidenta de ésta dicte el acuerdo de radicación respectivo. En lo que atañe al expediente electrónico, éste será consultable por el coordinador

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

de la ponencia y por los demás servidores públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea agregado a la lista de notificación respectiva.

III. Hecho lo anterior, si se considera necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, con fundamento en el numeral 87 del referido Reglamento, previo dictamen o acuerdo que se emita, recibido el asunto en la subsecretaría general de acuerdos, con la certificación del titular de ésta, radíquese en Pleno y remítase al Ministro designado ponente para los efectos legales correspondientes; mismo procedimiento debe llevarse a cabo en el caso de que el expediente ya se encuentre radicado en Pleno y se solicite que lo resuelva la Sala de su adscripción.

IV. Las partes en el juicio, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

V. La autorización para recibir notificaciones electrónicas deberá solicitarse expresamente por vía impresa o electrónica proporcionando igualmente la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

VI. Notifíquese, haciéndolo por medio de oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, a quien deberá acompañársele copia de los pliegos de expresión de agravios, por no existir constancia de que el Tribunal Colegiado del conocimiento le haya hecho entrega del mismo; y al mencionado órgano jurisdiccional, por medio del referido MINTERSCJN, en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar Morales, quien actúa con el secretario general de acuerdos que da fe, licenciado Ratael Coello Cetina. FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto inserto.

Protesto a usted mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a veintiocho de junio de dos mil diecisiete.

ETM/nac



RECEIVED
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIA
ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIA
ESTADO DE GUERRERO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

158
FORMA A-52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

QUEJOSO: [REDACTED]
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
623/2017

AMPARO EN REVISIÓN
623/2017

- OF. SSGA-I-25189/2017.-CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
- OF. SSGA-I-25190/2017.-CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
- OF. SSGA-I-25191/2017.-PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD.
- OF. SSGA-I-25192/2017.-SECRETARIO DE SALUD.
- OF. SSGA-I-25193/2017.-COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25194/2017.-COMISIONADO DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25195/2017.-DIRECTOR EJECUTIVO DE REGULACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25196/2017.-AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

En el expediente que se menciona al margen, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el acuerdo siguiente:

"QUEJOSO: [REDACTED]
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
623/2017
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS

En la Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecisiete, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
1. Oficio II-1581 de dos de junio del año en curso, del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con el folio 029298.	Original

SECRETARÍA DE SALUD
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS
10 JUL 2017
CONTROL DE GESTIÓN

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

2. Resolución de veinticinco de mayo último, dictada por el órgano colegiado citado en líneas precedentes, en el amparo en revisión [REDACTED]	Copia certificada
3. Juicio de amparo [REDACTED]	Un cuaderno
4. Amparo en revisión [REDACTED]	Un cuaderno
5. Pruebas relativas al mencionado juicio de amparo.	Dos legajos
6. Disco compacto.	Una pieza
7. Sobre amarillo cerrado.	-----
Contiene acuse de recibo a OJ PJF.	

Las constancias anteriores se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de junio de dos mil diecisiete. Conste.

Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecisiete.

En términos de la normativa aplicable, con el oficio de remisión de los autos y la copia certificada de la ejecutoria de cuenta, fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes al toca de revisión relativo al juicio de amparo promovido por el quejoso citado al rubro, contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades. Acúcese recibo, en la inteligencia de que la versión digital de este proveído, que se remita al órgano jurisdiccional mencionado en la cuenta, por medio del MINTERSCJN a que se refiere el Acuerdo General Plenario 12/2014, hará las veces de dicho acuse. Con copia autorizada de este proveído fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable. Obténganse y agréguese para que surtan los efectos legales conducentes, copia certificada de la versión electrónica del escrito de expresión de agravios del quejoso, así como del recurso de revisión adhesiva de las autoridades responsables Presidente de la República y Secretario de Salud, que obran en el expediente electrónico, y que corresponden al expediente impreso del amparo en revisión [REDACTED]

Ahora bien, vista la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, pronunciada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el indicado toca de revisión [REDACTED] y, en el caso el autorizado del solicitante de amparo, hace valer recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo [REDACTED] en el que se planteó la inconstitucionalidad de la promulgación, publicación y expedición de los artículos 83 a 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; los diversos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud; las órdenes verbales o escritas al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso y su ejecución; las órdenes verbales o escritas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para negar la solicitud de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



159
52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.
autorización sanitaria formulada por el quejoso y su ejecución; el Oficio [REDACTED] de ocho de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la autorización sanitaria solicitada por el quejoso y el diverso [REDACTED] de doce de febrero de ese mismo año, a través del cual se requirió al quejoso que acreditara su interés jurídico; en la sentencia recurrida se sobreseyó respecto de los actos atribuidos al Secretario de Salud, consistentes en las órdenes verbales o escritas al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso; del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, consistentes en la ejecución de las órdenes verbales o escritas giradas al Secretario de Salud, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso, ni las órdenes verbales o escritas al director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, con el mismo propósito; del Director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, psicotrópicos y Sustancias Químicas, consistente en la ejecución de las órdenes verbales o escritas giradas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso; asimismo, los artículos 83 a 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, negó el amparo con relación a los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud y, toda vez que el Tribunal Colegiado del conocimiento dejó a salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal para que se haga cargo del estudio de los invocados, artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, se impone que asuma su competencia originaria.

Por otra parte, como el delegado del Presidente de la República y del Secretario de Salud, interpone adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado del quejoso, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo, de igual forma este Máximo Tribunal asume su competencia originaria respecto de dicha adhesión.

Consecuentemente, tomando en consideración que los recursos de que se trata son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 83, 86 y 91 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), y 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto Segundo, fracción III, aplicado en sentido contrario y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil trece, se acuerda:

I. Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hace valer el autorizado del quejoso al rubro mencionado, así como de la adhesión al recurso de revisión principal que formuló el delegado del Presidente de la República y del Secretario de Salud.

II. Con apoyo en los artículos 81, párrafo primero y 86, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificado mediante instrumento normativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero de dos mil doce, tórnese el expediente, para su estudio, al Ministro José Ramón Cossío Díaz, y enviense los autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que la Presidenta de ésta dicte el acuerdo de radicación respectivo. En lo que atañe al expediente electrónico, éste será consultable por el coordinador

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

de la ponencia y por los demás servidores públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea agregado a la lista de notificación respectiva.

III. Hecho lo anterior, si se considera necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, con fundamento en el numeral 87 del referido Reglamento, previo dictamen o acuerdo que se emita, recibido el asunto en la subsecretaría general de acuerdos, con la certificación del titular de ésta, radíquese en Pleno y remítase al Ministro designado ponente para los efectos legales correspondientes; mismo procedimiento debe llevarse a cabo en el caso de que el expediente ya se encuentre radicado en Pleno y se solicite que lo resuelva la Sala de su adscripción.

IV. Las partes en el juicio, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

V. La autorización para recibir notificaciones electrónicas deberá solicitarse expresamente por vía impresa o electrónica proporcionando igualmente la CURP correspondiente a su FIREL vigente y sufrirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

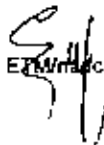
VI. Notifíquese, haciéndolo por medio de oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, a quien deberá acompañársele copia de los pliegos de expresión de agravios, por no existir constancia de que el Tribunal Colegiado del conocimiento le haya hecho entrega del mismo; y al mencionado órgano jurisdiccional, por medio del referido MINTERSCJN, en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar Morales, quien actúa con el secretario general de acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina." FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto inserto.

Protesto a usted mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a veintiocho de junio de dos mil diecisiete.


EJW/MLC





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE AMPAROS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN
623/2017

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

QUEJOSO: [REDACTED]
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
623/2017

- OF. SSGA-I-25189/2017.-CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
- OF. SSGA-I-25190/2017.-CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
- OF. SSGA-I-25191/2017.-PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD.
- OF. SSGA-I-25192/2017.-SECRETARIO DE SALUD.
- OF. SSGA-I-25193/2017.-COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25194/2017.-COMISIONADO DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25195/2017.-DIRECTOR EJECUTIVO DE REGULACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25196/2017.-AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

En el expediente que se menciona al margen, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el acuerdo siguiente:

QUEJOSO: [REDACTED]
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
623/2017
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS

En la Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecisiete, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
1. Oficio II-1581 de dos de junio del año en curso, del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con el folio 029298.	Original

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

2. Resolución de veinticinco de mayo último, dictada por el órgano colegiado citado en líneas precedentes, en el amparo en revisión 387/2016.	Copia certificada
3. Juicio de amparo [REDACTED]	Un cuaderno
4. Amparo en revisión [REDACTED]	Un cuaderno
5. Pruebas relativas al mencionado juicio de amparo.	Dos legajos
6. Disco compacto.	Una pieza
7. Sobre amarillo cerrado.	-----
Contiene acuse de recibo a OJ PJF.	

Las constancias anteriores se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de junio de dos mil diecisiete. Conste.

Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecisiete.

En términos de la normativa aplicable, con el oficio de remisión de los autos y la copia certificada de la ejecutoria de cuenta, fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes al toca de revisión relativo al juicio de amparo promovido por el quejoso citado al rubro, contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades. Acúsese recibo, en la inteligencia de que la versión digital de este proveído, que se remita al órgano jurisdiccional mencionado en la cuenta, por medio del MINTERSCJN a que se refiere el Acuerdo General Plenario 12/2014, hará las veces de dicho acuse. Con copia autorizada de este proveído fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable. Obténganse y agréguese para que surtan los efectos legales conducentes, copia certificada de la versión electrónica del escrito de expresión de agravios del quejoso, así como del recurso de revisión adhesiva de las autoridades responsables Presidente de la República y Secretario de Salud, que obran en el expediente electrónico, y que corresponden al expediente impreso del amparo en revisión [REDACTED]

Ahora bien, vista la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, pronunciada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el indicado toca de revisión [REDACTED] y, en el caso el autorizado del solicitante de amparo, hace valer recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo [REDACTED] en el que se planteó la inconstitucionalidad de la promulgación, publicación y expedición de los artículos 83 a 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; los diversos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud; las órdenes verbales o escritas al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso y su ejecución; las órdenes verbales o escritas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para negar la solicitud de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.
autorización sanitaria formulada por el quejoso y su ejecución; el Oficio [REDACTED] de ocho de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la autorización sanitaria solicitada por el quejoso y el diverso [REDACTED], de doce de febrero de ese mismo año, a través del cual se requirió al quejoso que acreditara su interés jurídico; en la sentencia recurrida se sobreseyó respecto de los actos atribuidos al Secretario de Salud, consistentes en las órdenes verbales o escritas al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso; del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, consistentes en la ejecución de las órdenes verbales o escritas giradas al Secretario de Salud, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso, ni las órdenes verbales o escritas al director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, con el mismo propósito; del Director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, psicotrópicos y Sustancias Químicas, consistente en la ejecución de las órdenes verbales o escritas giradas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso; asimismo, los artículos 83 a 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, negó el amparo con relación a los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud y, toda vez que el Tribunal Colegiado del conocimiento dejó a salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal para que se haga cargo del estudio de los invocados artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, se impone que asuma su competencia originaria.

Por otra parte, como el delegado del Presidente de la República y del Secretario de Salud, interpone adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado del quejoso, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo, de igual forma este Máximo Tribunal asume su competencia originaria respecto de dicha adhesión.

Consecuentemente, tomando en consideración que los recursos de que se trata son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 83, 86 y 91 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), y 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto Segundo, fracción III, aplicado en sentido contrario y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, se acuerda:

I. Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hace valer el autorizado del quejoso al rubro mencionado, así como de la adhesión al recurso de revisión principal que formuló el delegado del Presidente de la República y del Secretario de Salud.

II. Con apoyo en los artículos 81, párrafo primero y 86, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificado mediante instrumento normativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero de dos mil doce, tórnese el expediente, para su estudio, al Ministro José Ramón Cossío Díaz, y envíense los autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que la Presidenta de ésta dicte el acuerdo de radicación respectivo. En lo que atañe al expediente electrónico, éste será consultable por el coordinador

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

de la ponencia y por los demás servidores públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea agregado a la lista de notificación respectiva.

III. Hecho lo anterior, si se considera necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, con fundamento en el numeral 87 del referido Reglamento, previo dictamen o acuerdo que se emita, recibido el asunto en la subsecretaría general de acuerdos, con la certificación del titular de ésta, radíquese en Pleno y remítase al Ministro designado ponente para los efectos legales correspondientes; mismo procedimiento debe llevarse a cabo en el caso de que el expediente ya se encuentre radicado en Pleno y se solicite que lo resuelva la Sala de su adscripción.

IV. Las partes en el juicio, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

V. La autorización para recibir notificaciones electrónicas deberá solicitarse expresamente por vía impresa o electrónica proporcionando igualmente la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

VI. Notifíquese, haciéndolo por medio de oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, a quien deberá acompañársele copia de los pliegos de expresión de agravios, por no existir constancia de que el Tribunal Colegiado del conocimiento le haya hecho entrega del mismo; y al mencionado órgano jurisdiccional, por medio del referido MINTERSCJN, en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar Morales, quien actúa con el secretario general de acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cefina." FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto inserto.

Protesto a usted mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a veintiocho de junio de dos mil diecisiete.

ETM/lacc



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE AMPAROS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

162
FOLIO 52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

QUEJOSO: [REDACTED]
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
623/2017

AMPARO EN REVISIÓN
623/2017

- OF. SSGA-I-25189/2017.-CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
- OF. SSGA-I-25190/2017.-CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
- OF. SSGA-I-25191/2017.-PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD.
- OF. SSGA-I-25192/2017.-SECRETARIO DE SALUD.
- OF. SSGA-I-25193/2017.-COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25194/2017.-COMISIONADO DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25195/2017.-DIRECTOR EJECUTIVO DE REGULACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25196/2017.-AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

En el expediente que se menciona al margen, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el acuerdo siguiente:

"QUEJOSO: [REDACTED]
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
623/2017
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS

En la Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecisiete, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
1. Oficio II-1581 de dos de junio del año en curso, del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con el folio 029298.	Original

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

2. Resolución de veinticinco de mayo último, dictada por el órgano colegiado citado en líneas precedentes, en el amparo en revisión [REDACTED]	Copia certificada
3. Juicio de amparo [REDACTED]	Un cuaderno
4. Amparo en revisión [REDACTED]	Un cuaderno
5. Pruebas relativas al mencionado juicio de amparo.	Dos legajos
6. Disco compacto.	Una pieza
7. Sobre amarillo cerrado.	-----
Contiene acuse de recibo a OJ PJF.	

Las constancias anteriores se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de junio de dos mil diecisiete. Conste.

Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecisiete.

En términos de la normativa aplicable, con el oficio de remisión de los autos y la copia certificada de la ejecutoria de cuenta, fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes al toca de revisión relativo al juicio de amparo promovido por el quejoso citado al rubro, contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades. Acúsese recibo, en la inteligencia de que la versión digital de este proveído, que se remita al órgano jurisdiccional mencionado en la cuenta, por medio del MINTERSCJN a que se refiere el Acuerdo General Plenario 12/2014, hará las veces de dicho acuse. Con copia autorizada de este proveído fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable. Obténganse y agréguese para que surtan los efectos legales conducentes, copia certificada de la versión electrónica del escrito de expresión de agravios del quejoso, así como del recurso de revisión adhesiva de las autoridades responsables Presidente de la República y Secretario de Salud, que obran en el expediente electrónico, y que corresponden al expediente impreso del amparo en revisión [REDACTED]

Ahora bien, vista la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, pronunciada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el indicado toca de revisión [REDACTED] y, en el caso el autorizado del solicitante de amparo, hace valer recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo [REDACTED] en el que se planteó la inconstitucionalidad de la promulgación, publicación y expedición de los artículos 83 a 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; los diversos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud; las órdenes verbales o escritas al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso y su ejecución; las órdenes verbales o escritas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para negar la solicitud de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



16304
X
A.A. - 52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.
autorización sanitaria formulada por el quejoso y su ejecución; el Oficio [REDACTED] de ocho de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la autorización sanitaria solicitada por el quejoso y el diverso [REDACTED] de doce de febrero de ese mismo año, a través del cual se requirió al quejoso que acreditara su interés jurídico; en la sentencia recurrida se sobreseyó respecto de los actos atribuidos al Secretario de Salud, consistentes en las órdenes verbales o escritas al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso; del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, consistentes en la ejecución de las órdenes verbales o escritas giradas al Secretario de Salud, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso, ni las órdenes verbales o escritas al director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, con el mismo propósito; del Director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, psicotrópicos y Sustancias Químicas, consistente en la ejecución de las órdenes verbales o escritas giradas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso; asimismo, los artículos 83 a 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, negó el amparo con relación a los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud y, toda vez que el Tribunal Colegiado del conocimiento dejó a salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal para que se haga cargo del estudio de los inaplicados artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, se impone que asuma su competencia originaria.

Por otra parte, como el delegado del Presidente de la República y del Secretario de Salud, interpone adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado del quejoso, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo, de igual forma este Máximo Tribunal asume su competencia originaria respecto de dicha adhesión.

Consecuentemente, tomando en consideración que los recursos de que se trata son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 83, 86 y 91 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), y 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto Segundo, fracción III, aplicado en sentido contrario y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, se acuerda:

I. Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hace valer el autorizado del quejoso al rubro mencionado, así como de la adhesión al recurso de revisión principal que formuló el delegado del Presidente de la República y del Secretario de Salud.

II. Con apoyo en los artículos 81, párrafo primero y 86, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificado mediante instrumento normativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero de dos mil doce, turnese el expediente, para su estudio, al Ministro José Ramón Cossío Díaz, y envíense los autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que la Presidenta de ésta dicte el acuerdo de radicación respectivo. En lo que atañe al expediente electrónico, éste será consultable por el coordinador

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

de la ponencia y por los demás servidores públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea agregado a la lista de notificación respectiva.

III. Hecho lo anterior, si se considera necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, con fundamento en el numeral 87 del referido Reglamento, previo dictamen o acuerdo que se emita, recibido el asunto en la subsecretaría general de acuerdos, con la certificación del titular de ésta, radíquese en Pleno y remítase al Ministro designado ponente para los efectos legales correspondientes; mismo procedimiento debe llevarse a cabo en el caso de que el expediente ya se encuentre radicado en Pleno y se solicite que lo resuelva la Sala de su adscripción.

IV. Las partes en el juicio, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

V. La autorización para recibir notificaciones electrónicas deberá solicitarse expresamente por vía impresa o electrónica proporcionando igualmente la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

VI. Notifíquese, haciéndolo por medio de oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, a quien deberá acompañarse copia de los pliegos de expresión de agravios, por no existir constancia de que el Tribunal Colegiado del conocimiento le haya hecho entrega del mismo; y al mencionado órgano jurisdiccional, por medio del referido MINTERSCJN, en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación.

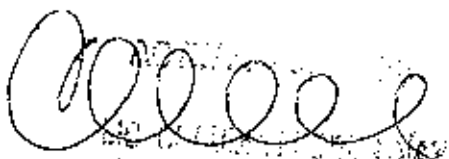
Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar Morales, quien actúa con el secretario general de acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina." FIRMADO

Lo que transcribió a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto inserto.

Protesto a usted mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a veintiocho de junio de dos mil diecisiete.


ETMhdc







PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

1691
FOLIO 1-52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

QUEJOSO: [REDACTED]
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
623/2017

AMPARO EN REVISIÓN
623/2017

- OF. SSGA-I-25189/2017.-CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
- OF. SSGA-I-25190/2017.-CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
- OF. SSGA-I-25191/2017.-PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD.
- OF. SSGA-I-25192/2017.-SECRETARIO DE SALUD.
- OF. SSGA-I-25193/2017.-COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25194/2017.-COMISIONADO DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25195/2017.-DIRECTOR EJECUTIVO DE REGULACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).
- OF. SSGA-I-25196/2017.-AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

En el expediente que se menciona al margen, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el acuerdo siguiente:

"QUEJOSO: [REDACTED]
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
623/2017
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
AMPAROS, CONTRADICCIONES DE
TESIS Y DEMÁS ASUNTOS

En la Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecisiete, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
1. Oficio II-1581 de dos de junio del año en curso, del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con el folio 029298.	Original

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

2. Resolución de veinticinco de mayo último, dictada por el órgano colegiado citado en líneas precedentes, en el amparo en revisión [REDACTED]	Copia certificada
3. Juicio de amparo [REDACTED]	Un cuaderno
4. Amparo en revisión [REDACTED]	Un cuaderno
5. Pruebas relativas al mencionado juicio de amparo.	Dos legajos
6. Disco compacto.	Una pieza
7. Sobre amarillo cerrado.	-----
Contiene acuse de recibo a OJ PJF.	

Las constancias anteriores se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de junio de dos mil diecisiete. Conste.

Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecisiete.

En términos de la normativa aplicable, con el oficio de remisión de los autos y la copia certificada de la ejecutoria de cuenta, fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes al toca de revisión relativo al juicio de amparo promovido por el quejoso citado al rubro, contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades. Acúsese recibo, en la inteligencia de que la versión digital de este proveído, que se remita al órgano jurisdiccional mencionado en la cuenta, por medio del MINTERSCJN a que se refiere el Acuerdo General Plenario 12/2014, hará las veces de dicho acuse. Con copia autorizada de este proveído fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable. Obténganse y agréguese para que surtan los efectos legales conducentes, copia certificada de la versión electrónica del escrito de expresión de agravios del quejoso, así como del recurso de revisión adhesiva de las autoridades responsables Presidente de la República y Secretario de Salud, que obran en el expediente electrónico, y que corresponden al expediente impreso del amparo en revisión [REDACTED]

Ahora bien, vista la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, pronunciada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el indicado toca de revisión [REDACTED] y, en el caso el autorizado del solicitante de amparo, hace valer recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo [REDACTED] en el que se planteó la inconstitucionalidad de la promulgación, publicación y expedición de los artículos 83 a 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; los diversos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud; las órdenes verbales o escritas al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso y su ejecución; las órdenes verbales o escritas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para negar la solicitud de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

105
104
AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.
autorización sanitaria formulada por el quejoso y su ejecución; el Oficio [REDACTED] de ocho de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la autorización sanitaria solicitada por el quejoso y el diverso [REDACTED] de doce de febrero de ese mismo año, a través del cual se requirió al quejoso que acreditara su interés jurídico; en la sentencia recurrida se sobreseyó respecto de los actos atribuidos al Secretario de Salud, consistentes en las órdenes verbales o escritas al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso; del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, consistentes en la ejecución de las órdenes verbales o escritas giradas al Secretario de Salud, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso, ni las órdenes verbales o escritas al director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, con el mismo propósito; del Director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, psicotrópicos y Sustancias Químicas, consistente en la ejecución de las órdenes verbales o escritas giradas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso; asimismo, los artículos 83 a 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, negó el amparo con relación a los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud y, toda vez que el Tribunal Colegiado del conocimiento dejó a salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal para que se haga cargo del estudio de los mencionados artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, se impone que asuma su competencia originaria.

Por otra parte, como el delegado del Presidente de la República y del Secretario de Salud, interpone adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado del quejoso, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo, de igual forma este Máximo Tribunal asume su competencia originaria respecto de dicha adhesión.

Consecuentemente, tomando en consideración que los recursos de que se trata son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, 83, 86 y 91 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), y 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto Segundo, fracción III, aplicado en sentido contrario y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, se acuerda:

I. Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hace valer el autorizado del quejoso al rubro mencionado, así como de la adhesión al recurso de revisión principal que formuló el delegado del Presidente de la República y del Secretario de Salud.

II. Con apoyo en los artículos 81, párrafo primero y 86, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificado mediante instrumento normativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero de dos mil doce, tórnese el expediente, para su estudio, al Ministro José Ramón Cossío Díaz, y envíense los autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que la Presidenta de ésta dicte el acuerdo de radicación respectivo. En lo que atañe al expediente electrónico, éste será consultable por el coordinador

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

de la ponencia y por los demás servidores públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea agregado a la lista de notificación respectiva.

III. Hecho lo anterior, si se considera necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, con fundamento en el numeral 87 del referido Reglamento, previo dictamen o acuerdo que se emita, recibido el asunto en la subsecretaría general de acuerdos, con la certificación del titular de ésta, radíquese en Pleno y remítase al Ministro designado ponente para los efectos legales correspondientes; mismo procedimiento debe llevarse a cabo en el caso de que el expediente ya se encuentre radicado en Pleno y se solicite que lo resuelva la Sala de su adscripción.

IV. Las partes en el juicio, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

V. La autorización para recibir notificaciones electrónicas deberá solicitarse expresamente por vía impresa o electrónica proporcionando igualmente la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

VI. Notifíquese, haciéndolo por medio de oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, a quien deberá acompañarse copia de los pliegos de expresión de agravios, por no existir constancia de que el Tribunal Colegiado del conocimiento le haya hecho entrega del mismo; y al mencionado órgano jurisdiccional, por medio del referido MINTERSCJN, en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación.

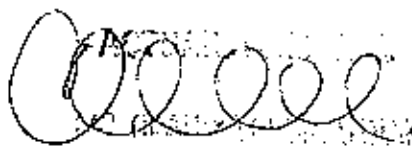
Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar Morales, quien actúa con el secretario general de acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina." FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto inserto.

Protesto a usted mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a veintiocho de junio de dos mil diecisiete.


ETM/nabc







PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

166
A-52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

QUEJOSO: [REDACTED]
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
623/2017

OF. SSGA-I-25189/2017.-CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.

OF. SSGA-I-25190/2017.-CÁMARA DE SENADORES DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.

OF. SSGA-I-25191/2017.-PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

OF. SSGA-I-25192/2017.-SECRETARIO DE SALUD.

OF. SSGA-I-25193/2017.-COMISIONADO FEDERAL PARA LA
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
(COFEPRIS).

OF. SSGA-I-25194/2017.-COMISIONADO DE AUTORIZACIÓN
SANITARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
(COFEPRIS).

OF. SSGA-I-25195/2017.-DIRECTOR EJECUTIVO DE REGULACIÓN
DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS Y
SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LA COMISIÓN
FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).

OF. SSGA-I-25196/2017.-AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE
LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

AMPARO EN REVISIÓN
623/2017

ANEXO

COPIA SIMPLE DE LOS
PLIEGOS DE RESPUESTA
DE AGRAVIOS

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
06 JUL. 2017
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE JUICIOS DE AMPARO
DIRECCIÓN DE CONTROL TÉCNICO
DE AMPARO METROPOLITANO

En el expediente que se menciona al margen, el
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el
acuerdo siguiente:

"QUEJOSO: [REDACTED]
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
623/2017
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
AMPAROS, CONTRADICCIONES DE
TESIS Y DEMÁS ASUNTOS

En la Ciudad de México, a catorce de junio de dos
mil diecisiete, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
1. Oficio II-1581 de dos de junio del año en curso, del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con el folio 029298.	Original

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

2. Resolución de veinticinco de mayo último, dictada por el órgano colegiado citado en líneas precedentes, en el amparo en revisión [REDACTED]	Copia certificada
3. Juicio de amparo [REDACTED]	Un cuaderno
4. Amparo en revisión [REDACTED]	Un cuaderno
5. Pruebas relativas al mencionado juicio de amparo.	Dos legajos
6. Disco compacto.	Una pieza
7. Sobre amarillo cerrado.	-----
Contiene acuse de recibo a OJ PJF.	

Las constancias anteriores se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de junio de dos mil diecisiete. Conste.

Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecisiete.

En términos de la normativa aplicable, con el oficio de remisión de los autos y la copia certificada de la ejecutoria de cuenta, fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes al toca de revisión relativo al juicio de amparo promovido por el quejoso citado al rubro, contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades. Acúsese recibo, en la inteligencia de que la versión digital de este proveído, que se remita al órgano jurisdiccional mencionado en la cuenta, por medio del MINTERSCJN a que se refiere el Acuerdo General Plenario 12/2014, hará las veces de dicho acuse. Con copia autorizada de este proveído fórmese cuaderno auxiliar, al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que aquél podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable. Obténganse y agréguese para que surtan los efectos legales conducentes, copia certificada de la versión electrónica del escrito de expresión de agravios del quejoso, así como del recurso de revisión adhesiva de las autoridades responsables Presidente de la República y Secretario de Salud, que obran en el expediente electrónico, y que corresponden al expediente impreso del amparo en revisión [REDACTED]

Ahora bien, vista la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, pronunciada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el indicado toca de revisión [REDACTED] y, en el caso el autorizado del solicitante de amparo, hace valer recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo [REDACTED] en el que se planteó la inconstitucionalidad de la promulgación, publicación y expedición de los artículos 83 a 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; los diversos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud; las órdenes verbales o escritas al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso y su ejecución; las órdenes verbales o escritas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para negar la solicitud de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

167
A-52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRO

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

autorización sanitaria formulada por el quejoso y su ejecución; el Oficio [REDACTED] de ocho de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la autorización sanitaria solicitada por el quejoso y el diverso [REDACTED], de doce de febrero de ese mismo año, a través del cual se requirió al quejoso que acreditara su interés jurídico; en la sentencia recurrida se sobreseyó respecto de los actos atribuidos al Secretario de Salud, consistentes en las órdenes verbales o escritas al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso; del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, consistentes en la ejecución de las órdenes verbales o escritas giradas al Secretario de Salud, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso, ni las órdenes verbales o escritas al director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, con el mismo propósito; del Director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, psicotrópicos y Sustancias Químicas, consistente en la ejecución de las órdenes verbales o escritas giradas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para negar la solicitud de autorización sanitaria formulada por el quejoso; asimismo, los artículos 83 a 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, negó el amparo con relación a los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud y, toda vez que el Tribunal Colegiado del conocimiento dejó a salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal para que se haga cargo del estudio de los invocados artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, se impone que asuma su competencia originaria.

Por otra parte, como el delegado del Presidente de la República y del Secretario de Salud, interpone adhesión al recurso de revisión principal formulado por el autorizado del quejoso, con apoyo en el artículo 82 de la Ley de Amparo, de igual forma este Máximo Tribunal asume su competencia originaria respecto de dicha adhesión.

Consecuentemente, tomando en consideración que los recursos de que se trata son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 83, 86 y 81 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), y 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto Segundo, fracción III, aplicado en sentido contrario y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, se acuerda:

I. Este Alto Tribunal asume su competencia originaria para conocer del recurso de revisión que hace valer el autorizado del quejoso al rubro mencionado, así como de la adhesión al recurso de revisión principal que formuló el delegado del Presidente de la República y del Secretario de Salud.

II. Con apoyo en los artículos 81, párrafo primero y 86, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificado mediante instrumento normativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero de dos mil doce, tórnese el expediente, para su estudio, al Ministro José Ramón Cossío Díaz, y envíense los autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a fin de que la Presidenta de ésta dicte el acuerdo de radicación respectivo. En lo que atañe al expediente electrónico, éste será consultable por el coordinador

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

de la ponencia y por los demás servidores públicos de la misma que aquél autorice, una vez que este proveído sea agregado a la lista de notificación respectiva.

III. Hecho lo anterior, si se considera necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal, con fundamento en el numeral 87 del referido Reglamento, previo dictamen o acuerdo que se emita, recibido el asunto en la subsecretaría general de acuerdos, con la certificación del titular de ésta, radíquese en Pleno y remítase al Ministro designado ponente para los efectos legales correspondientes; mismo procedimiento debe llevarse a cabo en el caso de que el expediente ya se encuentre radicado en Pleno y se solicite que lo resuelva la Sala de su adscripción.

IV. Las partes en el juicio, por sí o por conducto de su representante, podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

V. La autorización para recibir notificaciones electrónicas deberá solicitarse expresamente por vía impresa o electrónica proporcionando igualmente la CURP correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

VI. Notifíquese, haciéndolo por medio de oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, a quien deberá acompañarse copia de los pliegos de expresión de agravios, por no existir constancia de que el Tribunal Colegiado del conocimiento le haya hecho entrega del mismo; y al mencionado órgano jurisdiccional, por medio del referido MINTERSCJN, en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar Morales, quien actúa con el secretario general de acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina." FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto inserto.

Protesto a usted mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a veintiocho de junio de dos mil diecisiete.

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
2017 JUL 14 PM 17:00
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

[Firma manuscrita]
LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA



ETM/mbc

RODOLFO ALFONSO DE LA FEDERACIÓN
SUPREMACÍA DE LA LEY
SUBSECCIÓN DE ACUERDOS
EJECUTIVO



Poder Judicial de la Federación
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Acuse de Recibo

Destinatario: Suprema Corte de Justicia de la Nación
Folio electrónico: 40132/2017
Fecha de envío de la SCJN: 27/06/2017 11:59
Tipo y núm. de exp. de la SCJN: AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
Tipo de acuerdo: ADMISIÓN Y TURNO, ACUSE DE RECIBO, PARA CONOCIMIENTO
Núm. oficio de la SCJN: MI/PL/SSGA/1/3819/2017

Tipo y núm. de exp. del órgano remitente: AMPARO EN REVISIÓN [REDACTED]

Fecha de recepción del órgano remitente: 28/06/2017 10:47

Recepción: RECEPCIÓN CONFORME

Detalle de documentación recibida

Acuerdo (en su caso constancias)	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO	(9) ORIGINAL	se recibe archivo
Fecha de acuerdo: 14/06/2017		

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

14-jul-17
3:10

Folio y fecha de recepción SCJN: 37135-MINTER 28/06/2017 12:19:05
Folio electrónico: 40132



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Recepción en SCJN del acuse de recibo de órganos del PJF

Remitente: DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO
Fecha de envío a la SCJN: 28/06/2017 10:47:00
Tipo y núm de exp. en SCJN: AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

Ciudad de México, a 28 de junio de 2017.

Por acuerdo presidencial, la(el) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el acuse de recibo 37135-MINTER, constante de 3 fojas, incluida esta constancia, para efectos legales correspondientes. Conste

LA SECRETARIA DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE ACUERDOS

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA.

OACA*

PROCESO 541
SECRETARÍA DE ACUERDOS

2017 JUN 28 PM 3 13

Suprema Corte de Justicia de la Nación



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

FORMA C.G. A 171

AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL,
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE JUICIOS
DE AMPARO.

DIRECCIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE AMPARO
METROPOLITANO.

AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA
FEDERACIÓN ADSCRITOS A LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

AMPARO INE FVISON 62372017

H. PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
P R E S E N T E

El suscrito Agente del Ministerio Público de la Federación, designado por el C. Procurador General de la República, para intervenir en el presente asunto con fundamento en los artículos 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo; 3º, 4º, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ante usted con debido respeto expongo:

Que con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al tenor del artículo 2º de la Ley de Amparo, me permito solicitar de la manera más atenta, se exida a mi favor copia simple del escrito de demanda, y de la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo [REDACTED] toda vez que son necesarias para que esta Representación Social de la Federación emita la opinión que corresponda.

Y de no existir inconveniente, autorizo a los C.C. Semiramis Arroyo Sanchez, Araceli Cortés Ramírez y Luz Javier Estrada Granados para recibir las copias de mérito.

Por lo antes expuesto y fundado atentamente, le pido:

Único.- Acordar de conformidad lo solicitado.

Ciudad de México., a 11 de julio de 2017.

Atentamente

El C. agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese
Máximo Tribunal de la Nación.

Licenciado Oscar Ignacio Ramírez Zavala.

3127
16-07-17

035859

2

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2017 JUL 12 PM 9 51

OFICINA DE CLASIFICACION
JUDICIAL DE COMPETENCIA

RECIBI DE UN ENVIADO
SIN ANEXO

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2017 JUL 12 PM 1 52

FRANCISCA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

RECIBI DE UN ENVIADO
SIN ANEXO



REFERENCIA
029298
PROMOCIÓN
035659

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En dos de agosto de dos mil diecisiete, la Secretaría de Acuerdos da cuenta a la Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el proveído de catorce de junio del año en curso, dictado por el Presidente de este Alto Tribunal; así como con el oficio sin número, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, Conste.

Ciudad de México, a dos de agosto de dos mil diecisiete.

Visto el acuerdo del Presidente de este Alto Tribunal con el que se da cuenta, ténganse por recibidos los autos del amparo en revisión citado al rubro.

Por otra parte, agréguese a sus autos el oficio sin número, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal.

Con fundamento en los artículos 86, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 21, fracción II inciso a) y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SE AVOCA al conocimiento del presente asunto, por ende, hagase el registro de ingreso del mismo como corresponda.

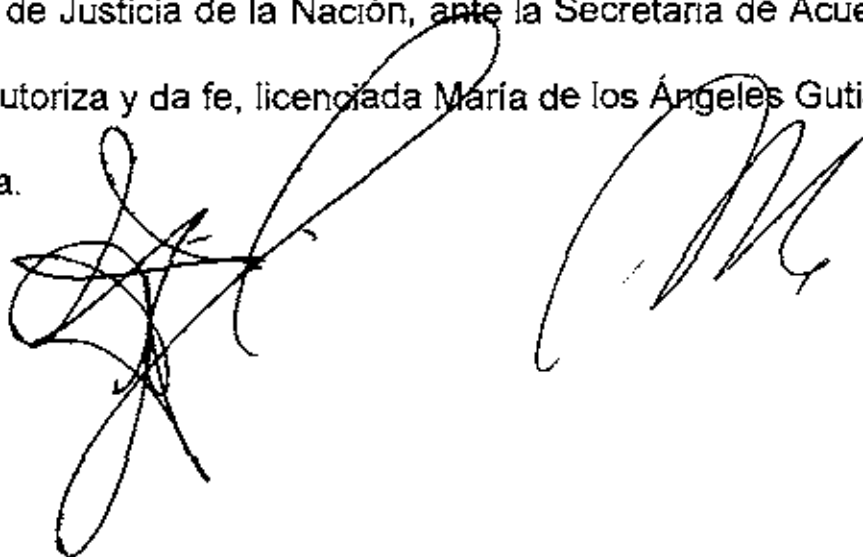
Expidanse al Agente del Ministerio Público de la

Federación adscrito a este Alto Tribunal, las copias simples solicitadas, las cuales quedan a su disposición en esta Secretaría de Acuerdos para su recepción, por conducto de las personas que señala, previa identificación, toma de razón y recibo que se asiente en autos.

Envíense los autos a la Ponencia del **MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ**, a fin de que elabore el proyecto de resolución que corresponda y con él dé cuenta a esta Sala.

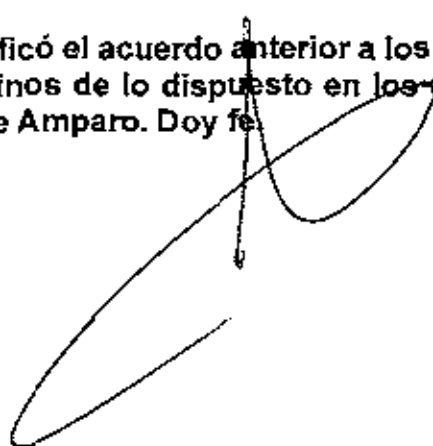
Notifíquese.

Así lo proveyó y firma la **MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ**, Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciada María de los Ángeles Gutiérrez Gatica.



OACA.

El **3 ABO 2017**, se notificó el acuerdo anterior a los interesados por medio de lista, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 28, de la Ley de Amparo. Doy fe.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL
SECRETARÍA DE ACUERDOS
SECRETARÍA DE ACUERDOS



CONSTANCIA DE ENTREGA DE COPIAS

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En la Ciudad de México, a las trece horas con treinta minutos del cuatro de agosto de dos mil diecisiete, en la oficina de Actuarios de la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ante la presencia del licenciado **JONATAN EDUARDO LARA BAZA**, Actuario Judicial adscrito a la Secretaría mencionada, comparece **SEMIRAMIS ARROYO SÁNCHEZ**, quien se identifica con credencial laboral, expedida por la Dirección General de Control de Juicios de Amparo de la Procuraduría General de la República, documento que se tiene a la vista, se agrega copia a los autos y se devuelve a la compareciente, quien de los mismos se desprende como autorizada de la representación social federal; y, en este acto, se le entregan las copias simples que solicitó, lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de dos de agosto del año en curso; y firma al calce de recibido y para constancia. Doy fe.



COMPARECIENTE

SEMIRAMIS ARROYO SÁNCHEZ.

ACTUARIO.

JONATAN EDUARDO LARA BAZA.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



**SEMIRAMIS
ARROYO
SANCHEZ**

NO. CREDENCIAL
576247

OFICIAL MINISTERIAL

2017

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE
JULICIOS DE AMPARO**

179

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

245444 11101184300-1

FIRMA

MUELLA DIGITAL

AUTORIZA

L.C. JORGE SANCHEZ VITO
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN

Se recomienda a todos los autorizados Civiles y Militares, prestar atención y cuidar mucho cuando se solicite el portador de esta credencial, ya que el mismo que dice ser el jefe de la unidad de la institución, no es el jefe. Quien no lo es, será considerado a la autorización de corrección de errores.

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta credencial, debe ser utilizada únicamente para fines de carácter oficial en el ejercicio de sus funciones de propiedad de la Procuraduría General de la República por lo que deberá ser devuelta a solicitud de la misma o al término de la relación laboral con la institución.

FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2014

10030000



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

FORMA CG-1A

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

DS

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL,
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE
JUICIOS DE AMPARO.

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA
FEDERACIÓN, ADSCRITA A LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

INTERVENCIÓN MINISTERIAL NÚMERO [REDACTED]
EXPEDIENTE: AMPARO EN REVISIÓN 623/2017/
FORMADO CON MOTIVO DEL RECURSO DE
REVISIÓN INTERPUESTO POR [REDACTED]
[REDACTED] EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE
VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECISÉIS, DICTADA POR EL JUZGADO DÉCIMO
SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN EL JUICIO DE AMPARO [REDACTED]

H. SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ✓

El suscrito agente del Ministerio Público de la Federación, designado por el C. Procurador General de la República, para intervenir en el presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo Vigente; 3º, 4º, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con el debido respeto expongo:

[REDACTED] autorizado del quejoso [REDACTED], interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo [REDACTED], mediante la cual, por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. ✓

176



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

Recibidos los autos en esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, su Presidente, por auto de fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, ordenó formar el expediente con el número A. R. 623/2017; asumió su competencia originaria para conocer del recurso de revisión, y ordenó notificar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Alto Tribunal.

Por lo anterior, se formula la intervención ministerial, que a esta Representación Social de la Federación le corresponde, para efecto de ser tomada en consideración, al momento del estudio del presente asunto y en la resolución correspondiente, al tenor de siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, [REDACTED] por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben:

"AUTORIDADES: --- 1. H. Congreso de la Unión --- -Cámara de Diputados; y --- -Cámara de Senadores. --- 2. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; --- 3. Secretario de Gobernación; --- 4. Comisionado Federal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; --- 5. Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y, --- 6. Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación.

ACTOS RECLAMADOS ---

1. Del Congreso de la Unión reclamo la expedición de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo del 14 de julio de 1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al 4 de agosto el mismo mes y año, en lo que concierne a los artículos 83, 84, 85 y demás relativos; con todas sus consecuencias y efectos.
2. Del Congreso de la Unión también reclamo la expedición de la Ley General de Salud del 26 de diciembre de 1983, publicada en el Diario Oficial de la Federación



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

correspondiente al 7 de febrero de 1984, en lo que concierne a los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248; con todas sus consecuencias y efectos.

3. Del Presidente de la República reclamo el decreto de 30 de julio 1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1994, que promulga y manda publicar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; con todas sus consecuencias y efectos.

4. Del Presidente de la República reclamo el decreto del 30 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, que promulga y manda publicar la Ley General de Salud; con todas sus consecuencias y efectos.

5. Del Secretario de Salud reclamo, en su calidad de titular y responsable del trámite y resolución de los asuntos que incumben a esa Secretaría en los términos de los artículos 1º, 2º, 14, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 1, 2º, 3º y 4º del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, todos los acuerdos, las ordenes, instrucciones, verbales o escritas, que como superior jerárquico cursó al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, como órgano desconcentrado de esa Secretaría, para negar, bajo la apariencia de un desechamiento, la solicitud de autorización sanitaria que formuló el quejoso para consumo personal con fines lúdicos o recreativos de la Marihuana, así como para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo de Marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana. Todos los efectos y consecuencias de los anteriores actos.

6. Del Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios reclamo los actos de cumplimiento, observancia, trámite y ejecución atribuidos al Secretario de Salud, ya sea que los hubiera llevado a cabo por sí mismo o por conducto de su subordinado el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas; también reclamo los actos que de propio imperio dictó y no en cumplimiento de su superior jerárquico, consistentes en las ordenes, instrucciones o acuerdos, proveídos o resoluciones que giró a su subordinado, el Director Ejecutivo de

178



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para que, bajo la apariencia de un desechamiento, niega la solicitud formulada por el quejoso para autorización sanitaria para consumo personal con fines lúdicos o recreativos de la Marihuana, así como para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo de Marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana; todos los efectos, cumplimiento y ejecución de estos actos.

7. Del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios reclamo los actos de cumplimiento, observancia, trámite y ejecución atribuidos a sus superiores jerárquicos, el Secretario de Salud, o bien, al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; reclamo igualmente los actos que de propia iniciativa haya realizado en la aplicación, concreta e implícita, de los numerales impugnados en la emisión y suscripción del oficio número [REDACTED] de ocho de julio de dos mil dieciséis, con el que, bajo la apariencia de un desechamiento, en realidad niega la solicitud de autorización sanitaria para consumo personal, con fines lúdicos o recreativos de la Marihuana, así como para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo de Marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana; con todos sus efectos y consecuencias. Asimismo reclamo cualquier acuerdo o determinación que haya tomado y ejecutado en relación con la solicitud formulada por el quejoso para la autorización sanitaria para consumo personal con fines lúdicos o recreativos de la Marihuana, así como para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo de Marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana; reclamo, también, el oficio de once de febrero de dos mil dieciséis en que requiere al hoy quejoso para que acredite su interés jurídico o interés legítimo para formular su petición y ejercer los derechos que



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

179

ahí hace valer el quejoso, aperebida que en caso contrario se desecharía la petición; también reclamo la confusión terminológica de carácter jurídico en que incurre para negar la petición al quejoso, bajo la apariencia de un desechamiento, pues al desgaire emplea tanto el interés jurídico como el interés legítimo como excusa para concluir con el desechamiento de la petición; con todos sus efectos y consecuencias, que se traducen de manera ejemplificativa y no limitativa en el desconocimiento y vulneración de los derechos sustantivos del quejoso.

8. De todas las autoridades reclamo los actos tendientes a desconocer y vulnerar los derechos fundamentales inherentes a mi persona como individuo libre y autónomo, en el contexto de una sociedad democrática, que se expresa a sí misma como sujeto responsable, autoconsciente, racional y moral. Derechos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano."

En el escrito de demanda, el quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1º, 3º, 4º, 13, 14, 16, 17 y 133 constitucionales, se expusieron los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado; se formularon los conceptos de violación que se estimó pertinentes; y se manifestó que no existe tercero perjudicado.

SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular mediante auto de veinticinco agosto de dos mil dieciséis, la admitió bajo el número de expediente [REDACTED] solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde; y señaló fecha y para la celebración de la audiencia constitucional.

TERCERO. Seguida la secuela procesal correspondiente, el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia, determinando por una parte, sobreseer en el juicio, y por la otra, negar el amparo y protección de la justicia federal, respecto



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

de los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479, de la Ley General de Salud, así como del oficio [REDACTED]

CUARTO. Inconforme con la sentencia anterior, la parte quejosa, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo Presidente por auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, quedando registrado con el número de expediente [REDACTED]

QUINTO. Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, la presidencia del Tribunal Colegiado del conocimiento admitió a trámite el recurso de revisión adhesiva, interpuesto por el delegado de las autoridades responsables Presidente de la República y Secretario de Salud.

SEXTO. Mediante proveído de cinco de enero de dos mil diecisiete, en atención a lo solicitado por la Ministra Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la reasunción de competencia [REDACTED] de su índice, el Tribunal Colegiado, determinó que hasta en tanto se tuviera conocimiento de la determinación dictada por la Superioridad respecto de la reasunción de competencia aludida, se abstendría de dictar resolución en el presente juicio

SÉPTIMO. Por auto de diez de febrero de dos mil diecisiete, el Tribunal Colegiado del conocimiento, recibió el oficio remitido por la subsecretaría de acuerdos de la Primera Sala del Máximo Tribunal, mediante el que informó que desechó la reasunción de competencia [REDACTED] por falta de legitimación de la parte promovente; por lo que se ordenó continuar con el trámite del juicio de amparo.

OCTAVO. Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, se turnó el presente expediente a la ponencia del Magistrado Eugenio Reyes Contreras, para la elaboración del proyecto respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley de Amparo.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

NOVENO. En sesión de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, el décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió que carecía de competencia para conocer del amparo en revisión, al tratarse de un asunto en el cual subsistía un problema de constitucionalidad, en específico, respecto de los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479, de la Ley General de Salud, en tanto a los cuales no existe jurisprudencia, por lo que se actualizaba la competencia originaria de ese Alto Tribunal para conocer del recurso de revisión. En consecuencia, el Tribunal Colegiado remitió el asunto a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación.

DÉCIMO. De conformidad con el punto anterior, por acuerdo de catorce de junio de dos mil diecisiete, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asumió su competencia originaria para conocer del recurso de revisión, bajo el expediente con número A. R. 623/2017. De igual forma turno el expediente para su estudio al Ministro José Ramón Cossío Díaz, en virtud de que la materia del asunto corresponde a la especialidad de la Sala a la cual se encuentra adscrito. Finalmente ordenó notificar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Alto Tribunal.

COMPETENCIA DE ESA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DEL PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, de la Ley de Amparo vigente; 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Pleno de ese Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, se estima que, esa Honorable Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente recurso de revisión, toda vez que subsiste el problema de constitucionalidad de los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479, de la Ley General de Salud.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 523/2017

OPORTUNIDAD DE LOS RECURSOS.

Esta Representación Social de la Federación, estima innecesario pronunciarse sobre la oportunidad de los recursos de revisión, pues el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ya se ocupó de ello, en el considerando tercero en su resolución de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.

CUESTIONES NECESARIAS PARA PRONUNCIARSE EN EL PRESENTE ASUNTO.

- I. **Conceptos de violación.** En lo que es materia de la presente instancia, la parte quejosa planteó la inconstitucionalidad de los artículos 234, 236, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479, de la Ley General de Salud, al considerar en esencia que:
 - a. Violan el derecho a la identidad personal, pluralismo y dignidad humana, porque prevén una política prohibicionista, impide la proyección que cada uno hace de sus preferencias para diferenciarse de acuerdo a su singularidad y a sus propios caracteres y acciones;
 - b. Violan los derechos a la propia imagen y libre desarrollo de la personalidad, ya que impiden realizar todo aquellos que desean hacer con su vida y su cuerpo, así como controlar y definir sus procesos mentales.
 - c. Transgreden el derecho a la disposición de la salud personal, pues limitan la posibilidad de elegir no ejercer el derecho a la salud u oponerse a las prestaciones de la salud pública.
 - d. Vulneran el derecho a la autodeterminación personal y corporal, y dignidad humana, ya que al prohibir el consumo de la marihuana, interfieren en un ámbito de conciencia personal, creencias, elección y autonomía personales, y;
 - e. Que la restricción a los derechos mencionados, no supera un escrutinio de proporcionalidad, pues el fin que se concreta en proteger la salud de toda persona contra su voluntad, no es legítimo; no es un medio idóneo para



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

183

mejorar la salud; tampoco dicha restricción, no es necesaria, pues existen medidas menos restrictivas para conseguir dicha finalidad; y no es estrictamente proporcional, porque genera más desventajas que ventajas, al aumentar para los consumidores el riesgo de ser lastimado o perder la vida, así como la generación de un mercado negro.

- II. Consideraciones de la sentencia recurrida. Bajo la misma temática, únicamente se hará alusión a las razones jurídicas que refieran al ámbito constitucional, esto es, el análisis de constitucionalidad de los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479, de la Ley General de Salud, que en lo conducente refieren lo siguiente:

"(...)

Es importante insistir que los conceptos de violación esta dirigidos a combatir el sistema normativo de restricciones de carácter normativo de restricciones de carácter administrativo que impide al quejoso el consumo de la marihuana con fines recreativos; el cual está inmerso en los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479, de la Ley General de Salud. En efecto, tales preceptos establecen lo siguiente:

(...)

Tales disposiciones establecen la regulación sanitaria de estupefacientes y psicotrópicos. Así, el legislador establece un listado para determinar qué sustancias deben considerarse como tales (artículos 234 y 235), contemplado a la cannabis sativa, indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas y al tetrahidrocannabinol, -conjuntamente, marihuana-, como tales.

Asimismo, el legislador federal establece que todo acto relacionado con estupefacientes y psicotrópicos, o cualquier producto que los contuviera, requiere una autorización de la Secretaría de Salud y que solo puede otorgarse con fines médicos y científicos (artículo 235, último párrafo y 247, último párrafo). De igual forma, respecto de la cannabis sativa, indica y americana o marihuana, se prohíbe de manera expresa la siembra, cultivo, cosecha, elaboración,



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado (artículos 237 y 248).

Asimismo, la ley establece que una autorización sanitaria es el acto administrativo mediante el cual la autoridad sanitaria competente permite a una persona pública o privada, la realización de actividades relacionadas con la salud humana, en los casos y con los requisitos y modalidades que determine esta Ley y demás disposiciones generales aplicables. Las autorizaciones sanitarias tendrán el carácter de licencias, permisos, registros o tarjetas de control sanitario (artículo 368).

Por último, se establece que para los efectos del capítulo contemplado en la Ley General de Salud relativo a delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, se entenderá que la marihuana está destinada para estricto consumo personal, cuando su cantidad en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de cinco gramos (artículo 479).

Así, los artículos que restringen la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado de las sustancias en comento –incluyendo marihuana–, a los fines médicos y científicos, deben entenderse conjuntamente con el artículo 44 del Reglamento de Insumos para la Salud, que establece que cualquier persona que pretenda realizar tales actividades respecto de los estupefacientes y psicotrópicos establecidos en la Ley General de Salud deben contar con una autorización de la Secretaría de Salud y sólo se podrán realizar con fines médicos y científicos.

Es importante precisar que la regulación en cuestión corresponde a las facultades del legislador federal para regular lo relativo a salubridad general, de conformidad con el artículo 73, fracción XVI de la Constitución General, la cual en términos del artículo 3, fracciones XXI y XXII, de la Ley General de Salud comprende la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia, así como el control sanitario de



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

productos y servicios para su importación y exportación, incluyendo dentro de estos, las sustancias mencionadas.

Tales disposiciones prevén un conjunto de normas administrativas, bajo el cual, todos los actos relativos al uso y consumo de la marihuana y, consecuencia, la respectiva autorización sanitaria, se encuentran prohibidos, con la única salvedad que sean para fines médicos o científicos.

Ahora bien, ha quedado precisado que este sistema normativo implica el ejercicio de la facultad del legislador federal en lo relativo a la prevención del consumo y control sanitario de estupefacientes y psicotrópicos, lo que hace evidente que el tema que se analiza no implica el análisis de un derecho aislado, sino que involucra un aspecto de suma importancia, como es la salud pública.

La protección de la salud, de conformidad con la Constitución General y los tratados internacionales en que nuestro país es parte, es un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, de tal forma que este no se limita a la salud física del individuo -esto es, a no padecer, a prevenir y tratar enfermedad-, sino que comprende aspectos relacionados con el buen estado mental y emocional de las personas, por lo que tal derecho se traduce en la obtención de un bienestar general integral, que incluye el estado físico, mental, emocional y social.

De esta manera, tal como la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha sostenido, el derecho a la salud-entraña obligaciones a cargo del Estado y sus organismos, pero también constituye una responsabilidad social compartida con la sociedad y los interesados, por lo que tal derecho impone deberes complejos a todos los poderes públicos del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y personal médico, tribunales, así como particulares, como médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones.

Al respecto, debe tenerse presente que la salud no solo tiene una proyección individual y personal, sino que también tiene una dimensión pública o social. Respecto de esta última faceta, dicho derecho consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Así, en aras de tutelar y proteger el derecho humano a la salud, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afectan la salud pública del conglomerado social, entre otros. Desde ese punto de vista, es posible señalar que la Ley General de Salud identifica el consumo de marihuana como un problema de salud pública y es en razón de ello que ha establecido el sistema normativo mencionado.

Esto obliga a no perder de vista que los modelos de estado que adopta la Constitución es el de un estado regulador, en el cual es posible establecer limitaciones a derechos en aras de alcanzar los fines de política pública, siempre que sean razonables. Lo anterior, en el entendido que en un estado democrático, se debe garantizar que sean los representantes populares, quienes tomen las decisiones de política pública, respecto de los cuales, los jueces deben otorgar deferencia, siempre que no afecten injustificadamente los derechos humanos.

(...)

Las disposiciones convencionales citadas tienen como objetivo primordial tipificar las medidas de control aplicables a nivel internacional con el fin de garantizar la disponibilidad de sustancias psicoactivas para fines médicos y científicos, objetivo que se estructura a partir de la protección de la salud. Asimismo, es posible señalar que el conjunto normativo que conforman las normas reclamadas es la forma a partir de la cual, el legislador federal ha determinado cumplir con la obligación constitucional de proteger la salud y de implementar la política pública relativa a la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y ejercer el control sanitario respectivo, en ejercicio de su actividad reguladora el ámbito de salud pública.

Lo anterior adquiere sentido si se toma en cuenta que el consumo de drogas representa una carga para los sistemas de salud pública, en lo que se refiere a la prevención, tratamiento y atención de los trastornos relacionados con tal consumo y sus consecuencias.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

Ahora bien, el quejoso señala que los preceptos reclamados vulnera el derecho a la identidad personal, al pluralismo -entendido como el derecho que tiene cada individuo para distinguirse de los demás- la dignidad humana, propia imagen, disposición a la salud personal y autodeterminación personal y corporal, libertades que están comprendidas en el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

De tal forma que, el análisis de los conceptos de violación del quejoso, implicará determinar si tal conjunto normativo vulnera ese derecho fundamental.

Pues bien, el derecho al libre desarrollo de la personalidad deriva del derecho a la dignidad, previsto en el artículo 1^o constitucional, así como en diversos tratados internacionales de los cuales es parte el Estado Mexicano.

Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el [REDACTED], determinó que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es el derecho de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida y que implica el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona de ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera.

Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuantos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger la apariencia personal; la profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en aspectos que son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, solo a ella corresponde decidir autónomamente.

Así, en ese asunto, el Alto Tribunal falló en el sentido que la reasignación sexual que decida una persona, esto es la adecuación que busque de su estado psicosocial a su físico, y de vivir en el sexo con el que se identifique plenamente, constituye una decisión que forma parte del libre desarrollo de la personalidad.

En otros precedentes, la Corte también ha considerado que la decisión de no continuar con el matrimonio también forma parte de un plan de vida elegido de



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

manera autónoma, el cual no debe ser obstaculizado por el Estado ni por un tercero y, en consecuencia, forma parte del libre desarrollo de la personalidad. En lo que interesa al tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el [REDACTED] determinó que las acciones o actividades necesarias para materializar la elección de consumir marihuana -esto es, la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera- implicaban ejercer el derecho a decidir que tipo de actividades recreativas o lúdicas se desean realizar, por lo que su obstaculización incide en el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Desde ese punto de vista, entendiendo al derecho fundamental en el sentido que lo ha comprendido el Alto Tribunal, resulta incuestionable que las normas reclamadas inciden en la libertad del sujeto de decidir qué actividades lúdicas o recreativas quiere realizar y evidentemente en la forma en qué decide vivir su vida, sin embargo, no debe perderse de vista que como cualquier otro derecho, el libre desarrollo de la personalidad no tiene carácter de absoluto, máxime que el presente caso, está involucrada una facultad regulatoria del Estado sustentada en una finalidad constitucionalmente imperiosa, esto es, la salud pública.

Al respecto ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los derechos humanos no son absolutos y en esa medida pueden ser restringidos y encontrar sus límites en el respeto de los derechos de los demás y en el orden público; sin embargo, con fundamento en el artículo 1° de la Constitución General y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las suspensiones o restricciones no pueden hacerse de manera arbitraria sino, en todo momento, en los casos y bajo las condiciones que establece la propia Constitución y conforme a las leyes que se emitan por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

Así, para que las medidas impuestas con el propósito de regular una restricción prevista constitucionalmente a un derecho fundamental sean válidas, deben satisfacer los siguientes requisitos:

- a) Que la restricción reglamentada por el legislador sea admisible por la Constitución. El legislador ordinario solo puede restringir o suspender el ejercicio de los derechos fundamentales en los casos y en las condiciones que la misma Constitución establece, como lo prescribe su artículo 1°. Por tanto, es claro que el legislador no tiene facultades para establecer limitaciones a derechos humanos adicionales a los que se derivan del mismo texto constitucional, y sus facultades de producción normativa solo deben desplegarse para darles contenido exacto.
- b) Que la medida legislativa sea la idónea para su realización.
- c) Que sea necesaria, esto es, que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar por otros medios menos restrictivos de derechos humanos (fundamentales).
- d) Que sea proporcional, esto es, que exista una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la restricción, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales.

Pues bien, tal como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión [REDACTED], la finalidad del marco regulatorio para el control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas previsto en la Ley General de Salud, de acuerdo con los distintos procesos legislativos de los preceptos impugnados, es la protección de la salud y el orden público.

Así, al igual que lo hizo la Sala, se estima que tales finalidades son constitucionalmente válidas, ya que la protección de la salud no es sólo un objetivo que válidamente puede perseguir el Estado, sino que resulta imperioso desde el ámbito constitucional, al tratarse de un derecho fundamental en el artículo 4° constitucional. De igual forma, perseguir el orden público, entendido como el bienestar de la sociedad en general, resulta válido pues el Estado tiene



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

interés en proteger el conglomerado social, lo cual puede hacer a través de decisiones legislativas o políticas públicas.

Para juzgar la idoneidad y la necesidad de la medida, debe precisarse que el legislador tiene un espacio de decisión que puede ser examinado por el juzgador de amparo en forma limitada, de modo tal que se pueda dictar una sentencia suficientemente segura.

Así; en cuanto a la idoneidad de la medida, en el precedente de la Primera Sala invocado previamente, determino que el examen relativo "presupone la existencia de una relación empírica entre la intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busca el legislador". Al respecto, preciso que la idoneidad de los preceptos reclamados para perseguir los fines constitucionales previamente, se acredita en la medida en que exista una relación empírica que vincule al consumo de la marihuana con daños y afectaciones a la salud y al orden público, en relación con lo cual, es importante atender a las conclusiones a las que llega la Sala:

- Si bien la evidencia medica muestra que el consumo de marihuana puede ocasionar danos a la salud, se trata de afectaciones que pueden calificarse como no graves, siempre y cuando, los consumidores no sean menores edad.
- Los consumidores de marihuana no califican necesariamente como farmacodependientes, existe un bajo grado de probabilidad de que la marihuana produzca dependencia, la posibilidad de que el consumo desencadene la dependencia está sujeto a factores preexistentes como son desordenes conductuales y de personalidad.
- Las implicaciones sobre la salud y las consecuencias sociales reportadas por quienes buscan controlar su consumo son mucho menos severas que aquellas reportadas por personas adictas a otras sustancias, como el opio o el alcohol.
- La marihuana tiene un nivel de incidencia muy bajo en el consumo de otras drogas más riesgosas.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

- El consumo de marihuana no es un factor determinante en la comisión de crímenes, pues la correlación es estadísticamente muy pequeña para considerarse significativa.
- La marihuana por sí misma no induce la comisión de delitos violentos, pues el consumo de marihuana inhibe los impulsos de agresión del usuario, ya que generalmente produce estados de letargo, somnolencia y timidez.
- El consumo de marihuana disminuye las habilidades necesarias para manejar automóviles y, por tanto, aumenta las probabilidades de causar accidentes viales; sin embargo, la disminución de las habilidades para conducir cuando se consume marihuana son más variables que cuando se ingiere alcohol, pues sus efectos están sujetos a factores como la dosis, la tolerancia desarrollada por consumo frecuente, entre otros.

De lo anterior, se advierte que no existe evidencia científica concluyente en el sentido que el consumo de la marihuana causa afectaciones graves a la salud, pero sí datos de los que se desprende que tal sustancia ocasiona daños de menor grado a la salud y al orden público, información que coincide con los datos aportados con la autoridad responsable, en el sentido de que el cannabis entraña un riesgo muy bajo de causar la muerte, pero que la intoxicación con dicha sustancias puede generar riesgo de ansiedad, deterioro de la atención y memoria, disforia, mayor disposición a sufrir accidentes y traumatismos, náuseas, pánico y paranoia.

Bajo tal razonamiento, es posible concluir que las normas reclamadas contribuyen en algún modo y algún grado a lograr el propósito que busca el legislador, por lo que es posible concluir que tal medida resulta idónea.

Ahora bien, en lo que se refiere al requisito de necesidad, debe analizarse si las normas reclamadas constituyen una medida necesaria para proteger la salud y el orden público o si, por el contrario, existen medidas alternativas igualmente idóneas que afecten en menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Al respecto, no debe perderse de vista que la finalidad que persigue el Estado consistente en la protección de la salud resulta imperiosa, pues existe una



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

192

obligación constitucional de garantizar positivamente la salud. Desde ese punto de vista, la determinación de la existencia de una medida alternativa que restrinja en el menor grado posible el libre desarrollo de la personalidad no puede ni debe centrarse de manera exclusiva en dicha libertad individual, pues debe considerarse que las normas pretenden dar eficacia a la dimensión social que tiene la protección de la salud, que impone al Estado el deber de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, entre los cuales se consideró el consumo de marihuana.

En ese panorama, no existe una medida igualmente idónea y menos restrictiva que la limitación de los actos consistentes en la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con marihuana, exclusivamente a los fines médicos y científicos, pues si su consumo se ha identificado como un problema de salud pública, resulta justificada la intervención estatal, máxime que el objetivo más amplio de la política de salud, persigue impulsar la protección a todos los mexicanos.

En este aspecto, no pasa desapercibido que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el precedente citado, considero que existían medidas menos restrictivas a la prevista en los artículos reclamados, sin embargo, desde el enfoque de salud pública apuntado, que implica una obligación constitucional en la materia, no es posible tomar esas medidas como alternativas.

En efecto, si se considerara que los artículos en cuestión establecen una medida innecesaria y, por ende, se le otorgara al quejoso la autorización para el desarrollo de las actividades que solicita, se le estaría permitiendo el ejercicio de un derecho sin mayores lineamientos para ello, con los posibles riesgos que pueda implicar en relación con derechos de terceros, al no existir un marco regulatorio legislativo y administrativo que establezca modalidades para su ejercicio, cuando a nivel mundial, dado el impacto que tiene en la salud pública, la legalización del uso recreativo de la marihuana se ha dado mediante procesos



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

de deliberación democrática y con marcos regulatorios integrales que hacen posible el ejercicio de ese derecho, garantizando así, las mejores condiciones para los usuarios y para terceros.

Incluso, en el caso, la ausencia de esa estructura normativa conduce a que en una eventual concesión de amparo para el efecto de que se otorgue la autorización sanitaria al quejoso, por estimar que las restricciones reclamadas es innecesaria, lejos de constituir una reparación efectiva en el goce de los derechos vulnerados, dejaría al promovente en un completo estado de inseguridad jurídica, pues excluyó de su solicitud los actos de comercio y el presupuesto o parte inicial de la cadena de autoconsumo que es la adquisición de la marihuana, no tiene en la actualidad una vía lícita. De manera que, para poder tener los beneficios de la autorización respectiva sería necesaria la comisión de diversos delitos previstos en normas punitivas de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, que no formaron parte de la impugnación del quejoso.

Así, atendiendo al marco jurídico vigente en el Estado mexicano, las restricciones reclamadas son necesarias para garantizar la protección de la salud y el orden público.

Por último, en cuanto al requisito de proporcionalidad, no debe perderse de vista que el artículo 479 de la Ley General de Salud, establece que para efectos del capítulo previsto en dicha normatividad relativo a "Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo", se entiende que la marihuana está destinada para su estricto e inmediato consumo personal, cuando su cantidad no exceda de cinco gramos.

Bajo esa perspectiva, el sistema normativo combatido opera bajo la posibilidad de que cualquier persona consuma una cantidad mínima de dicho estupefaciente, por lo que no es posible sostener que el beneficio colectivo en materia de salud y orden público, que se obtiene con las restricciones establecidas, afecta desmedidamente la libertad del quejoso para consumir tal sustancia."



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

194

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

III. **Agravios.** El recurrente, hace valer los argumentos que a continuación, se sintetizan:

Primero. Que resulta incorrecto la negativa del amparo, en virtud de que el Juez A quo, indebidamente omitió valorar y tomar en cuenta el acervo probatorio ofrecido, como un bloque armónico y bajo parámetros de sencillez y efectividad, para hacer efectivo el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva

Afirma el recurrente, que las pruebas ofrecidas tenían como objeto demostrar cuales son los daños reales de la Marihuana a la salud, para acreditar que la política prohibicionista no ha sido instrumental para reducir el consumo o adicciones a la Cannabis.

Segundo. Que contrario a lo que sostiene el Juez de Distrito, la política prohibicionista, prevista en los artículos 234, 235, 237, 245, 248, 368 y 479, de la Ley General de Salud, vulneraban el derechos a la propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana, pues implican una restricción inconstitucional e ilegítima, pues señala que la medida adoptada restringe de manera injustificada, tales derechos.

Afirman lo anterior, toda vez que, en primer término, el Juez de distrito, define indebidamente cual es el objetivo de la política prohibicionista como la "protección de la salud y el orden público", cuando en realidad el objetivo de dicha política es "proteger a la salud de los particulares contra su voluntad y sancionar a los usuarios de la cannabis".

En segundo término, aduce que el juez no llevo cabo un análisis de instrumentalidad de la medida, para determinar si son útiles para alcanzar el objetivo deseado, pues refiere, que el juez solo analizó si la cannabis genera un daño potencial a la salud, lo que no tiene relevancia para el examen de idoneidad.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

FORMA C.G. 195

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

En un tercer aspecto, el recurrente aduce, que tampoco no llevo a cabo un análisis de la necesidad de la medida, ni tampoco analiza si existen medidas menos restrictivas o si se restringe más allá de lo necesario.

Finalmente, señala que el Juez de Distrito no lleva a cabo un examen de proporcionalidad, pues omite analizar si la política prohibicionista se lleva a costa de una afectación innecesaria y desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente desmedidos.

Asimismo, estima que, contrario a lo que sostiene el Juez A quo, el artículo 479 de la Ley General de Salud, no crea un permiso para el uso del cannabis en cantidades menores a 5 gramos, sino que únicamente elimina la sanción penal.

Tercero. Que el Juez de Distrito omitió hacer un examen de escrutinio y proporcionalidad, en los términos que lo plateó el quejoso, pues hizo omiso de la mayor parte de los argumentos vertidos por el quejoso, relativos a que los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479, de la Ley General de Salud, vulneraban los derechos a la autodeterminación, libertad individual y corporal, libre desarrollo de la personalidad, identidad personal y disposición de la salud propia; y respecto de los que sí dio respuesta, lo hizo de manera superficial, fundando y motivando indebidamente su aserto.

En este sentido, estima que:

- a) La política prohibicionista no tiene una finalidad legítima, pues proteger la salud de una persona contra su voluntad viola los derechos de autonomía, libre desarrollo de la personalidad, identidad personal y libertad individual.
- b) La política prohibicionista, no es instrumental para prevenir posibles riesgos a la salud, ni para combatir las adicciones, ya que el número de



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

FORMA C.G. - 196

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

consumidores de Cannabis ha aumentado los últimos años, y hay pruebas objetivas que muestran que despenalizar el consumo no generaría un aumento en el consumo de la misma.

- c) Que existen alternativas menos restrictivas de los derechos humanos para proteger la salud de los consumidores y superar más allá de lo estrictamente necesario los derechos restringidos, y;
- d) La política prohibicionista no es proporcional, pues en balance genera mayores perjuicios que beneficios.

Cuarto. Que la sentencia de amparo transgrede los principios de congruencia externa y exhaustividad, pues omitió analizar si los derechos humanos a la identidad personal, pluralismo y la dignidad humana fueron legítimamente restringidos, pues sin justificación alguna, aduce el Juez A quo, que los derechos humanos invocados conforman parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Quinto. Que el Juez de Distrito hizo caso omiso de los argumentos vertidos por el quejoso, relativos a que los artículos 234, 235, 237, 245, 248, 368 y 479, de la Ley General de Salud vulneraban el derecho a la salud, en su aspecto negativo, inclusive para no gozar buena salud, pues sin justificación alguna, el A quo, estima que dicho derecho forma parte del derecho del libre desarrollo de la personalidad.

En este sentido, insiste que los artículos tildados de inconstitucionales, que prohíben el consumo de la Cannabis o cualquier producto que los contenga, violan su derecho a disponer sobre la salud propia por las siguientes razones:

- a) Por no contemplar que el derecho a la salud implica la permisión a no ejercer dicho derecho y no buscar el bienestar físico, mental y social.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

197

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

- b) Por no respetar el derecho a la salud y prohibir realizar conductas que solo afectan el ámbito estrictamente privado, adoptando una postura paternalista contraria a los ideales de un Estado liberal, respetuosamente de los derechos y dignidad de sus ciudadanos.

Sexto. Que el Juez de Distrito hizo el omiso de los argumentos vertidos por el quejoso, relativos a que los artículos 234, 235, 237, 245, 248, 368 y 479, de la Ley General de Salud, vulneraban el a la autodeterminación, libertad individual y dignidad humana, pues sin justificación alguna, el A quo, estimó que tales derechos forma parte del derecho del libre desarrollo de la personalidad.

Séptimo. Que la sentencia recurrida viola el principio de fundamentación y motivación, pues contrario a lo que sostiene el Juez A quo, la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios, sin fundamento alguno y motivo justificado decide resolver desfavorablemente la solicitud de consumo personal del quejoso, hoy recurrente.

Oclavo. Que la sentencia recurrida viola el principio de fundamentación y motivación, la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios, transgredió el derecho humano de igualdad, pues en diversa solicitud de consumo personal de marihuana, presentada en termino idénticos, resolvió negar la mismo, y en el presente asunto, determinó desecharla.

OPINIÓN MINISTERIAL.

Esta Representación Social de la Federación, después de analizar en su conjunto, los agravios formulados por la parte recurrente, estima estos infundados, por lo que en la materia de la revisión, lo procedente será que ese Alto Tribunal, confirme la sentencia recurrida y niegue el amparo protección de la justicia federal, de conformidad con las consideraciones siguientes.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

FORMA CG-1A
198

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

En carácter de preámbulo, es conveniente recordar que el quejoso, hoy recurrente, por su propio derecho solicitó a la responsable Director Ejecutivo de Autorización de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud; autorización sanitaria para consumir Marihuana regularmente y de forma personal y con fines lúdicos o recreativos.

Sin embargo, el ocho de julio de dos mil dieciséis, la autoridad responsable, emitió el oficio [REDACTED] en el sentido de desahogar la solicitud realizada, al no acreditar su interés jurídico y cuyo contenido, en lo que interesa es el siguiente:

"(...) Para un mejor proveer en la atención a la presente, se procede a contestar punto por punto el desahogo de la prevención multicitada por esta autoridad para que el solicitante acreditara el interés jurídico que le asiste o en su defecto el interés legítimo.

(...)

Es importante mencionar que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece tal y como lo menciona un principio de legalidad, mediante el cual la Administración Pública Federal no podrá exigir más formalidades que las expresamente previstas en la ley, bajo este contexto, la Ley que por un criterio de especialidad contempla los casos y requisitos así como las modalidades en las que se podrá emitir una autorización sanitaria es la Ley General de Salud, en este sentido la Ley Federal de Procedimiento Administrativo hace una remisión directa a esta normativa en salud para que las actividades relacionadas con la salud humana sean susceptibles de realizarse a través de un acto administrativo denominado autorización sanitaria, siempre y cuando dicho actuar se contemple en la Ley General de Salud.

Es importante considerar que, al acreditar un interés jurídico o legítimo para poder proveer sobre una resolución por parte de la autoridad no es una formalidad, es un requisito de fondo referente a la existencia de un derecho subjetivo previsto por el conjunto normativo que el particular pueda ejercer o reclamar de la autoridad del Estado.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

FORMA CG-1A
199

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

Por lo anterior, esta autoridad se encuentra plenamente facultada para requerir el que se acredite un interés jurídico o legítimo que le asiste al particular para reclamar de la misma el otorgamiento de una autorización ya que, dicho interés no constituye una formalidad sino un requisito de fondo sin el cual, no existe la posibilidad de emitir la propia autorización solicitada.

Por lo que el desahogo de la prevención formulado en lo que refiere a la existencia de un interés jurídico, entendiendo éste como la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento legal objetivo, el cual faculta al titular para exigir una conducta de la autoridad mediante una norma, así como del análisis de todo el cuerpo normativo en materia de salud, no se desprende que se acredite el mismo, toda vez que ni siquiera se está ante la existencia de una autorización de la modalidad requerida y, por ende de un derecho subjetivo para la emisión de la misma, ya que en ninguna parte se establece una autorización sanitaria para consumo personal con fines recreativos del 'Cannabis Sativa', (sativa, indica Americana o Marihuana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol, los isómeros ... y sus variantes estereoquímicas) (conjuntamente, Marihuana), consistentes en la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión, transporte de las mismas y la importación y adquisición de la semilla, para que el peticionario pueda consumir Marihuana regularmente y de forma personal y con fines meramente lúdicos o recreativos. Asimismo, solicito la autorización para ejercer los derechos correlativos al auto-consumo de marihuana; tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana por el peticionario, excluyendo expresamente los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma' (sic), consecuentemente, esta autoridad no tiene facultades para pronunciarse sobre actividades no prevista en la Ley General de Salud y cuyos casos, modalidades y requisitos no estén definidos en la Ley de la Materia.

(...)



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

260

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

Por tanto, resulta improcedente la solicitud para consumo personal con fines recreativos del 'Cannabis Sativa', (sativa, indica Americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol, los isómeros ... y sus variantes estereoquímicas) (conjuntamente, Marihuana), consistentes en la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión, transporte de las mismas y la importación y adquisición de la semilla, para que el peticionario pueda consumir Marihuana regularmente y de forma personal y con fines meramente lúdicos o recreativos. Asimismo, solicito la autorización para ejercer los derechos correlativos al auto-consumo de marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana por el peticionario, excluyendo expresamente los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma, toda vez que no cumple con el contenido del artículo 368 de la Ley General de Salud, el cual señala que las autorizaciones sanitarias se emitirán en los casos y con los requisitos y modalidades que determine esta Ley y demás disposiciones aplicables.

(...)

Ahora bien, cabe señalar que dicha prevención fue en afán de que se acreditara un interés jurídico o legítimo derivado de que no se acreditó el mismo para realizar su solicitud en los términos pretendidos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 368 de la Ley General de Salud que define a la autorización sanitaria.

Aunado a que no se desprende que en alguna de las disposiciones generales aplicables de la normatividad antes citada, se previera una solicitud como la presentada; por lo que fue en tesis de que se consideró necesario prevenir en los términos apuntados a fin de no dejar en estado de indefensión al peticionario en el ejercicio de su derecho de petición y por otra parte, contar con los elementos necesarios para dar una respuesta puntual y oportuna sobre la procedencia o improcedencia de su solicitud.

(...)



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

261

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

Adicionalmente, cabe señalar que no se configura la hipótesis de un derecho subjetivo que obligue a esta autoridad a emitir una autorización de dichas características, pues es un principio general de derecho que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite, y que la Ley General de Salud no contempla una autorización con las particularidades que refiere, lo conducente era que probara ser titular de un derecho subjetivo que, por un acto de autoridad, se viera afectado de manera personal y directa, lo cual no aconteció.

Al respecto, el suscrito reconoce que si bien es cierto que a su solicitud le asiste el derecho humano de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga el derecho a cualquier persona nacional o extranjera para formular una petición sobre cualquier materia y en cualquier sentido, dirigida a cualquier autoridad de nuestro país, en tanto la petición cumpla con las formalidades que el mismo precepto constitucional menciona, es decir, que se presente por escrito, de manera pacífica y respetuosa.

Para mayor precisión se transcribe: (...)

Mas cierto es que esta porción normativa no obliga a la autoridad requerida a responder en un determinado sentido la solicitud que se le haya formulado, sino únicamente le obliga a que se acuerde y dé el trámite correspondiente en un breve término, con la libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso.

Lo anterior debe entenderse en el sentido de que, siendo que la petición que se haya formulado con las características señaladas por el precepto citado, la obligación de la autoridad será la de otorgar una respuesta relacionada con lo pedido, en la forma que corresponda de acuerdo a los conceptos normativos que rigen la materia, y no así en el sentido de que es obligación de la autoridad el conceder precisamente lo peticionado por el particular, ya que existen procedimientos y trámites que deben seguir determinando cauce de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, por tanto, si bien es cierto que su derecho para formular una petición, cualquier que esta fuera, se encuentra garantizado por el artículo 8° constitucional, ello no significa que la autoridad deba reconocerle el



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

202

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

interés jurídico que pretende para otorgarle una autorización cuyas características no corresponden con ningún presupuesto jurídico existente.

Aunado a lo anterior, de las manifestaciones vertidas en el desahogo tampoco se desprende que se hayan aportado los elementos necesarios para acreditar el interés legítimo, como lo era la existencia de una norma constitucional en la que se estableciera o tutelara algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada o que dicho acto transgrediera ese interés difuso, ya sea de manera individual colectiva, ni que se probara pertenecer a dicha colectividad.

(...)

Por lo anteriormente expuesto y fundado, su trámite de autorización para (...) se desecha por no haber desahogado de manera satisfactoria el requerimiento de mérito."

De lo anteriormente transcrito, se desprende que la pretensión del quejoso no es otra que obtener autorización, para consumir marihuana regularmente y de forma personal, así como para ejercer los derechos relativos al auto-consumo de Marihuana

Ahora bien, como se expuso en los antecedentes de la presente intervención ministerial, esta Representación Social de la Federación advierte que el hoy recurrente planteó originalmente en su demanda de amparo la inconstitucionalidad de los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479, de la Ley General de Salud, al considerar que los mismos establecen una "política prohibicionista" respecto del consumo individual de la marihuana, misma que transgrede los derechos a la identidad personal, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación, propia imagen e intimidad, todos en relación con el principio de dignidad humana. Asimismo, sostuvo que dicha política vulnera el derecho a la salud.

De acuerdo con el recurrente, la prohibición del consumo de marihuana vulnera el derecho a la identidad personal, al pluralismo, la dignidad humana, propia imagen, disposición a la salud personal y autodeterminación personal y corporal.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

FORMA CG-1 203

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

Al respecto, en la sentencia amparo, el Juez de Distrito calificó de infundados los argumentos del quejoso, señalando que si bien es cierto, las normas reclamadas inciden en la libertad del quejoso de decidir que actividades lúdicas o recreativas quiere realizar y evidentemente en la forma que decide vivir su vida, también es cierto, que como cualquier otro derecho, el libre desarrollo de la personalidad, no tiene un carácter absoluto, máxime que en el presente caso, está involucrada una facultad regulatoria del Estado sustentada en una finalidad constitucionalmente imperiosa, como la salud pública.

En este sentido, el juez A quo estimó que, la política prohibicionista, constituye una restricción legítima al derecho del libre desarrollo de la personalidad, pues satisface los siguientes requisitos:

- a) Tiene un fin constitucionalmente válido, pues dicha restricción tiene como objeto, proteger la salud y el orden público, finalidades que son constitucionalmente válidas.
- b) Es idónea para lograr el fin constitucional, mismo que se satisface, de que si bien es cierto, no existe evidencia científica concluyente en el sentido que el consumo de la marihuana causa afectaciones graves a la salud, también es cierto, que sí existen datos de los que se desprende que tal sustancia ocasiona daños de menor grado a la salud y al orden público, información que coincide con los datos aportados con la autoridad responsable, en el sentido de que el cannabis entraña un riesgo muy bajo de causar la muerte, pero que la intoxicación con dicha sustancias puede generar riesgo de ansiedad, deterioro de la atención y memoria, disforia, mayor disposición a sufrir accidentes y traumatismos, náuseas, pánico y paranoia.
- c) Es necesaria, para conseguir el fin constitucionalmente válido, pues no existe una medida igualmente idónea y menos restrictiva, que la limitación de los actos consistentes en la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y en general, todo acto relacionado con la marihuana, y;



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

FORMA CG-1A
201

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

- d) Es proporcional, pues el beneficio colectivo en materia de salud y orden público, que se obtiene de las restricciones, no afecta desmedidamente la libertad del quejoso para consumir Marihuana, pues aún el artículo 479 de la Ley General de Salud, prevé la posibilidad de que cualquier persona una cantidad mínima de dicho estupefaciente.

Inconforme con esa decisión, el quejoso interpuso recurso de revisión, en el que alego fundamentalmente, que el juez de distrito, falló omiso en analizar los argumentos vertidos en su demanda, relativos a que los artículos 23, 35, 237, 245, 248, 368 y 479, de la Ley General de Salud, vulneraban los derechos a la identidad personal, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación, propia imagen e intimidad, así como el derecho a la salud, pues la política prohibicionista, restringe tales derechos fundamentales de forma injustificada.

Una vez precisado lo anterior, se proceden a analizar los conceptos de agravio formulados por el recurrente principal en relación a la constitucionalidad de los artículos de la Ley General de Salud, mismos que por cuestión de técnica jurídica, se analizaran en diverso orden en que fueron planteados.

Resulta infundado el agravio PRIMERO, del recurrente principal, en el que en esencia adujo que, el Juez A quo, omitió valorar y tomar en cuenta el acervo probatorio ofrecido, como un bloque armónico y bajo parámetros de sencillez y efectividad, para hacer efectivo el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

Se afirma lo anterior, toda vez que, contrario a lo que sostiene la parte recurrente, el Juez de Distrito sí efectuó una correcta valoración del acervo probatorio ofrecido por el quejoso, pues de la lectura de la sentencia recurrida, se advierte que el Juez A quo concluyó que no existía evidencia científica incuestionable en el sentido de que la marihuana cause afectaciones graves a la salud (lo que pretendía demostrar el quejoso con el caudal probatorio ofrecido), sin embargo, estimo que si se desprendían datos de que la Marihuana ocasionaba daños de menor



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

grado a la salud y a orden público, por lo que en cierto modo, la política prohibicionista contribuía en modo alguno a lograr el fin constitucionalmente válido.

Por otra parte, resultan infundados los agravios **SEGUNDO** y **TERCERO**, planteados por la parte recurrente, en los que medularmente aduce que contrario a lo que sostiene el Juez de Distrito, los artículos 234, 235, 237, 245, 248, 368 y 479, de la Ley General de Salud, vulneraban los derechos a la dignidad humana, identidad personal, libre desarrollo de la personalidad, propia imagen, autodeterminación y libertad individual, pues prevén una restricción inconstitucional e ilegítima

Refiere el recurrente, que la restricción prevista en los numerales reclamados, no se encuentra justificada en virtud de que:

- a) No tiene una finalidad constitucionalmente válida, pues el objeto de la política prohibicionista no es la "protección de la salud y el orden público", sino "proteger la salud de los particulares contra su voluntad y sancionar a los usuarios de la cannabis".
- b) No es idónea, pues el Juez no llevo a cabo el examen de idoneidad, al solo analizar si la cannabis generaba un daño potencial, y perdió de vista que no es instrumental para prevenir posibles riesgos a la salud, ni para combatir las adicciones, ya que el número de consumidores de Cannabis ha aumentado los últimos años, y hay pruebas objetivas que muestran que despenalizar el consumo no generaría un aumento en el consumo de la misma.
- c) Que no es necesaria, pues existen alternativas menos restrictivas de los derechos humanos para proteger la salud de los consumidores y suprime más allá de lo estrictamente necesario los derechos restringidos
- d) No es proporcional, en balance genera mayores perjuicios que beneficios, amén de que el juez no analizó si la política prohibicionista se lleva a costa de una afectación



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

FORMA C.G. I A
206

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente desmedidos.

Como se adelantó, resultan infundadas tales aseveraciones, toda vez que, el Juez A quo de forma acertada estimó que, la restricción prevista al derecho de libre desarrollo de la personalidad, es legítima, al encontrarse justificada.

En primer término, el Juez A quo estimó que los derechos constitucionales no son absolutos y por lo tanto, todos admiten restricciones, y encontrar sus límites en el respeto de los derechos de los demás y en el orden público. Así mismo estableció que tales restricciones no puede hacerse de forma arbitraria, sino en los casos y bajo las condiciones que establece la propia Constitución y conforme a las leyes que se emitan por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.

Lo anterior, con base en el criterio emitido por ese Alto Tribunal, cuyos datos de localización, rubro y texto, son los siguientes:

Época: Décima Época

Registro: 160267

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a/J. 2/2012 (9a.)

Página: 533

RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

FORMA CG-1A
207

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar la correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática.

De dicho criterio jurisprudencial, el Juez A quo, advirtió que, para que las medidas impuestas con el propósito de regular una restricción prevista constitucionalmente a un derecho fundamental sean válidas, deben satisfacer en principio, los siguientes requisitos:



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

FORMA CG-1A
208

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

- a) Que la restricción reglamentada por el legislador sea admisible por la Constitución. El legislador ordinario solo puede restringir o suspender el ejercicio de los derechos fundamentales en los casos y en las condiciones que la misma Constitución establece, como lo prescribe su artículo 1°. Por tanto, es claro que el legislador no tiene facultades para establecer limitaciones a derechos humanos adicionales a los que se derivan del mismo texto constitucional, y sus facultades de producción normativa solo deben desplegarse para darles contenido exacto.
- b) Que la medida legislativa sea la idónea para su realización.
- c) Que sea necesaria, esto es, que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar por otros medios menos restrictivos de derechos humanos (fundamentales).
- d) Que sea proporcional, esto es, que exista una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la restricción, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales.

Así, el juez A quo, concluyó que cualquier limitación deberá analizarse con el objeto de determinar si la medida legislativa 1) persigue una finalidad constitucionalmente admisible, 2) si resulta un medio instrumentalmente apto para conseguir tal finalidad, 3) si es necesaria, para lograr el fin buscado, y 4) Que sea estrictamente proporcional, que no implique una afectación desmedida de otros derechos fundamentales.

Bajo este contexto, el A quo, procedió a demostrar de manera fundada y motivada, que las restricciones a derechos fundamentales previstas en los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, resultaban válidas al satisfacerse requisitos referidos, en sede constitucional, en los siguientes términos:

"Pues bien, tal como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión [REDACTED] la finalidad del marco



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

FORMA C.G. I A
209

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

regulatorio para el control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas previsto en la Ley General de Salud, de acuerdo con los distintos procesos legislativos de los preceptos impugnados, es la protección de la salud y el orden público.

Así, al igual que lo hizo la Sala, se estima que tales finalidades son constitucionalmente válidas, ya que la protección de la salud no es sólo un objetivo que válidamente puede perseguir el Estado, sino que resulta imperioso desde el ámbito constitucional, al tratarse de un derecho fundamental en el artículo 4º constitucional. De igual forma, perseguir el orden público, entendido como el bienestar de la sociedad en general, resulta válido pues el Estado tiene interés en proteger el conglomerado social, lo cual puede hacer a través de decisiones legislativas o políticas públicas.

Para juzgar la idoneidad y la necesidad de la medida, debe precisarse que el legislador tiene un espacio de decisión que puede ser examinado por el juzgador de amparo en forma limitada, de modo tal que se pueda dictar una sentencia suficientemente segura.

Así; en cuanto a la idoneidad de la medida, en el precedente de la Primera Sala invocado previamente, determino que el examen relativo "presupone la existencia de una relación empírica entre la intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busca el legislador". Al respecto, preciso que la idoneidad de los preceptos reclamados para perseguir los fines constitucionales previamente, se acredita en la medida en que exista una relación empírica que vincule al consumo de la marihuana con daños y afectaciones a la salud y al orden público, en relación con lo cual, es importante atender a las conclusiones a las que llegó la Sala:

- + Si bien la evidencia médica muestra que el consumo de marihuana puede ocasionar daños a la salud, se trata de afectaciones que pueden calificarse como no graves, siempre y cuando, los consumidores no sean menores edad.
- + Los consumidores de marihuana no califican necesariamente como farmacodependientes, existe un bajo grado de probabilidad de que la marihuana



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

produzca dependencia, la posibilidad de que el consumo desencadene la dependencia está sujeto a factores preexistentes como son desordenes conductuales y de personalidad.

- Las implicaciones sobre la salud y las consecuencias sociales reportadas por quienes buscan controlar su consumo son mucho menos severas que aquellas reportadas por personas adictas a otras sustancias, como el opio o el alcohol.
- La marihuana tiene un nivel de incidencia muy bajo en el consumo de otras drogas más riesgosas.
- El consumo de marihuana no es un factor determinante en la comisión de crímenes, pues la correlación es estadísticamente muy pequeña para considerarse significativa.
- La marihuana por sí misma no induce la comisión de delitos violentos, pues el consumo de marihuana induce los impulsos de agresión del usuario, ya que generalmente produce estados de letargo, somnolencia y timidez.
- El consumo de marihuana disminuye las habilidades necesarias para manejar automóviles y, por tanto, aumenta las probabilidades de causar accidentes viales; sin embargo, la disminución de las habilidades para conducir cuando se consume marihuana son más variables que cuando se ingiere alcohol, pues sus efectos están sujetos a factores como la dosis, la tolerancia desarrollada por consumo frecuente, entre otros.

De lo anterior, se advierte que no existe evidencia científica concluyente en el sentido que el consumo de la marihuana causa afectaciones graves a la salud, pero sí datos de los que se desprende que tal sustancia ocasiona daños de menor grado a la salud y al orden público, información que coincide con los datos aportados con la autoridad responsable, en el sentido de que el cannabis entraña un riesgo muy bajo de causar la muerte, pero que la intoxicación con dicha sustancias puede generar riesgo de ansiedad, deterioro de la atención y memoria, disforia, mayor disposición a sufrir accidentes y traumatismos, náuseas, pánico y paranoia.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

211

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

Bajo tal razonamiento, es posible concluir que las normas reclamadas contribuyen en algún modo y algún grado a lograr el propósito que busca el legislador, por lo que es posible concluir que tal medida resulta idónea.

Ahora bien, en lo que se refiere al requisito de necesidad, debe analizarse si las normas reclamadas constituyen una medida necesaria para proteger la salud y el orden público o si, por el contrario, existen medidas alternativas igualmente idóneas que afecten en menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Al respecto, no debe perderse de vista que la finalidad que persigue el Estado consistente en la protección de la salud resulta imperiosa, pues existe una obligación constitucional de garantizar positivamente la salud. Desde ese punto de vista, la determinación de la existencia de una medida alternativa que restrinja en el menor grado posible el libre desarrollo de la personalidad no puede ni debe centrarse de manera exclusiva en dicha libertad individual, pues debe considerarse que las normas pretenden dar eficacia a la dimensión social que tiene la protección de la salud, que impone al Estado el deber de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, entre los cuales se consideró el consumo de marihuana.

En ese panorama, no existe una medida igualmente idónea y menos restrictiva que la limitación de los actos consistentes en la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con marihuana, exclusivamente a los fines médicos y científicos, pues si su consumo se ha identificado como un problema de salud pública, resulta justificada la intervención estatal, máxime que el objetivo más amplio de la política de salud, persigue impulsar la protección a todos los mexicanos.

En este aspecto, no pasa desapercibido que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el precedente citado, considero que existían medidas menos restrictivas a la prevista en los artículos reclamados, sin embargo,



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

FORMA CG-1A
212

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

desde el enfoque de salud pública apuntado, que implica una obligación constitucional en la materia, no es posible tomar esas medidas como alternativas. En efecto, si se considerara que los artículos en cuestión establecen una medida innecesaria y, por ende, se le otorgara al quejoso la autorización para el desarrollo de las actividades que solicita, se le estaría permitiendo el ejercicio de un derecho sin mayores lineamientos para ello, con los posibles riesgos que pueda implicar en relación con derechos de terceros, al no existir un marco regulatorio legislativo y administrativo que establezca modalidades para su ejercicio, cuando a nivel mundial, dado el impacto que tiene en la salud pública, la legalización del uso recreativo de la marihuana se ha dado mediante procesos de deliberación democrática y con marcos regulatorios integrales que hacen posible el ejercicio de ese derecho, garantizando así las mejores condiciones para los usuarios y para terceros.

Incluso, en el caso, la ausencia de esa estructura normativa conduce a que en una eventual concesión de amparo para el efecto de que se otorgue la autorización sanitaria al quejoso, por estimar que las restricciones reclamadas es innecesaria, lejos de constituir una reparación efectiva en el goce de los derechos vulnerados, dejaría al promovente en un completo estado de inseguridad jurídica, pues excluyó de su solicitud los actos de comercio y el presupuesto o parte inicial de la cadena de autoconsumo que es la adquisición de la marihuana, no tiene en la actualidad una vía lícita. De manera que, para poder tener los beneficios de la autorización respectiva sería necesaria la comisión de diversos delitos previstos en normas punitivas de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, que no formaron parte de la impugnación del quejoso.

Así, atendiendo al marco jurídico vigente en el Estado mexicano, las restricciones reclamadas son necesarias para garantizar la protección de la salud y el orden público.

Por último, en cuanto al requisito de proporcionalidad, no debe perderse de vista que el artículo 479 de la Ley General de Salud, establece que para efectos del capítulo previsto en dicha normatividad relativo a "Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo", se entiende que la marihuana está destinada para



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

su estricto e inmediato consumo personal, cuando su cantidad no exceda de cinco gramos."

De lo anterior, contrario a lo que aduce el recurrente principal, se puede advertir que el Juez A quo, no omitió realizar el estudio escrutinio fijado por ese Máximo Tribunal, aunado a que expone las razones, por las cuales estimó que se cumplieran con los requisitos para demostrar que las restricciones a derechos fundamentales son válidas.

En efecto, el A quo, de forma fundada y motivada, demostró lo siguiente:

- a) Tiene un fin constitucionalmente válido, pues dicha restricción tiene como objeto, proteger la salud y el orden público, finalidades que son constitucionalmente válidas.
- b) Es idónea para lograr el fin constitucional, mismo que se satisface, de que si bien es cierto, no existe evidencia científica concluyente en el sentido que el consumo de la marihuana causa afectaciones graves a la salud, también es cierto, que si existen datos de los que se desprende que tal sustancia ocasiona daños de menor grado a la salud y al orden público, información que coincide con los datos aportados con la autoridad responsable, en el sentido de que el cannabis entraña un riesgo muy bajo de causar la muerte, pero que la intoxicación con dicha sustancias puede generar riesgo de ansiedad, deterioro de la atención y memoria, disforia, mayor disposición a sufrir accidentes y traumatismos, náuseas, pánico y paranoia.
- c) Es necesaria, para conseguir el fin constitucionalmente válido, pues no existe una medida igualmente idónea y menos restrictiva, que la limitación de los actos consistentes en la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y en general, todo acto relacionado con la marihuana, y;



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

214

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

- d) Es proporcional, pues el beneficio colectivo en materia de salud y orden público, que se obtiene de las restricciones, no afecta desmedidamente la libertad del quejoso para consumir Marihuana, pues aún el artículo 479 de la Ley General de Salud, prevé la posibilidad de que cualquier persona una cantidad mínima de dicho estupefaciente.

Por todo lo anterior, contrario a lo que sostiene el recurrente principal, el Juez A quo, demostró con suficientes razonamientos, que se cumplían los requisitos necesarios, para la restricción de derechos fundamentales.

Por otro lado, resultan infundados los agravios CUARTO, QUINTO Y SEXTO, en los que esencialmente aduce, que el Juez de Distrito hizo caso omiso de los argumentos vertidos por el quejoso, relativos a que los artículos 234, 235, 237, 245, 248, 368 y 479, de la Ley General de Salud, vulneraban los derechos humanos a la identidad personal, pluralismo, dignidad humana, autodeterminación, libertad individual, y derecho a la salud en su aspecto negativo, pues sin justificación alguna el A quo, considero que dicho derecho forma parte del derecho del libre desarrollo de la personalidad.

En efecto, resultan infundadas tales aseveraciones, pues contrario a lo que sostiene la parte recurrente, el juez A quo, consideró de manera correcta que, los derechos de mérito, estaban comprendidos dentro del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues así lo había determinado la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal de la Nación, al resolver el amparo en revisión [REDACTED] el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.

Con independencia de lo anterior, esta Representación Social de la Federación, estima que en modo alguno, los artículos 234, 235, 237, 245, 248, 368 y 479, de la Ley General de Salud, vulneraban los derechos humanos a la identidad personal, pluralismo, dignidad humana, autodeterminación, libertad individual, y derecho a la salud en su aspecto negativo.

En efecto, la medida legislativa contenida en los artículos reclamados, no limitaba el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, ni tampoco los correspondientes a la intimidad, propia imagen, identidad personal y autodeterminación.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

FORMA C.G. I AF
215

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

Esto es así, ya que no se advierte, en qué medida la restricción al consumo de cannabis sativa cosifica, humilla, degrada o envilece a las personas, se traduzca en una transgresión al derecho humano de dignidad humana.

Asimismo, con dicha medida prohibicionista, no se impide a las personas que no sean conocidas por otros en ciertos aspectos de su vida privada y, por ende, que puedan decidir sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos y sentimientos, en estricto respeto al derecho de intimidad.

Tampoco se desprende de la normativa reclamada, que se establezca supuestos jurídicos que afecten el derecho de las personas a decidir, en forma libre, sobre la manera en la que quieren mostrarse frente a los demás, de conformidad con el derecho humano a la propia imagen.

En relación, con el derecho humano de libre autodeterminación, tampoco se considera que las restricciones previstas en los preceptos combatidos en modo alguno lo transgredan, pues no impiden el derecho de las personas a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. A más de lo anterior, no existe una coacción o control injustificado sobre las propias metas, objetivos, valores, ideas, expectativas y gustos de las personas.

Ahora bien, en relación a la transgresión al derecho a la Salud, de igual forma no se ve afectado por la política prohibicionista, prevista en los artículos 234, 235, 237, 245, 248, 368 y 479, de la Ley General de Salud.

Para demostrar lo anterior, se estima necesario precisar en primer término que el derecho a la salud (ya sea en su aspecto positivo o negativo), puede ser restringido y encontrar sus límites en el respeto a los derechos de los demás y en el orden público, por lo que la política prohibicionista contenida en los preceptos tildados de inconstitucional, resulta razonable, ello de conformidad con el artículo 4º constitucional.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

En efecto, la prohibición contenida en los artículos impugnados resulta una medida instrumentalmente apta para alcanzar los objetivos de protección a la vida y a la salud que el legislador legítimamente busca proteger, por lo tanto no se viola en perjuicio del recurrente el derecho a la disposición de la salud propia, puesto que se está poniendo un modelo o estándar de vida ajenos a los particulares, para imponer coercitivamente una visión de lo bueno y de lo correcto.

Así, el Estado tiene la obligación positiva de tomar las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz el derecho a la salud, así el fin inmediato del Estado es proveer de salud en las mejores condiciones posibles, por lo que resulta incorrecto que se vulnere el derecho a la salud en su aspecto negativo, pues no debe perderse de vista que el derecho a la salud implica una hacer posible por parte del Estado, que garantice el disfrute del más alto nivel posible de salud, pues al contrario, se violaría el contenido básico del propio derecho.

Con independencia de lo anterior, no debe perderse de vista, que la política prohibicionista, busca proteger el derecho a la salud pública, mismo que tiene un rango constitucional, en tanto forma parte del derecho a la salud previsto en el artículo 4 Constitucional.

En efecto, la salud tiene una dimensión individual y una colectiva. Así lo podemos derivar del artículo 23 de la Ley General de Salud, el cual señala que los servicios de salud comprenden todas aquellas acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad.

Asimismo, no debe entenderse la salud simplemente como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino como un estado completo de bienestar físico, mental y social, por lo que es un deber del Estado el dirigir esfuerzos tanto a reparar las afectaciones en la salud de las personas, como prevenirlas.

Por tanto, el derecho a la salud pública es el derecho a la salud de la colectividad que el Estado tiene obligación de proteger, a través de la conjunción de diferentes acciones encaminadas a prevenir el desarrollo de enfermedades, así como a repararlas, motivo por el



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

217

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

cual, al ser normativizado también desde una perspectiva colectiva, coadyuva en el mantenimiento de la paz y estabilidad social.

En este orden de ideas, los artículos tildados de inconstitucionales, y contrario a lo que aduce el recurrente principal, lejos de vulnerar el derecho a la salud ---en su aspecto negativo---, los mismos protegen un fin superior, esto es, proteger la salud pública, en este caso, por el consumo de estupefacientes.

Por lo anterior, se puede advertir claramente, que los artículos tildados de inconstitucionales, lejos de atentar contra el orden constitucional, revela que la intención del legislador fue proteger el derecho a la salud, no solo en lo individual, sino en lo colectivo, que es un fin superior, por lo que implementa medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz el derecho a la salud, sin que en el presente caso se transgreda el derecho particular del recurrente, pues el mismo debe ceder ante el interés público.

En tal virtud, se considera que la implementación de la política prohibicionista, constituye un medio apto para proteger la salud pública, por la amenaza que representa para la salud física, emocional y moral de los niños, jóvenes y adultos que habitan en el país, al permitir el consumo de Cannabis Sativa, dada el incremento que se ha dado en el consumo de drogas y como consecuencia de ello el aumento en el número de personas adictas a ellas.

Bajo este contexto y contrario a lo que aduce el recurrente principal, los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479, de acuerdo con los razonamientos expuestos con anterioridad, se estima que no vulneran los derechos a la identidad personal, pluralismo, dignidad humana, autodeterminación, libertad individual, y derecho a la salud en su aspecto negativo.

Finalmente, en relación a los agravios **SÉPTIMO Y OCTAVO**, del recurrente principal, Esta Representación Social de la Federación, estima que deber reservarse jurisdicción al Tribunal Colegiado del Conocimiento, pues versan sobre cuestiones de legalidad, mismas que son ajenas a la materia de la presente instancia.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

Por todo lo anterior, ante lo infundado de los agravios propuestos por el recurrente principal, esta Representación Social de la Federación, estima que, en la materia de revisión, lo procedente será que ese Máximo Tribunal de la Nación, confirme la sentencia recurrida y niegue el amparo y protección de la Justicia Federal a [REDACTED]

Por último, debe señalarse que al resultar infundados los agravios del recurrente principal, por las consideraciones expuestas en la presente intervención ministerial, procede que ese Máximo Tribunal declare sin materia la revisión adhesiva hecha valer por el delegado de las autoridades responsables Presidente de la República y Secretario de Salud, toda vez que el interés de la parte adherente está sujeto a la suerte del recurso principal, por lo que es evidente que cuando el sentido de la resolución dictada le resulta favorable, desaparece la condición a la que estaba sujeto el interés jurídico de aquella para interponer la adhesión; esto es, la de reforzar el fallo recurrido; en consecuencia, se estima que debe declararse sin materia el recurso de revisión adhesiva.

Sirve de sustento a lo expresado la jurisprudencia de esta Segunda Sala que a la letra dispone lo siguiente:

"Registro No. 171,304

Novena Época

Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XXVI, Septiembre de 2007

Página: 552

Tesis: 2a/JJ. 166/2007

Jurisprudencia

Materia(s): Común



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

219

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

"REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO INDIRECTO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI LA REVISIÓN PRINCIPAL RESULTA INFUNDADA. El artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé la procedencia del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito, y en su último párrafo establece que en todos los casos a que se refiere ese precepto, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión principal. Ahora bien, si se toma en cuenta que el recurso de revisión adhesiva carece de autonomía, al señalar el párrafo indicado que la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste, es evidente que si la revisión principal resulta infundada, aquél debe declararse sin materia, por su naturaleza accesoria".

Por lo antes expuesto, a Usted Honorable Sala de ese Máximo Tribunal, atentamente pido:

PRIMERO.- Tenerme por presentado y por reconocida la personalidad que ostento como Agente del Ministerio Público de la Federación, formulando la intervención ministerial que a esta Representación Social de la Federación le corresponde. *

SEGUNDO.- Ante las consideraciones vertidas por esta Representación Social de la Federación, en lo que es materia competencia de ese Máximo Tribunal de la Nación, se confirme la sentencia recurrida y se niegue el amparo y protección de la Justicia Federal a [REDACTED]

TERCERO. Declarar sin materia la revisión adhesiva.

CUARTO. Reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado del conocimiento.

QUINTO. Expedir a esta Representación Social de la Federación, copia simple de la resolución que se pronuncie en el presente recurso de revisión, lo anterior con fundamento en



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

220

"Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Amparo en Revisión 623/2017

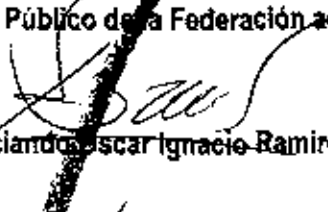
el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al tenor del artículo 2° de la Ley de Amparo.

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2017.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".

EL C. agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Máximo Tribunal.


Licenciado Oscar Ignacio Ramirez Zavala.

039738

3

SECRETARÍA DE
JUSTICIA DE LA NACION

17 FEB 1960 PM 4 57

OFICIO DE
JUDICIAL DE LA NACIÓN

Recibido de un enviado en (46) fojas, sin anexos.

Eli

SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA NACION

17 FEB 15 1960

SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA NACION



SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA NACION



PROMOCIÓN
039738

221
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, la Secretaría de
Acuerdos da cuenta a la Presidenta de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la intervención
ministerial 71/2017, recibida en la Oficina de Certificación
Judicial y Correspondencia. Conste. *e*

Ciudad de México, a dieciséis de agosto de dos mil
diecisiete.

Agréguese a sus autos la intervención ministerial ✓
71/2017, suscrita por el Agente del Ministerio Público de la
Federación adscrito a este Alto Tribunal.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25,
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, téngase a la representación social haciendo las
manifestaciones que expresa, las cuales se tomarán en
consideración en el momento procesal oportuno y una vez que
se dicte la sentencia respectiva, expídase la copia solicitada.

Devuélvanse los autos a la Ponencia del **MINISTRO** ✓
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

Notifíquese. *J*

Así lo proveyó y firma la **MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA
HERNÁNDEZ**, Presidenta de la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, ante la Secretaría de Acuerdos
que autoriza y da fe, licenciada María de los Ángeles Gutiérrez
Gatica.

OACA.

17. AGO 2017

El 17. AGO 2017, se notificó el acuerdo anterior a los interesados
por medio de lista, en términos de lo dispuesto en los artículos 26,
fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

+
222**AMICUS CURIAE**

que se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación

de los Estados Unidos Mexicanos

por

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Amparo en revisión 623/2017

a) Personas que suscriben el este Amicus Curiae.

- I. LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, COLECTIVO DE ESTUDIOS DE DROGAS Y DERECHO, PROGRAMA DE POLÍTICA DE DROGAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS Y CORPORACIÓN ACCIÓN TÉCNICA SOCIAL

b) Sustento legal para la presentación del Amicus Curiae.

- II. Comparecemos ante esta SCJN de manera respetuosa con la finalidad de presentar este *Amicus Curiae* y que sea considerado el contenido del mismo en ejercicio de nuestro derecho de petición previsto en el artículo 1º y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como de nuestro derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos de manera directa, conforme al artículo 23.1, inciso a) de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

c) Objetivo.

- III. El objetivo del presente *Amicus Curiae* es informar a la SCJN del panorama actual al que la sociedad se enfrenta como consecuencia de una legislación absolutamente prohibitiva.
- IV. El legislador a través de su producción normativa ha sobredimensionado el consumo de cannabis como problema de orden y salud pública al punto que las penas que se han otorgado a las diversas actividades relacionadas con el consumo del cannabis son evidentemente desproporcionadas considerando la invasión a derechos fundamentales, los bienes jurídicos resguardados y la efectividad para tutelar estos bienes jurídicos.
- V. Al día de hoy, en México, las leyes que criminalizan y estigmatizan a toda persona que realice actividades relacionadas con el consumo de drogas han generado el aumento de la población penitenciaria sin disminuir tanto el comercio como el consumo de las mismas. Como consecuencia, el legislador ha rebasado los límites constitucionales con leyes desproporcionadas que no cumplen con su propósito.

223

d) Principio de proporcionalidad en la CPEUM.

- VI. La tarea del legislador como consecuencia de sus actividades de creación normativa que le fueron encomendadas por mandato constitucional conlleva un amplio margen de libertad configuradora para crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de estas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados.
- VII. Para llevar a cabo lo anterior, es necesaria la apreciación, análisis y ponderación de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado social.
- VIII. En el caso concreto de la materia penal, el legislativo se encuentra facultado para emitir leyes que inciden en los derechos fundamentales de los gobernados y a través de las penas necesarias para salvaguardar diversos bienes constitucionales que la sociedad considera valiosos, por ejemplo la vida, salud, propiedad, orden público.
- IX. Sin embargo, como lo ha sostenido este Alto Tribunal, las facultades del legislador no son ilimitadas, la legislación debe ser sometida a control constitucional y contar con los siguientes elementos¹: (a) perseguir una finalidad constitucionalmente legítima; (b) ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido; (c) ser necesaria, es decir, suficiente para lograr dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado, y (d) estar justificada en razones constitucionales.
- X. Como consecuencia, existe una obligación por parte del legislador de actuar de forma medida y no excesiva al momento de emitir normatividad, particularmente en materia penal, debido a que de acuerdo con el principio de legalidad, se encuentra impedido para actuar de forma arbitraria y en exceso de poder.
- XI. En esta materia, el legislador tiene un amplio margen de libertad para diseñar el rumbo de la política criminal de acuerdo a las necesidades sociales del momento histórico respectivo: (a) los bienes jurídicamente tutelados; (b) las sanciones penales, y (c) las conductas típicas antijurídicas.
- XII. Como consecuencia, al configurar leyes penales, debe respetar el contenido de diversos principios constitucionales: (a) proporcionalidad; (b) razonabilidad jurídica (penas no infamantes, crueles, excesivas, injustas, trascendentales), y (c) no penalidades contrarias a la dignidad del ser humano².
- XIII. Debido a la ausencia del establecimiento de límites concretos establecidos por la CPEUM, se ha convertido en responsabilidad de esta SCJN el determinar los criterios y condiciones en que se actualiza que una sanción impuesta por el legislador no cumpla con los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

¹ No. Registro: 170,740. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanero Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXVI, Diciembre de 2007. Tesis: P/J. 130/2007. Página: 8

² De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22.

2:1

- XIV. Es importante señalar que este Alto Tribunal, a partir de un método de aproximación sucesiva, se encuentra autorizada para definir el contenido de los preceptos de la CPEUM³ ya que la jurisprudencia constitucional que se emite es del interés directo de todos los gobernados, a quienes se les debe otorgar certeza sobre los límites constitucionales de la actuación pública.
- XV. Derivado de lo antes expuesto, procedemos a realizar un análisis sobre cada uno de los criterios que deben ser satisfechos para estimar un actuar proporcionado por parte de la autoridad:

e) Persecución de finalidades legítimas desde la óptica constitucional.

- XVI. El legislador en el Diario de los Debates del texto original de la Ley General de Salud⁴ estimó en su artículo 235 que la medida adecuada para proteger a la población de los efectos de "estupefacientes", categoría en la que se ubica la Cannabis sativa, indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas⁵; era promover la prohibición absoluta⁶ de: "la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga..."
- XVII. Actualmente, bajo la consigna de proteger la salud de la población y en general el orden público, el legislador ha creado todo un sistema punitivo que involucra a los siguientes ordenamientos: (a) Ley General de Salud; (b) Código Penal Federal, (c) Código Federal de Procedimientos Penales
- XVIII. Es de suma relevancia hacer énfasis que todo mandato del legislativo culmina en la configuración de un delito –aunque exista la obligación de no acción penal– para el Ministerio Público en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma–, lo que se traduce en privación de la libertad y como excepción tratamiento de farmacodependencia, mismo que puede llegar a ser obligatorio.⁷
- XIX. De lo anterior podemos concluir dos aspectos generales:
- Para el legislador desde 1984 las actividades relacionadas con el Cannabis representan un riesgo tan grande para la salud y para el orden público que quien las realice merece se disminuyan sus derechos de libertad, como consecuencia es necesario enviar a estos delinquentes a la cárcel o a recibir tratamiento.

³ Deliberaciones públicas (9 y 11 de mayo de 2006) llevadas a cabo a propósito de la Acción de Inconstitucionalidad 25/2004, promovida por el Procurador General de la República en contra del Congreso y del Gobernador del Estado de Nuevo León, demandando la invalidez del Decreto número 108, publicado en el Periódico Oficial estatal el 14 de julio de 2004, por el que se adicionaron la fracción VII del artículo 10 y los artículos 11 Bis y 13, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública; se reformaron y adicionaron los artículos 39, del Código de Procedimientos Civiles, 29, del Código de Procedimientos Penales y 22, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa, todos del Estado de Nuevo León.

⁴ Legislatura LIII - Año II - Período Ordinario - Fecha 1983/1215 - Número de Diario 37

⁵ Artículo 234

⁶ "Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes sustancias y vegetales: opio preparado para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales preparados, cannabis sativa, indica y americana o marihuana, papaver somniferum o adomidera, papaver baccatum y erythroxylon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas o preparaciones."

⁷ Artículo 193 Bis. - Cuando el centro o institución reciba reporte del no ejercicio de la acción penal, en términos del artículo 478 de esta Ley, las autoridades de salud deberán citar al farmacodependiente o consumidor, a efecto de proporcionar orientación y conminarlo a tomar parte en los programas contra la farmacodependencia o en aquellos preventivos de la misma. Al tercer reporte del Ministerio Público el tratamiento del farmacodependiente será obligatorio

225

- b. Para el legislador toda actividad relacionada con el Cannabis es una actividad problemática, por lo que es imposible realizar la "siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con el Cannabis sin que sea un problema "especialmente grave para la salud pública".
- c. Para el legislador si se es un consumidor que posee menos de la cantidad señalada en la tabla en el artículo 479 de la Ley General de Salud (5gr para el caso de cannabis) no representa un peligro tan grande para la sociedad, pero sí lo suficientemente peligroso como para que el Ministerio Público de aviso a la "autoridad sanitaria" de la conducta realizada, para que al tercer reporte el consumidor sea sometido a un "tratamiento obligatorio", es decir una intromisión directa por parte del estado.

XX. De esta manera el legislador ha optado por el sistema más invasivo, utilizando toda la capacidad del aparato coercitivo del estado, limitando desde su esfera de competencias un número considerable de derechos humanos con la finalidad de proteger nuestro derecho a la salud y el orden público.

XXI. A continuación, procederemos a realizar un análisis sobre la pertinencia de la medida punitiva en cuestión con la finalidad de alcanzar los fines antes descritos:

f) Adecuación, idoneidad y aptitud.

XXII. Esta descripción involucra tres aspectos que se encuentran íntimamente relacionados, la medida adoptada por el legislador debe prever:

- a. **Adecuación.** Implica el análisis de los elementos que se tomarán en cuenta para la creación de leyes con la finalidad de concluir si esta responde a las necesidades que en un principio impulsaron a crear la ley.
- b. **Idoneidad.** Presupone la existencia de una relación entre la intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busca el legislador.⁸
- c. **Aptitud.** Debe servir para determinada actividad, función o servicio.

XXIII. Por lo tanto el grupo de disposiciones que realizan la prohibición absoluta de cualquier actividad relacionada con el cannabis antes descritas - siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con el Cannabis- en este punto deben demostrar que son las adecuadas de acuerdo a las circunstancias en las que se encuentra la sociedad, son óptimas para cumplir el fin para el que fueron creadas y además de manera exitosa.

XXIV. Esta política de punibilidad se encuentra construida bajo supuestos consolidados desde el siglo XVII y que han evolucionado hasta culminar en la creencia de que el encarcelamiento tiene las siguientes funciones⁹:

⁸ Amparo en revisión [redacted] 4 de noviembre de 2015.

⁹ Linde, Luis M., and Imprimi Comentarios. "Nº 46-Vara ¿Populismo punitivo o reclamación razonable? La cadena perpetua: principios utilitarios y análisis económico" "

226

- a. "las penas sirven para "disuadir" a las personas que ya han delinquido de volver a incumplir la ley, o a las que han pensado en delinquir de incumplirla por primera vez; esta función utilitaria también puede atribuirse, desde luego, a las penas impuestas según el principio retributivo, con independencia de si esa era, o no, su intención;
 - b. las penas sirven para "prevenir" la comisión de delitos, es decir, para aumentar el número de ciudadanos que desean cumplir la ley y nunca se han planteado no hacerlo;
 - c. las penas de cárcel sirven para "aislar" a los delincuentes del resto de la sociedad, anulando o disminuyendo su capacidad para cometer más delitos; es obvio que la pena de muerte consigue ese aislamiento en grado definitivo e insuperable, pero queda fuera de todo el argumento;
 - d. las penas sirven para "reeducar" a los delincuentes y hacer posible su "reinserción" social."
- XXV. Sin embargo, *Estudios comparativos de las leyes de drogas de todo el mundo no muestran un vínculo entre la aplicación de medidas punitivas y niveles más bajos*^{10,11}. Por lo tanto, queda en tela de juicio de que la medida en cuestión sea la indicada para combatir el problema de Salud Pública que podría significar las actividades relacionadas con el consumo de Cannabis.
- XXVI. Por otra parte, la experiencia internacional nos ha demostrado que la ausencia de medidas punitivas no ha elevado el consumo del cannabis, por ejemplo en los Países Bajos, donde la posesión y suministro al por menor de cannabis es legal en la práctica, las tasas de consumo de cannabis son casi las mismas que el promedio europeo¹².
- XXVII. Portugal despenalizó la posesión de todas las drogas en 2001 y el consumo de drogas no se elevó drásticamente como algunos temían. Más de diez años después, los niveles de consumo de drogas se mantienen por debajo del promedio europeo.¹³
- XXVIII. En el caso de sustancias que son legales y que han demostrado disminuir su consumo a través de la educación sanitaria una estricta regulación del mercado encontramos al tabaco. Esta sustancia, en algunos países, incluso ha logrado una disminución cercana al 50% de los consumidores en un periodo de 30 años.¹⁴
- XXIX. Esta experiencia nos lleva a replantear la idoneidad sobre la política absolutamente prohibicionista y punitiva para ser la mejor manera de tutelar el Derecho y el orden a la Salud, sin embargo aún resta analizar la susceptibilidad de alcanzar su fin.

¹⁰ Degenhardt, L. et al. (2006) "Toward a Global View of Alcohol, Tobacco, Cannabis, and Cocaine Use: Findings from the WHO World Mental Health Surveys", *PLoS Medicine*, vol. 5, no. 7. <http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.0050141> Consultado el 9 de febrero de 2017.

¹¹ European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2011a) "Looking for a relationship between penalties and cannabis use". <http://www.emcdda.europa.eu/online/amug-report/2011/boxes/p45> Consultado el 9 de febrero de 2017.

¹² European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction (2013) "Prevalence maps — prevalence of drug use in Europe". <http://www.emcdda.europa.eu/countries/prevalence-maps> Consultado el 9 de febrero de 2017.

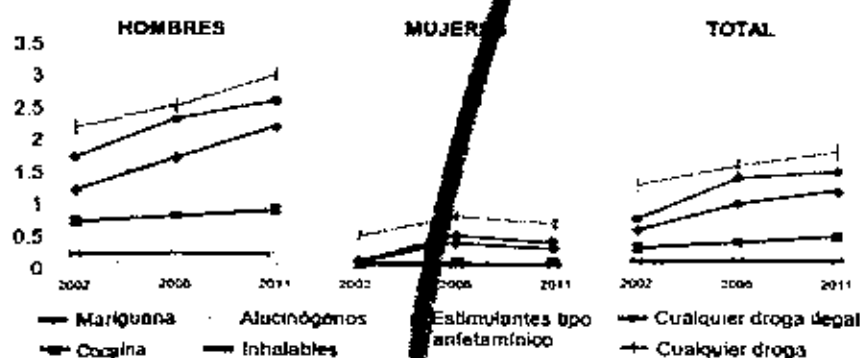
¹³ European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2011b) "Drug policy profiles — Portugal", p. 20. <http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-policy-profiles/portugal> Consultado el 9 de febrero de 2017.

¹⁴ Por ejemplo, la tasa de fumadores adultos en Inglaterra fue de 20% en 2010, frente al 39% en 1980. Health and Social Care Information Centre (2013) "Statistics on Smoking: England, 2013". <http://www.hscic.gov.uk/catalogue/PUB11454/smok-eng-2013-eng.pdf> Consultada el 9 de febrero de 2017.

g) Susceptibilidad para alcanzar su fin.

- XXX. Las medidas que sancionan con penas privativas de libertad toda actividad relacionada con el Cannabis han estado vigentes desde hace más de un siglo y actualmente no existen estudios que corroboren que dichas medida han cumplido su finalidad de tutelar el derecho a la salud o por lo menos, demostrar una tendencia clara a la disminución de su consumo.
- XXXI. Por el contrario, las estadísticas oficiales demuestran que el consumo se ha elevado no sólo respecto el Cannabis, sino otras drogas cuya peligrosidad y daños a la salud son mayores:

Tendencias en el consumo de drogas en personas entre 12 y 65 años¹⁶.



h) Necesidad y suficiencia para lograr su finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado

- XXXII. En el apartado anterior quedó claro que no existe evidencia suficiente para demostrar que la actual política diseñada por el legislador en torno a toda actividad relacionada con el Cannabis cumple con la función encomendada por el legislador.
- XXXIII. Las cifras arrojadas por las autoridades son alarmantes debido a que el nivel de intromisión de los derechos fundamentales de los gobernados por las conductas poco problemáticas en materia de salud individual o pública: consumo o posesión.
- XXXIV. Estas conductas no se encuentran acompañadas de algún otro delito o algún tipo de conducta violenta, lo que significa que el estado ha activado su aparato coercitivo en contra de gobernados que, haciendo uso de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, fueron denunciados debido al consumo o la posesión simple de una sustancia que por sí misma (esto quiere decir que por el simple hecho de poseerla sin realizar alguna acción adicional) no genera ningún tipo de peligro para la sociedad (como podría ser el poseer material radioactivo, por ejemplo).

¹⁶ Aljesla Becerra Laura H, "La política de drogas en México 2006-2012: análisis y resultados de una política prohibicionista". Cuadernos de Trabajo del Seminario de Política de Drogas 12, CIDE (2014). P. 22

228

Incidencia delictiva en delitos contra la salud (2006-2014)¹⁶

Personas Detenidas por Posesión (En sus Diversas Modalidades)	175,993 (Ciento setenta y cinco mil novecientos noventa y tres)
Personas Detenidas por Consumo (A pesar de no ser Delito)	156,189 (Ciento cincuenta y seis mil ciento ochenta y nueve)
Personas Detenidas en el Ámbito Federal por Delitos Contra la Salud Total	453,059 (Cuatrocientas cincuenta y tres mil sesenta y nueve)

XXXV. De la tabla anterior, podemos concluir que el 73.3% de las personas detenidas a nivel federal por delitos de drogas entre esos años eran poseedoras o consumidoras de alguna sustancia ilícita.¹⁷

XXXVI. De igual manera, existen registros de violaciones sistemáticas a derechos humanos como consecuencia de la política actualmente instrumentada. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reporta las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones de la CNDH por dependencia y tipo de violación (selección) (2007 a 2012)^{18,19}

	SEDENA	SEMAR	PROF	SSP (PFP/PF)
Privación de la vida	29 (32%)	7 (44%)	2 (10%)	6 (20%)
Detención arbitraria	51 (57%)	8 (50%)	2 (10%)	2 (10%)
Retención ilegal	43 (48%)	5 (31%)	2 (10%)	3 (14%)
Desaparición forzada	5 (6%)	2 (13%)	1 (5%)	1 (5%)
Tortura	51 (57%)	9 (56%)	3 (15%)	10 (48%)
Tratos crueles o degradantes	19 (21%)	5 (31%)	2 (10%)	5 (25%)
Uso de la fuerza	20 (22%)	5 (31%)	0 (0%)	5 (24%)
Incomunicación	13 (14%)	2 (13%)	1 (5%)	1 (5%)
Cateo ilegal	20 (22%)	4 (25%)	0 (0%)	2 (10%)

XXXVII. Adicionalmente, algunos de los derechos que se ven vulnerados de manera directa por esta política plasmada en normatividad prohibitiva son los siguientes:

¹⁶ Solicitud de información vía Infomex, PGR, folio 0001700072215.

¹⁷ Pérez Correa, Catalina y Romero Vado, Jorge Javier, Revista Nexos, 1 de Abril de 2016, disponible en: <http://www.nexos.com.mx/?p=26051#fn3> (Consultado el 04 de Abril de 2017).

¹⁸ Ídem P. 19.

¹⁹ Los porcentajes entre paréntesis denotan el porcentaje de las recomendaciones sobre cada tipo violación con relación al total de recomendaciones hechas a cada dependencia entre 2007 y 2012. Una misma recomendación puede referirse a distintas violaciones a derechos humanos.

Libertad de religión y libertad de conciencia.

- XXXVIII. Existen comunidades que se encuentran directamente relacionadas con el consumo del cannabis y le otorgan un carácter espiritual equiparable con la meditación, un ejemplo es el movimiento Rastafari.
- XXXIX. En nuestro país se le ha negado el registro como asociación religiosa por parte de la Secretaría de Gobernación a esta comunidad, a pesar de descender directamente del Judaísmo y del Cristianismo, debido a que dentro de sus principales dogmas se predica el uso sacramental del Ganja.²⁰
- XL. Dentro de los postulados filosóficos postulan que el Ganja es una planta que se siembra, germina, crece y da sus frutos, es una creación en la que está implicado Dios Todopoderoso y la defienden como una creación divina, que no puede estar sujeta a las leyes del hombre, sino a las leyes naturales, al igual que el hombre. Citando a la biblia: "Cualquier ser humano tiene derecho a que en su hogar, en la tierra que habita, siembre lo que necesite para alimentarse y sanarse, corporal, espiritual y mentalmente"²¹.
- XLI. Para llevar a cabo esta actividad sagrada, la comunidad Rastafari encuadraría en los tipos penales de las actividades prohibidas relacionadas con el cannabis, incluso en intercambio gratuito del producto de su cosecha, debido a su creencia de que es inmorral realizar el cobro por esta planta sagrada.
- XLII. La comunidad Rastafari es solo un ejemplo, tal vez el más explícito, en el que existe una afectación directa a la Libertad de Religión con motivos de salvaguardar la Salud Pública. Sin embargo ante el panorama de ser una normatividad que no cumple con su finalidad esta serie de disposiciones —como lo expusimos en párrafos anteriores— es importante señalar que existe una carga injustificada para el gobernado.
- XLIII. La actual prohibición podría equipararse a una normatividad en la que se prohibiera de manera absoluta toda actividad relacionada con el alcohol en los términos que actualmente se encuentran las actividades relacionadas con el cannabis. Esto representaría un perjuicio personal y directo al derecho de libertad religiosa para la comunidad Cristiana, toda vez que el vino es sustancia que tiene un carácter divino al ser equiparado con la sangre de cristo por esta religión.
- XLIV. Al respecto es importante señalar que el alcohol representa actualmente un problema de salud pública a nivel mundial con cifras reales exponencialmente más dañinos para el ser humano en comparación con el cannabis y no se encuentra prohibido:
- Cada año se producen 3,3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas las defunciones.
 - El uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos.

²⁰ Ganjah, término usado por los rastafari para llamar a la marihuana (Cannabis Sativa).

²¹ Salmos (104.14)

- c. En general, el 5,1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuible al consumo de alcohol, calculado en términos de la esperanza de vida ajustada en función de la discapacidad (EVAD).
- d. El consumo de alcohol provoca defunción y discapacidad a una edad relativamente temprana. En el grupo etario de 20 a 39 años, un 25% de las defunciones son atribuibles al consumo de alcohol.
- e. Existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de trastornos mentales y comportamentales, además de las enfermedades no transmisibles y los traumatismos.
- f. Recientemente se han determinado relaciones causales entre el consumo nocivo y la incidencia de enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis y el VIH/sida.
- g. Más allá de las consecuencias sanitarias, el consumo nocivo de alcohol provoca pérdidas sociales y económicas importantes, tanto para las personas como para la sociedad en su conjunto.²²

Derecho al Debido Proceso

- XLV. Como consecuencia de la implementación de la política prohibitiva en nuestro país se ha debilitado el Debido Proceso. El ejemplo más claro y alarmante es la constitucionalización de la figura del arraigo, existen cifras proporcionadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos que evidencia el sometimiento de siete mil nocientas ochenta y cuatro personas a arraigo y la liberación de únicamente cuatrocientas sesenta y cuatro.²³
- XLVI. Esta figura se ha sido declarada inconstitucional por violar diversos derechos humanos por parte del pleno de este Alto Tribunal durante la novena época, concretamente por violar de manera directa el contenido de los artículos 16, 18, 19, 20 y 21, así como la libertad de tránsito consagrada en el artículo 11 de la CPEUM Federal.²⁴
- XLVII. Lo alarmante es que derivado de la reforma constitucional penal del 2008, se inserta la figura del arraigo directamente en el texto de la CPEUM (sin tocar los derechos con los cuales se había considerado que era incompatible).²⁵ Como consecuencia esta Suprema Corte se ha visto obligada a tolerar y declarar constitucional un régimen que en este recinto se había determinado violatorio de derechos humanos y forzándonos a los gobernados a vivir en un régimen de incertidumbre que debilita dramáticamente la garantía de Debido Proceso.
- XLVIII. Es importante señalar que durante el sexenio que se concreta la reforma antes mencionada (2006 a 2012) se involucró a los integrantes de las instituciones militares en labores de seguridad. El resultado fue el aumento significativo en violaciones a derechos humanos, toda vez que antes de 2006 los militares golpearon o maltrataron a los detenidos en 23% de los casos en donde ellos llevaron a cabo

²² Informe Mundial de Situación sobre Alcohol y Salud 2014.

²³ La Redacción, Revista Proceso, 14 de Octubre de 2013

²⁴ Acción de inconstitucionalidad 20/2003. Diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua. 19 de septiembre de 2005. Mayoría de cinco votos. Ausentes: José Ramón Cossío Díaz y Juan N. Silva Meza. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Víctor Miguel Bravo Melgoza

²⁵ Madrazo, Alejandro. "Los costos constitucionales de la guerra contra las drogas: una primera aproximación (desde México)." Cuadernos de Trabajo del Seminario de Política de Drogas 12 (2014).

231

la detención, mientras que durante el sexenio de Calderón el porcentaje de detenidos por el Ejército que reportaron ser violentados aumentó a 78%.²⁶

- XLIX. Adicionalmente, la agresividad de las autoridades se ha centrado de manera significativa en los detenidos por delitos relacionados con drogas, particularmente entre los años 2006 y 2012 como se muestra en la siguiente tabla.²⁷

TABLA
Maltrato de las autoridades según delito

	Secuestro		Homicidio		Drogas	
	Antes de Calderón	Durante Calderón	Antes de Calderón	Durante Calderón	Antes de Calderón	Durante Calderón
Patocar	5.58%	2.79%	7.11%	1.7%	10.66%	37.34%
Asfixiar	6.95%	3.09%	8.49%	1.54%	9.27%	37.45%
Toques eléctricos	6.66%	1.82%	6.67%	1.21%	7.88%	44.85%

Fuente: Encuesta a Población en Reclusión del Sistema Penitenciario Federal, 2011, CIDE.

- L. Por ejemplo, mientras en años anteriores dos de cada 100 detenidos por secuestro sufrieron toques eléctricos, en el caso de delitos contra la salud fueron casi 45. Sobre el arraigo y las detenciones en las que se han realizado actos de tortura se han pronunciado organismos internacionales (OEA y ONU)²⁸, sin que estas hayan sido atendidas al día de hoy.

Derecho de propiedad

- LI. Otra consecuencia que fue fruto de la reforma de 2008 en materia penal es la contenida en el artículo 22 de la CPEUM referente a la extinción de dominio.
- LII. Mediante esta figura se le permite a la autoridad extinguir el dominio de los bienes de las personas si considera que han sido "instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal..." en los casos de delincuencia organizada y, expresamente, de todos los delitos contra la salud (aun cuando no se hayan cometido mediante la participación en la delincuencia organizada).²⁹
- LIII. Esto representa una intromisión violenta y directa al derecho de propiedad, al debido proceso y a la presunción de inocencia al ser únicamente necesario un procedimiento paralelo a la Litis penal del delito en cuestión para privar de la posesión de un bien a un gobernado. Una vez más, esta intromisión es ocasionada por la configuración normativa que realizó el legislador con la finalidad de tutelar el derecho a la salud mediante la prohibición absoluta de toda actividad relacionada con el cannabis.

²⁶ Magaloni, Ana Laura y Magaloni Beatriz, "Un método de investigación llamado tortura", Nexos 01 de Marzo de 2016, disponible en <http://www.nexos.com.mx/?p=27781&fin=6> (consultado el 31 de Marzo de 2017)

²⁷ Idem

²⁸ Anaya Muñoz Alejandro, "Violaciones a los derechos humanos en el marco de la estrategia militarizada de lucha contra el narcotráfico en México", Cuadernos de Trabajo del Seminario de Política de Drogas 12, CIDE (2014), P. 22

²⁹ Madrazo, Alejandro, "El impacto de la política de drogas 2006-2012 en la legislación federal" Cuadernos de Trabajo del Seminario de Política de Drogas 07 (2014), P.14

232

Derecho al libre desarrollo de la personalidad

- LIV. El derecho al libre desarrollo de la personalidad ha sido definido y delimitado por este Alto Tribunal vía jurisprudencial, en la que se reconoce la existencia de una dimensión externa y una interna del mismo.³⁰
- LV. "Desde el punto de vista externo, el derecho da cobertura a una genérica "libertad de acción" que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad. En cambio, desde una perspectiva interna, el derecho protege una "esfera de privacidad" del individuo en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal."³¹
- LVI. En ese sentido, una prohibición absoluta por parte del estado a cualquier actividad representa un menoscabo sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad tanto de manera interna como de manera externa.
- LVII. La pregunta que surge es si esta intromisión por parte del legislador a la privacidad de los gobernados se encuentra debidamente justificada con la finalidad de salvaguardar el derecho a la salud y el orden público.
- LVIII. Al respecto, la Primera Sala de esta SCJN estimó que los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en relación con la producción, uso y autoconsumo del estupefaciente "cannabis" y el psicoactivo "THC", en conjunto conocidos como "marihuana" limitan de forma injustificada el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.
- LIX. Lo anterior, toda vez que la Primera Sala "considera que se trata de una medida que no sólo innecesaria, al existir medios alternativos igualmente eficaces que afectan en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino que además es desproporcionada en estricto sentido, toda vez que genera una protección mínima a la salud y orden público frente a la intensa intervención al derecho de las personas a decidir qué actividades lúdicas desean realizar."³²

Derecho a la Salud ³³

- LX. Para el caso particular de realizar distintas actividades relacionadas con el consumo de cannabis que no afectan a terceros, no existe razón para imponer penas privativas de libertad.
- LXI. Toda vez que para este caso únicamente se ve involucrada la salud individual, no estamos en presencia de un tema de salud pública que represente un riesgo tan grande para la población que involucre la intromisión del derecho penal para protegernos.

³⁰ Amparo en revisión 237/2014. Josefina Rízaño Bandala y otros. 4 de noviembre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Arturo Bárcena Zubieta y Ana María Ibarra Olguín.

³¹ Ibidem.

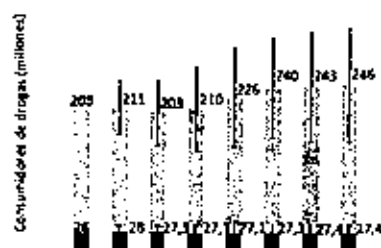
³² Engose del AMPARO EN REVISIÓN 237/2014 P. XXIV

³³ Madrazo Lejos, Alejandro. "Drogas y derecho a la salud." Rodolfo Vázquez (comp.), ¿Qué hacer con las drogas (2009): 131-154.

233

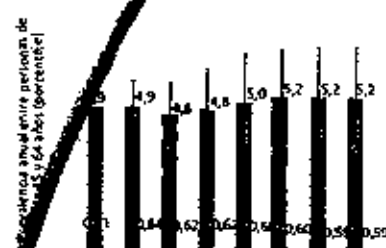
- LXII. Debemos recordar que no todo consumo de drogas significa necesariamente un consumo problemático. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito aproximadamente 1 de cada 10 consumidores de drogas sufre trastornos ocasionados por el consumo de drogas o drogodependencia.³⁴

Tendencias mundiales del número estimado de consumidores de drogas, 2006-2013



a. Número de consumidores de drogas ilícitas
b. Número de consumidores de drogas problemáticos

Tendencias mundiales de la prevalencia estimada del consumo de drogas, 2006-2013



a. Prevalencia de consumo de drogas ilícitas (porcentaje)
b. Prevalencia de consumo problemático de drogas (porcentaje)

- LXIII. Por lo tanto, en caso de estar en presencia de un consumo problemático que conlleve farmacodependencia, el estado lejos de establecer algún tipo de pena debe facilitar el acceso al tratamiento de la adicción.
- LXIV. Toda pena privativa de libertad, por lo menos en nuestro país, se encuentra en conflicto con una disposición cuya finalidad jurídica sea la tutela del derecho a la salud. Nuestro sistema penitenciario conlleva problemas debido a la saturación y limitaciones presupuestales que, como consecuencia, se traducen en daños a la salud física y psicológica que a menudo desemboca en un mayor uso y abuso de drogas por parte de los reos en reclusión.
- LXV. Por lo tanto, la conclusión sobre las conductas que no involucran la afectación de otro bien jurídico o derechos de terceros es que "la pena que más protege es la que mejor informa acerca de los riesgos de la salud" y no penas que por su simple aplicación—como la privación de la libertad—dañan más a la salud que la sustancia por sí sola de la que nos intenta proteger la normatividad creada por el legislador.

i) Justificación con base en razones constitucionales.

- LXVI. Al respecto, existen obligaciones a cargo del legislador plasmadas en el texto constitucional de emitir normatividad que tutele tanto el derecho a la salud³⁵ como el orden público.

³⁴ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, "Informe Mundial Sobre Las Drogas y el Delito 2015, Resumen Ejecutivo". Disponible en https://www.unodc.org/documents/wdr/2015/WDR15_EaSum_S.pdf (Consultado el 31 de Marzo de 2017)

³⁵ Respuestas al cuestionario para los informes anuales de la UNODC. Nota: Las estimaciones corresponden a la población adulta (entre 15 y 64 años) y se han elaborado sobre la base del consumo del año anterior.

³⁶ Artículo 73 Fracción XXX en relación con el artículo 4º Constitucionales.

234

- LXVII. Para el caso concreto del derecho a la salud, existen las siguientes obligaciones por parte del estado de acuerdo con el orden constitucional y los tratados internacionales³⁷ aplicables a la materia: (a) respetar; (b) proteger; (c) garantizar, y (d) difundir.
- LXVIII. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación, experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.
- LXIX. Por lo tanto, al amparo tanto del mandato constitucional como de los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, los legisladores tienen no sólo la potestad, sino la obligación de emitir normatividad enfocada en la tutela efectiva del derecho a la salud.
- LXX. El verdadero cuestionamiento radica en que, como se ha mencionado en párrafos anteriores, no ha cumplido su finalidad de manera exitosa y actualmente no existen indicios de una tendencia clara a alcanzarlo.
- LXXI. Por lo tanto, sugerimos el replanteamiento de esta porción normativa con la finalidad de reajustar el sistema hacia una nueva política en materia de salud que tome en cuenta tanto la evidencia científica como la experiencia internacional con la finalidad de reducir daños de manera más eficiente de lo que actualmente implica la normatividad absolutamente prohibitiva.

Consideraciones importantes

- LXXII. Del análisis realizado a lo largo del presente documento, concluimos que no se cumple con los elementos contenidos en el principio de proporcionalidad por las siguientes razones:
- Persecución de finalidades legítimas desde la óptica constitucional.**
La totalidad de la normatividad analizada que penaliza toda actividad relacionada con el cultivo del Cannabis fue justificada desde su creación bajo el mandato de proteger la salud y el orden público. Sin embargo, esto parece más un pretexto para realizar el despliegue del aparato coercitivo del estado en su modalidad más invasiva y violenta, ya que a través del diseño de políticas públicas articulado actualmente el resultado, a pesar de las buenas intenciones del legislador, ha generado mayores daños directos e indirectos tanto a la Salud (a través de la violencia, persecución, encarcelamiento y desinformación) como al orden público (A través de enfrentamientos militarizados directos, estigmatización, violaciones al debido proceso y a derechos humanos).
 - Adecuación, idoneidad y aptitud.**

³⁷ Apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador".

235

Al día de hoy, después de más de una década de una guerra declarada de manera frontal en contra del narcotráfico, se cuentan con elementos suficientes para afirmar que la medida adoptada por el legislador no cumple con los principios de Adecuación, Idoneidad y Aptitud. La normatividad planteada desde el derecho penal ha demostrado que no responde a la problemática para la que fue planteada: contribuir a la protección de la salud y el orden público. Finalmente, al ser una medida tan invasiva y articulada de una manera tan violenta, no resulta apta al ser comparada con otras medidas de reducción de daños implementadas por diversos países y que se encuentran vigentes actualmente.

c. Susceptibilidad para alcanzar su fin.

La proyección de los datos compilados y analizados a lo largo del presente documento permiten inferir que las medidas vigentes dictadas por el legislador y que son materia del presente juicio, lejos de tender a la realización de la finalidad para la que fueron creadas, nos está alejando de la misma, con la fatalidad adicional de que en el lapso en el que se encuentran vigentes existen violaciones directas a los derechos humanos que se pretendían proteger al momento de su creación (derecho a la salud y debido proceso).

d. Necesidad y suficiencia para lograr su finalidad de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado.

El legislador, al elegir el derecho penal como la vía para proteger el derecho a la salud y el orden público, ha optado por la medida más invasiva. Lamentablemente, los derechos fundamentales que han sufrido colisiones al ser mermados en favor de la protección del derecho a la salud y el orden público, son diversos: el mismo derecho a la salud, debido proceso, derecho a la intimidad, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la información, derechos laborales, libertad de tránsito, entre otros.

Tantas violaciones en contra de tantos derechos humanos de una manera tan drástica y reiterada como resultado de la aplicación de las normas hoy impugnadas representan a todas luces una carga desmedida, excesiva e injustificada para quien acude hoy buscando el amparo de la justicia de la unión. Lo anterior resulta incluso más evidente cuando no se cumple la finalidad para la que fueron creadas las leyes hoy impugnadas y claramente, no existe una tendencia hacia su cumplimiento.

LXXIII. La SCJN hoy en día desempeña el papel de Tribunal Constitucional, por lo que de acuerdo a lo expresado por el Ministro José Ramón Cossío Díaz³⁸, consideramos que los efectos de una sentencia de amparo en relación con la política absolutamente prohibitiva en materia de drogas no debe limitarse a expresar únicamente solo los efectos concretos, sino también considerar las medidas exhortativas de carácter estructural que garanticen:

- a. Evitar la violación de los derechos humanos de los gobernados
- b. Enfocar el problema desde el punto de vista de la salud pública
- c. Ajustar todo el esquema de la prohibición sancionada penalmente al de la legalización regulada bajo los parámetros generales de la salud pública y la protección de los derechos humanos de los consumidores y no consumidores.

LXXIV. En materia internacional, el Ministro Cossío ha advertido la obligación que se ha establecido en el sistema interamericano de Derechos Humanos sobre la obligación de reparación contenida en el

³⁸ VOTO CONCURRENTES DEL MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ EN AMPARO EN REVISIÓN 237/2014

236

artículo 63.1 de la CADH, Misma que entraña el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias a fin de que hechos similares no se vuelvan a repetir y a contribuir a su prevención.

- LXXV. Como consecuencia, este Alto Tribunal cuenta con la obligación de identificar y después exhortar a todas las autoridades del Estado a adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole, que fueran necesarias para hacer efectivo el ejercicio pleno de los derechos humanos de todos los gobernados.
- LXXVI. Por ejemplo, se identifica la necesidad de exhortar al "Congreso de la Unión para que, en el ejercicio de sus atribuciones, realice una revisión de todos los ordenamientos legales relacionados con la política prohibicionista del Estado en materia de drogas,"³⁹ y en consecuencia "Exhortar al Poder Ejecutivo Federal y a su Administración Pública, para que elabore un programa nacional en el que se fijen los objetivos, metas, estrategias y prioridades para delinear una política pública integral en materia de drogas. Asimismo, para que lleve a cabo la adecuación de los reglamentos correspondientes una vez que el Congreso de la Unión haya expedido las reformas relativas, con el objeto de incluir el uso recreativo de la marihuana."⁴⁰

Por lo antes expuesto, a Ustedes Señoras y Señores Ministros de la SCJN, de manera atenta solicitamos:

PRIMERO. Tengan por admitido y se realicen los trámites correspondientes para anexar el presente *Amicus Curiae* en el expediente correspondiente.

SEGUNDO. Tomen en cuenta las consideraciones plasmadas a lo largo del documento al momento de realizar su voto relacionado con la sentencia de mérito.


TERCERO. Determinen, en el momento procesal oportuno, la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, todos de la Ley General de Salud, así como los demás que se encuentren relacionados producción, uso y autoconsumo del estupefaciente "cannabis" y el psicotrópico "THC", en conjunto conocidos como "marihuana", por ser violatorios de Derechos Humanos contenidos en la CPEUM, así como los tratados internacionales en la materia.

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS

³⁹ Idem P. 22

⁴⁰ Idem P. 25

237

A large, stylized handwritten signature, likely "John C. Calhoun", written in dark ink. The signature is split by a vertical line, with the left portion on the left side of the page and the right portion on the right side. The ink is dark and the handwriting is cursive.[illegible]

006937

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2018 FEB 16 PM 12 51

OFICINA DE CERTIFICACIÓN
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

RECIBI DE UN ENVIADO
SIN ANEXO

con (19) fgs

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2018 FEB 16 PM 3 35

PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

AMICUS CURIAE QUE PRESENTA

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Amparo en revisión 623/2017

FIRMAS GLOBAL COMMISSION ON DRUG POLICY

ESTE AMICUS ES APOYADO POR:

Ann Fordham, Directora Ejecutiva, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas

INTRODUCCIÓN

Establecida en 2011, la Comisión Mundial sobre Política de Drogas es un referente internacional clave sobre los impactos de la actual estrategia de fiscalización de drogas, proponiendo recomendaciones políticas innovadoras y efectivas que protejan los derechos humanos, amplíen la reducción de daños y promuevan el desarrollo. Está compuesto por 23 líderes políticos y destacados pensadores de todo el espectro político.

La Comisión Mundial de Políticas sobre Drogas se basa en la experiencia de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia convocada por los ex Presidentes Cardoso de Brasil, Gaviria de Colombia y Zedillo de México. Convencida de que la asociación entre el narcotráfico, la violencia y la corrupción era una amenaza para la democracia en América Latina, la Comisión revisó las actuales políticas de "guerra contra las drogas" y abrió un debate público sobre un tema que a menudo está rodeado de temor y desinformación.

La Comisión Global ha redireccionado la conversación fuera de la prohibición y ha legitimado un debate más equilibrado, amplio y basado en evidencia sobre las drogas, privilegiando los derechos humanos, la seguridad y la salud pública, proponiendo maneras humanas y efectivas de reducir el daño Causados por las drogas a las personas y a las sociedades.

La Comisión Mundial desempeña este papel en particular mediante la publicación cada año de un informe exhaustivo, detallado y basado en pruebas, que incluye las opiniones de la comisión, así como otros informes, artículos de opinión y entrevistas con funcionarios gubernamentales y organizaciones intergubernamentales, en particular colaboración con los líderes de la sociedad civil.

Desde su creación, la Comisión Global ha producido seis grandes informes y tres documentales con visibilidad en miles de noticias en todo el mundo. Estos informes han abordado cuestiones que van desde el fracaso de la guerra contra las drogas, el efecto de la criminalización en la salud pública y las vías para la regulación de drogas.

El primer informe anual de la Comisión Mundial, publicado en 2011, hizo noticia en todo el mundo cuando diagnosticó que el actual sistema de control de drogas había fracasado. Los comisionados apoyaron la descriminalización y fue la primera vez que personalidades políticas, intelectuales y empresarios de alto nivel se posicionaron a favor de una reforma integral de la política de drogas. Se escribieron cientos de noticias sobre la fundación de la Comisión Global y sus recomendaciones políticas innovadoras.

La Comisión Global siguió rompiendo el tabú cuando en 2014 publicó un informe innovador que destacó cinco vías para las políticas de drogas que funcionan, entre ellas: poner primero la salud y la seguridad de la comunidad, asegurar el acceso equitativo a los medicamentos controlados, poner fin a la criminalización de las personas que utilizan o poseen drogas, promoviendo alternativas al encarcelamiento de participantes de bajo nivel en mercados de drogas ilícitas, incluyendo cultivadores y fomentando diversos experimentos en mercados legalmente regulados, comenzando con el cannabis, hoja de coca y ciertas otras sustancias psicoactivas.

El informe anual publicado en 2016 examinó más a fondo el tercer camino propuesto, la despenalización completa, explicando por qué terminar todas las sanciones penales y civiles por el consumo de drogas y la posesión para uso personal es un paso esencial en la reforma de la política de drogas hacia la regulación.

La Comisión Global está coordinada por una Secretaría en Suiza, encargada de supervisar las publicaciones y productos difundidos por la Comisión, los grandes acontecimientos y la organización de estrategias de comunicación y divulgación. La Comisión también cuenta con una amplia red de expertos y asociados que han contribuido a su labor desde su creación.

La Comisión Global también inspiró la creación de grupos regionales, como la Comisión de Drogas de África Occidental (convocada por el miembro de la Comisión Global y ex Secretario General de la ONU, Kofi Annan). No sólo en tránsito, publicado por la Comisión de drogas de África Occidental en junio de 2014, puso de relieve las formas en que el tráfico de drogas, el

consumo y la producción estaba socavando las instituciones, amenazando la salud pública y perjudicando los esfuerzos de desarrollo.

El principal motivo por el cual se presenta este *amicus curiae*, está relacionado con poner a disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación toda la experiencia e información que hemos como resultado de nuestro trabajo en el tema de política de drogas; materia de análisis el día de hoy.

A continuación, desglosamos algunos ejemplos de experiencias internacionales que permiten demostrar que las penas consistentes en la privación de la libertad no cumplen con el criterio de ser "necesarias", y en cambio, las políticas públicas implementadas en Portugal, España y Países Bajos se convierten en una forma de tutelar la salud pública de manera más efectiva.

El presente *amicus curiae* lo suscriben y firman los integrantes del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC). Una red mundial integrada por 166 ONG que está especializada en cuestiones relacionadas con el uso y la producción de drogas fiscalizadas.

El Consorcio trabaja para fomentar un debate objetivo y abierto sobre la eficacia, la dirección y el contenido de las políticas de drogas en el ámbito nacional e internacional, y apoya las políticas que se fundamentan en evidencias científicas y que reducen eficazmente el daño relacionado con las drogas.

La red elabora informes periódicos, difunde los informes de sus organizaciones miembro sobre cuestiones específicas relacionadas con las drogas y ofrece servicios de asesoría a encargados de políticas y funcionarios de todo el mundo. Los miembros del IDPC cuentan con una amplia experiencia en el análisis de políticas de drogas y han contribuido a debates sobre políticas a escala nacional e internacional:

I. Andean Information Network
(AIN)

II. Andrey Rylkov Foundation for
Health and Social Justice
III. Beckley Foundation

- IV. Caribbean Drug Abuse Research Institute (CDARI)
- V. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)
- VI. Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH)
- VII. Correlation
- VIII. CUPHD
- IX. DIOGENIS, Drug Policy Dialogue in South East Europe
- X. Drug Policy Alliance (DPA)
- XI. Eurasian Harm Reduction Network (EHRN)
- XII. SPYM
- XIII. Forum Droghe
- XIV. GREA - Groupement Romand d'Etudes des Addictions
- XV. Harm Reduction Coalition
- XVI. Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)
- XVII. Indonesian Coalition for Drug Policy Reform (ICDPR)
- XVIII. INPUD
- XIX. Institute for Policy Studies
- XX. Intercambios
- XXI. National Rehabilitation Centre in Abu Dhabi (NRC)
- XXII. New Zealand Drug Foundation
- XXIII. Release
- XXIV. South Eastern European Adriatic Addiction Treatment Network (SEEAN)
- XXV. Thai AIDS Treatment Action Group
- XXVI. TNI
- XXVII. Transform Drug Policy Foundation
- XXVIII. Viva Rio
- XXIX. Washington Office on Latin America (WOLA)
- XXX. Youth RISE
- XXXI. LSE Ideas International Drug Policy Project
- XXXII. International Doctors for Healthy Drug Policies (IDHDP)
- XXXIII. PILS
- XXXIV. Agencia Piaget para o Desenvolvimento (APDES)
- XXXV. Romanian Harm Reduction Network (RHRN)
- XXXVI. Canadian Drug Policy Coalition
- XXXVII. Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID)
- XXXVIII. Australian Drug Foundation
- XXXIX. TB/HIV Care Association
- XL. Rights Reporter Foundation

245

LXIV. Indonesian Association of
Addiction Counselors (IAAC)

LXV. Indonesian Harm Reduction Network (JANGKAR)

LXVI. Initiative for Health Foundation (IHF)

LXVII. International Association for Hospice and Palliative care (IAHPC)

LXVIII. International HIV/AIDS Alliance

LXIX. Kenya AIDS NGOs Consortium (KANCO)

LXX. Lawyers Collective

LXXI Mainline

LXXI Malaysian AIDS Council

LXXII. Medecins du Monde
France (MDM-F)

LXXV. NGO 4 Life

LXXV. NGO Veza

LXXVI. NGO Viktorija

LXXVIL. PKNI

LXXVIII. Polish Drug Policy
Network

LXXIX. Proleg/Proderechos

LXXX. PSI

LXXXI. Psicotropicus

LXXXII. Puente, Investigación y Enlace (PIE)

LXXXIII. RAISSE

LXXXIV. Red Chilena Reducción de Danos

LXXXV. Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos - REDUC

LXXXVI. Regional Arab Network against AIDS

LXXXVII. Reseau Francais de Reduction des Risques

LXXXVIII. Skoun, Lebanese Addiction Center

LXXXIX. Students for Sensible Drug Policy (SSDP)

XC. Supporting Community Development Initiatives (SCDI)

XCI. Swedish Drug Users Union (SDUU)

XCII. Gadejuristen (The Street Lawyers)

XCIII. Trimbos-Instituut

XCIV. Udruga Terra (Association Terra Croatia)

XCV. Uganda Harm Reduction Network

XCVI. Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD)

XCVII. Women's Harm Reduction international Network (WHRIN)

XCVIII. YCC Juventas

XCIX. International Centre for Science in Drug Policy (ICSDP)

C. Pivot Legal Society

CI. Intercambios Puerto Rico

CII. Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador (IPES)

CIII. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH)

CIV. Young Organisations for Drug Action (YODA)

CV. Association Senegalaise pour la Reduction des Risques Infectieux chez les Groupes Vulnérables (ASDR)

CVI. Global Exchange

CVII. Scottish Drugs Forum

CVIII. International AIDS Society (IAS)

CIX. Canadian Foundation for Drug Policy (CFDP)

CX. Human Rights Watch (HRW)

CXI. StopTheDrugWar.org

CXII. Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network (ZCLDN)

CXIII. PRAKSIS

CXIV. Citywide Drugs Crisis Campaign

CXV. Turkish Green Crescent Society

CXVI. Foundation Against Illicit Drug and Child Abuse (FADCA)

CXVII. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

245

CXVIII. Fachverband Sucht
 CXIX. Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN)
 CXX. Al-Maqdese for Society Development (MSD)
 CXXI. Brazilian Drug Policy Platform
 CXXII. Greek Drug and Substitute User Union
 CXXIII. Fundación Latinoamérica Reforma
 CXXIV. International Center for Ethnobotanical Education, Research & Service (ICEERS)
 CXXV. Asian Harm Reduction Network (AHRN)
 CXXVI. World Hepatitis Alliance
 CXXVII. Mexico Unido Contra la Delincuencia (MUCD)
 CXXVIII. FEDITO BXL
 CXXIX. Worldwide Hospice and Palliative Care Alliance (WHPCA)
 CXXX. NoBox Transitions
 CXXXI. West Africa Civil Society Initiative (WACSI)
 CXXXII. Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos (OCDI)
 CXXXIII. Collectif Urgence Toxida (CUT)
 CXXXIV. Norwegian Association for Humane Drug Policies

CXXXV. ReverdeSer Colectivo
 CXXXVI. Youth RISE Nigeria
 CXXXVII. Parle Sociale ONG
 CXXXVIII. Rumah Cemara
 CXXXIX. Penal Reform International
 CXL. Equis Justicia Para las Mujeres
 CXLI. Institute for Land Work and Citizenship (ITTC)
 CXLI. Ana Liffey Drug Project
 CXLIII. Accion Semilla Boliviana
 CXLIV. Ecuador Cannabico
 CXLV. Drug Policy Australia
 CXLVI. AIDS and Rights Alliance for Southern Africa (ARASA)
 CXLVII. Finnish Association for Humane Drug Policy (HPP)
 CXLVIII. Harm Reduction Australia
 CXLIX. LBH Masyarakat
 CL. Association de Lutte Contre le Sida (ALCS)
 CLI. Corporacion Humanas Colombia
 CLII. Corporacion Humanas Chile
 CLIII. Alliance for Public Health
 CLIV. Foyer du Bonheur
 CLV. Penington Institute

CLVI. Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC)

CLVII. Pares en Acción-Reacción contra la Exclusión Social (PARCES)

CLVIII. Union contre la Co-infection VIH/Hépatites/Tuberculose (UNICO)

CLIX. Norwegian Association for Safer Drugs Policies

CLX. Ozone Foundation

CLXI. Guyanese Association of Harm Reduction (AGRHR)

CLXII. Galiu gyventi - "I Can Live" Coalition

CLXIII. Asia Catalyst

CLXIV. Drugs, Security and Democracy Program of the Social Science Research Council (SSRN)

CLXV. Help Not Handcuffs

CLXVI. Accion Andina Boliviana

CLXVII. Plataforma COLI - Coca Orgánica, Libre e Informada

CLXVIII. Utrip

CLXIX. West Africa Drug Policy Network

CLXX. IDPC

CLXXI. IDPC Board of Directors

247

Los casos exitosos de regulación: Una mirada a la Experiencia Internacional

Al pensar en política de drogas en la actualidad y hablando específicamente sobre la marihuana, la discusión no tiene que polarizarse hacia el lado de prohibición y criminalización total de la sustancia, ni tiene que pensarse en una legalización y apertura completa que se incorpora en el mercado capitalista como un modelo de negocio.

Hoy en día existen diversos casos que son evidencia de que es posible encontrar un punto medio entre estos dos polos y que ponen un mayor énfasis a una perspectiva de salud en lugar de criminalización.

A continuación se presentan algunos modelos alternativos que han demostrado ser exitosos y a partir de los cuales podemos pensar en nuevos caminos para transitar y dar respuesta a la situación actual del cannabis en México, ya que no reconocer la relevancia del tema y la urgencia para regularlo, genera consecuencias que se podrían traducir en el aumento de la capacidad de las organizaciones criminales que controlan el tráfico de las sustancias por el simple hecho de ser ilícitas y por lo tanto, refuerza el mercado negro.

Portugal:

En el 2000, año en el que Portugal decidió despenalizar la posesión de todos los estupefacientes – desde la marihuana hasta la heroína- el mundo lo miraba pensando que este era un modelo de alto riesgo e incrementaría el consumo de drogas, de usuarios y de mafias participantes en el narcotráfico.

El resultado, al contrario de lo que se esperaba, fue exitoso. El crimen, al igual que el uso y la prevalencia del consumo de las drogas disminuyó y decreció el

248

número de muertes relacionadas a las drogas. Hoy en día se mira el caso portugués como un caso de éxito y un modelo a seguir.

De acuerdo a la Ley portuguesa 30/2000, es posible portar con una dosis correspondiente a diez días de consumo personal, esto equivale a un gramo de heroína, de MDMA, o de anfetamina, a dos gramos de cocaína, o **25 gramos de cannabis**. Sin embargo, si alguien es descubierto con una cantidad considerada de uso personal, pueden ser citados a los grupos llamados "comités de disuasión"¹.

Estos están compuestos por psicólogos, médicos, abogados y otros profesionales sociales que informan y procuran disuadir a los usuarios del consumo de determinada sustancias y se les ofrecen tratamientos alternativos. Si se porta una cantidad mayor a la permitida según la ley, existirán sanciones penales.

El éxito en la estrategia implementada por el gobierno portugués, ha sido una combinación entre la implementación de la ley y el apoyo brindado por servicios de salud y políticas sociales, que se han introducido programas de asistencia y tratamiento, así como medidas alternativas que consideran la reducción de daños².

Esto se ha traducido en programas de intercambio de jeringas que ayudan a prevenir la propagación de enfermedades e infecciones y también en o tratamientos con meladona o buprenorfina, narcóticos utilizados como sustituto

¹ Oakford, Samuel. (Consulta: 22 de abril de 2016) *El ejemplo de Portugal: todas las drogas despenalizadas desde la marihuana hasta la heroína*. Vice News. Recuperado de: <https://news.vice.com>

² Martín, Javier. (Consulta: 20 de abril de 2016) *El experimento de Portugal con las drogas tiene consenso 15 años después*. El País Internacional. Recuperado de: internacional.elpais.com

de heroína en el proceso de recuperación de adicción hacia otras drogas opiáceas, frecuentemente se usa en casos de adicción a la heroína.

El éxito de la estrategia que ha implementado Portugal ha sido evidente. En términos de uso, el consumo de drogas en el país está por debajo de la media europea y el consumo de drogas entre los y las jóvenes de 15-24 años, ha disminuido, al igual que las tasas de uso de drogas. Igualmente, el número de las infecciones por VIH y las muertes relacionadas con drogas, ha decrecido.

Por otro lado, la prevalencia del consumo ha pasado de 1,016 a 56 entre 2001 y 2012. Lo anterior resultado de los programas previamente mencionados como el intercambio de jeringas.³

En términos de seguridad, la despenalización ha tenido un gran impacto en la criminalidad del país. Mientras que en el año 2000 el número de personas detenidas y enviadas a juicio por delitos de drogas era de más de 14,000 personas, este pasó a ser de 6,000 a partir de que la política entró en vigor.

La evidencia demuestra que en 1999 un 44% de la población penal del país se encontraba ahí por cometer delitos bajo la influencia de drogas o para financiar su consumo, este se redujo al 21% para 2012.⁴

El camino alternativo por el que se ha optado, ha logrado incidir en la sociedad y el pensamiento colectivo. El estigma social en torno a las drogas se ha desdibujado entendiendo que el consumidor no es un delincuente pero también ha aumentado el acceso eficiente de los usuarios con problemas de adicción a servicios de salud de calidad.

³ Murkin, George. Traducción: Aram Barra. *Despenalización de drogas en Portugal: Dejando las cosas claras*. México Unido Contra la Delincuencia y Transform. Enero, 2015.

⁴ Ibid.

28

Clubes Sociales de Cannabis (CSC) en España:

El gobierno español, ha optado por la política de la tolerancia, especialmente cuando al cannabis se refiere. La manera en que esto se ha traducido, es en un modelo que no criminaliza al usuario y evita la persecución criminal de la posesión y la producción para consumo personal siempre y cuando esto suceda en espacios específicos conocidos como los Clubes Sociales de Cannabis (CSC).

Los CSC operan desde 2001 y con el paso del tiempo se han logrado regular y gestionar mejor. Hoy en día el funcionamiento de los mismos se da a partir de una serie de condiciones claramente definidas:

1. Deben ser asociaciones sin fines de lucro.
2. Deben permitir el acceso únicamente a adultos registrados que justifiquen, dentro del reglamento, su participación y paguen una cuota que responda a los gastos de producción, almacenamiento y gestión.
3. Existe una cantidad limitada de producción que es de 2-3gr por cada miembro con la excepción de algún usuario que requiera de una dosis más alta por motivos médicos⁵.

Desde su creación, los CSC han logrado que miles de personas puedan abastecerse de manera legal y además tengan acceso a una sustancia sobre la cual los miembros tienen un control directo sobre la calidad del producto, ya que el proceso que comienza con la siembra y concluye con el producto final, se realiza dentro del marco de estos clubes.

Esto establece una relación directa entre productores y usuarios que permite generar un mayor equilibrio entre salarios justos y precios adecuados.

⁵ Barriuso Alonso, Martín. *Los Clubes Sociales de Cannabis en España: Una alternativa normalizadora en marcha*. Transnational Institute, 2011. Recuperado de: www.tni.org

Al ser asociaciones sin fines de lucro, los beneficios económicos que esta puede generar, se inviertan en la organización misma en diferentes actividades como pueden ser conferencias, cursos, información y asesoría médica y legal, por ejemplo. Igualmente, al no generar ingresos distribuidos entre los miembros, tampoco se busca un fomento en el consumo o la participación.

En concreto, los principales beneficios de este modelo se relacionan con la auto-regulación, un consumo controlado e informado, la creación de empleo, la recaudación de impuestos pero principalmente, disminuir considerablemente parte importante del ingreso que se relaciona directamente con el mercado negro.

Los CSC son una alternativa a la regulación de la marihuana que no interfiere con los tratados internacionales en materia de drogas de la Organización de las Naciones Unidas ya que, ninguna de las Convenciones ocurridas en torno a la regulación y obligación de los Estados en cuanto a las drogas⁶ pide a los estados encarcelar y criminalizar a los usuarios de drogas.

Lo anterior, ha sido reiterado por el Doctor Lochan Naidoo, Presidente Internacional de la Junta Internacional para el Control de Narcóticos en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas de 2016 (UNGASS).⁷

Este modelo de suministro legal de marihuana podría ser entendido como un modelo de transición que establece regulaciones específicas y seguras para el consumo. En la actualidad, otros países como Bélgica y Uruguay, han replicado

⁶ La Convención Única sobre Estupefacientes en 1961, diez años después, en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas y la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988

⁷ Declaración por el Dr. Lochan Naidoo, Presidente de la Junta Internacional para el Control de Narcóticos.

https://www.incb.org/documents/Speeches/Speeches2015/Statement_INCB_President_CND_2015_UNGASS_06_03_15V_1_cl_INCB_logo.pdf

256

esta estrategia y también se ha hecho de manera informal en países como Argentina, Colombia y Chile⁸.

Países Bajos:

Los Países Bajos son considerados por algunos como pioneros en el camino de la despenalización al haber comenzado en 1976. Esto quiere decir que los usuarios adultos de cannabis pueden portar una cantidad equivalente al consumo personal de 5gr de marihuana o hachís sin que exista sanción jurídica. Adicionalmente, permite la existencia de puntos de venta de cannabis de bajo volumen, los "coffeeshops".

Los *coffeeshops* tienen condiciones estrictas de operación:

1. Hay restricción de acceso para jóvenes menores de 18 años.
2. El nivel máximo de venta es de 5gr de marihuana por persona.
3. Queda prohibida la venta de cualquier otra droga.
4. No pueden publicitarse y están vigiladas estrictamente para que no alteren el orden público a los alrededores.⁹

Los holandeses, a través de este método de regulación, han probado que una política de tolerancia y aceptación, no necesariamente implica el uso masivo de drogas. De acuerdo a un informe del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), el consumo de los holandeses está por debajo de la media europea que es de 6.8%, ya que el nivel de prevalencia es de 5%, este también

⁸ Murkin, George. Traducción: Aram Barra. *Clubes de cannabis en España: Una alternativa no lucrativa para la producción y oferta comercial*. México Unido Contra la Delincuencia y Transform. Enero, 2015.

⁹ Rolles, Steve. Traducción: Rebeca Calzada y Aram Barra. *La política de cannabis en los Países Bajos: hacia delante, no hacia atrás*. México Unido Contra la Delincuencia y Transform. Marzo, 2014.

se encuentra por debajo de franceses y checos, que registran una prevalencia del 9%.¹⁰

Es importante señalar que, para aquellos consumidores, los *coffeeshops* son la fuente principal para obtenerla, lo cual reduce la posibilidad de acceso a otras drogas. Únicamente el 14% de los consumidores de cannabis, reporta que puede tener acceso a otras drogas a través de sus fuentes habituales de acceso al cannabis mientras que con la misma pregunta, en Suecia, bajo un régimen represivo de prohibición el 52% asegura que tiene acceso a otras drogas cuando recurre a fuentes habituales de acceso a cannabis.¹¹

Aunado a esto, vale la pena mencionar que la existencia del problema llamado de "la puerta trasera". Éste consiste en la posibilidad de una venta tolerada de cannabis mientras la producción y el cultivo se encuentran prohibidos.

El segundo partido más grande, Demócratas 66, ha promovido una nueva regulación en la cual, bajo control gubernamental, se permitirá a los dueños de las *coffeeshops*, comprar marihuana a los pequeños productores que obtengan licencia¹². El resultado ha salido adelante con 77 votos a favor y 72 en contra pero deberá ser refrendada por el Senado.

Margriet van Laar, coordinadora de la Unidad de Análisis sobre Tendencias en materia de Drogas del Instituto para la Salud Mental y las Adicciones (TRIMBOS), asegura que "(como institución) no estamos a favor del consumo de drogas, pero

¹⁰ Bugarin, Inder. (1 de julio de 2010) Holanda, a 34 años de tolerancia con las drogas. BBC Mundo. Recuperado de: www.bbc.com

¹¹ Rolles, Steve. Traducción: Rebeca Calzada y Aram Barra. *La política de cannabis en los Países Bajos: hacia delante, no hacia atrás*. México Unido Contra la Delincuencia y Transform. Marzo, 2014.

¹² *Los Países Bajos legalizan el cultivo de marihuana*. (21 de febrero de 2017). Euronews. Recuperado de: es.euronews.com

254

somos pragmáticos y conscientes de que no van a desaparecer, así que tratamos de reducir el daño tanto como sea posible".¹³

Considerando esto, la reducción de daños se ha entendido como una de las piedras angulares de la política de drogas en los Países Bajos. Los proyectos que se están llevando a cabo son: programas de metadona, un tratamiento que se utiliza para la adicción a opiáceos, la disposición de agujas limpias para evitar el contagio de enfermedades como la hepatitis o el VIH, y paralelo una campaña nacional de vacunación contra la hepatitis B, dirigidas a grupos de riesgo de comportamiento, que tiene como objetivo minimizar los efectos negativos para los usuarios y la sociedad¹⁴



Van Laar piensa que en los casos en los que la política de drogas se inclina hacia la represión y pone demasiado énfasis en el orden público, se ignora a la población usuaria y esto imposibilita el acercamiento a medidas de salud pública como la prevención, tratamiento de adicciones y el control de enfermedades infecciosas.

CONCLUSIÓN

¹³Bugarin, Inder. (1 de julio de 2010) *Holanda, a 34 años de tolerancia con las drogas*. BBC Mundo. Recuperado de: www.bbc.com

¹⁴Martínez Huerta, David. (29 de septiembre de 2013) *Holanda, Uruguay y Portugal desentierran mitos sobre la legalización de la marihuana; comparten sus experiencias*. Sin Embargo. México. Recuperado de: www.sinembargo.mx

255

En la actualidad, existen países que han reconsiderado la posición clásica de una prohibición total a través de sus leyes en contra de los estupefacientes, particularmente el cannabis.

La decisión que han tomado, en pro de un verdadero cuidado y protección de la salud pública, ha sido detener la persecución de los consumidores y enfocarse en disminuir la dependencia a las sustancias a través de programas de reducción de daños.

Como consecuencia, es posible afirmar que existen modelos de regulación alternativos a las políticas represivas y criminalizadoras de cannabis, estas diversas opciones permiten abordar el problema que involucra el consumo problemático de las drogas desde una perspectiva garante de derechos humanos y con mejores resultados en materia de salud pública.

La evidencia se presenta desde una perspectiva objetiva y con la principal característica de presentar al usuario como personaje central de una serie de políticas públicas cuya consecuencia necesaria será permitir el acceso a programas de tratamiento y terminar con la criminalización desproporcionada del consumidor.


En caso de requerir mayor información o profundizar en medidas alternativas a la penalización de sustancias con la finalidad de evidenciar políticas públicas eficientes en materia de salud pública relacionada con el consumo de drogas, reiteramos nuestra disposición para coadyuvar con este tribunal en todo momento que sea requerido.

e. 28

Curias en el e

es masmadas
sentencia de m

asi c
estur
man
Polit
mate



Directora Ejecutiva

OPC)

006938

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2018 FEB 16 PM 12 51

OFICINA DE CERTIFICACIÓN
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

RECIBI DE UN ENVIADO
SIN ANEXO

[Handwritten signature]

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2018 FEB 16 PM 3 31

PRIMER SALA
SECRETARIA DE ASESORES

257

MUCD

México Unido Contra la Delincuencia

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Amparo en revisión 623/2017

AMICUS CURIAE: Libre Desarrollo de la Personalidad

PRESENTADO POR

México Unido Contra la Delincuencia

ANTE LA HONORABLE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

[Redacted], MUCD

[Redacted], MUCD

[Redacted], MUCD

[Redacted], MUCD

[Redacted], MUCD

[Redacted], Vocal, MUCD

[Redacted], Vocal, MUCD

[Redacted], Vocal, MUCD

[Redacted], Vocal, MUCD

256

PRESENTACIÓN DE QUIENES SUSCRIBEN EL PRESENTE AMICUS CURIAE

1. Somos una Asociación Civil no lucrativa, laica y apartidista, que lleva 20 años dedicada a trabajar en causas y acciones a favor de la seguridad, la justicia y la legalidad. El trabajo de más de dos décadas, ha derivado en que México Unido Contra la Delincuencia sea una organización líder en análisis de políticas de seguridad, legalidad y justicia, implementación de proyectos de prevención social de la violencia, cultura de la legalidad y empoderamiento comunitario, incidencia en procesos relacionados con políticas de seguridad ciudadana, atención a víctimas, cultura de la legalidad y política de drogas en México. Nuestro trabajo ha orientado la generación de mejores leyes y políticas públicas para formar ciudadanos responsables y respetuosos de la ley, prevenir el delito, brindar atención a víctimas, profesionalizar a autoridades encargadas de la seguridad pública, así como, procurar justicia de manera expedita y eficiente.

FUNDAMENTO JURÍDICO PARA LA PRESENTACIÓN DEL AMICUS CURIAE.

2. Comparecemos ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de manera respetuosa con la finalidad de presentar este *amicus curiae* y que sea considerado el contenido del mismo en ejercicio de nuestro derecho de petición previsto en el artículo 1º y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como de nuestro derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos de manera directa, conforme al artículo 23.1, inciso a) de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

INTERÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL PRESENTE AMICUS CURIAE

3. El objetivo del presente *amicus curiae* es proporcionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación criterios jurídicos, antecedentes jurisprudenciales, límites y alcances reconocidos en el derecho interno mexicano en relación con el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad relacionado con la producción, uso y autoconsumo del estupefaciente "cannabis" y el psicotrópico "THC", en conjunto conocidos como "marihuana".
4. El presente *amicus* permite coadyuvar en las consideraciones que formule esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considere argumentos adicionales directamente relacionados con los plasmados en la demanda de amparo de referencia.

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.

5. Actualmente dentro del sistema jurídico mexicano se encuentra reconocido el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, de acuerdo con los criterios dictados por esa Suprema Corte de Justicia de la Federación en el artículo primero constitucional y en diversos tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos.¹
6. El Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad podemos entenderlo como una protección a la libertad de actuación humana que no se encuentra expresamente protegido por un derecho de libertad específico, por lo que su reconocimiento derivó de la interpretación jurisprudencial de casos en concreto.²
7. Entendemos que la lógica que a la luz a este derecho, responde a una limitación existente por parte del Estado para intervenir en aspectos básicos en la vida de las personas, mismos que por ser tan específicos y cotidianos resultaría imposible (o en extremo paternalista o desmedido) realizar la regulación directa de cada una de las acciones que comprende este derecho.

ANTECEDENTES

8. Los antecedentes del reconocimiento del "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD" se encuentran plasmados en la sentencia que emitió este Alto Tribunal con motivo del amparo directo [REDACTED]. En este documento, se interpreta que este derecho fundamental deriva del derecho a la dignidad, previsto en el artículo 1º constitucional y concluye con la siguiente afirmación: "el individuo, sea quien sea, tiene derecho a elegir en forma libre y autónoma, su proyecto de vida, la manera en que logrará las metas y objetivos que, para él, son relevantes". Como consecuencia, se emite la siguiente tesis aislada:

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE.³

"De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con

¹ Engrose del Amparo en Revisión [REDACTED] página VII tercer párrafo.

² Ibidem, página VIII primer párrafo

³ 1. Época: Novena Época, Registro: 165822, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Materia(s): Civil, Constitucional, Tesis: P. LXVI/2009, Página: 7

el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente."

9. En consecuencia, podemos observar que ha sido responsabilidad de esta Suprema Corte de Justicia la definición y delimitación de éste Derecho Fundamental. Algunos ejemplos concretos en los que se ha dotado de contenido al derecho al libre desarrollo de la personalidad son los siguientes:

- I. Reasignación Sexual.- "la 'reasignación sexual' que decida una persona, que puede comprender o no una cirugía para ese fin, con el objeto de adecuar su estado psicosocial a su físico y, de ahí, vivir en el sexo con el que se identifica plenamente, innegablemente **constituye una decisión que forma parte del libre desarrollo de la personalidad**, en tanto es una expresión de la individualidad de la persona, respecto de su percepción sexual ante sí mismo, lo que influye decisivamente en su proyecto de vida y, por ende, en sus relaciones sociales"⁴
- II. Divorcio sin causa.- "el **respeto al libre desarrollo de la personalidad** justifica reconocer mayor trascendencia a la voluntad del individuo cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge, por ello, el derecho a tramitar la disolución del vínculo matrimonial, no puede hacerse depender de la demostración de causa alguna, pues aquella determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en la demanda, resultando inadmisibles que el Estado se empeñe en mantener vigente el matrimonio de quienes solicitan el divorcio al considerar que su situación particular se torna irreconciliable"⁵
- III. Matrimonio entre personas del mismo sexo: El **Derecho al Libre Desarrollo de la personalidad** puede verse materializado cuando un individuo elige de forma libre y autónoma a la persona con la que desea contraer matrimonio.

10. De estos ejemplos es posible advertir algunos elementos en común:

- IV. El reconocimiento indiscutible de la existencia del Derecho Humano al Libre Desarrollo de la Personalidad, así como su contenido.

⁴ Amparo directo [REDACTED] 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

⁵ Amparo directo en revisión [REDACTED], 23 de septiembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudíño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.

- 261
- V. La existencia de un ámbito de privacidad e intimidad a la que debe impedirse la intervención del Estado.

EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD PARA EL CASO CONCRETO DEL CONSUMO DE CANNABIS

11. Nuestro principal referente se sitúa en la décima época respecto a la relación entre el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad para el caso concreto del Cannabis que fue dictado por este Alto Tribunal como sentencia del Amparo en Revisión [REDACTED].
12. En la sentencia antes mencionada se reconoce una autorización sanitaria para "consumir marihuana regularmente, de forma personal y con fines meramente lúdicos" y, en consecuencia, también las acciones necesarias para estar en posibilidad el autoconsumo (siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, procesión, transporte, etc.). Ya que, al ser realizadas por personas mayores de edad que deciden sin interferencia alguna qué tipo de actividades recreativas o lúdicas deseen realizar, éstas pertenecen a la esfera de autonomía que debe estar protegida por la Constitución.⁶
13. No cabe duda que, como lo señaló este Alto Tribunal, que las "experiencias mentales" que se viven como consecuencia del consumo de sustancia psicotrópicas se pueden entender como unas de las más personales e íntimas que alguien pueda experimentar. La consecuencia lógica es que, esta conducta necesariamente se encuentra tutelada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad.⁷
14. En paralelo al hecho contemplado en el párrafo anterior, en nuestro sistema existe normatividad que constituye un obstáculo jurídico, mismo que impide a los quejosos el derecho a decidir qué tipo de actividades recreativas o lúdicas deseen realizar y adicionalmente todas las acciones necesarias para poder materializar esa elección a través del autoconsumo de la marihuana.⁸

LÍMITES AL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

15. Los derechos fundamentales cuentan con límites y no debemos perder de vista que el criterio actual vigente establece que este Derecho Fundamental **NO ES ABSOLUTO**, concretamente se han identificado los siguientes límites:
- VI. Derechos de terceras personas.
 - VII. Orden Público.

⁶ Engrose del Amparo en Revisión [REDACTED] páginas XI y XII.

⁷ Ibidem

⁸ Ibidem.

262

16. La existencia de estos límites implica que el legislador tiene una obligación constitucional de preservar estos límites aun cuando esto involucre intervenir en un Derecho Fundamental -el libre desarrollo de la personalidad-
17. Ahora bien, la existencia de límites a un derecho implica necesariamente una colisión que debe resolverse con un test de personalidad -a menudo en abstracto- que desembocará en alguna de las siguientes consecuencias:
- VIII. La medida legislativa es idónea para proteger los derechos de terceros y no limitar de manera innecesaria y desproporcionada este derecho fundamental, por lo tanto, sería una medida constitucional.
 - IX. La medida legislativa limita de manera desproporcionada o existen medidas que involucran una menor intrusión en la privacidad de las personas con mejores consecuencias fácticas; en consecuencia, la medida sería inconstitucional.
18. En este sentido, el debate actual se centra sobre si la medida adoptada actualmente -prohibición absoluta del consumo de marihuana- encuentra justificación en una protección eficaz en materia de salud y orden público o existen medidas alternativas que tutelen estos bienes jurídicos sin que necesariamente impliquen una intromisión excesivamente invasiva para los gobernados.
19. Las consideraciones objetivas que ha realizado la Primera Sala respecto al consumo de marihuana como un peligro de salud pública son las siguientes:
- X. "La marihuana no supone un riesgo importante para la salud de las personas mayores de edad, toda vez que sus consecuencias permanentes son poco probables, mínimas o reversibles si su consumo no se inicia a edades tempranas".⁹
 - XI. "El consumo de marihuana tiene un nivel de incidencia muy bajo o incluso discutible en el consumo de otras drogas más riesgosas".¹⁰
 - XII. "Conducir vehículos y manejar instrumentos y sustancias peligrosas bajo los efectos de la marihuana sí supone un riesgo para el orden público."¹¹
 - XIII. "Existe incertidumbre sobre la afirmación de que el consumo de marihuana incentiva la comisión de otros delitos".¹²
20. Ante estas consideraciones, podemos tachar de excesivo un sistema administrativo que realiza una prohibición absoluta con toda la maquinaria sancionadora con la que cuenta el Estado, sobre la realización de una conducta que, además, se encuentra tutelada por un Derecho Humano, como lo es el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad.

⁹ Idem p.78

¹⁰ Ibidem

¹¹ Ibidem

¹² Ibidem

21. Esta opinión se ve confirmada con el siguiente fragmento de la resolución contenida en el engrose de la sentencia del Amparo en revisión [REDACTED]

"Una vez que se han analizado los beneficios y los costos de la medida, esta Primera Sala considera que el "sistema de prohibiciones administrativas" conformado por los artículos de la Ley General de Salud impugnados por los quejosos, ocasionan una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que se alcanza con dicha medida. A pesar de que el legislador puede limitar el ejercicio de actividades que supongan afectaciones a los derechos que protege nuestra Constitución, en el caso de la restricción al desarrollo de la personalidad que comporta la medida impugnada, esta Primera Sala no encuentra que tales afectaciones fueran de una gravedad tal que ameriten una prohibición absoluta a su consumo".¹³

22. Una vez analizada la situación actual de la política prohibicionista que permea en el sistema de manera integral, estimamos al igual que el Ministro José Ramón Cossío Díaz en su voto concurrente respecto del amparo en revisión [REDACTED] que la sentencia no debía atender únicamente a los efectos tradicionales del juicio de amparo, ya que la resolución impacta de manera sustancial en la política estatal en materia de drogas.
23. Existe una obligación por parte de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en su papel de Tribunal Constitucional garante de Derechos Humanos de exhortar a todas las autoridades del Estado —particularmente poderes ejecutivo y legislativo— para que realicen las acciones necesarias para hacer efectivo el derecho pleno del libre desarrollo de la personalidad para todos los gobernados.
24. Se debe dar una cooperación entre diversos Poderes de la Unión con la finalidad de salvaguardar Derechos Humanos o ejercer una tutela efectiva.
25. En diversos antecedentes en los que la Corte Interamericana ha condenado a México, se ha modificado la legislación como resultado de una resolución jurisdiccional, algunos ejemplos son los siguientes casos:
- XIV. Castañeda Gutman: Materia de acceso a la justicia electoral
 - XV. Fernández Ortega y Rosendo Cantú: Capacitación de funcionarios de las Fuerzas Armadas sobre principios y normas de protección de los derechos humanos.
 - XVI. Radilla Pacheco: Reformas constitucionales y legislativas en materia de jurisdicción militar.
 - XVII. Cabrera García y Montiel Flores: Fortalecer el funcionamiento y utilidad del margo del registro de personas detenidas en el país.

¹³ Idem p.81

XVIII. García Cruz y Sánchez Silvestre: Capacitación a operadores de justicia para que puedan identificar, reaccionar, prevenir, denunciar y sancionar el uso de técnicas de tortura.

26. De esta manera, y con la finalidad de tutelar efectivamente los diversos derechos fundamentales antes enumerados –derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la salud, derecho a la no discriminación, seguridad jurídica...-es necesaria una sentencia exhortativa de carácter estructural que permita la creación de una política pública integral, misma que debe contar con un análisis previo de constitucionalidad que permita la protección más efectiva del orden público con la observancia y aplicación de Derechos Humanos en todo momento.

CONSIDERACIONES

1. Existe el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad y se encuentra reconocido en nuestro sistema jurídico como un Derecho Fundamental.
2. La prohibición absoluta del consumo de marihuana impacta de manera violenta en la privacidad de las personas. Además, ésta intromisión no se encuentra debidamente justificada, ya que existen diversas medidas que resultan ser más eficaces para la tutela de la salud y orden público.
3. El que existan penas corporales y la necesidad de activar el aparato coercitivo penal del Estado sobrepasa todo tipo de proporcionalidad en una actividad que es estrictamente personal.
4. La criminalización que ha sido producto de la prohibición absoluta contenida en el sistema administrativo ha generado daños considerables en la sociedad:
 - a. Violaciones a Derechos Humanos: Detenciones arbitrarias, Tortura, extorsión, desplazamiento ocasionado por la violencia e inseguridad, privación de la libertad, práctica de estudios médicos en contra de la voluntad de las personas.
 - b. Violaciones al Derecho a la Salud: Los daños son mínimos o inexistente en el consumo de marihuana en contraste con los ocasionados por las consecuencias de la penalización –privación de la libertad, desinformación, no existencia de estándares de calidad tanto en la producción como en el proceso-.
 - c. Violaciones al Derecho a la no discriminación: Existe un estigma en torno a los consumidores que se traduce en la imposibilidad de acceder a un trabajo o escuelas.
 - d. Inexistencia de Seguridad Jurídica: Actualmente existe una zona de incertidumbre por parte de la población en general y de los

165

operadores jurídicos sobre cuáles son las consecuencias jurídicas de ser consumidor.

Por lo antes expuesto, a Ustedes Señoras y Señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera atenta solicitamos:

PRIMERO. Admitir y anexar el presente Amicus Curiae en el expediente correspondiente.

SEGUNDO. Tomar en cuenta las consideraciones plasmadas a lo largo del documento al momento de realizar su voto relacionado con la sentencia de mérito.

TERCERO. En su momento, determinar la constitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, así como los demás que se encuentren relacionados producción, uso y autoconsumo del estupefaciente "cannabis" y el psicotrópico "THC", en conjunto conocidos como "marihuana", por ser violatorios de Derechos Humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales en la materia.

266

800000

Personas que firman el presente amicus curae a nombre de México Unido Contra la Delincuencia:

[Redacted]

Presidenta Honoraria

[Redacted]

Vocal

[Redacted]

[Redacted]

Secretario

Vocal

[Redacted]

[Redacted]

Tesorero

Vocal

[Redacted]

[Redacted]

Vocal

Vocal

[Redacted]

Vocal

5-6-07 06:17:10

006938

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2018 FEB 16 PM 12 51

OFICINA DE CERTIFICACIÓN
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

RECIBI DE UN ENVIADO
SIN ANEXO

Con *[Signature]*

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2018 FEB 16 PM 3 32

PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PROMOCIONES
006937
006938
006939

267
FORMA A-34
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

En veinte de febrero de dos mil dieciocho, la Secretaria de Acuerdos da cuenta a la Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con tres escritos de amicus curiae, recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia. Conste.

Ciudad de México, a veinte de febrero de dos mil dieciocho.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, agréguense los tres escritos de amicus curiae. //

Devuélvanse los autos a la Ponencia del **MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.**

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma la **MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ**, Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciada María de los Ángeles Gutiérrez Gatica.

OACA.

El **22 FEB 2018** se notificó el acuerdo anterior a los interesados por medio de lista, en términos de lo dispuesto en los artículos 28, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PRIMERA SALA

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

Ciudad de México, a veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

Con fundamento en el artículo 184, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se señala para la audiencia respectiva en este asunto el día nueve de mayo de dos mil dieciocho y siguientes.
Doy Fe.

SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA

Ciudad de México, a nueve de mayo de dos mil dieciocho.

Se hace constar, con fundamento en el artículo citado, que en sesión de esta fecha, celebrada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la asistencia de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz (Ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidenta Norma Lucía Piña Hernández. A petición del Ministro Ponente se acordó:

Que continúe en lista.

SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA

OASA.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PRIMERA SALA

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

Ciudad de México, a diez de mayo de dos mil dieciocho.

Con fundamento en el artículo 184, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se señala para la audiencia respectiva en este asunto el día **veintitrés de mayo** de dos mil dieciocho y siguientes.
Doy Fe.

SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA

Ciudad de México, a **veintitrés de mayo** de dos mil dieciocho.

Se hace constar, con fundamento en el artículo citado, que en sesión de esta fecha, celebrada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la asistencia de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz (Ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidenta Norma Lucía Piña Hernández. A petición del Ministro Ponente se acordó:

Que continúe en lista.

SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA

OACA.

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
QUEJOSO Y RECURRENTE: [REDACTED]

PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
SECRETARIA: LUZ HELENA OROZCO Y VILLA

ÍNDICE

	Pág.
Síntesis	1 - VI
RESOLUCIÓN	
I. ANTECEDENTES	2
II. COMPETENCIA	8
III. OPORTUNIDAD	8
IV. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER	9
V. ESTUDIO DE FONDO	25
i. Marco regulatorio sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos en la Ley General de Salud	28
ii. Análisis de la incidencia de la medida legislativa impugnada en el contenido <i>prima facie</i> del libre desarrollo de la personalidad	35
iii. Análisis de proporcionalidad en sentido amplio de la medida legislativa impugnada	48
a. Constitucionalidad de los fines perseguidos con la medida	49
b. Idoneidad de la medida	55
c. Necesidad de la medida	68
d. Proporcionalidad en sentido estricto de la medida	79
iv. Inconstitucionalidad de los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud	83
v. Constitucionalidad de los artículos 234, 368 y 479 de la Ley General de Salud	89
vi. Análisis de los agravios del recurso de revisión adhesivo	93
VI. DECISIÓN	99

ANEXOS

- I. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA
- II. ACTO RECLAMADO
- III. DEMANDA DE AMPARO
- IV. SENTENCIA DE AMPARO
- V. RECURSO DE REVISIÓN
- VI. RECURSO DE REVISIÓN ADHESIVA
- VII. RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO



AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

QUEJOSO: [REDACTED]

PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

SECRETARIA: LUZ HELENA OROZCO Y VILLA

SÍNTESIS

Autoridades responsables: Congreso de la Unión (integrado por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores); Presidente de la República; Secretario de Salud; Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

Acto reclamado: Del Congreso de la Unión reclamó la expedición de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro en lo referente a los artículos 83, 84 y 85 así como sus consecuencias y efectos.

Del Congreso de la Unión reclamó la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro en lo concerniente a los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 así como sus consecuencias y efectos.

Del Presidente de la República reclamó la publicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con sus consecuencias y efectos.

Del Presidente de la República reclamó la publicación de la Ley General de Salud, con todas sus consecuencias y efectos.

Del Secretario de Salud reclamó todos los acuerdos, órdenes, instrucciones, verbales o escritos que, como superior jerárquico impartió al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios para negar, bajo la apariencia de un desechamiento, la autorización sanitaria formulada para consumir marihuana con fines recreativos.

Del Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios reclamó los actos de cumplimiento, observancia, trámite y ejecución por conducto de su subordinado el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas. También reclamó los actos que de propio imperio dictó, consistentes en las órdenes, instrucciones o acuerdos, proveídos o resoluciones giradas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para que, bajo la apariencia de un desechamiento, se negara la solicitud de autorización sanitaria para consumo personal con fines lúdicos de marihuana del promovente.

Del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios reclamó los actos de cumplimiento de las órdenes dictadas por el Secretario de Salud o el Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Igualmente, reclamó los actos que de propia iniciativa haya realizado

en la aplicación de los artículos impugnados en la emisión del oficio número [REDACTED] de ocho de julio de dos mil dieciséis con el que, bajo la apariencia de un desechamiento, negó la solicitud de autorización sanitaria para consumo personal con fines lúdicos de marihuana del promovente.

De todas las autoridades, reclamó los actos tendentes a desconocer y vulnerar los derechos fundamentales inherentes a la persona como individuo libre y autónomo, en el contexto de una sociedad democrática, previstos en la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Sentencia de amparo recurrida: La sentencia recurrida sobreseyó respecto de ciertos actos y de diversas autoridades, declarando infundados los conceptos de violación.

Recurrente: Parte quejosa.

El proyecto propone:

En el presente asunto, el quejoso impugna la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley General de Salud que le impiden realizar actividades relativas al autoconsumo de marihuana tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas.

En ese sentido, se retomarán las consideraciones del amparo en revisión [REDACTED] para resolver el asunto en lo concerniente a los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud dando cuenta de algunas modificaciones legislativas a tales artículos que no afectan en lo sustancial al proyecto. Ahora bien, un breve apartado de consideraciones diferenciadas tendrá por objeto analizar la constitucionalidad de los artículos 234, 368 y 479 del mismo ordenamiento, cuya constitucionalidad no fue objeto de *litis* en el amparo en revisión [REDACTED]. Una diferencia importante con respecto al precedente citado es que en este caso el quejoso solicitó la autorización sanitaria para la adquisición de las semillas de marihuana. Dicha solicitud se reiteró en la propia demanda de amparo y en el recurso de revisión. Respecto de esta cuestión se harán algunas precisiones en el apartado relativo a los efectos de la sentencia.

Siguiendo el amparo en revisión [REDACTED], se establece la inconstitucionalidad de los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud por vulnerar el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Empero, respecto a los artículos 234, 368 y 479 se niega la protección federal. En ese sentido, procede negar el amparo respecto al artículo 234 de la Ley General de Salud por dos razones. En primer lugar, este artículo sólo contiene una definición legal interna de la norma. Es decir, se limita a definir las sustancias que son consideradas estupefacientes con lo cual no genera al recurrente perjuicio alguno si ya se le concederá el amparo a

efectos de que se le expida la autorización administrativa conducente, máxime que la norma contiene un listado extenso de estupefacientes y no sólo menciona al cannabis sativa, índica y americana o marihuana y sus semillas, sino a una abundante cantidad de sustancias.

En segundo lugar, debe recordarse que no se encuentran en estudio ante esta Primera Sala los tipos penales correspondientes. Es decir, no forma parte de la litis analizar la constitucionalidad de los delitos establecidos por el Código Penal Federal respecto de los estupefacientes en cuestión. Precisamente por ello, no puede concederse el amparo al quejoso respecto de este artículo porque forma parte, a su vez, del "sistema punitivo" concerniente a las sanciones penales de los estupefacientes. De tal suerte, diversos artículos del Código Penal Federal penalizan conductas relativas a narcóticos o estupefacientes, remitiendo para la definición de estupefacientes a la Ley General de Salud. Ejemplo de ello es el artículo 193, 194, fracciones II, III y IV; 196 Ter; 197 y 198 *inter alia*. Remover de la definición de estupefaciente al cannabis implicaría materialmente la eliminación respecto a ella de los tipos penales conducentes, cuestión que no es objeto de este amparo.

Por otro lado, también se impone negar el amparo respecto al artículo 368 de la Ley General de Salud. Dicho artículo únicamente define a la autorización sanitaria como el acto administrativo mediante el cual se permite a una persona pública o privada, la realización de actividades relacionadas con la salud humana, en los casos y requisitos determinados por la ley. En este sentido, no genera perjuicio alguno al quejoso recurrente pues ni siquiera define requisitos o prohibiciones respecto al cannabis. En todo caso, le causa agravio el resto del "sistema de prohibiciones administrativas" respecto al cual ya se le ha concedido el amparo. Además, no pasa desapercibido que precisamente el artículo 368 impugnado será parte del fundamento normativo bajo el cual la autoridad responsable deberá expedirle la autorización administrativa que se precisará en los efectos.

Por lo que respecta al artículo 479, siguiendo el precedente del amparo en revisión [REDACTED], es importante señalar que si bien el artículo 478 de la Ley General de Salud, en relación con el artículo 479, señala que el Ministerio Público no ejercerá acción penal en contra de quien posea hasta cinco gramos de marihuana, esta Suprema Corte ha interpretado que dicha disposición contiene una excluyente de responsabilidad, lo que significa únicamente que en esos casos no debe aplicarse la pena a quien haya cometido el delito en cuestión, pero no consagra de ninguna manera una autorización o un derecho al consumo personal en los términos en los que lo solicita el quejoso. En este sentido, debe destacarse que el artículo 479 de la Ley General de Salud no forma parte del "sistema de prohibiciones administrativas", sino del "sistema punitivo" previsto en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal en relación con el control de

estupefacientes y psicotrópicos. Sobre dicho artículo, debe enfatizarse que el quejoso recurrente no ha esgrimido razones específicas para su inconstitucionalidad, sino que lo ha combatido de forma genérica en el encuadre de lo que llama “política prohibicionista”.

Esta Primera Sala considera que tal alegato es inoperante. Resulta notorio que, en el marco de la autorización sanitaria petitionada por el quejoso, dicho artículo no le genera perjuicio pues no prohíbe la emisión de autorización sanitaria alguno respecto a las conductas pretendidas con el quejoso. En ese sentido, ante la falta de perjuicio directo al recurrente, en tanto el artículo impugnado no obstaculiza la autorización pretendida que será objeto de este amparo, debe considerarse que dicho planteamiento de inconstitucionalidad resulta inoperante.

Finalmente, esta Primera Sala estima que el recurso de revisión adhesiva es infundado. En primer término, contrario a lo aducido por el recurrente adhesivo, la constitucionalidad de la finalidad de la limitación no es el único elemento para valorar el ajuste de tal disposición con la Constitución Federal, sino su idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. Dado que la restricción no ha superado la tercera y cuarta grada de este análisis, se reitera su inconstitucionalidad pese al fin constitucionalmente legítimo que defiende. Por otro lado, son infundados los agravios encaminados a defender el análisis de constitucionalidad realizado por el Juez de Distrito. Esta Primera Sala demuestra en esta sentencia que las afectaciones a la salud no son de una gravedad tal que ameriten una prohibición absoluta en su consumo. Adicionalmente, debe tenerse presente que existen medidas alternativas igualmente idóneas para proteger la salud y el orden público que intervienen en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Son infundados también los planteamientos de la recurrente adhesiva que estiman que la medida no vulnera el libre desarrollo de la personalidad de la parte quejosa o que ésta no es siquiera titular de tal derecho. Lo anterior porque, como persona física, el quejoso es titular del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que comprende la elección de sus actividades recreativas o lúdicas, faceta que prohíben precisamente las normas impugnadas. El proyecto declara inoperantes diversos planteamientos que no se encuentran encaminados a fortalecer las consideraciones del Juez de Distrito sino que plantean aspectos ajenos a la litis constitucional.

Puntos resolutivos:

PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a [REDACTED] contra de la expedición y promulgación de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, así

como de su aplicación, consistente en el oficio número [REDACTED] expedido por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en los términos expuestos en la presente sentencia.

TERCERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a [REDACTED] en contra de la expedición y promulgación de los artículos 234, 368 y 479 de la Ley General de Salud.

CUARTO. El recurso de revisión adhesivo interpuesto por las autoridades responsables es infundado.

TESIS CITADAS EN EL PROYECTO

"AMPARO ADHESIVO. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EN LOS CUALES EL ADHERENTE SE LIMITA A COMBATIR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEL QUEJOSO PRINCIPAL, SIN ESGRIMIR RAZONES QUE MEJOREN LAS CONSIDERACIONES DEL ACTO RECLAMADO".

"DELITO CONTRA LA SALUD. EL ARTÍCULO 478 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, AL PREVER LA NO APLICACIÓN DE LA EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD RESPECTO DE LOS FARMACODEPENDIENTES POSEEDORES DE ALGÚN NARCÓTICO DENTRO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN, INCLUSO CUANDO SU CANTIDAD NO EXCEDA EL LÍMITE MÁXIMO LEGALMENTE ESTABLECIDO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD".

"DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL".

"DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE".

"DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE".

"DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. LA PROHIBICIÓN PARA EL AUTOCONSUMO DE MARIHUANA CONTENIDA EN LA LEY GENERAL DE SALUD INCIDE PRIMA FACIE EN EL CONTENIDO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL".

"DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES".

"RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS".

"RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS".

"SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL".



101 páginas, 6 anexos
2017 NOV 30 AM 11:55

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
QUEJOSO: [REDACTED]

PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
SECRETARIA: LUZ HELENA OROZCO Y VILLA

PRIMERA SALA
MATERIA DE ACUERDOS

SUMARIO

El presente caso deriva del juicio de amparo indirecto promovido por [REDACTED] contra un oficio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que desechó su solicitud para la obtención de una autorización sanitaria que le permitiera el consumo personal con fines recreativos de marihuana. En la demanda de amparo, el solicitante impugnó tanto el oficio referido como diversos preceptos de la Ley General de Salud. El Juez de Distrito determinó sobreseer en una parte el juicio de amparo y negar la protección constitucional en relación al oficio y los preceptos reclamados. El quejoso interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado que conoció del asunto determinó reservar jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer sobre el tema de constitucionalidad subsistente. De ahí que la materia del presente asunto consiste en verificar si los agravios de la revisión son aptos para revocar la sentencia recurrida.

CUESTIONARIO

¿Los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud son violatorios del derecho al libre desarrollo de la personalidad?

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día _____, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelven los autos relativos al amparo en revisión 623/2017 interpuesto por [REDACTED] por conducto de su autorizado legal, en contra de la sentencia dictada por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo [REDACTED]

I. ANTECEDENTES

1. **Hechos.** [REDACTED] solicitó por escrito presentado ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (en adelante, "COFEPRIS") el trece de noviembre de dos mil quince una autorización sanitaria para consumo personal con fines lúdicos o recreativos del "Cannabis Sativa" y el psicotrópico THC, así como para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas.
2. El doce de febrero de dos mil dieciséis, la COFEPRIS emitió el oficio número [REDACTED] mediante el cual requirió al promovente, con fundamento en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 368 de la Ley General de Salud, que acreditara la existencia de un interés jurídico o legítimo en un plazo de cinco días hábiles relativo a su solicitud de autorización sanitaria. Así, dicho oficio lo previno a efecto de que invocara una norma constitucional en la que se estableciera o tutelara algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, demostrara que dicho acto trasgrede ese interés difuso de manera individual o colectiva, así como que probara pertenecer a tal colectividad.
3. Mediante escrito de nueve de marzo de dos mil dieciséis el promovente desahogó la prevención en el sentido de que la COFEPRIS carecía de facultades para solicitar que se acreditara el interés jurídico y legítimo. Asimismo, refirió que, con fundamento en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la COFEPRIS carecía de facultad para solicitar información adicional una vez transcurrida la tercera parte del término que tiene para dar respuesta a un trámite. De igual forma, adujo la titularidad del derecho de petición del artículo 8º constitucional al tenor del

cual podía solicitar cualquier cosa a un funcionario público, incluyendo una autorización sanitaria para el consumo personal de marihuana y el ejercicio de los derechos correlativos a tal consumo.

4. Mediante oficio [REDACTED] la COFEPRIS refirió que, si bien es cierto que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que no podrá exigirse más formalidades que las previstas en la ley, también lo es que dicha ley remite directamente a la Ley General de Salud que establece los casos y modalidades en que se puede emitir una autorización sanitaria. De tal suerte, refirió que acreditar un interés jurídico o legítimo para proveer sobre una resolución por parte de la autoridad no es una formalidad sino un requisito de fondo referente a la existencia de un derecho subjetivo previsto por el conjunto normativo que el particular pueda ejercer o reclamar de la autoridad estatal.
5. De igual forma, la COFEPRIS sostuvo que de las manifestaciones vertidas en el desahogo tampoco se desprendían los elementos necesarios para acreditar un interés legítimo, es decir, la existencia de una norma constitucional que tutelara un interés difuso en beneficio de una colectividad o que dicho acto trasgrediera tal interés difuso, ni que se probara pertenecer a tal colectividad.
6. En virtud de lo anterior, la COFEPRIS determinó que no se desprendía del desahogo del requerimiento la existencia de un interés jurídico o legítimo toda vez que ni siquiera se estaba ante la existencia de una autorización en la modalidad debida. Así las cosas, en aplicación al artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, determinó desechar el trámite de mérito por no haber desahogado de manera satisfactoria la citada prevención.
7. **Demanda de amparo.** En contra de la resolución de la COFEPRIS [REDACTED] promovió, por propio derecho, juicio de amparo indirecto mediante escrito depositado el veintitrés de agosto de dos mil

dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

8. En la demanda respectiva fueron señaladas como autoridades responsables y actos reclamados los que a continuación se precisan:

AUTORIDADES RESPONSABLES:

- Congreso de la Unión (integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores).
- Presidente de la República.
- Secretario de Salud.
- Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.
- Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.
- Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

ACTOS RECLAMADOS:

- Del Congreso de la Unión reclamó la expedición de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro en lo referente a los artículos 83, 84 y 85 así como sus consecuencias y efectos.
- Del Congreso de la Unión reclamó la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro en lo concerniente a los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, así como sus consecuencias y efectos.
- Del Presidente de la República reclamó la publicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con sus consecuencias y efectos.
- Del Presidente de la República reclamó la publicación de la Ley General de Salud, con todas sus consecuencias y efectos.
- Del Secretario de Salud reclamó todos los acuerdos, órdenes, instrucciones, verbales o escritas que, como superior jerárquico impartió al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios para negar, bajo la apariencia de un desechamiento, la autorización sanitaria formulada para consumir marihuana con fines recreativos.
- Del Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios reclamó los actos de cumplimiento, observancia, trámite y ejecución por conducto de su subordinado el Director

Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas. También reclamó los actos que, de propio imperio, dictó, consistentes en las órdenes, instrucciones o acuerdos, proveídos o resoluciones giradas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para que, bajo la apariencia de un desechamiento, se negara la solicitud de autorización sanitaria para consumo personal con fines lúdicos de marihuana del promovente.

- Del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios reclamó los actos de cumplimiento de las órdenes dictadas por el Secretario de Salud o el Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Igualmente, reclamó los actos que de propia iniciativa haya realizado en la aplicación de los artículos impugnados en la emisión del oficio número [REDACTED] de ocho de julio de dos mil dieciséis con el que, bajo la apariencia de un desechamiento, negó la solicitud de autorización sanitaria para consumo personal con fines lúdicos de marihuana del promovente.
- De todas las autoridades, reclamó los actos tendentes a desconocer y vulnerar los derechos fundamentales inherentes a la persona como individuo libre y autónomo, en el contexto de una sociedad democrática, previstos en la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.

9. El quejoso señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio los previstos en los artículos 3, 5, 13, 14, 16 y 17, en relación con los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal. Igualmente, consideró infringido el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

10. **Resolución del juicio de amparo.** Por razón de turno, tocó conocer de la demanda de amparo al Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, donde fue registrada con el número [REDACTED]

11. El juzgador federal llevó a cabo la audiencia constitucional el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis. Dictó sentencia en el sentido de sobreseer sobre los actos impugnados excepto sobre el oficio [REDACTED] y los artículos 234, 235, 237, 245, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, negando el amparo sobre ellos.

12. **Recurso de revisión.** La parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia arriba indicada, mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil dieciséis, en el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México¹. En su escrito, el recurrente pidió remitir los autos originales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conociera del asunto.
13. El Presidente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió a trámite el recurso de revisión y ordenó su registro con el número de expediente [REDACTED]². Asimismo, sobre la solicitud del promovente de remitir los autos al Alto Tribunal, afirmó que se determinaría lo conducente una vez que se realizara el estudio del asunto³.
14. El trece de diciembre de dos mil dieciséis, Carlos Alberto Larios Bernal, delegado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Secretario de Salud, interpuso recurso de revisión adhesiva, mismo que fue admitido por acuerdo de Presidencia del Tribunal Colegiado de catorce de diciembre de dos mil dieciséis.
15. **Solicitud de reasunción de competencia** [REDACTED]. Por escrito presentado ante este Alto Tribunal el primero de diciembre de dos mil dieciséis, el autorizado del quejoso solicitó a esta Primera Sala que reasumiera su competencia originaria para conocer del amparo en revisión [REDACTED] del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Ante la falta de legitimación del promovente, la Ministra Presidente sometió la solicitud a consideración de

¹ Véase el expediente del recurso de revisión [REDACTED], del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, foja 3.

² Ibidem, foja 163.

³ Por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, el promovente volvió a solicitar el envío del asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación aduciendo los fundamentos que consideró pertinentes. Por su parte, el Presidente del Tribunal Colegiado mediante acuerdo de nueve de diciembre de dos mil dieciséis reiteró que se proveería lo conducente una vez que el Tribunal Colegiado realizara el estudio del asunto.

los Ministros integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte⁴ sin que ninguno de ellos hiciera suya la referida solicitud por lo que se determinó desecharla⁵.

16. **Reserva de jurisdicción.** Derivado de lo anterior, por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, el Tribunal Colegiado de mérito dictó resolución en la que analizó la legitimación de la parte recurrente principal y adhesiva, la oportunidad de la presentación de los recursos y determinó la firmeza de los sobreseimientos decretados por el Juez de Distrito. Asimismo, analizó el recurso de revisión adhesiva del Presidente de la República y Secretario de Salud en tanto en él se alegaban causales de improcedencia y determinó que éstas eran infundadas sin que apreciara distinta causa de improcedencia que ameritara análisis⁶.
17. Así las cosas, el Tribunal Colegiado afirmó que en el recurso de revisión principal y adhesivo subsistía el problema de constitucionalidad respecto de los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud. En vista de lo anterior, ordenó remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fundamento en el punto noveno del Acuerdo General 5/2013 en tanto, a su juicio, se actualizaba la jurisdicción original de este Alto Tribunal por no existir jurisprudencia sobre el tema por parte del Pleno o las Salas o tres precedentes en el mismo sentido de forma ininterrumpida.
18. El catorce de junio de dos mil diecisiete, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó asumir competencia originaria para conocer del recurso de revisión⁷ y turnó el expediente para su estudio al Ministro José Ramón Cossío Díaz. Por su parte, por acuerdo de dos de

⁴ Ibidem, p. 292.

⁵ Ibidem, p. 311.

⁶ El órgano colegiado relató las causales de improcedencia aducidas por las autoridades responsables y las analizadas por el Juez de Distrito (Ibidem, fojas 383 a 389 vuelta).

⁷ Véase el expediente en que se actúa, p. 143.

agosto de dos mil diecisiete la Presidenta de la Primera Sala ordenó el avocamiento del asunto⁸.

II. COMPETENCIA

19. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo vigente a partir del 2 de abril de 2013; 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 86 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con lo establecido en los Puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal el 13 de mayo de 2013. Lo anterior, toda vez que el recurso de revisión se interpuso en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que subsiste el alegato de inconstitucionalidad de los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud sin que exista aún jurisprudencia sobre dicha disposición.

III. OPORTUNIDAD

20. Resulta innecesario analizar la oportunidad del recurso de revisión principal y del recurso de revisión adhesiva que nos ocupa en virtud de que el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto ya se hizo cargo de tal aspecto, concluyendo que ambos fueron interpuestos de manera oportuna⁹.

⁸ *Ibidem*, p. 172.

⁹ Tal y como se advierte de la resolución del Tribunal Colegiado que previno en la revisión, visible en la foja 363 del amparo en revisión [REDACTED]

21. La interposición del recurso de revisión principal y adhesivo ha sido hecha por sujeto legitimado, en tanto es el propio quejoso del amparo indirecto cuya ejecutoria se recurre el que ha interpuesto este medio procesal y el delegado de dos autoridades responsables, quien ha hecho valer recurso de revisión adhesiva.

IV. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO

22. A fin de dar respuesta a la materia del presente recurso de revisión, es imprescindible hacer referencia a los cuatro conceptos de violación formulados en la demanda, a las consideraciones de la sentencia recurrida y a los agravios planteados en el recurso de revisión.
23. **Conceptos de violación.** La parte quejosa manifestó los siguientes conceptos de violación en la demanda de amparo:
- En el **primer concepto de violación** se alegó la vulneración de los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal por inobservancia de los artículos 3, 4, 13, 14 y 16 de dicho ordenamiento. Así, refirió que el artículo 1 constitucional establece la obligación de interpretar conforme a la Constitución toda norma de derechos y el principio pro persona como criterio rector interpretativo. De igual forma, manifestó la existencia del principio de supremacía constitucional que implica que los preceptos constitucionales deben verse como normas jurídicas y no hipérboles del lenguaje. Ante ello, refirió que los actos reclamados vulneraron su derecho a la dignidad humana, identidad personal, pluralismo, derechos de la personalidad, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación individual, libertad personal y corporal, seguridad jurídica, debido proceso y a una defensa adecuada y técnica.
 - En el **segundo concepto de violación**, refirió que los artículos 83, 84, 85, 86 y siguientes de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, vulneran los artículos 14, 16 y 17 constitucionales y, por ello, violentan el principio de supremacía constitucional previsto en los artículos 40 y 133 de la Constitución Federal. Así, adujo que dichos artículos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no configuran un procedimiento que respete plenamente el artículo 14 constitucional, es decir, el derecho a ser oído, a hacer valer razones y argumentos, controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y solicitar la práctica de pruebas que se estimen favorables dentro de plazos razonables. De igual forma, señaló que dichos artículos vulneran el artículo 8, apartado 1 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos y el artículo 29, incisos a) y b) de dicha convención.

- En el **tercer concepto de violación**, argumentó que los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 son violatorios de los derechos referidos en el primer concepto de violación. Adujo que el oficio de la COFEPRIS implícitamente aplicó la política prohibicionista contenida en los artículos impugnados de la Ley General de Salud. Lo anterior por considerar que el oficio impugnado, al requerir acreditar un interés jurídico, implícitamente aduce que el quejoso carece de un derecho a consumir cannabis. Además, sostuvo que el hecho de que las autoridades responsables reiteren que no existe una facultad para otorgar una autorización sanitaria sobre cannabis hace en realidad referencia a la norma que le impide hacerlo.
- Aunado a lo anterior, el quejoso refirió que los artículos impugnados de la Ley General de Salud conjuntamente establecen una política prohibicionista en torno al cannabis. Dicha prohibición categórica pretende disuadir el consumo de tal sustancia con el objetivo de proteger la salud personal y prevenir las adicciones.
- El quejoso sostuvo que dicha política prohibicionista vulnera el derecho a la identidad personal, pluralismo y dignidad humana. Tras transcribir los numerales de mérito y citar sentencias nacionales y de tribunales extranjeros, concluyó que el Estado no puede llevar a cabo acción alguna para suprimir las conductas que realice una persona para individualizarse en sociedad a menos que exista un interés superior para ello, cosa que no acontece en el caso concreto.
- Refirió que los numerales impugnados de la Ley General de Salud vulneran el derecho a la identidad, pluralismo y dignidad humana, pues el autoconsumo de marihuana es una proyección que hace una persona de sus preferencias y rasgos que lo identifican y diferencian del resto de personas. Por ello, la Ley General de Salud desconoce el verdadero ser social de la persona y niega su derecho a la diferencia. El quejoso refirió que el cannabis se consume por curiosidad, búsqueda espiritual, placer, aburrimiento, enajenación social e incluso por búsqueda de identidad; motivos todos que se orientan a la definición del propio yo. Precisamente ante ello, proscribir su uso implica negar y suprimir conductas que confieren al individuo una diferencia específica.
- Ahora bien, el quejoso sostuvo que, aun si se adujera que los derechos a la identidad personal, principio de pluralismo y dignidad humana no son absolutos, los límites establecidos por la política prohibicionista son inconstitucionales e ilegítimos.
- En ese sentido, refirió que a la luz del criterio de la Primera Sala¹⁰, dicha restricción no tiene una finalidad legítima, pues no puede permitirse

¹⁰ Citó la jurisprudencia 1a./J. 2/2012 (9a.), de rubro "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, p. 533.

coaccionar a una persona a gozar de buena salud contra su voluntad. En segundo lugar, refirió que la política prohibicionista no es instrumental o idónea para prevenir posibles riesgos a la salud o combatir adicciones ya que el número de consumidores ha aumentado en los últimos años y hay pruebas objetivas que muestran que despenalizar dicha sustancia no conllevaría a un aumento en su consumo. Aunado a ello, refirió que la política no es necesaria pues suprime más allá de lo estrictamente requerido los derechos involucrados y existen alternativas menos restrictivas para proteger la salud de los consumidores. Por último, refirió que la política prohibicionista no es proporcional pues genera más daños que beneficios.

- En la demanda de amparo se refirió que los artículos de la Ley General de Salud vulneran los derechos a la personalidad, libre desarrollo de la personalidad, propia imagen y dignidad humana. Tras citar numerosos fallos de la Suprema Corte señaló que el amparo en revisión [REDACTED] reconoció que el libre desarrollo de la personalidad protege el uso recreativo del cannabis. Argumentó que, a pesar de no ser ese fallo vinculante, los juzgados que resuelvan sobre dicha temática deben tomarlo en cuenta para resolver al tenor de tales argumentos los planteamientos sobre la política prohibicionista.
- Aunado a ello, afirmó que, inclusive si se adujera que los derechos a la personalidad, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana no son absolutos, estos límites deben evaluarse a la luz de la doctrina de la Suprema Corte. Dicho estándar no sería superado, refirió, a la luz del análisis que practicó anteriormente.
- Sostuvo que los artículos impugnados de la Ley General de Salud vulneran el derecho a la salud en su aspecto negativo, es decir, la potestad de disponer de la salud personal inclusive para no gozar de buena salud. Considerar lo contrario, adujo, implicaría conceptualizar a la buena salud como una obligación. Así las cosas, el legislador adoptó una postura paternalista por no permitir a los ciudadanos gozar de uno de los elementos fundamentales de su derecho a la salud, pues tratándose del consumo de cannabis los ciudadanos no cuentan con un derecho de elegir ejercer o no tal derecho. Afirmó que tal postura paternalista está basada en prejuicios y valoraciones morales y no en un estudio científico del daño.
- El quejoso argumentó que no puede considerarse que el proteger la salud de los gobernados sea un fin legítimo al amparo del cual el Estado pueda prohibir sustancias como la marihuana. Ello implicaría que sería legítimo prohibir el tabaco, el alcohol, el azúcar porque causa diabetes, el consumo de grasa por causar colesterol o la cafeína por causar dependencia. De nueva cuenta, inclusive si el derecho a la salud en su vertiente de no gozar de buena salud, no fuera absoluto, la restricción a dicho derecho no estaría justificada por no superar el test de proporcionalidad fijado por la Suprema Corte, como reiteró en su demanda.
- Afirmó el quejoso que la aplicación implícita de los artículos de la Ley General de Salud vulnera los derechos a la autodeterminación, libertad individual y dignidad humana. Tras aducir el contenido del derecho a la

autodeterminación, citó sentencias de diversos tribunales constitucionales que han interpretado dicho derecho. Sostuvo que, dado que la afectación por el consumo de cannabis sólo afecta directamente al consumidor, la prohibición que sobre ella pesa demuestra que el poder legislativo he impuesto sobre la persona concepciones particulares de la santidad del cuerpo humano y ha legislado en asuntos de conciencia, creencia, elección y autonomía personal. Señaló que dicha limitación no supera tampoco el estándar de proporcionalidad establecido por la Suprema Corte.

- El quejoso adujo que la aplicación de los artículos impugnados no supera los exámenes de escrutinio formulados por la Suprema Corte para analizar restricciones a los derechos fundamentales. Así, después de transcribir diversas tesis de este tribunal afirmó que la restricción contenida en la Ley General de Salud no persigue un fin legítimo porque la finalidad de proteger la salud contra la voluntad de la persona o combatir las adicciones no encajan en esta categoría. En segundo lugar, sostuvo que la medida no es instrumental pues, citando numerosas publicaciones y estudios, la prohibición no es un medio para mejorar la salud, la descriminalización del consumo de marihuana no generaría mayor consumo, el consumo de marihuana no genera un daño a la salud sino un mero riesgo de daño a la salud. Adujo que la medida prohibicionista no es la alternativa menos gravosa pues existen diversas alternativas menos restrictivas como el modelo holandés (en que se restringe los lugares donde se puede consumir y comprar cannabis), el modelo uruguayo (en donde hay un modelo mixto de producción e inspección estatal), el modelo del tabaco y alcohol (régimen de permisión controlada), las políticas educativas y de salud y las prácticas focalizadas de reducción del daño.
- Así, manifestó que la política prohibicionista es sobreinclusiva en tanto restringe situaciones más allá de las específicamente requeridas para evitar generar un daño a la salud. Mencionó que existen cuatro riesgos comunes asociados al consumo de cannabis: aumento de probabilidad de sufrir desórdenes respiratorios, riesgo de generar dependencia, riesgo de síntomas psicóticos y riesgo de generar accidentes si se maneja bajo su influjo. Citando diversos estudios científicos entró al análisis de cada uno de estos cuatro riesgos comunes para demostrar que, a su juicio, hay alternativas menos restrictivas a la política prohibicionista absoluta.
- Además, recalcó que la medida no es proporcional en tanto la política prohibicionista no sólo no aporta un beneficio para el combate de las adicciones y procuración de la salud, sino que genera un riesgo latente a la salud, seguridad e integridad personal de los consumidores y sus familias. Citando diversos estudios, refirió que existe un incremento del riesgo de ser víctima de un delito, riesgo que se ha identificado con la política prohibicionista. En segundo lugar, afirmó que se ha generado un mercado negro con efectos nocivos para los consumidores y la población.
- En la última parte, el quejoso refirió que no pasaba desapercibido que el artículo 478, en relación a la tabla del artículo 479, ambos de la Ley General de Salud, excluyen del delito la posesión de cinco gramos o menos. Sin embargo, precisó que tal exención no es suficiente porque un cigarrillo o

porro contiene aproximadamente .75 gramos de cannabis con lo cual existe la permisión de proteger aproximadamente 6 cigarrillos, cantidad que no está justificada científica o racionalmente.

- En su **cuarto concepto de violación** el quejoso adujo que los actos de la COFEPRIS vulneran el derecho a la igualdad reconocido en los artículos 1 y 13 constitucionales. Tras citar doctrina y transcribir varias fojas de jurisprudencia, afirmó que la COFEPRIS quebrantó el derecho a la igualdad pues respecto a él se desechó su solicitud de autorización, mientras que respecto a otras personas físicas¹¹ se atendió su petición sin mayores requisitos y se les negó dicha petición.
- En el **quinto concepto de violación** adujo que se vulneró el derecho al debido proceso, legalidad, competencia y seguridad jurídica en relación con los artículos 1 y 133 constitucionales. Así, refirió que la COFEPRIS se encontraba obligada a respetar el derecho al debido proceso con independencia de lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Estableció que, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre formalidades esenciales del procedimiento, se le debieron haber notificado las actuaciones realizadas por la responsable una vez iniciado el trámite del desahogo de la prevención. Aunado a ello, sostuvo que no se mencionó en qué consiste el parámetro de satisfacción, ni el porqué de la inclusión de los términos "interés jurídico" e "interés legítimo", la razonabilidad en el empleo de ambos y por qué dejó de tomar en cuenta la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades propias de uno y otro interés.
- En ese sentido, señaló que el artículo constitucional es de aplicación preferente e inmediata respecto de lo que disponga cualquier norma. En ese sentido, señaló como insuficiente la simple prevención que se le dio al quejoso mediante oficio de dos de marzo de dos mil dieciséis, pues ésta no cuenta con los elementos suficientes para respetar el derecho al debido proceso, máxime que las autoridades pidieron acreditar el nebuloso concepto de "interés jurídico" e "interés legítimo". Agregó que el hecho de que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no regule nada acerca de la forma de llevar a cabo dicha prevención, no implica que pueda ser realizada de forma arbitraria o caprichosa, sino que debe realizarse en un ejercicio racional respetuoso de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 14, 16 y 17. Así, argumentó que se vulneró el debido proceso en tanto no tuvo oportunidad de ofrecer pruebas, objetar documentos, formular alegatos ni fue oído ni vencido, lo que sostuvo que lo dejó en estado de incertidumbre jurídica. Estimó que la resolución no estuvo fundada ni motivada pues la COFEPRIS a) solicitó extemporáneamente la acreditación del interés al promovente; b) negó que tuviera un derecho para solicitar el consumo de cannabis; c) trasgredió su derecho constitucional de petición; d) desechó la solicitud con sustento en información solicitada fuera de tiempo y e) ninguno de los preceptos legales que citó le atribuyen competencia

¹¹ Expresamente mencionó el caso de [REDACTED] y la persona moral [REDACTED]

expresa para emitir los actos combatidos. Desarrolló pormenorizadamente los cinco puntos mencionados con anterioridad.

24. **Sentencia de Amparo.** El Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa **sobreseyó** sobre los actos impugnados excepto sobre el oficio [REDACTED] del ocho de julio de dos mil dieciséis y los artículos 234, 235, 237, 245, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, negando el amparo sobre ellos. Para justificar lo anterior ofreció los razonamientos siguientes:

- Al precisar los actos señaló que, aunque el quejoso no identificó expresamente los artículos 234, 368 y 479 de la Ley General de Salud, vertió argumentos para demostrar su inconstitucionalidad, por lo que los tuvo como impugnados.
- Ahora bien, el juzgador federal **sobreseyó** el juicio en lo que respecta al Secretario de Salud en lo que concierne a las órdenes verbales o escritas a la COFEPRIS. También **sobreseyó** por no ser ciertos los actos reclamados al Comisionado Federal consistentes en la ejecución de las órdenes del Secretario de Salud y en la emisión de las órdenes verbales o escritas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas. De igual forma, **sobreseyó**, por no ser ciertos, los actos del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas consistentes en la ejecución de las órdenes verbales o escritas anteriormente mencionadas.
- Ahora bien, respecto del oficio [REDACTED] el Juzgador consideró que el juicio de amparo era improcedente en cuanto existía un juicio de amparo [REDACTED] que tenía tal oficio precisamente como acto reclamado. En ese sentido, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa dictó sentencia en el sentido de sobreseer y negar el amparo; ejecutoria que fue impugnada en recurso de revisión registrada bajo el número [REDACTED] del índice del Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que aún se encuentra pendiente de resolución.
- Por otro lado, oficiosamente advirtió la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en cuanto a los artículos 83 a 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo toda vez que fueron reclamados con motivo de su primer acto de aplicación sin que se desprenda que fueron aplicados. En ese sentido, el Juez de Distrito sostuvo que las normas impugnadas establecen las reglas del procedimiento administrativo del recurso de revisión sin que del oficio impugnado [REDACTED] se desprenda que se aplicaron ni explícita ni implícitamente por lo que **sobreseyó** el juicio de amparo.
- Finalmente, advirtió de oficio que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 108,

fracción III, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, dado que al Presidente de la República únicamente se le reclamó la publicación de las normas referidas sin hacer alusión a vicios propios, sostuvo que procedía **sobreseer** conforme a los numerales de mérito.

- Una vez apreciadas las causas de improcedencia y de sobreseimiento respectivas, el juzgador federal precisó que, si bien el acto reclamado lo constituye un desechamiento de la solicitud de autorización sanitaria por no haber acreditado el interés y por no tener la autoridad facultades para ello, lo cierto es que dicha negativa implícitamente se sustenta en los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud. Así, el juzgador señaló que los conceptos de violación están dirigidos a combatir el sistema normativo de restricciones de carácter administrativo del cannabis.
- Tras explicar las implicaciones y objetivos del sistema prohibicionista, afirmó en la sentencia que el sistema normativo impugnado implica el ejercicio de la facultad del legislador federal en lo relativo a la prevención del consumo y control sanitario de estupefacientes y psicotrópicos, lo que hace evidente que el tema que se analiza no conlleva el análisis de un derecho aislado sino involucra un aspecto de suma importancia como la salud pública.
- El juez refirió que la protección de la salud es un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos de acuerdo a la Constitución y tratados internacionales. Ahora bien, sostuvo que la salud no sólo tiene una proyección individual y personal, sino también una dimensión pública o social. Respecto de esta última faceta, afirmó que el derecho a la salud se traduce en un deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad y establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a la salud. Adujo que lo anterior obliga al Estado a emprender acciones necesarias para alcanzar tal fin como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad, etc. Por ello, aseveró que la Ley General de Salud identifica el consumo de marihuana como un problema de salud pública y en tal virtud ha establecido el sistema normativo mencionado.
- En consecuencia, adujo que no debía perderse de vista que el modelo adoptado por la Constitución es el del Estado regulador, en el cual es posible imponer limitaciones a derechos en aras de alcanzar fines de política pública siempre que éstas sean razonables. Señaló que, como parte de las obligaciones estatales en materia de salud, el Estado mexicano ha celebrado tratados internacionales que regulan el régimen de fiscalización de estupefacientes y psicotrópicos. Agregó que son ejemplo de lo anterior la Convención Única sobre Estupefacientes de mil novecientos sesenta y uno, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de mil novecientos setenta y uno y la Convención de las Naciones Unidas en contra del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de mil novecientos ochenta y ocho. Las dos primeras convenciones incluyen al cannabis en su lista de sustancias. Ahora bien, afirmó que tales disposiciones convencionales tienen por objeto tipificar las medidas de control aplicables a nivel internacional con

el fin de garantizar la disponibilidad de sustancias psicoactivas para fines médicos y científicos.

- Una vez realizado lo anterior, reseñó diversos precedentes de la Suprema Corte en que se ha dado contenido al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entre dichos precedentes, señaló que el amparo en revisión [REDACTED] resuelto por la Primera Sala, precisó que las acciones o actividades necesarias para consumir marihuana implicaban ejercer el derecho a decidir qué actividades recreativas o lúdicas se desean realizar por lo que incide u obstaculiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
- Sin embargo, refirió también que la propia Suprema Corte ha señalado que los derechos humanos no son absolutos y que pueden ser restringidos o encontrar límite en el respeto de los derechos de los demás y el orden público. Empero, dichas restricciones deben ser bajo las condiciones y casos que establece la propia Constitución¹². En razón de lo anterior, el juzgador corrió el test de restricciones a los derechos fundamentales estimando, al igual que en el amparo en revisión [REDACTED] que los preceptos impugnados perseguían la protección de la salud y el orden público. Adujo que al igual que lo apreció la Primera Sala en el amparo en revisión [REDACTED], tales finalidades son constitucionalmente válidas.
- En cuanto a la idoneidad de la medida, sostuvo que, siguiendo el análisis de la Primera Sala en el amparo en revisión [REDACTED], no existe evidencia científica concluyente en el sentido de que el consumo de la marihuana cause afectaciones graves a la salud, pero sí datos de los que se desprende que tal sustancia ocasiona daños de menor grado a la salud y orden público, información que coincide con los datos aportados por la autoridad responsable, en el sentido de que el cannabis entraña un riesgo muy bajo de causar la muerte, pero que la intoxicación con dichas sustancias puede generar riesgo de ansiedad, deterioro de la atención y memoria, historia, etc. Ante ello, concluyó que las normas reclamadas sí contribuyen en algún modo y algún grado a lograr el propósito buscado por el legislador, por lo que se concluyó que la medida era idónea.
- Respecto a la necesidad de la medida, refirió que la política prohibicionista persigue la finalidad constitucionalmente imperiosa de garantizar positivamente la salud. Por ello, desde ese punto de vista, la determinación de la existencia de una medida alternativa que restrinja en el menor grado posible el libre desarrollo de la personalidad no puede ni debe centrarse de manera exclusiva en dicha libertad individual, pues debe considerarse que las normas pretenden dar eficacia a la dimensión social que tiene la protección de la salud que impone al Estado el deber de atender los problemas de salud, entre los cuales se consideró estaba el consumo de marihuana.

¹² Refirió a la metodología asentada en la jurisprudencia 1a./J. 2/2012 (9a.), de rubro "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, libro V, Febrero de 2012, p. 533.

- En ese sentido, el juzgador estimó que no existía una medida igualmente idónea ni menos restrictiva que la política prohibicionista, pues si el consumo de marihuana se ha identificado como un problema de salud pública, resulta justificada la intervención estatal, máxime que el objetivo más amplio de dicha política es impulsar la protección de todos los mexicanos. Así refirió que, no obstante la Suprema Corte en el amparo en revisión [REDACTED] hubiera sostenido que existían medidas menos restrictivas, no era posible tomar dichas medidas como alternativas. Ello porque, si se le otorgara al quejoso la autorización para el desarrollo de las actividades pretendidas, se le estaría permitiendo el ejercicio de un derecho sin mayores lineamientos para ello y, con los posibles riesgos que implicaría a los derechos de terceros, al no existir un marco regulatorio, administrativo y legislativo que establezca modalidades para su ejercicio.
- Aunado a ello, afirmó que, incluso en el caso de una eventual concesión de amparo para dicha autorización sanitaria, ello no sería una reparación efectiva pues se dejaría al promovente en completo estado de inseguridad jurídica, pues excluyó de su solicitud los actos de comercio y la adquisición misma de marihuana. De tal suerte, afirmó que, para poder tener los beneficios de la autorización respectiva, sería necesaria la comisión de diversos delitos previstos en normas punitivas de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal que no formaron parte de la impugnación del quejoso.
- Finalmente, en cuanto a la proporcionalidad de la medida, afirmó que, dado que el sistema permite un consumo de cinco gramos del estupefaciente, dicha restricción no afecta desmedidamente la libertad del quejoso para consumir la sustancia.
- Por otro lado, en cuanto a la vulneración del derecho a la igualdad en tanto la solicitud del promovente fue desechada y otras fueron negadas, el juzgador afirmó que se partía de la premisa planteada por el propio promovente de que el desechamiento de la solicitud se trataba de una negativa implícita. Lo anterior se corroboró por el hecho de que la forma en que la autoridad contestó las solicitudes fue afirmando que, hasta el momento, no estaba contemplada la posibilidad de otorgar autorización alguna para llevar a cabo tales actos. Por ello, afirmó que si se establece que la autoridad sanitaria sustentó su dicho en la misma razón y se está en presencia de una negativa implícita, es infundado el concepto respectivo.
- Finalmente, respecto a la vulneración del oficio a los derechos al debido proceso, legalidad, competencia, seguridad jurídica y audiencia, la sentencia refirió que, de la copia certificada de la solicitud que obra en el expediente se advierte que fue notificado de todas las actuaciones a fin de darle una respuesta. Por otro lado, en la sentencia se observó que efectivamente la autoridad responsable informó al quejoso las razones por las cuales desechó la solicitud de autorización sanitaria. Asimismo, determinó inoperantes las consideraciones del quejoso respecto a que la autoridad responsable lo previno fuera del plazo establecido por ley, porque dichas consideraciones se realizaron en el oficio [REDACTED] respecto del cual se sobreseyó por ser materia de diverso juicio de amparo.

- Aunado a ello, declaró infundado el alegato de la vulneración al derecho de petición pues tal derecho encuentra satisfacción ante una respuesta de la autoridad, independientemente de si ha sido favorable a los intereses del solicitante. Por ello, aun cuando la respuesta de la autoridad fue implícitamente negativa, fue respetuosa del derecho de petición del quejoso.
- En virtud de las anteriores consideraciones el juzgador determinó sobreseer el juicio de amparo en los términos explicados y negar la protección de la justicia federal.

25. **Recurso de revisión.** En su recurso de revisión, el recurrente hace valer los siguientes agravios:

- En su **primer agravio** el recurrente aduce que se vulneraron los artículos 74, fracción III, de la Ley de Amparo, 222 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al texto del numeral 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, afirma que el juez federal guardó silencio respecto al acervo probatorio y omitió valorar las pruebas como un bloque armónico y bajo los parámetros de sencillez y efectividad.
- En su **segundo agravio** afirma que se vulneraron los principios de fundamentación y motivación, congruencia y exhaustividad en relación al concepto de violación tercero relativo al derecho a la propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana. De tal suerte, el recurrente aduce que en su demanda de amparo sostuvo que la política prohibicionista establecida en los artículos de la Ley General de Salud impugnada vulnera los derechos a la personalidad, propia imagen, intimidad, **libre desarrollo de la personalidad** y, en general, dignidad humana.
- En esa línea, el recurrente retoma las consideraciones realizadas en su demanda de amparo para enunciar nuevamente el alcance del derecho al **libre desarrollo de la personalidad** a la luz de las mismas sentencias que había citado en su demanda de amparo. Refiere que el amparo en revisión [REDACTED] resuelto por la Suprema Corte es un caso idéntico al actual por lo que los juzgados y tribunales deben resolver al tenor de los argumentos empleados en éste. Afirma que los artículos impugnados de la Ley General de Salud se basan en un perfeccionismo estatal que es incompatible con la Constitución por exigir que el individuo debe ser quien elija de forma libre e informada, su proyecto de vida, así como la manera en que logrará sus metas y objetivos.
- Disiente de la justificación que el Juez de Distrito realiza de las restricciones de la norma a los derechos fundamentales de la persona. En primer término, aduce que el Juez de Distrito trivializó el objetivo de la política prohibicionista al sostener que ésta tiene por finalidad la protección de la salud y del orden público. A juicio del recurrente, la verdadera finalidad de la política prohibicionista es "proteger la salud de los particulares contra su voluntad y

sancionar a los usuarios de cannabis", lo que es contrario a los derechos humanos.

- En segundo término, afirma que el Juez de Distrito no llevó a cabo un análisis de la instrumentalidad de la medida para determinar si ésta es útil a su finalidad, pues se limita a analizar si el cannabis genera un potencial daño a la salud, lo que resulta inconexo e irrelevante al examen de idoneidad.
- En tercer término, afirma que el Juez de Distrito no llevó a cabo un análisis de la necesidad de la medida, sino que se limitó a repetir que el objetivo de es importante.
- En cuarto término, aduce que el Juez de Distrito señaló que los artículos impugnados permitían el consumo de cannabis siempre y cuando fuera de menos de cinco gramos. Sin embargo, señala que el artículo 479 de la Ley General de Salud no permite el consumo, sino que contempla una excluyente de responsabilidad. Agrega que el Juez de Distrito omitió llevar a cabo un examen de proporcionalidad en sentido estricto de la política prohibicionista porque no tomó en cuenta que genera una afectación innecesaria o desmedida a derechos constitucionalmente protegidos.
- En su agravio tercero sostiene que el Tribunal Colegiado no cumplió con los principios de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad. Aduce que en su demanda de amparo alegó que la restricción de la política prohibicionista a los derechos a la autodeterminación, libertad individual y corporal, **libre desarrollo de la personalidad**, identidad personal y disposición de la salud propia no superaba los exámenes de escrutinio y proporcionalidad establecidos por la Suprema Corte.
- Refiere que el Juez de Distrito omitió dar respuesta a cada una de las razones por las que el quejoso dijo que la política prohibicionista no superaba los exámenes de escrutinio y proporcionalidad. Además, señala que aplicó dicho test con total laxidad y deferencia hacia el legislador. Por ello, procede a analizar los pasos del test de restricciones a derechos constitucionales.
- En primer término, refiere que la forma en que el Juez de Distrito definió el objetivo de la política prohibicionista es sumamente abstracto y hubiera permitido justificar las políticas más deleznales de la humanidad bajo una finalidad legítima¹³. Por ello, reitera que la verdadera finalidad de la medida es proteger la salud de todo particular en contra de la voluntad de éstos. Sostiene que la anterior no es una finalidad legítima porque implica partir de la base de que el individuo no tiene la capacidad racional de disponer de su propio cuerpo, su mente y su persona.
- En segundo término, aduce que el Juez de Distrito no analiza correctamente la adecuación de la medida. Sostiene que los argumentos que formuló el juez están más bien relacionados con el requisito de finalidad legítima. El

¹³ El recurrente procedió a justificar políticas negativas (esclavitud en Estados Unidos de América, Apartheid en Sudáfrica o Campos de Exterminio en la Segunda Guerra Mundial) con un alto nivel de abstracción para demostrar que, en su opinión, con dicha lógica podría justificarse todo.

recurrente reitera los siguientes argumentos de su demanda de amparo: a) la prohibición no es un medio para mejorar la salud; b) la descriminalización del consumo de marihuana no aumenta el consumo; c) el consumo no genera un daño a la salud sino un mero riesgo de daño a la salud¹⁴.

- El recurrente estima que el Juez de Distrito incurrió en un error pues en la solicitud formulada por el quejoso sí solicitó permiso para importar y adquirir la semilla del cannabis. También refiere que el juez adujo que se podrían producir daños a terceros en caso de conceder el amparo, pero que esa afirmación no está basada en estudios científicos o sustento empírico, por lo que debe de estar basada en prejuicios sociales y conjeturas sin sustento empírico. Además, sostiene que las pruebas ofrecidas demuestran que el consumo personal y razonado de cannabis no afecta derechos de terceros.
- El recurrente reitera que la política prohibicionista no es la alternativa menos restrictiva. Al respecto refiere que existen modelos menos restrictivos como el holandés, el uruguayo, el del tabaco y alcohol, las políticas educativas y de salud y las prácticas focalizadas en la reducción de daño.
- Aduce que la medida restringe más de lo necesario los derechos de autodeterminación, **libre desarrollo de la personalidad**, identidad personal, libertad individual y disposición sobre la salud personal. Con base en un informe elaborado por la Fundación Beckley sostiene que es posible apreciar que existen varios riesgos asociados al consumo de cannabis. Transcribe íntegramente las consideraciones de su demanda de amparo respecto de por qué la prohibición no es proporcional en torno a dichos riesgos pues restringe los derechos relativos más allá de lo necesario.
- En relación al requisito de proporcionalidad en sentido estricto, aduce que la política prohibicionista no aporta un beneficio a la procuración de salud y combate de las adicciones y genera un riesgo latente a la salud y seguridad de los consumidores de cannabis y sus familias. Afirma que son ejemplos de lo anterior los daños a la salud ocasionados por la prohibición; el riesgo de ser lastimado o de perder la vida y la generación de un mercado negro con efectos nocivos para la población¹⁵.
- Respecto a la afirmación del Juez de Distrito de que la política prohibicionista es proporcional porque no sanciona a las personas que consumen menos de 5 gramos de cannabis, sostiene que en realidad el artículo 478, en relación al 479 de la Ley General de Salud, únicamente contiene una eximente de responsabilidad y no una autorización para su consumo. Además, argumenta que la despenalización del consumo de hasta 5 gramos no resuelve el problema para los consumidores, pues deben recurrir a un mercado ilegal o bien producirlo. Explica que si sembrara una planta de marihuana, ésta generaría más de 5 gramos haciéndolo acreedor a la sanción penal.
- Respecto al argumento del Juez de Distrito de que la prohibición es proporcional porque la ausencia de la política prohibicionista no permitiría

¹⁴ Citó literatura científica para apoyar su dicho.

¹⁵ Soporta su dicho con citas bibliográficas.

lograr los propósitos del legislador, el recurrente aduce que dicho argumento no está relacionado con la proporcionalidad de la medida. Indica que el juzgador confundió las razones propias del requisito de adecuación con las razones del requisito de proporcionalidad. En todo caso, sostiene que no se ofrecieron pruebas que acrediten la adecuación de la medida.

- En su **cuarto agravio** señala que, no obstante haber argumentado que era titular del derecho a la identidad personal y de pluralismo, el Juez de Distrito injustificadamente se limitó a aducir que tales derechos forman parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, argumenta que tales derechos tienen una fuente distinta y deben ser objeto de un trato diferenciado, por lo que la sentencia es omisa en pronunciarse sobre ellos.
- Refiere que el consumo de cannabis y la alteración del estado anímico se lleva a cabo por una pluralidad de motivaciones, entre ellas la curiosidad, búsqueda espiritual, placer, enajenación social y búsqueda de identidad. Por ello, sostiene que proscribir el consumo implica no sólo proscribir el uso de una sustancia particular, sino también la supresión de conductas que confieren al individuo una diferencia específica. De tal suerte, el recurrente refiere que dicha prohibición no supera un examen de proporcionalidad al tenor de las consideraciones que expresó en su tercer agravio.
- En su **agravio quinto**, afirma que a pesar de que adujo una vulneración del derecho humano a la disposición de la salud personal, el Juez de Distrito hizo caso omiso sosteniendo sin más que tal derecho quedaba comprendido en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ante lo anterior, transcribe las razones esgrimidas en su demanda de amparo para considerar que, inclusive si el derecho a la salud propia no es absoluto, la limitación de la política prohibicionista es una restricción ilegítima.
- En su **agravio sexto**, refiere que en su demanda de amparo alegó que la aplicación de la política prohibicionista vulneraba su derecho a la autodeterminación, libertad individual y dignidad humana. Sostiene que, no obstante lo anterior, el Juez de Distrito hizo caso omiso a las argumentaciones y sostuvo sin más que tales derechos quedaban comprendidos en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En vista de lo anterior transcribe íntegramente las partes de su demanda de amparo relativas a la titularidad del derecho a la autodeterminación, el alcance de dicho derecho y la violación al derecho a la autodeterminación por la política prohibicionista. Concluye sosteniendo que en su tercer agravio formula un análisis detallado sobre por qué no se superara el test de proporcionalidad y escrutinio y refiere hacer una síntesis de tal agravio.
- En su **séptimo agravio**, aduce que las autoridades responsables vulneraron en su detrimento el derecho de legalidad y seguridad jurídica pues sin fundamento y motivo justificado resolvieron desfavorablemente su solicitud de consumo personal. Sostiene que en el oficio impugnado no se fundó la facultad para solicitar extemporáneamente que se acredite el interés del quejoso dentro del procedimiento administrativo. Así, estima que el Juez de Distrito indebidamente determinó inoperantes dichos argumentos que formaron parte de sus conceptos de violación porque la extemporaneidad de

tal oficio es relevante a la *litis* planteada. Argumenta que la COFEPRIS contestó casi diez meses después de que el quejoso hubiera realizado tal solicitud por lo que dicha respuesta es extemporánea.

- Aunado a lo anterior, aduce que el oficio que niega la autorización pretendió resolver desfavorablemente dicha solicitud con base en la información adicional solicitada en el oficio de prevención. Sostiene que ello vulnera el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo del cual se desprende que la autoridad únicamente puede solicitar el cumplimiento de requisitos adicionales dentro del primer tercio del plazo para que se dé respuesta el trámite. A su vez, señala que el tercer párrafo de dicho artículo establece que, si se violó el plazo para solicitar requisitos adicionales, no se puede resolver desfavorablemente el trámite por insuficiencia de tal información. Refiere, además, que el oficio de negativa se funda en más requisitos que los establecidos en la normatividad vigente, pues se le exigió acreditar el "interés jurídico o legítimo".
- En su **agravio octavo**, argumenta que se vulneraron los principios de fundamentación y motivación, congruencia y exhaustividad, en relación a su concepto de violación sobre igualdad. Reitera que enfrentó una patente desigualdad por parte de la COFEPRIS pues a las personas que refirió en su demanda de amparo se les negó la autorización mientras que al quejoso se le desechó. Si bien es cierto que en ambos casos se aplicaron los artículos de la política prohibicionista, afirma que el trato entre ambos no es equitativo. A diferencia del caso de [REDACTED] afirma que a él se le aplicó implícita y no explícitamente la política prohibicionista, se le previno para que diera información adicional y tuvo una respuesta definitiva con muchos meses de diferencia.

26. **Recurso de revisión adhesivo.** En su escrito, el delegado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de la Secretaría de Salud aduce los motivos por los cuales considera que el recurso de revisión principal es improcedente (argumentos que ya fueron analizados por el Tribunal Colegiado que previno del asunto, como se dará cuenta más adelante), así como razones de fondo con miras a fortalecer la resolución del Juzgado de Distrito. Sobre éstas últimas, refiere esencialmente lo siguiente:

- En su **primer agravio adhesivo** refiere que los agravios del recurrente segundo a sexto son infundados e inoperantes. Sostiene que en el caso particular el cannabis se encuentra restringido por ley pues las autoridades en materia de salud tomaron la medida de prohibir dicha sustancia para proteger el derecho a la salud. Señala que una de estas acciones puede ser el desarrollo de políticas públicas y otra el establecimiento de controles legales. Además, afirma que la parte quejosa no acreditó con medio alguno que los artículos impugnados no protejan ni promuevan la salud de las personas y que el uso de dicha sustancia constituya un medio más seguro para proteger la salud de las personas.

- Por otro lado, argumenta que la quejosa omitió exhibir constancias para acreditar su dicho, por lo que no acredita su interés jurídico o legítimo en tanto no acreditó que el consumo lúdico que pretende no cause afectación a terceros. Es decir, si la parte quejosa refirió que el consumo lúdico que pretende sólo generaría un perjuicio a su persona, de ello no se sigue que efectivamente sea cierto que se ubique en el supuesto de prohibición. Por ello, argumenta que su situación particular es la de una simple expectativa de derecho de la que quisiera gozar el quejoso, sin embargo, ello no es lícito de conformidad con los artículos impugnados de la Ley General de Salud. Sostiene que el quejoso no puede pretender que en el juicio de amparo se tutelen sus intereses particulares por encima de los intereses públicos o de la comunidad.
- Argumenta que no es correcto pretender basar la inconstitucionalidad de una norma obligatoria en situaciones hipotéticas o particulares de la quejosa dada la característica de generalidad con que cuentan las leyes o normas administrativas. Además, refiere que los agravios de la parte recurrente son inoperantes porque sólo reiteran las manifestaciones que vertió en su escrito inicial de demanda.
- En su **agravio segundo**, la recurrente adhesiva sostiene que son infundados los agravios segundo a sexto y octavo al sostener que las restricciones impuestas por la Ley General de Salud no superan el estándar de restricciones de la Suprema Corte.
- De tal suerte, refiere que la restricción contenida en los numerales de mérito de la Ley General de Salud busca un fin legítimo como es la protección de la salud y la protección de la salud de niños y niñas como sector vulnerable de la población. Estima que dichas restricciones son necesarias para obtener tales fines en tanto está demostrado científicamente que los efectos del cannabis son perjudiciales a la salud física y psíquica de las personas, por lo que prohibir su consumo se encuentra justificado válidamente. De conformidad con el Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), el estímulo de receptores de cannabinoides puede dar lugar a: sensación de euforia; sedación y relajación; alteraciones de la percepción temporal; actividad analgésica y antiinflamatoria; actividad orexígena y antiemética; ataxia y debilidad muscular; disminución de la presión intraocular; hipotermia; broncodilatación; hipotensión y taquicardia; efectos neuroendócrinos; immunoestimulación a dosis baja e inmunosupresión a dosis altas y efectos antiproliferativos. Sostiene que estas respuestas atentan a la integridad personal y van en detrimento del nivel de vida de la persona. Por ello, sostiene que la ley debe prohibir el consumo de dicha sustancia para lograr los fines del Estado social de derecho y evitar que se vulnere la dignidad humana.
- Refiere que la prohibición es proporcional porque el grado de restricción es sobradamente recompensado por los efectos benéficos que tiene desde una perspectiva preocupada en garantizar la salud de la población en general y en especial la de los menores de edad. De tal suerte, cita estudios del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Directora de Vinculación y

Coordinación Operativas del Consejo Nacional Contra las Adicciones en que, opina, se demuestran los efectos adversos producidos por el consumo de estupefacientes.

- Aunado a lo anterior, refiere que debe considerarse que el derecho a la protección de la salud y al medio ambiente son garantías que la Constitución Federal prevé para todo individuo y que no pueden suspenderse ni restringirse. Sostiene que el consumo de cannabis es grave y en México el 7% de las muertes son atribuibles al consumo de cannabis, según datos del Consejo Nacional Contra las Adicciones. Afirma que el uso de productos de cannabis es uno de los problemas más importantes de salud pública del mundo, causando mortalidad y discapacidad prevenibles. Señala que el humo de cannabis o THC de segundo mano es una grave amenaza para la salud de los no fumadores expuestos, causando enfermedades graves a los adultos y, en particular, a los niños. Por último, indica que la mayoría de los fumadores comienzan a fumar a una edad muy temprana sin ser conscientes del grado y naturaleza del daño causado por los productos de cannabis y que debido a las propiedades adictivas de ese y otros componentes son a menudo incapaces de dejar de fumar aun cuando estén sumamente motivados a hacerlo.
- El recurrente adhesivo sostiene que en muchos países se ha tratado de usar marihuana o THC con fines médicos sin que hasta la fecha se haya demostrado la efectividad que tienen los tratamientos en comparación con los fármacos habituales.
- Ahora bien, aduce que los derechos que invoca la quejosa son derechos circunscritos única y exclusivamente en relación con el ser humano como persona física. Argumenta que dichos derechos no pueden estar por encima de los derechos de la colectividad y grupos vulnerables. Además, sostiene que el quejoso no es titular de los derechos fundamentales que afirma se trasgreden en su perjuicio porque éstos son personalísimos y de tipo subjetivos inherentes a la naturaleza humana¹⁶. Dado que el quejoso no es titular de los derechos fundamentales absolutos que considera se trasgreden, considera que sus motivos de disenso son inoperantes.
- Refiere también que no hay una prohibición como tal de consumir cannabis en tanto existe en el artículo 479 de la Ley General de Salud la permisión de consumir hasta cinco gramos. Afirma que el objeto de la Ley General de Salud es la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos por lo que la constitucionalidad de los artículos impugnados no puede depender de la situación personal del quejoso al tratarse de una norma general, impersonal y abstracta que pretende contribuir al ejercicio de las capacidades de las personas, la mejora de su calidad de vida y contribuir al desarrollo social.
- Por otro lado, sostiene que la prohibición contenida en los artículos impugnados no es arbitraria ni caprichosa, no constituye una intromisión a su

¹⁶ Al tenor de la tesis P. LXVII/2009, de rubro "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, p. 7.

derecho a la intimidad dado que no se le obliga a revelar aspectos de su vida no conocidos por otro, ni interfieren en el poder de decisión del quejoso sobre datos relativos a su persona. Argumenta que tampoco se limita el derecho al libre desarrollo de la personalidad del quejoso pues no se limita su habilidad de escoger su apariencia persona, su profesión o actividad laboral ni la forma en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida. Señaló que la Ley General de Salud tiene como finalidad dar cumplimiento a la obligación del Estado de proteger la salud de toda persona en términos del artículo 4º constitucional, por lo que no se observa que vulnere o limite los derechos mencionados.

- Sostiene que la restricción es válida pues el Estado tiene la obligación positiva de tomar todas las medidas pertinentes para tutelar y hacer eficaz el derecho a la salud, máximo que no existe un derecho fundamental al consumo de marihuana por lo que la restricción es constitucionalmente válida. Considera que dicha restricción es además ajustada al principio de menor restricción pues todos los habitantes del país no requieren consumir cannabis y sí, por el contrario, necesitan que se garantice su derecho a la salud. Manifiesta que el artículo primero constitucional establece la obligación de proteger los derechos establecidos en la Constitución federal y tratados internacionales. Entre dichos derechos se encuentra el derecho a la salud.
- En su **agravio adhesivo tercero** sostiene que el agravio primero de la quejosa recurrente es infundado al establecer que no se valoraron los medios de convicción pues el Juez de Distrito sí realizó tal valoración, haciendo referencia incluso a los criterios citados por el quejoso como aplicables al caso concreto.
- Por último, en su **agravio adhesivo cuarto** aduce que el agravio séptimo de la quejosa recurrente es infundado. Ello en tanto la Ley Federal de Procedimiento Administrativo sí garantiza el derecho fundamental de audiencia. Por ello, sostiene que los actos procesales impugnados son conformes al marco constitucional derivado de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.

V. ESTUDIO DE FONDO

27. La materia de análisis que subsiste para esta Primera Sala consiste en determinar si los argumentos de la revisión dan lugar a revocar la negativa de amparo decretada por el Juez de Distrito respecto de los preceptos reclamados. Dichos planteamientos serán analizados en función de la siguiente interrogante:

¿Los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud son violatorios del derecho al libre desarrollo de la personalidad?

28. En sesión de cuatro de noviembre de dos mil quince, esta Primera Sala resolvió el amparo en revisión [REDACTED]¹⁷ que guarda una similitud sustancial con el presente caso. En ese sentido, se retomarán las consideraciones de dicho amparo en revisión para resolver el asunto en lo concerniente a los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud. Ahora bien, un breve apartado de consideraciones diferenciadas tendrá por objeto analizar la constitucionalidad de los artículos 234, 368 y 479 del mismo ordenamiento, cuya constitucionalidad no fue objeto de *litis* en el amparo en revisión [REDACTED].
29. Otra diferencia con respecto al precedente citado es que en este caso el quejoso solicitó la autorización sanitaria para la adquisición de las semillas de marihuana¹⁸. Dicha solicitud se reiteró en la propia demanda de amparo¹⁹ y en el recurso de revisión²⁰. Respecto de esta cuestión se harán algunas precisiones en el apartado relativo a los efectos de la sentencia.
30. Ahora bien, como se expuso en la relatoría de los conceptos de violación y agravios, el recurrente planteó originalmente en su demanda de amparo la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley General de Salud, al considerar que los mismos establecen una "política prohibicionista" respecto del consumo individual de marihuana, misma que limita indebidamente, entre otros, los derechos fundamentales a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación, todos en relación con el principio de dignidad humana.

¹⁷ Dicho amparo en revisión fue resuelto en el sentido de conceder el amparo por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente); José Ramón Cossío Díaz, quien se reservó su derecho a formular voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien también se reservó su derecho a formular voto concurrente; en contra del emitido por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reservó su derecho a formular voto particular.

¹⁸ Véase el oficio [REDACTED] en que se consigna la solicitud exacta del quejoso. Obra en la foja 154 del juicio de amparo [REDACTED].

¹⁹ *Ibidem*. foja 4, *inter alia*.

²⁰ Cuaderno del amparo en revisión 623/2017, foja 38.

31. De acuerdo al recurrente, la prohibición del consumo de marihuana implica la supresión de conductas que confieren al individuo una diferencia específica de acuerdo a su singularidad, restricción que no se encuentra justificada ya que la imposición de un estándar único de vida saludable no es admisible en un Estado liberal que basa su existencia en el reconocimiento de la singularidad e independencia humana. Así, en síntesis, sostuvo que la prohibición para consumir marihuana se basa en un prejuicio sustentado en valoraciones morales y no en estudios científicos, revelando que el Estado no ha actuado con neutralidad ética.
32. En la sentencia de amparo, el Juez de Distrito calificó como infundados los argumentos del quejoso. Estimó para ello que la restricción consagrada en los artículos no implica el análisis aislado de un derecho sino un aspecto de suma importancia como la salud pública en su dimensión social. Siguiendo en parte las consideraciones de esta Primera Sala en el amparo en revisión [REDACTED], el Juez de Distrito empleó un test de proporcionalidad para evaluar el marco regulatorio frente al derecho al libre desarrollo de la personalidad concluyendo, a diferencia de la Primera Sala, que la restricción legislativa impuesta sobre ese derecho era constitucional.
33. El quejoso interpuso recurso de revisión, en el que alega fundamentalmente que, contrario a lo establecido por el Juez de Distrito, la normativa impugnada impone modelos y estándares de vida ajenos a los particulares, pues sólo se respeta la identidad de cada sujeto si se le permite actuar en consecuencia a sus propios rasgos, cosmovisiones, concepciones de la vida buena y elementos que a su juicio lo definen y singularizan. Particularmente sostiene que el juez realizó indebidamente el test de restricciones constitucionales al derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues el marco regulatorio es claramente desproporcionado.

34. Así las cosas, esta Primera Sala advierte que los agravios expuestos por el recurrente, particularmente aquéllos identificados como segundo, tercero y cuarto, **resultan esencialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida** y otorgar la protección constitucional al quejoso en lo concerniente a los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud al entender que tales artículos impugnados limitan de forma injustificada el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. En contraste, como se muestra a continuación, **son infundados los agravios hechos valer en el recurso de revisión adhesivo** presentado por el delegado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Secretario de Salud.
35. Ahora bien, para poder justificar la decisión ya anunciada y dar respuesta a los argumentos planteados por el recurrente en relación con la constitucionalidad de los artículos reclamados decretada por el Juez de Distrito, esta Primera Sala, al igual que lo hizo en el amparo en revisión [REDACTED], considera necesario desarrollar los siguientes puntos: (i) explicar el marco regulatorio de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas previsto en la Ley General de Salud; (ii) establecer la incidencia de la medida legislativa impugnada en el contenido *prima facie* del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad; y (iii) determinar si la medida impugnada supera las cuatro gradas del test de proporcionalidad: (a) constitucionalidad de los fines perseguidos con la medida; (b) idoneidad; (c) necesidad; y (d) proporcionalidad en sentido estricto. Finalmente, (iv) se expondrán las conclusiones del estudio de constitucionalidad de los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, (v) se analizará la constitucionalidad de los artículos 234, 368 y 479 de la Ley General de Salud y (vi) se estudiarán los agravios del recurso adhesivo.

i) Marco regulatorio sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos en la Ley General de Salud

36. Como se desprende de los antecedentes, el oficio reclamado por [REDACTED] fue emitido el ocho de julio de dos mil dieciséis. En consecuencia, el marco regulatorio que se analizará en este apartado es el vigente en esa fecha por ser la legislación que rigió la actuación de la COPEFRIS al desechar la solicitud del recurrente²¹.
37. Las fracciones XXI y XXII del artículo 3º de la ley General de Salud²² establecen que son materia de salubridad general tanto la *prevención del consumo* como el *control sanitario* de "estupefacientes" y "substancias psicotrópicas".²³ En este sentido, de conformidad con el artículo 194 se entiende por "control sanitario" al conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y, en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones que realiza la Secretaría de Salud sobre el proceso,

²¹ El 19 de junio de dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial de Federación y su Gaceta una reforma a varios artículos de la Ley General de Salud. En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma presentada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se establece que la "propuesta no supone de ninguna manera la legalización de la cannabis sativa, indica y americana o marihuana, o su resina. Se trata de la autorización por parte de la autoridad sanitaria para la siembra, cosecha, cultivo, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso y consumo de la marihuana exclusivamente para usos médicos y científicos que hayan probado su eficacia en otros países y sean utilizados por aquellos paciente que los requieran de acuerdo a las reglas y disposiciones que señale la propia autoridad sanitaria." Las principales modificaciones que se realizaron mediante esta reforma fueron las siguientes: En primer lugar, se estableció en el artículo 235 Bis la obligación de la Secretaría de Salud de diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados del cannabis. En segundo lugar, se eliminó la prohibición de realizar actos relacionados con el cannabis, y se permitió su realización siempre que se realicen con fines médicos y científicos y se haya obtenido autorización de la Secretaría de Salud. Entre los actos que se permitieron bajo estos supuestos se encuentran la siembra, la cosecha, el cultivo, la adquisición, el comercio y el consumo. En tercer lugar, se modificó el artículo 245 para que la cannabis ya no forme parte de la lista de sustancias psicotrópicas de valor terapéutico nulo y que constituyen un problema especialmente grave de salud pública. Se estableció que cuando una sustancia tenga una concentración de Tetrahidrocannabinol mayor al 1% se considerará sustancia con valor terapéutico, pero que constituye un problema grave para la salud pública, y cuando las sustancias que contengan una concentración de Tetrahidrocannabinol menor al 1% se considerarán de amplios usos terapéuticos y que constituyen un problema menor para la salud pública.

²² Salvo indicación en contrario, todos los artículos cuyo contenido se describe en este apartado corresponden a la Ley General de Salud.

²³ Artículo 3. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

[...]

XXI. La prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia;

XXII. El control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación.

uso, importación y exportación de diversas sustancias y objetos, entre los que se encuentran los estupefacientes y los psicotrópicos.²⁴

38. En específico, el control sanitario respecto de estupefacientes y sustancias psicotrópicas se encuentra regulado dentro de los capítulos V y VI del Título Décimo Segundo de la Ley General de Salud, así como en el capítulo III del Título Segundo del Reglamento de Insumos para la Salud. Al respecto, debe señalarse que la citada ley contempla un *marco regulatorio similar* para los estupefacientes y los psicotrópicos. En primer lugar, el legislador estableció un listado para determinar qué sustancias debían considerarse como estupefacientes y qué sustancias como psicotrópicos (artículos 234 y 245). Por otro lado, determinó que *todo acto* relacionado con estupefacientes o psicotrópicos, o cualquier producto que los contuviera, requiere una “autorización” de la Secretaría de Salud y sólo puede otorgarse con fines médicos y/o científicos (artículos 235 y 247, respectivamente). En esta línea, también existe una *prohibición* expresa para otorgar la autorización anteriormente señalada respecto de determinados estupefacientes y psicotrópicos (artículos 237 y 248).

²⁴ Es importante señalar que de acuerdo con el artículo 197 de la Ley General de Salud, se entiende por “proceso” el conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al público.

Artículo 194. Para efectos de este título, se entiende por control sanitario, el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud con la participación de los productores, comercializadores y consumidores, en base a lo que establecen las normas oficiales mexicanas y otras disposiciones aplicables.

El ejercicio del control sanitario será aplicable al:

I. Proceso, importación y exportación de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, productos cosméticos, productos de aseo, labaco, así como de las materias primas y, en su caso, aditivos que intervengan en su elaboración;

II. Proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación, y disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, y

III. Proceso, uso, importación, exportación, aplicación y disposición final de plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas para la salud, así como de las materias primas que intervengan en su elaboración.

El control sanitario del proceso, importación y exportación de medicamentos, estupefacientes y sustancias psicotrópicas y las materias primas que intervengan en su elaboración, compete en forma exclusiva a la Secretaría de Salud, en función del potencial de riesgo para la salud que estos productos representan.

39. Efectivamente, de conformidad con los artículos 235 y 247, así como con el artículo 44 del Reglamento de Insumos para la Salud, cualquier persona que pretenda sembrar, cultivar, elaborar, preparar, acondicionar, adquirir, poseer, comerciar, transportar, prescribir médicamente, suministrar, emplear, usar, consumir y, en general, realizar cualquier acto relacionado con las sustancias listadas en los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud, o con cualquier producto que los contenga, deberá contar con una "autorización" de la Secretaría de Salud y solamente podrá realizar dichas acciones si las mismas tienen fines *médicos y/o científicos*.²⁵

²⁵ **Artículo 235.** La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a:

- I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;
- II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General;
- IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia;

V. (Se deroga).
 VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.

Artículo 247. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con sustancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, queda sujeto a:

- I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;
- II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General;
- IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia;

V. (Se deroga).
 VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos, y requerirán, al igual que las sustancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud.

Reglamento de Insumos para la Salud:

Artículo 44. La obtención, elaboración, fabricación, preparación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, almacenamiento, comercialización, importación, exportación, prescripción médica, suministro, posesión, transporte, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes y psicotrópicas, con excepción de los que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, sólo podrá realizarse con fines médicos y científicos, previa autorización de la Secretaría.

40. Ahora bien, el artículo 368 dispone que la "autorización sanitaria" es el acto administrativo mediante el cual la autoridad sanitaria competente permite a una persona pública o privada la realización de actividades relacionadas con la salud humana, en los casos y con los requisitos y modalidades que determine la propia Ley General de Salud y demás disposiciones generales aplicables. Sin embargo, los artículos 237 y 248 vigentes al momento de dictarse el oficio impugnado²⁶, *prohiben expresamente* la expedición de la autorización a que se ha hecho referencia respecto de determinadas sustancias consideradas como un problema grave para la salud pública, entre las que se encontraba el estupefaciente "cannabis sativa, indica y americana o marihuana", así como el psicotrópico "tetrahidrocannabinol" (THC), los isómeros Δ6a (10a), Δ6a (7), Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ9 (11) y sus variantes estereoquímicas, sustancias materia de la controversia en el presente recurso de revisión.²⁷
41. Al respecto, es importante señalar que los artículos 238 y 249 ~~prevén~~ un supuesto extraordinario para permitir la adquisición de los estupefacientes y psicotrópicos a que hacían referencia los aludidos artículos 237 y 248,

²⁶ Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes sustancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, indica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bacteatum y erythroxylon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras sustancias señaladas en el Artículo 234 de esta Ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen dependencia.

Artículo 248. Queda prohibido todo acto de los mencionados en el Artículo 247 de esta Ley, con relación a las sustancias incluidas en la fracción I del Artículo 245.

²⁷ Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes sustancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, indica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bacteatum y erythroxylon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras sustancias señaladas en el Artículo 234 de esta Ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen dependencia.

Artículo 248. Queda prohibido todo acto de los mencionados en el Artículo 247 de esta Ley, con relación a las sustancias incluidas en la fracción I del Artículo 245.

²⁸ No pasa desapercibido a esta Primera Sala que, con posterioridad al dictado del oficio que constituyó el acto de aplicación de las normas impugnadas, hubo una reforma a la Ley General de Salud que modificó el artículo 237 para quedar como sigue:

ARTICULO 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes sustancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, papaver somniferum o adormidera,

relativo a *fines de investigación científica*, para lo cual es necesario que el organismo o institución en cuestión presente un protocolo de investigación autorizado por la propia Secretaría de Salud.²⁹

42. Así, esta Primera Sala entiende que las normas impugnadas comportan un "sistema de prohibiciones administrativas" que forma parte del marco regulatorio previsto en la Ley General de Salud sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos, el cual constituye un obstáculo jurídico para poder realizar lícitamente todas las acciones necesarias para estar en posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo de marihuana (adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etc.).
43. Por un lado, los últimos párrafos de los artículos 235 y 247 establecen que la autorización para la realización de actos relacionados con estupefacientes o sustancias psicotrópicas se encuentra supeditada a que éstos exclusivamente tengan fines "médicos y/o científicos", *sin incluir* la posibilidad de que la marihuana pueda ser utilizada con fines "lúdicos o recreativos". Por otro lado, los numerales 237 y 245, en relación con el artículo 249, establecen una *prohibición expresa* mediante la que se impide de forma tajante que la Secretaría de Salud expida las autorizaciones correspondientes que solicitó el quejoso en relación con la marihuana para poder ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad.
44. En este orden de ideas, es importante señalar que si bien el artículo 478 de la Ley General de Salud,³⁰ en relación con el artículo 479, señala que el

papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

²⁹ **Artículo 238.** Solamente para fines de investigación científica, la Secretaría de Salud autorizará a los organismos o instituciones que hayan presentado protocolo de investigación autorizado por aquella dependencia, la adquisición de estupefacientes a que se refiere el artículo 237 de esta Ley. Dichos organismos e instituciones comunicarán a la Secretaría de Salud el resultado de las investigaciones efectuadas y como se utilizaron.

Artículo 249. Solamente para fines de investigación científica, la Secretaría de Salud podrá autorizar la adquisición de las sustancias psicotrópicas a que se refiere la fracción I del artículo 245 de esta Ley, para ser entregadas bajo control a organismos o instituciones que hayan presentado protocolo de investigación autorizado por aquella Dependencia, los que a su vez comunicarán a la citada Secretaría el resultado de las investigaciones efectuadas y cómo se utilizaron.

Ministerio Público no ejercerá acción penal en contra de quien posea hasta cinco gramos de marihuana, esta Suprema Corte ha interpretado que dicha disposición contiene una *excluyente de responsabilidad*,³¹ lo que únicamente significa que en esos casos no debe aplicarse la pena a quien haya cometido el delito en cuestión, pero no consagra de ninguna manera una autorización o un derecho al consumo personal en los términos en los que lo solicita el quejoso, puesto que además de que únicamente se limitan a *despenalizar* el consumo en una cantidad muy pequeña, dichos preceptos *no permiten* de ningún modo la realización de las otras actividades correlativas al autoconsumo, como la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, transporte, etc.

45. En cualquier caso, debe destacarse que los artículos aludidos no forman parte del "sistema de prohibiciones administrativas" impugnado por el quejoso, sino del "sistema punitivo" previsto en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal en relación con el control de estupefacientes y psicotrópicos. Sin embargo, esta Primera Sala recuerda que, dado que el artículo 479 de la Ley General de Salud subsiste como tema de constitucionalidad, su análisis será emprendido en la parte final de esta sentencia.
46. Una vez establecido el alcance de las normas impugnadas, a continuación se analizará si dicho "sistema de prohibiciones administrativas" genera las afectaciones que el quejoso aduce. En este sentido, a pesar de que se argumentan vulneraciones a los derechos de identidad personal, propia

³⁰ Artículo 478. El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta Ley. La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia.

³¹ Al respecto véase la tesis de rubro "DELITO CONTRA LA SALUD. EL ARTÍCULO 478 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, AL PREVER LA NO APLICACIÓN DE LA EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD RESPECTO DE LOS FARMACODEPENDIENTES POSEEDORES DE ALGÚN NARCÓTICO DENTRO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN, INCLUSO CUANDO SU CANTIDAD NO EXCEDA EL LÍMITE MÁXIMO LEGALMENTE ESTABLECIDO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD" [Nóvena Época; Registro 162389; Instancia Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Abril de 2011; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. LII/2011; Página: 307].

imagen, privacidad y dignidad humana, esta Primera Sala considera que todas éstas quedan comprendidas en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así, es preciso explicar el contenido *prima facie* de este derecho para luego resolver si los artículos reclamados inciden en dicho contenido.

ii) Análisis de la incidencia de la medida legislativa impugnada en el contenido *prima facie* del libre desarrollo de la personalidad

47. La moderna teoría de los derechos fundamentales traza una distinción indispensable para entender la forma en la que los tribunales constitucionales suelen hacer el control de constitucionalidad de las normas infraconstitucionales a través del principio de proporcionalidad: el *alcance* del derecho fundamental y la *extensión de su protección*.³² De acuerdo con esta distinción, el examen de constitucionalidad de una medida legislativa debe realizarse a través de un análisis en dos etapas.
48. En una primera etapa, debe determinarse si la norma impugnada incide en el *alcance* o contenido *prima facie* del derecho en cuestión.³³ O dicho en otros términos, debe establecerse si la medida legislativa impugnada *limita* el derecho fundamental.³⁴ En esta etapa del análisis es necesario recurrir a la *interpretación* de las disposiciones normativas correspondientes. Por un lado, debe interpretarse la disposición legislativa impugnada con la finalidad de determinar los alcances de la prohibición u obligación que establece. Por otro lado, también debe interpretarse la disposición constitucional que aloja el derecho fundamental en cuestión, con la finalidad de fijar el *alcance* o contenido *prima facie* de éste. De esta manera, en esta primera etapa se precisan las conductas cubiertas *prima facie* o *inicialmente* por el derecho fundamental en cuestión.

³² Barak, Aharon, *Proportionality. Constitutional Rights and their Limitations*, trad. Doron Kalir, Nueva York, Cambridge University Press, 2012, p. 19.

³³ Bernal Pulido, Carlos, *El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales*, Madrid, CEPC, 2007, p. 45.

She was happy with f³⁴ Barak, *op. cit.*, p. 26.

49. Una vez hecho lo anterior, debe decidirse si la norma impugnada incide o no en el ámbito de protección *prima facie* del derecho aludido. Si la conclusión es negativa, el examen debe terminar en esta etapa con la declaración de que la medida legislativa impugnada es constitucional. En cambio, si la conclusión es positiva, debe pasarse a otro nivel de análisis.
50. En una segunda etapa del análisis, debe determinarse si la norma que efectivamente interviene en el contenido *prima facie* del derecho fundamental es constitucional. Así, en esta fase del análisis debe examinarse si en el caso concreto existe una justificación constitucional para que la medida legislativa reduzca la *extensión de la protección* que otorga inicialmente el derecho. Este ejercicio implica que se analice si la intervención legislativa cumple con las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad: una finalidad constitucionalmente válida, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido de la medida.
51. De acuerdo con lo anterior, esta Primera Sala procede a determinar si la medida legislativa limita el contenido *prima facie* del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
52. En primer lugar, debe destacarse que la Constitución mexicana otorga una amplia protección a la autonomía de las personas, al garantizar el goce de ciertos bienes que son indispensables para la *elección y materialización* de los planes de vida que los individuos se proponen.³⁵ Así, en términos generales puede decirse que los derechos fundamentales tienen la función de “atrincherar” esos bienes contra medidas estatales o actuaciones de terceras personas que puedan afectar la autonomía personal.³⁶ De esta manera, los derechos incluidos en ese “coto vedado” están vinculados con

³⁵ Nino, Carlos, *Ética y Derechos Humanos. Un ensayo de fundamentación*, 2ª ed., Buenos Aires, Astrea, 1989, p. 223.

³⁶ *Ibidem*, p. 223.

la satisfacción de esos bienes básicos que son necesarios para la satisfacción de cualquier plan de vida.³⁷

53. En este orden de ideas, el *bien más genérico* que se requiere para garantizar la autonomía de las personas es precisamente la *libertad* de realizar cualquier conducta que no perjudique a terceros.³⁸ En este sentido, la Constitución y los tratados internacionales reconocen un catálogo de "derechos de libertad" que se traducen en *permisos* para realizar determinadas acciones que se estiman valiosas para la autonomía de las personas (expresar opiniones, moverse sin impedimentos, asociarse, adoptar una religión u otro tipo de creencia, elegir una profesión o trabajo, etc.), al tiempo que también comportan *límites negativos* dirigidos a los poderes públicos y a terceros, toda vez que imponen prohibiciones de intervenir u obstaculizar las acciones permitidas por el derecho fundamental en cuestión.³⁹
54. Ahora bien, el derecho al libre desarrollo de la personalidad brinda protección a un "área residual de libertad" que no se encuentra cubierta por las otras libertades públicas.⁴⁰ Como explicó el Tribunal Constitucional alemán en el caso *Elfes*,⁴¹ estos derechos fundamentales protegen la libertad de actuación humana de ciertos "espacios vitales" que de acuerdo con la experiencia histórica son más susceptibles de ser afectados por el poder público, sin embargo, cuando un determinado "espacio vital" es intervenido a través de una medida estatal y no se encuentra expresamente protegido por un derecho de libertad específico, las personas pueden invocar la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad. De

³⁷ Garzón Valdés, Ernesto, "Algo más acerca del 'coto vedado'", *Doxa. Cuadernos de filosofía del derecho*, núm. 6, 1989, p. 209.

³⁸ Nino, *op. cit.*, p. 223.

³⁹ Alexy, Robert, *Teoría de los derechos fundamentales*, trad. Carlos Bernal Pulido, Madrid, CEPC, 2007, pp. 197-201.

⁴⁰ Díez-Picazo, Luis María, *Sistema de Derechos Fundamentales*, 2ª ed., Cizur Menor, Thomson Civitas, 2005, p. 70.

⁴¹ BVerfGE 6, 32, sentencia de 16 de enero de 1957. Citada por la traducción contenida en Kommers, Donald P., y Miller, Russel A., *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, 3ª ed., Durham, Duke University Press, 2012, p. 402.

esta manera, este derecho puede entrar en juego siempre que una acción no se encuentre tutelada por un derecho de libertad específico.⁴²

55. En este sentido, la doctrina especializada ha señalado que el derecho al libre desarrollo de la personalidad comporta “un rechazo radical de la siempre presente tentación del *paternalismo del Estado*, que cree saber mejor que las personas lo que conviene a éstas y lo que deben hacer con sus vidas”, de tal manera que puede decirse que este derecho supone “la proclamación constitucional de que, siempre que se respeten los derechos de los demás, *cada ser humano es el mejor juez de sus propios intereses*” (énfasis añadido).⁴³
56. En el ordenamiento mexicano, esta Suprema Corte ha entendido que el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que deriva del derecho a la dignidad, que a su vez está previsto en el artículo 1º constitucional y se encuentra implícito en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país.⁴⁴ Al respecto, en la sentencia que resolvió el [REDACTED],⁴⁵ el Pleno de este Alto Tribunal sostuvo entre otras cosas que “[e]l individuo, sea quien sea, *tiene derecho a elegir en forma libre y autónoma, su proyecto de vida*, la manera en que logrará las metas y objetivos que, para él, son relevantes”.
57. En dicho precedente se explicó que el derecho al libre desarrollo de la personalidad permite “la consecución del proyecto de vida que para sí tiene el ser humano, como ente autónomo”, de tal manera que supone “el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, *ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás*, con el fin de cumplir las metas u

⁴² Eberle, Eduard J., “Human Dignity, Privacy, and Personality in German and American Constitutional Law”, *Utah Law Review*, 1997, p. 979.

⁴³ Díez-Picazo, *op. cit.*, p. 69.

⁴⁴ Sobre este punto, véase la tesis de rubro “DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES” [Novena Época; Registro 165813; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Constitucional; Tesis: P. LXV/2009; Página: 8].

⁴⁵ Sentencia de 6 de enero de 2009, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte.

objetivos que se ha fijado, es decir, es la persona humana quien decide el sentido de su propia existencia, de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera" (énfasis añadido); criterio que posteriormente fue recogido en la tesis aislada de rubro "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE".⁴⁶

58. En este orden de ideas, en la línea de lo expuesto por el Tribunal Constitucional alemán en el caso *Eppler*,⁴⁷ puede decirse que la libertad "indefinida" que es tutelada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad *complementa* las otras libertades más específicas, como la libertad de conciencia o la libertad de expresión, puesto que su función es salvaguardar la "esfera personal" que no se encuentra protegida por las libertades más tradicionales y concretas. En este sentido, este derecho es especialmente importante frente a las *nuevas amenazas* a la libertad individual que se presentan en la actualidad.
59. Ahora bien, la doctrina especializada señala que el libre desarrollo de la personalidad tiene una dimensión externa y una interna.⁴⁸ Desde el punto de vista *externo*, el derecho da cobertura a una genérica "libertad de acción" que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad.⁴⁹ En cambio, desde una perspectiva *interna*, el derecho protege una "esfera de privacidad" del individuo en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal.⁵⁰

⁴⁶ Novena Época, Registro: 165822, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Civil, Constitucional, Tesis: P. LXVI/2009, Página: 7.

⁴⁷ BVerfGE 54, 148, sentencia de 3 de junio de 1980. Citada por la traducción contenida en Kommers y Miller, *op. cit.*, p. 406-407.

⁴⁸ Eberle, Eduard J., "Observations on the Development of Human Dignity and Personality in German Constitutional Law: An Overview", *Liverpool Law Review Journal, of Contemporary Legal and Social Policy*, vol. 33, núm. 3, 2012, p. 211.

⁴⁹ De acuerdo con el Tribunal Constitucional alemán, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental independiente que garantiza una genérica libertad de acción. Al respecto, véase la sentencia BVerfGE 6, 36.

⁵⁰ Eberle, "Observations...", *op. cit.*, p. 211.

60. Como se muestra más adelante, si bien en un plano conceptual puede trazarse esta distinción entre los aspectos externos e internos, resulta complicado adscribir los casos de ejercicio de este derecho a una sola de estas dimensiones. Ello es así porque las acciones que realizan los individuos en el ejercicio de su autonomía personal suponen la *decisión* de llevar a cabo esa acción, al tiempo que las decisiones sobre aspectos que en principio sólo incumben al individuo normalmente requieren de *ciertas acciones* para materializarlas. En todo caso, parece que se trata de una cuestión de énfasis. Así, mientras que hay situaciones en las que el aspecto más relevante de la autonomía personal se aprecia en la acción realizada, existen otras situaciones en las que el ejercicio de la autonomía se observa más claramente a través de la decisión adoptada por la persona.
61. Por lo demás, vale la pena señalar que en el derecho comparado también existen otros derechos fundamentales que cumplen una función similar al libre desarrollo de la personalidad. En el derecho norteamericano, por ejemplo, a partir del derecho al debido proceso en su aspecto sustantivo se ha desarrollado lo que se conoce como “decisional privacy”.⁵¹ Esta vertiente del derecho a la privacidad está directamente relacionada con la *autonomía personal*, puesto que no sólo garantiza un ámbito de libertad en la toma de decisiones que sólo le conciernen al individuo, sino que también da cobertura a una genérica libertad de acción, que incluye aspectos como la manera de comportarse en público o los estilos de vida de la persona.⁵²
62. De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, parece evidente que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho cuyos contornos deben irse precisando jurisprudencialmente. En el derecho comparado, la forma en

⁵¹ Vale la pena destacar que en el derecho norteamericano la “decisional privacy” se distingue lo que se conoce como la “physical privacy” y la “informational privacy”. Mientras el derecho a una *privacidad física* comporta una protección para el domicilio y la integridad personal en contra de intervenciones injustificadas de terceros, el derecho a la *privacidad informativa* otorga a al individuo el control la información relacionada con su propia persona. Al respecto, véase Mayer-Schönberger, Viktor, “Strands of Privacy: DNA Databases and Informational Privacy and the OECD Guidelines”, en David Lazer (ed.), *The Technology of Justice: DNA and the Criminal Justice System*, Cambridge, MIT Press, 2004.

⁵² Rossler, Beate, *The Value of Privacy*, Cambridge, Polity Press, 2005 p. 89

la que se ha llevado a cabo ese proceso de especificación consiste en preguntarse a partir de casos concretos si una determinada acción o decisión individual se encuentra protegida por este derecho. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán ha sostenido que el libre desarrollo de la personalidad da cobertura a actividades "recreativas" como viajar fuera del país, cazar o montar a caballo,⁵³ al tiempo que en casos relacionados con personas transexuales ha considerado protegida la decisión en relación con el sexo y el género con el que un individuo desea que se le identifique.⁵⁴

63. En sentido similar, la Corte Suprema estadounidense ha establecido que el derecho a la privacidad en la vertiente antes señalada protege de interferencias externas una gran variedad de decisiones personales,⁵⁵ como las relacionadas con la contracepción,⁵⁶ la educación,⁵⁷ el cuidado de los niños,⁵⁸ y las relaciones familiares.⁵⁹ Así, estas decisiones están cubiertas por el derecho a la privacidad precisamente porque pertenecen a la esfera de autonomía de la persona. Como se señaló anteriormente, la protección que otorga el derecho no sólo comprende esas decisiones, sino también las acciones necesarias para materializar esa decisión.

⁵³ Kommers y Miller, *op. cit.*, pp. 400-404.

⁵⁴ Kommers y Miller, *op. cit.*, p. 413.

⁵⁵ Brashear, Bruce, "Marijuana Prohibition and The Constitutional Right of Privacy: An Examination of *Ravin v. State*", *Tulsa Law Review*, vol. 11, 1975, p. 571.

⁵⁶ La Corte Suprema norteamericana ha reconocido en varios casos el derecho de las personas a decidir sobre la utilización de métodos anticonceptivos. Al respecto, véanse entre otros *Griswold v. Connecticut*, 381 U.S. 479 (1965), en el que declaró inconstitucional una ley estatal que prohibía la distribución de información sobre control natal a personas casadas; y *Eisenstadt v. Baird*, 405 U.S. 438 (1972), en el que sostuvo que el derecho a la privacidad protege las decisiones individuales relativas a la contracepción.

⁵⁷ En relación con temas educativos, en *Wieman v. Updegraff*, 344 U.S. 183 (1952), la Corte Suprema sostuvo que el derecho a la privacidad daba cobertura a las libertades de investigación, pensamiento y enseñanza; en *Martin v. Struthers*, 319 U.S. 141 (1943) se señaló que el derecho a la privacidad también comprendía el derecho a distribuir, a recibir y a leer información; y en *Meyer v. Nebraska*, 262 U.S. 390 (1923) se estableció que el derecho a la privacidad también comprendía el derecho a acceder todo el espectro de conocimientos disponibles con base en la primera enmienda.

⁵⁸ Sobre este tema, la Corte Suprema norteamericana determinó en *Pierce v. Society of Sisters*, 268 U.S. 510 (1925), que el derecho a la privacidad protegía a su vez el derecho educar a los propios hijos como uno pretiera.

⁵⁹ Al respecto, en *Prince v. Massachusetts*, 321 U.S. 158 (1944) se reconoció que el derecho a la privacidad protege de interferencias estatales un ámbito privado de la vida familiar; y en *Loving v. Virginia*, 388 U.S. 1 (1967) se sostuvo que el derecho a la privacidad comprendía también el derecho a decidir con quién desea casarse una persona.

64. Ahora bien, esta manera de precisar el contenido del derecho al libre desarrollo de la personalidad, consistente en reconocer en casos concretos que cierto tipo de conductas o decisiones se encuentran protegidas por el derecho, lo que a su vez se traduce en el reconocimiento de un derecho a realizar esas conductas o a tomar esas decisiones sin interferencias del Estado o de terceros, resulta congruente con la manera en la que esta Suprema Corte se ha aproximado a los problemas relacionados con el alcance del derecho en cuestión.
65. En efecto, en la sentencia del citado [REDACTED] el Pleno de esta Suprema Corte sostuvo que "la 'reasignación sexual' que decida una persona, que puede comprender o no una cirugía para ese fin, con el objeto de adecuar su estado psicosocial a su físico y, de ahí, vivir en el sexo con el que se identifica plenamente, innegablemente constituye una *decisión que forma parte del libre desarrollo de la personalidad*, en tanto es una expresión de la individualidad de la persona, respecto de su percepción sexual ante sí mismo, lo que influye decisivamente en su proyecto de vida y, por ende, en sus relaciones sociales" (énfasis añadido); criterio que posteriormente fue recogido en la tesis aislada de rubro **"REASIGNACIÓN SEXUAL. ES UNA DECISIÓN QUE FORMA PARTE DE LOS DERECHOS AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD"**.⁶⁰
66. Posteriormente, esta Suprema Corte ha reiterado en varias ocasiones que la decisión de *permanecer o no casado* encuentra cobertura en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así, en la sentencia del [REDACTED] [REDACTED]⁶¹ al analizar la constitucionalidad del divorcio sin causa en la legislación civil del Distrito Federal, esta Primera Sala sostuvo que "el respeto al *libre desarrollo de la personalidad* justifica

⁶⁰ Novena Época, Registro: 165698, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: P. LXIX/2009, Página: 17.

⁶¹ Sentencia de 23 de septiembre de 2009, resuelta por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros José Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas (Ponente) y Presidente Sergio A. Valls Hernández. Ausente el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

reconocer mayor trascendencia a la voluntad del individuo cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge, por ello, el derecho a tramitar la disolución del vínculo matrimonial, no puede hacerse depender de la demostración de causa alguna, pues aquella determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en la demanda, resultando inadmisibles que el Estado se empeñe en mantener vigente el matrimonio de quienes solicitan el divorcio al considerar que su situación particular se torna irreconciliable" (énfasis añadido).

67. En términos similares, en el [REDACTED] esta Primera Sala explicó que *"con la expresión de la voluntad de no continuar con el matrimonio, se ejerce el derecho al libre desarrollo a la personalidad, pues decidir no continuar casado, cambiar de estado civil, constituye, la forma en que el individuo desea proyectarse, vivir su vida; la forma en que el individuo decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida"* (énfasis añadido), criterio que posteriormente fue recogido en la tesis aislada de rubro **"DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. CONSTITUYE UNA FORMA DE EJERCER EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD"**.⁶³
68. En la misma línea, al analizar a la luz del libre desarrollo de la personalidad la constitucionalidad del sistema de divorcio a través del cual se exige la acreditación de causales para poder disolver el vínculo matrimonial, esta Primera Sala volvió a reiterar en la [REDACTED] que

⁶² Sentencia de 22 de octubre de 2014, resuelta por mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas (Ponente) y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular.

⁶³ Décima Época, Registro: 2008492, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. LIX/2015 (10a.), Página: 1392.

⁶⁴ Sentencia de 25 de febrero de 2015, resuelta por mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en contra del emitido por el Ministro José Ramón Cossío Díaz, por lo que respecta a la competencia y por mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), José Ramón Cossío Díaz (quien se reserva el derecho de formular voto concurrente) y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en contra de los emitidos por los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (quienes se reservaron el derecho de formular voto particular), por lo que se refiere al fondo.

la decisión de un cónyuge de no permanecer casado, con independencia de los motivos que tenga para ello, también forma parte de un plan de vida elegido de manera autónoma, el cual no debe ser obstaculizado por el Estado ni por un tercero, como ocurre cuando el otro cónyuge se niega a otorgar el divorcio, lo que significa que esa decisión también está amparada al menos *prima facie* por este derecho” (énfasis añadido).

69. Por lo demás, vale la pena destacar que al resolver el citado [REDACTED] el Pleno de esta Suprema Corte también señaló en *obiter dictum* que “el derecho al libre desarrollo de la personalidad, comprende, entre otras, la libertad de *contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, así como en qué momento de su vida, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral; y, por supuesto, la libre opción sexual*, pues todos estos aspectos, evidentemente, son parte de la manera en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo él puede decidir en forma autónoma” (énfasis añadido).

70. Como puede observarse, los precedentes citados muestran una línea jurisprudencial en la cual esta Suprema Corte ha reconocido que el derecho al libre desarrollo de la personalidad da cobertura en principio a una gran variedad de acciones y decisiones conectadas directamente con el ejercicio de la autonomía individual. Ahora bien, en el presente caso la primera cuestión que debe resolverse es si las decisiones y las acciones que el recurrente señalan se encuentran protegidas *prima facie* por el derecho en cuestión.

71. Al respecto, en la demanda de amparo el quejoso sostuvo que pretendía que se le concediera una autorización sanitaria para “consumo personal con fines lúdicos o recreativos de la Marihuana, así como para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo de Marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso,

consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana⁶⁵.

72. De acuerdo con lo anterior, el recurrente argumenta que el libre desarrollo de la personalidad da cobertura a la *decisión* de consumir marihuana para fines lúdicos y, en consecuencia, también a todas las *acciones* necesarias para poder estar en posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo (siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etc.). Al respecto, esta Primera Sala entiende que el derecho fundamental en cuestión permite *prima facie* que las personas mayores de edad *decidan* sin interferencia alguna qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean realizar, así como llevar a cabo todas las *acciones* o *actividades* necesarias para poder materializar esa elección.
73. De esta manera, la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece indudablemente a la esfera de autonomía personal que debe estar protegida por la Constitución. Esa elección puede incluir, como ocurre en el presente caso, la ingesta o el consumo de sustancias que produzcan experiencias que en algún sentido "afecten" los pensamientos, las emociones y/o las sensaciones de la persona.⁶⁶ En esta línea, se ha señalado que la decisión de fumar marihuana puede tener distintas finalidades, entre las que se incluyen "el alivio de la tensión, la intensificación de las percepciones o el deseo de nuevas experiencias personales y espirituales".⁶⁷ Así, al tratarse de "experiencias mentales", éstas se encuentran entre las más personales e íntimas que alguien pueda experimentar, de tal manera que la decisión de un individuo mayor de edad de "afectar" su personalidad de esta manera con fines recreativos o lúdicos se encuentra tutelada *prima facie* por el derecho al libre desarrollo de ésta.

68

⁶⁵ Véase la foja 3 de la demanda de amparo.

⁶⁶ Al respecto, véase el voto disidente del juez Levinson a la sentencia de la Corte Suprema de Hawái en el caso *Hawaii State v. Kantner*, 53 H.327,493 P.2d 306 (1972).

⁶⁷ *Idem*.

⁶⁸ *Idem*.

74. Ahora bien, una vez que se ha expuesto el marco regulatorio para el control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en la Ley General de Salud, así como el contenido *prima facie* del derecho al libre desarrollo de la personalidad, esta Primera Sala está en posición de concluir que los artículos de dicho ordenamiento identificados por el Juez de Distrito como actos reclamados efectivamente *inciden* en el contenido *prima facie* del derecho fundamental, toda vez que constituyen un obstáculo jurídico que impide al quejoso ejercer el derecho a *decidir* qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desea realizar, al tiempo que también impide llevar a cabo lícitamente todas las *acciones* o *actividades* necesarias para poder materializar esa elección a través del autoconsumo de la marihuana: siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etc. Recuérdese que un análisis diferenciado se hará en torno a los artículos 234, 368 y 479 de la Ley General de Salud cuya constitucionalidad también se encuentra en *litis* pero que no fueron analizados en el citado amparo en revisión [REDACTED]

75. Ahora bien, con todo, como no podía ser de otra manera, el libre desarrollo de la personalidad *no es un derecho absoluto*, de tal manera que puede ser limitado con la finalidad de perseguir algún objetivo constitucionalmente válido. Al respecto, resulta importante identificar los *límites* a este derecho que han sido reconocidos por este Alto Tribunal. En relación con este tema, en el citado [REDACTED] el Pleno de esta Suprema Corte explicó que este derecho “no es absoluto, pues encuentra sus límites en los *derechos de los demás* y en el *orden público*” (énfasis añadido). Como puede observarse, se trata de *límites externos* al derecho que funcionan como cláusulas que autorizan al legislador a intervenir en el libre desarrollo de la personalidad para perseguir esos fines.⁶⁹

⁶⁹ Sobre esta manera de entender la forma en la que operan los *límites externos* a los derechos, véase Prieto Sanchís, Luis, *Justicia constitucional y derechos fundamentales*, Madrid, Trotta, 2003, p. 222

76. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que los derechos fundamentales y sus respectivos límites externos operan como *principios*, de tal manera que las relaciones entre el derecho y sus límites encierran una colisión que debe resolverse con ayuda del test de proporcionalidad.⁷⁰ Así, para que sean constitucionales las intervenciones que se realizan al amparo de un límite al libre desarrollo de la personalidad, éstas deben cumplir con ciertas características: la medida legislativa debe ser *idónea* para proteger los derechos de terceros y/o el orden público; y no debe limitar de manera *innecesaria y desproporcionada* este derecho fundamental. Dicho de otra manera, la medida analizada tiene que superar un examen de proporcionalidad en sentido amplio.
77. De acuerdo con lo anterior, el hecho de que esta Suprema Corte haya establecido que el libre desarrollo de la personalidad da cobertura *prima facie* a un derecho más específico a decidir y poner en práctica la actividad recreativa o lúdica que se desee realizar, lo que puede incluir el consumo de ciertas sustancias con fines de ocio o esparcimiento, no significa que ese derecho tenga carácter definitivo. En este sentido, el derecho fundamental adopta una doble fisonomía: antes de practicar el test de proporcionalidad presenta un carácter *prima facie* y sólo después de que se ha realizado el *escrutinio*, adquiere un carácter *definitivo*, de tal suerte que si la medida legislativa limitadora no supera el test de proporcionalidad, el contenido definitivo del derecho será coincidente con el atribuido *prima facie*; en cambio, si la ley se encuentra justificada a la luz del test de proporcionalidad, el contenido del derecho será más reducido que el aparente o *prima facie*.⁷¹
78. En resumen, esta Primera Sala estima que fue correcta la determinación del Juez de Distrito al señalar que las normas reclamadas incidían en el derecho al libre desarrollo a la personalidad del quejoso al impedir que éste decidiera qué actividades recreativas o lúdicas quiere realizar.

⁷⁰ *Idem.*

⁷¹ *Ibidem*, p. 221.

iii) Análisis de proporcionalidad en sentido amplio de la medida legislativa impugnada

79. Como se explicó anteriormente, en una segunda etapa del análisis de constitucionalidad debe determinarse si la norma que interviene en el ámbito inicialmente protegido por el derecho fundamental es constitucional. Así, en esta fase del análisis debe examinarse si en el caso concreto existe una justificación desde el punto de vista constitucional para que la medida legislativa limite el contenido *prima facie* del derecho. Este ejercicio implica que se establezca si la intervención legislativa persigue una finalidad constitucionalmente válida y, en caso de que se supere esa grada del escrutinio, se analice si la medida supera sucesivamente un análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido.
80. En el caso concreto, es necesario recordar que la medida cuya constitucionalidad se analiza es el “sistema de prohibiciones administrativas” configurado por los artículos impugnados, el cual forma parte del marco regulatorio previsto en la Ley General de Salud sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos. Al respecto, debe aclararse que no será objeto de ningún pronunciamiento de constitucionalidad el “sistema punitivo” previsto en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal en relación con este tema⁷².
81. En esta línea, también se reitera que desde su propia solicitud **expresamente excluyeron la solicitud de comercializar marihuana**. Es decir, el **peticionario excluyó “expresamente los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma [marihuana⁷³”]**.

⁷² Véase la sección final de esta sentencia para el análisis relativo a la constitucionalidad de los artículos 234, 368 y 479, cuya constitucionalidad no fue analizada en el amparo en revisión precedente.

⁷³ Véase el oficio [REDACTED] obrante en la foja 154 del juicio de amparo indirecto [REDACTED]

82. De ahí que, ante dicha exclusión expresa esta Primera Sala estime pertinente aclarar que sólo se analizará si la prohibición de las actividades estrictamente relacionadas con el autoconsumo de marihuana —adquisición de semillas, siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte— se encuentra constitucionalmente justificada. En consecuencia, el presente asunto no conlleva ningún pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la prohibición de comercializar marihuana.

a. Constitucionalidad de los fines perseguidos con la medida

83. En primer lugar, es preciso identificar los fines que se persiguen con la medida impugnada para posteriormente estar en posibilidad de determinar si éstos resultan constitucionalmente válidos. Esta etapa del análisis presupone la idea de que no cualquier propósito puede justificar la limitación a un derecho fundamental.⁷⁴ En efecto, los fines que pueden fundamentar la intervención legislativa al ejercicio de los derechos fundamentales tienen muy diversa naturaleza: valores, intereses, bienes o principios que el Estado legítimamente puede perseguir.

84. En este orden de ideas, los derechos fundamentales, los bienes colectivos y los bienes jurídicos garantizados, como principios constitucionales constituyen fines que legítimamente fundamentan la intervención del legislador en el ejercicio de otros derechos.⁷⁵ No obstante, debe aclararse que las intervenciones basadas en *fines perfeccionistas* no encuentran protección constitucional, pues el Estado no puede exigir a las personas que se conduzcan de acuerdo a un determinado modelo de virtud.⁷⁶

85. Ahora bien, para poder identificar esas finalidades perseguidas por el legislador puede atenderse a los documentos que informan el proceso legislativo de las disposiciones analizadas o bien a la interpretación de las propias normas combatidas. En el caso concreto, de los procesos de

⁷⁴ Barak, *op. cit.*, p. 245.

⁷⁵ Bernal Pulido, *op. cit.*, p. 697.

⁷⁶ Nino, *op. cit.*, pp. 425-426.

reformas a los preceptos combatidos que configuran el "sistema de prohibiciones administrativas", puede desprenderse que el legislador consideró necesario prohibir la autorización administrativa para la realización de toda actividad relacionada con la marihuana en atención a los efectos nocivos asociados a dicho producto en la "salud" y el "orden público".

86. En efecto, la expedición de la Ley General de Salud tuvo como propósito reglamentar el derecho a la protección de la salud.⁷⁷ Al respecto, entre las propias finalidades previstas en la propia ley se señaló "la promoción del bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades" (fracción I del artículo 2o.). De esta manera, con el objeto de alcanzar dicho nivel de bienestar, el legislador consideró necesario implementar un adecuado "control sanitario" de los psicotrópicos y narcóticos, bajo la premisa de que su uso constituye un problema para la salud pública en tanto genera dependencia para el consumidor.⁷⁸
87. Posteriormente se realizaron reformas a diversos preceptos con el objeto de precisar de mejor manera las sustancias que de acuerdo con la ley pueden considerarse estupefacientes o psicotrópicos.⁷⁹ Así, el legislador entendió que con dichas precisiones se avanzó en "dar progresiva efectividad al derecho a la protección de la salud, contenido en el artículo 4o. de nuestra Constitución".⁸⁰ En esta línea, en la exposición de motivos de la reforma al artículo 245 de la Ley General de Salud promulgada el siete de enero de dos mil catorce —en la cual se agregaron como psicotrópicos las siguientes sustancias: mefedrona, piperazina, TFMPP, midazolam y K2—,⁸¹ se señaló que "uno de los problemas de salud pública más serios a nivel internacional

⁷⁷ Esta ley sustituyó al antiguo Código Sanitario y se promulgó el 7 de febrero de 1984.

⁷⁸ Así se advierte de la exposición de motivos de dicha ley, y sus correspondientes dictámenes legislativos. Al respecto, véase: Exposición de Motivos, Cámara de Origen: Cámara de Diputados, México, Distrito Federal a 15 de Noviembre de 1983 de la Iniciativa de la Ley General de Salud.

⁷⁹ En este sentido, el 23 de diciembre de 1987 se promulgó una reforma a los artículos 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud. Este último artículo no ha sido modificado desde entonces.

⁸⁰ Dictamen de la cámara de origen de las Comisiones Unidas de Salubridad General y Primera Sección de la de Estudios Legislativos, del Senado de la República, de 26 de noviembre de 1987.

⁸¹ Esta reforma se promulgó el 7 de enero de 2014.

es el relativo al *consumo* y comercialización de drogas, fenómeno que en los últimos años ha experimentado una creciente complejidad debido al proceso de internacionalización de las actividades ilícitas de creación, producción y tráfico ilícito de precursores químicos".⁸²

88. En este orden de ideas, también se estableció que "[d]ichas conductas, además de representar el incremento en actividades ilícitas que ha permitido a grupos delictivos obtener grandes recursos y ganancias que favorecen su crecimiento desmedido, han generado un problema que debe analizarse desde la perspectiva del *impacto que provoca en la salud pública*, pues este fenómeno ocasiona el incremento de padecimientos, trastornos e incluso hasta la muerte, todo ello a consecuencia de su uso adictivo, *dejando sentir sus efectos en el ámbito social, económico y político*" (énfasis añadido).⁸³
89. Por otro lado, hay que destacar que el actual artículo 1º de Ley General de Salud dispone que este ordenamiento tiene como objetivo reglamentar el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4º de la Constitución, así como establecer las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de "salubridad general". De acuerdo con la propia ley, este concepto comprende, entre otras cosas, tanto la *prevención del consumo* de estupefacientes y psicotrópicos como la existencia de un *programa contra la farmacodependencia* (fracción XXI del artículo 3º).
90. De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que la finalidad del marco regulatorio para el control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas previsto en la Ley General de Salud es la protección de la "salud" y el "orden público", puesto que de una interpretación sistemática del

⁸² Exposición de motivos de 23 de enero de 2012 realizada por Ejecutivo Federal en el proyecto de reforma de las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud.

⁸³ Exposición de motivos de 23 de enero de 2012 realizada por el Ejecutivo Federal, en el proyecto de reforma de las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud.

ordenamiento, así como de los distintos procesos de reforma a la ley, puede desprenderse que el legislador tuvo la intención de procurar la salud de los *consumidores* de drogas y proteger a la *sociedad* de las consecuencias perniciosas derivadas del consumo de las drogas, dado que se ha considerado que esta actividad tiene efectos nocivos tanto para el consumidor como para la sociedad en general.

91. Al respecto, esta Primera Sala entiende que *ambas finalidades* son constitucionalmente válidas. Por un lado, es evidente que la protección de la salud es un objetivo que legítimamente puede perseguir del Estado, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4º constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la *protección de la salud*.⁸⁴ En esta línea, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal como una pública o social.
92. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo *individual*, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en múltiples precedentes que el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica.⁸⁵ De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar.
93. Por otro lado, la faceta *social o pública* del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la

⁸⁴ Artículo 4. [...].

[...]

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

[...]

⁸⁵ P. LXVIII/2009, sustentada por el Tribunal Pleno, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, página seis, de rubro: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL".

sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud.⁸⁶ En el [REDACTED]⁸⁷ esta Primera Sala reconoció que en aras de tutelar y proteger el derecho humano a la salud, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, etc. En este sentido, puede decirse que la propia Ley General de Salud identifica como un problema de salud pública el consumo de marihuana.

94. En íntima relación con la protección de la salud pública se encuentra la protección al *orden público*. Si bien es complicado definir en qué consiste este principio constitucional,⁸⁸ se trata de un concepto que hace referencia al bienestar de la sociedad en general. Si se entiende de esta manera, no hay duda de que resulta de orden público la persecución de objetivos sociales colectivos a través de decisiones legislativas o políticas públicas. Por lo demás, hay que señalar que la Constitución reconoce como interés legítimo del Estado la protección del conglomerado social.
95. En cambio, la prohibición del consumo de marihuana por la mera autodegradación moral que implica no persigue un propósito legítimo. La Constitución no impone un ideal de excelencia humana, permite que cada individuo elija su propio plan de vida y adopte el modelo de virtud personal

⁸⁶ P./J. 136/2008, sustentada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, octubre de dos mil ocho, página sesenta y uno, de rubro: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL".

⁸⁷ Sentencia de 10 de junio de 2015, resuelta por mayoría de cuatro votos de los Señores Ministros: José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas, y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en contra del emitido por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien manifestó que se reserva el derecho de formular voto particular.

⁸⁸ El principio de orden público se encuentra reconocido en la Constitución en los artículos 6º, párrafo primero, 16 párrafo primero, 94, párrafo octavo, 115, fracción VII, 122, BASE QUINTA, inciso F) y 130, párrafo segundo.

que considere válido, en tanto no afecte a los demás.⁸⁹ Así, las afectaciones al desempeño social que ocasiona la marihuana⁹⁰ —por ejemplo, disminución de productividad laboral del consumidor y el denominado “síndrome amotivacional”⁹¹— no pueden considerarse como razones válidas para intervenir el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Además, ni de la ley que ahora se analiza, ni de los procesos legislativos que la han reformado, se desprende la intención del legislador de promover un determinado modelo de virtud personal. Como se ha explicado, la ley pretende proteger la salud y el orden público.

96. Por ello, esta Primera Sala estima que el análisis practicado por el Juez de Distrito⁹² fue sustancialmente correcto al determinar que los fines perseguidos por la norma eran la protección de la salud y el orden público y que éstos resultaban constitucionalmente válidos.
97. Una vez que se ha establecido que el marco regulatorio para el control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas previsto en la Ley General de Salud tiene una finalidad constitucionalmente válida, corresponde ahora analizar si la prohibición de consumir marihuana para fines lúdicos y, en consecuencia, la prohibición también de todas las acciones necesarias para poder estar en posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo (siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etc.), constituye una medida idónea para proteger la salud y el orden público.

⁸⁹ Nino, *op. cit.*, p. 423.

⁹⁰ De acuerdo con algunos estudios, los efectos de la marihuana en la vida escolar y profesional del consumidor promedio son poco claros. Aunque se ha relacionado el bajo desempeño escolar con la frecuencia de uso, también se ha señalado que ello puede deberse a otras causas, como condicionamientos socioeconómicos y culturales de quienes la consumen. Al respecto, véase Caulkins, Jonathan P., Hawken, Angela, Kilmer, Beau, y Kleiman, Mark, *Marijuana Legalization: What Everyone Needs to Know*, Nueva York, Oxford University Press, 2012, p. 77. En este orden de ideas, en una encuesta realizada en el Distrito Federal se encontró que el 70% de los usuarios de marihuana trabajan, 43% estudia y 20% estudia y trabaja. Cfr. Zamudio Angles, Carlos Alberto y Castillo Ortega, Lluvia, *Primera encuesta de usuarios de drogas ilegales en la Ciudad de México*, México, Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas A.C., 2012.

⁹¹ El “síndrome amotivacional” (‘amotivational syndrome’) se define como un patrón del comportamiento caracterizado por la falta de motivación, energía e iniciativa. Cfr. Hall, Wayne, Degenhardt, Louisa, y Lynskey, Michael, *The Health and Psychological Effects of Cannabis Use*, 2ª ed., Cambera, Australian Government Publishing Service, 2001, p. ix.

⁹² Véase la foja 511 del Juicio de amparo [REDACTED]

b. Idoneidad de la medida

98. En esta etapa del escrutinio debe analizarse si la medida impugnada es un medio adecuado para alcanzar los fines perseguidos por el legislador. En este sentido, el examen de idoneidad presupone la existencia de una *relación empírica* entre la intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en *algún modo* y en *algún grado* a lograr el propósito que busca el legislador. Así, la idoneidad de una medida legislativa debe mostrarse a partir de conocimientos científicos o convicciones sociales generalmente aceptadas.⁹³
99. Ahora bien, en el caso concreto debe determinarse si el "sistema de prohibiciones administrativas" configurado por los artículos impugnados constituye una medida idónea para proteger la salud y el orden público. Sin embargo, antes de llevar a cabo ese escrutinio resulta indispensable realizar algunas consideraciones metodológicas sobre la manera de realizar el examen de idoneidad de la medida.
100. En primer lugar, cuando en la literatura jurídica se aborda el tema de la idoneidad de la prohibición del consumo de drogas en ocasiones suele señalarse que este análisis consiste en determinar si dicha medida efectivamente reduce dicho consumo. Los partidarios de realizar el análisis de idoneidad de la manera antes indicada consideran que una prohibición que en los hechos mostrara ser *ineficaz* para reducir el consumo no superaría esta grada del examen de proporcionalidad.⁹⁴ Sobre este punto, efectivamente existen muchos estudios que muestran que la prohibición no disuade el consumo.⁹⁵ Así, en el caso que nos ocupa podría sostenerse que

⁹³ Bernal Pulido, *op.cit.*, p. 733.

⁹⁴ Uprimny, Rodrigo, Guzmán, Diana Esther y Parra, Jorge Alberto, "¿Des-proporción en la judicialización de los delitos de droga? El caso colombiano", en Catalina Pérez Correa (coord.), *Justicia desmedida. Proporcionalidad y delitos de drogas en América Latina*, México, Fontamara, 2012, pp. 111-113.

⁹⁵ Por todos, véanse Pedersen, Willy y Skardhamar, Torbjorn, "Cannabis and Crime: Findings From a Longitudinal Study", *Addiction. Society for the Study of Addiction*, vol. 105, núm. 1, 2010, p. 116; Fergusson, David., Swain-Campbell, Nicola., y Horwood, John, "Arrests and Convictions for Cannabis Related Offences in a New Zealand Birth Cohort", *Drug and Alcohol Depend.*, vol. 70, núm. 1, p. 61.

el "sistema de prohibiciones administrativas" configurado por los artículos impugnados no ha logrado disminuir el consumo de marihuana.⁹⁶ En esta línea, por ejemplo, datos de la Encuesta Nacional de Adicciones señalan que entre 2002 y 2008 el consumo de drogas ilegales aumentó de 4.6% a 5.2% entre la población de 12 a 65 años,⁹⁷ lo que podría interpretarse en el sentido de que el citado sistema de prohibiciones es ineficaz para reducir el consumo.

101. No obstante, esta Primera Sala considera que la metodología antes expuesta resulta inadecuada para determinar la idoneidad de la medida impugnada. En este orden de ideas, aceptar que el análisis debe realizarse de esta manera conllevaría a declarar la inconstitucionalidad de cualquier prohibición u obligación que fuera ineficaz para lograr que la conducta de los destinatarios de la norma se conformara a los mandatos establecidos en esas normas. En este sentido, esta Suprema Corte estima que las normas prohibitivas no pueden ser inconstitucionales por ser ineficaces para motivar la conducta de las personas. En este sentido, la reducción del consumo no puede considerarse un fin en sí mismo de la medida, sino en todo caso un estado de cosas que constituye un *medio* o un *fin intermedio* para la consecución de una finalidad ulterior, como la protección de la salud pública o el orden público.⁹⁸

⁹⁶ Al respecto, existe una amplia literatura que muestra que las políticas prohibicionistas no han sido efectivas en reducir consistente y permanentemente la oferta y demanda de drogas. Por todos, véanse Blackwell, J. Michael, "The Costs and Consequences of US Drug Prohibition for the Peoples of Developing Nations", *Indiana International and Comparative Law Review*, vol. 24, núm. 3, 2014, p. 665; Christiansen, Matthew, "A Great Schism: Social Norms and Marijuana Prohibition. A Short Essay", *Harvard Law and Policy Review*, vol. 4, núm. 1, 2010, p. 240; Camacho, Adriana, Gaviria, Alejandro, y Rodríguez, Catherine, "El consumo de droga en Colombia", en Alejandro Gaviria Uribe y Daniel Mejía Londoño (comp.), *Políticas antidroga en Colombia. Éxitos, fracasos y extravíos*, Bogotá, Ediciones Uniandes, 2011, p. 5; Kisley Stephen, "The Case for Policy Reforming Cannabis Control", *The Canadian Journal of Psychiatry*, vol. 53, núm. 12, 2008, p. 795; Beckett, Katherine, y Herbert, Steve, *The Consequences and Costs of Marijuana Prohibition*, Seattle, ACLU/University of Washington, 2009, p. iv; van het Loo, Mirjam, Hoorens, Stijn, van 't Hof, Christian, y Kahan, James P., *Cannabis Policy. Implementation and Outcomes*, Santa Monica, RAND Corporation, 2003, p. 48. En el mismo sentido, véanse los siguientes reportes: Open Society Institute, *War on Drugs. Report of The Global Commission on Drug Policy*, 2011, p. 2; y *Report by the Advisory Committee on Drug Dependence*, Londres, Home Office, 1969, p. 1.

⁹⁷ Pérez Correa, Catalina, "Delitos contra la salud y (des)proporcionalidad en la legislación mexicana", en Pérez Correa, *op. cit.*, p. 196.

⁹⁸ En la literatura especializada se distinguen los "problemas primarios", ocasionados por el abuso de una sustancia psicoactiva, de los "problemas secundarios" derivados de las políticas de control que los Estados adoptan frente a la sustancia. Cfr. Uprimny, Guzmán y Parra, *op. cit.*, p. 108.

102. Una forma alternativa de analizar la idoneidad consiste en sostener que el "sistema de prohibiciones administrativas" configurado por los artículos impugnados será idóneo para alcanzar los fines perseguidos por el legislador, consistentes en la protección de la salud y el orden público, en la medida que exista una *relación empírica* que vincule al consumo de la marihuana con ciertos *daños o afectaciones* a la salud y al orden público. Dicho de otra manera, si el consumo de *marihuana no causa* daños o afectaciones a la salud o a la sociedad en su conjunto, la prohibición analizada no será una medida idónea para proteger estos objetivos constitucionales. Como puede observarse, el examen de idoneidad exige entonces la corroboración de la existencia de una *relación empírica* entre el consumo de marihuana y ciertos estados de cosas que pueden caracterizarse como daños o afectaciones a la salud o a la sociedad.
103. Ahora bien, si se examina la literatura que se ha ocupado de analizar los efectos del consumo recreativo de la marihuana, pueden identificarse al menos los siguientes estados de cosas que normalmente se considera están asociados al consumo recreativo de la marihuana: afectaciones a la salud; generación de dependencia; propensión a utilizar drogas "más duras"; e inducción a la comisión de otros delitos. Así, en el siguiente apartado se evaluará si la marihuana causa las citadas afectaciones a la salud y al orden público.
104. Debe también precisarse que para superar el examen de idoneidad basta con que dichas afectaciones existan, sin importar el *grado o entidad* que tengan. Dicho de otra forma, para que la prohibición del consumo de marihuana encuentre justificación constitucional desde el punto de vista de la idoneidad de la medida es necesario mostrar que éste afecta la salud y el orden público, aun cuando dicha afectación sea *mínima*.⁹⁹ Así, una

⁹⁹ En opinión de la *Global Commission on Drug Policy*, las políticas públicas sobre drogas deben basarse en evidencia que demuestre que en verdad éstas ayudarán a reducir los daños a la salud, la seguridad de las personas y la sociedad en general. Open Society Institute, *op. cit.*, p. 5.

intervención podrá considerarse idónea si la correlación entre medio y fin es positiva, con independencia de su nivel de eficacia.

105. De acuerdo con lo anterior, a continuación se analiza si existe evidencia empírica que justifique la creencia de que el consumo de marihuana causa los daños o afectaciones antes identificados. Para corroborar la existencia de dicha relación, esta Primera Sala se apoyará en la literatura científica que ha abordado esta cuestión, así como en varios estudios empíricos disponibles sobre el tema.
106. Como una observación preliminar, vale la pena destacar que la evidencia disponible muestra que efectivamente el consumo de marihuana genera daños o afectaciones de distinto tipo. Con todo, como se muestra a continuación, algunas de esas afectaciones han sido corroboradas de manera concluyente, mientras que otras son poco probables o se tratan de meras especulaciones. Al respecto, cabe señalar que la incertidumbre se explica en buena medida al hecho de que es difícil determinar si el uso de marihuana es *causa* de los efectos negativos a la salud y al orden público o si sólo se trata de una simple *correlación*.¹⁰⁰

➤ **Afectaciones a la salud**

107. En términos generales, los estudios coinciden en que a partir de la evidencia que existe actualmente el consumo de marihuana en personas adultas no supone un riesgo importante para salud, salvo en el caso de que se utilice de forma crónica y excesiva.¹⁰¹ En relación con los efectos que

¹⁰⁰ Sobre este tema, véanse entre otros Caulkins, Hawken, Kilmer, y Kleiman, *op. cit.*, p. 55; Room, Robin, Fischer, Benedikt, Hall, Wayne, Lenton, Simon, y Reuter, Peter, *Cannabis Policy: Moving Beyond Stalemate*, Oxford, Oxford university Press, 2010, p.32; D' Souza, Deepak Cyril, Sewell, Richard Andrew, y Ranganathan, Mohini, "Cannabis and Psychosis/Schizophrenia: Human Studies", *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, vol. 259, núm., 2009, pp. 413-431, p. 413; y Hall, Wayne, y Liccardo Paccula, Rosalie, *Cannabis Use and Dependence: Public Health and Public Policy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 88.

¹⁰¹ Fischer, Benedikt, Jeffries, Victoria, Hall, Wayne, Room, Robin, Goldner, Elliot, Rehm J., "Lower Risk Cannabis Use Guidelines for Canada (LRCUG): A Narrative Review of Evidence and Recommendations", *Canadian Journal of Public Health*, vol. 102, núm. 5, 2011, p. 326; y Hall,

causa la marihuana en la salud de las personas, la literatura científica distingue las alteraciones temporales de las crónicas. Así, mientras las primeras tienen lugar únicamente mientras dura la intoxicación en el cuerpo, las segundas persisten aun cuando el consumidor no se encuentre intoxicado.¹⁰²

108. Las alteraciones *temporales* ocurren como consecuencia inmediata del consumo de la marihuana. Algunos de los efectos que pueden generar son pánico, reducción de la ansiedad, estado de alerta, tensión, incremento de la sociabilidad, reducción gradual de funciones cognitivas y motoras, percepciones intensificadas de la realidad —colores, sabores, sensaciones— o alucinaciones visuales y/o auditivas.¹⁰³ Así, al tratarse de efectos que dependen del estado de intoxicación que produce la marihuana, las investigaciones indican que son reversibles y no representan un riesgo demostrado para la salud.¹⁰⁴

109. La existencia de alteraciones *crónicas* como consecuencia del consumo es muy controvertida en la literatura especializada. Los estudios indican que las implicaciones permanentes son poco probables o mínimas, que su persistencia es incierta e incluso que pueden tener origen en una pluralidad de factores distintos al consumo.¹⁰⁵ Un ejemplo de esta última situación es la asociación que se ha encontrado entre fumar marihuana y cánceres

Wayne, "The Adverse Effects of Cannabis Use: What Are They, and What Are Their Implications For Policy", *International Journal of Drug Policy*, 2009, vol. 20, pp. 458-466.

¹⁰² En este sentido, véase por todos Hall, Wayne, y Degenhardt, Louisa, "The Adverse Health Effects of Chronic Cannabis Use", *Drug Testing and Analysis. Special Issue: Cannabinoids part II: The Current Situation With Cannabinoids*, vol. 6, núms. 1-2, 2013, pp. 39-45; y Hall, Degenhardt y Lynskey, *op. cit.*, p. 4.

¹⁰³ En este orden de ideas, incluso se ha señalado que efectos negativos en el estado de intoxicación, como ansiedad, pánico, paranoia y/o psicosis, se asocian generalmente con sujetos psicológicamente vulnerables, como personas con esquizofrenia. Al respecto, véase Ashton, Heather, "Pharmacology And Effects of Cannabis: A Brief Review", *The British Journal of Psychiatry*, vol. 178, núm. 2, 2001, pps. 104-105.

¹⁰⁴ Douaithy, Antoine, "Cannabis Revisited", *UPMC Synergie*, 2013, pps. 1-9, p. 3.

¹⁰⁵ A manera de ejemplo, un estudio muestra, entre otras cosas, que existe incertidumbre en torno a si los efectos adversos asociados con la marihuana se relacionan *causalmente* con su consumo, que no está clara la *dirección* de la relación entre el consumo y los desórdenes depresivos o emocionales, que las afectaciones cognitivas o intelectuales, la intensidad y reversibilidad de la afectación es *incierta*, y que las consecuencias psicóticas están sujetas a que el consumidor padezca alguna susceptibilidad especial a padecimientos psiquiátricos. Al respecto, véase Hall y Degenhardt, *op. cit.*, p. 43.

respiratorios,¹⁰⁶ la cual podía explicarse porque buena parte de los consumidores de marihuana también fuman tabaco, lo que implicaría que no está probada la existencia de una conexión causal entre el consumo de marihuana y el cáncer.¹⁰⁷

110. Por otra parte, existen investigaciones que sostienen que la marihuana produce los *mismos* daños respiratorios que cualquier otra sustancia fumada,¹⁰⁸ y que resulta *menos dañina* que otras sustancias como el opio, las anfetaminas, el alcohol o los barbitúricos.¹⁰⁹ En este orden de ideas, diversos reportes concluyen que el peligro de la marihuana se ha "sobreepuesto",¹¹⁰ y generalmente subrayan que esta sustancia tiene un nivel de toxicidad extremadamente bajo.¹¹¹ Por lo demás, también existen estudios que señalan que los efectos normalmente considerados "crónicos" son esencialmente *reversibles* después de que se suspende el consumo por un período variable de tiempo.¹¹²

¹⁰⁶ En este sentido, véanse Mehra, Berthiller, Julien, Strail, Kurt, Boniol, Mathieu; Voirin, Nicolas; Benhaïm-Luzon, Veronique; Ayoub, Wided Ben, Dari, Iman, Laouamri, Slimane, Hamdi-Cherif, Mokhtar, Bartal, Mohamed, Ayed, Fehrat Ben, y Sasco, Annie, "Cannabis Smoking and Risk of Lung Cancer in Men: A Pooled Analysis of Three Studies in Maghreb", *Journal of Thoracic Oncology*, 2008, vol. 3, núm. 12, pps. 1398 y 1401; Reena, Moore, Brent A., Crothers, Kristina, Tetrault, Jeanette; Fiellin, David A., "The Association Between Marijuana Smoking and Lung Cancer: A Systematic Review", *Archives of Internal Medicine*, vol. 166, 2006, pp. 1359-1367; y Hashibe, Mia, Morgenstern, Hal, Cui, Yan, Tashkin, Donald P., Zhang, Zuo-Feng, Cozen, Wendy, Mack, Thomas M., y Greenland, Sander, "Marijuana Use and the Risk of Lung and Upper Aerodigestive Tract Cancers: Results of a Population-Based Case-Control Study", *Cancer, Epidemiology, Biomarkers & Prevention*, vol. 15, núm. 10, 2006, pp. 1829-1834, p. 1829.

¹⁰⁷ Sobre esta discusión, véase Caulkins, Hawken, Kilmer y Kleiman, *op. cit.*, pps. 65-66; Hashibe, Morgenstern, Cui, Tashkin, Zhang, Cozen, Mack, y Greenland, *op. cit.*, p. 1829; Hall y Degenhardt, *op. cit.*, p. 40; Hall, Wayne, y Taylor, D. Robin, "Respiratory Health Effects of Cannabis: Position Statement of The Thoracic Society of Australia and New Zealand", *Internal Medicine Journal*, vol. 33, 2003, pp. 310 y 312; Hall, Wayne, "What Has Research over The Past Two Decades Revealed About The Adverse Health Effects of Recreational Cannabis Use?", *Addiction*, vol. 110, núm. 1, 2015, p. 22.

¹⁰⁸ Al respecto, véase Royal College of Physicians of London, *Cannabis and Cannabis-Based Medicines. Potential Benefits and Risks to Health*, Londres, 2005, p. vii; Joy, E. Janet, Watson, Stanley, y Benson, John A. (eds.), *Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base*, Washington, D.C., National Academy Press, 1999, pps. 5-6.

¹⁰⁹ Ballotta, Danilo, Bergeron, Henri, y Hughes, Brendan, "Cannabis Control in Europe", en Sharon Rödnér Sznitman, Börje Olsson, Robin Room (eds.), *A Cannabis Reader: Global Issues and Local Experiences, Perspectives on Cannabis Controversies, Treatment and Regulation in Europe*; Lisboa, EMCDDA, 2008, pps. 107-108; y *Report by the Advisory Committee on Drug Dependence*, *op. cit.*

¹¹⁰ Ballotta, Bergeron, y Hughes, *op. cit.*, p. 108.

¹¹¹ Ashton, *op. cit.*, p. 104.

¹¹² A manera de ejemplo, véanse Solowij, Nadia, *Cannabis and Cognitive Functioning*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pps. 47, 79 y 169; y Pope, Harrison G., Gruber, Amanda J., Hudson, James I., Huestis, Marilyn A. y Yurgelun-Todd, Deborah, "Neuropsychological

111. En esta línea, tampoco se ha demostrado de manera concluyente que el consumo produzca afectaciones en los sistemas reproductivos del consumidor,¹¹³ ni existe evidencia de que la marihuana genere algún deterioro permanente en el sistema cardiovascular,¹¹⁴ ni tampoco se ha probado que dosis prolongadas produzcan afectaciones cognitivas severas como las que se observan tras el consumo crónico de alcohol.¹¹⁵
112. De la misma manera, los estudios coinciden en que es *incierto* la relación entre la marihuana y las alteraciones psicóticas o mentales en los consumidores,¹¹⁶ con excepción de los consumidores que son susceptibles de sufrir padecimientos mentales. No obstante, deben advertirse los daños psicológicos que genera la marihuana cuando su consumo inicia en la adolescencia. Diversos estudios explican que existe mayor probabilidad de sufrir esquizofrenia¹¹⁷ y depresión¹¹⁸ en la edad adulta, cuando el consumo excesivo de marihuana inicia en edades tempranas.
113. Ante tal panorama, esta Primera Sala observa que si bien la evidencia médica muestra que el consumo de marihuana puede ocasionar daños a la salud, se trata de afectaciones que pueden calificarse como no graves, siempre y cuando no se trate de consumidores menores edad.

➤ **Desarrollo de dependencia**

114. En la literatura científica suele distinguirse entre el abuso y la dependencia a una sustancia. Mientras el *abuso* supone el uso continuo de drogas, la

Performance in Long-term Cannabis Users", *Archives of General of Psychiatry*, 2001, vol. 58, núm. 10, p. 909.

¹¹³ Hall, Degenhardt y Lynskey, *op. cit.*, p. 56.

¹¹⁴ Hall, Degenhardt y Lynskey, *op. cit.*, p. 64.

¹¹⁵ Hall, Degenhardt y Lynskey, *op. cit.*, p. 86.

¹¹⁶ Zammit, Stanley, Moore, Theresa H. M., Lingford-Hughes, Anne, Barnes, Thomas R. E., Jones, Peter B., Burke, Margaret, y Lewis, Glyn, "Effects of Cannabis Use on Outcomes of Psychotic Disorders: Systematic Review", *The British Journal of Psychiatry*, vol. 193, núm. 5, 2008, pp. 357 y 361; Hall, Degenhardt y Lynskey, *op. cit.*, p. 75.

¹¹⁷ Andréasson, Sven, Engstrom, Ann, Allebeck, Peter, y Rydberg, Ulf, "Cannabis and Schizophrenia: A Longitudinal Study of Swedish Conscripts", *Lancet*, vol. 330, núm. 8574, 1987, p. 1483.

¹¹⁸ Fergusson, David, Horwood, John, "Early Onset Cannabis Use and Psychosocial Adjustment in Young Adults", *Addiction*, vol. 92, 1997, p. 279.

dependencia precisa que el consumo satisfaga criterios adicionales, como el desarrollo de tolerancia a la droga, síndrome de abstinencia e interferencia del consumo con el desarrollo de otras actividades del consumidor.¹¹⁹ En este sentido, los consumidores regulares de marihuana no califican *necesariamente* como farmacodependientes.

115. Ahora bien, existen claras divergencias en la literatura sobre la probabilidad y la frecuencia con la que la farmacodependencia se presenta en los consumidores de marihuana. Adicionalmente, también hay discrepancias en el período y la intensidad de consumo que son necesarios para que la marihuana provoque algún grado de dependencia. Al respecto, existen estudios que afirman que existe un *bajo grado de probabilidad* de que la marihuana produzca dependencia. En efecto, de acuerdo con estas investigaciones no sólo pocos usuarios de marihuana desarrollan adicción, sino que además la posibilidad de que el consumo desencadene la dependencia está sujeto a diversos factores preexistentes como son desórdenes conductuales y de personalidad.¹²⁰
116. De este modo, algunos estudios han encontrado que 9% de quienes utilizan marihuana desarrollan dependencia por ella en algún punto de sus vidas,¹²¹ mientras que otras investigaciones plantean que el 10% de las personas que han consumido marihuana alguna vez desarrolla dependencia a la droga.¹²² En la misma línea, otros reportes estiman que hay suficiente

¹¹⁹ American Psychiatric Association (APA), *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5*, 5 ed., Washington, DC: New School Library, 2013, p. 483. Es conveniente precisar que el *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5* es la versión más reciente del manual diagnóstico y estadístico de desórdenes mentales de la APA. En este manual expresamente se ha omitido utilizar el término adicción o dependencia para utilizar en su lugar "substance use disorder" (desorden de uso de sustancia) por considerar que otros usos pueden tener connotaciones potencialmente negativas (al respecto, véase p. 485 del manual). No obstante, dado que el término "desorden de uso de sustancia" es novedoso en México, y en tanto es definido de la misma manera que "dependencia", aquí se utilizará este último término, como se hace en la versión anterior del manual (American Psychiatric Association (APA), *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-4*, Washington, DC: 1994).

¹²⁰ Joy, Stanley, Watson, y Betson, *op. cit.*, p. 6.

¹²¹ Caulkins, Hawken, Kilmer y Kleiman, *op. cit.*, p. 66.

¹²² Hall y Degenhardt, *op. cit.*, p. 40; Hall, Degenhardt y Lynskey, *op. cit.*, pps. 71 y 73.

evidencia para concluir que algunos consumidores crónicos de marihuana efectivamente desarrollan farmacodependencia.¹²³

117. Con todo, numerosos estudios coinciden en que las implicaciones sobre la salud y las consecuencias sociales reportadas por quienes buscan controlar su consumo son mucho *menos severas* que aquellas reportadas por personas adictas a otras sustancias, como el opio o el alcohol. Así, por ejemplo, un reporte demostró que sólo un aproximado del 3% de la población de adultos de Estados Unidos cumpliría el diagnóstico clínico de dependencia, frente a alrededor del 14% de personas que padecen alcoholismo. Por lo demás, investigaciones con conclusiones semejantes también tuvieron lugar en Australia y Nueva Zelanda.¹²⁴

➤ **Propensión a utilizar drogas “más duras”**

118. En términos generales, puede decirse que los estudios disponibles demuestran que la marihuana tiene un nivel de incidencia *muy bajo* en el consumo de otras drogas más riesgosas.¹²⁵ Con todo, es cierto que se han identificado asociaciones entre el consumo de marihuana y el consumo de otras drogas más intensas como la heroína o la cocaína.¹²⁶ En esta línea, algunos estudios han intentado explicar estas correlaciones desde una perspectiva farmacológica, argumentando que los efectos químicos de la marihuana propician el consumo posterior de otros narcóticos.¹²⁷

119. No obstante, esta postura ha sido contrastada con diversas explicaciones sociales y contextuales que entienden el fenómeno a partir de los

¹²³ Hall, Degenhardt y Lynskey, op. cit., pps. 69-73.

¹²⁴ Hall, Wayne, The health and psychological effects of cannabis use, pps. 216-217; Hall, Degenhardt y Lynskey, op. cit., p. 148; Hall y Degenhardt, op. cit., p. 40.

¹²⁵ Hall y Degenhardt, op. cit., pps. 41 y 43.

¹²⁶ Kandel, Denise B., *Examining the Gateway Hypothesis: Stages and Pathways of Drug Involvement*, en Kandel, Denise B. (ed.), *Stages and Pathways of Drug Involvement. Examining the Gateway Hypothesis*, New York, Cambridge University Press, 2002, pp. 3-18, p. 5.

¹²⁷ Aun los estudios que han sostenido esta explicación, señalan que sus resultados deben ser examinados cuidadosamente, pues reconocen que existen explicaciones diferentes que podrían dar sentido a una probable relación causal, como factores genéticos o sociales. A manera de ejemplo, véanse Emmet, David y Nice, Graeme, *What You Need to Know About Cannabis: Understanding the Facts*, Londres, Jessica Kingsley Publishers, 2009, p. 61.

condicionamientos socioeconómicos, culturales y biológicos del propio consumidor.¹²⁸ Así, puede decirse que estas aproximaciones al problema — que se sustentan esencialmente en la hipótesis de que existe una pluralidad de razones ajenas a la propia marihuana para el consumo de otras drogas— tienen mayor soporte empírico.¹²⁹

120. En este sentido, algunos estudios descartan por completo que el consumo de marihuana provoque el uso subsecuente de otras drogas. Al respecto, señalan que la marihuana más bien podría ser sólo una variable que haya que analizar junto con otros factores de riesgo sociales, psicológicos o fisiológicos.¹³⁰ En cambio, otros estudios matizan esta conclusión señalando que no existe evidencia concluyente que muestre que la marihuana lleve al consumo de otras drogas.¹³¹
121. De esta manera, puede decirse que los reportes coinciden en que la marihuana tiene un *muy bajo* grado de incidencia en el consumo de drogas más riesgosas. En todo caso, parece ser que el consumo de drogas subsecuentes es resultado de diversos factores actuando de manera conjunta, pero no del consumo de la marihuana en sí mismo.¹³² En esta línea, por ejemplo, estudios sociológicos señalan que la presión de pares o el uso continuo por parte de estos de marihuana *aumentan la probabilidad*

¹²⁸ Hall, Degenhardt, y Lynskey, *op. cit.*, p. 103. Al respecto, puede señalarse que la relación se ha explicado a partir del hecho de que normalmente los usuarios de marihuana tienen mayor oportunidad de conseguir otras drogas ilícitas en el mercado negro.

¹²⁹ En esta línea, véanse entre otros Hall y Degenhardt, *op. cit.*, p. 41; Wagner, Fernando A, y Anthony, James C., "Into the World of Illegal Drug Use: Exposure Opportunity and Other Mechanisms Linking the Use of Alcohol, Tobacco, Marijuana, and Cocaine", *American Journal of Epidemiology*, vol. 155, núm. 10, 2002, p. 923; Fergusson, David M, Boden, Joseph, Horwood, John, "The Developmental Antecedents of Illicit Drug Use: Evidence From a 25-year Longitudinal Study", *Drug Alcohol Depend*, vol. 96, núms. 1-2, 2008, p. 175; Morral, Andrew, McCaffrey, Daniel, Paddock, Susan, "Reassessing the Marijuana Gateway Effect", *Addiction*, vol. 97, núm. 12, 2002, p. 1493; Lessem, Jeff, Hopfer, Christian, Haberstick, Brett, Timberlake, David, Ehringer, Marissa, y Smolen, Andy, "Relationship between Adolescent Marijuana Use and Young Adult Illicit Drug Use", *Behavior Genetics*, vol. 36, núm. 4, 2006, p. 488.

¹³⁰ Joy, Watson, y Benson, *op. cit.*, p. 6; Caulkins, Hawken, Kilmer y Kleiman, *op. cit.*, pps. 68-69. Así, por ejemplo, en un reporte reciente se afirma que aun si existiera una relación causal entre el consumo de la marihuana y el consumo de drogas más dañinas, ésta se explicaría más por factores sociológicos que por factores farmacológicos de la marihuana. Al respecto, *cfr.* Hall, Degenhardt, y Lynskey, *op. cit.*, p. 109.

¹³¹ Caulkins, Hawken, Kilmer, y Kleiman, *op. cit.*, pps. 68-69; National Institute on Drug Abuse, *Marijuana and Health. Fourth Report to the United States Congress from the Secretary of Health, Education and Welfare*, 1974, p. 6.

¹³² Hall, Degenhardt, y Lynskey, *op. cit.*, pps. 108-109.

de que alguien la consuma por primera vez,¹³³ lo que desde luego no implica que el consumo vaya a desarrollarse de manera continua.¹³⁴

➤ **Inducción a la comisión de otros delitos**

122. En relación con esta asociación la evidencia es altamente especulativa. En efecto, diversos estudios han concluido que el consumo de marihuana no es un factor determinante en la comisión de crímenes.¹³⁵ Por un lado, la correlación es estadísticamente *muy pequeña* para considerarse significativa.¹³⁶ Por otro lado, se señala que la comisión de delitos y el consumo de marihuana pueden tener origen en las mismas causas sociales.
123. De hecho, la evidencia disponible permite afirmar que la marihuana por sí misma no induce la comisión de delitos violentos, sino todo lo contrario.¹³⁷ En este sentido, diversos estudios señalan que el consumo de marihuana inhibe los impulsos de agresión del usuario, ya que generalmente produce estados de letargo, somnolencia y timidez.¹³⁸ De acuerdo con una encuesta aplicada en la Ciudad de México, el 26.8% de los usuarios adultos de drogas ilícitas afirmó haber realizado algún delito bajo el efecto de las drogas, y de estos, únicamente 1.3% lo hizo bajo el efecto de la marihuana.¹³⁹
124. Aunque la tasa de consumo de marihuana es mayor entre las personas que han delinquido que entre las que no, ello probablemente se deba a que la comisión de delitos y el consumo de marihuana tienen como origen las mismas causas sociales.¹⁴⁰ Por lo demás, es evidente que si algunos

¹³³ Joy, Stanley, Watson, y Betson, *op. cit.*, p. 61; Ali, Mir M, Amialchuk, Aliaksandr, Dwyer, Debra S., "The Social Contagion Effect of Marijuana Use among Adolescents", *PLoS ONE*, vol. 6, núm. 1, 2011, p. 1.

¹³⁴ Joy, Stanley, Watson, y Betson, *op. cit.*, p. 61.

¹³⁵ Pedersen y Skardhamar, *op. cit.*, pps. 109-118, p. 116.

¹³⁶ Caulkins, Hawken, Kilmer, y Kleiman, *op. cit.*, p. 74 y 75.

¹³⁷ Caulkins, Hawken, Kilmer, y Kleiman, *op. cit.*, p. 74.

¹³⁸ *Report by the Advisory Committee on Drug Dependence, op. cit.*, p.1.

¹³⁹ Zamudio Angles y Castillo Ortega, *op. cit.*, p. 14.

¹⁴⁰ Caulkins, Hawken, Kilmer, y Kleiman, *op. cit.*, p. 74.

consumidores enfrentan cargos penales es precisamente porque el consumo de marihuana también está penalizado.

125. Con todo, en relación con la asociación entre consumo de marihuana y accidentes automovilísticos, los estudios más recientes muestran que efectivamente el consumo de dicha sustancia disminuye las habilidades necesarias para manejar automóviles y, por tanto, aumenta las probabilidades de causar accidentes viales.¹⁴¹ De hecho, el efecto se ve incrementado cuando se combina el consumo de marihuana con alcohol.¹⁴² Al respecto, es importante señalar que la disminución de las habilidades para conducir cuando se consume marihuana son más variables que cuando se ingiere alcohol, pues sus efectos están sujetos a factores como la dosis, la tolerancia desarrollada por consumo frecuente, entre varios más.¹⁴³

126. Así, de la evidencia analizada se desprende que el consumo de marihuana no incentiva la comisión de otros delitos. Aunque consumo y criminalidad son situaciones que generalmente se asocian, ello puede deberse a diversas explicaciones sociales y contextuales, en tanto ambos fenómenos pueden tener como origen las mismas causas. Por otro lado, muchos adictos enfrentan el sistema punitivo del Estado precisamente por la existencia de prohibiciones al consumo de marihuana. Sin embargo, también se constató que el uso de marihuana sí afecta negativamente las

¹⁴¹ Hartman, Rebecca, y Huestis, Marilyn A., "Cannabis Effects on Driving Skills", *Clin Chem*, vol. 59, núm. 3, 2013, p. 478; Li, Mu-Chen, Brady, Joanne E., DiMaggio, Charles J., Lusardi, Arielle R., Tzong, Keane Y., y Li, Guohua, "Marijuana Use and Motor Vehicle Crashes", *Epidemiologic Review*, vol. 34, núm. 1, 2012, p. 65; Bergeron, Jaques, Langlois, Julie, y Cheang, Henry S., "An Examination of the Relationships Between Cannabis Use, Driving Under the Influence of Cannabis and Risk-Taking on the Road", *European Review of Applied Psychology*, vol. 64, núm. 3, 2014, p. 101; Asbridge, Mark, Hayden, Jill A., Cartwright, Jennifer L., "Acute Cannabis Consumption and Motor Vehicle Collision Risk: Systematic Review of Observational Studies and Meta-Analysis", *British Medical Journal*, vol. 344, 2012, p. 1.

¹⁴² Hartman y Huestis, *op. cit.*, p. 478; Downey, Luke Andrew, King, Rebecca, Papafotiou, Katherine, Swann, Phillip, Ogden, Edward, Boorman, Martin, y Stough, Con, "The Effects of Cannabis and Alcohol on Simulated Driving: Influences of Dose and Experience", *Accident Analysis and Prevention*, vol. 50, 2013, p. 879; Li, Brady, DiMaggio, Lusardi, Tzong, y Li, *op. cit.*, p. 70; Sewell, Andrew, Poling, James, Sofuoglu, Mehmet, "The Effect of Cannabis Compared with Alcohol on Driving", *American Journal on Addictions*, vol. 18, núm. 3, 2009, p. 1.

¹⁴³ Li, Brady, DiMaggio, Lusardi, Tzong, y Li, *op. cit.*, p. 70; Sewell, Poling y Sofuoglu, *op. cit.*, p. 1.

habilidades para conducir vehículos automotores pudiendo aumentar la probabilidad de causar accidentes.

➤ **Conclusión sobre el análisis de idoneidad**

127. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala concluye que existe evidencia para considerar que el consumo de marihuana efectivamente causa diversas afectaciones en la salud de las personas. En este sentido, si bien en términos generales puede decirse que se trata de daños de escasa entidad, ello no es obstáculo para concluir que en el caso concreto el "sistema de prohibiciones administrativas" conformado por los artículos impugnados efectivamente es *una medida idónea* para proteger la salud de las personas.
128. No obstante, la evidencia analizada no logró mostrar que el consumo de marihuana influyera en el aumento de la criminalidad, pues aunque el consumo se asocia a consecuencias antisociales o antijurídicas, éstas pueden explicarse por otros factores, como al contexto social del consumidor o al propio sistema punitivo de la droga. Con todo, los estudios analizados sí permiten concluir que el consumo de marihuana entre los conductores es un factor que aumenta la probabilidad de causar accidentes vehiculares, lo que significa que la medida impugnada únicamente en este aspecto *también es una medida idónea* para proteger el orden público.
129. En ese sentido, esta Primera Sala estima que el análisis practicado por el Juez de Distrito llegó a una conclusión correcta al determinar¹⁴⁴ que la medida era idónea. El recurrente aduce que dicho análisis de idoneidad fue practicado con un estándar inferior al empleado por esta Suprema Corte en tanto el Juez de Distrito estimó que las normas "contribuyen en algún modo y algún grado a buscar el propósito que busca el legislador". Sin embargo, esta Primera Sala recuerda, que en la foja 51 del citado amparo

¹⁴⁴ *Ibidem*, foja 512.

en revisión [REDACTED] éste fue precisamente el estándar empleado al decirse expresamente:

“En este sentido, el examen de idoneidad presupone la existencia de una *relación empírica* entre la intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en *algún modo* y en *algún grado* a lograr el propósito que busca el legislador.”

130. **Por ello, esta Primera Sala comparte la conclusión del Juez de Distrito de que la medida es idónea en los términos señalados.** Resta ahora verificar el resto del test de restricciones para determinar si los agravios del recurrente pueden desvirtuar las siguientes etapas del análisis del Juez de Distrito.

c. Necesidad de la medida

131. Una vez superado el examen de idoneidad, corresponde analizar si el “sistema de prohibiciones administrativas” impugnado es una medida legislativa *necesaria* para proteger la salud y el orden público o si, por el contrario, existen medidas alternativas igualmente idóneas que *afecten en menor grado* el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Precisamente aquí, es donde se demostrará el disenso analítico entre esta Primera Sala y los razonamientos del Juez de Distrito a la luz de los agravios del recurrente. Con todo, antes de examinar la citada medida, esta Primera Sala estima pertinente hacer algunas precisiones metodológicas sobre la manera en la que se debe realizar el análisis comparativo con otras medidas alternativas en esta grada del test de proporcionalidad.

132. En este orden de ideas, el examen de necesidad implica corroborar, en primer lugar, si existen otros medios con un grado de idoneidad igual o superior para lograr los fines que se persiguen y, en segundo lugar, determinar si estas alternativas intervienen con menor intensidad el derecho fundamental afectado. El primer aspecto del test de necesidad es de gran

complejidad, toda vez que supone hacer un catálogo de medidas alternativas y determinar el grado de idoneidad de éstas, es decir, evaluar su nivel de eficacia, rapidez, probabilidad y afectación material de su objeto.¹⁴⁵

133. De esta manera, la búsqueda de medios alternativos podría ser interminable y requerir al juez constitucional imaginarse y analizar todas las alternativas posibles.¹⁴⁶ No obstante, dicho escrutinio puede acotarse ponderando aquellas medidas que el legislador consideró adecuadas para situaciones similares o bien las alternativas que en el derecho comparado se han diseñado para regular el mismo fenómeno. En cualquier caso, conviene aclarar que la comparación entre regulaciones en el marco del análisis de necesidad de una medida cumple la función de *acotar el universo de alternativas* que el legislador pudo considerar al momento de afectar el derecho en cuestión.

134. En este orden de ideas, se expondrá la regulación de las sustancias que provocan un *daño similar*, como el tabaco o el alcohol, sin que ello signifique que el legislador se encuentre obligado a regular de forma idéntica las actividades relacionadas al autoconsumo de marihuana, toda vez que las restricciones al consumo deben ponderarse de acuerdo a las características de cada sustancia. Por lo demás, también se realizará un análisis comparativo con las alternativas a la prohibición del consumo de marihuana que se han implementado en el derecho comparado, sin que ello tampoco signifique que el legislador tenga que adoptar esos esquemas regulatorios. Al respecto, es importante señalar que la referencia a ambos tipos de medidas únicamente se hace con la finalidad de identificar la forma que podría adoptar una medida alternativa con la que legítimamente se pueda comparar la medida adoptada por el legislador mexicano en relación con el consumo de marihuana.

¹⁴⁵ Bernal Pulido, *op. cit.*, p. 750.

¹⁴⁶ Bernal Pulido, *op. cit.*, p. 742.

➤ **Regulación de sustancias similares a la marihuana**

135. Como se mostró al realizar el examen de idoneidad de la medida, la marihuana produce efectos adversos a la salud similares por su intensidad a los que ocasiona el tabaco o el alcohol, aunque muy distintos a los que producen otros estupefacientes y psicotrópicos. La marihuana produce los mismos problemas respiratorios que cualquier otra sustancia fumada,¹⁴⁷ resulta menos dañina que otras sustancias como el opio, las anfetaminas y los barbitúricos,¹⁴⁸ y las implicaciones sobre la salud y las consecuencias sociales reportadas por quienes buscan controlar su consumo son *mucho menos severas* que aquellas reportadas por personas adictas a otras sustancias, como el opio o el alcohol.¹⁴⁹

136. No obstante, a pesar de las similitudes en cuanto a los daños que producen la marihuana, el tabaco y el alcohol, el legislador diseñó un “régimen de permisión controlada” para el consumo de estas dos últimas sustancias. A continuación se exponen las características más importantes de dicho régimen.

137. De acuerdo con la Ley General para el Control del Tabaco, se encuentra estrictamente prohibido la venta, la distribución y el suministro de *tabaco* a menores de edad; prohibición que se extiende a las instituciones educativas públicas y privadas.¹⁵⁰ Por otro lado, también se prohíbe el consumo de tabaco en los espacios 100% libres de humo de tabaco; escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior; lugares con acceso al

¹⁴⁷ Royal College of Physicians, *op. cit.*

¹⁴⁸ Ballotta, Bergeron, y Hughes, *op. cit.*; y *Report by the Advisory Committee on Drug Dependence, op. cit.*

¹⁴⁹ *Report by the Advisory Committee on Drug Dependence, op. cit.*

¹⁵⁰ **Ley General para el Control de Tabaco:**

Artículo 17. Se prohíben las siguientes actividades:

- I. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco a menores de edad;
- II. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior, y
- III. Emplear a menores de edad en actividades de comercio, producción, distribución, suministro y venta de estos productos.

público; y en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas.¹⁵¹ En cambio, la producción y comercio se sujeta a diversas disposiciones administrativas.¹⁵² Finalmente, sólo se permite la publicidad sobre su uso cuando está dirigida a mayores de edad a través de revistas para adultos, correo y dentro de establecimientos de acceso exclusivo para adultos.¹⁵³

138. Del mismo modo, la Ley General de Salud establece prohibiciones para expender o suministrar *bebidas alcohólicas* a menores de edad.¹⁵⁴ Como medida de control, la Secretaría de Salud establece además los límites de alcohol en sangre y en aire expirado para conducir automotores y manejar mecanismos, instrumentos, y aparatos o sustancias peligrosas.¹⁵⁵ Respecto

¹⁵¹ **Ley General para el Control del Tabaco:**

Artículo 26. Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco en los espacios 100% libres de humo de tabaco, así como en las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior.

En dichos lugares se fijará en el interior y en el exterior los letreros, logotipos y emblemas que establezca la Secretaría.

Artículo 27. En lugares con acceso al público, o en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, incluidas las universidades e instituciones de educación superior, podrán existir zonas exclusivamente para fumar, las cuales deberán de conformidad con las disposiciones reglamentarias:

- I. Ubicarse en espacios al aire libre, o
- II. En espacios interiores aislados que dispongan de mecanismos que eviten el traslado de partículas hacia los espacios 100% libres de humo de tabaco y que no sea paso obligado para los no fumadores.

¹⁵² Dichas leyes establecen que las compañías productoras de tabaco deben tener una licencia sanitaria e informar del contenido de los productos del tabaco, los ingredientes usados y las emisiones y sus efectos en la salud, tanto a la Secretaría de Salud como al público en general. Mientras que aquellos que comercien, vendan, distribuyan o suministren productos del tabaco, deben en el interior de sus negocios tener un anuncio de la prohibición de la venta y suministro a menores, exigir a los compradores la acreditación de la mayoría de edad y exhibir las leyendas de advertencia sobre el consumo del tabaco.

¹⁵³ **Ley General para el Control del Tabaco:**

Artículo 23. Queda prohibido realizar toda forma de patrocinio, como medio para posicionar los elementos de la marca de cualquier producto del tabaco o que fomente la compra y el consumo de productos del tabaco por parte de la población.

La publicidad y promoción de productos del tabaco únicamente será dirigida a mayores de edad a través de revistas para adultos, comunicación personal por correo o dentro de establecimientos de acceso exclusivo para aquéllos.

La industria, los propietarios y/o administradores de establecimientos donde se realice publicidad o promoción de estos productos deberán demostrar la mayoría de edad de los destinatarios de la misma.

¹⁵⁴ **Ley General de Salud:**

Artículo 220. En ningún caso y de ninguna forma se podrán expender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad.

La violación a esta disposición será equiparable con el delito de Corrupción de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo.

¹⁵⁵ **Ley General de Salud:**

Artículo 187 bis. Son facultades de la Secretaría de Salud en el marco de la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol:

a la publicidad del producto, la ley establece que toda bebida alcohólica deberá ostentar en los envases la leyenda "el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud", escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.¹⁵⁶

➤ **Regulación del consumo en el derecho comparado**

139. En relación con el consumo de marihuana, en el derecho comparado pueden encontrarse distintas alternativas para su regulación. En este apartado se explican brevemente algunas de esas regulaciones que constituyen una alternativa a una prohibición absoluta del consumo.

140. En el Estado de Colorado, en Estados Unidos, está permitido el consumo de la marihuana y su comercialización en ciertas condiciones. Por un lado, la permisión del consumo está limitada a mayores de veintiún años y sólo puede venderse una onza a cada residente y un cuarto de onza a no residentes. Por otro lado, la publicidad masiva está prohibida, en particular si puede alcanzar a menores de edad. Por lo demás, la distribución del producto en tiendas y locales de cultivo está controlada estrictamente por la autoridad encargada de regular el alcohol y el tabaco, lo que se logra entre otros medios con un sistema de expedición de licencias para cultivadores, productores, transportadores y almacenes.¹⁵⁷

I. Establecer los límites de alcohol en sangre y en aire expirado para conducir vehículos automotores, los cuales deberán ser tomados en cuenta por las autoridades federales y por las de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia. Tratándose de vehículos que presten un servicio público, personas que hagan uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, así como los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud que participen en la atención médico-quirúrgica de un usuario, los límites de alcohol en sangre y aire expirado serán cero;

[...]

¹⁵⁶ **Ley General de Salud:**

Artículo 218. Toda bebida alcohólica, deberá ostentar en los envases, la leyenda: "el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud", escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.

¹⁵⁷ Room, Robin, "Legalizing a market for cannabis for pleasure: Colorado, Washington, Uruguay and Beyond", *Addiction*, vol. 109, núm. 3, 2014, pp. 345-351.

141. En el Estado de Washington, también en Estados Unidos, la autoridad encargada de regular el alcohol, apoyada por un centro de investigación especializado en crimen y política de drogas, lleva el proceso de autorización al uso de la marihuana. Aquí también se regula estrictamente la emisión de autorizaciones para el comercio y la cantidad de consumo. En este sentido, por ejemplo, conducir con más de cinco nanogramos de concentración de marihuana en la sangre constituye un delito. Adicionalmente, las ventas que genera el producto tienen una alta carga impositiva y la recaudación está destinada a la educación, investigación y tratamiento de problemas relacionados con esta droga.¹⁵⁸
142. En Holanda existe un esquema diferente para la regulación del consumo de marihuana. Aunque en este país nunca se ha legalizado la producción, dicha actividad no se ha supervisado ni sancionado efectivamente. El comercio de la sustancia está restringido a los *coffee shops* —determinados centros de distribución— los cuales están sujetos a reglas muy específicas, como restricciones en las cantidades que pueden almacenar y vender a una persona.¹⁵⁹
143. En Uruguay, en cambio, el Estado asume plenamente el control y la regulación de la comercialización, producción y distribución de la marihuana.¹⁶⁰ Con todo, también se autoriza el cultivo reducido a un número mínimo de plantas en casas habitación, así como un número mayor en asociaciones que no excedan 45 miembros. También se expiden autorizaciones para productores que a su vez venden la marihuana al gobierno.¹⁶¹ En cuanto a su adquisición, una persona puede comprar hasta

¹⁵⁸ Room, *op. cit.*, *loc. cit.*

¹⁵⁹ Reuter, Peter H., "Marijuana Legalization. What Can Be Learned from Other Countries", *Working paper. Drug Policy Research Center*, 2010.

¹⁶⁰ El artículo segundo de la Ley 19.172 sobre Marihuana y sus Derivados establece que "el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados, o cáñamo cuando correspondiere, a través de las instituciones a las cuales otorgue mandato legal".

¹⁶¹ Graham, Laura, "Legalizing Marijuana in the shadows of International Law: The Uruguay, Colorado, and Washington Models", *Wisconsin International Law Journal*, vol. 33, núm.1, 2015, pp. 140-166.

40 gramos al mes y un instituto estatal fija el precio de la marihuana. Este instituto también lleva un registro confidencial de consumidores y un registro de productores. Al respecto, cabe aclarar que sólo los ciudadanos uruguayos o residentes permanentes pueden adquirir la marihuana.¹⁶² Por lo demás, está prohibido el cultivo, producción y venta no autorizada ni registrada ante dicho instituto.¹⁶³

➤ **Medida alternativa a la prohibición absoluta del consumo**

144. En vista de lo anterior, resulta fundado el agravio del recurrente, pues esta Primera Sala no puede concordar con el Juez de Distrito en que no existe una medida igualmente idónea y menos restrictiva que la limitación establecida por el sistema de prohibiciones administrativas a la marihuana¹⁶⁴. La identificación del consumo de las sustancias en cuestión como un problema de salud pública no puede tener el sentido pretendido por el Juez de Distrito de implicar la inexistencia de una medida igualmente idónea y menos restrictiva.

145. En ese sentido, de la regulación anteriormente expuesta pueden desprenderse una serie de elementos que podrían constituir una medida alternativa a la prohibición absoluta del consumo lúdico y recreativo de marihuana tal como está configurada por el "sistema de prohibiciones administrativas" impugnado por el quejoso: (i) limitaciones a los lugares de consumo; (ii) prohibición de conducir vehículos o manejar aparatos o sustancias peligrosas bajo los efectos de la sustancia; (iii) prohibiciones a la publicitación del producto; y (iv) restricciones a la edad de quienes la pueden consumir. Como puede observarse, se trata de medidas que vistas en su conjunto *no prohíben* el consumo de forma *absoluta* y, en contraste, sólo *limitan* la realización de las actividades relacionadas al autoconsumo de marihuana en supuestos muy acotados.

¹⁶² Graham, *op. cit.*

¹⁶³ Graham, *op. cit.*

¹⁶⁴ Amparo [REDACTED] foja 512 vuelta.

146. Ahora bien, es importante señalar que tanto la legalización del consumo de marihuana en otros países, como la permisión del consumo de tabaco y alcohol en México, han ido acompañadas de políticas *educativas* y de *salud*. En este sentido, se han implementado diversas campañas de información sobre los efectos adversos a la salud del consumo de dichas sustancias, así como programas sociales para atender los daños a la salud de las personas que han desarrollado una adicción.¹⁶⁵ Al respecto, puede decirse este tipo de políticas también formarían parte de una medida alternativa a la prohibición que ahora se analiza, la cual consistiría en términos generales en un régimen que *sólo limita el consumo de marihuana en determinadas circunstancias* y que paralelamente comprende la implementación de políticas públicas educativas y de salud.

➤ **Evaluación de la necesidad de la medida impugnada**

147. Una vez establecida la medida alternativa al “sistema de prohibiciones administrativas” configurado por los artículos impugnados, los cuales impiden al quejoso consumir marihuana con fines lúdicos y recreativos, debe examinarse si se trata de una medida *idónea* para alcanzar los fines perseguidos por la medida legislativa impugnada, lo que implica evaluar si es causalmente adecuada para prevenir o combatir los daños asociados al consumo de marihuana. Como se señaló, éstos consisten en daños a la salud de la persona, desarrollo de dependencia a la sustancia, inducción al

¹⁶⁵ Al respecto, véase por ejemplo el *Programa Sectorial de Salud 2013-2018*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2013, cuyo objetivo principal es el mejoramiento y protección de la salud, a través de políticas públicas de prevención, protección y promoción de la actividad física, alimentación, *reducción del consumo de alcohol, tabaco, drogas ilícitas* y en general en todas aquellas situaciones que ponen en riesgo la integridad física o mental. Por lo que hace al tema de adicciones, las principales líneas de acción se encuentran en la estrategia 1.4, denominada “Impulsar acciones integrales para la prevención y control de las adicciones”, entre las cuales destacan el impulso de campañas informativas; el impulso de una red nacional para la atención y prevención de las adicciones; promover acciones para reducir la demanda, disponibilidad y acceso; promover modelos de justicia alternativa para personas con adicciones en conflicto con la ley; y promover acciones intersectoriales que fomenten una vida productiva en los adolescentes.

consumo de otras drogas más dañinas y contagio de su consumo, así como accidentes vehiculares cometidos bajo el influjo de la sustancia.

148. En primer lugar, hay que señalar que la medida alternativa antes identificada también es idónea para prevenir los *daños a la salud* y la *dependencia* que origina el consumo de marihuana. De hecho, puede decirse que resulta más eficaz una política que busca impedir *directamente* que ocurran esas afectaciones a la salud o atacar los factores sociales que causan el consumo de marihuana, que una medida que combate dicha problemática *indirectamente* a través de la prohibición de su consumo.¹⁶⁶ En este sentido, las campañas de información y las estrategias públicas que conciben a la farmacodependencia como un problema de salud pública, por ejemplo, han probado ser medidas más efectivas que las políticas prohibicionistas. Como ya se explicó, la prohibición del consumo de marihuana no ha reducido el número de consumidores y, en consecuencia, tampoco ha disminuido los daños a la salud asociados al consumo.¹⁶⁷

149. En relación con los efectos del consumo en terceras personas, ya sea a través de la inducción al uso de otras drogas más dañinas o el contagio de su consumo hacia otras personas, puede decirse que tanto las prohibiciones de que se publicite el producto como las políticas educativas y de salud también son medidas idóneas para evitar que esas afectaciones se produzcan. Asimismo, las medidas que prohíben el consumo en espacios públicos que afecten a terceros también son idóneas para evitar daños a la sociedad. Finalmente, las regulaciones que prohíben conducir o manejar instrumentos peligrosos cuando se está bajo el influjo de sustancias como la marihuana también son medidas eficaces para prevenir accidentes y proteger la salud de consumidores y terceros.¹⁶⁸

¹⁶⁶ Hamilton, Olavo, *Princípio da proporcionalidade e guerra contra as drogas*, Mossoró, Hamilton & Hamilton, 2014, p. 158.

¹⁶⁷ Al respecto, véase la nota al pie núm. 94.

¹⁶⁸ El artículo 171 del Código Penal Federal sanciona con prisión de hasta de seis meses, multa hasta de cien pesos y suspensión o pérdida del derecho a usar la licencia de manejo, a la persona que en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes cometa alguna infracción a los reglamentos de tránsito y circulación.

150. Ahora bien, el segundo aspecto del test de necesidad consiste en determinar si las medidas alternativas intervienen con menor intensidad el derecho al libre desarrollo de la personalidad que el "sistema de prohibiciones administrativas" configurado por los artículos impugnados. Al respecto, esta Primera Sala entiende que la medida alternativa examinada no sólo es idónea para evitar que se produzcan los daños o afectaciones a la salud y al orden público señalados anteriormente, sino que además es una medida *menos restrictiva* del libre desarrollo de la personalidad.

151. Así, mientras el sistema de prohibiciones administrativas configurado por los artículos impugnados prohíbe una "clase genérica de actos" (cualquier acto de consumo), la medida alternativa en realidad sólo prohíbe "una subclase más específica" de esos actos (actos de consumo en circunstancias muy específicas).¹⁶⁹ En este orden de ideas, puede decirse que la medida legislativa impugnada impide el consumo de marihuana *en cualquier circunstancia* cuando para alcanzar los fines que pretende podría limitarse a desalentar ciertas conductas o a establecer prohibiciones en *supuestos más específicos*, como manejar vehículos o instrumentos peligrosos bajo los efectos de la sustancia, consumirla en lugares públicos o inducir a terceros a que también la consuman.

152. Dicho de otro modo, el "sistema de prohibiciones administrativas" configurado por los artículos impugnados es altamente suprainclusivo. Como se sabe, una norma es *suprainclusiva* cuando comprende o regula circunstancias que no encuentran fundamento en la justificación de dicha

En esa misma línea, el artículo 93 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal prohíbe la conducción en estado de alteración psicofísica, o bajo sospecha de ingestión de alcohol, de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, incluyendo medicamentos con este efecto y de todos aquellos fármacos cuyo uso afecte la capacidad para conducir, haciendo énfasis en que la prescripción médica no exime de dicha prohibición. Las multas establecidas por el reglamento son más severas al aumentar hasta 100 a 200 veces el salario mínimo vigente, y el retiro de la circulación del vehículo.

Por su parte, el artículo 195 del Código Penal del Distrito Federal establece para el caso de lesiones, homicidio o daño en propiedad, ocasionados culposamente con motivo del tránsito de vehículos, en donde el agente conducía en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, no se aplican los beneficios de la configuración de los delitos culposos.

¹⁶⁹ En sentido similar, véase lo expuesto en Nino, *op. cit.*, p. 444.

norma.¹⁷⁰ En este caso, como ya se explicó, la medida opta por realizar una *prohibición absoluta* del consumo de marihuana a pesar de que es posible prohibirlo únicamente en los supuestos que encuentran justificación en la protección de la salud y el orden público. En ese sentido, asiste la razón al recurrente al sostener que la limitación impuesta por las normas impugnadas establece una restricción desproporcionada respecto al fin constitucionalmente válido que persiguen.

153. De esta manera, puede decirse que las regulaciones que permiten el consumo de marihuana, acotando la edad para consumir y/o el lugar donde se puede realizar dicho consumo, son medidas que identifican de mejor manera los supuestos en los que efectivamente se producen daños a la salud y el orden público. Estas regulaciones sólo limitan el consumo en estos supuestos, por lo que suponen una menor intervención al libre desarrollo de la personalidad. En contraste, la medida impugnada es *más extensa* de lo necesario, pues prohíbe el consumo de marihuana en cualquier situación, alcanzando conductas o supuestos que no inciden en la consecución de los fines que persiguió el legislador, lo que se traduce en una intervención en el derecho en cuestión en un grado mayor. En consecuencia, puede decirse que las regulaciones alternativas resultan *más benignas* para el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

154. De acuerdo con lo anterior, el “sistema de prohibiciones administrativas” configurado por los artículos impugnados *constituye una medida innecesaria*, toda vez que existen medidas alternativas igualmente idóneas para proteger la salud y el orden público que intervienen el derecho fundamental en un *grado menor*. Así, esta Primera Sala considera que la prohibición del consumo personal de marihuana con fines lúdicos es inconstitucional al no superar esta grada del test de proporcionalidad.

¹⁷⁰ Schauer, Frederick, *Playing by The Rules. A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life*, Nueva York, Oxford University Press, pp. 31-34.

d. Proporcionalidad en sentido estricto de la medida

155. A lo largo del presente escrutinio constitucional se ha mostrado que, si bien la medida analizada es idónea para proteger la salud y el orden público, existen medidas alternativas igualmente idóneas que intervienen el derecho afectado en un menor grado. No obstante, en esta sección se realizará el examen de proporcionalidad en sentido estricto para evidenciar el desequilibrio entre la *intensa afectación* al derecho al libre desarrollo de la personalidad frente al *grado mínimo* en que se satisfacen los fines legislativos a través de la prohibición al consumo de marihuana.
156. El examen de proporcionalidad en *sentido estricto* consiste en realizar un balance o ponderación entre dos principios que compiten en un caso concreto.¹⁷¹ Este análisis requiere comparar el *grado de intervención* en el derecho fundamental que supone la medida legislativa examinada frente al *grado de realización del fin* perseguido por ésta.¹⁷² Dicho de otra manera, en esta fase del escrutinio se requiere realizar una *ponderación* entre los beneficios que cabe esperar de una limitación desde la perspectiva de los fines que se persiguen con los costos que necesariamente se producirán desde la perspectiva de los derechos fundamentales afectados.
157. De acuerdo con lo anterior, en el presente caso debe contrastarse la eficacia con la que el “sistema de prohibiciones administrativas” sobre el consumo de marihuana impugnado por el quejoso satisface la protección de la salud de las personas y el orden público con el nivel de afectación que esa misma medida comporta en el contenido *prima facie* del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Si bien en el apartado donde se examinó la idoneidad de la medida resultó suficiente que se mostrará que ésta contribuye positivamente a la realización del fin que persigue, con independencia de su eficacia, también se expusieron argumentos sobre el

¹⁷¹ Así se ha entendido en países como Sudáfrica, Canadá, el Reino Unido, Irlanda, Alemania e Israel. Al respecto, véase Barak, *op. cit.*, p. 343.
¹⁷² Bernal Pulido, *op.cit.*, p. 763

grado en que el “sistema de prohibiciones administrativas” contribuye a la protección a la salud y orden público.

158. En efecto, en esa parte del estudio se mostró que la marihuana no supone un riesgo importante para la salud de las personas mayores de edad, toda vez que sus consecuencias permanentes son poco probables, mínimas o reversibles si su consumo no se inicia a edades tempranas. Al respecto, se señaló que el consumo de marihuana genera un índice de dependencia *menor* a otras sustancias, el cual se ubica alrededor del 9% de las personas que la consumen. En la misma línea, también se sostuvo que el consumo de marihuana tiene un nivel de incidencia *muy bajo* o incluso *discutible* en el consumo de otras drogas más riesgosas. Por otro lado, se destacó que existen resultados similares respecto de la propensión del usuario de marihuana a inducir a terceros al consumo. De la misma manera, se reconoció que conducir vehículos y manejar instrumentos y sustancias peligrosas bajo los efectos de la marihuana sí supone un riesgo para el orden público. Por último, se expuso que existe incertidumbre sobre la afirmación de que el consumo de marihuana incentiva la comisión de otros delitos.

159. En claro contraste con las escasas afectaciones en la salud y el orden público que protege el “sistema de prohibiciones administrativas” sobre el consumo de marihuana regulado en la Ley General de Salud, se ubica la *intensa* afectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad que supone dicha medida legislativa. Como se señaló al analizar los alcances de los artículos impugnados, éstos imponen un obstáculo jurídico que impide al quejoso consumir marihuana y llevar a cabo lícitamente todas las acciones o actividades correlativas al autoconsumo (siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etc.).

160. En primer término, hay que recordar que la medida analizada constituye una intervención en el libre desarrollo de la personalidad porque conlleva una interferencia en la autonomía personal protegida por este derecho. Como se

explicó anteriormente, la forma en la que un individuo desea recrearse pertenece a su esfera más íntima y privada, ya que sólo él puede decidir de qué manera quiere vivir su vida. En este orden de ideas, la medida analizada supone una afectación muy importante al derecho al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que impide a al quejoso decidir qué actividades recreativas o lúdicas desean realizar.

161. En efecto, resulta evidente que una intervención en un derecho fundamental que prohíba totalmente la realización de una conducta amparada por ese derecho será más intensa que una intervención que se concrete a prohibir o a regular *en ciertas condiciones* el ejercicio de ese derecho. Desde este punto de vista, la afectación al libre desarrollo de la personalidad que comporta el "sistema de prohibiciones administrativas" regulado en la Ley General de Salud puede calificarse como *muy intensa*, pues consiste en una prohibición prácticamente absoluta para consumir la marihuana y realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de ésta,¹⁷³ de tal manera que suprime todas las posiciones jurídicas en las que podría ejercerse el derecho. En este sentido, la medida analizada no se circunscribe a regular la forma y lugar en que pueden realizarse dichas actividades atendiendo a las finalidades constitucionalmente válidas que efectivamente tienen esos artículos, como podría haberlo hecho el legislador, sino que directamente prohíbe todas esas conductas.

162. Así, desde un análisis de proporcionalidad en estricto sentido, sólo estaría justificado que se limitara severamente el contenido *prima facie* del derecho al libre desarrollo de la personalidad si también fueran muy graves los

¹⁷³ Como se explicó al exponer el marco regulatorio sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos en la Ley General de Salud, la posibilidad de poseer hasta cinco gramos de marihuana, en términos de lo dispuesto en los artículos 478 y 479 de la Ley General de Salud, no constituye una autorización o un derecho al consumo personal, sino un excluyente de responsabilidad que únicamente cobra sentido en el marco del "sistema punitivo" previsto en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal, pero que resulta irrelevante en relación con el "sistema de prohibiciones administrativas" impugnado por el quejoso. Por lo demás, dichos artículos se limitan a *despenalizar* el consumo en una cantidad muy pequeña y no permiten de ningún modo la realización de las otras actividades correlativas al autoconsumo, como siembra, cultivo, cosecha, preparación, transporte, etc. En todo caso, el artículo 479, 368 y 2234 serán objeto de un análisis diferenciado en esta sentencia.

daños asociados al consumo de marihuana que se intentan evitar con el “sistema de prohibiciones administrativas” sobre el consumo de marihuana. Por el contrario, si la medida legislativa sólo logra evitar o prevenir daños menores, entonces resulta *desproporcionado* que el legislador recurra a una prohibición absoluta que afecta severamente el libre desarrollo de la personalidad.¹⁷⁴

163. Una vez que se han analizado los beneficios y los costos de la medida, esta Primera Sala considera que el “sistema de prohibiciones administrativas”, conformado por los artículos de la Ley General de Salud impugnado por el quejoso, ocasionan una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que se alcanza con dicha medida. A pesar de que esta Suprema Corte reconoce que el legislador puede limitar el ejercicio de actividades que supongan afectaciones a los derechos que protege nuestra Constitución, en el caso de la restricción al libre desarrollo de la personalidad que comporta la medida impugnada, esta Primera Sala no encuentra que tales afectaciones fueran de una gravedad tal que ameriten una prohibición absoluta a su consumo.

164. Adicionalmente, vale la pena señalar que a lo largo del presente escrutinio de constitucionalidad se mostró que existen medidas alternativas que intervienen en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, consistentes en regímenes de permisos sujetos a las condiciones que el legislador considere pertinentes. En este orden de ideas, estas regulaciones pueden ser acompañadas por políticas públicas educativas y de protección a la salud. Por lo demás, si bien estas alternativas representan costos económicos para el Estado y la sociedad en general, éstos son comparables a los que se originan a través del sistema de prohibición al consumo personal.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Uprimny, Guzmán y Parra, *op. cit.*, p. 107.

¹⁷⁵ De acuerdo con algunos académicos, además de sus limitaciones en efectividad, el sistema de prohibición al consumo de marihuana y las actividades relacionados con él tienen altos costos para el Estado y la sociedad, tanto *directos* como los derivados de la erradicación de cultivos, la

165. Así, a pesar de que el “sistema de prohibiciones administrativas” conformado por los artículos de la Ley General de Salud impugnado por el quejoso supera las dos primeras gradas del examen de proporcionalidad, al haberse establecido que se trata de una medida que busca proteger la salud y el orden público y resulta idónea para alcanzar dichos objetivos, esta Primera Sala, contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito, considera que se trata de una medida que no sólo es *innecesaria*, al existir medios alternativos igualmente idóneos que afectan en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino que además es *desproporcionada* en estricto sentido, toda vez que genera una protección mínima a la salud y orden público frente a la intensa intervención al derecho de las personas a decidir qué actividades lúdicas desean realizar.

166. Con todo, debe enfatizarse que esta Primera Sala no minimiza los daños que puede ocasionar la marihuana en el consumidor mayor de edad, sin embargo, entiende que la decisión sobre su uso sólo le corresponde tomarla a cada individuo. Así, este Alto Tribunal considera que pertenece al estricto ámbito de la autonomía individual protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad la posibilidad de decidir responsablemente si desea experimentar los efectos de esa sustancia a pesar de los daños que esta actividad puede generarle a una persona.

iv) Inconstitucionalidad de los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud

167. Con base en todo lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala arriba a la conclusión de que resultan inconstitucionales los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una

persecución de las redes de tráfico y la judicialización y encarcelamiento de las personas relacionadas con dichas redes; como *indirectos*, más difíciles de calcular, derivados entre otros factores como las pérdidas humanas de la guerra contra las drogas y de las cargas que deben soportar cientos de personas que pierden su libertad con ocasión de la misma. Al respecto, véase por todos Camacho, Adriana, Gaviria, Alejandro, y Rodríguez, Catherine, *op. cit.*; Uprimny, Guzmán y Parra, *op. cit.*, p. 106; TNI y WOLA, 2010.

prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos —sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar— del estupefaciente “cannabis” (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico “THC” (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: $\Delta 6a$ (10a), $\Delta 6a$ (7), $\Delta 7$, $\Delta 8$, $\Delta 9$, $\Delta 10$, $\Delta 9$ (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, este derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización.

168. Por otra parte, una vez precisado lo anterior, se estima necesario destacar que si bien, como se ha venido reiterando, en la presente resolución no se realiza pronunciamiento alguno respecto de la constitucionalidad de los tipos penales que criminalizan el consumo y otros actos relacionados con la marihuana, lo cierto es que al declararse por parte de este Alto Tribunal la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley General de Salud antes señaladas y, en consecuencia, permítasele al recurrente recibir una autorización por parte de la Secretaría de Salud para realizar todas las actividades necesarias para el uso lúdico de la marihuana, al realizar éstas el recurrente no incurrirá en los delitos contra la salud previstos tanto por la propia Ley General de Salud como por el Código Penal Federal.

169. Ello es así porque los delitos contenidos en los artículos 194, fracción I, 195, 195 Bis y 196 Ter del Código Penal Federal,¹⁷⁶ así como en los artículos

¹⁷⁶ Código Penal Federal:

Artículo 194. Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa al que:

475, 476 y 477 de la Ley General de Salud,¹⁷⁷ relacionados con los actos que pretende realizar el recurrente, cuentan con un elemento típico de carácter normativo consistente en que la conducta debe realizarse "sin la autorización correspondiente". En este sentido, si como se precisará a continuación uno de los efectos de la concesión del presente amparo consiste en la obligación de la Secretaría de Salud de expedir la

1. Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud;

[...]

Artículo 195. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa, al que posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194, ambos de este código.

[...]

Artículo 195 bis. Cuando por las circunstancias del hecho la posesión de alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización a que se refiere la Ley General de Salud, no pueda considerarse destinada a realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194, se aplicará pena de cuatro a siete años seis meses de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.

[...]

Artículo 196 Ter. Se impondrán de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos días multa, así como decomiso de los instrumentos, objetos y productos del delito, al que desvie o por cualquier medio contribuya a desviar precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas, al cultivo, extracción, producción, preparación o acondicionamiento de narcóticos en cualquier forma prohibida por la ley.

La misma pena de prisión y multa, así como la inhabilitación para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión públicos hasta por cinco años, se impondrá al servidor público que, en ejercicio de sus funciones, permita o autorice cualquiera de las conductas comprendidas en este artículo.

Son precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas los definidos en la ley de la materia.

¹⁷⁷ Ley General de Salud:

Artículo 475. Se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quien sin autorización comercie o suministre, aun gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla.

[...]

Artículo 476. Se impondrá de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta Ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente.

Artículo 477. Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización a que se refiere esta Ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente.

No se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea medicamentos que contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder.

autorización sanitaria que corresponda, es evidente que el quejoso no podrá cometer los delitos en cuestión.

170. No pasa desapercibido para esta Primera Sala que el Código Penal Federal contiene determinados tipos penales en materia de narcóticos que no cuentan con este elemento típico (en específico, los contenidos en el artículo 194, fracciones II, III y IV; 196 Ter; 197 y 198); sin embargo, se advierte que los mismos no van dirigidos a castigar las conductas que pretende realizar el quejoso en términos de lo expuesto en el presente recurso de revisión.¹⁷⁸

¹⁷⁸ Código Penal Federal:

Artículo 194. Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa al que:

[...]

II. Introduzca o extraiga del país alguno de los narcóticos comprendidos en el artículo anterior, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito.

Si la introducción o extracción a que se refiere esta fracción no llegare a consumarse, pero de los actos realizados se desprenda claramente que esa era la finalidad del agente, la pena aplicable será de hasta las dos terceras partes de la prevista en el presente artículo.

III. Aporte recursos económicos o de cualquier especie, o colabore de cualquier manera al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos a que se refiere este capítulo; y

IV. Realice actos de publicidad o propaganda, para que se consuma cualesquiera de las sustancias comprendidas en el artículo anterior.

Las mismas penas previstas en este artículo y, además, privación del cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años, se impondrán al servidor público que, en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita, autorice o tolere cualesquiera de las conductas señaladas en este artículo.

Artículo 196 Ter. Se impondrán de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos días multa, así como decomiso de los instrumentos, objetos y productos del delito, al que desvíe o por cualquier medio contribuya a desviar precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas, al cultivo, extracción, producción, preparación o acondicionamiento de narcóticos en cualquier forma prohibida por la ley.

[...]

Artículo 197. Al que, sin mediar prescripción de médico legalmente autorizado, administre a otra persona, sea por inyección, inhalación, ingestión o por cualquier otro medio, algún narcótico a que se refiere el artículo 193, se le impondrá de tres a nueve años de prisión y de sesenta a ciento ochenta días multa, cualquiera que fuera la cantidad administrada. Las penas se aumentarán hasta una mitad más si la víctima fuere menor de edad o incapaz comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente.

Al que indebidamente suministre gratis o prescriba a un tercero, mayor de edad, algún narcótico mencionado en el artículo 193, para su uso personal e inmediato, se le impondrá de dos a seis años de prisión y de cuarenta a ciento veinte días multa. Si quien lo adquiere es menor de edad o incapaz, las penas se aumentarán hasta una mitad.

Las mismas penas del párrafo anterior se impondrán al que induzca o auxilie a otro para que consuma cualesquiera de los narcóticos señalados en el artículo 193.

Artículo 198. Al que dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo, siembre, cultivo o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando en él concurren escasa instrucción y extrema necesidad económica, se le impondrá prisión de uno a seis años.

171. Finalmente, la situación expuesta en párrafos anteriores se actualiza de igual manera respecto de las sanciones administrativas previstas en los artículos 421 y 421 Bis de la Ley General de Salud, mismos que establecen la imposición de multas derivado de una violación a los artículos 237, 238, 247, 248, 375, 376, 235 y 289 del mismo ordenamiento, referidos a la autorización de la Secretaría de Salud para la realización de actos relacionados con estupefacientes y sustancias psicotrópicas,¹⁷⁹ pues dichas disposiciones realizan un reenvío a los artículos que han sido declarados inconstitucionales. Sin embargo, no podría realizarse la imposición de una sanción administrativa al quejoso a la luz de lo establecido en la presente sentencia.

172. En otro orden de ideas, esta Primera Sala también considera importante destacar que la conclusión expuesta en párrafos anteriores no se contraviene con lo dispuesto en instrumentos internacionales de la materia, en específico: (i) la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972; (ii) el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971; y (iii) la Convención de las Naciones Unidas en contra del tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

Igual pena se impondrá al que en un predio de su propiedad, tenencia o posesión, consienta la siembra, el cultivo o la cosecha de dichas plantas en circunstancias similares a la hipótesis anterior.

[...]

La siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal.

¹⁷⁹ Ley General de Salud:

Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, **237, 238**, 240, 242, 243, **247, 248**, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350 bis 1, 365, 367, **375, 376**, 400, 411 y 413 de esta Ley.

Artículo 421 bis. Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 100, 122, 126, 146, 166 Bis 19, 166 Bis 20, 205, 235, 254, 264, 281, **289**, 293, 298, 325, 327 y 333 de esta Ley.

173. Lo anterior, como se señaló en apartados anteriores, pues si bien dichos tratados internacionales establecen obligaciones para los Estados miembros de criminalizar determinadas conductas relacionadas con narcóticos, las primeras dos convenciones mencionadas establecen la posibilidad de someter a las “personas que hagan uso indebido” de estupefacientes y sustancias psicotrópicas a “medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social”, en lugar de sancionarlas penalmente.¹⁸⁰

174. Adicionalmente, de la Convención de las Naciones Unidas de 1988 se deriva que los Estados miembros podrán no sancionar la posesión, adquisición o cultivo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas para el consumo personal, cuando sea contrario a “sus principios constitucionales y [a] los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico”;¹⁸¹ situación que se actualiza en el presente asunto, pues, como se ha señalado a lo largo de la presente sentencia, el autoconsumo de marihuana se encuentra protegido por el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, prerrogativa derivada de la Constitución.

¹⁸⁰ Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972:

Artículo 36. Disposiciones penales

1. a) [...]

b) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las personas que hagan uso indebido de estupefacientes hayan cometido esos delitos, las Partes podrán en vez de declararlas culpables o de sancionarlas penalmente, o además de declararlas culpables o de sancionarlas, someterlas a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 38.

Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971:

Artículo 22. Disposiciones penales

1. a) [...]

b) No obstante, cuando las personas que hagan uso indebido de sustancias sicotrópicas hayan cometido esos delitos, las Partes podrán, en vez de declararlas culpables o de sancionarlas penalmente, o además de sancionarlas, someterlas a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 20.

¹⁸¹ Convención de las Naciones Unidas en contra del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988:

Artículo 3. Delitos y sanciones

[...]

2. A reserva de sus principios constitucionales y a los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales conforme a su derecho interno cuando se cometan intencionalmente, la posesión la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971.

175. En otro orden de ideas, resulta innecesario analizar el resto de los agravios del recurrente al haber sido concedida la protección constitucional al quejoso en los términos antes precisados, en tanto que a ningún fin práctico llevaría la realización del estudio correspondiente.

v) Constitucionalidad de los artículos 234, 368 y 479 de la Ley General de Salud

176. El anterior estudio ha replicado en sus términos el análisis realizado por esta Primera Sala en el amparo en revisión [REDACTED]. Sin embargo, esta Primera Sala observa que en el presente amparo en revisión subsiste el análisis de constitucionalidad sobre los artículos 234, 368 y 479 de la Ley General de Salud, mismo que no fue materia del amparo en revisión precedente, por lo que se aborda su análisis de forma separada para efectos de método.

177. En primer término, debe señalarse que el artículo 234 de la Ley General de Salud, contiene un listado de compuestos considerados bajo la categoría de "estupefacientes" a efectos legales. En ese sentido, dicho artículo, en la porción normativa impugnada es del tenor siguiente:

Artículo 234.- Para los efectos de esta Ley, se consideran estupefacientes:
(...)
CANNABIS sativa, indica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas.

178. Por otro lado, los artículos 368 y 479 de la Ley General de Salud son del tenor siguiente:

Artículo 368.- La autorización sanitaria es el acto administrativo mediante el cual la autoridad sanitaria competente permite a una persona pública o privada, la realización de actividades relacionadas con la salud humana, en los casos y con los requisitos y modalidades que determine esta Ley y demás disposiciones generales aplicables.

Las autorizaciones sanitarias tendrán el carácter de licencias, permisos, registros o tarjetas de control sanitario.

Artículo 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente:

Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato		
Narcótico	Dosis máxima de consumo personal e inmediato	
Opio	2 gr.	
Diacetilmorfina o Heroína	50 mg.	
Cannabis Sativa, Indica o Marihuana	5 gr.	
Cocaína	500 mg.	
Lisergida (LSD)	0.015 mg.	
MDA, Metilendioxianfetamina	Poivo, granulado o cristal	Tabletas o cápsulas
	40 mg.	Una unidad con peso no mayor a 200 mg.
MDMA, dl-34-metilendioxi-n-dimetilfeniletamina	40 mg.	Una unidad con peso no mayor a 200 mg.
Metanfetamina	40 mg.	Una unidad con peso no mayor a 200 mg.

179. Como puede apreciarse, el artículo 234 considera a la cannabis sativa como un estupefaciente para los efectos de la propia ley. El artículo 368 establece la naturaleza de acto administrativo de las autorizaciones sanitarias, sus requisitos y modalidades. Finalmente, el artículo 479 establece la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato.

180. **Artículo 234 de la Ley General de Salud.** Procede negar el amparo respecto al artículo 234 de la Ley General de Salud por dos razones. En primer lugar, este artículo sólo contiene una definición legal interna de la norma. Es decir, se limita a definir las sustancias que son consideradas estupefacientes con lo cual no genera al recurrente perjuicio alguno si ya se le concederá el amparo a efectos de que se le expida la autorización administrativa conducente, máxime que la norma contiene un listado extenso de estupefacientes y no sólo menciona al cannabis sativa, índica y americana o marihuana y sus semillas, sino a una abundante cantidad de sustancias.

181. En segundo lugar, debe recordarse que no se encuentran en estudio ante esta Primera Sala los tipos penales correspondientes. Es decir, no forma parte de la *litis* analizar la constitucionalidad de los delitos establecidos por el Código Penal Federal respecto de los estupefacientes en cuestión. Precisamente por ello, no puede concederse el amparo al quejoso respecto de este artículo porque forma parte, a su vez, del "sistema punitivo" concerniente a las sanciones penales de los estupefacientes. De tal suerte, diversos artículos del Código Penal Federal penalizan conducta relativas a narcóticos o estupefacientes, remitiendo para la definición de estupefacientes a la Ley General de Salud. Ejemplo de ello es el artículo 193, 194, fracciones II, III y IV; 196 Ter; 197 y 198 *inter alia*. Remover de la definición de estupefaciente al cannabis implicaría materialmente la eliminación respecto a ella de los tipos penales conducentes, cuestión que no es objeto de este amparo.
182. **Artículo 368 de la Ley General de Salud.** Por otro lado, también se impone negar el amparo respecto al artículo 368 de la Ley General de Salud. Dicho artículo únicamente define a la autorización sanitaria como el acto administrativo mediante el cual se permite a una persona pública o privada, la realización de actividades relacionadas con la salud humana, en los casos y requisitos determinados por la ley. En este sentido, no genera perjuicio alguno al quejoso recurrente pues ni siquiera define requisitos o prohibiciones respecto al cannabis. En todo caso, le causa agravio el resto del "sistema de prohibiciones administrativas" respecto al cual ya se le ha concedido el amparo. Finalmente, no pasa desapercibido que precisamente el artículo 368 impugnado será parte del fundamento normativo bajo el cual la autoridad responsable deberá expedirle la autorización administrativa que se precisará en los efectos.
183. **Artículo 479 de la Ley General de Salud.** Finalmente, por lo que respecta al artículo 479, siguiendo el precedente del amparo en revisión [REDACTED] es

importante señalar que si bien el artículo 478 de la Ley General de Salud,¹⁸² en relación con el artículo 479, señala que el Ministerio Público no ejercerá acción penal en contra de quien posea hasta cinco gramos de marihuana, esta Suprema Corte ha interpretado que dicha disposición contiene una *excluyente de responsabilidad*,¹⁸³ lo que significa únicamente que en esos casos no debe aplicarse la pena a quien haya cometido el delito en cuestión, pero no consagra de ninguna manera una autorización o un derecho al consumo personal en los términos en los que lo solicita el quejoso. En este sentido, debe destacarse que el artículo 479 de la Ley General de Salud no forma parte del “sistema de prohibiciones administrativas”, sino del “sistema punitivo” previsto en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal en relación con el control de estupefacientes y psicotrópicos. Sobre dicho artículo, debe enfatizarse que el quejoso recurrente no ha esgrimido razones específicas para su inconstitucionalidad, sino que lo ha combatido de forma genérica en el encuadre de lo que llama “política prohibicionista”.

184. Esta Primera Sala considera que su alegato es inoperante. Resulta notorio que, en el marco de la autorización sanitaria petitionada por el quejoso, dicho artículo no le genera perjuicio pues no prohíbe la emisión de autorización sanitaria alguno respecto a las conductas pretendidas con el quejoso. Es decir, si, como se precisará a continuación uno de los efectos de la concesión del presente amparo consiste en la obligación de la Secretaría de Salud de expedir la autorización a la que hace referencia el

¹⁸² Artículo 478. El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta Ley. La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia.

¹⁸³ Al respecto véase la tesis de rubro “DELITO CONTRA LA SALUD. EL ARTÍCULO 478 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, AL PREVER LA NO APLICACIÓN DE LA EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD RESPECTO DE LOS FARMACODEPENDIENTES POSEEDORES DE ALGÚN NARCÓTICO DENTRO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN, INCLUSO CUANDO SU CANTIDAD NO EXCEDA EL LÍMITE MÁXIMO LEGALMENTE ESTABLECIDO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD” [Nóvena Época; Registro 162389; Instancia Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Abril de 2011; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. LII/2011; Página: 307].

artículo 235, es evidente que el quejoso no podrá cometer los delitos en cuestión que a su vez remiten a la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato prevista en el artículo 479.

185. En ese sentido, ante la falta de perjuicio directo al recurrente, en tanto el artículo impugnado no obstaculiza la autorización pretendida que será objeto de este amparo, debe considerarse que dicho planteamiento de inconstitucionalidad resulta inoperante.

vi) Análisis de los agravios del recurso de revisión adhesivo

186. El recurso de revisión adhesivo interpuesto por el delegado de las autoridades señaladas como responsables, es decir, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud, tiene dos vertientes argumentativas. En primer término, aquéllas destinadas a demostrar la improcedencia del recurso de revisión (que ya fueron objeto de estudio y pronunciamiento por parte del Tribunal Colegiado) y, en segundo término, aquéllas destinadas a demostrar la constitucionalidad del sistema normativo "prohibicionista", que serán objeto de análisis en esta sección.

187. Sustancialmente, en su **primer agravio adhesivo**, el recurrente adhesivo aduce que la política contenida en los artículos impugnados resulta constitucional en tanto tiene por objeto la protección de la salud. Refiere también que no puede tutelarse los intereses individuales o particulares por encima de los intereses públicos de la comunidad.

188. En su **segundo agravio adhesivo**, sostiene que las restricciones impuestas en la Ley General de Salud sobre los derechos al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, disposición a la propia salud personal y la autodeterminación son constitucionales pues superan el estándar de la Suprema Corte establecido en la tesis 1a./J. 2/2012 (9a.)¹⁸⁴. Ello en tanto

¹⁸⁴ Emitida por la Primera Sala bajo el rubro "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN

son admisibles al dirigirse a proteger el derecho a la salud de la sociedad en general, necesarias y proporcionales pues su restricción se compensa sobradamente por los efectos benéficos. Refiere en el propio segundo agravio que los agravios del recurrente son inoperantes pues el recurrente no es titular del derecho al libre desarrollo de la personalidad al ser incompatible con su naturaleza jurídica. Refiere, además, que la norma no contiene una prohibición para el consumo del cannabis pues el artículo 479 de la Ley General de Salud permite el consumo personal hasta en una cantidad de 5 gramos. Sostiene además que las normas no limitan en forma alguna la libertad del quejoso de proyectarse, vivir su vida y escoger su apariencia personal.

189. E su **tercer agravio adhesivo**, aduce que resulta infundado el agravio primero del recurrente principal en la parte que señala que se omitió valorar la totalidad del caudal probatorio. Lo anterior porque advierte que la sentencia recurrida sí analizó dichos medios probatorios y los enumeró con una nota al pie de página en la que enunció los informes en los que se basó para sus argumentaciones.
190. Finalmente, en su **cuarto agravio adhesivo**, refiere que el agravio séptimo vertido por el recurrente principal es infundado pues la Ley Federal de Procedimiento Administrativo resulta constitucional al establecer un procedimiento administrativo que garantiza los derechos fundamentales de los gobernados de acuerdo a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.
191. Esta Primera Sala estima que los agravios manifestados por la autoridad responsable son **infundados**. Respecto del **primer agravio adhesivo**, el análisis de la restricción al libre desarrollo de la personalidad realizado en líneas anteriores ha mostrado que la constitucionalidad de la finalidad de la limitación no es el único elemento paso valorar el ajuste de disposición con

CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Febrero de 2012, Tomo 1, p. 539.

la Constitución Federal, sino su idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. Dado que la restricción no ha superado la tercera y cuarta grada de este análisis, se reitera su inconstitucionalidad pese al fin constitucionalmente legítimo que defiende. Respecto a la imposibilidad de tutelarse los intereses individuales o particulares por encima de los intereses públicos de una comunidad, **dicho argumento es infundado**. Esto en tanto no es posible realizar en abstracto un pretendido análisis entre intereses sociales o de la comunidad e interés individual. Cuando una restricción a un derecho individual se encuentra justificada por la entidad de la incidencia social, ello puede ser constatado al evaluar su fin constitucionalmente imperioso, su idoneidad y su proporcionalidad en sentido estricto. En el presente asunto, dicho análisis, como ha reiterado esta Suprema Corte, arrojó que la restricción no resulta constitucional al no superar las gradas de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto del análisis correspondiente.

192. **Es infundado el agravio adhesivo segundo** en la parte que sostiene que las restricciones a los derechos analizados son constitucionales a la luz del estándar de la Suprema Corte establecido en la tesis 1a./J. 2/2012 (9a.)¹⁸⁵. Ello en tanto, como ha sido establecido por esta Primera Sala en el análisis sustantivo de la sentencia, dichas restricciones a pesar de tener un fin constitucionalmente admisible (protección de la salud y el orden público) y resultar idóneas, no superan el último paso del análisis de restricciones, a saber, la proporcionalidad en sentido estricto de la medida. Lo anterior en tanto dichas restricciones ocasionan una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que se alcanza con dicha medida. A pesar de que esta Suprema Corte reconoce que el legislador puede limitar el ejercicio de actividades que supongan afectaciones a los

¹⁸⁵ Emitida por la Primera Sala bajo el rubro "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Febrero de 2012, Tomo 1, p. 533.

derechos que protege nuestra Constitución, en el caso de la restricción al libre desarrollo de la personalidad que comporta la medida impugnada, esta Primera Sala no encontró que tales afectaciones fueran de una gravedad tal que ameriten una prohibición absoluta a su consumo. Adicionalmente, debe tenerse presente que existen medidas alternativas igualmente idóneas para proteger la salud y el orden público que intervienen en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, consistentes en regímenes de permisiones sujetos a las condiciones que el legislador considere pertinentes.

193. El **agravio segundo adhesivo** es infundado en la parte que sostiene que el recurrente no es titular del derecho al libre desarrollo de la personalidad al ser incompatible con su naturaleza jurídica. Debe recordarse que en este amparo en revisión 623/2017 la parte recurrente es [REDACTED], una persona física. Como tal, evidentemente tiene la titularidad del derecho al libre desarrollo de la personalidad¹⁸⁶. Dado que el derecho al libre desarrollo de la personalidad tutela la autonomía personal en sus dimensiones externa e interna¹⁸⁷, el recurrente es titular de dicho derecho personalísimo¹⁸⁸.
194. Es infundado el **agravio adhesivo segundo** en la parte que sostiene que la norma no contiene una prohibición para el consumo del cannabis, pues el artículo 479 de la Ley General de Salud permite el consumo personal hasta en una cantidad de 5 gramos. Contrario a lo sostenido por la recurrente adhesiva, es importante señalar que si bien el artículo 478 de la Ley

¹⁸⁶ Véase la tesis 1a. CCLX/2016 (10a.), de rubro "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. LA PROHIBICIÓN PARA EL AUTOCONSUMO DE MARIHUANA CONTENIDA EN LA LEY GENERAL DE SALUD INCIDE PRIMA FACIE EN EL CONTENIDO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, p. 897.

¹⁸⁷ Véase la tesis 1a. CCLXI/2016 (10a.), de rubro "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU DIMENSIÓN EXTERNA E INTERNA", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, p. 898.

¹⁸⁸ Véase la tesis plenaria P. LXVI/2009, de rubro "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, p. 7.

General de Salud,¹⁸⁹ en relación con el artículo 479, señala que el Ministerio Público no ejercerá acción penal en contra de quien posea hasta cinco gramos de marihuana, esta Suprema Corte ha interpretado que dicha disposición contiene una *excluyente de responsabilidad*,¹⁹⁰ lo que únicamente significa que en esos casos no debe aplicarse la pena a quien haya cometido el delito en cuestión, pero no consagra de ninguna manera una autorización o un derecho al consumo personal en los términos en los que lo solicita el quejoso, puesto que además de que únicamente se limitan a *despenalizar* el consumo en una cantidad muy pequeña, dichos preceptos *no permiten* de ningún modo la realización de las otras actividades correlativas al autoconsumo, como siembra, cultivo, cosecha, preparación, transporte, etc. Finalmente, debe recordarse, que dicho artículo (el 479 de la Ley General de Salud) no ha sido declarado inconstitucional por formar parte de diverso sistema normativo en términos de esta ejecutoria.

195. Es infundado el **agravio segundo adhesivo** en la parte que refiere que las normas impugnadas no limitan en forma alguna la libertad del quejoso de proyectarse, vivir su vida y escoger su apariencia personal, en suma, que no inciden en su libre desarrollo de la personalidad. Lo anterior pues, como se expuso anteriormente, la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece indudablemente a la esfera de autonomía personal que debe estar protegida por la Constitución. Esa elección puede incluir, como ocurre en el presente caso, la ingesta o el consumo de sustancias que produzcan experiencias que en algún sentido "afecten" los

¹⁸⁹ **Artículo 478.** El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta Ley. La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia.

¹⁹⁰ Al respecto véase la tesis de rubro "**DELITO CONTRA LA SALUD. EL ARTÍCULO 478 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, AL PREVER LA NO APLICACIÓN DE LA EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD RESPECTO DE LOS FARMACODEPENDIENTES POSEEDORES DE ALGÚN NARCÓTICO DENTRO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN, INCLUSO CUANDO SU CANTIDAD NO EXCEDA EL LÍMITE MÁXIMO LEGALMENTE ESTABLECIDO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD**" [Nóvena Época; Registro 162389; Instancia Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Abril de 2011; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. LII/2011; Página: 307].

pensamientos, las emociones y/o las sensaciones de la persona. En esta línea, se ha señalado que la decisión de fumar marihuana puede tener distintas finalidades, entre las que se incluyen "el alivio de la tensión, la intensificación de las percepciones o el deseo de nuevas experiencias personales y espirituales". Así, al tratarse de "experiencias mentales", éstas se encuentran entre las más personales e íntimas que alguien pueda experimentar, de tal manera que la decisión de un individuo mayor de edad de "afectar" su personalidad de esta manera con fines recreativos o lúdicos se encuentra tutelada *prima facie* por el derecho al libre desarrollo de ésta. Por tanto, contrario a lo argumentado por el recurrente adhesivo, las normas impugnadas sí inciden en el libre desarrollo de la personalidad al limitar la forma que tiene el quejoso recurrente de vivir su vida decidiendo si "afecta" o no su personalidad con fines recreativos o lúdicos.

196. Asimismo, se considera que resulta inoperante el **agravio adhesivo tercero**. Lo anterior toda vez que el recurrente adhesivo se limita a señalar que el Juez de Distrito identificó los elementos probatorios y los enumeró en una nota al pie de página. Sin embargo, tal argumentación no fortalece las consideraciones del acto reclamado ni desvirtúa el planteamiento del recurrente principal en torno a la vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad.¹⁹¹ Por lo tanto, no resulta eficaz para variar las conclusiones a las que este órgano jurisdiccional arriba.

197. Finalmente, resulta también inoperante el **agravio cuarto adhesivo** pues, como se aprecia de la foja 500 y 501 vuelta del juicio de amparo, se sobreseyó respecto de los preceptos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sobreseimiento que fue decretado firme por el Tribunal Colegiado que previno del asunto. En ese sentido, dado que el recurso de

¹⁹¹ Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 78/2014 (10a.), de rubro "**AMPARO ADHESIVO. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EN LOS CUALES EL ADHERENTE SE LIMITA A COMBATIR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEL QUEJOSO PRINCIPAL, SIN ESGRIMIR RAZONES QUE MEJOREN LAS CONSIDERACIONES DEL ACTO RECLAMADO**", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Tomo I, diciembre de 2004, p. 51.

revisión no contiene agravios sobre la constitucionalidad de tales preceptos, es innecesario analizar los argumentos encaminados a su defensa.

198. En esas circunstancias, debe concluirse que los motivos de inconformidad manifestados por las autoridades recurrentes no consiguen variar lo decidido por esta Primera Sala en el presente recurso.

VI. DECISIÓN

199. A la luz de lo expuesto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que son inconstitucionales los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I¹⁹², 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autocósumo con fines lúdicos o recreativos —adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar— del estupefaciente “cannabis” (sativa, indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico “THC” (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: Δ6a (10a), Δ6a (7), Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto —conocido como marihuana, declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros.

200. Por lo tanto, este Alto Tribunal procede a revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo para el efecto de que el Director Ejecutivo de

¹⁹² En el entendido de que, evidentemente, el pronunciamiento de inconstitucionalidad se circunscribe a la formulación normativa de los artículos 237 y 245, fracción I, que tenían al momento del acto de aplicación de tales numerales y no con posterioridad a su reforma el diecinueve de junio de dos mil diecisiete.

Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, autoridad señalada como responsable en el juicio de amparo, otorgue al quejoso la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, en el entendido de que corresponderá a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios determinar en dicha autorización la modalidad y cantidad máxima de adquisición de semillas de la planta referida, por ejemplo a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes.

201. Sobre la solicitud de importación de la semilla, esta Primera Sala advierte que el artículo 290¹⁹³ de la Ley General de Salud establece un catálogo taxativo de sujetos que pueden recibir autorización especial para importar sustancias psicotrópicas, productos o preparados de las mismas entre los que no se encuentran las personas físicas, a saber, 1) droguerías y 2) establecimientos destinados a producción de medicamentos autorizados por la propia Secretaría. Este artículo no fue impugnado en el juicio de amparo y, por tanto, su constitucionalidad no forma parte de la *litis*. Siendo así, resulta notorio que el quejoso no ha impugnado la totalidad de artículos que potencialmente le permitirían la importación de las semillas en los términos solicitados, por lo que no resulta conducente concederle la protección constitucional para tal efecto.

202. En consecuencia, esta Primera Sala

¹⁹³ Al momento del dictado del oficio impugnado, dicho artículo tenía el tenor siguiente:

ARTICULO 290.- La Secretaría de Salud otorgará autorización para importar estupefacientes, sustancias psicotrópicas, productos o preparados que los contengan exclusivamente a:

I.- Las droguerías, para venderlos a farmacias o para las preparaciones oficinales que el propio establecimiento elabore, y

II.- Los establecimientos destinados a producción de medicamentos autorizados por la propia Secretaría.

Su proceso quedará sujeto a lo establecido en los Capítulos V y VI de este Título, quedando facultada la propia Secretaría para otorgar autorización en los casos especiales en que los interesados justifiquen ante la misma la importación directa.

RESUELVE:

PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a [REDACTED], en contra de la expedición y promulgación de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, así como de su aplicación, consistente en el oficio número [REDACTED] expedido por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en los términos expuestos en la presente sentencia.

TERCERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a [REDACTED] en contra de la expedición y promulgación de los artículos 234, 368 y 479 de la Ley General de Salud.

CUARTO. El recurso de revisión adhesivo interpuesto por las autoridades responsables es infundado.

Notifíquese. Con testimonio de esta ejecutoria; devuélvanse los autos relativos al lugar de origen; y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

LHOyV/MARL/JGL



PRIMERA SALA

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

QUEJOSO: [REDACTED]

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ciudad de México, a treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Se hace constar, con fundamento en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que el presente asunto se encuentra listado para verse en la audiencia del día trece de junio de dos mil dieciocho y siguientes.

LA SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA

LIC. LUZ HELENA GONZALEZ Y VILLA

Ciudad de México, trece de junio de dos mil dieciocho. Se hace constar, con fundamento en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en sesión de esta fecha, se resolvió:

PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.--
SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a [REDACTED], en contra de la expedición y promulgación de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, así como de su aplicación, consistente en el oficio número [REDACTED] expedido por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en los términos expuestos en la presente sentencia.--
TERCERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a [REDACTED] en contra de la expedición y promulgación de los artículos 234, 368 y 479 de la Ley General de Salud.--
CUARTO. El recurso de revisión adhesivo interpuesto por las autoridades responsables es infundado.

VOTACIÓN

SI	MINISTROS	NO	SE RESERVAN EL DERECHO DE FORMULAR VOTOS
/	ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA		Concurrente
/	JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Ponente		Concurrente
	JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO	/	Particular
/	ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA		Concurrente
/	NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Presidenta de la Primera Sala		Concurrente

Así por mayoría de cuatro votos, se aprobó la proposición anterior.

LA SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA

LIC. LUZ HELENA GONZALEZ Y VILLA



AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

QUEJOSO: [REDACTED]

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

SECRETARIA: LUZ HELENA OROZCO Y VILLA

SUMARIO

El presente caso deriva del juicio de amparo indirecto promovido por [REDACTED] contra un oficio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que desechó su solicitud para la obtención de una autorización sanitaria que le permitiera el consumo personal con fines recreativos de marihuana. En la demanda de amparo, el solicitante impugnó tanto el oficio referido como diversos preceptos de la Ley General de Salud. El Juez de Distrito determinó sobreseer en una parte el juicio de amparo y negar la protección constitucional en relación al oficio y los preceptos reclamados. El quejoso interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado que conoció del asunto determinó reservar jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer sobre el tema de constitucionalidad subsistente. De ahí que la materia del presente asunto consista en verificar si los agravios de la revisión son aptos para revocar la sentencia recurrida.

CUESTIONARIO

¿Los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud son violatorios del derecho al libre desarrollo de la personalidad?

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día trece de junio de dos mil dieciocho, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelven los autos relativos al amparo en revisión 623/2017 interpuesto por [REDACTED], por conducto de su autorizado legal, en contra de la sentencia dictada por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo [REDACTED]

I. ANTECEDENTES

1. **Hechos.** [REDACTED] solicitó por escrito presentado el trece de noviembre de dos mil quince ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (en adelante, "Cofepris") una autorización sanitaria para consumo personal con fines lúdicos o recreativos del "Cannabis Sativa" y el psicotrópico THC, así como para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas.
2. El doce de febrero de dos mil dieciséis, la Cofepris emitió el oficio número [REDACTED] mediante el cual requirió al promovente, con fundamento en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 368 de la Ley General de Salud, que acreditara en un plazo de cinco días hábiles la existencia de un interés jurídico o legítimo relativo a su solicitud de autorización sanitaria. Así, dicho oficio lo previno a efecto de que invocara una norma constitucional en la que se estableciera o tutelara algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, demostrara que dicho acto trasgrede ese interés difuso de manera individual o colectiva, así como que probara pertenecer a tal colectividad.
3. Mediante escrito de nueve de marzo de dos mil dieciséis, el promovente desahogó la prevención señalando que la Cofepris carecía de facultades para solicitar que se acreditara el interés jurídico y legítimo. Asimismo, refirió que, con fundamento en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Cofepris carecía de facultad para solicitar información adicional una vez transcurrida la tercera parte del término que tiene para dar respuesta a un trámite. De igual forma, adujo la titularidad del derecho de petición del artículo 8º constitucional al tenor del cual podía solicitar cualquier cosa a un funcionario público, incluyendo una autorización sanitaria para el



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

consumo personal de marihuana y el ejercicio de los derechos correlativos a tal consumo.

4. Mediante oficio [REDACTED] la Cofepris refirió que, si bien es cierto que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que no podrá exigirse más formalidades que las previstas en la ley, también lo es que dicha ley remite directamente a la Ley General de Salud que establece los casos y modalidades en que se puede emitir una autorización sanitaria. De tal suerte, refirió que acreditar un interés jurídico o legítimo para proveer sobre una resolución por parte de la autoridad no es una formalidad sino un requisito de fondo referente a la existencia de un derecho subjetivo previsto por el conjunto normativo que el particular pueda ejercer o reclamar de la autoridad estatal.
5. De igual forma, la Cofepris sostuvo que de las manifestaciones vertidas en el desahogo tampoco se desprendían los elementos necesarios para acreditar un interés legítimo, es decir, la existencia de una norma constitucional que tutelara un interés difuso en beneficio de una colectividad o que dicho acto trasgrediera tal interés difuso, ni para probar la pertenencia a tal colectividad.
6. En virtud de lo anterior, la Cofepris determinó que no se desprendía del desahogo del requerimiento la existencia de un interés jurídico o legítimo toda vez que ni siquiera se estaba ante la existencia de una autorización en la modalidad debida. Así las cosas, en aplicación al artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, determinó desechar el trámite de mérito por no haber desahogado de manera satisfactoria la citada prevención.
7. **Demanda de amparo.** En contra de la resolución de la Cofepris [REDACTED] [REDACTED] promovió, por propio derecho, juicio de amparo indirecto mediante escrito depositado el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis en la Oficina de

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

8. En la demanda respectiva fueron señaladas como autoridades responsables y actos reclamados los que a continuación se precisan:

AUTORIDADES RESPONSABLES:

- Congreso de la Unión (integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores).
- Presidente de la República.
- Secretario de Salud.
- Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.
- Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.
- Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

ACTOS RECLAMADOS:

- Del Congreso de la Unión reclamó la expedición de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, en lo referente a los artículos 83, 84 y 85, así como sus consecuencias y efectos.
- Del Congreso de la Unión reclamó la expedición de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, en lo concerniente a los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, así como sus consecuencias y efectos.
- Del Presidente de la República reclamó la publicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con sus consecuencias y efectos.
- Del Presidente de la República reclamó la publicación de la Ley General de Salud, con todas sus consecuencias y efectos.
- Del Secretario de Salud reclamó todos los acuerdos, órdenes, instrucciones, verbales o escritas que, como superior jerárquico impartió al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios para negar, bajo la apariencia de un desechamiento, la autorización sanitaria formulada para consumir marihuana con fines recreativos.
- Del Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios reclamó los actos de cumplimiento, observancia, trámite y ejecución por conducto de su subordinado el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de las órdenes del Secretario de Salud. También reclamó

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

los actos que, de propio imperio, dictó, consistentes en las órdenes, instrucciones o acuerdos, proveídos o resoluciones giradas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para que, bajo la apariencia de un desechamiento, se negara la solicitud de autorización sanitaria para consumo personal con fines lúdicos de marihuana del promovente.

- Del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios reclamó los actos de cumplimiento de las órdenes dictadas por el Secretario de Salud o el Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Igualmente, reclamó los actos que de propia iniciativa haya realizado en la aplicación de los artículos impugnados mediante la emisión del oficio número [REDACTED] de ocho de julio de dos mil dieciséis con el que, bajo la apariencia de un desechamiento, negó la solicitud de autorización sanitaria para consumo personal con fines lúdicos de marihuana del promovente. De todas las autoridades, reclamó los actos tendentes a desconocer y vulnerar los derechos fundamentales inherentes a la persona como individuo libre y autónomo, en el contexto de una sociedad democrática, previstos en la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.

9. El promovente señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio los previstos en los artículos 3, 5, 13, 14, 16 y 17, en relación con los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal. Igualmente, consideró infringido el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
10. **Resolución del juicio de amparo.** Por razón de turno, tocó conocer de la demanda de amparo al Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, donde fue registrada con el número [REDACTED].
11. El juzgador federal llevó a cabo la audiencia constitucional el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis. Dictó sentencia en el sentido de sobreseer sobre los actos impugnados excepto sobre el oficio [REDACTED] y negando el amparo sobre los artículos 234, 235, 237, 245, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud.

12. **Recurso de revisión.** La parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia arriba indicada, mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil dieciséis, en el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México¹. En su escrito, el recurrente pidió remitir los autos originales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conociera del asunto.
13. El Presidente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió a trámite el recurso de revisión y ordenó su registro con el número de expediente [REDACTED]. Asimismo, sobre la solicitud del promovente de remitir los autos al Alto Tribunal, afirmó que se determinaría lo conducente una vez que se realizara el estudio del asunto².
14. El trece de diciembre de dos mil dieciséis, Carlos Alberto Larios Bernal, delegado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Secretario de Salud, interpuso recurso de revisión adhesiva, mismo que fue admitido por acuerdo de Presidencia del Tribunal Colegiado de catorce de diciembre de dos mil dieciséis.
15. **Solicitud de reasunción de competencia** [REDACTED]. Por escrito presentado ante este Alto Tribunal el primero de diciembre de dos mil dieciséis, el autorizado del quejoso solicitó a esta Primera Sala que reasumiera su competencia originaria para conocer del amparo en revisión [REDACTED] del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Ante la falta de legitimación del promovente, la Ministra Presidente sometió la solicitud a consideración de los Ministros integrantes

¹ Véase el expediente del recurso de revisión [REDACTED] del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, foja 3.

² Ibidem, foja 163.

³ Por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, el promovente volvió a solicitar el envío del asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación aduciendo los fundamentos que consideró pertinentes. Por su parte, el Presidente del Tribunal Colegiado mediante acuerdo de nueve de diciembre de dos mil dieciséis reiteró que se proveería lo conducente una vez que el Tribunal Colegiado realizara el estudio del asunto.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de la Primera Sala de la Suprema Corte⁴ sin que ninguno de ellos hiciera suya la referida solicitud por lo que se determinó desecharla⁵.

16. **Reserva de jurisdicción.** Derivado de lo anterior, por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, el Tribunal Colegiado de mérito dictó resolución en la que analizó la legitimación de la parte recurrente principal y adhesiva, la oportunidad de la presentación de los recursos y determinó la firmeza de los sobreseimientos decretados por el Juez de Distrito. Asimismo, analizó el recurso de revisión adhesiva del Presidente de la República y Secretario de Salud en tanto en él se alegaban causales de improcedencia y determinó que éstas eran infundadas sin que apreciara distinta causal de improcedencia que ameritara análisis⁶.
17. Así las cosas, el Tribunal Colegiado afirmó que en el recurso de revisión principal y adhesivo subsistía el problema de constitucionalidad respecto de los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud. En vista de lo anterior, ordenó remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fundamento en el punto noveno del Acuerdo General 5/2013 en tanto, a su juicio, se actualizaba la jurisdicción original de este Alto Tribunal por no existir jurisprudencia sobre el tema por parte del Pleno o las Salas o tres precedentes en el mismo sentido de forma ininterrumpida.
18. El catorce de junio de dos mil diecisiete, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó asumir competencia originaria para conocer del recurso de revisión⁷ y turnó el expediente para su estudio al Ministro José Ramón Cossío Díaz. Por su parte, por acuerdo de dos de

⁴ Ibidem, p. 292.

⁵ Ibidem, p. 311.

⁶ El órgano colegiado relató las causales de improcedencia aducidas por las autoridades responsables y las analizadas por el Juez de Distrito (Ibidem, fojas 383 a 389 vuelta).

⁷ Véase el expediente en que se actúa, p. 143.

agosto de dos mil diecisiete la Presidenta de la Primera Sala ordenó el avocamiento del asunto⁸.

II. COMPETENCIA

19. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo vigente a partir del 2 de abril de 2013; 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 86 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con lo establecido en los Puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal el 13 de mayo de 2013. Lo anterior, toda vez que el recurso de revisión se interpuso en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que subsiste el alegato de inconstitucionalidad de los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud sin que exista aún jurisprudencia sobre dicha disposición.

III. OPORTUNIDAD

20. Resulta innecesario analizar la oportunidad del recurso de revisión principal y del recurso de revisión adhesiva que nos ocupan en virtud de que el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto ya se hizo cargo de tal aspecto, concluyendo que ambos fueron interpuestos de manera oportuna⁹.
21. La interposición del recurso de revisión principal y adhesivo ha sido hecha por sujeto legitimado, en tanto es el propio quejoso del amparo indirecto cuya ejecutoria se recurre el que ha interpuesto este medio procesal y el delegado

⁸ Ibidem, p. 172.

⁹ Tal y como se advierte de la resolución del Tribunal Colegiado que previno en la revisión, visible en la foja 363 del amparo en revisión 387/2016.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de dos autoridades responsables, quien ha hecho valer recurso de revisión adhesiva.

IV. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO

22. A fin de dar respuesta a la materia del presente recurso de revisión, es imprescindible hacer referencia a los cuatro conceptos de violación formulados en la demanda, a las consideraciones de la sentencia recurrida, a los agravios planteados en el recurso de revisión y los argumentos presentados en el recurso de revisión adhesiva.
23. **Conceptos de violación.** La parte quejosa manifestó los siguientes conceptos de violación en la demanda de amparo:
- En el **primer concepto de violación** se alegó la vulneración de los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal por no observancia de los artículos 3, 4, 13, 14 y 17 de dicho ordenamiento. Así, refirió que el artículo 1 constitucional establece la obligación de interpretar conforme a la Constitución toda norma de derechos y el principio pro persona como criterio rector interpretativo. De igual forma, manifestó la existencia del principio de supremacía constitucional que implica que los preceptos constitucionales deben verse como normas jurídicas y no hipérboles del lenguaje. Ante ello, refirió que los actos reclamados vulneraron su derecho a la dignidad humana, identidad personal, pluralismo, derechos de la personalidad, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación individual, libertad personal y corporal, seguridad jurídica, debido proceso y una defensa adecuada y técnica.
 - En el **segundo concepto de violación**, refirió que los artículos 83, 84, 85, 86 y siguientes de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, vulneran los artículos 14, 16 y 17 constitucionales y, por ello, violentan el principio de supremacía constitucional previsto en los artículos 40 y 133 de la Constitución Federal. Así, adujo que dichos artículos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no configuran un procedimiento que respete plenamente el artículo 14 constitucional, es decir, el derecho a ser oído, a hacer valer razones y argumentos, controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y solicitar la práctica de pruebas que se estimen favorables dentro de plazos razonables. De igual forma, señaló que dichos artículos vulneran el artículo 8, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 29, incisos a) y b), de dicha convención.

- En el **tercer concepto de violación**, argumentó que los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 son violatorios de los derechos referidos en el primer concepto de violación. Adujo que el oficio de la Cofepris implícitamente aplicó la política prohibicionista contenida en los artículos impugnados de la Ley General de Salud. Lo anterior por considerar que el oficio impugnado, al requerir acreditar un interés jurídico, implícitamente aduce que el quejoso carece de un derecho a consumir cannabis. Además, sostuvo que el hecho de que las autoridades responsables reiteren que no existe una facultad para otorgar una autorización sanitaria sobre cannabis hace en realidad referencia a la norma que le impide hacerlo.
- Aunado a lo anterior, el quejoso refirió que los artículos impugnados de la Ley General de Salud conjuntamente establecen una política prohibicionista en torno al cannabis. Dicha prohibición categórica pretende disuadir el consumo de tal sustancia con el objetivo de proteger la salud personal y prevenir las adicciones.
- El quejoso sostuvo que dicha política prohibicionista vulnera el derecho a la identidad personal, pluralismo y dignidad humana. Tras transcribir los numerales de mérito y citar sentencias nacionales y de tribunales extranjeros, concluyó que el Estado no puede llevar a cabo acción alguna para suprimir las conductas que realice una persona para individualizarse en sociedad a menos que exista un interés superior para ello, cosa que no acontece en el caso concreto.
- Refirió que los numerales impugnados de la Ley General de Salud vulneran el derecho a la identidad, pluralismo y dignidad humana pues el autoconsumo de marihuana es una proyección que hace una persona de sus preferencias y rasgos que lo identifican y diferencian del resto de personas. Por ello, la Ley General de Salud desconoce el verdadero ser social de la persona y niega su derecho a la diferencia. El quejoso refirió que el cannabis se consume por curiosidad, búsqueda espiritual, placer, aburrimiento, enajenación social e incluso por búsqueda de identidad; motivos todos que se orientan a la definición del propio yo. Precisamente ante ello, proscribir su uso implica negar y suprimir conductas que confieren al individuo una diferencia específica.
- Ahora bien, el quejoso sostuvo que, aun si se adujera que los derechos a la identidad personal, principio de pluralismo y dignidad humana no son absolutos, los límites establecidos por la política prohibicionista son inconstitucionales e ilegítimos.
- En ese sentido, refirió que a la luz del criterio de la Primera Sala¹⁰, dicha restricción no tiene una finalidad legítima, pues no puede permitirse coaccionar a una persona a gozar de buena salud contra su voluntad. Afirmó que la política prohibicionista no es instrumental o idónea para prevenir posibles riesgos a la salud o combatir adicciones ya que el número de consumidores ha aumentado en los últimos años y hay pruebas objetivas que muestran que

¹⁰ Citó la jurisprudencia 1a./J. 2/2012 (9a.), de rubro "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, p. 533.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

despenalizar dicha sustancia no conllevaría a un aumento en su consumo. Aunado a ello, refirió que la política no es necesaria pues suprime más allá de lo estrictamente requerido los derechos involucrados y existen alternativas menos restrictivas para proteger la salud de los consumidores. Por último, sostuvo que la política prohibicionista no es proporcional pues genera más daños que beneficios.

- En la demanda de amparo se refirió que los artículos de la Ley General de Salud vulneran los derechos a la personalidad, libre desarrollo de la personalidad, propia imagen y dignidad humana. Tras citar numerosos fallos de la Suprema Corte señaló que el amparo en revisión [REDACTED] reconoció que el libre desarrollo de la personalidad protege el uso recreativo del cannabis. Argumento que, a pesar de no ser ese fallo vinculante, los juzgados que resuelvan sobre dicha temática deben tomarlo en cuenta para resolver al tenor de tales argumentos los planteamientos sobre la política prohibicionista.
- Aunado a ello, afirmó que, inclusive si se adujera que los derechos a la personalidad, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana no son absolutos, estos límites deben evaluarse a la luz de la doctrina de la Suprema Corte. Dicho estándar no sería superado, refirió, a la luz del análisis que practicó anteriormente.
- Sostuvo que los artículos impugnados de la Ley General de Salud vulneran el derecho a la salud en su aspecto negativo, es decir, la potestad de disponer de la salud personal inclusive para no gozar de buena salud. Considerar lo contrario, adujo, implicaría conceptualizar a la buena salud como una obligación. Así las cosas, el legislador adoptó una postura paternalista por no permitir a los ciudadanos gozar de uno de los elementos fundamentales de su derecho a la salud, pues tratándose del consumo de cannabis los ciudadanos no cuentan con un derecho de elegir ejercer o no tal derecho. Afirmó que tal postura paternalista está basada en prejuicios y valoraciones morales y no en un estudio científico del daño.
- El quejoso argumentó que no puede considerarse que el proteger la salud de los gobernados sea un fin legítimo al amparo del cual el Estado pueda prohibir sustancias como la marihuana. Ello implicaría que sería legítimo prohibir el tabaco, el alcohol, el azúcar porque causa diabetes, el consumo de grasa por causar colesterol o la cafeína por causar dependencia. De nueva cuenta, inclusive si el derecho a la salud en su vertiente de no gozar de buena salud, no fuera absoluto, la restricción a dicho derecho no estaría justificada por no superar el test de proporcionalidad fijado por la Suprema Corte, como reiteró en su demanda.
- Afirmó el quejoso que la aplicación implícita de los artículos de la Ley General de Salud vulnera los derechos a la autodeterminación, libertad individual y dignidad humana. Tras aducir el contenido del derecho a la autodeterminación, citó sentencias de diversos tribunales constitucionales que han interpretado dicho derecho. Sostuvo que, dado que la afectación por el consumo de

cannabis sólo afecta directamente al consumidor, la prohibición que sobre ella pesa demuestra que el poder legislativo ha impuesto sobre la persona concepciones particulares de la santidad del cuerpo humano y ha legislado en asuntos de conciencia, creencia, elección y autonomía personal. Señaló que dicha limitación no supera tampoco el estándar de proporcionalidad establecido por la Suprema Corte.

- El quejoso adujo que la aplicación de los artículos impugnados no supera los exámenes de escrutinio formulados por la Suprema Corte para analizar restricciones a los derechos fundamentales. Así, después de transcribir diversas tesis de este tribunal afirmó que la restricción contenida en la Ley General de Salud no persigue un fin legítimo porque la finalidad de proteger la salud contra la voluntad de la persona o combatir las adicciones no encajan en esta categoría. En segundo lugar, sostuvo que la medida no es instrumental pues, citando numerosas publicaciones y estudios, la prohibición no es un medio para mejorar la salud, la descriminalización del consumo de marihuana no generaría mayor consumo, y el consumo de marihuana no genera un daño a la salud sino un mero riesgo de daño a la salud. Adujo que la medida prohibicionista no es la alternativa menos gravosa pues existen diversas alternativas menos restrictivas como el modelo holandés (en que se restringe los lugares donde se puede consumir y comprar cannabis), el modelo uruguayo (en donde hay un modelo mixto de producción e inspección estatal), el modelo del tabaco y alcohol (régimen de permisión controlada), las políticas educativas y de salud y las prácticas focalizadas de reducción del daño.
- Así, manifestó que la política prohibicionista es sobreinclusiva en tanto restringe situaciones más allá de las específicamente requeridas para evitar generar un daño a la salud. Mencionó que existen cuatro riesgos comunes asociados al consumo de cannabis: aumento de probabilidad de sufrir desórdenes respiratorios, riesgo de generar dependencia, riesgo de síntomas psicóticos y riesgo de generar accidentes si se maneja bajo su influjo. Citando diversos estudios científicos entró al análisis de cada uno de estos cuatro riesgos comunes para demostrar que, a su juicio, hay alternativas menos restrictivas a la política prohibicionista absoluta.
- Además, recalcó que la medida no es proporcional en tanto la política prohibicionista no sólo no aporta un beneficio para el combate de las adicciones y procuración de la salud, sino que genera un riesgo latente a la salud, seguridad e integridad personal de los consumidores y sus familias. Citando diversos estudios, refirió que existe un incremento del riesgo de ser víctima de un delito, riesgo que se ha identificado con la política prohibicionista. En segundo lugar, afirmó que se ha generado un mercado negro con efectos nocivos para los consumidores y la población.
- En la última parte, el quejoso refirió que no pasaba desapercibido que el artículo 478, en relación a la tabla del artículo 479, ambos de la Ley General de Salud, excluyen del delito la posesión de cinco gramos o menos. Sin embargo, precisó que tal exención no es suficiente porque un cigarrillo o porro contiene aproximadamente .75 gramos de cannabis con lo cual existe la permisión de proteger aproximadamente 6 cigarrillos, cantidad que no está justificada científica o racionalmente.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En su **cuarto concepto de violación** el quejoso adujo que los actos de la Cofepris vulneran el derecho a la igualdad reconocido en los artículos 1 y 13 constitucionales. Tras citar doctrina y transcribir varias fojas de jurisprudencia, afirmó que la Cofepris quebrantó el derecho a la igualdad pues respecto a él se desechó su solicitud de autorización, mientras que respecto a otras personas físicas¹¹ se atendió su petición sin mayores requisitos y se les negó dicha petición.

- En el **quinto concepto de violación** adujo que se vulneró el derecho al debido proceso, legalidad, competencia y seguridad jurídica en relación con los artículos 1 y 133 constitucionales. Así, refirió que la Cofepris se encontraba obligada a respetar el derecho al debido proceso con independencia de lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Estableció que, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre formalidades esenciales del procedimiento, se le debieron haber notificado las actuaciones realizadas por la responsable una vez iniciado el trámite del desahogo de la prevención. Aunado a ello, sostuvo que no se mencionó en qué consiste el parámetro de satisfacción, ni el porqué de la inclusión de los términos "interés jurídico" e "interés legítimo", la razonabilidad en el empleo de ambos y por qué dejó de tomar en cuenta la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades propias de uno y otro interés.

En ese sentido, señaló que el artículo constitucional es de aplicación preferente e inmediata respecto de lo que disponga cualquier norma. En ese sentido, señaló como insuficiente la simple prevención que se le dio al quejoso mediante oficio de dos de marzo de dos mil dieciséis, pues ésta no cuenta con los elementos suficientes para respetar el derecho al debido proceso, máxime que las autoridades pidieron acreditar el nebuloso concepto de "interés jurídico" e "interés legítimo". Agregó que el hecho de que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no regule nada acerca de la forma de llevar a cabo dicha prevención, no implica que pueda ser realizada de forma arbitraria o caprichosa, sino que debe realizarse en un ejercicio racional respetuoso de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 14, 16 y 17. Así, argumentó que se vulneró el debido proceso en tanto no tuvo oportunidad de ofrecer pruebas, objetar documentos, formular alegatos ni fue oído ni vencido, lo que sostuvo que lo dejó en estado de incertidumbre jurídica. Estimó que la resolución **6** estuvo fundada ni motivada pues la Cofepris a) solicitó extemporáneamente la acreditación del interés al promovente; b) negó que tuviera un derecho para solicitar el consumo de cannabis; c) trasgredió su derecho constitucional de petición; d) desechó la solicitud con sustento en información solicitada fuera de tiempo y e) ninguno de los preceptos legales que citó le atribuyen competencia expresa para emitir los actos combatidos. Desarrolló pormenorizadamente los cinco puntos mencionados con anterioridad.

¹¹ Expresamente mencionó el caso de

y la persona moral

24. **Sentencia de Amparo.** El Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México sobreseyó sobre los actos impugnados excepto sobre el oficio [REDACTED] del ocho de julio de dos mil dieciséis y sobre los artículos 234, 235, 237, 245, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, negando el amparo. Para justificar lo anterior ofreció los razonamientos siguientes:

- Al precisar los actos señaló que, aunque el quejoso no identificó expresamente los artículos 234, 368 y 479 de la Ley General de Salud, vertió argumentos para demostrar su inconstitucionalidad, por lo que los tuvo como impugnados.
- Ahora bien, el juzgador federal **sobreseyó** el juicio en lo que respecta al Secretario de Salud en lo que concierne a las órdenes verbales o escritas a la Cofepris. También **sobreseyó** por no ser ciertos los actos reclamados al Comisionado Federal consistentes en la ejecución de las órdenes del Secretario de Salud y en la emisión de las órdenes verbales o escritas al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas. De igual forma, **sobreseyó**, por no ser ciertos, los actos del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas consistentes en la ejecución de las órdenes verbales o escritas anteriormente mencionadas.
- Ahora bien, respecto del oficio [REDACTED] el Juzgador consideró que el juicio de amparo era improcedente en cuanto existía un juicio de amparo [REDACTED] que tenía tal oficio precisamente como acto reclamado. En ese sentido, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa dictó sentencia en el sentido de sobreseer y negar el amparo; ejecutoria que fue impugnada en recurso de revisión registrada bajo el número [REDACTED] del índice del Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que aún se encuentra pendiente de resolución.
- Por otro lado, oficiosamente advirtió la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en cuanto a los artículos 83 a 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo toda vez que fueron reclamados con motivo de su primer acto de aplicación sin que se desprenda que fueron aplicados. En ese sentido, el Juez de Distrito sostuvo que las normas impugnadas establecen las reglas del procedimiento administrativo del recurso de revisión sin que del oficio impugnado [REDACTED] se desprenda que se aplicaron ni explícita ni implícitamente por lo que **sobreseyó** el juicio de amparo.
- Finalmente, advirtió de oficio que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, dado que al Presidente de la República únicamente se le reclamó la publicación de las normas referidas sin hacer alusión a vicios propios, sostuvo que procedía **sobreseer** conforme a los numerales de mérito.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

- Una vez apreciadas las causas de improcedencia y de sobreseimiento respectivas, el juzgador federal precisó que, si bien el acto reclamado lo constituye un dasechamiento de la solicitud de autorización sanitaria por no haber acreditado el interés y por no tener la autoridad facultades para ello, lo cierto es que dicha negativa implícitamente se sustenta en los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud. Así, el juzgador señaló que los conceptos de violación están dirigidos a combatir el sistema normativo de restricciones de carácter administrativo del cannabis.
- Tras explicar las implicaciones y objetivos del sistema prohibicionista, afirmó en la sentencia que el sistema normativo impugnado implica el ejercicio de la facultad del legislador federal en lo relativo a la prevención del consumo y control sanitario de estupefacientes y psicotrópicos, lo que hace evidente que el tema que se analiza no conlleva el análisis de un derecho aislado sino involucra un aspecto de suma importancia como la salud pública.
- El juez refirió que la protección de la salud es un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos de acuerdo a la Constitución y tratados internacionales. Ahora bien, sostuvo que la salud no sólo tiene una proyección individual y personal, sino también una dimensión pública o social. Respecto de esta última faceta, afirmó que el derecho a la salud se traduce en un deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad y establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a la salud. Adujo que lo anterior obliga al Estado a emprender acciones necesarias para alcanzar tal fin como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad, etc. Por ello, aseveró que la Ley General de Salud identifica el consumo de marihuana como un problema de salud pública y en tal virtud ha establecido el sistema normativo mencionado.
- En consecuencia, adujo que no debía perderse de vista que el modelo adoptado por la Constitución es el del Estado regulador, en el cual es posible imponer limitaciones a derechos en aras de alcanzar fines de política pública siempre que éstas sean razonables. Señaló que, como parte de las obligaciones estatales en materia de salud, el Estado mexicano ha celebrado tratados internacionales que regulan el régimen de fiscalización de estupefacientes y psicotrópicos. Agregó que son ejemplo de lo anterior la Convención Única sobre Estupefacientes de mil novecientos sesenta y uno, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de mil novecientos setenta y uno y la Convención de las Naciones Unidas en contra del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de mil novecientos ochenta y ocho. Las dos primeras convenciones incluyen al cannabis en su lista de sustancias. Ahora bien, afirmó que tales disposiciones convencionales tienen por objeto tipificar las medidas de control aplicables a nivel internacional con el fin de garantizar la disponibilidad de sustancias psicoactivas para fines médicos y científicos.

- Una vez realizado lo anterior, reseñó diversos precedentes de la Suprema Corte en que se ha dado contenido al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entre dichos precedentes, señaló que el amparo en revisión [REDACTED], resuelto por la Primera Sala, precisó que las acciones o actividades necesarias para consumir marihuana implicaban ejercer el derecho a decidir qué actividades recreativas o lúdicas se desean realizar por lo que su prohibición incide u obstaculiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
- Sin embargo, refirió también que la propia Suprema Corte ha señalado que los derechos humanos no son absolutos y que pueden ser restringidos o encontrar límite en el respeto de los derechos de los demás y el orden público. Empero, dichas restricciones deben ser bajo las condiciones y casos que establece la propia Constitución¹². En razón de lo anterior, el juzgador corrió el test de restricciones a los derechos fundamentales estimando, al igual que en el amparo en revisión [REDACTED] que los preceptos impugnados perseguían la protección de la salud y el orden público. Adujo que al igual que lo apreció la Primera Sala en el amparo en revisión [REDACTED] tales finalidades son constitucionalmente válidas.
- En cuanto a la idoneidad de la medida, sostuvo que, siguiendo el análisis de la Primera Sala en el amparo en revisión [REDACTED] no existe evidencia científica concluyente en el sentido de que el consumo de la marihuana cause afectaciones graves a la salud, pero sí datos de los que se desprende que tal sustancia ocasiona daños de menor grado a la salud y orden público, información que coincide con los datos aportados por la autoridad responsable, en el sentido de que el cannabis entraña un riesgo muy bajo de causar la muerte, pero que la intoxicación con dichas sustancias puede generar riesgo de ansiedad, deterioro de la atención y memoria, disforia, etc. Ante ello, concluyó que las normas reclamadas sí contribuyen en algún modo y algún grado a lograr el propósito buscado por el legislador, por lo que se concluyó que la medida era idónea.
- Respecto a la necesidad de la medida, refirió que la política prohibicionista persigue la finalidad constitucionalmente imperiosa de garantizar positivamente la salud. Por ello, desde ese punto de vista, la determinación de la existencia de una medida alternativa que restrinja en el menor grado posible el libre desarrollo de la personalidad no puede ni debe centrarse de manera exclusiva en dicha libertad individual, pues debe considerarse que las normas pretenden dar eficacia a la dimensión social que tiene la protección de la salud que impone al Estado el deber de atender los problemas de salud, entre los cuales se consideró estaba el consumo de marihuana.
- En ese sentido, el juzgador estimó que no existía una medida igualmente idónea ni menos restrictiva que la política prohibicionista, pues si el consumo de marihuana se ha identificado como un problema de salud pública, resulta justificada la intervención estatal, máxime que el objetivo más amplio de dicha

¹² Refirió a la metodología asentada en la jurisprudencia 1a./J. 2/2012 (9a.), de rubro "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, libro V, Febrero de 2012, p. 533.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

política es impulsar la protección de todos los mexicanos. Así refirió que, no obstante la Suprema Corte en el amparo en revisión [REDACTED] hubiera sostenido que existían medidas menos restrictivas, no era posible tomar dichas medidas como alternativas. Ello porque, si se le otorgara al quejoso la autorización para el desarrollo de las actividades pretendidas, se le estaría permitiendo el ejercicio de un derecho sin mayores lineamientos para ello y, con los posibles riesgos que implicaría a los derechos de terceros, al no existir un marco regulatorio, administrativo y legislativo que establezca modalidades para su ejercicio.

- Aunado a ello, afirmó que, incluso en el caso de una eventual concesión de amparo para dicha autorización sanitaria, ello no sería una reparación efectiva pues se dejaría al promovente en completo estado de inseguridad jurídica, pues excluyó de su solicitud los actos de comercio y la adquisición misma de marihuana. De tal suerte, afirmó que, para poder tener los beneficios de la autorización respectiva, sería necesaria la comisión de diversos delitos previstos en normas punitivas de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal que no formaron parte de la impugnación del quejoso.
- Finalmente, en cuanto a la proporcionalidad de la medida, afirmó que, dado que el sistema permite un consumo de cinco gramos del estupefaciente, dicha restricción no afecta desmedidamente la libertad del quejoso para consumir la sustancia.
- Por otro lado, en cuanto a la vulneración del derecho a la igualdad en tanto la solicitud del promovente fue desechada y otras fueron negadas, el juzgador afirmó que se partía de la premisa planteada por el propio promovente de que el desechamiento de la solicitud se trataba de una negativa implícita. Lo anterior se corroboró por el hecho de que la forma en que la autoridad contestó las solicitudes fue afirmando que, hasta el momento, no estaba contemplada la posibilidad de otorgar autorización alguna para llevar a cabo tales actos. Por ello, afirmó que si se establece que la autoridad sanitaria sustentó su dicho en la misma razón y se está en presencia de una negativa implícita, es infundado el concepto respectivo.
- Finalmente, respecto a la vulneración del oficio a los derechos al debido proceso, legalidad, competencia, seguridad jurídica y audiencia, la sentencia refirió que, de la copia certificada de la solicitud que obra en el expediente se advierte que fue notificado de todas las actuaciones a fin de darle una respuesta. Por otro lado, en la sentencia se observó que efectivamente la autoridad responsable informó al quejoso las razones por las cuales desechó la solicitud de autorización sanitaria. Asimismo, determinó inoperantes las consideraciones del quejoso respecto a que la autoridad responsable lo previno fuera del plazo establecido por ley, porque dichas consideraciones se realizaron en el oficio [REDACTED] respecto del cual se sobreseyó por ser materia de diverso juicio de amparo.

- Aunado a ello, declaró infundado el alegato de la vulneración al derecho de petición pues tal derecho encuentra satisfacción ante una respuesta de la autoridad, independientemente de si ha sido favorable a los intereses del solicitante. Por ello, aun cuando la respuesta de la autoridad fue implícitamente negativa, fue respetuosa del derecho de petición del quejoso.
- En virtud de las anteriores consideraciones el juzgador determinó sobreseer el juicio de amparo en los términos explicados y negar la protección de la justicia federal.

25. **Recurso de revisión.** En su recurso de revisión, el recurrente hace valer los siguientes agravios:

- En su **primer agravio** el recurrente aduce que se vulneraron los artículos 74, fracción III, de la Ley de Amparo, 222 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al texto del numeral 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, afirma que el juez federal guardó silencio respecto al acervo probatorio y omitió valorar las pruebas como un bloque armónico y bajo los parámetros de sencillez y efectividad.
- En su **segundo agravio** afirma que se vulneraron los principios de fundamentación y motivación, congruencia y exhaustividad en relación al concepto de violación tercero relativo al derecho a la propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana. De tal suerte, el recurrente aduce que en su demanda de amparo sostuvo que la política prohibicionista establecida en los artículos de la Ley General de Salud impugnada vulnera los derechos a la personalidad, propia imagen, intimidad, **libre desarrollo de la personalidad** y, en general, dignidad humana.
- En esa línea, el recurrente retoma las consideraciones realizadas en su demanda de amparo para enunciar nuevamente el alcance del derecho al **libre desarrollo de la personalidad** a la luz de las mismas sentencias que había citado en su demanda de amparo. Retiene que el amparo en revisión [REDACTED] resuelto por la Suprema Corte es un caso idéntico al actual por lo que los juzgados y tribunales deben resolver al tenor de los argumentos empleados en éste. Afirma que los artículos impugnados de la Ley General de Salud se basan en un perfeccionismo estatal que es incompatible con la Constitución que establece que el individuo debe ser quien elija de forma libre e informada, su proyecto de vida, así como la manera en que logrará sus metas y objetivos.
- Disiente de la justificación que el Juez de Distrito realiza de las restricciones de la norma a los derechos fundamentales de la persona. En primer término, aduce que el Juez de Distrito trivializó el objetivo de la política prohibicionista al sostener que ésta tiene por finalidad la protección de la salud y del orden público. A juicio del recurrente, la verdadera finalidad de la política prohibicionista es "proteger la salud de los particulares contra su voluntad y sancionar a los usuarios de cannabis", lo que es contrario a los derechos humanos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

- En segundo término, afirma que el Juez de Distrito no llevó a cabo un análisis de la instrumentalidad de la medida para determinar si ésta es útil a su finalidad, pues se limita a analizar si el cannabis genera un potencial daño a la salud, lo que resulta inconexo e irrelevante al examen de idoneidad.
- En tercer término, afirma que el Juez de Distrito no llevó a cabo un análisis de la necesidad de la medida, sino que se limitó a repetir que el objetivo de es importante.
- En cuarto término, aduce que el Juez de Distrito señaló que los artículos impugnados permitían el consumo de cannabis siempre y cuando fuera de menos de cinco gramos. Sin embargo, señala que el artículo 479 de la Ley General de Salud no permite el consumo, sino que contempla una excluyente de responsabilidad. Agrega que el Juez de Distrito omitió llevar a cabo un examen de proporcionalidad en sentido estricto de la política prohibicionista porque no tomó en cuenta que genera una afectación innecesaria o desmedida a derechos constitucionalmente protegidos.
- En su **agravio tercero** sostiene que el Tribunal Colegiado no cumplió con los principios de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad. Aduce que en su demanda de amparo alegó que la restricción de la política prohibicionista a los derechos a la autodeterminación, libertad individual y corporal, libre **desarrollo de la personalidad**, identidad personal y disposición de la salud propia no superaba los exámenes de escrutinio y proporcionalidad establecidos por la Suprema Corte.
- Refiere que el Juez de Distrito omitió dar respuesta a cada una de las razones por las que el quejoso dijo que la política prohibicionista no superaba los exámenes de escrutinio y proporcionalidad. Además, señala que aplicó dicho test con total laxidad y deferencia hacia el legislador. Por ello, procede a analizar los pasos del test de restricciones a derechos constitucionales.
- En primer término, refiere que la forma en que el Juez de Distrito definió el objetivo de la política prohibicionista es sumamente abstracto y hubiera permitido justificar las políticas más deleznable de la humanidad bajo una finalidad legítima¹³. Por ello; reitera que la verdadera finalidad de la medida es proteger la salud de todo particular en contra de la voluntad de éstos. Sostiene que la anterior no es una finalidad legítima porque implica partir de la base de que el individuo no tiene la capacidad racional de disponer de su propio cuerpo, su mente y su persona.
- En segundo término, aduce que el Juez de Distrito no analiza correctamente la adecuación de la medida. Sostiene que los argumentos que formuló el juez están más bien relacionados con el requisito de finalidad legítima. El recurrente reitera los siguientes argumentos de su demanda de amparo: a) la prohibición

¹³ El recurrente procedió a justificar políticas negativas (esclavitud en Estados Unidos de América, Apartheid en Sudáfrica o campos de exterminio en la Segunda Guerra Mundial) con un alto nivel de abstracción para demostrar que, en su opinión, con dicha lógica podría justificarse todo.

no es un medio para mejorar la salud; b) la descriminalización del consumo de marihuana no aumenta el consumo; c) el consumo no genera un daño a la salud sino un mero riesgo de daño a la salud¹⁴.

- El recurrente estima que el Juez de Distrito incurrió en un error pues en la solicitud formulada por el quejoso sí solicitó permiso para importar y adquirir la semilla del cannabis. También refiere que el juez adujo que se podrían producir daños a terceros en caso de conceder el amparo, pero que esa afirmación no está basada en estudios científicos o sustento empírico, por lo que debe de estar basada en prejuicios sociales y conjeturas sin sustento empírico. Además, sostiene que las pruebas ofrecidas demuestran que el consumo personal y razonado de cannabis no afecta derechos de terceros.
- El recurrente reitera que la política prohibicionista no es la alternativa menos restrictiva. Al respecto refiere que existen modelos menos restrictivos como el holandés, el uruguayo, el del tabaco y alcohol, las políticas educativas y de salud y las prácticas focalizadas en la reducción de daño.
- Aduce que la medida restringe más de lo necesario los derechos de autodeterminación, **libre desarrollo de la personalidad**, identidad personal, libertad individual y disposición sobre la salud personal. Con base en un informe elaborado por la Fundación Beckley sostiene que es posible apreciar que existen varios riesgos asociados al consumo de cannabis. Transcribe íntegramente las consideraciones de su demanda de amparo respecto de por qué la prohibición no es proporcional en torno a dichos riesgos pues restringe los derechos relativos más allá de lo necesario.
- En relación al requisito de proporcionalidad en sentido estricto, aduce que la política prohibicionista no aporta un beneficio a la procuración de salud y combate de las adicciones y genera un riesgo latente a la salud y seguridad de los consumidores de cannabis y sus familias. Afirma que son ejemplos de lo anterior los daños a la salud ocasionados por la prohibición; el riesgo de ser lastimado o de perder la vida y la generación de un mercado negro con efectos nocivos para la población¹⁵.
- Respecto a la afirmación del Juez de Distrito de que la política prohibicionista es proporcional porque no sanciona a las personas que consumen menos de 5 gramos de cannabis, sostiene que en realidad el artículo 478, en relación al 479 de la Ley General de Salud, únicamente contiene una eximente de responsabilidad y no una autorización para su consumo. Además, argumenta que la despenalización del consumo de hasta 5 gramos no resuelve el problema para los consumidores, pues deben recurrir a un mercado ilegal o bien producir la marihuana. Explica que si sembrara una planta de marihuana, ésta generaría más de 5 gramos haciéndolo acreedor a la sanción penal.
- Respecto al argumento del Juez de Distrito de que la prohibición es proporcional porque la ausencia de la política prohibicionista no permitiría lograr los propósitos del legislador, el recurrente aduce que dicho argumento

¹⁴ Citó literatura científica para apoyar su dicho.

¹⁵ Soporta su dicho con citas bibliográficas.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

no está relacionado con la proporcionalidad de la medida. Indica que el juzgador confundió las razones propias del requisito de adecuación con las razones del requisito de proporcionalidad. En todo caso, sostiene que no se ofrecieron pruebas que acrediten la adecuación de la medida.

- En su **cuarto agravio** señala que, no obstante haber argumentado que era titular del derecho a la identidad personal y de pluralismo, el Juez de Distrito injustificadamente se limitó a aducir que tales derechos forman parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, argumenta que tales derechos tienen una fuente distinta y deben ser objeto de un trato diferenciado, por lo que la sentencia es omisa en pronunciarse sobre ellos.
- Refiere que el consumo de cannabis y la alteración del estado anímico se lleva a cabo por una pluralidad de motivaciones, entre ellas la curiosidad, búsqueda espiritual, placer, enajenación social y búsqueda de identidad. Por ello, sostiene que proscribir el consumo implica no sólo proscribir el uso de una sustancia particular, sino también la supresión de conductas que confieren al individuo una diferencia específica. De tal suerte, el recurrente refiere que dicha prohibición no supera un examen de proporcionalidad al tenor de las consideraciones que expresó en su tercer agravio.
- En su **agravio quinto**, afirma que a pesar de que adujo una vulneración del derecho humano a la disposición de la salud personal, el Juez de Distrito hizo caso omiso sosteniendo sin más que tal derecho quedaba comprendido en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ante lo anterior, transcribe las razones esgrimidas en su demanda de amparo para considerar que, inclusive si el derecho a la salud propia no es absoluto, la limitación de la política prohibicionista es una restricción ilegítima.
- En su **agravio sexto**, ~~aduce~~ que en su demanda de amparo alegó que la aplicación de la política prohibicionista vulneraba su derecho a la autodeterminación, libertad individual y dignidad humana. Sostiene que, no obstante lo anterior, el Juez de Distrito hizo caso omiso a las argumentaciones y sostuvo sin más que tales derechos quedaban comprendidos en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En vista de lo anterior transcribe íntegramente las partes de su demanda de amparo relativas a la titularidad del derecho a la autodeterminación, el alcance de dicho derecho y la violación al derecho a la autodeterminación por la política prohibicionista. Concluye sosteniendo que en su tercer agravio formula un análisis detallado sobre por qué no se superará el test de proporcionalidad y escrutinio y refiere hacer una síntesis de tal agravio.
- En su **séptimo agravio**, aduce que las autoridades responsables vulneraron en su detrimento el derecho de legalidad y seguridad jurídica pues sin fundamento y motivo justificado resolvieron desfavorablemente su solicitud de consumo personal. Sostiene que en el oficio impugnado no se fundó la facultad para solicitar extemporáneamente que se acredite el interés del quejoso dentro del procedimiento administrativo. Así, estima que el Juez de Distrito

indebidamente determinó inoperantes dichos argumentos que formaron parte de sus conceptos de violación porque la extemporaneidad de tal oficio es relevante a la *litis* planteada. Argumenta que la Cofepris contestó casi diez meses después de que el quejoso hubiera realizado tal solicitud por lo que dicha respuesta es extemporánea.

- Aunado a lo anterior, aduce que el oficio que niega la autorización pretendió resolver desfavorablemente dicha solicitud con base en la información adicional solicitada en el oficio de prevención. Sostiene que ello vulnera el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo del cual se desprende que la autoridad únicamente puede solicitar el cumplimiento de requisitos adicionales dentro del primer tercio del plazo para que se dé respuesta el trámite. A su vez, señala que el tercer párrafo de dicho artículo establece que, si se violó el plazo para solicitar requisitos adicionales, no se puede resolver desfavorablemente el trámite por insuficiencia de tal información. Refiere, además, que el oficio de negativa se funda en más requisitos que los establecidos en la normatividad vigente, pues se le exigió acreditar el "interés jurídico o legítimo".
- En su **agravio octavo**, argumenta que se vulneraron los principios de fundamentación y motivación, congruencia y exhaustividad, en relación a su concepto de violación sobre igualdad. Reitera que enfrentó una patente desigualdad por parte de la Cofepris pues a las personas que refirió en su demanda de amparo se les negó la autorización mientras que al quejoso se le desechó. Si bien es cierto que en ambos casos se aplicaron los artículos de la política prohibicionista, afirma que el trato entre ambos no es equitativo. A diferencia del caso de [REDACTED] afirma que a él se le aplicó implícita y no explícitamente la política prohibicionista, se le previno para que diera información adicional y tuvo una respuesta definitiva con muchos meses de diferencia.

26. **Recurso de revisión adhesivo.** En su escrito, el delegado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de la Secretaría de Salud aduce los motivos por los cuales considera que el recurso de revisión principal es improcedente (argumentos que ya fueron analizados por el Tribunal Colegiado que previno del asunto, como se dará cuenta más adelante), así como razones de fondo con miras a fortalecer la resolución del Juzgado de Distrito. Sobre éstas últimas, refiere esencialmente lo siguiente:

- En su **primer agravio adhesivo** afirma que los agravios del recurrente segundo a sexto son infundados e inoperantes. Sostiene que en el caso particular el cannabis se encuentra restringido por ley pues las autoridades en materia de salud tomaron la medida de prohibir dicha sustancia para proteger el derecho a la salud. Señala que una de estas acciones puede ser el desarrollo de políticas públicas y otra el establecimiento de controles legales. Además, afirma que la parte quejosa no acreditó con medio alguno que los



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

artículos impugnados no protejan ni promuevan la salud de las personas y que el uso de dicha sustancia constituya un medio más seguro para proteger la salud de las personas.

- Por otro lado, argumenta que el quejoso omitió exhibir constancias para acreditar su dicho, por lo que no acredita su interés jurídico o legítimo en tanto no acreditó que el consumo lúdico que pretende no cause afectación a terceros. Es decir, si la parte quejosa refirió que el consumo lúdico que pretende sólo generaría un perjuicio a su persona, de ello no se sigue que efectivamente sea cierto que se ubique en el supuesto de prohibición. Por ello, argumenta que su situación particular es la de una simple expectativa de derecho de la que quisiera gozar el quejoso, sin embargo, ello no es lícito de conformidad con los artículos impugnados de la Ley General de Salud. Sostiene que el quejoso no puede pretender que en el juicio de amparo se tutelén sus intereses particulares por encima de los intereses públicos o de la comunidad.
- Argumenta que no es correcto pretender basar la inconstitucionalidad de una norma obligatoria en situaciones hipotéticas o particulares del quejoso dada la característica de generalidad con que cuentan las leyes o normas administrativas. Además, refiere que los agravios de la parte recurrente son inoperantes porque sólo reiteran las manifestaciones que vertió en su escrito inicial de demanda.
- En su **agravio segundo**, el recurrente adhesivo sostiene que son infundados los agravios segundo a sexto y octavo al sostener que las restricciones impuestas por la Ley General de Salud no superan el estándar de restricciones de la Suprema Corte.
- De tal suerte, refiere que la restricción contenida en los numerales de mérito de la Ley General de Salud busca un fin legítimo como es la protección de la salud y la protección de la salud de niños y niñas como sector vulnerable de la población. Estima que dichas restricciones son necesarias para obtener tales fines en tanto está demostrado científicamente que los efectos del cannabis son perjudiciales a la salud física y psíquica de las personas, por lo que prohibir su consumo se encuentra justificado válidamente. De conformidad con el Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), el estímulo de receptores de cannabinoides puede dar lugar a: sensación de euforia, sedación y relajación; alteraciones de la percepción temporal; actividad analgésica y antiinflamatoria; actividad orexígena y antiemética; ataxia y debilidad muscular; disminución de la presión intraocular; hipotermia; broncodilatación; hipotensión y taquicardia; efectos neuroendocrinos; inmunestimulación a dosis baja e inmunosupresión a dosis altas y efectos antiproliferativos. Sostiene que estas respuestas atentan a la integridad personal y van en detrimento del nivel de vida de la persona. Por ello, sostiene que la ley debe prohibir el consumo de dicha sustancia para lograr los fines del Estado social de derecho y evitar que se vulnere la dignidad humana.

- Refiere que la prohibición es proporcional porque el grado de restricción es sobradamente recompensado por los efectos benéficos que tiene desde una perspectiva preocupada en garantizar la salud de la población en general y en especial la de los menores de edad. De tal suerte, cita estudios del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Directora de Vinculación y Coordinación Operativas del Consejo Nacional Contra las Adicciones en que, opina, se demuestran los efectos adversos producidos por el consumo de estupefacientes.
- Aunado a lo anterior, refiere que debe considerarse que el derecho a la protección da la salud y al medio ambiente son garantías que la Constitución Federal prevé para todo individuo y que no pueden suspenderse ni restringirse. Sostiene que el consumo de cannabis es grave y en México el 7% de las muertes son atribuibles al consumo de cannabis, según datos del Consejo Nacional Contra las Adicciones. Afirma que el uso de productos de cannabis es uno de los problemas más importantes de salud pública del mundo, causando mortalidad y discapacidad prevenibles. Señala que el humo de cannabis o THC de segundo mano es una grave amenaza para la salud de los no fumadores expuestos, causando enfermedades graves a los adultos y, en particular, a los niños. Por último, indica que la mayoría de los fumadores comienzan a fumar a una edad muy temprana sin ser conscientes del grado y naturaleza del daño causado por los productos de cannabis y que debido a las propiedades adictivas de ese y otros componentes son a menudo incapaces de dejar de fumar aun cuando estén sumamente motivados a hacerlo.
- El recurrente adhesivo sostiene que en muchos países se ha tratado de usar marihuana o THC con fines médicos sin que hasta la fecha se haya demostrado la efectividad que tienen los tratamientos en comparación con los fármacos habituales.
- Ahora bien, aduce que los derechos que invoca el quejoso son derechos circunscritos única y exclusivamente en relación con el ser humano como persona física. Argumenta que dichos derechos no pueden estar por encima de los derechos de la colectividad y grupos vulnerables. Además, sostiene que el quejoso no es titular de los derechos fundamentales que afirma se trasgreden en su perjuicio porque éstos son personalísimos y de tipo subjetivos inherentes a la naturaleza humana¹⁶. Dado que el quejoso no es titular de los derechos fundamentales absolutos que considera se trasgreden, considera que sus motivos de disenso son inoperantes.
- Refiere también que no hay una prohibición como tal de consumir cannabis en tanto existe en el artículo 479 de la Ley General de Salud la permisión de consumir hasta cinco gramos. Afirma que el objeto de la Ley General de Salud es la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos por lo que la constitucionalidad de los artículos impugnados no puede depender de la situación personal del quejoso al tratarse de una norma general, impersonal y abstracta que pretende contribuir al ejercicio de las capacidades de las personas, la mejora de su calidad de vida y contribuir al desarrollo social.

¹⁶ Al tenor de la tesis P. LXVI/2009, de rubro "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, p. 7.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

- Por otro lado, sostiene que la prohibición contenida en los artículos impugnados no es arbitraria ni caprichosa, no constituye una intromisión a su derecho a la intimidad dado que no se le obliga a revelar aspectos de su vida no conocidos por otro, ni interfieren en el poder de decisión del quejoso sobre datos relativos a su persona. Argumenta que tampoco se limita el derecho al libre desarrollo de la personalidad del quejoso pues no se limita su habilidad de escoger su apariencia personal, su profesión o actividad laboral ni la forma en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida. Señala que la Ley General de Salud tiene como finalidad dar cumplimiento a la obligación del Estado de proteger la salud de toda persona en términos del artículo 4º constitucional, por lo que no se observa que vulnere o limite los derechos mencionados.
- Sostiene que la restricción es válida pues el Estado tiene la obligación positiva de tomar todas las medidas pertinentes para tutelar y hacer eficaz el derecho a la salud, máxime que no existe un derecho fundamental al consumo de marihuana por lo que la restricción es constitucionalmente válida. Considera que dicha restricción es además ajustada al principio de menor restricción pues todos los habitantes del país no requieren consumir cannabis y sí, por el contrario, necesitan que se garantice su derecho a la salud. Manifiesta que el artículo primero constitucional establece la obligación de proteger los derechos consagrados en la Constitución y tratados internacionales, entre ellos el de la
- Su **agravio adhesivo tercero** sostiene que el agravio primero del quejoso recurrente es infundado al establecer que no se valoraron los medios de convicción pues el Juez de Distrito ~~si~~ realizó tal valoración, haciendo referencia incluso a los criterios citados por el quejoso como aplicables al caso concreto.
- Por último, en su **agravio adhesivo cuarto** aduce que el agravio séptimo del quejoso recurrente es infundado. Ello en tanto la Ley Federal de Procedimiento Administrativo sí garantiza el derecho fundamental de audiencia. Por ello, sostiene que los ~~actos~~ procesales impugnados son conformes al marco normativo derivado de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.



V. ESTUDIO DE FONDO

27. La materia de análisis que subsiste para esta Primera Sala consiste en determinar si los argumentos de la revisión dan lugar a revocar la negativa de amparo decretada por el Juez de Distrito respecto de los preceptos reclamados. Dichos planteamientos serán analizados en función de la siguiente interrogante:

¿Los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud son violatorios del derecho al libre desarrollo de la personalidad?

28. En sesión de cuatro de noviembre de dos mil quince, esta Primera Sala resolvió el amparo en revisión [REDACTED]¹⁷ que guarda una similitud sustancial con el presente caso. En ese sentido, se retomarán las consideraciones de dicho amparo en revisión para resolver el asunto en lo concerniente a los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud. Ahora bien, un breve apartado de consideraciones diferenciadas tendrá por objeto analizar la constitucionalidad de los artículos 234, 368 y 479 del mismo ordenamiento, cuya constitucionalidad no fue objeto de *litis* en el amparo en revisión [REDACTED]
29. Otra diferencia sustancial con respecto al precedente citado es que en este caso se deberá determinar si debe autorizarse la **importación y adquisición de la semilla de marihuana**¹⁸. En efecto, en su solicitud de autorización frente a la Cofepris el quejoso, hoy recurrente, incluyó todos los actos correlativos al autoconsumo de marihuana, mencionando expresamente "la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e **importación y adquisición de la semilla...**, excluyendo expresamente los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma"¹⁹. Ante el desechamiento del trámite de su solicitud, el quejoso impugnó la negativa de autorización sanitaria de la Cofepris respecto de *todos y cada uno de esos actos* mediante el juicio de amparo en los términos indicados, así como los artículos relativos de la Ley General de Salud que podrían erigirse como un obstáculo para la obtención de dicha autorización.

¹⁷ Dicho amparo en revisión fue resuelto en el sentido de conceder el amparo por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente); José Ramón Cossío Díaz, quien se reservó su derecho a formular voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien también se reservó su derecho a formular voto concurrente; en contra del emitido por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reservó su derecho a formular voto particular.

¹⁸ Véase el oficio [REDACTED] en que se consigna la solicitud exacta del quejoso. Obra en la foja 154 del juicio de amparo [REDACTED]

¹⁹ *Ibíd.*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

50. En efecto, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado al Secretario de Salud las órdenes verbales o escritas para negar la solicitud de autorización sanitaria que formuló el quejoso para ejercer los derechos correlativos al consumo de marihuana como "la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de la semilla"²⁰. Asimismo, al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios le reclamó el cumplimiento de la orden del Secretario de Salud o el haber dictado por sí mismo órdenes al director Ejecutivo de Regulación de Estupefuentes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas para que, bajo la apariencia de un desechamiento, negara la solicitud formulada para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo de marihuana como la "siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de la semilla"²¹. Por último, al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefuentes le reclamó la emisión del oficio [REDACTED] en el que sostuvo que se le negó la solicitud realizada, y, en específico, la negativa de autorizar el ejercicio de todos los derechos correlativos al consumo personas con fines lúdicos o recreativos de la marihuana, entre los cuales incluyó expresamente "la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de la semilla"²². En esa lógica, el quejoso reclamó los diversos artículos de la Ley General de Salud que consideró aplicados en la negativa de autorización sanitaria en los términos planteados en su solicitud, y que constituirían legalmente un impedimento para que pudiera realizar todos los actos correlativos al autoconsumo de marihuana. Lo mismo se reitera en el recurso de revisión²³.

²⁰ *Ibidem*, fojas 4-8.

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*.

²³ Cuaderno del amparo en revisión 623/2017, foja 38.

31. Lo anterior muestra que, desde su solicitud y a lo largo de todo el procedimiento, el quejoso pretendió que se autorizara toda la cadena de autoconsumo, es decir, que se autorizara la realización de todos los actos que estimó son condición necesaria para lograr su objetivo— el consumo personal con fines lúdicos y recreativos de marihuana— dentro de los cuales consideró que se encuentra tanto la importación como la adquisición de la semilla. No pasa desapercibido por esta Primera Sala que el quejoso únicamente solicitó la importación y la adquisición de la semilla, no así la obtención de la planta ni sus productos. Ello indica que el quejoso pretende realizar por sí mismo toda la cadena de actos necesarios para lograr el autoconsumo de marihuana —la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento y consumo final— limitando el papel de terceros, ya sea una autoridad o un tenedor legal, a la entrega de la semilla de cannabis.
32. En este sentido, debe destacarse que si bien es cierto que el Juez de Distrito sobreseyó respecto del Secretario de Salud y el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios por haber negado los actos reclamados en sus informes justificados, el análisis constitucional que realizó el juez federal fue respecto de *todos los actos correlativos al autoconsumo* señalados por el quejoso en los artículos impugnados, lo que se evidencia en su conclusión de que “no existe una medida igualmente idónea y menos restrictiva que la limitación de los actos consistentes en la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, **adquisición**, posesión, comercio, transporte..., prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general todo acto relacionado con la marihuana”²⁴. Queda entonces claro que el juzgador federal comprendió el reclamo del quejoso incluyendo todos los actos correlativos al autoconsumo de marihuana con fines lúdicos o recreativos, para concluir que debía negarse la protección federal.

²⁴ Cuaderno del juicio de amparo [REDACTED] del índice del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, foja 512 vuelta.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

33. En vista de lo anterior, esta Primera Sala considera que, a diferencia del amparo en revisión [REDACTED] en este asunto debe estudiarse si debe o no concederse el amparo para que se autorice la importación y la adquisición de la semilla de cannabis, en el entendido de que la autorización de ambos actos fue solicitada expresamente ante la autoridad administrativa y su negativa fue impugnada en el juicio de amparo, al pretenderse explícitamente la realización de todos los actos de la cadena de autoconsumo con fines lúdicos y recreativos de marihuana sin la intervención de terceros — salvo la entrega de la semilla — excluyendo expresamente los actos de comercio, tales como distribución, enajenación y transferencia de la misma.

34. Ahora bien, como se expuso en la relatoría de los conceptos de violación y agravios, el recurrente planteó originalmente en su demanda de amparo la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley General de Salud, al considerar que los mismos establecen una "política prohibicionista" respecto del consumo individual de marihuana, misma que limita indebidamente, entre otros, los derechos fundamentales a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación, todos en relación con el principio de dignidad humana.

35. De acuerdo al recurrente, la prohibición del consumo de marihuana implica la supresión de conductas que confieren al individuo una diferencia específica de acuerdo a su singularidad, restricción que no se encuentra justificada ya que la imposición de un estándar único de vida saludable no es admisible en un Estado liberal que basa su existencia en el reconocimiento de la singularidad e independencia humana. Así, en síntesis, sostuvo que la prohibición para consumir marihuana se basa en un prejuicio sustentado en valoraciones morales y no en estudios científicos, revelando que el Estado no ha actuado con neutralidad ética.

36. En la sentencia de amparo, el Juez de Distrito calificó como infundados los argumentos del quejoso. Estimó para ello que la restricción consagrada en los artículos no implica el análisis aislado de un derecho sino un aspecto de suma importancia como la salud pública en su dimensión social. Siguiendo en parte las consideraciones de esta Primera Sala en el amparo en revisión [REDACTED], el Juez de Distrito empleó un test de proporcionalidad para evaluar el marco regulatorio frente al derecho al libre desarrollo de la personalidad concluyendo, a diferencia de la Primera Sala, que la restricción legislativa impuesta sobre ese derecho era constitucional.
37. El quejoso interpuso recurso de revisión, en el que alega fundamentalmente que, contrario a lo establecido por el Juez de Distrito, la normativa impugnada impone modelos y estándares de vida ajenos a los particulares, pues sólo se respeta la identidad de cada sujeto si se le permite actuar en consecuencia a sus propios rasgos, cosmovisiones, concepciones de la vida buena y elementos que a su juicio lo definen y singularizan. Particularmente sostiene que el juez realizó indebidamente el test de restricciones constitucionales al derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues el marco regulatorio es claramente desproporcionado.
38. Así las cosas, esta Primera Sala advierte que los agravios expuestos por el recurrente, particularmente aquéllos identificados como segundo, tercero y cuarto, **resultan esencialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida** y otorgar la protección constitucional al quejoso en lo concerniente a los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud al entender que tales artículos impugnados limitan de forma injustificada el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. En contraste, como se muestra a continuación, **son infundados los agravios hechos valer en el recurso de revisión adhesivo** presentado por el delegado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Secretario de Salud.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

39. Ahora bien, para poder justificar la decisión ya anunciada y dar respuesta a los argumentos planteados por el recurrente en relación con la constitucionalidad de los artículos reclamados decretada por el Juez de Distrito, esta Primera Sala, al igual que lo hizo en el amparo en revisión [REDACTED] considera necesario desarrollar los siguientes puntos: (i) explicar el marco regulatorio de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas previsto en la Ley General de Salud; (ii) establecer la incidencia de la medida legislativa impugnada en el contenido *prima facie* del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad; y (iii) determinar si la medida impugnada supera las cuatro gradas del test de proporcionalidad: (a) constitucionalidad de los fines perseguidos con la medida; (b) idoneidad; (c) necesidad; y (d) proporcionalidad en sentido estricto. Finalmente, (iv) exponer las conclusiones del estudio de constitucionalidad de los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, (v) analizar la constitucionalidad de los artículos 264, 368 y 479 de la Ley General de Salud y (vi) estudiar los agravios del recurso adhesivo.

i) Marco regulatorio sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos en la Ley General de Salud

40. Como se desprende de los antecedentes, el oficio reclamado por [REDACTED] fue emitido el ocho de julio de dos mil dieciséis. En consecuencia, el marco regulatorio que se analizará en este apartado es el vigente en esa fecha por ser la legislación que rigió la actuación de la COPEFRIS al desechar la solicitud del recurrente²⁵.

²⁵ El 19 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de Federación y su Gaceta una reforma a varios artículos de la Ley General de Salud. En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma presentada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se establece que la "propuesta no supone de ninguna manera la legalización de la cannabis sativa, indica y americana o marihuana, o su resina. Se trata de la autorización por parte de la autoridad sanitaria para la siembra, cosecha, cultivo, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso y consumo de la marihuana exclusivamente para usos médicos y científicos que hayan probado su eficacia en otros países y sean utilizados por aquellos paciente que los requieran de acuerdo a las reglas y disposiciones que señale la propia autoridad sanitaria." Las principales modificaciones que se realizaron mediante esta reforma fueron

41. Las fracciones XXI y XXII del artículo 3º de la ley General de Salud²⁶ establecen que son materia de salubridad general tanto la *prevención del consumo* como el *control sanitario* de "estupefacientes" y "substancias psicotrópicas".²⁷ En este sentido, de conformidad con el artículo 194 se entiende por "control sanitario" al conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y, en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones que realiza la Secretaría de Salud sobre el proceso, uso, importación y exportación de diversas sustancias y objetos, entre los que se encuentran los estupefacientes y los psicotrópicos.²⁸

las siguientes: En primer lugar, se estableció en el artículo 235 Bis la obligación de la Secretaría de Salud de diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados del cannabis. En segundo lugar, se eliminó la prohibición de realizar actos relacionados con el cannabis, y se permitió su realización siempre que tenga fines médicos y científicos y se haya obtenido autorización de la Secretaría de Salud. Entre los actos que se permitieron bajo estos supuestos se encuentran la siembra, la cosecha, el cultivo, la adquisición, el comercio y el consumo. En tercer lugar, se modificó el artículo 245 para que la cannabis ya no forme parte de la lista de sustancias psicotrópicas de valor terapéutico nulo y que constituyen un problema especialmente grave de salud pública. Se estableció que cuando una sustancia tenga una concentración de Tetrahidrocannabinol mayor al 1% se considerará sustancia con valor terapéutico, pero que constituye un problema grave para la salud pública, y cuando las sustancias que contengan una concentración de Tetrahidrocannabinol menor al 1% se considerarán de amplios usos terapéuticos y que constituyen un problema menor para la salud pública.

²⁶ Salvo indicación en contrario, todos los artículos cuyo contenido se describe en este apartado corresponden a la Ley General de Salud.

²⁷ Artículo 3. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

[...]

XXI. La prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia;

XXII. El control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación.

²⁸ Es importante señalar que de acuerdo con el artículo 197 de la Ley General de Salud, se entiende por "proceso" el conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al público.

Artículo 194. Para efectos de este título, se entiende por control sanitario, el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud con la participación de los productores, comercializadores y consumidores, en base a lo que establecen las normas oficiales mexicanas y otras disposiciones aplicables.

El ejercicio del control sanitario será aplicable al:

I. Proceso, importación y exportación de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, productos cosméticos, productos de aseo, tabaco, así como de las materias primas y, en su caso, aditivos que intervengan en su elaboración;

II. Proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación, y disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, y

III. Proceso, uso, importación, exportación, aplicación y disposición final de plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas para la salud, así como de las materias primas que intervengan en su elaboración.

El control sanitario del proceso, importación y exportación de medicamentos, estupefacientes y substancias psicotrópicas y las materias primas que intervengan en su elaboración, compete en forma exclusiva a la Secretaría de Salud, en función del potencial de riesgo para la salud que estos productos representan.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

42. En específico, el control sanitario respecto de estupefacientes y sustancias psicotrópicas se encuentra regulado dentro de los capítulos V y VI del Título Décimo Segundo de la Ley General de Salud, así como en el capítulo III del Título Segundo del Reglamento de Insumos para la Salud. Al respecto, debe señalarse que la citada ley contempla un *marco regulatorio similar* para los estupefacientes y los psicotrópicos. En primer lugar, el legislador estableció un listado para determinar qué sustancias debían considerarse como estupefacientes y qué sustancias como psicotrópicos (artículos 234 y 245). Por otro lado, determinó que todo acto relacionado con estupefacientes o psicotrópicos, o cualquier producto que los contuviera, requiere una "autorización" de la Secretaría de Salud y sólo puede otorgarse con fines médicos y/o científicos (artículos 235 y 247, respectivamente). En esta línea, también existe una prohibición expresa para otorgar la autorización anteriormente señalada respecto de determinados estupefacientes y psicotrópicos (artículos 237 y 248).

43. Efectivamente, de conformidad con los artículos 235 y 247, así como con el artículo 44 del Reglamento de Insumos para la Salud, cualquier persona que pretenda sembrar, cultivar, elaborar, preparar, acondicionar, adquirir, poseer, comerciar, transportar, prescribir médicamente, suministrar, emplear, usar, consumir y, en general, realizar cualquier acto relacionado con las sustancias listadas en los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud, o con cualquier producto que los contenga, deberá contar con una "autorización" de la Secretaría de Salud y solamente podrá realizar dichas acciones si las mismas tienen fines médicos y/o científicos.²⁹

²⁹ Artículo 235. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a:

I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;

II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General;

44. Ahora bien, el artículo 368 dispone que la “autorización sanitaria” es el acto administrativo mediante el cual la autoridad sanitaria competente permite a una persona pública o privada la realización de actividades relacionadas con la salud humana, en los casos y con los requisitos y modalidades que determine la propia Ley General de Salud y demás disposiciones generales aplicables. Sin embargo, los artículos 237 y 248 vigentes al momento de dictarse el oficio impugnado³⁰, *prohiben expresamente* la expedición de la autorización a que se ha hecho referencia respecto de determinadas sustancias consideradas como un problema grave para la salud pública, entre las que se encontraba el estupefaciente “cannabis sativa, indica y americana o marihuana”, así como el psicotrópico “tetrahidrocannabinol”

IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia;
V. (Se deroga).

VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.

Artículo 247. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con sustancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, queda sujeto a:

I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;

II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General;

IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia;

V. (Se deroga)

VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos, y requerirán, al igual que las sustancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud.

Reglamento de Insumos para la Salud:

Artículo 44. La obtención, elaboración, fabricación, preparación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, almacenamiento, comercialización, importación, exportación, prescripción médica, suministro, posesión, transporte, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes y psicotrópicos, con excepción de los que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, sólo podrá realizarse con fines médicos y científicos, previa autorización de la Secretaría.

³⁰ **Artículo 237.** Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes sustancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, indica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bacteatum y erythroxylon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras sustancias señaladas en el Artículo 234 de esta Ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen dependencia.

Artículo 248. Queda prohibido todo acto de los mencionados en el Artículo 247 de esta Ley, con relación a las sustancias incluidas en la fracción I del Artículo 245.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

(THC), los isómeros Δ6a (10a), Δ6a (7), Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ9 (11) y sus variantes estereoquímicas, sustancias materia de la controversia en el presente recurso de revisión.³¹

45. Al respecto, es importante señalar que los artículos 238 y 249 prevén un supuesto extraordinario para permitir la adquisición de los estupefacientes y psicotrópicos a que hacían referencia los aludidos artículos 237³² y 248, relativo a *finés de investigación científica*, para lo cual es necesario que el organismo o institución en cuestión presente un protocolo de investigación autorizado por la propia Secretaría de Salud.³³
46. Así, esta Primera Sala entiende que las normas impugnadas comportan un "sistema de prohibiciones administrativas" que forma parte del marco regulatorio previsto en la Ley General de Salud sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos, el cual constituye un obstáculo jurídico para poder realizar lícitamente todas las acciones necesarias para estar en

³¹ Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes sustancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver paeonaceum y erythroxylon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras sustancias señaladas en el Artículo 234 de esta Ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen dependencia.

Artículo 248. Queda prohibido todo acto de los mencionados en el Artículo 247 de esta Ley, con relación a las sustancias mencionadas en la fracción I del Artículo 245.

³² No pasa desapercibido a esta Primera Sala que, con posterioridad al dictado del oficio que constituyó el acto de aplicación de las normas impugnadas, hubo una reforma a la Ley General de Salud que modificó el Artículo 237 para quedar como sigue:

ARTÍCULO 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes sustancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, papaver somniferum o adormidera, papaver paeonaceum y erythroxylon novogratense, o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

³³ Artículo 238. Solamente para fines de investigación científica, la Secretaría de Salud autorizará a los organismos o instituciones que hayan presentado protocolo de investigación autorizado por aquella dependencia, la adquisición de estupefacientes a que se refiere el artículo 237 de esta Ley. Dichos organismos e instituciones comunicarán a la Secretaría de Salud el resultado de las investigaciones efectuadas y como se utilizaron.

Artículo 249. Solamente para fines de investigación científica, la Secretaría de Salud podrá autorizar la adquisición de las sustancias psicotrópicas a que se refiere la fracción I del artículo 245 de esta Ley, para ser entregadas bajo control a organismos o instituciones que hayan presentado protocolo de investigación autorizado por aquella Dependencia, los que a su vez comunicarán a la citada Secretaría el resultado de las investigaciones efectuadas y cómo se utilizaron.

posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo de marihuana (adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etc.).

47. Por un lado, los últimos párrafos de los artículos 235 y 247 establecen que la autorización para la realización de actos relacionados con estupefacientes o sustancias psicotrópicas se encuentra supeditada a que éstos exclusivamente tengan fines "médicos y/o científicos", *sin incluir* la posibilidad de que la marihuana pueda ser utilizada con fines "lúdicos o recreativos". Por otro lado, los numerales 237 y 245, en relación con el artículo 248, establecen una *prohibición expresa* mediante la que se impide de forma tajante que la Secretaría de Salud expida las autorizaciones correspondientes que solicitó el quejoso en relación con la marihuana para poder ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad.
48. En este orden de ideas, es importante señalar que si bien el artículo 478 de la Ley General de Salud,³⁴ en relación con el artículo 479, señala que el Ministerio Público no ejercerá acción penal en contra de quien posea hasta cinco gramos de marihuana, esta Suprema Corte ha interpretado que dicha disposición contiene una *excluyente de responsabilidad*,³⁵ lo que únicamente significa que en esos casos no debe aplicarse la pena a quien haya cometido el delito en cuestión, pero no consagra de ninguna manera una autorización o un derecho al consumo personal en los términos en los que lo solicita el quejoso, puesto que además de que únicamente se limitan a *despenalizar* el

³⁴ Artículo 478. El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta Ley. La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia.

³⁵ Al respecto véase la tesis de rubro "DELITO CONTRA LA SALUD. EL ARTÍCULO 478 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, AL PREVER LA NO APLICACIÓN DE LA EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD RESPECTO DE LOS FARMACODEPENDIENTES POSEEDORES DE ALGÚN NARCÓTICO DENTRO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN, INCLUSO CUANDO SU CANTIDAD NO EXCEDA EL LÍMITE MÁXIMO LEGALMENTE ESTABLECIDO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD" [Novena Época; Registro 162389; Instancia Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Abril de 2011; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. LII/2011; Página: 307].



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

consumo en una cantidad muy pequeña, dichos preceptos *no permiten* de ningún modo la realización de las otras actividades correlativas al autoconsumo, como la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, transporte, etc.

49. En cualquier caso, debe destacarse que los artículos aludidos no forman parte del "sistema de prohibiciones administrativas" impugnado por el quejoso, sino del "sistema punitivo" previsto en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal en relación con el control de estupefacientes y psicotrópicos. Sin embargo, esta Primera Sala recuerda que, dado que el artículo 479 de la Ley General de Salud subsiste como tema de constitucionalidad, su análisis será emprendido en la parte final de esta sentencia.

50. Una vez establecido el alcance de las normas impugnadas, a continuación se analizará si dicho "sistema de prohibiciones administrativas" genera las afectaciones que el quejoso aduce. En este sentido, a pesar de que se argumentan vulneraciones a los derechos de identidad personal, propia imagen, privacidad y dignidad humana, esta Primera Sala considera que todas éstas quedan comprendidas en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así, es preciso explicar el contenido *prima facie* de este derecho para luego resolver si los artículos reclamados inciden en dicho contenido.

ii) Análisis de la incidencia de la medida legislativa impugnada en el contenido *prima facie* del libre desarrollo de la personalidad

51. La moderna teoría de los derechos fundamentales traza una distinción indispensable para entender la forma en la que los tribunales constitucionales suelen hacer el control de constitucionalidad de las normas infraconstitucionales a través del principio de proporcionalidad: el *alcance* del

derecho fundamental y la *extensión de su protección*.³⁶ De acuerdo con esta distinción, el examen de constitucionalidad de una medida legislativa debe realizarse a través de un análisis en dos etapas.

52. En una primera etapa, debe determinarse si la norma impugnada incide en el *alcance* o contenido *prima facie* del derecho en cuestión.³⁷ O dicho en otros términos, debe establecerse si la medida legislativa impugnada *limita* el derecho fundamental.³⁸ En esta etapa del análisis es necesario recurrir a la *interpretación* de las disposiciones normativas correspondientes. Por un lado, debe interpretarse la disposición legislativa impugnada con la finalidad de determinar los alcances de la prohibición u obligación que establece. Por otro lado, también debe interpretarse la disposición constitucional que aloja el derecho fundamental en cuestión, con la finalidad de fijar el alcance o contenido *prima facie* de éste. De esta manera, en esta primera etapa se precisan las conductas cubiertas *prima facie* o *inicialmente* por el derecho fundamental en cuestión.
53. Una vez hecho lo anterior, debe decidirse si la norma impugnada incide o no en el ámbito de protección *prima facie* del derecho aludido. Si la conclusión es negativa, el examen debe terminar en esta etapa con la declaración de que la medida legislativa impugnada es constitucional. En cambio, si la conclusión es positiva, debe pasarse a otro nivel de análisis.
54. En una segunda etapa del análisis, debe determinarse si la norma que efectivamente interviene en el contenido *prima facie* del derecho fundamental es constitucional. Así, en esta fase del análisis debe examinarse si en el caso concreto existe una justificación constitucional para que la medida legislativa reduzca la *extensión de la protección* que otorga inicialmente el derecho. Este ejercicio implica que se analice si la intervención legislativa cumple con las

³⁶ Barak, Aharon, *Proportionality. Constitutional Rights and their Limitations*, trad. Doron Kalir, Nueva York, Cambridge University Press, 2012, p. 19.

³⁷ Bernal Pulido, Carlos, *El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales*, Madrid, CEPC, 2007, p. 45.

³⁸ Barak, *op. cit.*, p. 26.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

exigencias derivadas del principio de proporcionalidad: una finalidad constitucionalmente válida, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido de la medida.

55. De acuerdo con lo anterior, esta Primera Sala procede a determinar si la medida legislativa limita el contenido *prima facie* del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
56. En primer lugar, debe destacarse que la Constitución mexicana otorga una amplia protección a la autonomía de las personas, al garantizar el goce de ciertos bienes que son indispensables para la *elección y materialización* de los planes de vida que los individuos se proponen.³⁹ Así, en términos generales puede decirse que los derechos fundamentales tienen la función de "atrincherar" esos bienes contra medidas estatales o actuaciones de terceras personas que puedan afectar la autonomía personal.⁴⁰ De esta manera, los derechos incluidos en ese "coto vedado" están vinculados con la satisfacción de esos bienes básicos que son necesarios para la satisfacción de cualquier plan de vida.⁴¹
57. En este orden de ideas, el bien más genérico que se requiere para garantizar la autonomía de las personas es precisamente la *libertad* de realizar cualquier conducta que no perjudique a terceros.⁴² En este sentido, la Constitución y los tratados internacionales reconocen un catálogo de "derechos de libertad" que se traducen en *permisos* para realizar determinadas acciones que se estiman valiosas para la autonomía de las personas (expresar opiniones, moverse sin impedimentos, asociarse, adoptar una religión u otro tipo de creencia, elegir una profesión o trabajo, etc.), al tiempo que también

³⁹ Nino, Carlos, *Ética y Derechos Humanos. Un ensayo de fundamentación*, 2ª ed., Buenos Aires, Astrea, 1989, p. 223.
⁴⁰ *Ibidem*, p. 223.
⁴¹ Garzón Valdés, Ernesto, "Algo más acerca del 'coto vedado'", *Doxa. Cuadernos de filosofía del derecho*, núm. 6, 1989, p. 209.
⁴² Nino, *op. cit.*, p. 223.

comportan *límites negativos* dirigidos a los poderes públicos y a terceros, toda vez que imponen prohibiciones de intervenir u obstaculizar las acciones permitidas por el derecho fundamental en cuestión.⁴³

58. Ahora bien, el derecho al libre desarrollo de la personalidad brinda protección a un “área residual de libertad” que no se encuentra cubierta por las otras libertades públicas.⁴⁴ Como explicó el Tribunal Constitucional alemán en el caso *Elfes*,⁴⁵ estos derechos fundamentales protegen la libertad de actuación humana de ciertos “espacios vitales” que de acuerdo con la experiencia histórica son más susceptibles de ser afectados por el poder público, sin embargo, cuando un determinado “espacio vital” es intervenido a través de una medida estatal y no se encuentra expresamente protegido por un derecho de libertad específico, las personas pueden invocar la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad. De esta manera, este derecho puede entrar en juego siempre que una acción no se encuentre tutelada por un derecho de libertad específico.⁴⁶
59. En este sentido, la doctrina especializada ha señalado que el derecho al libre desarrollo de la personalidad comporta “un rechazo radical de la siempre presente tentación del *paternalismo del Estado*, que cree saber mejor que las personas lo que conviene a éstas y lo que deben hacer con sus vidas”, de tal manera que puede decirse que este derecho supone “la proclamación constitucional de que, siempre que se respeten los derechos de los demás, *cada ser humano es el mejor juez de sus propios intereses*” (énfasis añadido).⁴⁷

⁴³ Alexy, Robert, *Teoría de los derechos fundamentales*, trad. Carlos Bernal Pulido, Madrid, CEPC, 2007, pp. 197-201.

⁴⁴ Díez-Picazo, Luis María, *Sistema de Derechos Fundamentales*, 2ª ed., Cizur Menor, Thomson Civitas, 2005, p. 70.

⁴⁵ BVerfGE 6, 32, sentencia de 16 de enero de 1957. Citada por la traducción contenida en Kommers, Donald P., y Miller, Russel A., *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, 3ª ed., Durham, Duke University Press, 2012, p. 402.

⁴⁶ Eberle, Eduard J., “Human Dignity, Privacy, and Personality in German and American Constitutional Law”, *Utah Law Review*, 1997, p. 979.

⁴⁷ Díez-Picazo, *op. cit.*, p. 69.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

60. En el ordenamiento mexicano, esta Suprema Corte ha entendido que el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que deriva del derecho a la dignidad, que a su vez está previsto en el artículo 1º constitucional y se encuentra implícito en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país.⁴⁸ Al respecto, en la sentencia que resolvió el [REDACTED] el Pleno de este Alto Tribunal sostuvo entre otras cosas que “[e]l individuo, sea quien sea, *tiene derecho a elegir en forma libre y autónoma, su proyecto de vida*, la manera en que logrará las metas y objetivos que, para él, son relevantes”.

61. En dicho precedente se explicó que el derecho a libre desarrollo de la personalidad permite “la consecución del proyecto de vida que para sí tiene el ser humano, como ente autónomo”, de tal manera que supone “el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, *ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás*, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, es decir, es la persona humana quien decide el sentido de su propia existencia, de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera” (énfasis añadido); criterio que posteriormente fue recogido en la tesis aislada de rubro “DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE”.⁵⁰

⁴⁸ Sobre este punto, véase la tesis de rubro “DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES” [Novena Época; Registro 165813; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Constitucional; Tesis: P. LXV/2009; Página: 8].

⁴⁹ Sentencia de 6 de enero de 2009, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte.

⁵⁰ Novena Época, Registro: 165822, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Civil, Constitucional, Tesis: P. LXVI/2009, Página: 7.

62. En este orden de ideas, en la línea de lo expuesto por el Tribunal Constitucional alemán en el caso *Eppler*,⁵¹ puede decirse que la libertad "indefinida" que es tutelada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad *complementa* las otras libertades más específicas, como la libertad de conciencia o la libertad de expresión, puesto que su función es salvaguardar la "esfera personal" que no se encuentra protegida por las libertades más tradicionales y concretas. En este sentido, este derecho es especialmente importante frente a las *nuevas amenazas* a la libertad individual que se presentan en la actualidad.
63. Ahora bien, la doctrina especializada señala que el libre desarrollo de la personalidad tiene una dimensión externa y una interna.⁵² Desde el punto de vista *externo*, el derecho da cobertura a una genérica "libertad de acción" que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad.⁵³ En cambio, desde una perspectiva *interna*, el derecho protege una "esfera de privacidad" del individuo en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal.⁵⁴
64. Como se muestra más adelante, si bien en un plano conceptual puede trazarse esta distinción entre los aspectos externos e internos, resulta complicado adscribir los casos de ejercicio de este derecho a una sola de estas dimensiones. Ello es así porque las acciones que realizan los individuos en el ejercicio de su autonomía personal suponen la *decisión* de llevar a cabo esa acción, al tiempo que las decisiones sobre aspectos que en principio sólo incumben al individuo normalmente requieren de *ciertas acciones* para materializarse. En todo caso, parece que se trata de una cuestión de énfasis.

⁵¹ BVerfGE 54, 148, sentencia de 3 de junio de 1980. Citada por la traducción contenida en Kommers y Miller, *op. cit.*, p. 406-407.

⁵² Eberle, Eduard J., "Observations on the Development of Human Dignity and Personality in German Constitutional Law: An Overview", *Liverpool Law Review Journal, of Contemporary Legal and Social Policy*, vol. 33, núm. 3, 2012, p. 211.

⁵³ De acuerdo con el Tribunal Constitucional alemán, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental independiente que garantiza una genérica libertad de acción. Al respecto, véase la sentencia BVerfGE 6, 36.

⁵⁴ Eberle, "Observations...", *op. cit.*, p. 211.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Así, mientras que hay situaciones en las que el aspecto más relevante de la autonomía personal se aprecia en la acción realizada, existen otras situaciones en las que el ejercicio de la autonomía se observa más claramente a través de la decisión adoptada por la persona.

65. Por lo demás, vale la pena señalar que en el derecho comparado también existen otros derechos fundamentales que cumplen una función similar al libre desarrollo de la personalidad. En el derecho norteamericano, por ejemplo, a partir del derecho al debido proceso en su aspecto sustantivo se ha desarrollado lo que se conoce como "decisional privacy".⁵⁵ Esta vertiente del derecho a la privacidad está directamente relacionada con la *autonomía personal*, puesto que no sólo garantiza un ámbito de libertad en la toma de decisiones que sólo le conciernen al individuo, sino que también da cobertura a una genérica libertad de acción, que incluye aspectos como la manera de comportarse en público o los estilos de vida de la persona.⁵⁶

66. De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, parece evidente que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho cuyos contornos deben irse precisando jurisprudencialmente. En el derecho comparado, la forma en la que se ha llevado a cabo ese proceso de especificación consiste en preguntarse a partir de casos concretos si una determinada acción o decisión individual se encuentra protegida por este derecho. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán ha sostenido que el libre desarrollo de la personalidad da cobertura a actividades "recreativas" como viajar fuera del país, cazar o montar a caballo,⁵⁷ al tiempo que en casos relacionados con

⁵⁵ Vale la pena destacar que en el derecho norteamericano la "decisional privacy" se distingue lo que se conoce como la "physical privacy" y la "informational privacy". Mientras el derecho a una *privacidad física* comporta una protección para el domicilio y la integridad personal en contra de intervenciones injustificadas de terceros, el derecho a la *privacidad informativa* otorga a al individuo el control la información relacionada con su propia persona. Al respecto, véase Mayer-Schönberger, Viktor, "Strands of Privacy: DNA Databases and Informational Privacy and the OECD Guidelines", en David Lazer (ed.), *The Technology of Justice: DNA and the Criminal Justice System*, Cambridge, MIT Press, 2004.

⁵⁶ Rosler, Beate, *The Value of Privacy*, Cambridge, Polity Press, 2005 p. 89.

⁵⁷ Kommers y Miller, *op. cit.*, pp. 400- 404.

personas transexuales ha considerado protegida la decisión en relación con el sexo y el género con el que un individuo desea que se le identifique.⁵⁸

67. En sentido similar, la Corte Suprema estadounidense ha establecido que el derecho a la privacidad en la vertiente antes señalada protege de interferencias externas una gran variedad de decisiones personales,⁵⁹ como las relacionadas con la contracepción,⁶⁰ la educación,⁶¹ el cuidado de los niños,⁶² y las relaciones familiares.⁶³ Así, estas decisiones están cubiertas por el derecho a la privacidad precisamente porque pertenecen a la esfera de autonomía de la persona. Como se señaló anteriormente, la protección que otorga el derecho no sólo comprende esas decisiones, sino también las acciones necesarias para materializar esa decisión.
68. Ahora bien, esta manera de precisar el contenido del derecho al libre desarrollo de la personalidad, consistente en reconocer en casos concretos que cierto tipo de conductas o decisiones se encuentran protegidas por el derecho, lo que a su vez se traduce en el reconocimiento de un derecho a realizar esas conductas o a tomar esas decisiones sin interferencias del Estado o de terceros, resulta congruente con la manera en la que esta

⁵⁸ Kommers y Miller, *op. cit.*, p. 413.

⁵⁹ Brashear, Bruce, "Marijuana Prohibition and The Constitutional Right of Privacy: An Examination of *Ravin v. State*", *Tulsa Law Review*, vol. 11, 1975, p. 571.

⁶⁰ La Corte Suprema norteamericana ha reconocido en varios casos el derecho de las personas a decidir sobre la utilización de métodos anticonceptivos. Al respecto, véanse entre otros *Griswold v. Connecticut*, 381 U.S. 479 (1965), en el que declaró inconstitucional una ley estatal que prohibía la distribución de información sobre control natal a personas casadas; y *Eisenstadt v. Baird*, 405 U.S. 438 (1972), en el que sostuvo que el derecho a la privacidad protege las decisiones individuales relativas a la contracepción.

⁶¹ En relación con temas educativos, en *Wieman v. Updegraff*, 344 U.S. 183 (1952), la Corte Suprema sostuvo que el derecho a la privacidad daba cobertura a las libertades de investigación, pensamiento y enseñanza; en *Martin v. Struthers*, 319 U.S. 141 (1943) se señaló que el derecho a la privacidad también comprendía el derecho a distribuir, a recibir y a leer información; y en *Meyer v. Nebraska*, 262 U.S. 390 (1923) se estableció que el derecho a la privacidad también comprendía el derecho a acceder todo el espectro de conocimientos disponibles con base en la primera enmienda.

⁶² Sobre este tema, la Corte Suprema norteamericana determinó en *Pierce v. Society of Sisters*, 268 U.S. 510 (1925), que el derecho a la privacidad protegía a su vez el derecho educar a los propios hijos como uno prefiera.

⁶³ Al respecto, en *Prince v. Massachusetts*, 321 U.S. 158 (1944) se reconoció que el derecho a la privacidad protege de interferencias estatales un ámbito privado de la vida familiar; y en *Loving v. Virginia*, 388 U.S. 1 (1967) se sostuvo que el derecho a la privacidad comprendía también el derecho a decidir con quién desea casarse una persona.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Suprema Corte se ha aproximado a los problemas relacionados con el alcance del derecho en cuestión.

69. En efecto, en la sentencia del citado [REDACTED] el Pleno de esta Suprema Corte sostuvo que "la 'reasignación sexual' que decida una persona, que puede comprender o no una cirugía para ese fin, con el objeto de adecuar su estado psicosocial a su físico y, de ahí, vivir en el sexo con el que se identifica plenamente, innegablemente constituye una *decisión que forma parte del libre desarrollo de la personalidad*, en tanto es una expresión de la individualidad de la persona, respecto de su percepción sexual ante sí mismo, lo que influye decisivamente en su proyecto de vida y, por ende, en sus relaciones sociales" (énfasis añadido); criterio que posteriormente fue recogido en la tesis aislada de rubro **"REASIGNACIÓN SEXUAL. ES UNA DECISIÓN QUE FORMA PARTE DE LOS DERECHOS AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD"**.⁶⁴

70. Posteriormente, esta Suprema Corte ha reiterado en varias ocasiones que la decisión de *permanecer o no casado* encuentra cobertura en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así, en la sentencia del [REDACTED] al analizar la constitucionalidad del divorcio sin causa en la legislación civil del Distrito Federal, esta Primera Sala sostuvo que "el respeto al *libre desarrollo de la personalidad* justifica reconocer mayor trascendencia a la voluntad del individuo cuando ya no desea seguir vinculado con su *conyuge*, por ello, el derecho a tramitar la disolución del vínculo matrimonial, no puede hacerse depender de la demostración de causa alguna, pues aquella determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en la demanda, resultando inadmisibile que el Estado se empeñe

⁶⁴ Novena Época, Registro: 165698, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Torno XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: P. LXIX/2009, Página: 17.

⁶⁵ Sentencia de 23 de septiembre de 2009, resuelta por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros José Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas (Ponente) y Presidente Sergio A. Valls Hernández. Ausente el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

en mantener vigente el matrimonio de quienes solicitan el divorcio al considerar que su situación particular se torna irreconciliable” (énfasis añadido).

71. En términos similares, en el [REDACTED] esta Primera Sala explicó que *“con la expresión de la voluntad de no continuar con el matrimonio, se ejerce el derecho al libre desarrollo a la personalidad, pues decidir no continuar casado, cambiar de estado civil, constituye, la forma en que el individuo desea proyectarse, vivir su vida; la forma en que el individuo decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida”* (énfasis añadido), criterio que posteriormente fue recogido en la tesis aislada de rubro **“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. CONSTITUYE UNA FORMA DE EJERCER EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD”**.⁶⁷
72. En la misma línea, al analizar a la luz del libre desarrollo de la personalidad la constitucionalidad del sistema de divorcio a través del cual se exige la acreditación de causales para poder disolver el vínculo matrimonial, esta Primera Sala volvió a reiterar en la [REDACTED] [REDACTED]⁶⁸ que la *decisión de un cónyuge de no permanecer casado, con independencia de los motivos que tenga para ello, también forma parte de un plan de vida elegido de manera autónoma, el cual no debe ser obstaculizado por el Estado ni por un tercero, como ocurre cuando el otro cónyuge se niega a otorgar el divorcio,*

⁶⁶ Sentencia de 22 de octubre de 2014, resuelta por mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas (Ponente) y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular.

⁶⁷ Décima Época, Registro: 2008492, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. LIX/2015 (10a.), Página: 1392.

⁶⁸ Sentencia de 25 de febrero de 2015, resuelta por mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en contra del emitido por el Ministro José Ramón Cossío Díaz, por lo que respecta a la competencia; y por mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), José Ramón Cossío Díaz (quien se reserva el derecho de formular voto concurrente) y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en contra de los emitidos por los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (quienes se reservaron el derecho de formular voto particular), por lo que se refiere al fondo.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

lo que significa que esa decisión también está amparada al menos *prima facie* por este derecho" (énfasis añadido).

73. Por lo demás, vale la pena destacar que al resolver el citado [REDACTED] [REDACTED] el Pleno de esta Suprema Corte también señaló en *obiter dictum* que "el derecho al libre desarrollo de la personalidad, comprende, entre otras, la libertad de *contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y no tenerlos, así como en qué momento de su vida, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral; y, por supuesto, la libre opción sexual*, pues todos estos aspectos, evidentemente, son parte de la manera en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo él puede decidir en forma autónoma" (énfasis añadido).

74. Como puede observarse, los precedentes citados muestran una línea jurisprudencial en la cual esta Suprema Corte ha reconocido que el derecho al libre desarrollo de la personalidad da cobertura en principio a una gran variedad de acciones y decisiones conectadas directamente con el ejercicio de la autonomía individual. Ahora bien, en el presente caso la primera cuestión que debe resolverse es si las decisiones y las acciones que el recurrente señala se encuentran protegidas *prima facie* por el derecho en cuestión.

75. Al respecto, en la demanda de amparo el quejoso sostuvo que pretendía que se le concediera una autorización sanitaria para "consumo personal con fines lúdicos o recreativos de la Marihuana, así como para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo de Marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana"⁶⁹.

⁶⁹ Véase la foja 3 de la demanda de amparo.

76. De acuerdo con lo anterior, el recurrente argumenta que el libre desarrollo de la personalidad da cobertura a la *decisión* de consumir marihuana para fines lúdicos y, en consecuencia, también a todas las *acciones* necesarias para poder estar en posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo (siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etc.). Al respecto, esta Primera Sala entiende que el derecho fundamental en cuestión permite *prima facie* que las personas mayores de edad *decidan* sin interferencia alguna qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean realizar, **así como llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección.**
77. De esta manera, la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece indudablemente a la esfera de autonomía personal que debe estar protegida por la Constitución. Esa elección puede incluir, como ocurre en el presente caso, la ingesta o el consumo de sustancias que produzcan experiencias que en algún sentido “afecten” los pensamientos, las emociones y/o las sensaciones de la persona.⁷⁰ En esta línea, se ha señalado que la decisión de fumar marihuana puede tener distintas finalidades, entre las que se incluyen “el alivio de la tensión, la intensificación de las percepciones o el deseo de nuevas experiencias personales y espirituales”.⁷¹ Así, al tratarse de “experiencias mentales”, éstas se encuentran entre las más personales e íntimas que alguien pueda experimentar, de tal manera que la decisión de un individuo mayor de edad de “afectar” su personalidad de esta manera con fines recreativos o lúdicos se encuentra tutelada *prima facie* por el derecho al libre desarrollo de ésta.⁷²
78. Ahora bien, una vez que se ha expuesto el marco regulatorio para el control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en la Ley General de Salud, así como el contenido *prima facie* del derecho al libre desarrollo de la personalidad, esta Primera Sala está en posición de concluir que los artículos

⁷⁰ Al respecto, véase el voto disidente del juez Levinson a la sentencia de la Corte Suprema de Hawái en el caso *Hawaii State v. Kantner*, 53 H.327,493 P.2d 306 (1972).

⁷¹ *Idem*.

⁷² *Idem*.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de dicho ordenamiento identificados por el Juez de Distrito como actos reclamados efectivamente *inciden* en el contenido *prima facie* del derecho fundamental, toda vez que constituyen un obstáculo jurídico que impide al quejoso ejercer el derecho a *decidir* qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desea realizar, al tiempo que también impide llevar a cabo lícitamente todas las *acciones* o *actividades* necesarias para poder materializar esa elección a través del autoconsumo de la marihuana: *siembra*, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etc. Recuérdese que un análisis diferenciado se hará en torno a los artículos 234, 368 y 479 de la Ley General de Salud cuya constitucionalidad también se encuentra en *litis* pero que no fueron analizados en el citado amparo en revisión [REDACTED]

79. Ahora bien, con todo, como no podía ser de otra manera, el libre desarrollo de la personalidad *no es un derecho absoluto*, de tal manera que puede ser limitado con la finalidad de perseguir algún objetivo constitucionalmente válido. Al respecto, resulta importante identificar los *límites* a este derecho que han sido reconocidos por este Alto Tribunal. En relación con este tema, en el citado [REDACTED] el Pleno de esta Suprema Corte explicó que este derecho "no es absoluto, pues encuentra sus límites en los *derechos de los demás* y en el *orden público*" (énfasis añadido). Como puede observarse, se trata de *límites externos* al derecho que funcionan como cláusulas que *autorizan* al legislador a intervenir en el libre desarrollo de la personalidad para perseguir esos fines.⁷³

80. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que los derechos fundamentales y sus respectivos límites externos operan como *principios*, de tal manera que las relaciones entre el derecho y sus límites encierran una colisión que debe resolverse con ayuda del test de

⁷³ Para entender la forma en la que operan los *límites externos* a los derechos, véase Prieto Sanchis, Luis, *Justicia constitucional y derechos fundamentales*, Madrid, Trotta, 2003, p. 222.

proporcionalidad.⁷⁴ Así, para que sean constitucionales las intervenciones que se realizan al amparo de un límite al libre desarrollo de la personalidad, éstas deben cumplir con ciertas características: la medida legislativa debe ser *idónea* para proteger los derechos de terceros y/o el orden público; y no debe limitar de manera *innecesaria y desproporcionada* este derecho fundamental. Dicho de otra manera, la medida analizada tiene que superar un examen de proporcionalidad en sentido amplio.

81. De acuerdo con lo anterior, el hecho de que esta Suprema Corte haya establecido que el libre desarrollo de la personalidad da cobertura *prima facie* a un derecho más específico a decidir y poner en práctica la actividad recreativa o lúdica que se desee realizar, lo que puede incluir el consumo de ciertas sustancias con fines de ocio o esparcimiento, no significa que ese derecho tenga carácter definitivo. En este sentido, el derecho fundamental adopta una doble fisonomía: antes de practicar el test de proporcionalidad presenta un carácter *prima facie* y sólo después de que se ha realizado el escrutinio adquiere un carácter *definitivo*, de tal suerte que si la medida legislativa limitadora no supera el test de proporcionalidad, el contenido definitivo del derecho será coincidente con el atribuido *prima facie*; en cambio, si la ley se encuentra justificada a la luz del test de proporcionalidad, el contenido del derecho será más reducido que el aparente o *prima facie*.⁷⁵
82. En resumen, esta Primera Sala estima que fue correcta la determinación del Juez de Distrito al señalar que las normas reclamadas incidían en el derecho al libre desarrollo a la personalidad del quejoso al impedir que éste decidiera qué actividades recreativas o lúdicas quiere realizar.

iii) Análisis de proporcionalidad en sentido amplio de la medida legislativa impugnada

⁷⁴ *Idem*.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 221.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

83. Como se explicó anteriormente, en una segunda etapa del análisis de constitucionalidad debe determinarse si la norma que interviene en el ámbito inicialmente protegido por el derecho fundamental es constitucional. Así, en esta fase del análisis debe examinarse si en el caso concreto existe una justificación desde el punto de vista constitucional para que la medida legislativa limite el contenido *prima facie* del derecho. Este ejercicio implica que se establezca si la intervención legislativa persigue una finalidad constitucionalmente válida y, en caso de que se supere esa grada del escrutinio, se analice si la medida supera sucesivamente un análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido.
84. En el caso concreto, es necesario recordar que la medida cuya constitucionalidad se analiza es el "sistema de prohibiciones administrativas" configurado por los artículos impugnados, el cual forma parte del marco regulatorio previsto en la Ley General de Salud sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos. Al respecto, debe aclararse que no será objeto de ningún pronunciamiento de constitucionalidad el "sistema punitivo" previsto en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal en relación con este tema⁷⁶.
85. En esta línea, también se reitera que desde su propia solicitud **expresamente excluyeron la solicitud de comercializar marihuana**. Es decir, el **petionario excluyó "los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma [marihuana⁷⁷]."**
86. De ahí que, ante dicha exclusión expresa esta Primera Sala estime pertinente aclarar que sólo se analizará si la prohibición de las actividades correlativas al autoconsumo de marihuana. En consecuencia, el presente asunto no

⁷⁶ Véase la sección final de esta sentencia para el análisis relativo a la constitucionalidad de los artículos 234, 368 y 479, cuya constitucionalidad no fue analizada en el amparo en revisión [REDACTED] precedente.

⁷⁷ Véase el oficio [REDACTED] obrante en la foja 154 del juicio de amparo indirecto [REDACTED]

conlleve ningún pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la prohibición de comercializar marihuana.

a. Constitucionalidad de los fines perseguidos con la medida

87. En primer lugar, es preciso identificar los fines que se persiguen con la medida impugnada para posteriormente estar en posibilidad de determinar si éstos resultan constitucionalmente válidos. Esta etapa del análisis presupone la idea de que no cualquier propósito puede justificar la limitación a un derecho fundamental.⁷⁸ En efecto, los fines que pueden fundamentar la intervención legislativa al ejercicio de los derechos fundamentales tienen muy diversa naturaleza: valores, intereses, bienes o principios que el Estado legítimamente puede perseguir.
88. En este orden de ideas, los derechos fundamentales, los bienes colectivos y los bienes jurídicos garantizados como principios constitucionales constituyen fines que legítimamente fundamentan la intervención del legislador en el ejercicio de otros derechos.⁷⁹ No obstante, debe aclararse que las intervenciones basadas en *fines perfeccionistas* no encuentran protección constitucional, pues el Estado no puede exigir a las personas que se conduzcan de acuerdo a un determinado modelo de virtud.⁸⁰
89. Ahora bien, para poder identificar esas finalidades perseguidas por el legislador puede atenderse a los documentos que informan el proceso legislativo de las disposiciones analizadas o bien a la interpretación de las propias normas combatidas. En el caso concreto, de los procesos de reformas a los preceptos combatidos que configuran el “sistema de prohibiciones administrativas”, puede desprenderse que el legislador consideró necesario prohibir la autorización administrativa para la realización de toda actividad relacionada con la marihuana en atención a los efectos nocivos asociados a dicho producto en la “salud” y el “orden público”.

⁷⁸ Barak, *op. cit.*, p. 245.

⁷⁹ Bernal Pulido, *op. cit.*, p. 697.

⁸⁰ Nino, *op. cit.*, pp. 425-426.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

90. En efecto, la expedición de la Ley General de Salud tuvo como propósito reglamentar el derecho a la protección de la salud.⁸¹ Al respecto, entre las propias finalidades previstas en la propia ley se señaló “la promoción del bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades” (fracción I del artículo 2o.). De esta manera, con el objeto de alcanzar dicho nivel de bienestar, el legislador consideró necesario implementar un adecuado “control sanitario” de los psicotrópicos y narcóticos, bajo la premisa de que su uso constituye un problema para la salud pública en tanto genera dependencia para el consumidor.⁸²

91. Posteriormente se realizaron reformas a diversos preceptos con el objeto de precisar de mejor manera las sustancias que de acuerdo con la ley pueden considerarse estupefacientes o psicotrópicos.⁸³ Así, el legislador entendió que con dichas precisiones se avanzó en “dar progresiva efectividad al derecho a la protección de la salud, contenido en el artículo 4o. de nuestra Constitución”.⁸⁴ En esta línea, en la exposición de motivos de la reforma al artículo 245 de la Ley General de Salud promulgada el siete de enero de dos mil catorce—en la cual se agregaron como psicotrópicos las siguientes sustancias: mefedrona, piperazina, TFM/P, midazolam y K2—,⁸⁵ se señaló que “uno de los problemas de salud pública más serios a nivel internacional es el relativo al consumo y comercialización de drogas, fenómeno que en los últimos años ha experimentado una creciente complejidad debido al proceso de internacionalización de las actividades ilícitas de creación, producción y tráfico ilícito de precursores químicos”.⁸⁶

⁸¹ Esta ley sustituyó al antiguo Código Sanitario y se promulgó el 7 de febrero de 1984.

⁸² Así se advierte de la exposición de motivos de dicha ley, y sus correspondientes dictámenes legislativos. Al respecto, véase: Exposición de Motivos, Cámara de Origen: Cámara de Diputados, México, Distrito Federal a 15 de Noviembre de 1983 de la Iniciativa de la Ley General de Salud.

⁸³ En este sentido, el 23 de diciembre de 1987 se promulgó una reforma a los artículos 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud. Este último artículo no ha sido modificado desde entonces.

⁸⁴ Dictamen de la cámara de origen de las Comisiones Unidas de Salubridad General y Primera Sección de la de Estudios Legislativos, del Senado de la República, de 26 de noviembre de 1987.

⁸⁵ Esta reforma se promulgó el 7 de enero de 2014.

⁸⁶ Exposición de motivos de 23 de enero de 2012 realizada por Ejecutivo Federal en el proyecto de reforma de las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud.

92. En este orden de ideas, también se estableció que “[d]ichas conductas, además de representar el incremento en actividades ilícitas que ha permitido a grupos delictivos obtener grandes recursos y ganancias que favorecen su crecimiento desmedido, han generado un problema que debe analizarse desde la perspectiva del *impacto que provoca en la salud pública*, pues este fenómeno ocasiona el incremento de padecimientos, trastornos e incluso hasta la muerte, todo ello a consecuencia de su uso adictivo, *dejando sentir sus efectos en el ámbito social, económico y político*” (énfasis añadido).⁸⁷
93. Por otro lado, hay que destacar que el actual artículo 1º de Ley General de Salud dispone que este ordenamiento tiene como objetivo reglamentar el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4º de la Constitución, así como establecer las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de “salubridad general”. De acuerdo con la propia ley, este concepto comprende, entre otras cosas, tanto la *prevención del consumo* de estupefacientes y psicotrópicos como la existencia de un *programa contra la farmacodependencia* (fracción XXI del artículo 3º).
94. De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que la finalidad del marco regulatorio para el control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas previsto en la Ley General de Salud es la protección de la “salud” y el “orden público”, puesto que de una interpretación sistemática del ordenamiento, así como de los distintos procesos de reforma a la ley, puede desprenderse que el legislador tuvo la intención de procurar la salud de los *consumidores* de drogas y proteger a la *sociedad* de las consecuencias perniciosas derivadas del consumo de las drogas, dado que se ha considerado que esta actividad tiene efectos nocivos tanto para el consumidor como para la sociedad en general.

⁸⁷ Exposición de motivos de 23 de enero de 2012 realizada por el Ejecutivo Federal, en el proyecto de reforma de las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

95. Al respecto, esta Primera Sala entiende que *ambas finalidades* son constitucionalmente válidas. Por un lado, es evidente que la protección de la salud es un objetivo que legítimamente puede perseguir del Estado, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4º constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la *protección de la salud*.⁸⁸ En esta línea, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal como una pública o social.

96. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo *individual*, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en múltiples precedentes que el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica.⁸⁹ De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar.

97. Por otro lado, la faceta *social o pública* del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud.⁹⁰ En el [REDACTED]

⁸⁸ Artículo 4. [...].

[...]

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

[...]

⁸⁹ P. LXVIII/2009, sustentada por el Tribunal Pleno, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, Diciembre de 2009, página 6, de rubro: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL".

⁹⁰ P./J. 136/2008, sustentada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, octubre de 2008, página 61, de rubro: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL".

██████████⁹¹ esta Primera Sala reconoció que en aras de tutelar y proteger el derecho humano a la salud, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, etc. En este sentido, puede decirse que la propia Ley General de Salud identifica como un problema de salud pública el consumo de marihuana.

98. En íntima relación con la protección de la salud pública se encuentra la protección al *orden público*. Si bien es complicado definir en qué consiste este principio constitucional,⁹² se trata de un concepto que hace referencia al bienestar de la sociedad en general. Si se entiende de esta manera, no hay duda de que resulta de orden público la persecución de objetivos sociales colectivos a través de decisiones legislativas o políticas públicas. Por lo demás, hay que señalar que la Constitución reconoce como interés legítimo del Estado la protección del conglomerado social.
99. En cambio, la prohibición del consumo de marihuana por la mera autodegradación moral que implica no persigue un propósito legítimo. La Constitución no impone un ideal de excelencia humana, permite que cada individuo elija su propio plan de vida y adopte el modelo de virtud personal que considere válido, en tanto no afecte a los demás.⁹³ Así, las afectaciones al desempeño social que ocasiona la marihuana⁹⁴ —por ejemplo, disminución

⁹¹ Sentencia de 10 de junio de 2015, resuelta por mayoría de cuatro votos de los Señores Ministros: José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas, y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en contra del emitido por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien se reservó el derecho de formular voto particular.

⁹² El principio de orden público se encuentra reconocido en la Constitución en los artículos 6°, párrafo primero, 16 párrafo primero, 94, párrafo octavo, 115, fracción VII, 122, BASE QUINTA, inciso F) y 130, párrafo segundo.

⁹³ Nino, *op. cit.*, p. 423.

⁹⁴ De acuerdo con algunos estudios, los efectos de la marihuana en la vida escolar y profesional del consumidor promedio son poco claros. Aunque se ha relacionado el bajo desempeño escolar con la frecuencia de uso, también se ha señalado que ello puede deberse a otras causas, como condicionamientos socioeconómicos y culturales de quienes la consumen. Al respecto, véase Caulkins, Jonathan P., Hawken, Angela, Kilmer, Beau, y Kleiman, Mark, *Marijuana Legalization: What Everyone Needs to Know*, Nueva York, Oxford University Press, 2012, p. 77. En este orden de ideas, en una encuesta realizada en el Distrito Federal se encontró que el 70% de los usuarios de marihuana trabajan, 43% estudia y 20% estudia y trabaja. Cfr. Zamudio Angles, Carlos Alberto y Castillo Ortega,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de productividad laboral del consumidor y el denominado “síndrome amotivacional”⁹⁵— no pueden considerarse como razones válidas para intervenir el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Además, ni de la ley que ahora se analiza, ni de los procesos legislativos que la han reformado, se desprende la intención del legislador de promover un determinado modelo de virtud personal. Como se ha explicado, la ley pretende proteger la salud y el orden público.

100. Por ello, esta Primera Sala estima que el análisis practicado por el Juez de Distrito⁹⁶ fue sustancialmente correcto al determinar que los fines perseguidos por la norma eran la protección de la salud y el orden público y que éstos resultaban constitucionalmente válidos.

101. Una vez que se ha establecido que el marco regulatorio para el control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas previsto en la Ley General de Salud tiene una finalidad constitucionalmente válida, corresponde ahora analizar si la prohibición de consumir marihuana para fines lúdicos y, en consecuencia, la prohibición también de todas las acciones necesarias para poder estar en posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo (siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etc.), constituye una medida idónea para proteger la salud y el orden público.

b. Idoneidad de la medida

102. En esta etapa de escrutinio debe analizarse si la medida impugnada es un medio adecuado para alcanzar los fines perseguidos por el legislador. En este sentido, el examen de idoneidad presupone la existencia de una *relación*

Lluvia, *Primera encuesta de usuarios de drogas ilegales en la Ciudad de México*, México, Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas A.C., 2012.

⁹⁵ El “síndrome amotivacional” (“amotivational syndrome”) se define como un patrón del comportamiento caracterizado por la falta de motivación, energía e iniciativa. Cfr. Hall, Wayne, Degenhardt, Louisa, y Lynskey, Michael, *The Health and Psychological Effects of Cannabis Use*, 2ª ed., Canberra, Australian Government Publishing Service, 2001, p. ix.

⁹⁶ Véase la foja 511 del juicio de amparo [REDACTED]

empírica entre la intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en *algún modo* y en *algún grado* a lograr el propósito que busca el legislador. Así, la idoneidad de una medida legislativa debe mostrarse a partir de conocimientos científicos o convicciones sociales generalmente aceptadas.⁹⁷

103. Ahora bien, en el caso concreto debe determinarse si el “sistema de prohibiciones administrativas” configurado por los artículos impugnados constituye una medida idónea para proteger la salud y el orden público. Sin embargo, antes de llevar a cabo ese escrutinio resulta indispensable realizar algunas consideraciones metodológicas sobre la manera de realizar el examen de idoneidad de la medida.
104. En primer lugar, cuando en la literatura jurídica se aborda el tema de la idoneidad de la prohibición del consumo de drogas en ocasiones suele señalarse que este análisis consiste en determinar si dicha medida efectivamente reduce dicho consumo. Los partidarios de realizar el análisis de idoneidad de la manera antes indicada consideran que una prohibición que en los hechos mostrara ser *ineficaz* para reducir el consumo no superaría esta grada del examen de proporcionalidad.⁹⁸ Sobre este punto efectivamente existen muchos estudios que muestran que la prohibición no disuade el consumo.⁹⁹ Así, en el caso que nos ocupa podría sostenerse que el “sistema de prohibiciones administrativas” configurado por los artículos impugnados no ha logrado disminuir el consumo de marihuana.¹⁰⁰ En esta

⁹⁷ Bernal Pulido, *op. cit.*, p. 733.

⁹⁸ Uprimny, Rodrigo, Guzmán, Diana Esther y Parra, Jorge Alberto, “¿Des-proporción en la judicialización de los delitos de droga? El caso colombiano”, en Catalina Pérez Correa (coord.), *Justicia desmedida. Proporcionalidad y delitos de drogas en América Latina*, México, Fontamara, 2012, pp. 111-113.

⁹⁹ Por todos, véanse Pedersen, Willy y Skardhamar, Torbjorn, “Cannabis and Crime: Findings From a Longitudinal Study”, *Addiction. Society for the Study of Addiction*, vol. 105, núm. 1, 2010, p. 116; Fergusson, David., Swain-Campbell, Nicola., y Horwood, John, “Arrests and Convictions for Cannabis Related Offences in a New Zealand Birth Cohort”, *Drug and Alcohol Depend.*, vol. 70, núm. 1, p. 61.

¹⁰⁰ Al respecto, existe una amplia literatura que muestra que las políticas prohibicionistas no han sido efectivas en reducir consistente y permanentemente la oferta y demanda de drogas. Por todos, véanse Blackwell, J. Michael, “The Costs and Consequences of US Drug Prohibition for the Peoples of Developing Nations”, *Indiana International and Comparative Law Review*, vol. 24, núm. 3, 2014, p. 665; Christiansen, Matthew, “A Great Schism: Social Norms and Marijuana Prohibition. A Short



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

línea, por ejemplo, datos de la Encuesta Nacional de Adicciones señalan que entre 2002 y 2008 el consumo de drogas ilegales aumentó de 4.6% a 5.2% entre la población de 12 a 65 años,¹⁰¹ lo que podría interpretarse en el sentido de que el citado sistema de prohibiciones es ineficaz para reducir el consumo.

105. No obstante, esta Primera Sala considera que la metodología antes expuesta resulta inadecuada para determinar la idoneidad de la medida impugnada. En este orden de ideas, aceptar que el análisis debe realizarse de esta manera conllevaría a declarar la inconstitucionalidad de cualquier prohibición u obligación que fuera ineficaz para lograr que la conducta de los destinatarios de la norma se conformara a los mandatos establecidos en esas normas. En este sentido, esta Suprema Corte estima que las normas prohibitivas no pueden ser inconstitucionales por ser ineficaces para motivar la conducta de las personas. En este sentido, la reducción del consumo no puede considerarse un fin en sí mismo de la medida, sino en todo caso un estado de cosas que constituye un medio o un fin intermedio para la consecución de una finalidad ulterior, como la protección de la salud pública o el orden público.
106. Una forma alternativa de analizar la idoneidad consiste en sostener que el "sistema de prohibiciones administrativas" configurado por los artículos impugnados será idóneo para alcanzar los fines perseguidos por el legislador,

Essay", *Harvard Law and Policy Review*, vol.4, núm. 1, 2010, p. 240; Camacho, Adriana, Gaviria, Alejandro, y Rodríguez Katherine, "El consumo de droga en Colombia", en Alejandro Gaviria Uribe y Daniel Mejía Londoño (comp.), *Políticas antidroga en Colombia. Éxitos, fracasos y extravíos*; Bogotá, Ediciones Uniandes, 2011, p. 5; Kisley Stephen, "The Case for Policy Reforming Cannabis Control", *The Canadian Journal of Psychiatry*, vol. 53, núm. 12, 2008, p. 795; Beckett, Katherine, y Herbert, Steve, *The Consequences and Costs of Marijuana Prohibition*, Seattle, ACLU/University of Washington, 2009, p. iv; van het Loof, Mirjam, Hoorens, Stijn, van 't Hof, Christian, y Kahan, James P., *Cannabis Policy. Implementation and Outcomes*, Santa Monica, RAND Corporation, 2003, p. 48. En el mismo sentido, véanse los siguientes reportes: Open Society Institute, *War on Drugs. Report of The Global Commission on Drug Policy*, 2011, p. 2; y *Report by the Advisory Committee on Drug Dependence*, Londres, Home Office, 1969, p. 1.

¹⁰¹ Pérez Correa, Catalina, "Delitos contra la salud y (des)proporcionalidad en la legislación mexicana", en Pérez Correa, *op. cit.*, p. 196.

¹⁰² En la literatura especializada se distinguen los "problemas primarios", ocasionados por el abuso de una sustancia psicoactiva, de los "problemas secundarios" derivados de las políticas de control que los Estados adoptan frente a la sustancia. Cfr. Uprimny, Guzmán y Parra, *op. cit.*, p. 108.

consistentes en la protección de la salud y el orden público, en la medida que exista una *relación empírica* que vincule al *consumo* de la marihuana con ciertos *daños* o *afectaciones* a la salud y al orden público. Dicho de otra manera, si el consumo de *marihuana* *no causa* daños o afectaciones a la salud o a la sociedad en su conjunto, la prohibición analizada no será una medida idónea para proteger estos objetivos constitucionales. Como puede observarse, el examen de idoneidad exige entonces la corroboración de la existencia de una relación empírica entre el consumo de marihuana y ciertos estados de cosas que pueden caracterizarse como daños o afectaciones a la salud o a la sociedad.

107. Ahora bien, si se examina la literatura que se ha ocupado de analizar los efectos del consumo recreativo de la marihuana, pueden identificarse al menos los siguientes estados de cosas que normalmente se considera están asociados al consumo recreativo de la marihuana: afectaciones a la salud; generación de dependencia; propensión a utilizar drogas "más duras" e inducción a la comisión de otros delitos. Así, en el siguiente apartado se evaluará si la marihuana causa las citadas afectaciones a la salud y al orden público.
108. Debe también precisarse que para superar el examen de idoneidad basta con que dichas afectaciones existan, sin importar el *grado* o *entidad* que tengan. Dicho de otra forma, para que la prohibición del consumo de marihuana encuentre justificación constitucional desde el punto de vista de la idoneidad de la medida es necesario mostrar que éste afecta la salud y el orden público, aun cuando dicha afectación sea *mínima*.¹⁰³ Así, una intervención podrá considerarse idónea si la correlación entre medio y fin es positiva, con independencia de su nivel de eficacia.

¹⁰³ En opinión de la *Global Commission on Drug Policy*, las políticas públicas sobre drogas deben basarse en evidencia que demuestre que en verdad éstas ayudarán a reducir los daños a la salud, la seguridad de las personas y la sociedad en general. Open Society Institute, *op. cit.*, p. 5.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

109. De acuerdo con lo anterior, a continuación se analiza si existe evidencia empírica que justifique la creencia de que el consumo de marihuana causa los daños o afectaciones antes identificados. Para corroborar la existencia de dicha relación, esta Primera Sala se apoyará en la literatura científica que ha abordado esta cuestión, así como en varios estudios empíricos disponibles sobre el tema.

110. Como una observación preliminar, vale la pena destacar que la evidencia disponible muestra que efectivamente el consumo de marihuana genera daños o afectaciones de distinto tipo. Con todo, como se muestra a continuación, algunas de esas afectaciones han sido corroboradas de manera concluyente, mientras que otras son poco probables o se tratan de meras especulaciones. Al respecto, cabe señalar que la incertidumbre se explica en buena medida al hecho de que es difícil determinar si el uso de marihuana es causa de los efectos negativos a la salud y al orden público o si sólo se trata de una simple correlación.

➤ **Afectaciones a la salud**

111. En términos generales, los estudios coinciden en que a partir de la evidencia que existe actualmente el consumo de marihuana en personas adultas no supone un riesgo importante para salud, salvo en el caso de que se utilice de forma crónica y excesiva.¹⁰⁵ En relación con los efectos que causa la

¹⁰⁴ Sobre este tema, véanse entre otros Caulkins, Hawken, Kilmer, y Kleiman, *op. cit.*, p. 55; Room, Robin, Fischer, Benedikt, Hall, Wayne, Lenton, Simon, y Reuter, Peter, *Cannabis Policy: Moving Beyond Stalemate*, Oxford, Oxford university Press, 2010, p.32; D' Souza, Deepak Cyril, Sewell, Richard Andrew, y Ranganathan, Mohini, "Cannabis and Psychosis/Schizophrenia: Human Studies", *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, vol. 259, núm., 2009, pp. 413-431, p. 413; y Hall, Wayne, y Liccardo Pascuala, Rosalie, *Cannabis Use and Dependence: Public Health and Public Policy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 88.

¹⁰⁵ Fischer, Benedikt, Jeffries, Victoria, Hall, Wayne, Room, Robin, Goldner, Elliot, Rehm J., "Lower Risk Cannabis Use Guidelines for Canada (LRCUG): A Narrative Review of Evidence and Recommendations", *Canadian Journal of Public Health*, vol. 102, núm. 5, 2011, p. 326; y Hall, Wayne, "The Adverse Effects of Cannabis Use: What Are They, and What Are Their Implications For Policy", *International Journal of Drug Policy*, 2009, vol. 20, pp. 458-466.

marihuana en la salud de las personas, la literatura científica distingue las alteraciones temporales de las crónicas. Así, mientras las primeras tienen lugar únicamente mientras dura la intoxicación en el cuerpo, las segundas persisten aun cuando el consumidor no se encuentre intoxicado.¹⁰⁶

112. Las alteraciones *temporales* ocurren como consecuencia inmediata del consumo de la marihuana. Algunos de los efectos que pueden generar son pánico, reducción de la ansiedad, estado de alerta, tensión, incremento de la sociabilidad, reducción gradual de funciones cognitivas y motoras, percepciones intensificadas de la realidad —colores, sabores, sensaciones— o alucinaciones visuales y/o auditivas.¹⁰⁷ Así, al tratarse de efectos que dependen del estado de intoxicación que produce la marihuana, las investigaciones indican que son reversibles y no representan un riesgo demostrado para la salud.¹⁰⁸
113. La existencia de alteraciones *crónicas* como consecuencia del consumo es muy controvertida en la literatura especializada. Los estudios indican que las implicaciones permanentes son poco probables o mínimas, que su persistencia es incierta e incluso que pueden tener origen en una pluralidad de factores distintos al consumo.¹⁰⁹ Un ejemplo de esta última situación es la asociación que se ha encontrado entre fumar marihuana y cánceres respiratorios,¹¹⁰ la cual podía explicarse porque buena parte de los

¹⁰⁶ En este sentido, véase por todos Hall, Wayne, y Degenhardt, Louisa, "The Adverse Health Effects of Chronic Cannabis Use", *Drug Testing and Analysis. Special Issue: Cannabinoids part II: The Current Situation With Cannabinoids*, vol. 6, núms. 1-2, 2013, pp. 39-45; y Hall, Degenhardt y Lynskey, *op. cit.*, p. 4.

¹⁰⁷ En este orden de ideas, incluso se ha señalado que efectos negativos en el estado de intoxicación, como ansiedad, pánico, paranoia y/o psicosis, se asocian generalmente con sujetos psicológicamente vulnerables, como personas con esquizofrenia. Al respecto, véase Ashton, Heather, "Pharmacology And Effects of Cannabis: A Brief Review", *The British Journal of Psychiatry*, vol. 178, núm. 2, 2001, pps. 104-105.

¹⁰⁸ Douaihy, Antoine, "Cannabis Revisited", *UPMC Synergie*, 2013, pps. 1-9, p. 3.

¹⁰⁹ A manera de ejemplo, un estudio muestra, entre otras cosas, que existe incertidumbre en torno a si los efectos adversos asociados con la marihuana se relacionan *causalmente* con su consumo, que no está clara la *dirección* de la relación entre el consumo y los desórdenes depresivos o emocionales, que las afectaciones cognitivas o intelectuales, la intensidad y reversibilidad de la afectación es *incierta*, y que las consecuencias psicóticas están sujetas a que el consumidor padezca alguna susceptibilidad especial a padecimientos psiquiátricos. Al respecto, véase Hall y Degenhardt, *op. cit.*, p. 43.

¹¹⁰ En este sentido, véanse Mehra, Berthiller, Julien, Straif, Kurt, Boniol, Mathieu; Voirin, Nicolas; Benhaim-Luzon, Veronique; Ayoub, Wided Ben, Dari, Iman, Laouamri, Slimane, Hamdi-Cherif,

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

consumidores de marihuana también fuman tabaco, lo que implicaría que no está probada la existencia de una conexión causal entre el consumo de marihuana y el cáncer.¹¹¹

114. Por otra parte, existen investigaciones que sostienen que la marihuana produce los *mismos* daños respiratorios que cualquier otra sustancia fumada,¹¹² y que resulta *menos dañina* que otras sustancias como el opio, las anfetaminas, el alcohol o los barbitúricos.¹¹³ En este orden de ideas, diversos reportes concluyen que el peligro de la marihuana se ha "sobreexposto",¹¹⁴ y generalmente subrayan que esta sustancia tiene un nivel de toxicidad extremadamente bajo.¹¹⁵ Por lo demás, también existen estudios que señalan que los efectos normalmente considerados "crónicos" son esencialmente reversibles después de que se suspende el consumo por un período variable de tiempo.¹¹⁶

Mokhtar, Bartal, Mohamed, Ayed, Fahrat Ben, y Sasco, Annie, "Cannabis Smoking and Risk of Lung Cancer in Men: A Pooled Analysis of Three Studies in Maghreb", *Journal of Thoracic Oncology*, 2008, vol. 3, núm. 12, pps. 1398 y 1401; Reena, Moore, Brent A., Crothers, Kristina, Tetrault, Jeanette; Fiellin, David A., "The Association Between Marijuana Smoking and Lung Cancer. A Systematic Review", *Archives of Internal Medicine*, vol. 166, 2006, pp. 1359-1367; y Hashibe, Mia, Morgenstern, Hal, Cui, Yan, Tashkin, Donald P., Zhang, Zuo-Feng, Cozen, Wendy, Mack, Thomas M., y Greenland, Sander, "Marijuana Use and the Risk of Lung and Upper Aerodigestive Tract Cancers: Results of a Population-Based Case-Control Study", *Cancer, Epidemiology, Biomarkers & Prevention*, vol. 15, núm. 10, 2006, pp. 1829-1834, p. 1829.

¹¹¹ Sobre esta discusión, véase Caulkins, Hawken, Kilmer y Kleiman, *op. cit.*, pps. 65-66; Hashibe, Morgenstern, Cui, Tashkin, Zhang, Cozen, Mack, y Greenland, *op. cit.*, p. 1829; Hall y Degenhardt, *op. cit.*, p. 40; Hall, Wayne, y Taylor, D. Robin, "Respiratory Health Effects of Cannabis: Position Statement of The Thoracic Society of Australia and New Zealand", *Internal Medicine Journal*, vol. 33, 2003, pp. 310 y 312; Hall, Wayne, "What Has Research over The Past Two Decades Revealed About The Adverse Health Effects of Recreational Cannabis Use?", *Addiction*, vol. 110, núm. 1, 2015, p. 22.

¹¹² Al respecto, véase Royal College of Physicians of London, *Cannabis and Cannabis-Based Medicines. Potential Benefits and Risks to Health*, Londres, 2005, p. vii; Joy, E. Janet, Watson, Stanley, y Benson, John A. (eds.), *Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base*, Washington, D.C., National Academy Press, 1999, pps. 5-6.

¹¹³ Ballotta, Danilo, Bergeron, Henri, y Hughes, Brendan, "Cannabis Control in Europe", en Sharon Rödnér Sznitman, Börje Olsson, Robin Room (eds.), *A Cannabis Reader: Global Issues and Local Experiences. Perspectives on Cannabis Controversies, Treatment and Regulation in Europe*, Lisboa, EMCDDA, 2008, pps. 107-108; y *Report by the Advisory Committee on Drug Dependence*, *op. cit.*

¹¹⁴ Ballotta, Bergeron, y Hughes, *op. cit.*, p. 108.

¹¹⁵ Ashton, *op. cit.*, p. 104.

¹¹⁶ A manera de ejemplo, véanse Solowij, Nadia, *Cannabis and Cognitive Functioning*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pps. 47, 79 y 169; y Pope, Harrison G., Gruber, Amanda J., Hudson, James I., Huestis, Marilyn A. y Yurgelun-Todd, Deborah, "Neuropsychological Performance in Long-term Cannabis Users", *Archives of General of Psychiatry*, 2001, vol. 58, núm. 10, p. 909.

115. En esta línea, tampoco se ha demostrado de manera concluyente que el consumo produzca afectaciones en los sistemas reproductivos del consumidor,¹¹⁷ ni existe evidencia de que la marihuana genere algún deterioro permanente en el sistema cardiovascular,¹¹⁸ ni tampoco se ha probado que dosis prolongadas produzcan afectaciones cognitivas severas como las que se observan tras el consumo crónico de alcohol.¹¹⁹
116. De la misma manera, los estudios coinciden en que es *incierta* la relación entre la marihuana y las alteraciones psicóticas o mentales en los consumidores,¹²⁰ con excepción de los consumidores que son susceptibles de sufrir padecimientos mentales. No obstante, deben advertirse los daños psicológicos que genera la marihuana cuando su consumo inicia en la adolescencia. Diversos estudios explican que existe mayor probabilidad de sufrir *esquizofrenia*¹²¹ y *depresión*¹²² en la edad adulta, cuando el consumo excesivo de marihuana inicia en edades tempranas.
117. Ante tal panorama, esta Primera Sala observa que si bien la evidencia médica muestra que el consumo de marihuana puede ocasionar daños a la salud, se trata de afectaciones que pueden calificarse como no graves, siempre y cuando no se trate de consumidores menores edad.

➤ **Desarrollo de dependencia**

118. En la literatura científica suele distinguirse entre el abuso y la dependencia a una sustancia. Mientras el *abuso* supone el uso continuo de drogas, la *dependencia* precisa que el consumo satisfaga criterios adicionales, como el desarrollo de tolerancia a la droga, síndrome de abstinencia e interferencia

¹¹⁷ Hall, Degenhardt y Lynskey, *op. cit.*, p. 56.

¹¹⁸ Hall, Degenhardt y Lynskey, *op. cit.*, p. 64.

¹¹⁹ Hall, Degenhardt y Lynskey, *op. cit.*, p. 86.

¹²⁰ Zammit, Stanley, Moore, Theresa H. M., Lingford-Hughes, Anne, Barnes, Thomas R. E., Jones, Peter B., Burke, Margaret, y Lewis, Glyn, "Effects of Cannabis Use on Outcomes of Psychotic Disorders: Systematic Review", *The British Journal of Psychiatry*, vol. 193, núm. 5, 2008, pp. 357 y 361; Hall, Degenhardt y Lynskey, *op. cit.*, p. 75.

¹²¹ Andréasson, Sven, Engstrom, Ann, Allebeck, Peter, y Rydberg, Ulf, "Cannabis and Schizophrenia: A Longitudinal Study of Swedish Conscripts", *Lancet*, vol. 330, núm. 8574, 1987, p. 1483.

¹²² Fergusson, David, Horwood, John, "Early Onset Cannabis Use and Psychosocial Adjustment in Young Adults", *Addiction*, vol. 92, 1997, p. 279.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

del consumo con el desarrollo de otras actividades del consumidor.¹²³ En este sentido, los consumidores regulares de marihuana no califican *necesariamente* como farmacodependientes.

119. Ahora bien, existen claras divergencias en la literatura sobre la probabilidad y la frecuencia con la que la farmacodependencia se presenta en los consumidores de marihuana. Adicionalmente, también hay discrepancias en el período y la intensidad de consumo que son necesarios para que la marihuana provoque algún grado de dependencia. Al respecto, existen estudios que afirman que existe un *bajo grado de probabilidad* de que la marihuana produzca dependencia. En efecto, de acuerdo con estas investigaciones no sólo pocos usuarios de marihuana desarrollan adicción, sino que además la posibilidad de que el consumo desencadene la dependencia está sujeto a diversos factores preexistentes como son *desórdenes conductuales y de personalidad*.¹²⁴

120. De este modo, algunos estudios han encontrado que 9% de quienes utilizan marihuana desarrollan dependencia por ella en algún punto de sus vidas,¹²⁵ mientras que otras investigaciones plantean que el 10% de las personas que han consumido marihuana alguna vez desarrolla dependencia a la droga.¹²⁶ En la misma línea, otros reportes estiman que hay suficiente evidencia para

¹²³ American Psychiatric Association (APA), *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5*, 5 ed., Washington, DC: New School Library, 2013, p. 483. Es conveniente precisar que el *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5* es la versión más reciente del manual diagnóstico y estadístico de desórdenes mentales de la APA. En este manual expresamente se ha omitido utilizar el término adicción o dependencia para utilizar en su lugar "substance use disorder" (desorden de uso de sustancia) por considerar que otros usos pueden tener connotaciones potencialmente negativas (al respecto, véase p. 485 del manual). No obstante, dado que el término "desorden de uso de sustancia" es novedoso en México, y en tanto es definido de la misma manera que "dependencia", aquí se utilizará este último término, como se hace en la versión anterior del manual (American Psychiatric Association (APA), *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-4*, Washington, DC: 1994).

¹²⁴ Joy, Stanley, Watson, y Betson, *op. cit.*, p. 6.

¹²⁵ Caulkins, Hawken, Kilmer y Kleiman, *op. cit.*, p. 66.

¹²⁶ Hall y Degenhardt, *op. cit.*, p. 40; Hall, Degenhardt y Lynskey, *op. cit.*, pps. 71 y 73.

concluir que algunos consumidores crónicos de marihuana efectivamente desarrollan farmacodependencia.¹²⁷

121. Con todo, numerosos estudios coinciden en que las implicaciones sobre la salud y las consecuencias sociales reportadas por quienes buscan controlar su consumo son mucho *menos* severas que aquellas reportadas por personas adictas a otras sustancias, como el opio o el alcohol. Así, por ejemplo, un reporte demostró que sólo un aproximado del 3% de la población de adultos de Estados Unidos cumpliría el diagnóstico clínico de dependencia, frente a alrededor del 14% de personas que padecen alcoholismo. Por lo demás, investigaciones con conclusiones semejantes también tuvieron lugar en Australia y Nueva Zelanda.¹²⁸

➤ **Propensión a utilizar drogas “más duras”**

122. En términos generales, puede decirse que los estudios disponibles demuestran que la marihuana tiene un nivel de incidencia *muy bajo* en el consumo de otras drogas más riesgosas.¹²⁹ Con todo, es cierto que se han identificado asociaciones entre el consumo de marihuana y el consumo de otras drogas más intensas como la heroína o la cocaína.¹³⁰ En esta línea, algunos estudios han intentado explicar estas correlaciones desde una perspectiva farmacológica, argumentando que los efectos químicos de la marihuana propician el consumo posterior de otros narcóticos.¹³¹
123. No obstante, esta postura ha sido contrastada con diversas explicaciones sociales y contextuales que entienden el fenómeno a partir de los

¹²⁷ Hall, Degenhardt y Lynskey, op. cit., pps. 69-73.

¹²⁸ Hall, Wayne, *The health and psychological effects of cannabis use*, pps. 216-217; Hall, Degenhardt y Lynskey, op. cit., p. 148; Hall y Degenhardt, op. cit., p. 40.

¹²⁹ Hall y Degenhardt, op. cit., pps. 41 y 43.

¹³⁰ Kandel, Denise B., *Examining the Gateway Hypothesis: Stages and Pathways of Drug Involvement*, en Kandel, Denise B. (ed.), *Stages and Pathways of Drug Involvement. Examining the Gateway Hypothesis*. New York, Cambridge University Press, 2002, pp. 3-18, p. 5.

¹³¹ Aun los estudios que han sostenido esta explicación, señalan que sus resultados deben ser examinados cuidadosamente, pues reconocen que existen explicaciones diferentes que podrían dar sentido a una probable relación causal, como factores genéticos o sociales. A manera de ejemplo, véanse Emmet, David y Nice, Graeme, *What You Need to Know About Cannabis: Understanding the Facts*, Londres, Jessica Kingsley Publishers, 2009, p. 61.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

condicionamientos socioeconómicos, culturales y biológicos del propio consumidor.¹³² Así, puede decirse que estas aproximaciones al problema — que se sustentan esencialmente en la hipótesis de que existe una pluralidad de razones ajenas a la propia marihuana para el consumo de otras drogas— tienen mayor soporte empírico.¹³³

124. En este sentido, algunos estudios descartan por completo que el consumo de marihuana provoque el uso subsecuente de otras drogas. Al respecto, señalan que la marihuana más bien podría ser sólo una variable que haya que analizar junto con otros factores de riesgos sociales, psicológicos o fisiológicos.¹³⁴ En cambio, otros estudios matizan esta conclusión señalando que no existe evidencia concluyente que muestre que la marihuana lleve al consumo de otras drogas.¹³⁵
125. De esta manera, puede decirse que los reportes coinciden en que la marihuana tiene un *muy bajo* grado de incidencia en el consumo de drogas más riesgosas. En todo caso, parece ser que el consumo de drogas subsecuentes es resultado de diversos factores actuando de manera conjunta, pero no del consumo de la marihuana en sí mismo.¹³⁶ En esta línea,

¹³² Hall, Degenhardt, y Lynskey, *op. cit.*, p. 103. Al respecto, puede señalarse que la relación se ha explicado a partir del hecho de que normalmente los usuarios de marihuana tienen mayor oportunidad de conseguir otras drogas ilícitas en el mercado negro.

¹³³ En esta línea, véanse entre otros Hall y Degenhardt, *op. cit.*, p. 41; Wagner, Fernando A, y Anthony, James C., "Into the World of Illegal Drug Use: Exposure Opportunity and Other Mechanisms Linking the Use of Alcohol, Tobacco, Marijuana, and Cocaine", *American Journal of Epidemiology*, vol. 155, núm. 10, 2002, p. 923; Fergusson, David M, Boden, Joseph, Horwood, John, "The Developmental Antecedents of Illicit Drug Use: Evidence From a 25-year Longitudinal Study", *Drug Alcohol Depend.*, vol. 96, núms. 1-2, 2008, p.175; Morral, Andrew, McCaffrey, Daniel, Paddock, Susan, "Reassessing the Marijuana Gateway Effect", *Addiction*, vol. 97, núm. 12, 2002, p. 1493; Lessem, Jeff, Hopfer, Christian, Haberstick, Brett, Timberlake, David, Ehringer, Marissa, y Smolen, Andy, "Relationship between Adolescent Marijuana Use and Young Adult Illicit Drug Use", *Behavior Genetics*, vol. 36, núm. 4, 2006, p. 498.

¹³⁴ Joy, Watson, y Benson, *op. cit.*, p. 6; Caulkins, Hawken, Kilmer y Kleiman, *op. cit.*, pps. 68-69. Así, por ejemplo, en un reporte reciente se afirma que aun si existiera una relación causal entre el consumo de la marihuana y el consumo de drogas más dañinas, ésta se explicaría más por factores sociológicos que por factores farmacológicos de la marihuana. Al respecto, *cfr.* Hall, Degenhardt, y Lynskey, *op. cit.*, p. 109.

¹³⁵ Caulkins, Hawken, Kilmer, y Kleiman, *op. cit.*, pps. 68-69; National Institute on Drug Abuse, *Marijuana and Health. Fourth Report to the United States Congress from the Secretary of Health, Education and Welfare*, 1974, p. 6.

¹³⁶ Hall, Degenhardt, y Lynskey, *op. cit.*, pps. 108-109.

por ejemplo, estudios sociológicos señalan que la presión de pares o el uso continuo por parte de estos de marihuana *aumentan la probabilidad* de que alguien la consuma por primera vez,¹³⁷ lo que desde luego no implica que el consumo vaya a desarrollarse de manera continua.¹³⁸

➤ **Inducción a la comisión de otros delitos**

126. En relación con esta asociación la evidencia es altamente especulativa. En efecto, diversos estudios han concluido que el consumo de marihuana no es un factor determinante en la comisión de crímenes.¹³⁹ Por un lado, la correlación es estadísticamente *muy pequeña* para considerarse significativa.¹⁴⁰ Por otro lado, se señala que la comisión de delitos y el consumo de marihuana pueden tener origen en las mismas causas sociales.
127. De hecho, la evidencia disponible permite afirmar que la marihuana por sí misma no induce la comisión de delitos violentos, sino todo lo contrario.¹⁴¹ En este sentido, diversos estudios señalan que el consumo de marihuana *inhibe* los impulsos de agresión del usuario, ya que generalmente produce estados de letargo, somnolencia y timidez.¹⁴² De acuerdo con una encuesta aplicada en la Ciudad de México, el 26.8% de los usuarios adultos de drogas ilícitas afirmó haber realizado algún delito bajo el efecto de las drogas, y de estos únicamente 11.3% lo hizo bajo el efecto de la marihuana.¹⁴³
128. Aunque la tasa de consumo de marihuana es mayor entre las personas que han delinquido que entre las que no, ello probablemente se deba a que la comisión de delitos y el consumo de marihuana tienen como origen las mismas causas sociales.¹⁴⁴ Por lo demás, es evidente que si algunos

¹³⁷ Joy, Stanley, Watson, y Belson, *op. cit.*, p. 61; Ali, Mir M, Amialchuk, Aliaksandr, Dwyer, Debra S., "The Social Contagion Effect of Marijuana Use among Adolescents", *PLoS ONE*, vol. 6, núm. 1, 2011, p. 1.

¹³⁸ Joy, Stanley, Watson, y Belson, *op. cit.*, p. 61.

¹³⁹ Pedersen y Skardhamar, *op. cit.*, pps. 109-118, p. 116.

¹⁴⁰ Caulkins, Hawken, Kilmer, y Kleiman, *op. cit.*, p. 74 y 75.

¹⁴¹ Caulkins, Hawken, Kilmer, y Kleiman, *op. cit.*, p. 74.

¹⁴² *Report by the Advisory Committee on Drug Dependence*, *op. cit.*, p.1.

¹⁴³ Zamudio Angles y Castillo Ortega, *op. cit.*, p. 14.

¹⁴⁴ Caulkins, Hawken, Kilmer, y Kleiman, *op. cit.*, p. 74.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

consumidores enfrentan cargos penales es precisamente porque el consumo de marihuana también está penalizado.

129. Con todo, en relación con la asociación entre consumo de marihuana y accidentes automovilísticos, los estudios más recientes muestran que efectivamente el consumo de dicha sustancia disminuye las habilidades necesarias para manejar automóviles y, por tanto, incrementa las probabilidades de causar accidentes viales.¹⁴⁵ De hecho, el efecto se ve incrementado cuando se combina el consumo de marihuana con alcohol.¹⁴⁶ Al respecto, es importante señalar que la disminución de las habilidades para conducir cuando se consume marihuana son más variables que cuando se ingiere alcohol, pues sus efectos están sujetos a factores como la dosis, la tolerancia desarrollada por consumo frecuente entre varios más.¹⁴⁷
130. Así, de la evidencia analizada se desprende que el consumo de marihuana no incentiva la comisión de otros delitos. Aunque consumo y criminalidad son situaciones que generalmente se asocian, ello puede deberse a diversas explicaciones sociales y contextuales, en tanto ambos fenómenos pueden tener orígenes las mismas causas. Por otro lado, muchos adictos enfrentan el sistema punitivo del Estado precisamente por la existencia de prohibiciones al consumo de marihuana. Sin embargo, también se constató que el uso de marihuana sí afecta negativamente las habilidades para

¹⁴⁵ Hartman, Rebecca y Huestis, Marilyn A., "Cannabis Effects on Driving Skills", *Clin Chem*, vol. 59, núm. 3., 2013, p. 478; Li, Mu-Chen, Brady, Joanne E., DiMaggio, Charles J., Lusardi, Arielle R., Tzong, Keane Y., y Li, Guohua, "Marijuana Use and Motor Vehicle Crashes", *Epidemiologic Review*, vol. 34, núm. 1, 2012, p. 65; Bergeron, Jacques, Langlois, Julie, y Cheang, Henry S., "An Examination of the Relationships Between Cannabis Use, Driving Under the Influence of Cannabis and Risk-Taking on the Road", *European Review of Applied Psychology*, vol. 64, núm. 3, 2014, p. 101; Asbridge, Mark, Hayden, Jill A., Cartwright, Jennifer L., "Acute Cannabis Consumption and Motor Vehicle Collision Risk: Systematic Review of Observational Studies and Meta-Analysis", *British Medical Journal*, vol. 344, 2012, p. 1.

¹⁴⁶ Hartman y Huestis, *op. cit.*, p. 478; Downey, Luke Andrew, King, Rebecca, Papafotiou, Katherine, Swann, Phillip, Ogden, Edward, Boorman, Martin, y Stough, Con, "The Effects of Cannabis and Alcohol on Simulated Driving: Influences of Dose and Experience", *Accident, Analysis and Prevention*, vol. 50, 2013, p. 879; Li, Brady, DiMaggio, Lusardi, Tzong, y Li, *op. cit.*, p. 70; Sewell, Andrew, Poling, James, Sofuoglu, Mehmet, "The Effect of Cannabis Compared with Alcohol on Driving", *American Journal on Addictions*, vol. 18, núm. 3, 2009, p. 1.

¹⁴⁷ Li, Brady, DiMaggio, Lusardi, Tzong, y Li, *op. cit.*, p. 70; Sewell, Poling y Sofuoglu, *op. cit.*, p. 1.

conducir vehículos automotores pudiendo aumentar la probabilidad de causar accidentes.

➤ **Conclusión sobre el análisis de idoneidad**

131. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala concluye que existe evidencia para considerar que el consumo de marihuana efectivamente causa diversas afectaciones en la salud de las personas. En este sentido, si bien en términos generales puede decirse que se trata de daños de escasa entidad, ello no es obstáculo para concluir que en el caso concreto el “sistema de prohibiciones administrativas” conformado por los artículos impugnados efectivamente *es una medida idónea* para proteger la salud de las personas.
132. No obstante, la evidencia analizada no logró mostrar que el consumo de marihuana influyera en el aumento de la criminalidad, pues aunque el consumo se asocia a consecuencias antisociales o antijurídicas, éstas pueden explicarse por otros factores, como al contexto social del consumidor o al propio sistema punitivo de la droga. Con todo, los estudios analizados sí permiten concluir que el consumo de marihuana entre los conductores es un factor que aumenta la probabilidad de causar accidentes vehiculares, lo que significa que la medida impugnada únicamente en este aspecto *también es una medida idónea* para proteger el orden público.
133. En ese sentido, esta Primera Sala estima que el análisis practicado por el Juez de Distrito llegó a una conclusión correcta al determinar¹⁴⁸ que la medida era idónea. El recurrente aduce que dicho análisis de idoneidad fue practicado con un estándar inferior al empleado por esta Suprema Corte en tanto el Juez de Distrito estimó que las normas “contribuyen en algún modo y algún grado a buscar el propósito que busca el legislador”. Sin embargo, esta Primera Sala recuerda, que en la foja 51 del citado amparo en revisión

¹⁴⁸ *Ibidem*, foja 512.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

237/2014, este fue precisamente el estándar empleado al decirse expresamente:

"En este sentido, el examen de idoneidad presupone la existencia de una *relación empírica* entre la intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en *algún modo* y en *algún grado* a lograr el propósito que busca el legislador."

134. Por ello, esta Primera Sala comparte la conclusión del Juez de Distrito de que la medida es idónea en los términos señalados. Resta ahora verificar el resto del test de restricciones para determinar si los agravios del recurrente pueden desvirtuar las siguientes etapas del análisis del Juez de Distrito.



Necesidad de la medida

135. Una vez superado el examen de idoneidad, corresponde analizar si el "de prohibiciones administrativas" impugnado es una medida *necesaria* para proteger la salud y el orden público o si, por el contrario, existen medidas alternativas igualmente idóneas que afecten en *menor grado* el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Precisamente aquí, es donde se demostrará el disenso analítico entre esta Primera Sala y los razonamientos del Juez de Distrito a la luz de los agravios del recurrente. Con todo, antes de examinar la citada medida, esta Primera Sala estima pertinente hacer algunas precisiones metodológicas sobre la manera en la que se debe realizar el análisis comparativo con otras medidas alternativas en esta grada del test de proporcionalidad.
136. En este orden de ideas, el examen de necesidad implica corroborar, en primer lugar, si existen otros medios con un grado de idoneidad igual o superior para lograr los fines que se persiguen y, en segundo lugar, determinar si estas alternativas intervienen con menor intensidad el derecho fundamental

afectado. El primer aspecto del test de necesidad es de gran complejidad, toda vez que supone hacer un catálogo de medidas alternativas y determinar el grado de idoneidad de éstas, es decir, evaluar su nivel de eficacia, rapidez, probabilidad y afectación material de su objeto.¹⁴⁹

137. De esta manera, la búsqueda de medios alternativos podría ser interminable y requerir al juez constitucional imaginarse y analizar todas las alternativas posibles.¹⁵⁰ No obstante, dicho escrutinio puede acotarse ponderando aquellas medidas que el legislador consideró adecuadas para situaciones similares o bien las alternativas que en el derecho comparado se han diseñado para regular el mismo fenómeno. En cualquier caso, conviene aclarar que la comparación entre regulaciones en el marco del análisis de necesidad de una medida cumple la función de *acotar el universo de alternativas* que el legislador pudo considerar al momento de afectar el derecho en cuestión.
138. En este orden de ideas, se expondrá la regulación de las sustancias que provocan un *daño similar*, como el tabaco o el alcohol, sin que ello signifique que el legislador se encuentre obligado a regular de forma idéntica las actividades relacionadas al autoconsumo de marihuana, toda vez que las restricciones al consumo deben ponderarse de acuerdo a las características de cada sustancia. Por lo demás, también se realizará un análisis comparativo con las alternativas a la prohibición del consumo de marihuana que se han implementado en el derecho comparado, sin que ello tampoco signifique que el legislador tenga que adoptar esos esquemas regulatorios. Al respecto, es importante señalar que la referencia a ambos tipos de medidas únicamente se hace con la finalidad de identificar la forma que podría adoptar una medida alternativa con la que legítimamente se pueda comparar la medida adoptada por el legislador mexicano en relación con el consumo de marihuana.

¹⁴⁹ Bernal Pulido, *op. cit.*, p. 750.

¹⁵⁰ Bernal Pulido, *op. cit.*, p. 742.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

➤ Regulación de sustancias similares a la marihuana

139. Como se mostró al realizar el examen de idoneidad de la medida, la marihuana produce efectos adversos a la salud similares por su intensidad a los que ocasiona el tabaco o el alcohol, aunque muy distintos a los que producen otros estupefacientes y psicotrópicos. La marihuana produce los mismos problemas respiratorios que cualquier otra sustancia fumada,¹⁵¹ resulta menos dañina que otras sustancias como el opio, las anfetaminas y los barbitúricos,¹⁵² y las implicaciones sobre la salud y las consecuencias sociales reportadas por quienes buscan controlar su consumo son *mucho menos severas* que aquellas reportadas por personas adictas a otras sustancias, como el opio o el alcohol.¹⁵³

140. No obstante, a pesar de las similitudes en cuanto a los daños que producen la marihuana, el tabaco y el alcohol, el legislador diseñó un "régimen de permisión controlada" para el consumo de estas dos últimas sustancias. A continuación se exponen las características más importantes de dicho régimen.

141. De acuerdo con la Ley General para el Control del Tabaco, se encuentra estrictamente prohibido la venta, la distribución y el suministro de tabaco a menores de edad; prohibición que se extiende a las instituciones educativas públicas y privadas.¹⁵⁴ Por otro lado, también se prohíbe el consumo de tabaco en los espacios 100% libres de humo de tabaco; escuelas públicas y

¹⁵¹ Royal College of Physicians, *op. cit.*

¹⁵² Ballotta, Bergeron, y Hughes, *op. cit.*; y Report by the Advisory Committee on Drug Dependence, *op. cit.*

¹⁵³ Report by the Advisory Committee on Drug Dependence, *op. cit.*

¹⁵⁴ **Ley General para el Control de Tabaco:**

Artículo 17. Se prohíben las siguientes actividades:

- I. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco a menores de edad;
- II. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior, y
- III. Emplear a menores de edad en actividades de comercio, producción, distribución, suministro y venta de estos productos.

privadas de educación básica y media superior; lugares con acceso al público; y en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas.¹⁵⁵ En cambio, la producción y comercio se sujeta a diversas disposiciones administrativas.¹⁵⁶ Finalmente, sólo se permite la publicidad sobre su uso cuando está dirigida a mayores de edad a través de revistas para adultos, correo y dentro de establecimientos de acceso exclusivo para adultos.¹⁵⁷

142. Del mismo modo, la Ley General de Salud establece prohibiciones para expendir o suministrar *bebidas alcohólicas* a menores de edad.¹⁵⁸ Como medida de control, la Secretaría de Salud establece además los límites de alcohol en sangre y en aire expirado para conducir automotores y manejar mecanismos, instrumentos, y aparatos o sustancias peligrosas.¹⁵⁹ Respecto

¹⁵⁵ Ley General para el Control del Tabaco:

Artículo 26. Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco en los espacios 100% libres de humo de tabaco, así como en las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior.

En dichos lugares se fijará en el interior y en el exterior los letreros, logotipos y emblemas que establezca la Secretaría.

Artículo 27. En lugares con acceso al público, o en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, incluidas las universidades e instituciones de educación superior, podrán existir zonas exclusivamente para fumar, las cuales deberán de conformidad con las disposiciones reglamentarias:

I. Ubicarse en espacios al aire libre, o

II. En espacios interiores aislados que dispongan de mecanismos que eviten el traslado de partículas hacia los espacios 100% libres de humo de tabaco y que no sea paso obligado para los no fumadores.

¹⁵⁶ Dichas leyes establecen que las compañías productoras de tabaco deben tener una licencia sanitaria e informar del contenido de los productos del tabaco, los ingredientes usados y las emisiones y sus efectos en la salud, tanto a la Secretaría de Salud como al público en general. Mientras que aquellos que comercien, vendan, distribuyan o suministren productos del tabaco, deben en el interior de sus negocios tener un anuncio de la prohibición de la venta y suministro a menores, exigir a los compradores la acreditación de la mayoría de edad y exhibir las leyendas de advertencia sobre el consumo del tabaco.

¹⁵⁷ Ley General para el Control del Tabaco:

Artículo 23. Queda prohibido realizar toda forma de patrocinio, como medio para posicionar los elementos de la marca de cualquier producto del tabaco o que fomente la compra y el consumo de productos del tabaco por parte de la población.

La publicidad y promoción de productos del tabaco únicamente será dirigida a mayores de edad a través de revistas para adultos, comunicación personal por correo o dentro de establecimientos de acceso exclusivo para aquéllos.

La industria, los propietarios y/o administradores de establecimientos donde se realice publicidad o promoción de estos productos deberán demostrar la mayoría de edad de los destinatarios de la misma.

¹⁵⁸ Ley General de Salud:

Artículo 220. En ningún caso y de ninguna forma se podrán expendir o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad.

La violación a esta disposición será equiparable con el delito de Corrupción de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo.

¹⁵⁹ Ley General de Salud:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

a la publicidad del producto, la ley establece que toda bebida alcohólica deberá ostentar en los envases la leyenda "el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud", escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.¹⁶⁰

➤ **Regulación del consumo en el derecho comparado**

143. En relación con el consumo de marihuana, en el derecho comparado pueden encontrarse distintas alternativas para su regulación. En este apartado se explican brevemente algunas de esas regulaciones que constituyen una alternativa a una prohibición absoluta del consumo.
144. En el Estado de Colorado, en Estados Unidos, está permitido el consumo de la marihuana y su comercialización en ciertas condiciones. Por un lado, la permisión del consumo está limitada a mayores de veintiún años y sólo puede venderse una onza a cada residente y un cuarto de onza a no residentes. Por otro lado, la publicidad masiva está prohibida, en particular si puede alcanzar a menores de edad. Por lo demás, la distribución del producto en tiendas y locales de cultivo está controlada estrictamente por la autoridad encargada de regular el alcohol y el tabaco, lo que se logra entre otros medios con un

Artículo 187 bis. Son facultades de la Secretaría de Salud en el marco de la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol:

I. Establecer los límites de alcohol en sangre y en aire expirado para conducir vehículos automotores, los cuales deberán ser tomados en cuenta por las autoridades federales y por las de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia. Tratándose de vehículos que presten un servicio público, personas que hagan uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, así como los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud que participen en la atención médico-quirúrgica de un usuario, los límites de alcohol en sangre y aire expirado serán cero;

[...]

¹⁶⁰ **Ley General de Salud:**

Artículo 218. Toda bebida alcohólica, deberá ostentar en los envases, la leyenda: "el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud", escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.

sistema de expedición de licencias para cultivadores, productores, transportadores y almacenes.¹⁶¹

145. En el Estado de Washington, también en Estados Unidos, la autoridad encargada de regular el alcohol, apoyada por un centro de investigación especializado en crimen y política de drogas, lleva el proceso de autorización al uso de la marihuana. Aquí también se regula estrictamente la emisión de autorizaciones para el comercio y la cantidad de consumo. En este sentido, por ejemplo, conducir con más de cinco nanogramos de concentración de marihuana en la sangre constituye un delito. Adicionalmente, las ventas que genera el producto tienen una alta carga impositiva y la recaudación está destinada a la educación, investigación y tratamiento de problemas relacionados con esta droga.¹⁶²
146. En Holanda existe un esquema diferente para la regulación del consumo de marihuana. Aunque en este país nunca se ha legalizado la producción, dicha actividad no se ha supervisado ni sancionado efectivamente. El comercio de la sustancia está restringido a los *coffee shops* —determinados centros de distribución— los cuales están sujetos a reglas muy específicas, como restricciones en las cantidades que pueden almacenar y vender a una persona.¹⁶³
147. En Uruguay, en cambio, el Estado asume plenamente el control y la regulación de la comercialización, producción y distribución de la marihuana.¹⁶⁴ Con todo, también se autoriza el cultivo reducido a un número mínimo de plantas en casas habitación, así como un número mayor en asociaciones que no excedan 45 miembros. También se expiden

¹⁶¹ Room, Robin, "Legalizing a market for cannabis for pleasure: Colorado, Washington, Uruguay and Beyond", *Addiction*, vol. 109, núm. 3, 2014, pp. 345-351.

¹⁶² Room, *op. cit.*, *loc. cit.*

¹⁶³ Reuter, Peter H., "Marijuana Legalization. What Can Be Learned from Other Countries", *Working paper. Drug Policy Research Center*, 2010.

¹⁶⁴ El artículo segundo de la Ley 19.172 sobre Marihuana y sus Derivados establece que "el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados, o cáñamo cuando correspondiere, a través de las instituciones a las cuales otorgue mandato legal".



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

autorizaciones para productores que a su vez venden la marihuana al gobierno.¹⁶⁵ En cuanto a su adquisición, una persona puede comprar hasta 40 gramos al mes y un instituto estatal fija el precio de la marihuana. Este instituto también lleva un registro confidencial de consumidores y un registro de productores. Al respecto, cabe aclarar que sólo los ciudadanos uruguayos o residentes permanentes pueden adquirir la marihuana.¹⁶⁶ Por lo demás, está prohibido el cultivo, producción y venta no autorizada ni registrada ante dicho instituto.¹⁶⁷

➤ **Medida alternativa a la prohibición absoluta del consumo**

148. En vista de lo anterior, resulta fundado el agravio del recurrente, pues esta Primera Sala no puede concordar con el Juez de Distrito en que no existe una medida igualmente idónea y menos restrictiva que la limitación establecida por el sistema de prohibiciones administrativas a la marihuana¹⁶⁸. La identificación del consumo de las sustancias en cuestión como un problema de salud pública no puede tener el sentido pretendido por el Juez de Distrito de implicar la inexistencia de una medida igualmente idónea y menos restrictiva.

149. En ese sentido, de la regulación anteriormente expuesta pueden desprenderse una serie de elementos que podrían constituir una medida alternativa a la prohibición absoluta del consumo lúdico y recreativo de marihuana tal como está configurada por el "sistema de prohibiciones administrativas" impugnado por el quejoso: (i) limitaciones a los lugares de consumo; (ii) prohibición de conducir vehículos o manejar aparatos o sustancias peligrosas bajo los efectos de la sustancia; (iii) prohibiciones a la

¹⁶⁵ Graham, Laura, "Legalizing Marijuana in the shadows of International Law: The Uruguay, Colorado, and Washington Models", *Wisconsin International Law Journal*, vol. 33, núm. 1, 2015, pp. 140-166.

¹⁶⁶ Graham, *op. cit.*

¹⁶⁷ Graham, *op. cit.*

¹⁶⁸ Juicio de amparo [REDACTED], foja 512 vuelta.

publicitación del producto; y (iv) restricciones a la edad de quienes la pueden consumir. Como puede observarse, se trata de medidas que vistas en su conjunto *no prohíben* el consumo de forma *absoluta* y, en contraste, sólo *limitan* la realización de las actividades relacionadas al autoconsumo de marihuana en supuestos muy acotados.

150. Ahora bien, es importante señalar que tanto la legalización del consumo de marihuana en otros países, como la permisión del consumo de tabaco y alcohol en México, han ido acompañadas de políticas *educativas* y de *salud*. En este sentido, se han implementado diversas campañas de información sobre los efectos adversos a la salud del consumo de dichas sustancias, así como programas sociales para atender los daños a la salud de las personas que han desarrollado una adicción.¹⁶⁹ Al respecto, puede decirse este tipo de políticas también formarían parte de una medida alternativa a la prohibición que ahora se analiza, la cual consistiría en términos generales en un régimen que *sólo limita el consumo* de marihuana en *determinadas circunstancias* y que paralelamente comprende la implementación de políticas públicas educativas y de salud.

➤ **Evaluación de la necesidad de la medida impugnada**

151. Una vez establecida la medida alternativa al “sistema de prohibiciones administrativas” configurado por los artículos impugnados, los cuales impiden al quejoso consumir marihuana con fines lúdicos y recreativos, debe examinarse si se trata de una medida *idónea* para alcanzar los fines perseguidos por la medida legislativa impugnada, lo que implica evaluar si es

¹⁶⁹ Al respecto, véase por ejemplo el *Programa Sectorial de Salud 2013-2018*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2013, cuyo objetivo principal es el mejoramiento y protección de la salud, a través de políticas públicas de prevención, protección y promoción de la actividad física, alimentación, *reducción del consumo de alcohol, tabaco, drogas ilícitas* y en general en todas aquellas situaciones que ponen en riesgo la integridad física o mental. Por lo que hace al tema de adicciones, las principales líneas de acción se encuentran en la estrategia 1.4, denominada “Impulsar acciones integrales para la prevención y control de las adicciones”, entre las cuales destacan el impulso de campañas informativas; el impulso de una red nacional para la atención y prevención de las adicciones; promover acciones para reducir la demanda, disponibilidad y acceso; promover modelos de justicia alternativa para personas con adicciones en conflicto con la ley; y promover acciones intersectoriales que fomenten una vida productiva en los adolescentes.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

causalmente adecuada para prevenir o combatir los daños asociados al consumo de marihuana. Como se señaló, éstos consisten en daños a la salud de la persona, desarrollo de dependencia a la sustancia, inducción al consumo de otras drogas más dañinas y contagio de su consumo, así como accidentes vehiculares cometidos bajo el influjo de la sustancia.

152. En primer lugar, hay que señalar que la medida alternativa antes identificada también es idónea para prevenir los daños a la salud y la dependencia que origina el consumo de marihuana. De hecho, puede decirse que resulta más eficaz una política que busca impedir *directamente* que ocurran esas afectaciones a la salud o atacar los factores sociales que causan el consumo de marihuana, que una medida que combate dicha problemática *indirectamente* a través de la prohibición de su consumo.¹⁷⁰ En este sentido, las campañas de información y las estrategias públicas que conciben a la dependencia como un problema de salud pública, por ejemplo, han probado ser medidas más efectivas que las políticas prohibicionistas. Como ya se explicó, la prohibición del consumo de marihuana no ha reducido el número de consumidores y, en consecuencia, tampoco ha disminuido los daños a la salud asociados al consumo.¹⁷¹

153. En relación con los efectos del consumo en terceras personas, ya sea a través de la inducción al uso de otras drogas más dañinas o el contagio de su consumo hacia otras personas, puede decirse que tanto las prohibiciones de que se publique el producto como las políticas educativas y de salud también son medidas idóneas para evitar que esas afectaciones se produzcan. Asimismo, las medidas que prohíben el consumo en espacios públicos que afecten a terceros también son idóneas para evitar daños a la sociedad. Finalmente, las regulaciones que prohíben conducir o manejar

¹⁷⁰ Hamilton, Olavo, *Princípio da proporcionalidade e guerra contra as drogas*, Mossoró, Hamilton & Hamilton, 2014, p. 158.

¹⁷¹ Al respecto, véase la nota al pie núm. 94.

instrumentos peligrosos cuando se está bajo el influjo de sustancias como la marihuana también son medidas eficaces para prevenir accidentes y proteger la salud de consumidores y terceros.¹⁷²

154. Ahora bien, el segundo aspecto del test de necesidad consiste en determinar si las medidas alternativas intervienen con menor intensidad el derecho al libre desarrollo de la personalidad que el “sistema de prohibiciones administrativas” configurado por los artículos impugnados. Al respecto, esta Primera Sala entiende que la medida alternativa examinada no sólo es idónea para evitar que se produzcan los daños o afectaciones a la salud y al orden público señalados anteriormente, sino que además es una medida *menos restrictiva* del libre desarrollo de la personalidad.
155. Así, mientras el sistema de prohibiciones administrativas configurado por los artículos impugnados prohíbe una “clase genérica de actos” (cualquier acto de consumo), la medida alternativa en realidad sólo prohíbe “una subclase más específica” de esos actos (actos de consumo en circunstancias muy específicas).¹⁷³ En este orden de ideas, puede decirse que la medida legislativa impugnada impide el consumo de marihuana en *cualquier circunstancia* cuando para alcanzar los fines que pretende podría limitarse a desalentar ciertas conductas o a establecer prohibiciones en *supuestos más específicos*, como manejar vehículos o instrumentos peligrosos bajo los

¹⁷² El artículo 171 del Código Penal Federal sanciona con prisión de hasta de seis meses, multa hasta de cien pesos y suspensión o pérdida del derecho a usar la licencia de manejo, a la persona que en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes cometa alguna infracción a los reglamentos de tránsito y circulación.

En esa misma línea, el artículo 93 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal prohíbe la conducción en estado de alteración psicofísica, o bajo sospecha de ingestión de alcohol, de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, incluyendo medicamentos con este efecto y de todos aquellos fármacos cuyo uso afecte la capacidad para conducir, haciendo énfasis en que la prescripción médica no exime de dicha prohibición. Las multas establecidas por el reglamento son más severas al aumentar hasta 100 a 200 veces el salario mínimo vigente, y el retiro de la circulación del vehículo.

Por su parte, el artículo 135 del Código Penal del Distrito Federal establece para el caso de lesiones, homicidio o daño en propiedad, ocasionados culposamente con motivo del tránsito de vehículos, en donde el agente conducía en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, no se aplican los beneficios de la configuración de los delitos culposos.

¹⁷³ En sentido similar, véase lo expuesto en Nino, *op. cit.*, p. 444.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

efectos de la sustancia, consumirla en lugares públicos o inducir a terceros a que también la consuman.

156. Dicho de otro modo, el "sistema de prohibiciones administrativas" configurado por los artículos impugnados es altamente suprainclusivo. Como se sabe, una norma es *suprainclusiva* cuando comprende o regula circunstancias que no encuentran fundamento en la justificación de dicha norma.¹⁷⁴ En este caso, como ya se explicó, la medida opta por realizar una *prohibición absoluta* del consumo de marihuana a pesar de que es posible prohibir únicamente en los supuestos que encuentran justificación en la protección de la salud y el orden público. En ese sentido, asiste la razón al recurrente al sostener que la limitación impuesta por las normas impugnadas establece una restricción desproporcionada respecto al fin constitucionalmente válido que persiguen.

157. De esta manera, puede decirse que las regulaciones que permiten el consumo de marihuana, acotando la edad para consumir y/o el lugar donde se puede realizar dicho consumo, son medidas que identifican de mejor manera los supuestos en los que efectivamente se producen daños a la salud y el orden público. Estas regulaciones sólo limitan el consumo en estos supuestos, por lo que suponen una menor intervención al libre desarrollo de la personalidad. En contraste, la medida impugnada es *más extensa* de lo necesario, pues prohíbe el consumo de marihuana en cualquier situación, alcanzando conductas o supuestos que no inciden en la consecución de los fines que persiguió el legislador, lo que se traduce en una intervención en el derecho en cuestión en un grado mayor. En consecuencia, puede decirse que las regulaciones alternativas resultan *más benignas* para el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

¹⁷⁴ Schauer, Frederick, *Playing by The Rules. A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life*, Nueva York, Oxford University Press, pp. 31-34.

158. De acuerdo con lo anterior, el "sistema de prohibiciones administrativas" configurado por los artículos impugnados *constituye una medida innecesaria*, toda vez que existen medidas alternativas igualmente idóneas para proteger la salud y el orden público que intervienen el derecho fundamental en un *grado menor*. Así, esta Primera Sala considera que la prohibición del consumo personal de marihuana con fines lúdicos es inconstitucional al no superar esta grada del test de proporcionalidad.

d. Proporcionalidad en sentido estricto de la medida

159. A lo largo del presente escrutinio constitucional se ha mostrado que, si bien la medida analizada es idónea para proteger la salud y el orden público, existen medidas alternativas igualmente idóneas que intervienen el derecho afectado en un menor grado. No obstante, en esta sección se realizará el examen de proporcionalidad en sentido estricto para evidenciar el desequilibrio entre la *intensa afectación* al derecho al libre desarrollo de la personalidad frente al *grado mínimo* en que se satisfacen los fines legislativos a través de la prohibición al consumo de marihuana.
160. El examen de proporcionalidad en *sentido estricto* consiste en realizar un balance o ponderación entre dos principios que compiten en un caso concreto.¹⁷⁵ Este análisis requiere comparar el *grado de intervención* en el derecho fundamental que supone la medida legislativa examinada frente al *grado de realización del fin* perseguido por ésta.¹⁷⁶ Dicho de otra manera, en esta fase del escrutinio se requiere realizar una *ponderación* entre los beneficios que cabe esperar de una limitación desde la perspectiva de los fines que se persiguen con los costos que necesariamente se producirán desde la perspectiva de los derechos fundamentales afectados.
161. De acuerdo con lo anterior, en el presente caso debe contrastarse la eficacia con la que el "sistema de prohibiciones administrativas" sobre el consumo de

¹⁷⁵ Así se ha entendido en países como Sudáfrica, Canadá, el Reino Unido, Irlanda, Alemania e Israel. Al respecto, véase Barak, *op. cit.*, p. 343.

¹⁷⁶ Bernal Pulido, *op. cit.*, p. 763



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

marihuana impugnado por el quejoso satisface la protección de la salud de las personas y el orden público con el nivel de afectación que esa misma medida comporta en el contenido *prima facie* del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Si bien en el apartado donde se examinó la idoneidad de la medida resultó suficiente que se mostrará que esta contribuye positivamente a la realización del fin que persigue, con independencia de su eficacia, también se expusieron argumentos sobre el grado en que el "sistema de prohibiciones administrativas" contribuye a la protección a la salud y orden público.

162. En efecto, en esa parte del estudio se mostró que la marihuana no supone un riesgo importante para la salud de las personas mayores de edad, toda vez que sus consecuencias permanentes son poco probables, mínimas o reversibles si su consumo no se inicia a edades tempranas. Al respecto, se señaló que el consumo de marihuana genera un índice de dependencia menor a otras sustancias, el cual se ubica alrededor del 9% de las personas que la consumen. En la misma línea, también se sostuvo que el consumo de marihuana tiene un nivel de incidencia muy bajo o incluso discutible en el consumo de otras drogas más riesgosas. Por otro lado, se destacó que existen resultados similares respecto de la propensión del usuario de marihuana a inducir a terceros al consumo. De la misma manera, se reconoció que conducir vehículos y manejar instrumentos y sustancias peligrosas bajo los efectos de la marihuana sí supone un riesgo para el orden público. Por último, se expuso que existe incertidumbre sobre la afirmación de que el consumo de marihuana incentiva la comisión de otros delitos.

163. En claro contraste con las escasas afectaciones en la salud y el orden público que protege el "sistema de prohibiciones administrativas" sobre el consumo de marihuana regulado en la Ley General de Salud, se ubica la intensa afectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad que supone dicha medida legislativa. Como se señaló al analizar los alcances de los artículos

impugnados, éstos imponen un obstáculo jurídico que impide al quejoso consumir marihuana y llevar a cabo lícitamente todas las acciones o actividades correlativas al autoconsumo (siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etc.).

164. En primer término, hay que recordar que la medida analizada constituye una intervención en el libre desarrollo de la personalidad porque conlleva una interferencia en la autonomía personal protegida por este derecho. Como se explicó anteriormente, la forma en la que un individuo desea recrearse pertenece a su esfera más íntima y privada, ya que sólo él puede decidir de qué manera quiere vivir su vida. En este orden de ideas, la medida analizada supone una afectación muy importante al derecho al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que impide al quejoso decidir qué actividades recreativas o lúdicas desea realizar.
165. En efecto, resulta evidente que una intervención en un derecho fundamental que prohíba totalmente la realización de una conducta amparada por ese derecho será más intensa que una intervención que se concrete a prohibir o a regular en ciertas condiciones el ejercicio de ese derecho. Desde este punto de vista, la afectación al libre desarrollo de la personalidad que comporta el "sistema de prohibiciones administrativas" regulado en la Ley General de Salud puede calificarse como *muy intensa*, pues consiste en una prohibición prácticamente absoluta para consumir la marihuana y realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de ésta,¹⁷⁷ de tal manera que suprime todas las posiciones jurídicas en las que podría ejercerse el derecho. En este sentido, la medida analizada no se circunscribe a regular la forma y lugar en

¹⁷⁷ Como se explicó al exponer el marco regulatorio sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos en la Ley General de Salud, la posibilidad de poseer hasta cinco gramos de marihuana, en términos de lo dispuesto en los artículos 478 y 479 de la Ley General de Salud, no constituye una autorización o un derecho al consumo personal, sino un excluyente de responsabilidad que únicamente cobra sentido en el marco del "sistema punitivo" previsto en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal, pero que resulta irrelevante en relación con el "sistema de prohibiciones administrativas" impugnado por el quejoso. Por lo demás, dichos artículos se limitan a *despenalizar* el consumo en una cantidad muy pequeña y no permiten de ningún modo la realización de las otras actividades correlativas al autoconsumo, como siembra, cultivo, cosecha, preparación, transporte, etc. En todo caso, los artículos 479, 368 y 234 serán objeto de un análisis diferenciado en esta sentencia.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

que pueden realizarse dichas actividades atendiendo a las finalidades constitucionalmente válidas que efectivamente tienen esos artículos, como podría haberlo hecho el legislador, sino que directamente prohíbe todas esas conductas.

166. Así, desde un análisis de proporcionalidad en estricto sentido, sólo estaría justificado que se limitara severamente el contenido *prima facie* del derecho al libre desarrollo de la personalidad si también fueran muy graves los daños asociados al consumo de marihuana que se intentan evitar con el "sistema de prohibiciones administrativas" sobre el consumo de marihuana. Por el contrario, si la medida legislativa sólo logra evitar o prevenir daños menores, entonces resulta *desproporcionado* que el legislador recurra a una prohibición absoluta que afecta severamente el libre desarrollo de la personalidad.¹⁷⁸

167. Pues bien, que se han analizado los beneficios y los costos de la medida, esta Primera Sala considera que el "sistema de prohibiciones administrativas", conformado por los artículos de la Ley General de Salud impugnado por el *quejoso*, ocasionan una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que se alcanza con dicha medida. A pesar de que esta Suprema Corte reconoce que el legislador puede limitar el ejercicio de actividades que supongan afectaciones a los derechos que protege nuestra Constitución, en el caso de la restricción al libre desarrollo de la personalidad que comporta la medida impugnada, esta Primera Sala no encuentra que tales afectaciones fueran de una gravedad tal que ameriten una prohibición absoluta a su consumo.

168. Adicionalmente, vale la pena señalar que a lo largo del presente escrutinio de constitucionalidad se mostró que existen medidas alternativas que intervienen en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la

¹⁷⁸ Uprimny, Guzmán y Parra, *op. cit.*, p. 107.

personalidad, consistentes en regímenes de permisiones sujetos a las condiciones que el legislador considere pertinentes. En este orden de ideas, estas regulaciones pueden ser acompañadas por políticas públicas educativas y de protección a la salud. Por lo demás, si bien estas alternativas representan costos económicos para el Estado y la sociedad en general, éstos son comparables a los que se originan a través del sistema de prohibición al consumo personal.¹⁷⁹

169. Así, a pesar de que el “sistema de prohibiciones administrativas” conformado por los artículos de la Ley General de Salud impugnado por el quejoso supera las dos primeras gradas del examen de proporcionalidad, al haberse establecido que se trata de una medida que busca proteger la salud y el orden público y resulta idónea para alcanzar dichos objetivos, esta Primera Sala, contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito, considera que se trata de una medida que no sólo es *innecesaria*, al existir medios alternativos igualmente idóneos que afectan en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino que además es *desproporcionada* en estricto sentido, toda vez que genera una protección mínima a la salud y orden público frente a la intensa intervención al derecho de las personas a decidir qué actividades lúdicas desean realizar.

170. Con todo, debe enfatizarse que esta Primera Sala no minimiza los daños que puede ocasionar la marihuana en el consumidor mayor de edad, sin embargo, entiende que la decisión sobre su uso sólo le corresponde tomarla a cada individuo. Así, este Alto Tribunal considera que pertenece al estricto ámbito de la autonomía individual protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad la posibilidad de decidir responsablemente si desea

¹⁷⁹ De acuerdo con algunos académicos, además de sus limitaciones en efectividad, el sistema de prohibición al consumo de marihuana y las actividades relacionados con él tienen altos costos para el Estado y la sociedad, tanto *directos* como los derivados de la erradicación de cultivos, la persecución de las redes de tráfico y la judicialización y encarcelamiento de las personas relacionadas con dichas redes; como *indirectos*, más difíciles de calcular, derivados entre otros factores como las pérdidas humanas de la guerra contra las drogas y de las cargas que deben soportar cientos de personas que pierden su libertad con ocasión de la misma. Al respecto, véase por todos Camacho, Adriana, Gaviria, Alejandro, y Rodríguez, Catherine, *op. cit.*; Uprimny, Guzmán y Parra, *op. cit.*, p. 106; TNI y WOLA, 2010.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

experimentar los efectos de esa sustancia a pesar de los daños que esta actividad puede generarle a una persona.

iv) Inconstitucionalidad de los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud

171. Con base en todo lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala arriba a la conclusión de que resultan inconstitucionales los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: Δ6a (10a), Δ6a (7), Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Dentro de estas actividades se incluye sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar marihuana, así como también adquirir legalmente la semilla, por constituir el primer eslabón de la cadena de autoconsumo pretendida por el quejoso y resultarle aplicable enteramente la *ratio decidendi* de la presente resolución.

172. En efecto, la adquisición de la semilla constituye el primer eslabón de la cadena de autoconsumo de cannabis con fines lúdicos o recreativos, cuya prohibición absoluta resulta desproporcionada al generar una protección mínima a la salud y orden público frente a la intensa intervención al derecho al libre desarrollo de la personalidad del quejoso. Lo anterior se robustece si se toma en cuenta que la adquisición de la semilla de cannabis *per se* no produce los daños a la salud que el sistema de prohibiciones administrativas tiene como finalidad evitar. Es decir, los daños no graves y reversibles a la

salud de los adultos que, según la evidencia científica, puede provocar la marihuana dependen del consumo de la sustancia, no de la posesión de la semilla de cannabis, por lo que la restricción respecto de la adquisición de la semilla no contribuye por sí misma a la consecución de los fines de la medida. Incluso, suponiendo sin conceder que la adquisición de la semilla llevara indefectiblemente al consumo, lo cierto es que, como se ha explicado a lo largo de esta resolución, esta Primera Sala no encuentra que las afectaciones asociadas al mismo sean de una gravedad tal que ameriten una prohibición *absoluta*.

173. Al respecto, debe destacarse que al momento de dictarse la sentencia en el presente juicio de amparo, ya existía normativamente la posibilidad de adquirir legalmente semillas de cannabis en el país. Si bien es cierto que los artículos 237 y 248, en relación con los artículos 234 y 245, todos de la entonces vigente Ley General de Salud, prohibían expresamente la expedición de autorizaciones para la realización de los actos de sembrar, cultivar, elaborar, preparar, acondicionar, adquirir, poseer, comerciar, transportar, prescribir médicamente, suministrar, emplear, usar, consumir y, en general, realizar cualquier acto relacionado con la marihuana, entre otros psicotrópicos, los artículos 238¹⁸⁰ y 249¹⁸¹ preveían un supuesto extraordinario para permitir la adquisición de esos estupefacientes y psicotrópicos para *finés de investigación científica*, siempre y cuando se presentara un protocolo de investigación, fuera autorizado por la Secretaría de Salud y se comunicara el resultado de las investigaciones a la misma dependencia.

¹⁸⁰ **Artículo 238.-** Solamente para fines de investigación científica, la Secretaría de Salud autorizará a los organismos o instituciones que hayan presentado protocolo de investigación autorizado por aquella dependencia, la adquisición de estupefacientes a que se refiere el artículo 237 de esta Ley. Dichos organismos e instituciones comunicarán a la Secretaría de Salud el resultado de las investigaciones efectuadas y como se utilizaron.

¹⁸¹ **Artículo 249.-** Solamente para fines de investigación científica, la Secretaría de Salud podrá autorizar la adquisición de las sustancias psicotrópicas a que se refiere la fracción I del artículo 245 de esta Ley, para ser entregadas bajo control a organismos o instituciones que hayan presentado protocolo de investigación autorizado por aquella Dependencia, los que a su vez comunicarán a la citada Secretaría el resultado de las investigaciones efectuadas y cómo se utilizaron.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

174. Ese catálogo de tenedores legales y vías de adquisición legal se amplió con la reforma del diecinueve de junio de dos mil diecisiete a los artículos 237, párrafo primero, 245, fracciones I, II y IV, y 290, párrafo primero, y la adición de los artículos 235 Bis y el segundo párrafo de la fracción V del artículo 245, todos ellos de la Ley General de Salud. El objetivo de la reforma fue permitir la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, suministro, empleo, uso y consumo de marihuana **para fines médicos y científicos**. Mediante la reforma al artículo 245 se trasladó al cannabis del grupo de sustancias psicotrópicas previstas en la fracción I del artículo que, de acuerdo con la ley, tienen valor terapéutico escaso o nulo y constituyen un problema especialmente grave para la salud pública al grupo previsto en la fracción II que, según la ley, tienen un valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud pública. De acuerdo con el artículo 250¹⁸² de la misma Ley, el grupo de sustancias psicotrópicas previsto en la fracción II se rige por el capítulo quinto del título décimo segundo de la ley, que regula los estupefacientes, y justamente el artículo 236 de ese capítulo faculta a la Secretaría de Salud expedir permisos especiales de adquisición o de traspaso de estupefacientes. Además, como se explicará posteriormente, con la reforma se autorizó legalmente a ciertos sujetos específicos a importar la semilla, quienes pueden obtenerla legalmente y podrían, eventualmente, con fundamento en un permiso especial de adquisición o de traspaso, proporcionarle la semilla al quejoso.

175. De conformidad con lo anterior, es indudable que en la actualidad existen vías legales para la adquisición de la semilla, ya sea vía tenedores especiales o permisos de adquisición o de traspaso, por lo que no existe una imposibilidad

¹⁸² Artículo 250.- Las sustancias psicotrópicas incluidas en la fracción II del artículo 245 de esta Ley, así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, quedarán sujetas en lo conducente, a las disposiciones del Capítulo V de este Título.

jurídica ni material para que una eventual concesión de amparo pudiese surtir plenos efectos y tener debida ejecución.

176. Ahora bien, **tal declaratoria de inconstitucionalidad no puede extenderse sin más a la actividad relativa a importar la semilla de cannabis, como lo pretende el quejoso**. En principio, debe destacarse que los artículos impugnados de la Ley General de Salud no prevén explícitamente una prohibición absoluta respecto de la actividad consistente en “importar”, como sí lo hacen respecto de “adquirir”. Además, no resulta evidente que las consideraciones esbozadas para declarar la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta de realizar las actividades correlativas al autoconsumo de marihuana para fines lúdicos o recreativos sean aplicables a la importación, entendida como la operación mediante la cual se somete a una mercancía extranjera a la regulación y fiscalización tributaria.
177. Hay que recordar que, de conformidad con el artículo 25 de la Constitución Federal, corresponde al Estado la rectoría en el desarrollo nacional del país, la que se concretiza mediante acciones que precisamente involucran decisiones sobre importación y exportación de materias primas y productos. Por ello, el análisis de la constitucionalidad de la prohibición de la importación requeriría un desarrollo diferenciado, mismo que esta Primera Sala no está en posibilidades de realizar en tanto el quejoso **no impugnó la totalidad de artículos que potencialmente le permitirían la importación de las semillas en los términos que solicitó**. En efecto, en el orden jurídico existen obstáculos legales para realizar dicha actividad cuya constitucionalidad no fue combatida, como son prohibiciones expresas en materia de comercio exterior, como es el caso de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación¹⁸³, y limitaciones específicas, como es el artículo 290¹⁸⁴ de la Ley General de Salud, que establece un catálogo taxativo

¹⁸³ Véase el Capítulo 12 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

¹⁸⁴ Artículo 290.- La Secretaría de Salud otorgará autorización para importar estupefacientes, sustancias psicotrópicas, productos o preparados que los contengan, incluyendo los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, indica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, exclusivamente a:
I. Las droguerías, para venderlos a farmacias o para las preparaciones oficinales que el propio



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de sujetos que pueden recibir autorización especial para importar sustancias psicotrópicas, productos o preparados de las mismas entre los que no se encuentran las personas físicas, a saber, 1) droguerías y 2) establecimientos destinados a producción de medicamentos autorizados por la propia Secretaría. Tales artículos no fueron impugnados en el juicio de amparo y, por tanto, su constitucionalidad no forma parte de la *litis*. Siendo así, es claro que aun estimando inconstitucional la restricción de importar la semilla de cannabis, lo cierto es que subsistiría su prohibición.

178. En conclusión, y a diferencia de lo resuelto en el amparo en revisión [REDACTED] en la presente ejecutoria se declara la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, incluyendo las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para adquirir la semilla de cannabis en los términos señalados, por ser una medida desproporcionada y constituir el presupuesto necesario para que la cadena de autoconsumo de marihuana con fines lúdicos y recreativos amparada por el libre desarrollo de la personalidad del quejoso pueda completarse.

179. La declaratoria de inconstitucionalidad anterior no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que respecto de estos actos no existió solicitud y el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, este derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares

establecimiento elabore, y

II. Los establecimientos destinados a producción de medicamentos autorizados por la propia Secretaría.

Su proceso quedará sujeto a lo establecido en los Capítulos V y VI de este Título, quedando facultada la propia Secretaría para otorgar autorización en los casos especiales en que los interesados justifiquen ante la misma la importación directa.

públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización.

180. Una vez precisado lo anterior, se estima necesario destacar que si bien, como se ha venido reiterando, en la presente resolución no se realiza pronunciamiento alguno respecto de la constitucionalidad de los tipos penales que criminalizan el consumo y otros actos relacionados con la marihuana, lo cierto es que al declararse por parte de este Alto Tribunal la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley General de Salud antes señaladas y, en consecuencia, permitírsele al recurrente recibir una autorización por parte de la Secretaría de Salud para realizar todas las actividades necesarias para el uso lúdico de la marihuana, al efectuar estas actividades el recurrente no incurrirá en los delitos contra la salud previstos tanto por la propia Ley General de Salud como por el Código Penal Federal.

181. Ello es así porque los delitos contenidos en los artículos 194, fracción I, 195, 195 Bis y 196 Ter del Código Penal Federal,¹⁸⁵ así como en los artículos 475,

¹⁸⁵ Código Penal Federal:

Artículo 194. Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa, al que:

I. Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud;

[...]

Artículo 195. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa, al que posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194, ambos de este código.

[...]

Artículo 195 bis. Cuando por las circunstancias del hecho la posesión de alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización a que se refiere la Ley General de Salud, no pueda considerarse destinada a realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194, se aplicará pena de cuatro a siete años seis meses de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.

[...]

Artículo 196 Ter. Se impondrán de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos días multa, así como decomiso de los instrumentos, objetos y productos del delito, al que desvíe o por cualquier medio contribuya a desviar precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas, al cultivo, extracción, producción, preparación o acondicionamiento de narcóticos en cualquier forma prohibida por la ley.

La misma pena de prisión y multa, así como la inhabilitación para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión públicos hasta por cinco años, se impondrá al servidor público que, en ejercicio de sus funciones, permita o autorice cualquiera de las conductas comprendidas en este artículo.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

476 y 477 de la Ley General de Salud,¹⁸⁶ relacionados con los actos que pretende realizar el recurrente, cuentan con un elemento típico de carácter normativo consistente en que la conducta debe realizarse “sin la autorización correspondiente”. En este sentido, si como se precisará a continuación uno de los efectos de la concesión del presente amparo consiste en la obligación de la Secretaría de Salud de expedir la autorización sanitaria que corresponda, es evidente que el quejoso no podrá cometer los delitos en cuestión.

182. No pasa desapercibido para esta Primera Sala que el Código Penal Federal contiene determinados tipos penales en materia de narcóticos que no cuentan con este elemento típico (en específico, los contenidos en los artículos 194, fracciones II, III y IV; 196 Ter; 197 y 198); sin embargo, se advierte que los mismos no van dirigidos a castigar las conductas que pretende realizar el quejoso en términos de lo expuesto en el presente recurso de revisión.¹⁸⁷

LA FEDERACIÓN
CASA DE LA JUSTICIA
SECRETARÍA DE LA SALUD

Son precursores químicos, productos químicos esenciales, y máquinas los definidos en la ley de la materia.

¹⁸⁶ Ley General de Salud:

Artículo 475. Se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quien sin autorización comercie o suministre, aún gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla.
[...]

Artículo 476. Se impondrá prisión de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta Ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comercializarlos o suministrarlos, aún gratuitamente.

Artículo 477. Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización a que se refiere esta Ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aún gratuitamente.

No se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea medicamentos que contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder.

¹⁸⁷ Código Penal Federal:

Artículo 194. Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa al que:
[...]

183. Finalmente, la situación expuesta en párrafos anteriores se actualiza de igual manera respecto de las sanciones administrativas previstas en los artículos 421 y 421 Bis de la Ley General de Salud, mismos que establecen la imposición de multas derivada de una violación a los artículos 237, 238, 247, 248, 375, 376, 235 y 289 del mismo ordenamiento, referidos a la autorización de la Secretaría de Salud para la realización de actos relacionados con estupefacientes y sustancias psicotrópicas,¹⁸⁸ pues dichas disposiciones

II. Introduzca o extraiga del país alguno de los narcóticos comprendidos en el artículo anterior, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito.

Si la introducción o extracción a que se refiere esta fracción no llegare a consumarse, pero de los actos realizados se desprenda claramente que esa era la finalidad del agente, la pena aplicable será de hasta las dos terceras partes de la prevista en el presente artículo.

III. Aporte recursos económicos o de cualquier especie, o colabore de cualquier manera al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos a que se refiere este capítulo; y

IV. Realice actos de publicidad o propaganda, para que se consuma cualesquiera de las sustancias comprendidas en el artículo anterior.

Las mismas penas previstas en este artículo y, además, privación del cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años, se impondrán al servidor público que, en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita, autorice o tolere cualesquiera de las conductas señaladas en este artículo.

Artículo 196 Ter. Se impondrán de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos días multa, así como decomiso de los instrumentos, objetos y productos del delito, al que desvie o por cualquier medio contribuya a desviar precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas, al cultivo, extracción, producción, preparación o acondicionamiento de narcóticos en cualquier forma prohibida por la ley.

[...]

Artículo 197. Al que, sin mediar prescripción de médico legalmente autorizado, administre a otra persona, sea por inyección, inhalación, ingestión o por cualquier otro medio, algún narcótico a que se refiere el artículo 193, se le impondrá de tres a nueve años de prisión y de sesenta a ciento ochenta días multa, cualquiera que fuera la cantidad administrada. Las penas se aumentarán hasta una mitad más si la víctima fuere menor de edad o incapaz comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente.

Al que indebidamente suministre gratis o prescriba a un tercero, mayor de edad, algún narcótico mencionado en el artículo 193, para su uso personal e inmediato, se le impondrá de dos a seis años de prisión y de cuarenta a ciento veinte días multa. Si quien lo adquiere es menor de edad o incapaz, las penas se aumentarán hasta una mitad.

Las mismas penas del párrafo anterior se impondrán al que induzca o auxilie a otro para que consuma cualesquiera de los narcóticos señalados en el artículo 193.

Artículo 198. Al que dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo, siembre, cultivo o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando en él concurren escasa instrucción y extrema necesidad económica, se le impondrá prisión de uno a seis años.

Igual pena se impondrá al que en un predio de su propiedad, tenencia o posesión, consienta la siembra, el cultivo o la cosecha de dichas plantas en circunstancias similares a la hipótesis anterior.

[...]

La siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal.

¹⁸⁸ Ley General de Salud:

Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

realizan un reenvío a los artículos que han sido declarados inconstitucionales.

Sin embargo, no podría realizarse la imposición de una sanción administrativa al quejoso a la luz de lo establecido en la presente sentencia.

184. En otro orden de ideas, esta Primera Sala también considera importante destacar que la conclusión expuesta en párrafos anteriores no contraviene lo dispuesto en instrumentos internacionales de la materia, en específico: (i) la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972; (ii) el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971; y (iii) la Convención de las Naciones Unidas en contra del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.

185. Como se señaló en apartados anteriores, pues si bien dichos tratados internacionales establecen obligaciones para los Estados miembros de criminalizar determinadas conductas relacionadas con narcóticos, las primeras dos convenciones mencionadas establecen la posibilidad de someter a las "personas que hagan uso indebido" de estupefacientes y sustancias psicotrópicas a "medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social", en lugar de sancionarlas penalmente.¹⁸⁹

232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta Ley.

Artículo 421 bis. Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 100, 122, 126, 146, 166 Bis 19, 166 Bis 20, 205, 235, 254, 264, 281, 289, 293, 298, 325, 327 y 333 de esta Ley.

¹⁸⁹ Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972.

Artículo 36. Disposiciones penales

1. a) [...]

b) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las personas que hagan uso indebido de estupefacientes hayan cometido esos delitos, las Partes podrán en vez de declararlas culpables o de sancionarlas penalmente, o además de declararlas culpables o de sancionarlas, someterlas a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 38.

Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971.

Artículo 22. Disposiciones penales

1. a) [...]

b) No obstante, cuando las personas que hagan uso indebido de sustancias psicotrópicas hayan cometido esos delitos, las Partes podrán, en vez de declararlas culpables o de sancionarlas

186. Adicionalmente, de la Convención de las Naciones Unidas de 1988 se deriva que los Estados miembros podrán no sancionar la posesión, adquisición o cultivo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas para el consumo personal, cuando sea contrario a "sus principios constitucionales y [a] los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico";¹⁹⁰ situación que se actualiza en el presente asunto, pues, como se ha señalado a lo largo de la presente sentencia, el autoconsumo de marihuana se encuentra protegido por el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, prerrogativa derivada de la Constitución.
187. En otro orden de ideas, resulta innecesario analizar el resto de los agravios del recurrente al haber sido concedida la protección constitucional al quejoso en los términos antes precisados, en tanto que a ningún fin práctico llevaría la realización del estudio correspondiente.

v) Constitucionalidad de los artículos 234, 368 y 479 de la Ley General de Salud

188. Esta Primera Sala observa que en el presente amparo en revisión subsiste el análisis de constitucionalidad sobre los artículos 234, 368 y 479 de la Ley General de Salud, mismo que no fue materia del amparo en revisión [REDACTED], por lo que se aborda su análisis de forma separada para efectos de método.
189. En primer término, debe señalarse que el artículo 234 de la Ley General de Salud, contiene un listado de compuestos considerados bajo la categoría de

penalmente, o además de sancionarias, someterlas a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 20.

¹⁹⁰ Convención de las Naciones Unidas en contra del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988:

Artículo 3. Delitos y sanciones

[...].

2. A reserva de sus principios constitucionales y a los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales conforme a su derecho interno cuando se cometan intencionalmente, la posesión la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

"estupefacentes" a efectos legales. En ese sentido, dicho artículo, en la porción normativa impugnada es del tenor siguiente:

Artículo 234.- Para los efectos de esta Ley, se consideran estupefacentes:
(...)
CANNABIS sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas.

190. Por otro lado, los artículos 368 y 479 de la Ley General de Salud son del tenor siguiente:

Artículo 368.- La autorización sanitaria es el acto administrativo mediante el cual la autoridad sanitaria competente permite a una persona pública o privada, la realización de actividades relacionadas con la salud humana, en los casos y con los requisitos y modalidades que determine esta Ley y demás disposiciones generales aplicables.

Las autorizaciones sanitarias tendrán el carácter de licencias, permisos, registros o tarjetas de control sanitario.

Artículo 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente:

Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato		
Narcótico	Dosis máxima de consumo personal e inmediato	
Opio	2 gr.	
Diacetilmorfina o Heroína	50 mg.	
Cannabis Sativa, Índica o Marihuana	5 gr.	
Cocaína	500 mg.	
Lisergida (LSD)	0.05 mg.	
MDA, Metilendioxi-anfetamina	Poivo, granulado o cristal	Tabletas o cápsulas
	40 mg.	Una unidad con peso no mayor a 200 mg.
MDMA, di-34-metilendioxi-n-dimetilfeniletilamina	40 mg.	Una unidad con peso no mayor a 200 mg.
Metanfetamina	40 mg.	Una unidad con peso no mayor a 200 mg.

191. Como puede apreciarse, el artículo 234 considera a la cannabis sativa como un estupefaciente para los efectos de la propia ley. El artículo 368 establece la naturaleza de acto administrativo de las autorizaciones sanitarias, sus requisitos y modalidades. Finalmente, el artículo 479 establece la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato.
192. **Artículo 234 de la Ley General de Salud.** Procede negar el amparo respecto al artículo 234 de la Ley General de Salud por dos razones. En primer lugar, este artículo sólo contiene una definición legal interna de la norma. Es decir, se limita a definir las sustancias que son consideradas estupefacientes con lo cual no genera al recurrente perjuicio alguno si ya se le concederá el amparo a efectos de que se le expida la autorización administrativa conducente, máxime que la norma contiene un listado extenso de estupefacientes y no sólo menciona al cannabis sativa, índica y americana o marihuana y sus semillas, sino a una abundante cantidad de sustancias.
193. En segundo lugar, debe recordarse que no se encuentran en estudio ante esta Primera Sala los tipos penales correspondientes. Es decir, no forma parte de la *litis* analizar la constitucionalidad de los delitos establecidos por el Código Penal Federal respecto de los estupefacientes en cuestión. Precisamente por ello, no puede concederse el amparo al quejoso respecto de este artículo porque forma parte, a su vez, del "sistema punitivo" concerniente a las sanciones penales de los estupefacientes. De tal suerte, diversos artículos del Código Penal Federal penalizan conductas relativas a narcóticos o estupefacientes, remitiendo para la definición de estupefacientes a la Ley General de Salud. Ejemplo de ello son los artículos 193, 194, fracciones II, III y IV; 196 Ter; 197 y 198 *inter alia*. Remover de la definición de estupefaciente al cannabis implicaría materialmente la eliminación respecto a ella de los tipos penales conducentes, cuestión que no es objeto de este amparo.
194. **Artículo 368 de la Ley General de Salud.** Por otro lado, también se impone negar el amparo respecto al artículo 368 de la Ley General de Salud. Dicho

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

artículo únicamente define a la autorización sanitaria como el acto administrativo mediante el cual se permite a una persona pública o privada, la realización de actividades relacionadas con la salud humana, en los casos y requisitos determinados por la ley. En este sentido, no genera perjuicio alguno al quejoso recurrente pues ni siquiera define requisitos o prohibiciones respecto al cannabis. En todo caso, le causa agravio el resto del "sistema de prohibiciones administrativas" respecto del cual ya se le ha concedido el amparo. Finalmente, no pasa desapercibido que precisamente el artículo 368 impugnado será parte del fundamento normativo bajo el cual la autoridad responsable deberá expedirle la autorización administrativa que se precisará en los efectos.

195. **Artículo 479 de la Ley General de Salud.** Finalmente, por lo que respecta al artículo 479, siguiendo el precedente del amparo en revisión [REDACTED], es importante señalar que si bien el artículo 478 de la Ley General de Salud,¹⁹¹ en relación con el artículo 479, señala que el Ministerio Público no ejercerá acción penal en contra de quien posea hasta cinco gramos de marihuana, esta Suprema Corte ha interpretado que dicha disposición contiene una *excluyente de responsabilidad*¹⁹² lo que significa únicamente que en esos casos no debe aplicarse la pena a quien haya cometido el delito en cuestión, pero no consagra de ninguna manera una autorización o un derecho al consumo personal en los términos en los que lo solicita el quejoso. En este

¹⁹¹ **Artículo 478.** El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta Ley. La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia.

¹⁹² Al respecto véase la tesis de rubro "DELITO CONTRA LA SALUD. EL ARTÍCULO 478 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, AL PREVER LA NO APLICACIÓN DE LA EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD RESPECTO DE LOS FARMACODEPENDIENTES POSEEDORES DE ALGÚN NARCÓTICO DENTRO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN, INCLUSO CUANDO SU CANTIDAD NO EXCEDA EL LÍMITE MÁXIMO LEGALMENTE ESTABLECIDO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD" [Novena Época; Registro 162389; Instancia Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Abril de 2011; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. LII/2011; Página: 307].

sentido, debe destacarse que el artículo 479 de la Ley General de Salud no forma parte del “sistema de prohibiciones administrativas”, sino del “sistema punitivo” previsto en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal en relación con el control de estupefacientes y psicotrópicos. Sobre dicho artículo, debe enfatizarse que el quejoso recurrente no ha esgrimido razones específicas para su inconstitucionalidad, sino que lo ha combatido de forma genérica en el encuadre de lo que llama “política prohibicionista”.

196. Esta Primera Sala considera que su alegato es inoperante. Resulta notorio que, en el marco de la autorización sanitaria petitionada por el quejoso, dicho artículo no le genera perjuicio pues no prohíbe la emisión de autorización sanitaria alguna respecto a las conductas pretendidas por el quejoso. Es decir, si, como se precisará a continuación, uno de los efectos de la concesión del presente amparo consiste en la obligación de la Secretaría de Salud de expedir la autorización a la que hace referencia el artículo 235, es evidente que el quejoso no podrá cometer los delitos en cuestión que a su vez remiten a la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato prevista en el artículo 479.
197. En ese sentido, ante la falta de perjuicio directo al recurrente, en tanto el artículo impugnado no obstaculiza la autorización pretendida que será objeto de este amparo, debe considerarse que dicho planteamiento de inconstitucionalidad resulta inoperante.

vi) Análisis de los agravios del recurso de revisión adhesivo

198. El recurso de revisión adhesivo interpuesto por el delegado de las autoridades señaladas como responsables, es decir, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud, tiene dos vertientes argumentativas. En primer término, aquéllas destinadas a demostrar la improcedencia del recurso de revisión (que ya fueron objeto de estudio y pronunciamiento por parte del Tribunal Colegiado) y, en segundo término, aquéllas destinadas a demostrar



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

la constitucionalidad del sistema normativo "prohibicionista", que serán objeto de análisis en esta sección.

199. Sustancialmente, en su **primer agravio adhesivo**, el recurrente adhesivo aduce que la política contenida en los artículos impugnados resulta constitucional en tanto tiene por objeto la protección de la salud. Refiere también que no pueden tutelarse los intereses individuales o particulares por encima de los intereses públicos de la comunidad.
200. En su **segundo agravio adhesivo**, sostiene que las restricciones impuestas en la Ley General de Salud sobre los derechos al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, disposición a la propia salud personal y la autodeterminación son constitucionales pues superan el estándar de la Suprema Corte establecido en la tesis 1a./J. 2/2012 (9a.)¹⁹³. Ello en tanto son admisibles al dirigirse a proteger el derecho a la salud de la sociedad en general, así como necesarias y proporcionales pues su restricción se compensa sobradamente por los efectos benéficos. Refiere en el propio segundo agravio que los agravios del recurrente son inoperantes pues el recurrente no es titular del derecho al libre desarrollo de la personalidad al ser incompatible con su naturaleza jurídica. Afirmar, además, que la norma no contiene una prohibición para el consumo del cannabis pues el artículo 479 de la Ley General de Salud permite el consumo personal hasta en una cantidad de 5 gramos. Sostiene que las normas no limitan en forma alguna la libertad del quejoso de proyectarse, vivir su vida y escoger su apariencia personal.
201. En su **tercer agravio adhesivo**, aduce que resulta infundado el agravio primero del recurrente principal en la parte que señala que se omitió valorar

¹⁹³ Emitida por la Primera Sala bajo el rubro "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Febrero de 2012, Tomo 1, p. 533.

la totalidad del caudal probatorio. Lo anterior porque advierte que la sentencia recurrida sí analizó dichos medios probatorios y los enumeró con una nota al pie de página en la que enunció los informes en los que se basó para sus argumentaciones.

202. Finalmente, en su **cuarto agravio adhesivo**, refiere que el agravio séptimo vertido por el recurrente principal es infundado pues la Ley Federal de Procedimiento Administrativo resulta constitucional al establecer un procedimiento administrativo que garantiza los derechos fundamentales de los gobernados de acuerdo a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.
203. Esta Primera Sala estima que los agravios manifestados por la autoridad responsable son **infundados**. Respecto del **primer agravio adhesivo**, el análisis de la restricción al libre desarrollo de la personalidad realizado en líneas anteriores ha mostrado que la constitucionalidad de la finalidad de la limitación no es el único elemento para valorar el ajuste de disposición con la Constitución Federal, sino su idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Dado que la restricción no ha superado la tercera y cuarta grada de este análisis, se reitera su inconstitucionalidad pese al fin constitucionalmente legítimo que defiende. Respecto a la imposibilidad de tutelarse los intereses individuales o particulares por encima de los intereses públicos de una comunidad, **dicho argumento es infundado**. Esto en tanto no es posible realizar en abstracto un pretendido análisis entre intereses sociales o de la comunidad e interés individual. Cuando una restricción a un derecho individual se encuentra justificada por la entidad de la incidencia social, ello puede ser constatado al evaluar su fin constitucionalmente imperioso, su idoneidad, su necesidad y su proporcionalidad en sentido estricto. En el presente asunto, dicho análisis, como ha reiterado esta Suprema Corte, arrojó que la restricción no resulta constitucional al no superar las gradas de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto del análisis correspondiente.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

204. Es infundado el agravio adhesivo segundo en la parte que sostiene que las restricciones a los derechos analizados son constitucionales a la luz del estándar de la Suprema Corte establecido en la tesis 1a./J. 2/2012 (9a.)¹⁹⁴. Ello en tanto, como ha sido establecido por esta Primera Sala en el análisis sustantivo de la sentencia, dichas restricciones a pesar de tener un fin constitucionalmente admisible (protección de la salud y el orden público) y resultar idóneas, no superan los últimos dos pasos del análisis de restricciones, a saber, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto de la medida. Lo anterior en tanto dichas restricciones ocasionan una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que se alcanza con dicha medida. A pesar de que esta Suprema Corte reconoce que el legislador puede limitar el ejercicio de actividades que supongan afectaciones a los derechos que protege nuestra Constitución, en el caso de la restricción al libre desarrollo de la personalidad que comporta la medida impugnada esta Primera Sala no encontró que tales afectaciones fueran de una gravedad tal que ameriten una prohibición absoluta a su consumo. Adicionalmente, debe tenerse presente que existen medidas alternativas igualmente idóneas para proteger la salud y el orden público que intervienen en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, consistentes en regímenes de permisos sujetos a las condiciones que el legislador considere pertinentes.

205. El agravio segundo adhesivo es infundado en la parte que sostiene que el recurrente no es titular del derecho al libre desarrollo de la personalidad al ser incompatible con su naturaleza jurídica. Debe recordarse que en este amparo en revisión 623/2017 la parte recurrente es [REDACTED] una persona

¹⁹⁴ Emitida por la Primera Sala bajo el rubro "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Febrero de 2012, Tomo 1, p. 533.

física. Como tal, evidentemente tiene la titularidad del derecho al libre desarrollo de la personalidad¹⁹⁵. Dado que el derecho al libre desarrollo de la personalidad tutela la autonomía personal en sus dimensiones externa e interna¹⁹⁶, el recurrente es titular de dicho derecho personalísimo¹⁹⁷.

206. Es infundado el **agravio adhesivo segundo** en la parte que sostiene que la norma no contiene una prohibición para el consumo del cannabis, pues el artículo 479 de la Ley General de Salud permite el consumo personal hasta en una cantidad de 5 gramos. Contrario a lo sostenido por la recurrente adhesiva, es importante señalar que si bien el artículo 478 de la Ley General de Salud,¹⁹⁸ en relación con el artículo 479, señala que el Ministerio Público no ejercerá acción penal en contra de quien posea hasta cinco gramos de marihuana, esta Suprema Corte ha interpretado que dicha disposición contiene una *excluyente de responsabilidad*,¹⁹⁹ lo que únicamente significa que en esos casos no debe aplicarse la pena a quien haya cometido el delito en cuestión, pero no consagra de ninguna manera una autorización o un derecho al consumo personal en los términos en los que lo solicita el quejoso, puesto que además de que únicamente se limitan a *despenalizar* el consumo

¹⁹⁵ Véase la tesis 1a. CCLX/2016 (10a.), de rubro "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. LA PROHIBICIÓN PARA EL AUTOCONSUMO DE MARIHUANA CONTENIDA EN LA LEY GENERAL DE SALUD INCIDE PRIMA FACIE EN EL CONTENIDO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, p. 897.

¹⁹⁶ Véase la tesis 1a. CCLXI/2016 (10a.), de rubro "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU DIMENSIÓN EXTERNA E INTERNA", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, p. 898.

¹⁹⁷ Véase la tesis plenaria P. LXVI/2009, de rubro "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, p. 7.

¹⁹⁸ **Artículo 478.** El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta Ley. La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia.

¹⁹⁹ Al respecto véase la tesis de rubro "DELITO CONTRA LA SALUD. EL ARTÍCULO 478 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, AL PREVER LA NO APLICACIÓN DE LA EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD RESPECTO DE LOS FARMACODEPENDIENTES POSEEDORES DE ALGÚN NARCÓTICO DENTRO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN, INCLUSO CUANDO SU CANTIDAD NO EXCEDA EL LÍMITE MÁXIMO LEGALMENTE ESTABLECIDO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD" [Novena Época; Registro 162389; Instancia Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Abril de 2011; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. LII/2011; Página: 307].



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

en una cantidad muy pequeña, dichos preceptos *no permiten* de ningún modo la realización de las otras actividades correlativas al autoconsumo, como siembra, cultivo, cosecha, preparación, transporte, etc. Finalmente, debe recordarse, que dicho artículo (el 479 de la Ley General de Salud) no ha sido declarado inconstitucional por formar parte de diverso sistema normativo en términos de esta ejecutoria.

207. Es infundado el **agravio segundo adhesivo** en la parte que refiere que las normas impugnadas no limitan en forma alguna la libertad del quejoso de proyectarse, vivir su vida y escoger su apariencia personal, en suma, que no inciden en su libre desarrollo de la personalidad. Lo anterior pues, como se expuso anteriormente, la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece indudablemente a la esfera de autonomía personal que debe estar protegida por la Constitución. Esa elección puede incluir, como ocurre en el presente caso, la ingesta o el consumo de sustancias que produzcan experiencias que en algún sentido "afecten" los pensamientos, las emociones y las sensaciones de la persona. En esta línea, se ha señalado que la decisión de fumar marihuana puede tener distintas finalidades, entre las que se incluyen "el alivio de la tensión, la intensificación de las percepciones o el deseo de nuevas experiencias personales y espirituales". Así, al tratarse de "experiencias mentales", éstas se encuentran entre las más personales e íntimas que alguien pueda experimentar, de tal manera que la decisión de un individuo mayor de edad de "afectar" su personalidad de esta manera con fines recreativos o lúdicos se encuentra tutelada *prima facie* por el derecho al libre desarrollo de ésta. Por tanto, contrario a lo argumentado por el recurrente adhesivo, las normas impugnadas sí inciden en el libre desarrollo de la personalidad al limitar la forma que tiene el quejoso recurrente de vivir su vida decidiendo si "afecta" o no su personalidad con fines recreativos o lúdicos.

208. Asimismo, se considera que resulta **inoperante el agravio adhesivo tercero**. Lo anterior toda vez que el recurrente adhesivo se limita a señalar que el Juez de Distrito identificó los elementos probatorios y los enumeró en una nota al pie de página. Sin embargo, tal argumentación no fortalece las consideraciones del acto reclamado ni desvirtúa el planteamiento del recurrente principal en torno a la vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad.²⁰⁰ Por lo tanto, no resulta eficaz para variar las conclusiones a las que este órgano jurisdiccional arriba.
209. Finalmente, resulta también **inoperante el agravio cuarto adhesivo** pues, como se aprecia de la foja 500 y 501 vuelta del juicio de amparo, se sobreseyó respecto de los preceptos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sobreseimiento que fue decretado firme por el Tribunal Colegiado que previno del asunto. En ese sentido, dado que el recurso de revisión no contiene agravios sobre la constitucionalidad de tales preceptos, es innecesario analizar los argumentos encaminados a su defensa.
210. En esas circunstancias, debe concluirse que los motivos de inconformidad manifestados por las autoridades recurrentes no consiguen variar lo decidido por esta Primera Sala en el presente recurso.

VI. DECISIÓN

211. A la luz de lo expuesto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que son inconstitucionales los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I²⁰¹, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, **en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la**

²⁰⁰ Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 78/2014 (10a.), de rubro "AMPARO ADHESIVO. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EN LOS CUALES EL ADHERENTE SE LIMITA A COMBATIR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEL QUEJOSO PRINCIPAL, SIN ESGRIMIR RAZONES QUE MEJOREN LAS CONSIDERACIONES DEL ACTO RECLAMADO", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Tomo I, diciembre de 2004, p. 51.

²⁰¹ En el entendido de que, evidentemente, el pronunciamiento de inconstitucionalidad se circunscribe a la formulación normativa de los artículos 237 y 245, fracción I, que tenían al momento del acto de aplicación de tales numerales y no con posterioridad a su reforma el diecinueve de junio de dos mil diecisiete.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos —adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar— del estupefaciente “cannabis” (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico “THC” (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: Δ6a (10a), Δ6a (7), Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros.

212. Por lo tanto, este Alto Tribunal procede a revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo para el efecto de que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Cofepris, autoridad señalada como responsable en el juicio de amparo, otorgue al quejoso la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, en el entendido de que corresponderá a la Cofepris establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución.

213. Ello puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por el quejoso se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho.

214. En consecuencia, esta Primera Sala

RESUELVE:

PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a [REDACTED], en contra de la expedición y promulgación de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, así como de su aplicación, consistente en el oficio número [REDACTED] expedido por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en los términos expuestos en la presente sentencia.

TERCERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a [REDACTED] en contra de la expedición y promulgación de los artículos 234, 268 y 479 de la Ley General de Salud.

CUARTO. El recurso de revisión adhesivo interpuesto por las autoridades responsables es infundado.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria; devuélvanse los autos relativos al lugar de origen; y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz (Ponente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y Presidenta Norma Lucía Piña Hernández, reservándose todos el derecho de formular voto concurrente; en contra del emitido por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reserva el derecho de formular voto particular.

425-435
492
494
381-411



AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Firman la Ministra Presidenta de la Primera Sala y el Ministro Ponente, con la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.

PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA

MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ

PONENTE

MINISTRO JOSÉ RAMÓN GOSÍO DÍAZ

SECRETARIA DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA

LHOyV/MARL/fjgl

ESTA HOJA CORRESPONDE AL AMPARO EN REVISIÓN 623/2017. QUEJOSO: [REDACTED]
[REDACTED] CONSTE.



VOTO PARTICULAR

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

QUE FORMULA EL MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO EN EL AMPARO EN REVISIÓN 623/2017.

I.- Nota Introductoria

En los amparos en revisión [REDACTED] y [REDACTED] quien suscribe el presente voto particular, se ha manifestado en contra de la concesión del amparo con respecto a los artículos 235, último párrafo,¹ 237², 245, fracción I,³ 247, último párrafo,⁴ y 248⁵ de la Ley General de Salud,⁶ por distintas razones que, en esencia, derivan de las siguientes premisas:⁷

¹ Artículo 235. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a:

- I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;
- II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General;
- IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia;
- V. (Se deroga);
- VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.

² Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes sustancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o manihana, papaver somniferum o adormidera, papaver bacteatum y erythroxylon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras sustancias señaladas en el Artículo 234 de esta Ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen dependencia.

³ Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las sustancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

- I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son:

Denominación Común Internacional	Otras Denominaciones Comunes o Vulgares	Denominación Química
...NO TIENE	THC	Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: Δ6a (10a), Δ6a (7), Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ9 (11) y sus variantes estereoquímicas...

(...) Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga...

⁴ Artículo 247. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con sustancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, queda sujeto a:

- I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;
- II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General;
- IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia;
- V. (Se deroga);
- VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos, y requerirán, al igual que las sustancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud.

⁵ Artículo 248. Queda prohibido todo acto de los mencionados en el Artículo 247 de esta Ley, con relación a las sustancias incluidas en la fracción I del Artículo 245.

⁶ En su texto vigente a la fecha de la presentación de la demanda de amparo.

⁷ Veridas en el voto particular emitido con relación al amparo en revisión [REDACTED].

- Existencia de un obstáculo previo que impide el estudio de fondo, relacionado con la imposibilidad jurídica y material para que, una eventual concesión del amparo, pudiese surtir plenos efectos y tener debida ejecución. Ello, derivado de que si bien se solicitó autorización para el **"consumo individual del estupefaciente Cannabis Sativa (índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tetrahydrocannabinol, los isómeros $\Delta 6a$ (10a), $\Delta 6a$ (7), $\Delta 7$, $\Delta 8$, $\Delta 9$ (11) y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente "marihuana" o "cannabis"))"**; en realidad, no se formuló solicitud expresa para la adquisición u obtención del estupefaciente o psicotrópico, ni en concreto, para la obtención de la semilla que sería indispensable para ejercer los derechos exigidos por la parte quejosa, relacionados con el autoconsumo de marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión y transporte de marihuana.
- Imposibilidad, en consecuencia, de que se realizare un estudio integral del régimen jurídico de prohibición absoluta que prevalece en México respecto de procesos afines al consumo lúdico de "marihuana" o "cannabis".

Explicué que las razones en cuestión, se justificaban en el hecho de que aun suponiéndose que pudiera autorizarse el consumo lúdico de la "cannabis", así como su siembra, cultivo y cosecha, seguiría privando una prohibición legal para el acceso a la planta y a su semilla, sobre todo, si el destino de ella es el uso recreativo.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

VERBA A-00

382

Esto es, la concesión del amparo para el autoconsumo lúdico de cannabis, o para su siembra, cultivo y cosecha, implicaría en el mundo material, la comisión de delitos, la continuación de sus efectos, o cuando menos, la tolerancia a la comisión de delitos relacionados con la obtención de la cannabis o de su semilla; y si bien, bajo la autorización concedida, el quejoso podría no estar cometiendo algunos delitos, lo cierto es que quienes suministraran narcótico, sí podrían ser penalmente responsables.

Pensar lo contrario, esto es, que quienes suministraren el narcótico, no estarían cometiendo un delito, implicaría que la concesión del amparo se estaría extendiendo a productores, traficantes, laboratorios o incluso autoridades involucradas en dicho suministro; lo que sin duda, estaría infringiendo el mandato contenido en el artículo 107, fracción IIª de la Carta Magna, que ordena que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

Mi punto de vista, en suma, ha sido el que no puedo advertir cómo podrá consumirse e incluso sembrarse, cosecharse o cultivarse algo que hoy legalmente no puede obtenerse, al menos no de manera lícita si el destino lo es el uso lúdico. Además del punto anterior que, en principio, referí como causal de improcedencia, pero que de igual manera considero impacta las consideraciones de fondo, expresé mi preocupación con relación a distintos compromisos asumidos internacionalmente por el Estado mexicano que estarían siendo incumplidos, y que no fueron señalados como acto reclamado.

⁸ "...II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda."

Tal es el caso de la **“Convención Única sobre Estupefacientes”** de 1961, actualizada en 1972, del **“Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas”** de 1971 y de la **“Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas”** de 1988, instrumentos internacionales que regulan distintos aspectos relacionados con el consumo, producción y demás procesos afines a los estupefacientes y psicotrópicos, y que precisan que la marihuana y el psicotrópico THC, sólo pueden usarse de manera excepcional para finés médicos y científicos.

Pues bien, dichas razones, que podrían parecer superadas en el amparo en revisión **623/2017**, en el que el tema relacionado a la adquisición del narcótico sí es materia de análisis, me parece que siguen teniendo impacto en la concesión del amparo, por lo que éste debería negarse. Sin embargo, atendiendo a la decisión de la mayoría de conceder la protección de la Justicia Federal, me permito de manera respetuosa mantener una postura de disenso, por las razones que se explican con mayor detalle en el presente voto particular.

II.- Antecedentes y Precisiones

2.1.- Alcances de la Solicitud de Autorización. El peticionario del juicio de garantías, en escrito presentado el trece de noviembre de dos mil quince solicitó autorización para ejercer los derechos correlativos al auto-consumo de marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana, excluyendo expresamente los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

FORMA A-03
38

2.2.- Negativa de la autorización. Dicha solicitud fue desechada, en oficio número [REDACTED] de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis, bajo el supuesto de que no se cumplió con la prevención formulada en el sentido de que el solicitante acreditare su interés jurídico o legítimo.

2.3.- Demanda de amparo. En la demanda de garantías, se solicitó la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, requiriéndose el amparo en contra de dichos preceptos y de su aplicación, en el oficio de negativa, con apariencia de desechamiento, de la solicitud de autorización sanitaria que formuló el quejoso para el consumo personal con fines lúdicos o recreativos de la Marihuana, así como para ejercer los derechos correlativos al auto-consumo de Marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana. Todos los efectos, consecuencias y efectos de los anteriores actos."

2.4.- Sentencia de amparo. En fecha veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dictó sentencia en la que sobreseyó y negó el amparo al quejoso.

El sobreseimiento se decretó con respecto al diverso oficio de fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, que era motivo del diverso juicio de amparo [REDACTED] y a la vez, objeto del recurso de revisión [REDACTED]

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

También se decretó sobreseimiento con respecto a los artículos 83 a 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al no desprenderse de autos que habían sido aplicados.

Finalmente, existió también sobreseimiento con respecto a la publicación de los artículos 234, 235, último párrafo; 237; 245, fracción I; 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, al no haberse ello impugnado por vicios propios. De igual forma, en el apartado de improcedencia, se desestimaron distintas causales hechas valer por las autoridades responsables.

En lo que se refiere al fondo, se estimaron *inoperantes* e *infundados* los conceptos de violación, sobre la base de que aun cuando el desechamiento reclamado conllevará una negativa implícita a la solicitud de autorización sanitaria, y aunque fuese no favorable a los intereses del quejoso, lo cierto es que el derecho de petición no implicaba que la respuesta debiese ser en un sentido determinado.

También se examinó previo a ello el conjunto de argumentos relacionados con la falta de fundamentación y motivación del acto, así como con la garantía de igualdad. Pero lo relevante, es que el juzgador consideró que el sistema normativo previsto por los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción 1, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, persigue una finalidad constitucionalmente válida, resulta idóneo, necesario y proporcional.

Por su parte, se estimaron inoperantes los argumentos planteados con relación al hecho de que la autoridad responsable previno al quejoso fuera del plazo previsto en la ley, pues ello tenía relación con el oficio de doce de febrero de dos mil dieciséis sobre el cual se había determinado sobreseer en el juicio.



2.5.- Interposición del Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia dictada por el Juez de Distrito, el quejoso interpuso recurso de revisión, y el Presidente de la República amparo adhesivo.

Con respecto a la revisión adhesiva, se examinaron los argumentos relacionados con la improcedencia y finalmente, se reservó a esta Suprema Corte competencia para resolver sobre la constitucionalidad de los preceptos impugnados.

2.6.- Aspectos relevantes del fallo aprobado por la mayoría.

En la sentencia aprobada por la mayoría, que resuelve conceder el amparo, se hicieron señalamientos importantes que reiteraron argumentos básicos desarrollados en el amparo en revisión [REDACTED] sin embargo, también se incluyeron consideraciones adicionales, de la que destaca aquella en la que se indica que corresponderá a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios determinar en la autorización que otorgue al quejoso, "los **lineamientos** y **modalidades** de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho" reconocido en la sentencia, así como "constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución".

Lo anterior, con la precisión de que ello puede lograrse, por ejemplo, "a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por el quejoso se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho."

III.- Consideraciones del Disenso

Reiterando en lo aplicable lo externado en el voto particular formulado en el amparo en revisión [REDACTED] me parece importante explicar el por qué, aún y cuando en el caso, se solicita la autorización para la adquisición de la semilla de la "cannabis", estimo que siguen prevaleciendo las razones que sustentan mi disenso con la concesión del amparo solicitado:

3.1.- INOPERANCIA DE LOS AGRAVIOS.

Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida.⁹ En el caso, me resulta evidente que el Juez de Distrito, explicó claramente en su sentencia [Foja 57], que una de las razones en las que descansaba la negativa del amparo, lo era la referente a que: ***"el presupuesto o parte inicial de la cadena de autoconsumo que es la adquisición de la marihuana, no tiene en la actualidad una vía lícita."***

Incluso, dicho juzgador externó, también a foja 57 de su sentencia, que para poder tener los beneficios de la autorización respectiva –solicitada por el quejoso–, ***"sería necesaria la comisión de diversos delitos previstos en normas punitivas de la Ley***

⁹ Época: Décima Época. Registro: 159947. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 19/2012 (9a.). Página: 731. AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones advueltas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo. Tesis de jurisprudencia 19/2012 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiséis de septiembre de dos mil doce.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

FORMA 2-03
389

General de Salud y del Código Penal Federal, que no formaron parte de la impugnación del quejoso."

Sin embargo, en su escrito de agravios que da lugar al presente recurso, el recurrente no combate de manera frontal las dos consideraciones mencionadas, ni otras que sustentaron el fallo impugnado.

De hecho, incluso a foja 81 del escrito de revisión, se transcriben por el recurrente las consideraciones en cuestión; sin embargo, sólo se combaten las mismas bajo los rubros de "a.- **Supuesta importancia del objetivo pretendido**" [persecución de la salud por el Estado]; "b.- **Supuesta imposibilidad para obtener la planta ilícitamente**", y "c.- **Supuestos daños de terceros**". Concretamente, en el apartado de imposibilidad para obtener la planta, se alega por el recurrente que en la solicitud a la "COFEPRIS" expresamente se solicitó autorización para la importación y adquisición de la semilla de cannabis, pero no se desarrollan argumentos lógico-jurídicos tendentes a combatir la consideración fundamental del fallo impugnado, consistente en que no existe una vía ilícita para la adquisición de la marihuana, y en que para que pudiera tener efectos la autorización solicitada, sería necesaria la comisión de diversos delitos.

Lo anterior, me resulta suficiente para no compartir el fallo aprobado por mis compañeros integrantes de la Sala, pues en estricto apego a la técnica de amparo, lo correcto habría sido el desechamiento del recurso, máxime que ni de la causa de pedir del medio de impugnación interpuesto, puede desprenderse la intención del recurrente de combatir las consideraciones a que me refiero, y

siendo un asunto de la materia administrativa en la que aplica el principio de estricto derecho, no puede aplicar en el caso la suplencia de la queja deficiente; lo que, en cierta forma, ocurre cuando en la sentencia se aborda el tema referente a la adquisición de la semilla.

3.2.- DELITOS QUE ESTARÍA COMETIENDO EL QUEJOSO, AÚN DE CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN SOLICITADA.

La sentencia aprobada por la mayoría dispone que atendiendo a la inconstitucionalidad que se resuelve de los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud, el quejoso (recurrente) no estaría incurriendo en los delitos contra la salud previstos tanto en la propia Ley General de Salud, como por el propio Código Penal Federal. Ello, bajo la consideración de que los delitos contenidos en los artículos 194, fracción I, 195, 195 Bis y 196 Ter del Código Penal Federal,¹⁰ así como en los artículos 475, 476 y 477 de la Ley General de Salud,¹¹ relacionados con los actos que pretende realizar el recurrente, cuentan con un elemento típico de carácter normativo

¹⁰ Código Penal Federal:

Artículo 194. Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa al que:
I. Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud; [...]

Artículo 195. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa, al que posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194, ambos de este código. [...]

Artículo 195 bis. Cuando por las circunstancias del hecho la posesión de alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización a que se refiere la Ley General de Salud, no pueda considerarse destinada a realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194, se aplicará pena de cuatro a siete años seis meses de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa. [...]

Artículo 196 Ter. Se impondrán de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos días multa, así como decomiso de los instrumentos, objetos y productos del delito, al que desvíe o por cualquier medio contribuya a desviar precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas, al cultivo, extracción, producción, preparación o acondicionamiento de narcóticos en cualquier forma prohibida por la ley.

La misma pena de prisión y multa, así como la inhabilitación para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión públicos hasta por cinco años, se impondrá al servidor público que, en ejercicio de sus funciones, permita o autorice cualquiera de las conductas comprendidas en este artículo.

Son precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas los definidos en la ley de la materia.

¹¹ Ley General de Salud:

Artículo 475. Se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quien sin autorización comercie o suministre, aun gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla. [...]

Artículo 476. Se impondrá de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta Ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente.

Artículo 477. Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización a que se refiere esta Ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente.

No se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea medicamentos que contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder.



consistente en que la conducta debe realizarse ***"sin la autorización correspondiente"***, por lo que si la concesión del amparo consiste en la obligación de la Secretaría de Salud de expedir la autorización sanitaria que corresponda, sería evidente que el quejoso no podría cometer los delitos en cuestión.

Si bien la consideración en cuestión parece razonable, mi respetuosa opinión, descansa en que la misma aplicaría, única y exclusivamente a los tipos penales que, en efecto, actualizan el ilícito penal cuando se carece de la autorización respectiva; esto es, en efecto, a los delitos previstos en los artículos 194, fracción I, 195 y 195 Bis del Código Penal Federal, así como en los artículos 475, 476 y 477 de la Ley General de Salud.

No obstante, como reconoce la sentencia, existen otros ilícitos en materia de narcóticos, que no cuentan como elemento típico con aquel referido a la "falta de autorización", siendo éstos, los previstos en los artículos 194, fracciones II, III y IV; 196 Ter; 197 y 198 del Código Penal Federal. Aquí, la sentencia indica que, en cualquier caso, los mismos no van dirigidos a castigar las conductas que pretende realizar el quejoso en términos de lo expuesto en el recurso de revisión.

Es esta última consideración la que destacadamente no puedo compartir; y es que, por ejemplo, basta analizar cuidadosamente el artículo 198 del Código Penal Federal, para concluir que a pesar de que el quejoso pudiese contar con alguna autorización para consumir marihuana, no estaría exento de cometer el delito de siembra, cultivo o cosecha de marihuana.

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

El precepto referido, en su texto vigente cuando se presentó la demanda de amparo, disponía lo siguiente:

"ARTICULO 198.- Al que ~~siembre, cultive o coseche~~ siembre, cultive o coseche plantas de manhuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando en él concurren escasa instrucción y extrema necesidad económica, se le impondrá prisión de uno a seis años.

Igual pena se impondrá ~~siembre, cultive o coseche~~ la siembra, el cultivo o la cosecha de dichas plantas en circunstancias similares a la hipótesis anterior.

Si en las conductas descritas en los dos párrafos anteriores ~~se concurren las circunstancias que se precisan en el artículo 194~~, la pena será de hasta las dos terceras partes de la prevista en el artículo 194, siempre y cuando la siembra, cultivo o cosecha se hagan con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en las fracciones I y II de dicho artículo.

Si el delito fuere cometido por servidor público de alguna corporación policial, se le impondrá, además la destitución del empleo, cargo o comisión públicos y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar otro, y si el delito lo cometiere un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, se le impondrá, además de la pena de prisión señalada, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión públicos."

El precepto transcrito, ya ha sido objeto de análisis por el Pleno de este Alto Tribunal, concluyéndose que el tercer párrafo del mismo, establece dos tipos penales que se consideran complementados y cualificados; complementados, porque remiten a los elementos del tipo fundamental contenido en el primer párrafo del artículo 198 del ordenamiento citado, siempre y cuando no se presenten las circunstancias que en él se precisan, es decir, **que el sujeto no se dedique como actividad principal a las labores propias del campo, y que no concurren la escasa instrucción y la extrema necesidad económica**; y cualificados, porque los dos fijan una pena mayor a la del tipo fundamental, pues prevén circunstancias que agravan el delito.

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

Sujeto punitivo	Penal
Primer párrafo del art. 198: Quien se dedique a las labores propias del campo, que siembre, cultive o coseche plantas de marihuana, por propia cuenta o con financiamiento de terceros, siempre y cuando en él concurren escasa instrucción y extrema necesidad económica.	1 a 6 años de prisión.

Sujeto punitivo	Penal
Segundo párrafo del art. 198: Quien en un predio de su propiedad, tenencia o posesión, consienta la siembra, el cultivo o la cosecha de plantas de marihuana, en circunstancias similares a las del primer párrafo, esto es, que se trate de un sujeto que se dedique como actividad principal a las labores propias del campo, y siempre y cuando en él concurren escasa instrucción y extrema necesidad económica.	1 a 6 años de prisión.

Sujeto punitivo	Penal
Tercer párrafo del art. 198. Supuesto A. Quien siembre, cultive o coseche marihuana, con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en las fracciones I y II del art. 194 ¹³ ; esto es, con la finalidad de producir, transportar, traficar, comerciar, suministrar aun gratuitamente o prescribir marihuana; o de introducir o extraer del país marihuana.	Hasta dos terceras partes de la pena prevista en el art. 194 [10 a 25 años y de 100 a 500 días multa].

Sujeto punitivo	Penal
Tercer párrafo del art. 198. Supuesto B. Quien comercie, suministre o prescriba marihuana, sin importar la finalidad.	2 a 8 años de prisión.

¹³ "ARTÍCULO 194.- Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa al que: I.- Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud. Para los efectos de esta fracción, por producir se entiende: manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico, y por comerciar: vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico. Por suministrar se entiende la transmisión material de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, de la tenencia de narcóticos.

El comercio y suministro de narcóticos podrán ser investigados, perseguidos y, en su caso sancionados por las autoridades del fuero común en los términos de la Ley General de Salud, cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento;

II.- Introduzca o extraiga del país alguno de los narcóticos comprendidos en el artículo anterior, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito.

Si la introducción o extracción a que se refiere esta fracción no llegare a consumarse, pero de los actos realizados se desprenda claramente que esa era la finalidad del agente, la pena aplicable será de hasta las dos terceras partes de la prevista en el presente artículo";

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULARPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Como se observa, aún si una persona contare con una autorización administrativa para consumir marihuana, e inclusive, para sembrarla, cultivarla o cosecharla, lo cierto es que estaría cometiendo el delito previsto en el artículo 198 del Código Penal Federal, ya que dicha autorización no destruiría la descripción del tipo penal.

Es posible que el titular de una autorización administrativa derivada de la concesión de un amparo como el que nos ocupa, llegue a pretender que la misma se considere como base para solicitar una excluyente del delito, en términos del artículo 191 del Código Penal Federal, pero aun así, ello estaría sujeto a valoración y decisión judicial; lo que, en principio, no evitaría la detención del sujeto que siembre, cultive o coseche marihuana, aún si ello está destinado al autoconsumo, pues el delito está claramente descrito para

ARTÍCULO 15.- El delito se excluye cuando:

I.- El hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente;

II.- Se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción típica del delito de que se trate;

III.- Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre que se llenen los siguientes requisitos:

a) Que el bien jurídico sea disponible;

b) Que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del mismo; y

c) Que el consentimiento sea expreso o tácito y sin que medie algún vicio; o bien, que el hecho se realice en circunstancias tales que permitan fundadamente presumir que, de haberse consultado al titular, éste hubiese otorgado el mismo;

IV.- Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agresor o de la persona a quien se defiende.

Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, el de su familia, o sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender el sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encienda, en alguno de aquellos lugares, en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión;

V.- Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo;

VI.- La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este último no se realice con el sólo propósito de perjudicar a otro;

VII.- Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente hubiere provocado su trastorno mental dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible.

Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior sólo se encuentre considerablemente disminuida, se estará a lo dispuesto en el artículo 69 bis de este Código;

VIII.- Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible:

A) Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal; o

B) Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que está justificada su conducta.

Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, se estará a lo dispuesto por el artículo 65 de este Código;

IX.- Ajenas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho; o

X.- El resultado típico se produce por caso fortuito.

cualquier persona que, independientemente de su condición, siembre, cultive o coseche marihuana.

Tal cuestión, es aún más contundente con las recientes reformas al Código Penal Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, ya que, en las mismas, se adicionó al artículo 198 el siguiente último párrafo:

"La siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana ~~será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal.~~"

La reciente adición al Código Penal Federal, establece con toda claridad que la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana, no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal; cuestión que tiene dos implicaciones:

1ª.- El cultivo para fines ajenos a los médicos o científicos, esto es, para fines recreativos, sí sería punible; y

2ª.- Las autorizaciones que otorgue el Ejecutivo Federal, sólo podrían otorgarse para fines médicos y científicos, no para otra finalidad.

Si bien la reforma citada, es posterior a la interposición de la demanda de amparo que es antecedente de este recurso, lo cierto es que entendiendo que la siembra, cultivo o cosecha de marihuana que pretende realizar el quejoso, se llevaría a cabo, en teoría, con posterioridad a la concesión del amparo, surgiría entonces una grave contradicción; ya que en estricto sentido, el quejoso contaría con una



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-63 289
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

autorización administrativa para realizar determinadas conductas, pero al menos algunas de ellas, seguirían tipificadas como delito y no tendrían la cobertura de protección otorgada por el amparo, de ahí que **dicha autorización no podría surtir plenos efectos.**

Esto es, al no existir declaración de inconstitucionalidad del artículo 198 del Código Penal Federal, lo cierto es que las autoridades responsables de su persecución, estarían obligadas a investigar y detener al quejoso, de realizar éste la siembra, cultivo o cosecha de marihuana.

Esta reflexión me parece relevante, pues no puedo compartir lo que el proyecto refiere en torno a que el quejoso, con la autorización administrativa que se llegue a otorgar, dejaría de cometer la totalidad de los delitos que con relación a la marihuana prevén tanto la Ley General de Salud, como el Código Penal Federal. Ello, máxime que el propio proyecto reconoce que el quejoso "pretende realizar por sí mismo toda la cadena de actos necesarios para lograr el autoconsumo de marihuana— la **siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento y consumo final—limitando el papel de terceros a la entrega de la semilla de cannabis**, ya sea una autoridad o un tenedor legal."

De ahí que, en principio, aun suponiendo que el quejoso pudiera obtener lícitamente la semilla, lo que no me parece posible, de cualquier forma, con la siembra, cultivo y cosecha de marihuana estaría cometiendo el delito previsto en el artículo 198 del Código Penal Federal, dispositivo que tiene operación independientemente de que se cuente o no con la autorización administrativa para realizar dichas actividades, máxime que el propio precepto, sólo excluye de

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

punibilidad la siembra, cultivo o cosecha de marihuana que se realice para fines médicos y científicos, en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto -esto es, los fines médicos y científicos-, emita el Ejecutivo Federal.

Luego entonces, me pregunto, cómo puede otorgarse una autorización para sembrar, cultivar y cosechar marihuana para el autoconsumo recreativo, si la propia legislación penal sanciona dicha actividad y sólo excluye de punibilidad el hecho de que dichas actividades se realicen para fines médicos y científicos. E insisto, cómo puede ocurrir ello en un amparo en el que el artículo 198 del Código Penal no fue acto reclamado ni materia de escrutinio judicial.

Ello, me impide también compartir los efectos que se otorgan en la sentencia, en torno a que la COFEPRIS estaría obligada a "garantizar que la adquisición de la semilla por el quejoso se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho."

Tal disenso se explica en los siguientes apartados, que sustentan mi opinión en el sentido de que a pesar de la declaración de inconstitucionalidad de distintos artículos que implican la prohibición administrativa para la realización de actos relacionados con el autoconsumo lúdico de marihuana, de cualquier forma seguirán vigentes distintos preceptos, del orden penal y administrativo, que impedirían el acceso lícito a la semilla de marihuana, si dicha adquisición tiene como finalidad el consumo lúdico y no los fines médicos o científicos que autoriza la Ley.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

FORMA A-02

3.3.- DELITOS QUE ESTARÍAN
COMETIENDO TERCEROS QUE
SUMINISTRARAN AL QUEJOSO EL

NARCÓTICO.

Si la pretensión del quejoso es sembrar, cultivar o cosechar plantas de marihuana, es indiscutible que requiere de un insumo indispensable para ello; esto es, la semilla o una planta de marihuana de la que la misma pudiera obtenerse.

De igual forma, si lo que se desea es consumir marihuana, sería indispensable acceder a la planta o a un producto que la contenga, como lo podría ser un cigarro u otro producto que permita que ésta se fume o inhale. En caso de que se pretenda consumir marihuana por la vía oral, se requeriría de la resina de la marihuana o del pastel, caramelo o alimento que la contenga.

Ante ello, es necesario considerar los siguientes supuestos:

(a) Si el quejoso ya era consumidor de marihuana al momento de presentar la demanda, y ya contaba y aún cuenta con la misma; luego, entonces existiría un delito ya cometido, y el amparo estaría básicamente sirviendo para tolerar y prácticamente encubrir un ilícito ya ejecutado.

(b) Si el quejoso pretende con la concesión del amparo, efectivamente empezar a consumir marihuana, luego entonces requeriría que alguna persona o institución le entregue el insumo necesario para desplegar dicho consumo.

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

Sin embargo, lo cierto es que cuando menos al momento de la presentación de la demanda de amparo y en términos del artículo 249 de la Ley General de Salud, el psicotrópico THC sólo podía tener usos en la investigación científica.

Aún tras las reformas a la Ley General de Salud de dos mil diecisiete, la "*cannabis*" o "*marihuana*" y la propia sustancia psicotrópica THC sólo pueden tener finés médicos y científicos; ya que el último párrafo de su artículo 235 sigue vigente en lo general y debe ser observado por cualquier persona distinta del quejoso.

Por tanto, aún y cuando la concesión del amparo; en el caso, sí ampara al quejoso en contra de la aplicación del último párrafo del artículo 235 de la Ley General de Salud, dicha protección no podría tener efectos con respecto a terceras personas, por lo que cualquier tercero que entregue a cualquier individuo la marihuana o su semilla para fines ajenos a los médicos o a la investigación científica, estaría actuando fuera de la Ley, incluso, si ello se entrega al quejoso.

Esto es, cualquier persona ajena al quejoso que no cuente con la protección de la Justicia Federal en contra de la aplicación del artículo 235 de la Ley General de Salud y de otros preceptos de la misma, sólo podría tener en su poder la planta de la "*cannabis*" o "*marihuana*" o el psicotrópico THC, exclusivamente para fines médicos y científicos; y siempre y cuando se contare con autorización expresa para ello por parte de la Secretaría de Salud, quedando además dicho narcótico sujeto a control sanitario en términos de lo señalado por la Ley General de Salud.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-99 391
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

Ello tiene en el caso importantes implicaciones, puesto que, por un lado, si alguna persona distinta a un laboratorio o establecimiento autorizado, entrega o suministra al quejoso, marihuana para fines recreativos o incluso para cualquier otro fin, estaría sin duda cometiendo uno o más de los delitos previstos en la Ley General de Salud o en el Código Penal Federal; pues no habría vía lícita para que dichos terceros pudiesen tener acceso a la marihuana.

Por otro lado, si es un laboratorio o centro autorizado el que entrega al quejoso el narcótico, el mismo también estaría cometiendo un ilícito, pues estaría desviando la marihuana que tiene en su poder para fines exclusivamente médicos o científicos, a fines distintos relacionados con el consumo lúdico de la misma.

Esto es, en el caso, el quejoso al ser amparado, podría llegar a tener una autorización por parte de la Secretaría de Salud para adquirir la semilla de marihuana, así como para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar dicho estupefaciente o el psicotrópico THC; sin embargo, dicha autorización de forma alguna implicaría el efecto de que los terceros estuvieran también autorizados para vender o incluso entregar gratuitamente dicho estupefaciente, su semilla o la sustancia psicotrópica al quejoso.

Pensar lo contrario, como ya expliqué, implicaría que el amparo otorgado a un quejoso, tendría el efecto que no permite el artículo 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de extender la protección de la Justicia Federal a personas distintas del propio quejoso.

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

A mayor abundamiento, si lo que se pretende es que no sólo no se sancione al quejoso, sino también, que no se sancione a los productores, traficantes u otros posibles proveedores de marihuana que hoy sólo pueden contar con el insumo de manera ilícita; o incluso, que no se sancione a laboratorios, centros autorizados o autoridades que desvíen de los fines médicos o de investigación al estupefaciente o psicotrópico descritos, para que se entreguen al quejoso gratuita o lucrativamente, sin duda, se estaría ocupando el amparo de personas distintas del quejoso, con una franca vulneración a lo previsto en el artículo 107, fracción II de la Carta Magna.

La sentencia aprobada, al referirse a los tipos penales contemplados en los artículos 194, fracciones II, III y IV; 196 Ter; 197 y 198 del Código Penal Federal, indica que los mismos, no van dirigidos a castigar las conductas que pretende realizar el quejoso; sin embargo, dicha consideración es imperfecta.

Dicha imperfección, en mi opinión, se genera en los efectos erga omnes que se proponen en la sentencia de amparo, pues en cierta forma, se pretende que con la sola protección que se conceda al quejoso, ninguna persona que le entregue el insumo que desea consumir, sembrar, cultivar o cosechar, estará cometiendo un delito, siendo que el Código Penal Federal vigente, establece una serie de ilícitos relacionados a dicha provisión o entrega de la marihuana, y que insisto, no han sido declarados inconstitucionales.

Por eso me parece grave que, además, en la sentencia de amparo, se ordene a la COFEPRIS que deberá garantizar siempre que la adquisición de la semilla por el quejoso se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho.



Elo, pues no me explico como podría estar en el ámbito de la COFEPRIS el asegurar o proteger que terceros que desvíen la marihuana de los usos médicos y científicos que exclusivamente permite la Ley, la entreguen a una persona para su uso recreativo, sin que dichos terceros estuvieren cometiendo un delito.

Incluso, no podría responder el cómo la COFEPRIS en su carácter de autoridad administrativa, podrá autorizar a terceros la entrega de marihuana para consumo lúdico, si normas administrativas y penales no impugnadas prohíben y sancionan dichas conductas, incluso con mayor severidad, cuando son realizadas o autorizadas por las autoridades.

Aquí, conviene reproducir distintos preceptos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, hoy vigentes, que constituyen obstáculos infranqueables para que, de forma lícita, otras personas distintas al quejoso, puedan proporcionar a éste el insumo que pretende consumir, o incluso sembrar, cultivar y cosechar para fines ajenos a los médicos o científicos:

Ley General de Salud

"CAPÍTULO IV Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo

ARTÍCULO 473.- Para los efectos de este capítulo se entenderá por:

I. **Comercio:** la venta, compra, adquisición o enajenación de algún narcótico;

II. **Farmacodependencia:** Es el conjunto de fenómenos de comportamiento, cognoscitivos y fisiológicos, que se desarrollan luego del consumo repetido de estupefacientes o psicotrópicos de los previstos en los artículos 237 y 245, fracciones I a III, de esta Ley;

III. **Farmacodependiente:** Toda persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o psicotrópicos;

IV. **Consumidor:** Toda persona que consume o utilice estupefacientes o psicotrópicos y que no presente signos ni síntomas de dependencia;

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

VOTO PARTICULAR

V. **Narcóticos:** los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen esta Ley, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia;

VI. **Poseción:** la tenencia material de narcóticos o cuando éstos están dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona;

VII. **Suministro:** la transmisión material de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, de la tenencia de narcóticos, y

VIII. **Tabla:** la relación de narcóticos y la orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato prevista en el artículo 479 de esta Ley.

ARTÍCULO 474.- Las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere este capítulo, cuando los narcóticos objeto de los mismos estén previstos en la tabla, siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla y no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada.

Las autoridades federales conocerán de los delitos en cualquiera de los casos siguientes:

I. En los casos de delincuencia organizada.

II. La cantidad del narcótico sea igual o mayor a la referida en el primer párrafo de este artículo.

III. El narcótico no esté contemplado en la tabla.

IV. Independientemente de la cantidad del narcótico el Ministerio Público de la Federación:

a) Prevenga en el conocimiento del asunto, o

b) Solicite al Ministerio Público del fuero común la remisión de la investigación.

La autoridad federal conocerá de los casos previstos en las fracciones II y III anteriores, de conformidad con el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables. En los casos de la fracción IV de este artículo se aplicará este capítulo y demás disposiciones aplicables.

Para efecto de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción IV anterior, bastará con que el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente. Las diligencias desahogadas hasta ese momento por las autoridades de las entidades federativas gozarán de plena validez.

En la instrumentación y ejecución de los operativos policíacos que se realicen para cumplir con dichas obligaciones las autoridades se coordinarán en los términos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables.

El Ministerio Público de la Federación podrá solicitar a las autoridades de seguridad pública de las entidades federativas, le remitan informes relativos a la investigación de los delitos a que se refiere este capítulo.

El Ministerio Público de las entidades federativas deberá informar oportunamente al Ministerio Público de la Federación del inicio de las averiguaciones previas, a efecto de que éste cuente con los elementos necesarios para, en su caso, solicitar la remisión de la investigación en términos de la fracción IV inciso b) de este artículo.

En los casos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, el Ministerio Público del fuero común podrá practicar las diligencias de averiguación previa que



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

FORMA A-65

393

correspondan y remitirá al Ministerio Público de la Federación, dentro de los tres días de haberlas concluido, el acta o actas levantadas y todo lo que con ellas se relacione.

Si hubiese detenidos, la remisión se hará sin demora y se observarán las disposiciones relativas a la retención ministerial por flagrancia.

Cuando el Ministerio Público de la Federación conozca de los delitos previstos en este capítulo podrá remitir al Ministerio Público de las entidades federativas la investigación para los efectos del primer párrafo de este artículo, siempre que los narcóticos objeto de los mismos estén previstos en la tabla, la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla y no se trate de casos de la delincuencia organizada.

Si de las constancias del procedimiento se advierte la incompetencia de las autoridades del fuero común, remitirá el expediente al Ministerio Público de la Federación o al juez federal que corresponda, dependiendo de la etapa procesal en que se encuentre, a fin de que se continúe el procedimiento, para lo cual las diligencias desahogadas hasta ese momento por la autoridad considerada incompetente gozarán de plena validez.

ARTÍCULO 475.- Se impondrá prisión de cuatro años y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quien sin autorización comercie o gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla.

Cuando la víctima fuere persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente; o que aquélla fuese utilizada para la comisión de los mismos se aplicará una pena de siete a quince años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa.

Las penas que en su caso resulten aplicables por este delito serán acumulables, cuando:

I. se cometan en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o dentro del espacio comprendido en un radio que diste a menos de trescientos metros de los límites de la colindancia del mismo con quienes a ellos acudan, o

II. se cometan en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o dentro del espacio comprendido en un radio que diste a menos de trescientos metros de los límites de la colindancia del mismo con quienes a ellos acudan, o

III. se cometan en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o dentro del espacio comprendido en un radio que diste a menos de trescientos metros de los límites de la colindancia del mismo con quienes a ellos acudan, o En este caso se impondrá, además, suspensión e inhabilitación de derechos o funciones para el ejercicio profesional u oficio hasta por cinco años. En caso de reincidencia podrá imponerse, además, suspensión definitiva para el ejercicio profesional, a juicio de la autoridad judicial.

ARTÍCULO 476.- Se impondrá de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta Ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aún gratuitamente.

ARTÍCULO 477.- Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización a que se refiere esta Ley, cuando por las circunstancias

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

VOTO PARTICULAR

del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aún gratuitamente.

[REDACTED] por este delito en contra de quien posea [REDACTED] que contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder.

ARTÍCULO 478.- El Ministerio Público [REDACTED] y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta Ley. La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia.

El Ministerio Público hará reporte del no ejercicio de la acción penal a la autoridad sanitaria de la entidad federativa donde se adopte la resolución con el propósito de que ésta promueva la correspondiente orientación médica o de prevención. La información recibida por la autoridad sanitaria no deberá hacerse pública pero podrá usarse, sin señalar identidades, para fines estadísticos.

ARTÍCULO 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente:

Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato		
Narcótico	Dosis máxima de consumo personal e inmediato	
Opio	2 gr.	
Diacetilmorfina o Heroína	50 mg.	
Cannabis Sativa, Indica o Marihuana	5 gr.	
Cocaína	500 mg.	
Lisergida (LSD)	0.015 mg.	
MDA,	Polvo, granulado o cristal	Tabletas o cápsulas
Metilendioxi Anfetamina	40 mg.	Una unidad con peso no mayor a 200 mg.
MDMA, di-34-metilendioxi-n-dimetilfeniletamina	40 mg.	Una unidad con peso no mayor a 200 mg.
Metanfetamina	40 mg.	Una unidad con peso no mayor a 200 mg.

ARTÍCULO 480.- Los procedimientos penales y, en su caso, la ejecución de las sanciones por delitos a que se refiere este capítulo, se regirán por las disposiciones locales respectivas.

[REDACTED]

ARTÍCULO 481.- El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto identifique que una persona relacionada con un procedimiento es farmacodependiente, deberá informar de inmediato y, en su caso, dar intervención a las autoridades sanitarias competentes, para los efectos del tratamiento que corresponda.

En todo centro de reclusión se prestarán servicios de rehabilitación al farmacodependiente.

Para el otorgamiento de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a que se le haya considerado farmacodependiente, pero sí se



FORMA A-03 294

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento médico correspondiente para su rehabilitación, bajo vigilancia de la autoridad ejecutora.

ARTÍCULO 482.- Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento que el [REDACTED]

[REDACTED] informará a la autoridad administrativa competente para que, en ejercicio de sus atribuciones, realice la [REDACTED] del establecimiento, sin perjuicio de las sanciones que resulten por la aplicación de los ordenamientos correspondientes.

Lo mismo se observará respecto de los delitos de comercio, suministro y posesión de narcóticos previstos en los artículos 194, fracción I, 195 y 195 bis del Código Penal Federal."

De los preceptos arriba referidos de la **Ley General de Salud**, conviene hacer las siguientes precisiones:

1ª.- La eventual autorización que pudiera llegar a recibir el quejoso por parte de la autoridad sanitaria, no debería amparar las actividades que personas distintas a él pudieran llevar a cabo para suministrarle el insumo que pretende consumir, sea que se trate de traficantes, servidores públicos o personal de laboratorios o establecimientos que posean el narcótico para fines médicos o de investigación.

2ª.- La tabla prevista en el artículo 479 del Código Penal Federal (Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato), permite que el Ministerio Público no ejerza acción penal en contra de quienes sean consumidores o farmacodependientes y posean cantidades mínimas del narcótico para su consumo personal; sin embargo:

- Ello no excluye la comisión de delito por parte de los proveedores del narcótico, ni su persecución penal;

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

- Ello no elimina la existencia del delito por parte del quejoso, sino sólo establece una excepción para que el mismo se persiga, y
- El no ejercicio de la acción penal no impide que el Ministerio Público deba dar reporte de ello a la autoridad sanitaria para efecto de que se brinde al consumidor o farmacodependiente la orientación médica o de prevención pertinente.

Así, el contar con autorización para consumir marihuana y realizar actividades afines a ello, podría beneficiar al quejoso para no ser sujeto de la comisión de los delitos previstos en los artículos 476 y 477 de la Ley General de Salud, asociados a la posesión del narcótico, pero dicha autorización no puede entenderse de forma alguna como una autorización para que terceras personas posean también el narcótico fuera de los casos previstos en la Ley, ni menos aún para que dicha posesión, transporte o suministro derive en una entrega del narcótico al quejoso para que éste le de uso lúdico.

De hecho, si un establecimiento, incluidos laboratorios autorizados para fines médicos o de investigación científica, entrega narcótico al quejoso en violación a la autorización que le permite operar exclusivamente con dichos fines, estaría enfrentando la clausura, sin perjuicio de que su propietario, poseedor o empleados estarían también enfrentando la posible comisión de otras faltas administrativas e ilícitos penales.



AMPARO EN REVISIÓN 623/2017 VOTO PARTICULAR

Código Penal Federal

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

"Delitos contra la salud
De la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros
actos en materia de narcóticos"

ARTÍCULO 193.- Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, ~~los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia.~~ y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia.

Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública.

El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a imponer por la comisión de algún delito previsto en este capítulo, tomará en cuenta, además de lo establecido en los artículos 51 y 52, la cantidad y la especie de narcótico de que se trate, así como la menor o mayor lesión o puesta en peligro de la salud pública y las condiciones personales del autor o partícipe del hecho o la reincidencia en su caso.

Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o a su destrucción.

Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio Público dispondrá durante la averiguación previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuración de justicia, lo solicitará en el proceso, y promoverá el embargo de bienes para que los bienes de que se trate o su producto se destinen a la procuración de justicia, o bien, promoverá en su caso, la suspensión y la privación de derechos agrarios o de otra índole, ante las autoridades que resulten competentes conforme a las normas aplicables.

ARTÍCULO 194.- Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa al que:

I.- Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud.

Para los efectos de esta fracción, por producir se entiende: manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico, y por comerciar: vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico.

~~El comercio y suministro de narcóticos podrán ser investigados, perseguidos y, en su caso sancionados por las autoridades del fuero común en los términos de la Ley General de Salud, cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento;~~

II.- Introduzca o extraiga del país alguno de los narcóticos comprendidos en el artículo anterior, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito.

Si la introducción o extracción a que se refiere esta fracción no llegare a consumarse, pero de los actos realizados se desprenda claramente que esa era la

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

finalidad del agente, la pena aplicable será de hasta las dos terceras partes de la prevista en el presente artículo;

III.- Aporte recursos económicos o de cualquier especie, o colabore

IV.- Realice actos de publicidad o propaganda, para que se consuma cualesquiera de las sustancias comprendidas en el artículo anterior.

Las mismas penas previstas en este artículo y, además, privación del cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años, se impondrán al servidor público que, en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita,

ARTÍCULO 195.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa, al que posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194, ambos de este código.

La posesión de narcóticos podrá ser investigada, perseguida y, en su caso sancionada por las autoridades del fuero común en los términos de la Ley General de Salud, cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento.

Cuando el inculpaado posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud, en cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil las ahí referidas, se presume que la posesión tiene como objeto cometer alguna de las conductas previstas en el artículo 194 de este código.

ARTÍCULO 195 bis.- Cuando por las circunstancias del hecho la posesión de alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización a que se refiere la Ley General de Salud, no pueda considerarse destinada a realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194, se aplicará pena de cuatro a siete años seis meses de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.

El Ministerio Público Federal no procederá penalmente por este delito en contra de la persona que posea:

1. Medicamentos que contengan narcóticos, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder.

II. Peyote u hongos alucinógenos, cuando por la cantidad y circunstancias del caso pueda presumirse que serán utilizados en las ceremonias, usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, así reconocidos por sus autoridades propias.

Para efectos de este capítulo se entiende por posesión: la tenencia material de narcóticos o cuando éstos están dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona.

La posesión de narcóticos podrá ser investigada, perseguida y, en su caso sancionada por las autoridades del fuero común en los términos de la Ley General de Salud, cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento.

ARTÍCULO 196.- Las penas que en su caso resulten aplicables por los delitos previstos en el artículo 194, serán aumentadas en una mitad, cuando:

1.- Se otorgará un privilegio político de retiro o de reserva o por un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo.



AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En este caso, se impondrá a dichos servidores públicos además, suspensión para desempeñar cargo o comisión en el servicio público, hasta por cinco años, o destitución, e inhabilitación hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. Si se trata de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en cualquiera de las situaciones mencionadas se le impondrá, además la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca, y se le inhabilitará hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, para desempeñar cargo o comisión públicos en su caso;

II.- La víctima fuere menor de edad o incapacitada para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente;

III.- Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualesquiera de esos delitos;

IV.- Se cometa en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o en sus inmediaciones con quienes a ellos acudan;

V.- La conducta sea realizada por ~~los servidores públicos de la fuerza pública~~ en cualquiera de sus ramas y se valgan de esa situación para cometerlos. En este caso se impondrá, además, suspensión de derechos o funciones para el ejercicio profesional u oficio hasta por cinco años e inhabilitación hasta por un tiempo equivalente al de la prisión impuesta;

VI.- El agente determine a otra persona a cometer algún delito de los previstos en el artículo 194, aprovechando el ascendiente familiar o moral o la autoridad o jerarquía que tenga sobre ella; y

VII.- Se trate del propietario, poseedor, arrendatario o usufructuario de un establecimiento de cualquier naturaleza y lo empleare para realizar algunos de los delitos previstos en este capítulo o permitiere su realización por terceros. En este caso además, se clausurará en definitiva el establecimiento.

ARTICULO 196 bis.- (DEROGADO, P.O.F. 7 DE NOVIEMBRE DE 1996)

ARTÍCULO 196 ter.- Se impondrán de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos días multa, así como decomiso de los instrumentos, objetos y productos del delito, al que ~~se le impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos días multa, así como decomiso de los instrumentos, objetos y productos del delito, al que~~

La misma pena de prisión y multa, así como la inhabilitación para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión públicos hasta por cinco años, se impondrá ~~al que~~ cualquiera de las conductas comprendidas en este artículo.

Son precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas los definidos en la ley de la materia.

ARTÍCULO 197.- Al que, sin mediar prescripción de médico legalmente autorizado, administre a otra persona, sea por inyección, inhalación, ingestión o por cualquier otro medio, algún narcótico a que se refiere el artículo 193, se le impondrá de tres a nueve años de prisión y de sesenta a ciento ochenta días multa, cualquiera que fuere la cantidad administrada. Las penas se aumentarán hasta una mitad más si la víctima fuere menor de edad o incapaz para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente.

Al que indebidamente suministre gratis o prescriba a un tercero, mayor de edad, algún narcótico mencionado en el artículo 193, para su uso personal e inmediato, se le impondrá de dos a seis años de prisión y de cuarenta a ciento veinte días multa. Si quien lo adquiere es menor de edad o incapaz, las penas se aumentarán hasta en una mitad.

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

VOTO PARTICULAR

Las mismas penas del párrafo anterior se impondrán al que induzca o auxilie a otro para que consuma cualesquiera de los narcóticos señalados en el artículo 193.

ARTÍCULO 198.- *Al que dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo, siembre, cultive o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando en él concurren escasa instrucción y extrema necesidad económica, se le impondrá prisión de uno a seis años.*

Igual pena se impondrá al que en un predio de su propiedad, tenencia o posesión, consienta la siembra, el cultivo o la cosecha de dichas plantas en circunstancias similares a la hipótesis anterior.

Si en las conductas descritas en los dos párrafos anteriores no concurren las circunstancias que en ellos se precisan, la pena será de hasta las dos terceras partes de la prevista en el artículo 194, siempre y cuando la siembra, cultivo o cosecha se hagan con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en las fracciones I y II de dicho artículo. Si falta esa finalidad, la pena será de dos a ocho años de prisión.

Si el delito fuere cometido por servidor público de alguna corporación policial, se le impondrá, además la destitución del empleo, cargo o comisión públicos y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar otro, y si el delito lo cometiere un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, se le impondrá, además de la pena de prisión señalada, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión públicos.

La siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal.

ARTÍCULO 199.- *El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto conozca que una persona relacionada con algún procedimiento por los delitos previstos en los artículos 195 o 195 bis, es farmacodependiente, deberá informar de inmediato y, en su caso, dar intervención a las autoridades sanitarias competentes, para los efectos del tratamiento que corresponda.*

En todo centro de reclusión se prestarán servicios de rehabilitación al farmacodependiente.

Para el otorgamiento de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a la farmacodependencia, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento médico correspondiente para su rehabilitación, bajo vigilancia de la autoridad ejecutora."

De los preceptos transcritos del Código Penal Federal, es posible derivar las siguientes conclusiones:

1ª.- La comisión de los delitos descritos, que contienen en su tipicidad el elemento de "falta de autorización", podrían no cometerse por el quejoso de contar con la autorización que se llegare a expedir a su favor por la autoridad sanitaria en términos del amparo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

otorgado; pero contrario a lo señalado en la sentencia, creo firmemente que ello no excluiría la posibilidad de que cualquier persona que le proporcione el narcótico y que ante ello, deba poseerlo, adquirirlo o transportarlo, sea perseguida criminalmente por los delitos que se cometan en ese proceso.

2ª.- Los estupefacientes y sustancias psicotrópicas son sin duda productos de orden químico que deben ser considerados para los efectos del **artículo 196 ter del Código Penal Federal**, por lo que cualquier desvío de los mismos de sus fines lícitos se encuentra penado.

Incluso, dicho dispositivo sanciona con cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos días multa, así como con inhabilitación para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión, hasta por cinco años, al servidor público que, en ejercicio de sus funciones, **cometa** cualquiera de las conductas comprendas en el propio artículo, esto es, el desvío de precursores químicos, **productos químicos esenciales o máquinas, al cultivo, extracción, producción, preparación o acondicionamiento de narcóticos** en cualquier forma prohibida por la ley, que es precisamente lo que solicita hacer el quejoso como presupuesto para el consumo de marihuana.

Además, el propio artículo 193 del Código Penal Federal, también sanciona a los servidores públicos que permitan, **autoricen o toleren** cualquiera de las conductas previstas en el propio dispositivo, como lo sería el suministro de cannabis, incluida su semilla.

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

3ª.- Aunque el quejoso estuviere autorizado para consumir marihuana, e incluso, sembrarla, cultivarla o cosecharla, sería difícil encontrar fundamento alguno en la Ley, especialmente en preceptos legales no impugnados, para fundamentar la autorización que pudiera otorgarse a un tenedor legal de marihuana para que la misma se desviare de los fines médicos o científicos que condicionan la autorización que pudieran ya tener dichos tenedores para poseer el narcótico; pero más aún, sería difícil que la propia autoridad, sin cometer un delito, pudiera encontrar fundamento para sustentar su competencia y otorgar una autorización de dicha especie.

Esto es, lo que la sentencia pretende, es que la autoridad sanitaria, no se limite a autorizar al quejoso a adquirir la semilla de marihuana, sino también obligarla a garantizar que se realicen uno o más de los siguientes actos:

- Otorgue una autorización -no prevista en la Ley- para que establecimientos productores de medicamentos o centros de investigación científica puedan poseer el narcótico no sólo con dichos fines, sino también con fines de su entrega a posibles quejosos que disfruten de un amparo que les permita consumir lúdicamente marihuana.
- Otorgue una autorización -no prevista en la Ley- para que establecimientos productores de medicamentos o centros de investigación científica que ya poseen marihuana para dichos fines, la desvíen de los mismos para su entrega a posibles quejosos que disfruten de un amparo que les permita consumir lúdicamente marihuana.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

FORMA AL 398

Esto es, los efectos de la sentencia de amparo, obligarían a las autoridades administrativas a actuar en contra de la Ley misma, y a que dichas autoridades, obligaren a su vez a centros de investigación o establecimientos productores de medicamentos, a actuar en contra de preceptos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

Todo ello implicaría que, en la sentencia de amparo, en realidad se estuviere legislando y dando un carácter de legislador positivo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, competencia que me parece no le confiere actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que menos aún puede derivar de un juicio de garantías, cuya sentencia sólo puede ocuparse del quejoso que hubiese solicitado el amparo, limitándose a ampararlo y protegerlo sobre el caso especial en el que verse la demanda.

En el caso, el amparo se solicitó exclusivamente respecto de determinadas normas jurídicas, por lo que no puedo compartir los efectos que se pretenden dar al juicio de amparo, en el sentido de invalidar implícitamente o cuando menos, negar la vigencia y aplicación que tienen disposiciones legales no impugnadas y que limitan la posibilidad de que las autoridades y otros terceros, puedan actuar lícitamente en el sentido en que se pretende.

No desconozco que el artículo 74, fracción V de la Ley de Amparo, indica que las sentencias deben contener los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo; sin embargo, la propia Constitución acota los efectos de dicha concesión al caso especial en el que verse la demanda, por lo que no considero que como efectos o medidas de un juicio de garantías, pueda considerarse

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

el pasar por alto la aplicación de disposiciones jurídicas no impugnadas.

En realidad, complicaciones como las descritas en este punto, surgen precisamente cuando las sentencias de amparo derivan de los llamados litigios estratégicos, en los que, como en el caso, no existe realmente una persona que hubiese sido sancionada por consumir marihuana, lo que impide analizar el marco jurídico aplicable tanto a la prohibición de hacerlo, como a las sanciones aplicables.

Esto es, se trata de asuntos en los que si bien se busca influir en las políticas públicas, se construyen litigios que parten de supuestos hipotéticos que impiden analizar integralmente las normas administrativas y penales que prohíben y sancionan determinadas conductas; esto es, se busca generar sentencias con impacto general, a partir de situaciones abstractas para las que no fue diseñado el juicio de amparo, y que si bien, posiblemente podrían ser objeto de una acción de inconstitucionalidad, no pueden en principio ser correctamente resueltas a partir de un juicio de garantías.

Por tanto, más allá de si existe o no la necesidad de reformar el marco legislativo que impacta en el consumo lúdico de marihuana, o de si las políticas administrativas por sí solas, vulneran o no los derechos del quejoso, mi postura descansa en la premisa de que no existe la posibilidad de utilizar el juicio de amparo para fines distintos a los que el Constituyente pretendió otorgarle, lo que estimo puede ocurrir en el caso de sentencias que van más allá de sólo ocuparse del quejoso y del caso especial sobre el que versó la demanda.

El problema fundamental, me parece, es que a partir de la impugnación y declaración de inconstitucionalidad de sólo algunas



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

FORMA A-03
39/1

normas administrativas, la sentencia pretende que se invalide el régimen jurídico creado para las autoridades y para terceros, y que no fue de ninguna manera objeto de impugnación en el juicio de amparo.

En concreto, pienso que una sentencia de amparo sólo puede ocuparse del quejoso que solicita la protección de la Justicia Federal, y exclusivamente de los actos -y normas- que fueron reclamados, y a ello deben constreñirse los efectos o medidas en que se traduzca la concesión del amparo.

Si bien comparto que, en determinados casos, dichos efectos y medidas pueden implicar acciones adicionales a cumplir por parte de las autoridades responsables o vinculadas que lleven a verificar la debida restitución del quejoso en su derecho violado; no me parece que ello puede tener el alcance de que

- Se permita la inaplicación de normas administrativas o penales que no fueron reclamadas ni objeto de escrutinio constitucional, ni menos aún de la concesión de amparo;
- Se promueva la comisión de delitos o la tolerancia e inacción de la autoridad ante delitos ya cometidos o por cometerse, y cuyas normas que los contienen no han sido declaradas inconstitucionales.
- Se obligue a las autoridades al otorgamiento de autorizaciones que no están previstas en la Ley, dando a las sentencias de amparo un efecto legislativo de carácter "positivo"; pues en realidad, en el caso y para fines prácticos, la sentencia aprobada, no tiene como objeto

suprimir uno o más requisitos previstos en la Ley que fuesen exigibles para el otorgamiento de una autorización determinada, sino que se pretende que la autoridad otorgue una autorización al quejoso, y a la vez, autorizaciones a terceros, que la Ley no contempla.

Esto es, el amparo no se está solicitando para que la Ley deje de sancionar administrativa y penalmente el consumo de marihuana, ni para que se eliminen las normas jurídicas que impiden el acceso a la misma para fines lúdicos, lo que básicamente implicaría defender que ni siquiera debería existir una autorización previa para consumir recreativamente marihuana o realizar actos relativos.

Más bien, lo que en la demanda se está solicitando, es que se emita una autorización administrativa que la Ley no contempla, y que, en su caso, sólo prevé para fines médicos o de investigación científica.

El problema, me parece, es que en la sentencia se está forzando el juicio de amparo para obligar a que una autoridad administrativa, regule en la esfera administrativa, el otorgamiento de autorizaciones que la Ley no contempla, y que no sólo implican la autorización del quejoso a consumir marihuana y a realizar actos relacionados al autoconsumo, sino también la autorización de otras personas para que produzcan marihuana y la puedan entregar al quejoso para fines ajenos a los médicos y científicos, lo que como se ya se ha expresado aquí reiteradamente, la Ley no permite y además sanciona.

No me queda duda entonces el que, la única forma en que los efectos del amparo podrán surtir plenos efectos, lo es si el quejoso o terceros cometen un delito, o si se obliga a instituciones o autoridades para que, en contra de la ley, y expuestas también a la comisión de un



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

FORMA A-400

delito, autoricen o entreguen directamente al quejoso el narcótico que indica desea consumir, o su semilla, que desea sembrar, cultivar y cosechar.

Algo adicional que conviene precisar, es que ni siquiera vía la marihuana decomisada podría ser posible acceder lícitamente a la "cannabis" para fines ajenos a los médicos o científicos.

Ello, puesto que, por un lado, los artículos 181 del Código Federal de Procedimientos Penales —abrogado— y 235 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, establecen reglas específicas para el destino de los decomisos que pueden existir en lo que se refiere a la marihuana o a sus plantas;

Código Federal de Procedimientos Penales

"ARTÍCULO 181.- Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, serán asegurados a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. El Ministerio Público, las policías y los peritos, durante la investigación y en cualquier etapa del proceso penal, deberán seguir las reglas referidas en los artículos 123 Bis a 123 Quintos. La administración de los bienes asegurados se realizará de conformidad con la ley de la materia.

Las autoridades que actúen en auxilio del Ministerio Público pondrán inmediatamente a disposición de éste los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Ministerio Público, al momento de recibir los bienes, resolverá sobre su aseguramiento y sobre la continuidad o no del procedimiento al que se refieren los artículos 123 Bis a 123 Quintos de este Código, bajo su más estricta responsabilidad y conforme a las disposiciones aplicables.

Cuando se trate de plantíos de marihuana, papaver somniferum o adormidera, u otros estupefacientes, el Ministerio Público, la Policía Judicial o las autoridades que actúen en su auxilio, procederán a la destrucción de aquéllos, levantando un acta en la que se haga constar: el área del cultivo, cantidad o volumen del estupefaciente, debiéndose recabar muestras del mismo para que obren en la averiguación previa que al efecto se inicie.

Cuando se aseguren estupefacientes o psicotrópicos, el Ministerio Público acordará y vigilará su destrucción, si esta medida es procedente, previa la inspección de las sustancias, en la que se determinará la naturaleza, el peso y las demás características de éstas. Se conservará una muestra representativa suficiente para la elaboración de los dictámenes periciales que hayan de producirse en la averiguación previa o en el proceso, según el caso.

Cuando se asegure petróleo crudo, hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados, el Ministerio Público vigilará su aseguramiento y entrega sin dilación alguna a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios, para que proceda a su disposición final, previa inspección en la que se determinará la naturaleza, volumen y demás características de éstos; conservando muestras representativas para la elaboración de los dictámenes periciales que hayan de producirse en la averiguación previa y en proceso, según sea el caso."

Código Nacional de Procedimientos Penales

"Artículo 235. Aseguramiento de narcóticos y productos relacionados con delitos de propiedad intelectual, derechos de autor e hidrocarburos.

Cuando se aseguren narcóticos previstos en cualquier disposición, productos relacionados con delitos de propiedad intelectual y derechos de autor o bienes que impliquen un alto costo o peligrosidad por su conservación, si esta medida es procedente, el Ministerio Público ordenará su destrucción, previa autorización o intervención de las autoridades correspondientes, debiendo previamente fotografiarlos o videografiarlos, así como levantar un acta en la que se haga constar la naturaleza, peso, cantidad o volumen y demás características de éstos, debiéndose recabar muestras del mismo para que obren en los registros de la investigación que al efecto se inicie.

Cuando se aseguren hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos, se pondrán a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien sin dilación alguna procederá a su entrega a los asignatarios, contratistas o permisionarios, o a quien resulte procedente, quienes estarán obligados a recibirlos en los mismos términos, para su destino final, previa inspección en la que se determinará la naturaleza, volumen y demás características de éstos; conservando muestras representativas para la elaboración de los dictámenes periciales que hayan de producirse en la carpeta de investigación y en proceso, según sea el caso."

Lo anterior, en relación con lo señalado en los artículos 480¹⁵ de la Ley General de Salud y 193¹⁶ del Código Penal Federal, obliga a

¹⁵ "ARTÍCULO 480.- Los procedimientos penales y, en su caso, la ejecución de las sanciones por delitos a que se refiere este capítulo, se regirán por las disposiciones locales respectivas, salvo en los casos del destino y destrucción de narcóticos y la clasificación de los delitos como graves para fines del otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, en los cuales se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales".

¹⁶ "ARTÍCULO 193.- Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia.

Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública.

El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a imponer por la comisión de algún delito previsto en este capítulo, tomará en cuenta, además de lo establecido en los artículos 51 y 52, la cantidad y la especie de narcótico de que se trate, así como la menor o mayor lesión o puesta en peligro de la salud pública y las condiciones personales del autor o partícipe del hecho o la reincidencia en su caso.

Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o a su destrucción.

Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los

**AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

reflexionar sobre si parte del decomiso de marihuana derivado de la comisión de un delito, podría ser entregado lícitamente a una persona que pretende su consumo recreativo, siendo que la legislación vigente sólo autoriza el uso médico o científico de la "cannabis".

Mi opinión, es en el sentido de que el artículo 193 del Código Penal Federal es claro en cuanto a que el aprovechamiento en su caso, se haría conforme a las disposiciones o leyes de la materia, por lo que me parece que no existe un espacio lícito para que se desviara lo decomisado para ser entregado gratuitamente o aún bajo el pago de derechos a una persona que no utilizará la marihuana para fines médicos o de investigación científica, y que al contrario, pretende utilizarla para fines lúdicos.

3.4.- NATURALEZA Y EFECTOS DE LAS AUTORIZACIONES.

Como ya se anticipó en líneas previas, un análisis integral de la Ley General de Salud permite concluir que no existe espacio alguno en la misma que permita el otorgamiento de autorizaciones de cualquier especie, destinados al uso recreativo o consumo lúdico de la marihuana.

Incluso, el alcohol y el tabaco tienen una regulación propia, que expone los mismos a control sanitario y a reglas específicas con estrictas obligaciones para todos aquéllos que intervengan en procesos afines; pero en el caso de la marihuana, las únicas autorizaciones que hoy día podrían otorgarse parecen estar acotadas

artículos 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio Público dispondrá durante la averiguación previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuración de justicia, o lo solicitará en el proceso, y promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o su producto se destinen a la impartición de justicia, o bien, promoverá en su caso, la suspensión y la privación de derechos agrarios o de otra índole, ante las autoridades que resulten competentes conforme a las normas aplicables".

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

a los usos médicos o científicos, debiéndose precisar que al momento de la impugnación, los únicos usos permitidos eran los científicos.

Pero lo relevante, es que la Ley General de Salud contempla autorizaciones sanitarias para (a) los establecimientos dedicados al proceso de los medicamentos que contengan estupefacientes o psicotrópicos (art. 198, fracción I) y (b) la venta o suministro de medicamentos y otros insumos para la salud que contengan estupefacientes, sustancias psicotrópicas y productos que los contengan (art. 204).

Incluso, se prevén en el artículo 222 de la propia Ley General de Salud, reglas que establecen los requisitos aplicables al otorgamiento de las autorizaciones correspondientes a los medicamentos y a su registro, y en el Título Décimo Sexto de la Ley, se contempla todo un apartado referido a las autorizaciones y certificados previstos en la Ley, contemplándose que las primeras podrán tener el carácter de licencias, permisos, registros o tarjetas de control sanitario (art. 368), que dichas autorizaciones se otorgarán por tiempo determinado o por las excepciones que establezca la ley (art. 370); que requieren registro sanitario los medicamentos, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y productos que los contengan (art. 376), mismos que tendrán vigencia de cinco años; y que, las autorizaciones sanitarias podrán ser revocadas cuando:

- Los productos o el ejercicio de las actividades que se hubieren autorizado, constituyan riesgo o daño para la salud humana (art. 380, fracción I);



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

FORMA A-03
402

- El ejercicio de la actividad que se hubiere autorizado, exceda los límites fijados en la autorización (art. 380, fracción II); y, entre otros supuestos,
- Porque se dé un uso distinto a la autorización (art. 380, f. III).

Luego entonces, la concesión del amparo en los términos aprobados obligará a la autoridad administrativa a prever qué tipo de autorización para consumir recreativamente marihuana es la que tendría que otorgarse -pues la Ley no la contempla-, por qué vigencia, bajo qué condiciones o requisitos y todo ello, en estricto sentido, sin fundamento legal.

Mis cuestionamientos derivan, entre otras, de las siguientes interrogantes: ¿Bajo qué fundamento legal se puede otorgar una autorización para que el quejoso consuma marihuana y realice actos lúdicos?; ¿Qué fundamento legal servirá a la autoridad para autorizar a laboratorios o centros de investigación a que desvíen el uso de la marihuana de que dispongan destinada exclusivamente a usos científicos o médicos, para redirigirla a fines diversos, como los lúdicos?; ¿existiría algún porcentaje máximo de concentración de la sustancia psicotrópica THC en los productos que se autorice consumir?; ¿qué tipo de semilla sobre las variantes de la cannabis se podrá entregar al quejoso, cualquiera que él solicite o sólo la disponible a pesar de que no sea la que necesariamente desee consumir?; ¿si la propia sentencia reconoce que la marihuana representa un riesgo para la salud por el daño que puede provocar, que acaso no la autorización que se otorgare al quejoso, tendría que ser inmediatamente revocada de conformidad a lo señalado en el artículo 380, fracción I de la Ley General de Salud -no impugnado-?.

En fin, me parece complicado ordenar a la autoridad sanitaria a otorgar una autorización al quejoso y otras autorizaciones a terceros que la Ley no contempla, y que incluso, sanciona en normas que no fueron impugnadas.

Insisto, con la sentencia de amparo que nos ocupa, básicamente se estaría obligando a la autoridad administrativa a regular en la esfera administrativa, cuestiones que la Ley no contempla e incluso, a regular administrativamente aspectos que estarían violando la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.

3.5.- POSIBLE COMISIÓN INDIRECTA DE DELITOS EN QUE PODRÍA INCURRIR EL QUEJOSO.

De lo ya expuesto, ha quedado clara mi postura en cuanto a los efectos que tendría la sentencia de amparo en la posible comisión de delitos por parte de quienes suministraren el narcótico al quejoso, pero existe otro punto que me preocupa; y es que, en realidad, existen determinados delitos que aún cometidos por terceros, podrían impactar la esfera de la conducta del propio quejoso.

Aquí es importante considerar lo previsto en el artículo 13 del Código Penal Federal.

"Artículo 13.- Son autores o partícipes del delito:

I.- Los que acuerden o preparen su realización.

II.- Los que los realicen por sí;

III.- Los que lo realicen conjuntamente;

IV.- Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro;

V.- Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo;

VI.- Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión;



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

FORMA 405

VII.- Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en cumplimiento de una promesa anterior al delito y

VIII.- Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo.

Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad."

Para los sujetos a que se refieren las fracciones VI, VII y VIII, se aplicará la punibilidad dispuesta por el artículo 64 bis de este Código."

Esto es, si la planta o semilla se obtiene de un tercero que ilícitamente la posee o cultiva, cosecha o siembra, luego entonces, quien recibe la semilla o planta, podría estar implicado en las consecuencias del delito cometido por aquél, dependiendo ello, desde luego, de las condiciones en que se dióse la adquisición en cuestión.

Bajo esta misma línea, si alguien desviare o autorizare el desvío de marihuana de los fines exclusivamente médicos o científicos a los que legalmente se encontrare destinada, a otros distintos a los que la Ley contempla, esto es, a fines lúdicos, no sólo estaría cometiendo un delito, sino que también podrían extenderse sus efectos a la autoría o participación que en ese proceso tuviera quien adquirirá la marihuana.

Y es que nuevamente, el quejoso podría llegar a obtener con la sentencia una autorización administrativa para consumir marihuana, e incluso para, entre otros actos, sembrarla, cultivarla o cosecharla, pero no me parece que esa autorización pueda extenderse al hecho de comprar o recibir gratuitamente dicho narcótico de un tenedor legal que, supuestamente, por Ley, no puede dar a la misma, bajo consecuencia de sanciones penales y administrativas, un uso distinto al que le fue expresamente autorizado conforme a la propia Ley; y en estricto sentido, aun excluyendo del ámbito de aplicación del quejoso

las normas que en la sentencia se estiman inconstitucionales, lo cierto es que pienso que ni el quejoso ni la autoridad podrían obligar a un tenedor legal a violar la ley, sólo para que el quejoso pueda fumar recreativamente marihuana.

3.6.- IMPLICACIONES DE CONVENIOS SUSCRITOS POR EL ESTADO MEXICANO EN MATERIA DE ESTUPEFACIENTES, SUBSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y DE SU TRÁFICO ILÍCITO.

En primer término, me parece importante destacar lo que disponen los artículos 235, fracción II y 247, fracción II de la Ley General de Salud, en porciones no impugnadas en el juicio de amparo que nos ocupa, pues en las mismas, existen mandatos expresos del legislador en el sentido de que la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes, sustancias psicotrópicas o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos preceptos, se transcriben a continuación nuevamente para mejor ilustrar lo en ellos referido:

“Artículo 235. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a:

I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;

II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

FORMA 100

2104

[REDACTED]

III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General;

IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia;

V. (Se deroga).

VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.

Artículo 247. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y en general, todo acto relacionado con sustancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, queda sujeto a:

I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos;

[REDACTED]

III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General;

IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia;

V. (Se deroga)

VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos, y requerirán, al igual que las sustancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud."

Lo anterior, me obliga a entender que a pesar de que se haya dispuesto la inconstitucionalidad del último párrafo de ambos preceptos, lo cierto es que al no haberse impugnado la fracción II

de dichos artículos, sus alcances legales siguen vigentes, con la implicación de que la autoridad y destinatarios de la norma, tendrían que sujetarse a lo que dichos tratados y convenciones señalan.

En la materia que nos ocupa, destaca la suscripción de los siguientes instrumentos internacionales y de las implicaciones que en los mismos me permito referir:

Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes <small>(Enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes)</small>	
Preámbulo.	Se establece la clara intención de que la Convención suscrita, tiene por objeto <u>limitar el uso de estupefacientes a los fines médicos y científicos</u> .
Art. 23. Organismos Nacionales para la Fiscalización.	<p>El precepto establece la obligación de los Estados parte, en el sentido de que si llegan a permitir el cultivo de la planta de la cannabis, luego entonces, tendrán que aplicar medidas de fiscalización similares a las establecidas para el opio, y que incluyen la producción controlada y centralizada del estupefaciente; de tal forma que los organismos oficiales establecidos al efecto, serán los encargados de, entre otras acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determinar las zonas y parcelas de terreno en que se permitirá el cultivo. • Otorgar licencias para la producción a cultivadores. • Recibir de todos los cultivadores la totalidad de sus cosechas.
Artículo Comercio y Distribución.	<p>30. Se establece la obligación de los Estados parte, de exigir recetas médicas para el suministro o despacho de estupefacientes a particulares; lo que presupone que, en su caso, el único fin que puede tener el acceso de los particulares a este tipo de sustancias, debe ser el médico.</p> <p>También se prevé que, en su caso, las excepciones, sólo pueden aplicar para quienes estén autorizados para ejercer funciones terapéuticas o científicas, y sólo mientras se ejerzan dichas funciones.</p>
Artículo Transitorio.	<p>2º Se contempla la obligación de los Estados parte, que hubiesen formulado reserva para el uso de la cannabis para fines no médicos, de asegurarse de que precisamente no se permita el uso de la cannabis para fines médicos, pero en todo caso dentro de un plazo de 25 años a partir de la entrada en vigor de la presente Convención.</p> <p>Compromiso desde luego, aplicable inmediatamente para los Estados, como el Mexicano, que no hicieron reserva en ese</p>



AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

FORMA 4-03
4012

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes	
Emendação por Protocolo de 1972 (Modificação da Convenção Única de 1961 sobre Estupefacientes)	
	sentido.
Lista I	Incluye en su lista I a la "cannabis" y su resina, así como a los extractos y tinturas de cannabis, como un estupefaciente sujeto a todas las medidas de fiscalización previstas en la Convención.

Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971	
Art. 5. Limitación del uso a los fines médicos y científicos.	El precepto establece la obligación de los Estados parte, de <u>prohibir todo uso de las sustancias incluidas en la Lista I, incluida el "cannabis"</u> , que sean utilizadas para fines médicos o científicos <u>hagan personas debidamente autorizadas en establecimientos médicos o científicos que estén bajo la fiscalización directa de sus gobiernos o expresamente aprobados por ellos.</u>
Art. 7. Disposiciones especiales aplicables a las sustancias de la Lista I.	
Artículo 20. Medidas contra el uso indebido de sustancias sicotrópicas.	Se establece la obligación de los Estados parte, de <u>adoptar todas las medidas posibles para prevenir el uso indebido de sustancias sicotrópicas</u> y asegurar la pronta identificación, tratamiento, educación <u>postratamiento</u> , rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas.
Artículo 22. Disposiciones penales.	Se contempla la obligación de los Estados parte, de sancionar <u>la comisión intencional de todo acto contrario a cualquier ley o reglamento que se adopte en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Convenio.</u> El precepto, concede la opción de que cuando las personas que hagan uso indebido de sustancias sicotrópicas hayan cometido <u>las Partes podrán, en vez de declararlas culpables o de sancionarlas penalmente, o, además de sancionarlas, someterlas a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social.</u>
Lista I	Incluye en su Lista I, con el número 26, al tetrahidrocannabinol, así como a los isómeros y sus variantes estereoquímicas precisadas en el anexo en cuestión.

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988	
Artículo 3. Delitos y sanciones	<p>Mandata a los Estados parte, el <u>posesión o la adquisición de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica</u>, así como para la producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971.</p> <p>Se establece que a reserva de los principios constitucionales y de los conceptos fundamentales del ordenamiento jurídico de los Estados, cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales conforme a su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente, la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971.</p>
Artículo 14. Medidas para erradicar el cultivo ilícito de plantas de las que se extraen estupefacientes y para eliminar la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.	<p>Contempla la obligación de los Estados parte, de adoptar medidas adecuadas para evitar el cultivo <u>ilícito</u> de las plantas que contengan estupefacientes o sustancias sicotrópicas, tales como las plantas de adormidera, los arbustos de coca y <u>las plantas de cannabis</u>, así como para erradicar aquellas que se cultiven ilícitamente en su territorio. Las medidas que se adopten <u>deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos</u>, donde al respecto exista la evidencia histórica, así como la protección del medio ambiente.</p>

El marco convencional referido, suscrito por el Estado Mexicano, deja claro el compromiso asumido por el país, para erradicar el uso de, entre otras sustancias, la “cannabis”, para fines distintos a los científicos y médicos. Esto es, se trata de compromisos que buscan precisamente evitar el consumo recreativo de la marihuana, y aún, limitar su uso científico y médico.

**AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El primer punto relevante, es que es desde fuentes de naturaleza convencional, que se considera a la marihuana y al tetrahidrocannabinol como estupefacientes y psicotrópicos sujetos a máxima fiscalización (Grupo I). Luego entonces, aunque la concesión del amparo implique la inconstitucionalidad del último párrafo, respectivamente, de los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud, que son los dispositivos que establecen que los actos precisados en el propio precepto sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos, y previa autorización; tal previsión, aunque en una fuente convencional, seguiría estando vigente, y cuando menos, conllevaría en automático, de obviarse su observancia, a un incumplimiento del Estado mexicano.

Visto desde otra óptica, la concesión del amparo en los términos que plantea la sentencia vinculada al presente voto particular, estaría abarcando implícitamente, la inconstitucionalidad de un tratado internacional no impugnado, o cuando menos, estaría impulsado un desconocimiento de compromisos internacionales que no fueron sujetos de escrutinio constitucional.

Otro factor relevante, es que, si bien en el fallo se propone conceder el amparo en contra de lo señalado en el artículo 245, fracción I de la Ley General de Salud, que es el que establecía antes de la reforma de 2017, al tetrahidrocannabinol, como una sustancia psicotrópica de escaso o nulo valor terapéutico, susceptible de uso indebido o abuso, lo cierto es que los instrumentos internacionales referidos, siguen considerando a la sustancia como de dicha naturaleza y sujeta a esquemas de máxima fiscalización.

Además de lo anterior, los instrumentos internacionales referidos, dejan clara la postura de los Estados firmantes, y su compromiso para criminalizar las conductas previstas en los propios Convenios, y si bien se permite en ellos que los farmacodependientes o consumidores puedan no ser declarados culpables o sancionados penalmente, para en lugar o en adición a ello, ser sometidos a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social, lo cierto es que en ningún momento los convenios descartan que se haya cometido un delito, como en particular, puede advertirse de lo que dispone el **Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 en su artículo 22:**

"Artículo 22

DISPOSICIONES PENALES

1. a) *A reserva de lo dispuesto en su Constitución, cada una de las Partes considerará como delito, si se comete intencionalmente, todo acto contrario a cualquier ley o reglamento que se adopte en cumplimiento de las obligaciones impuestas por este Convenio y dispondrá lo necesario para que los delitos graves sean sancionados en forma adecuada, especialmente con penas de prisión u otras penas de privación de libertad.*

b) *No obstante, cuando las personas que hagan uso indebido de sustancias sicotrópicas hayan cometido esos delitos, las Partes podrán, en vez de declararlas culpables o de sancionarlas penalmente, o, además de sancionarlas, someterlas a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 20."*

De igual forma, del artículo 20, apartado 1¹⁷ del citado Convenio, se desprende la obligación de los Estados firmantes, de asegurar la pronta identificación, tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas; esto es, de los consumidores o farmacodependientes, lo que no me parece pueda ser compatible con el otorgamiento de licencias para el

¹⁷ Artículo 20 MEDIDAS CONTRA EL USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS 1. Las Partes adoptarán todas las medidas posibles para prevenir el uso indebido de sustancias sicotrópicas y asegurar la pronta identificación, tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas, y coordinarán sus esfuerzos en este sentido".



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

FORMA A-15
407

consumo lúdico de marihuana, y, en último caso, la licencia provisional que pudiera expedirse, tendría que venir acompañada de dichas medidas, lo que también denotaría cierta incongruencia.

Pero en todo caso, la autorización en cuestión sólo podría otorgarse si se incumple el compromiso del Estado Mexicano, contenido implícitamente en el artículo 49, apartado 2, inciso ~~2~~ de la **Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes**, en el sentido de que el uso de la cannabis para fines que no sean médicos y científicos deberá cesar lo antes posible, pero en todo caso dentro de un plazo de 25 años a partir de la entrada en vigor de la Convención; y siendo que México no hizo reserva al respecto, ni si quiera le aplicaba dicho plazo, sino que el uso ajeno a los fines médicos y científicos, debía cesar de inmediato, máxime que la reserva -por máximo 25 años-, en su caso, sólo podía aceptarse si al momento de la firma del convenio, el uso de la cannabis fuese tradicional y estuviese autorizado.

De cualquier forma, el plazo de 25 años para los países que en ese entonces suscribieron la Convención ya venció, y no existe duda de que el marco jurídico convencional hoy vigente en la materia y que no fue impugnado en el juicio de amparo, prohíbe que la marihuana se utilice para fines ajenos a los científicos y médicos.

Es con base en lo anterior, que difiero de las consideraciones que se contienen en la sentencia aprobada por la mayoría, en el sentido de que la concesión del amparo, no contraviene lo dispuesto en instrumentos internacionales de la materia, pues a mi parecer, nada en dichas Convenciones permite que las conductas ahí establecidas dejen de ser delito, sino sólo que pueda sustituirse la condena penal por el tratamiento; o que incluso, no sea declarado culpable el

consumidor o farmacodependiente si se sujeta a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social, pero no que los Estados puedan dejar de considerar como delito determinadas actividades relacionadas con el consumo lúdico de, entre otros narcóticos, la marihuana.

De igual forma, no me parece que lo previsto en el artículo 3 de la **Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988**, deba entenderse en el sentido de que los estados miembros podrán dejar de establecer como delito la posesión, adquisición o cultivo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas para el consumo personal, si ello es contrario a sus principios constitucionales o cuando ello sea contrario a los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico.

Ello, puesto que, en primer lugar, no me parece que ni la Constitución Mexicana ni los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, contemplen un derecho humano a ingerir narcóticos para fines recreativos; y si bien, pudiera conceder, sujeta a prueba, que el consumo del tabaco y del alcohol, que sí son permitidos en determinados contextos por la legislación mexicana, pudieran generar similares daños a los del consumo de marihuana, lo cierto es que la diferenciación que nos ocupa, deriva en principio de instrumentos internacionales que conforme al artículo 133 constitucional, son Ley Suprema de la Unión, y que no fueron impugnados en el juicio de garantías de que se trata, ni menos declarados inconstitucionales, por lo que siguen vigentes.



AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Y en todo caso, una cosa es que puedan reducirse las sanciones penales a los consumidores o farmacodependientes de marihuana, o que incluso, no se les sancione o criminalice, y otra muy distinta que el Estado Mexicano empiece a otorgar autorizaciones para el uso recreativo de la "cannabis", lo que sin duda, me parece vulnera frontalmente los compromisos del Estado Mexicano asumidos en los tratados internacionales antes referidos.

3.7.- IMPORTACIÓN DE LA MARIHUANA.

Por razones afines a las que antes he expuesto, me parece razonable que se niegue el amparo al quejoso en lo que se refiere a la importación de la marihuana que solicita, aunque aquí, creo relevante destacar que la negativa, en la sentencia aprobada, descansa en parte, en el hecho de que el quejoso no impugnó la totalidad de los preceptos normativos que prohíben esta actividad y que, de haberse reclamado, le permitirían potencialmente la importación en los términos solicitados.

MI CUESTIONAMIENTO EN ESTA PARTE, surge porque pienso que similar razonamiento debería aplicar en lo que se refiere a la adquisición de la marihuana y a las demás actividades que para el consumo de la cannabis reclama el quejoso; pues lo cierto es que, como relato en este voto particular, el peticionario de garantías tampoco impugnó la totalidad de los preceptos relacionados que le permitirían al mismo acceder a la marihuana y a su semilla, a los terceros entregarle dicho narcótico y a la autoridad autorizar dicha entrega.

Además, como he referido, en mi opinión, ello tendría que abarcar también la impugnación de las Convenciones de las que derivan las obligaciones del Estado Mexicano para regular en determinado sentido a la "*cannabis*" y a su uso, así como a las disposiciones administrativas y penales que sancionan actividades relacionadas.

3.8.- IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA CUMPLIR LA SENTENCIA DE AMPARO.

Entiendo desde luego, que sería difícil en un solo juicio y por un solo quejoso, cuestionar de manera integral el marco jurídico nacional y convencional, que regula administrativa y penalmente a la "*cannabis*", acreditando además en todos los casos, el interés jurídico o legítimo que sería necesario para ello; y, por tanto, pienso que el juicio de amparo no necesariamente es la vía constitucional para cuestionar políticas públicas que contienen prohibiciones absolutas como la que nos ocupa, y que impactan directamente políticas de autorización, sanciones administrativas, delitos y demás situaciones afectas a un régimen generalizado de prohibición.

Ello, pues posiblemente, bajo similares consideraciones a las del fallo de la mayoría, a partir de un diverso juicio de amparo, un quejoso sancionado penalmente por el consumo y posesión de marihuana, podría defender la inconstitucionalidad del precepto legal que le sanciona y quizás, argumentar que el libre ejercicio y desarrollo de su personalidad, ni siquiera exige de autorización o licencia para dicho consumo, como no lo requiere para fumar o tomar alcohol.

Bajo esa lógica, que no necesariamente comparto, existiría espacio para una potencial concesión del amparo a dicho quejoso que sí pudiera surtir plenos efectos, pues se lograría la desaplicación del



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

FORMA 409

marco jurídico que le genera perjuicio, pero partir del otorgamiento de una autorización que la ley no contempla, y más aún, ordenar a la autoridad para que otorgue autorizaciones que la Ley no le autoriza a fin de que terceros entreguen al quejoso la marihuana, y todavía, ordenar que tenedores legales desvíen la marihuana a fines ajenos a los que su autorización ampara, con posible exposición a la comisión de delitos, sí me parece da lugar a fines y efectos que la Constitución no contempló para el juicio de amparo.

Posiblemente, una acción de inconstitucionalidad, en términos del artículo 105 de la Carta Magna y de su Ley Reglamentaria, podría tener mayores efectos y quizás algunos similares a los que contiene la sentencia de amparo, pero el artículo 107 de la Constitución acota perfectamente los alcances que puede tener una sentencia en un juicio de garantías, y no me parece que éstos puedan directa o indirectamente invalidar preceptos distintos a los impugnados, o implicar su inobservancia, ni menos aún por parte de personas distintas al quejoso.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE JUSTICIA
FEDERAL

En todo caso, como acto previo a la fijación de la litis del juicio de garantías, podría el Juez de Distrito prevenir al quejoso con respecto a su demanda para que precisare si está reclamando o no determinadas disposiciones jurídicas de orden nacional o convencional que pueden derivar de lo reclamado en su demanda, y de existir interés jurídico o legítimo al respecto, podría construirse una litis constitucional más compleja sobre dicha materia, pero aceptar que una sentencia de amparo, tenga efectos que alteran dicha litis y que además, tienen una consecuencia *erga omnes*, no me parece lo adecuado.

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

Primero, porque la técnica del juicio de amparo no lo permite actualmente; y segundo, porque se deja en estado de indefensión a las autoridades responsables, que son contraparte del quejoso, pues en un asunto como el que nos ocupa, no tuvieron la oportunidad de defender la constitucionalidad de normas administrativas y penales, que con los efectos que se están dando al amparo, necesariamente serán inaplicadas, pues de otra forma, no será posible que el quejoso acceda a la semilla de la marihuana que pretende sembrar, cultivar, cosechar y consumir, entre otras actividades.

A la vez, los tenedores legales de marihuana, autorizados para su posesión y uso con fines exclusivamente médicos o científicos, y que con los efectos que se dan al amparo, debieron haber tenido el carácter de terceros interesados, no serán escuchados ni menos podrán defenderse con la obligación que indirectamente se les está imponiendo para entregar gratuitamente o para vender al quejoso la semilla de marihuana.

Esto es, surge una nueva pregunta relacionada a qué pasaría si un tenedor legal de la cannabis, se opusiera a entregar al quejoso la semilla de marihuana, sea por evitar dar a la misma un uso diverso a la autorización de que disfruta y al que la ley le otorga, sea por evitar la revocación de dicha autorización o alguna sanción administrativa o penal, o sea simplemente porque en su ética o conciencia no comparte la idea de entregar la marihuana a un particular para su uso recreativo.

Con los efectos que se dan al amparo, difícilmente un tenedor legal de marihuana podría a su vez recurrir al amparo para evitar entregar marihuana a una persona para fines médicos, y ello, sin duda, me parece preocupante, pues bajo la idea de beneficiar a una



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA 210
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

persona que únicamente impugna determinados preceptos legales, en realidad, la sentencia de amparo está provocando que distintos preceptos legales no impugnados dejen de observarse.

La Ley de Amparo, en sus artículos 196, segundo párrafo y 201, fracción II, contempla implícitamente la posibilidad de que se declare por el órgano judicial, que existe la **imposibilidad material y jurídica** para el cumplimiento de una sentencia de amparo; lo cual, a su vez, deriva de lo contemplado en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, y cito ello, pues me surge una nueva inquietud, previendo que las autoridades o los tenedores legales, no estuvieran en condiciones, como se prevé en el fallo, de entregar lícitamente la semilla al quejoso, pues una cosa es que los mismos dispongan lícitamente de ella para determinados usos, y otra que puedan lícitamente entregarla a un tercero fuera de los fines para los que su uso fue autorizado.

Acaso, en este supuesto, se iniciará el proceso de cumplimiento de la sentencia de amparo en todas sus etapas, incluida la destitución y consignación de autoridades que alegaren que están impedidas para entregar o autorizar lícitamente la entrega de la semilla, si por ejemplo, un tenedor legal se niega a hacer dicha entrega; acaso, se dará el carácter de autoridad vinculada a los tenedores legales de marihuana y finalmente, de no poderse entregar la semilla, se iniciará un incidente de cumplimiento sustituto para entregar al quejoso vía convenio o sin él, otro narcótico o una cantidad económica como indemnización por no permitirle consumir lícitamente marihuana, y en su caso, qué pasaría con los organismos encargados de administrar los convenios internacionales suscritos en la materia y con las recomendaciones u observaciones que formularan al Estado Mexicano, si en franca

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

contravención a los mismos, se otorga una autorización para el consumo recreativo de la marihuana.

Será entonces que México deberá retirarse de las Convenciones suscritas o qué reacción debería tener ante una sentencia de amparo que supuestamente no tiene efectos generales, pero que le obliga a actuar en contra de tratados internacionales que infieren compromisos específicos que se estarían violando con la autorización otorgada.

Todo ello, surge precisamente como interrogante porque los efectos que finalmente está teniendo la sentencia de amparo, parecen ser más bien generales y no acotados al quejoso y a las normas que impugnó y que fijaron la litis del juicio de garantías. Ante ello, reitero mi postura en el sentido de que el juicio de amparo, si bien puede derivar en la inconstitucionalidad de tipos penales impugnados, no puede llevar a una sentencia que consienta, tolere o promueva la comisión de delitos y la inobservancia de dispositivos legales administrativos y penales de orden nacional e internacional.

En el presente caso, sigo sosteniendo que no existe vía lícita para que el quejoso acceda a la semilla de marihuana para fines lúdicos, que en contraparte, no existe vía lícita para que tenedores legales de marihuana le entreguen la semilla para fines distintos a los científicos o médicos, ni menos vía lícita para que la autoridad otorgue una autorización u orden en ese sentido; y sobre todo, sostengo que aún en el supuesto sin conceder, de que el quejoso pudiera acceder lícitamente a la marihuana o a su semilla, de cualquier forma seguiría siendo sujeto punible, cuando menos, del delito de siembra, cultivo y cosecha de marihuana previsto en el artículo 198 del Código Penal Federal, ilícito penal que no depende de que se cuente o no con autorización, y que sólo exime de punibilidad a la siembra, cultivo o



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
VOTO PARTICULAR

cosecha de marihuana que se lleve a cabo con fines médicos y científicos.

Es por las razones anteriores que, respetuosamente, no comparto la sentencia que nos ocupa y que, aprobada por la mayoría, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de que se otorgue una autorización que, en mi opinión, no podrá ejercerse lícitamente.

MINISTRO

JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

LIC. MARIA DE LOS ÁNGELES GU TIÉRREZ GATICA

GPLA

Esta hoja corresponde al voto particular emitido por el Señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en el amparo en revisión 623/2017, fallado en sesión de la Primera Sala de fecha trece de junio de dos mil dieciocho. Conste.



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constancia de captura de engrose en la red de informática Jurídica

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN

No. expediente: 623/2017

Pertenece: PRIMERA SALA

Materia:

QUEJOSO: [REDACTED]

AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

TERCERO INTERESADO (ANTES TERCERO PERJUDICADO): SECRETARIO DE SALUD

MINISTERIO PÚBLICO: MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN

Acto reclamado: LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ARTÍCULOS 83 A 96 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 4 DE AGOSTO DE 1994 Y LEY GENERAL DE SALUD, ARTÍCULOS 234, 235, ÚLTIMO PÁRRAFO; 237; 245, FRACCIÓN I; 247, ÚLTIMO PÁRRAFO, 248, 368, Y 479 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 07 DE FEBRERO DE 1984 Y OTROS

Acto recurrido:

Motivo del conflicto:

Autoridad responsable: CONGRESO DE LA UNIÓN Y DE OTRAS AUTORIDADES

Autoridad emisora del acto:

Garantías violadas:

Tema: DEL RECURSO DE REVISIÓN

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 83. LOS INTERESADOS AFECTADOS POR LOS ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, A UNA INSTANCIA O RESUELVAN UN EXPEDIENTE, PODRÁN INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN O, CUANDO PROCEDA, INTENTAR LA VÍA JURISDICCIONAL QUE CORRESPONDA.

EN LOS CASOS DE ACTOS DE AUTORIDAD DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FEDERALES, DE LOS SERVICIOS QUE EL ESTADO PRESTA DE MANERA EXCLUSIVA A TRAVÉS DE DICHOS ORGANISMOS Y DE LOS CONTRATOS QUE LOS PARTICULARES SÓLO PUEDEN CELEBRAR CON AQUÉLLOS, QUE NO SE REFIERAN A LAS MATERIAS EXCLUIDAS DE LA APLICACIÓN DE ESTA LEY, EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR TAMBIÉN PODRÁ INTERPONERSE EN CONTRA DE ACTOS Y RESOLUCIONES QUE PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, A UNA INSTANCIA O RESUELVAN UN EXPEDIENTE.

ARTÍCULO 84. LA OPOSICIÓN A LOS ACTOS DE TRÁMITE EN UN PROCEDIMIENTO



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constancia de captura de engrose en la red de informática Jurídica

ADMINISTRATIVO DEBERÁ ALEGARSE POR LOS INTERESADOS DURANTE DICHO PROCEDIMIENTO, PARA SU CONSIDERACIÓN EN LA RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL MISMO. LA OPOSICIÓN A TALES ACTOS DE TRÁMITE SE HARÁ VALER EN TODO CASO AL IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

ARTÍCULO 85. EL PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SERÁ DE QUINCE DÍAS CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE HUBIERE SURTIDO EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE SE RECURRA.

ARTÍCULO 86. EL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN DEBERÁ PRESENTARSE ANTE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO Y SERÁ RESUELTO POR EL SUPERIOR JERÁRQUICO, SALVO QUE EL ACTO IMPUGNADO PROVENGA DEL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA, EN CUYO CASO SERÁ RESUELTO POR EL MISMO. DICHO ESCRITO DEBERÁ EXPRESAR:

- I. EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO A QUIEN SE DIRIGE
- II. EL NOMBRE DEL RECURRENTE, Y DEL TERCERO PERJUDICADO SI LO HUBIERE, ASÍ COMO EL LUGAR QUE SEÑALE PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES;
- III. EL ACTO QUE SE RECURRE Y FECHA EN QUE SE LE NOTIFICÓ O TUVO CONOCIMIENTO DEL MISMO;
- IV. LOS AGRAVIOS QUE SE LE CAUSAN
- V. EN SU CASO, COPIA DE LA RESOLUCIÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA Y DE LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE POR NO HABERSE RESUELTO EN TIEMPO SE ENTIENDAN NEGADOS, DEBERÁ ACOMPAÑARSE EL ESCRITO DE INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, O EL DOCUMENTO SOBRE EL CUAL NO HUBIERE RECAÍDO RESOLUCIÓN ALGUNA; Y
- VI. LAS PRUEBAS QUE OFREZCA, QUE TENGAN RELACIÓN INMEDIATA Y DIRECTA CON LA RESOLUCIÓN O ACTO IMPUGNADO DEBIENDO ACOMPAÑAR LAS DOCUMENTALES CON QUE CUENTE, INCLUIDAS LAS QUE ACREDITEN SU PERSONALIDAD CUANDO ACTÚEN EN NOMBRE DE OTRO O DE PERSONAS MORALES.

ARTÍCULO 87. LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO SUSPENDERÁ LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, SIEMPRE Y CUANDO:

- I. LO SOLICITE EXPRESAMENTE EL RECURRENTE;
- II. SEA PROCEDENTE EL RECURSO,
- III. NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO;
- IV. NO SE OCASIONEN DAÑOS O PERJUICIOS A TERCEROS, A MENOS QUE SE GARANTICEN ÉSTOS PARA EL CASO DE NO OBTENER RESOLUCIÓN FAVORABLE Y
- V. TRATÁNDOSE DE MULTAS EL RECURRENTE GARANTICE EL CRÉDITO FISCAL EN CUALESQUIERA DE LAS FORMAS PREVISTA EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

LA AUTORIDAD DEBERÁ ACORDAR, EN SU CASO, LA SUSPENSIÓN O LA DENEGACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DENTRO DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES A SU INTERPOSICIÓN EN CUYO DEFECTO SE ENTENDERÁ OTORGADA LA SUSPENSIÓN

ARTÍCULO 88. EL RECURSO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTO Y SE DESECHARÁ CUANDO:

- I. SE PRESENTE FUERA DE PLAZO;
- II. NO SE HAYA ACOMPAÑADO LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL RECURRENTE; Y





PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constancia de captura de engrose en la red de informática Jurídica

III. NO APAREZCA SUSCRITO POR QUIEN DEBA HACERLO A MENOS QUE SE FIRME ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA INTERPONERLO.

ARTÍCULO 89. SE DESECHARÁ POR IMPROCEDENTE EL RECURSO:

I. CONTRA ACTOS QUE SEAN MATERIA DE OTRO RECURSO Y QUE SE ENCUENTRE PENDIENTE DE RESOLUCIÓN, PROMOVIDO POR EL MISMO RECURRENTE Y POR EL PROPIO ACTO IMPUGNADO,

II. CONTRA ACTOS QUE NO AFECTEN LOS INTERESES JURÍDICOS DEL PROMOVENTE;

III. CONTRA ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE

IV. CONTRA ACTOS CONSENTIDOS EXPRESAMENTE Y

V. CUANDO SE ESTÉ TRAMITANDO ANTE LOS TRIBUNALES ALGÚN RECURSO O DEFENSA LEGAL INTERPUESTO POR EL PROMOVENTE, QUE PUEDA TENER POR EFECTO MODIFICAR, REVOCAR O NULIFICAR EL ACTO RESPECTIVO.

ARTÍCULO 90. SERÁ SOBRESEÍDO EL RECURSO CUANDO:

I. EL PROMOVENTE SE DESISTA EXPRESAMENTE DEL RECURSO;

II. EL AGRAVIADO FALLEZCA DURANTE EL PROCEDIMIENTO SI EL ACTO RESPECTIVO SÓLO AFECTA SU PERSONA;

III. DURANTE EL PROCEDIMIENTO SOBREVenga ALGUNA DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO ANTERIOR

IV. CUANDO HAYAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RESPECTIVO

V. POR FALTA DE OBJETO O MATERIA DEL ACTO RESPECTIVO Y

VI. NO SE PROBARE LA EXISTENCIA DEL ACTO RESPECTIVO

ARTÍCULO 91. LA AUTORIDAD ENCARGADA DE RESOLVER EL RECURSO PODRÁ:

I. DESECHARLO POR IMPROCEDENTE O SOBRESEERLO;

II. CONFIRMAR EL ACTO IMPUGNADO;

III. DECLARAR LA INEXISTENCIA, NULIDAD O ANULABILIDAD DEL ACTO IMPUGNADO O REVOCARLO TOTAL O PARCIALMENTE Y

IV. MODIFICAR U ORDENAR LA MODIFICACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO O DICTAR U ORDENAR EXPEDIR UNO NUEVO QUE LO SUSTITUYA, CUANDO EL RECURSO INTERPUESTO SEA TOTAL O PARCIALMENTE RESUELTO A FAVOR DEL RECURRENTE

ARTÍCULO 92. LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO SE FUNDARÁ EN DERECHO Y

EXAMINARÁ TODOS Y CADA UNO DE LOS AGRAVIOS HECHOS VALER POR EL

RECURRENTE TENIENDO LA AUTORIDAD LA FACULTAD DE INVOCAR HECHOS

NOTORIOS; PERO, CUANDO UNO DE LOS AGRAVIOS SEA SUFICIENTE PARA

DESVIRTUAR LA VALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO BASTARÁ CON EL EXAMEN DE DICHO PUNTO.

LA AUTORIDAD, EN BENEFICIO DEL RECURRENTE, PODRÁ CORREGIR LOS ERRORES QUE ADVIERTA EN LA CITA DE LOS PRECEPTOS QUE SE CONSIDEREN VIOLADOS Y

EXAMINAR EN SU CONJUNTO LOS AGRAVIOS, ASÍ COMO LOS DEMÁS

RAZONAMIENTOS DEL RECURRENTE, A FIN DE RESOLVER LA CUESTIÓN

EFFECTIVAMENTE PLANTEADA, PERO SIN CAMBIAR LOS HECHOS EXPUESTOS EN EL RECURSO.

IGUALMENTE, DEBERÁ DEJAR SIN EFECTOS LEGALES LOS ACTOS

ADMINISTRATIVOS CUANDO ADVIERTA UNA ILEGALIDAD MANIFIESTA Y LOS

AGRAVIOS SEAN INSUFICIENTES, PERO DEBERÁ FUNDAR CUIDADOSAMENTE LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERÓ ILEGAL EL ACTO Y PRECISAR EL ALCANCE EN

LA RESOLUCIÓN

SECRETARÍA DE JUSTICIA
FEDERATIVA



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constancia de captura de engrose en la red de informática Jurídica

SI LA RESOLUCIÓN ORDENA REALIZAR UN DETERMINADO ACTO O INICIAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBERÁ CUMPLIRSE EN UN PLAZO DE CUATRO MESES.

ARTÍCULO 93. NO SE PODRÁN REVOCAR O MODIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN LA PARTE NO IMPUGNADA POR EL RECURRENTE. LA RESOLUCIÓN EXPRESARÁ CON CLARIDAD LOS ACTOS QUE SE MODIFIQUEN Y SI LA MODIFICACIÓN ES PARCIAL, SE PRECISARÁ ÉSTA.

ARTÍCULO 94. EL RECURRENTE PODRÁ ESPERAR LA RESOLUCIÓN EXPRESA O IMPUGNAR EN CUALQUIER TIEMPO LA PRESUNTA CONFIRMACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO.

ARTÍCULO 95. LA AUTORIDAD PODRÁ DEJAR SIN EFECTOS UN REQUERIMIENTO O UNA SANCIÓN, DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA, CUANDO SE TRATE DE UN ERROR MANIFIESTO O EL PARTICULAR DEMUESTRE QUE YA HABÍA DADO CUMPLIMIENTO CON ANTERIORIDAD.

LA TRAMITACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO CONSTITUIRÁ RECURSO NI SUSPENDERÁ EL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE ÉSTE Y TAMPOCO SUSPENDERÁ LA EJECUCIÓN DEL ACTO.

ARTÍCULO 96. CUANDO HAYAN DE TENERSE EN CUENTA NUEVOS HECHOS O DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL DERIVADO DEL ACTO IMPUGNADO, SE PONDRÁ DE MANIFIESTO A LOS INTERESADOS PARA QUE EN UN PLAZO NO INFERIOR A CINCO DÍAS NI SUPERIOR A DIEZ, FORMULEN SUS ALEGATOS Y PRESENTEN LOS DOCUMENTOS QUE ESTIME PROCEDENTES.

NO SE TOMARÁN EN CUENTA EN LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO HECHOS, DOCUMENTOS O ALEGATOS DEL RECURRENTE, CUANDO HABIENDO PODIDO APORTARLOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NO LO HAYA HECHO.

Y PROHIBICIÓN DEL CONSUMO DE MARIJUANA

LA PARTE QUEJOSA ARGUMENTÓ COMO DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS LOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 1º, 3º, 4º, 13, 14, 16, 17 Y 133 CONSTITUCIONALES

ROPEMAQ/GAGG

F. turno a ponencia: 14/06/2017

Ministro: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

Secretario proyectista: LUZ HELENA OROZCO Y VILLA

Sentido de la resolución: 1. SE REVOCA LA SENTENCIA RECURRIDA.

2. AMPARO.

3. NIEGA EL AMPARO.

4. ES INFUNDADO EL RECURSO DE REVISIÓN ADHESIVA.

F. resolución: 13/06/2018

F. ingreso engrose: 05/07/2018

383
4114



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constancia de captura de engrose en la red de informática Jurídica

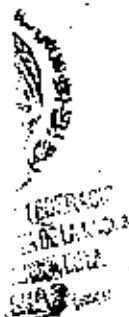
Votos a favor: 4

Votos en contra: 1

LA QUE SUSCRIBE LIC. LUZ HELENA OROZCO Y VILLA, SECRETARIO(A) DE ESTUDIO Y CUENTA ADSCRITA A LA PONENCIA DEL MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, HAGO CONSTAR QUE EN ESTA FECHA, SE PROCEDIÓ A CAPTURAR EN LA RED DE INFORMÁTICA JURÍDICA, EL ENGROSE DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA PRIMERA SALA EN EL PRESENTE ASUNTO, PREVIO COTEJO DE SU ORIGINAL DEL CUAL FUE TOMADO.

CIUDAD DE MÉXICO, A 5 DE JULIO DE 2018

FIRMA





PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constancia de actualización de engrose en la red de informática Jurídica

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN

No. expediente: 623/2017

Pertenece: PRIMERA SALA

Materia:

QUEJOSO: [REDACTED]

AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

TERCERO INTERESADO (ANTES TERCERO PERJUDICADO): SECRETARIO DE SALUD

MINISTERIO PÚBLICO: MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN

Acto reclamado: LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ARTÍCULOS 83 A 96 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 4 DE AGOSTO DE 1994 Y LEY GENERAL DE SALUD, ARTÍCULOS 234, 235, ÚLTIMO PÁRRAFO; 237; 245, FRACCIÓN I; 247, ÚLTIMO PÁRRAFO, 248, 368, 479 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 07 DE FEBRERO DE 1984 Y OTROS

Autoridad responsable: CONGRESO DE LA UNIÓN Y DE OTRAS AUTORIDADES

Tema: DEL RECURSO DE REVISION

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 83. LOS INTERESADOS AFECTADOS POR LOS ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, A UNA INSTANCIA O RESUELVAN UN EXPEDIENTE, PODRÁN INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN O, CUANDO PROCEDA, INTENTAR LA VÍA JURISDICCIONAL QUE CORRESPONDA.

EN LOS CASOS DE ACTOS DE AUTORIDAD DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FEDERALES, DE LOS SERVICIOS QUE EL ESTADO PRESTA DE MANERA EXCLUSIVA A TRAVÉS DE DICHOS ORGANISMOS Y DE LOS CONTRATOS QUE LOS PARTICULARES SÓLO PUEDEN CELEBRAR CON AQUÉLLOS, QUE NO SE REFIERAN A LAS MATERIAS EXCLUIDAS DE LA APLICACIÓN DE ESTA LEY, EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR TAMBIÉN PODRÁ INTERPONERSE EN CONTRA DE ACTOS Y RESOLUCIONES QUE PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, A UNA INSTANCIA O RESUELVAN UN EXPEDIENTE.

ARTÍCULO 84. LA OPOSICIÓN A LOS ACTOS DE TRÁMITE EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEBERÁ ALEGARSE POR LOS INTERESADOS DURANTE DICHO PROCEDIMIENTO, PARA SU CONSIDERACIÓN, EN LA RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL MISMO. LA OPOSICIÓN A TALES ACTOS DE TRÁMITE SE HARÁ VALER EN TODO CASO AL IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

ARTÍCULO 85. EL PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SERÁ DE QUINCE DÍAS CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE HUBIERE SURTIDO EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE SE RECURRA.

ARTÍCULO 86. EL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN DEBERÁ PRESENTARSE ANTE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO Y SERÁ RESUELTO POR EL SUPERIOR JERÁRQUICO, SALVO QUE EL ACTO IMPUGNADO PROVENGA DEL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA, EN CUYO CASO SERÁ RESUELTO POR EL MISMO. DICHO ESCRITO DEBERÁ EXPRESAR:

I. EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO A QUIEN SE DIRIGE;

II. EL NOMBRE DEL RECURRENTE, Y DEL TERCERO PERJUDICADO SI LO HUBIERE,



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constancia de actualización de engrose en la red de informática Jurídica

ASÍ COMO EL LUGAR QUE SEÑALE PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES;

III. EL ACTO QUE SE RECURRE Y FECHA EN QUE SE LE NOTIFICÓ O TUVO CONOCIMIENTO DEL MISMO;

IV. LOS AGRAVIOS QUE SE LE CAUSAN

V. EN SU CASO, COPIA DE LA RESOLUCIÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA Y DE LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE POR NO HABERSE RESUELTO EN TIEMPO SE ENTIENDAN NEGADOS, DEBERÁ ACOMPAÑARSE EL ESCRITO DE INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, O EL DOCUMENTO SOBRE EL CUAL NO HUBIERE RECAÍDO RESOLUCIÓN ALGUNA; Y

VI. LAS PRUEBAS QUE OFREZCA, QUE TENGAN RELACIÓN INMEDIATA Y DIRECTA CON LA RESOLUCIÓN O ACTO IMPUGNADO DEBIENDO ACOMPAÑAR LAS DOCUMENTALES CON QUE CUENTE, INCLUIDAS LAS QUE ACREDITEN SU PERSONALIDAD CUANDO ACTÚEN EN NOMBRE DE OTRO O DE PERSONAS MORALES.

ARTÍCULO 87. LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO SUSPENDERÁ LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, SIEMPRE Y CUANDO:

I. LO SOLICITE EXPRESAMENTE EL RECURRENTE;

II. SEA PROCEDENTE EL RECURSO;

III. NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO;

IV. NO SE OCASIONEN DAÑOS O PERJUICIOS A TERCEROS, A MENOS QUE SE GARANTICEN ÉSTOS PARA EL CASO DE NO OBTENER RESOLUCIÓN FAVORABLE Y

V. TRATÁNDOSE DE MULTAS EL RECURRENTE GARANTICE EL CRÉDITO FISCAL EN CUALESQUIERA DE LAS FORMAS PREVISTA EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

LA AUTORIDAD DEBERÁ ACORDAR EN SU CASO, LA SUSPENSIÓN O LA DENEGACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DENTRO DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES A SU INTERPOSICIÓN EN CUYO DEFECTO SE ENTENDERÁ OTORGADA LA SUSPENSIÓN

ARTÍCULO 88. EL RECURSO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTO Y SE DESECHARÁ CUANDO:

I. SE PRESENTE FUERA DE PLAZO;

II. NO SE HAYA ACOMPAÑADO LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL RECURRENTE; Y

III. NO APAREZCA SUSCRITO POR QUIEN DEBA HACERLO A MENOS QUE SE FIRME ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA INTERPONERLO.

ARTÍCULO 89. SE DESECHARÁ POR IMPROCEDENTE EL RECURSO:

I. CONTRA ACTOS QUE SEAN MATERIA DE OTRO RECURSO Y QUE SE ENCUENTRE PENDIENTE DE RESOLUCIÓN, PROMOVIDO POR EL MISMO RECURRENTE Y POR EL PROPIO ACTO IMPUGNADO;

II. CONTRA ACTOS QUE NO AFECTEN LOS INTERESES JURÍDICOS DEL PROMOVENTE;

III. CONTRA ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE

IV. CONTRA ACTOS CONSENTIDOS EXPRESAMENTE Y

V. CUANDO SE ESTÉ TRAMITANDO ANTE LOS TRIBUNALES ALGÚN RECURSO O DEFENSA LEGAL INTERPUESTO POR EL PROMOVENTE, QUE PUEDA TENER POR EFECTO MODIFICAR, REVOCAR O NULIFICAR EL ACTO RESPECTIVO.

ARTÍCULO 90. SERÁ SOBRESEÍDO EL RECURSO CUANDO:

I. EL PROMOVENTE SE DESISTA EXPRESAMENTE DEL RECURSO;

II. EL AGRAVIADO FALLEZCA DURANTE EL PROCEDIMIENTO SI EL ACTO RESPECTIVO SÓLO AFECTA SU PERSONA;

III. DURANTE EL PROCEDIMIENTO SOBREVenga ALGUNA DE LAS CAUSAS DE





PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constancia de actualización de engrose en la red de informática Jurídica

IMPROCEDENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO ANTERIOR
IV. CUANDO HAYAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RESPECTIVO
V. POR FALTA DE OBJETO O MATERIA DEL ACTO RESPECTIVO
VI. NO SE PROBARE LA EXISTENCIA DEL ACTO RESPECTIVO

ARTÍCULO 91. LA AUTORIDAD ENCARGADA DE RESOLVER EL RECURSO PODRÁ:

I. DESECHARLO POR IMPROCEDENTE O SOBRESEERLO;

II. CONFIRMAR EL ACTO IMPUGNADO;

III. DECLARAR LA INEXISTENCIA, NULIDAD O ANULABILIDAD DEL ACTO IMPUGNADO
O REVOCARLO TOTAL O PARCIALMENTE Y

IV. MODIFICAR U ORDENAR LA MODIFICACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO O DICTAR U
ORDENAR EXPEDIR UNO NUEVO QUE LO SUSTITUYA, CUANDO EL RECURSO
INTERPUESTO SEA TOTAL O PARCIALMENTE RESUELTO A FAVOR DEL RECURRENTE

ARTÍCULO 92. LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO SE FUNDARÁ EN DERECHO Y
EXAMINARÁ TODOS Y CADA UNO DE LOS AGRAVIOS HECHOS VALER POR EL
RECURRENTE TENIENDO LA AUTORIDAD LA FACULTAD DE INVOCAR HECHOS
NOTORIOS; PERO, CUANDO UNO DE LOS AGRAVIOS SEA SUFICIENTE PARA
DESVIRTUAR LA VALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO BASTARÁ CON EL EXAMEN DE
DICHOS PUNTOS.

LA AUTORIDAD, EN BENEFICIO DEL RECURRENTE, PODRÁ CORREGIR LOS ERRORES
QUE ADVIERTA EN LA CITA DE LOS PRECEPTOS QUE SE CONSIDEREN VIOLADOS Y
EXAMINAR EN SU CONJUNTO LOS AGRAVIOS, ASÍ COMO LOS DEMÁS
RAZONAMIENTOS DEL RECURRENTE, A FIN DE RESOLVER LA CUESTIÓN
EFECTIVAMENTE PLANTEADA, PERO SIN CAMBIAR LOS HECHOS EXPUESTOS EN EL
RECURSO.

IGUALMENTE, DEBERÁ DEJAR SIN EFECTOS LEGALES LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS CUANDO ADVIERTA UNA ILEGALIDAD MANIFIESTA Y LOS
AGRAVIOS SEAN INSUFICIENTES, PERO DEBERÁ FUNDAR CUIDADOSAMENTE LOS
MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERÓ ILEGAL EL ACTO Y PRECISAR EL ALCANCE EN
LA RESOLUCIÓN.

SI LA RESOLUCIÓN ORDENA REALIZAR UN DETERMINADO ACTO O INICIAR LA
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBERÁ CUMPLIRSE EN UN PLAZO DE CUATRO
MESES.

ARTÍCULO 93. NO SE PODRÁN REVOCAR O MODIFICAR LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS EN LA PARTE NO IMPUGNADA POR EL RECURRENTE.
LA RESOLUCIÓN EXPRESARÁ CON CLARIDAD LOS ACTOS QUE SE MODIFIQUEN Y SI
LA MODIFICACIÓN ES PARCIAL, SE PRECISARÁ ÉSTA.

ARTÍCULO 94. EL RECURRENTE PODRÁ ESPERAR LA RESOLUCIÓN EXPRESA O
IMPUGNAR EN CUALQUIER TIEMPO LA PRESUNTA CONFIRMACIÓN DEL ACTO
IMPUGNADO.

ARTÍCULO 95. LA AUTORIDAD PODRÁ DEJAR SIN EFECTOS UN REQUERIMIENTO O
UNA SANCIÓN, DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA, CUANDO SE TRATE
DE UN ERROR MANIFIESTO O EL PARTICULAR DEMUESTRE QUE YA HABÍA DADO
CUMPLIMIENTO CON ANTERIORIDAD.

LA TRAMITACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO CONSTITUIRÁ RECURSO NI
SUSPENDERÁ EL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE ÉSTE Y TAMPOCO
SUSPENDERÁ LA EJECUCIÓN DEL ACTO.

ARTÍCULO 96. CUANDO HAYAN DE TENERSE EN CUENTA NUEVOS HECHOS O
DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL DERIVADO DEL ACTO
IMPUGNADO, SE PONDRÁ DE MANIFIESTO A LOS INTERESADOS PARA QUE EN UN
PLAZO NO INFERIOR A CINCO DÍAS NI SUPERIOR A DIEZ FORMULEN SUS ALEGATOS
Y PRESENTEN LOS DOCUMENTOS QUE ESTIME PROCEDENTES.



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constancia de actualización de engrose en la red de informática Jurídica

NO SE TOMARÁN EN CUENTA EN LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO HECHOS,
DOCUMENTOS O ALEGATOS DEL RECURRENTÉ CUANDO HABIENDO PODIDO
APORTARLOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NO LO HAYA HECHO."

Y PROHIBICIÓN DEL CONSUMO DE MARIGUANA

LA PARTE QUEJOSA ARGUMENTÓ COMO DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS
LOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 1º, 3º, 4º, 13, 14, 16, 17 Y 133
CONSTITUCIONALES

ROPEMAQ/GAGG

F. turno a ponencia: 14/06/2017

Ministro: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

Secretario proyectista: LUZ HELENA OROZCO Y VILLA

Sentido de la resolución: 1. SE REVOCA LA SENTENCIA RECURRIDA.
2. AMPARO.
3. NIEGA EL AMPARO.
4. ES INFUNDADO EL RECURSO DE REVISIÓN ADHESIVA.

F. resolución: 13/06/2018

F. ingreso engrose: 05/07/2018

Votos a favor: 4

Votos en contra: 1

Ingresó el engrose en su versión pública: LIC. LUZ HELENA OROZCO Y VILLA

CIUDAD DE MÉXICO, A 5 DE JULIO DE 2018

FIRMA



417

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

LA LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA, SECRETARÍA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, HACE CONSTAR QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 185 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, AL CONCLUIR LA SESIÓN PÚBLICA DEL DÍA DE HOY SE FIJÓ EN LOS ESTRADOS DE ESTA SUPREMA CORTE UNA LISTA DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN DICHA SESIÓN, EN LA QUE SE INCLUYÓ EL AMPARO EN REVISIÓN 623/2017.

CIUDAD DE MÉXICO, A TRECE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECIOCHO.

EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECIOCHO SE NOTIFICÓ LA RESOLUCIÓN ANTERIOR A LOS
INTERESADOS POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL SE PUBLICÓ EN
LOS ESTRADOS Y EN EL PORTAL DE INTERNET DE ESTA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III Y 29 DE
LA LEY DE AMPARO VIGENTE. CONSTE.

ACTUARIO

ALEJANDRO MARTÍN LÓPEZ CERVANTES

ESTA HOJA CORRESPONDE AL AMPARO EN REVISIÓN 623/2017.
CONSTE.



410

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PRESIDENTE DEL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
P R E S E N T E.

PRIMERA SALA

R. 623/2017.

OF. No. 4454.

ANEXOS:

DOS COPIAS
CERTIFICADAS
CON VOTO
PARTICULAR.
(86 fojas cada una)

(580 fojas según
su último folio)

A R. (391 fojas según su
último folio y diversas
constancias sin foliar)

DOS TOMOS
DE PRUEBAS.
(Sin foliar)

UN DISCO
COMPACTO.

AFIDUJACIÓN SOBRE AMARILLO
DEBIDO A LA
FOLIA DE LA
SALA

En el amparo en revisión cuyo número se anota al

margen, esta Primera Sala dictó resolución que le remito en dos

copias certificadas con voto particular para su conocimiento y del

Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la

Ciudad de México, así como los anexos que se señalan al mismo

margen.

He de agradecer, se sirva ordenar el acuse de recibo

detallando lo que se remite.

Protesto a usted mi atenta consideración.

Ciudad de México, 30 de agosto de 2018.

LA SUBSECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

LIC. ELSA GUTIÉRREZ OLGUÍN.

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE ACUERDOS DE
LA PRIMERA SALA

LA SECRETARIA AUXILIAR DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA

LIC. ANA MIRIAM DE JESÚS ÁLVAREZ

Rem.

ORIGINAL:	COPIAS:
EXPEDIENTES: 2	ANEXOS: 5
OTROS: 3 anexos en 2 legajos y 1 sobre escrito	
FIRMA	
RECIBIDO: C. José María Campaño Bernal	

7

470
2/14

CUADERNILLO FORMADO EN EL
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017.

QUEJOSO: [REDACTED]

MINISTRO: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA:
LIC. LUZ ELENA OROZCO Y VILLA.

=====



2018 JUN 28 AM 11 16

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRO

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS

PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SOLICITANTE: PRIMERA SALA DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN
DECLARATORIA GENERAL DE
INCONSTITUCIONALIDAD
NÚMERO: 1/2018.

RELATIVA A LOS ARTÍCULOS 235,
ÚLTIMO PÁRRAFO, 237, 245,
FRACCIÓN I, 247, ÚLTIMO
PÁRRAFO Y 248 DE LA LEY
GENERAL DE SALUD

DECLARATORIA
GENERAL DE
INCONSTITUCIONALIDAD
1/2018

OF. SSGA-I-20212/2018.-PRIMERA SALA DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

OF. SSGA-I-20213/2018.-CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.

OF. SSGA-I-20214/2018.-CÁMARA DE SENADORES DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.

OF. SSGA-I-20215/2018.-PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL AGENTE
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA
FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

En el expediente que se menciona al margen, el
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el
acuerdo siguiente:

"SOLICITANTE: PRIMERA SALA DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN
DECLARATORIA GENERAL DE
INCONSTITUCIONALIDAD
NÚMERO: 1/2018
RELATIVA A LOS ARTÍCULOS 235,
ÚLTIMO PÁRRAFO, 237, 245,
FRACCIÓN I, 247, ÚLTIMO
PÁRRAFO Y 248 DE LA LEY
GENERAL DE SALUD
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
AMPAROS, CONTRADICCIONES DE
TESIS Y DEMÁS ASUNTOS

Ciudad de México, a diecinueve de junio de dos mil
dieciocho, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
1. Oficio PS_532/2018, de catorce de junio de dos mil dieciocho, de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, President de la Primera Sala de este Alto Tribunal, registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con el folio 026307.	Original

3-JUN-18

9:27

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

2. Resolución dictada el cuatro de noviembre de dos mil quince, por la Primera Sala de este Alto Tribunal en el amparo en revisión [REDACTED] bajo la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a la cual se acompañan los votos particular y concurrentes de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, respectivamente.	Copias 1 certificadas
3. Resolución dictada el once de abril de dos mil dieciocho, por la Primera Sala de este Alto Tribunal en el amparo en revisión [REDACTED], bajo la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, a la cual se acompaña el voto particular emitido por el citado Ministro.	Copias certificadas

Las constancias descritas anteriormente se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el catorce de junio del año en curso. Conste.

Ciudad de México, a diecinueve de junio de dos mil dieciocho.

Con el oficio, las copias certificadas de las ejecutorias y documentos de cuenta, fórmense y registrense los expedientes impreso y electrónico de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. Acúsense recibo.

Ahora bien, visto el contenido del oficio PS 532/2018 de catorce de junio del año en curso, de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de la Primera Sala de este Alto Tribunal, a través del cual señaló, que: "...de conformidad con el artículo 231 de la Ley de Amparo y el punto Segundo del Acuerdo General 15/2013 de veintitrés de septiembre de dos mil trece, relativo al procedimiento para la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, hago de su conocimiento que la Primera Sala se ha pronunciado respecto a la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, por estimados violatorios del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, al resolver los siguientes asuntos: - Amparo en Revisión [REDACTED] - Amparo en Revisión [REDACTED]. Le informo que igual pronunciamiento se hizo en el amparo en revisión 623/2017, fallado por mayoría de 4 votos en sesión de trece de junio de dos mil dieciocho, por lo que una vez que se concluya el trámite de engrose, le será enviada copia certificada de la sentencia...".

I. TRÁMITE. Atento a lo anterior y, al contenido de las resoluciones referidas en los puntos "2" y "3" de la cuenta, a través de la cual se hace del conocimiento a esta Presidencia que en dos ocasiones consecutivas, concretamente al resolver los amparos en revisión [REDACTED] y [REDACTED], fallados ambos por mayoría de cuatro votos en sesiones de cuatro de noviembre de dos mil quince y once de abril de dos mil dieciocho, respectivamente, la mencionada Primera Sala declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, por violación al derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹, 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación², 231, párrafo primero, de la Ley de Amparo³, y en el punto Segundo del Acuerdo General número 15/2013, de veintitrés de septiembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo al procedimiento para la declaratoria general de inconstitucionalidad⁴, es el caso de informar de la existencia de esos precedentes al Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, como

¹ 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

II. [...]

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

² ARTICULO 14. Son atribuciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia:

II. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los correspondientes proyectos de resolución.

³ Artículo 231. Cuando las salas o el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, resuelvan la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, en una o en distintas sesiones, el presidente de la sala respectiva o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora de la norma.

⁴ SEGUNDO. Una vez que el Pleno o las Salas de este Alto Tribunal determinen por segunda ocasión consecutiva la inconstitucionalidad de una norma general no tributaria, lo harán del conocimiento del Presidente de este Alto Tribunal, con el objeto de que ordene informar a la autoridad emisora la existencia de esos precedentes.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.
autoridad emisora de la normativa declarada inconstitucional, adjuntándole copias certificadas de las resoluciones respectivas, en la inteligencia que aún no se genera la jurisprudencia respectiva y de que, de conformidad con el artículo 107, fracción II, párrafo tercero⁵, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la declaratoria general de inconstitucionalidad deberá aprobarse por una mayoría de cuando menos ocho votos en la cual de obtenerse esa votación calificada se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de lo previsto en los artículos del 231 al 235 de la Ley de Amparo.

Por tanto, requiréase al Secretario de Acuerdos de la Primera Sala de este Alto Tribunal para que tan pronto establezca jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad específica de los citados preceptos legales, lo comunique a esta Presidencia para los efectos señalados en el punto Tercero del Acuerdo General mencionado⁶ y, en su caso, remita también copia certificada de las demás sentencias que en su momento integren ésta, con el objeto de continuar con el trámite del presente asunto.

II. NOTIFICACIONES. Notifíquese por medio de oficio al Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Procuraduría General de la República, esta última por conducto del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, con fundamento en los artículos 26, fracción II, de la Ley de Amparo y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.⁷

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar Morales, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina.
FIRMADO

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto inserto.

Protesto a usted mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a veinticinco de junio de dos mil dieciocho.

ETM/nad

ENC. CAROLITA JERÓNIMA
ACTUARIA JUDICIAL
OFICINA DE LA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

⁵ Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

[...]

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determina la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

⁶ TERCERO. Cuando el Pleno o las Salas establezcan jurisprudencia por reiteración, en la cual determinen la inconstitucionalidad de una norma general no tributaria, lo harán del conocimiento de la Presidencia de este Alto Tribunal, con el objeto de que mediante provido presidencial se ordene realizar la notificación a la que se refiere el párrafo tercero de la fracción II del artículo 107 constitucional, integrar el expediente de la respectiva declaración general de inconstitucionalidad y turnarlo al Ministro que corresponda.

Al referir oficio se acompañará copia certificada de las sentencias respectivas y, de preferencia, de las tesis jurisprudenciales correspondientes.

⁷ Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán:

II. Por oficio:

⁸ Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

XV. El Fiscal General de la República o el Agente del Ministerio Público de la Federación que al efecto designe, será parte en todos los juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga de procedimientos del orden penal y aquéllos que determine la ley.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

422
FORMA 423

REFERENCIA
PS-01675

CUADERNILLO DERIVADO DEL
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

En cinco de julio de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acuerdos da cuenta a la Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el oficio SSGA-I-20212/2018, recibido en esta Secretaría de Acuerdos. Conste. *[Firma]*

Ciudad de México, a cinco de julio de dos mil dieciocho.

Por encontrarse en engrose el amparo en revisión 623/2017, fórmese cuadernillo y agréguese a éste el oficio SSGA-I-20212/2018, del índice de la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, infórmese a dicha Subsecretaría que el amparo en revisión del que deriva este cuadernillo continúa en trámite de engrose, por lo que una vez que concluya el mismo se le remitirá copia certificada de la sentencia dictada en el amparo en revisión de referencia.

Asimismo, dígase que una vez que se establezca la jurisprudencia respectiva, se hará del conocimiento a la Presidencia de este Alto Tribunal y se enviarán las copias certificadas de las demás sentencias que la integren, para que se continúe con el trámite correspondiente a la declaratoria de inconstitucionalidad 1/2018.

En su oportunidad, agréguese el presente cuadernillo al expediente principal del amparo en revisión en comento.

Notifiquese.

Así lo proveyó y firma la **MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ**, Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciada María de los Ángeles Gutiérrez Gatica.

OACA.

El **09 JUL 2018**

, se notificó el acuerdo anterior a los interesados por medio de lista, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.



SECRETARÍA DE ACUERDOS DE LA
PRIMERA SALA.

422
474
FORMA 2

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

QUEJOSO: [REDACTED]

SECRETARÍA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA
SALA.

En la misma fecha, para notificar el acuerdo que antecede,
se giró el siguiente oficio:

OF. XIV-728-P

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Ciudad de México, a 9 de julio de 2018

LIC. OSCAR ALEJANDRO CRUZ AGUILAR
SECRETARIO AUXILIAR DE ACUERDOS DE LA PRIMERA
SALA

DAC:Ap:pb

1 OFICIO _____

1 MINUTARIO _____



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

424
AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

OF. XIV-728-P SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN.

En el expediente que se menciona al margen, la Presidenta
de la Primera Sala dictó el siguiente acuerdo:

"Ciudad de México, a cinco de julio de dos mil dieciocho.

Por encontrarse en engrose el amparo en revisión 623/2017,
fórmese cuadernillo y agréguese a éste el oficio SSGA-I-20212/2018,
del índice de la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, infórmese a dicha
Subsecretaría que el amparo en revisión del que deriva este cuadernillo
continúa en trámite de engrose, por lo que una vez que concluya el
mismo se le remitirá copia certificada de la sentencia dictada en el
amparo en revisión de referencia.

Asimismo, dígase que una vez que se establezca la jurisprudencia
respectiva, se hará del conocimiento a la Presidencia de este Alto
Tribunal y se enviarán las copias certificadas de las demás sentencias
que la integren, para que se continúe con el trámite correspondiente a la
declaratoria de inconstitucionalidad 1/2018.

En su oportunidad, agréguese el presente cuadernillo al
expediente principal del amparo en revisión en comento.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma la **MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA
HERNÁNDEZ**, Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, ante la Secretaria de Acuerdos que autoriza y
da fe, licenciada María de los Ángeles Gutiérrez Gatica."

Lo que comunico para los efectos legales a que haya lugar.

Le reitero mi atenta consideración.

Ciudad de México, a 09 de julio de 2018.

SECRETARÍA DE ACUERDOS
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECRETARÍA DE ACUERDOS DE LA
OACG

SECRETARÍA DE ACUERDOS
ACQUAR

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
9 JUL. 2018
OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
PRIMERA SALA

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

2017 SEP 3 AM 11:55

2018 SEP 6 PM 12:43

SECRETARÍA DE AGRI-
CULTURA Y RIEGO
REVISIÓN DE ENFERMEDADES
Y PLAGAS

PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

PS-02232

VOTO CONCURRENTES QUE FORMULA EL MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ EN EL AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

En el asunto citado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos, determinó la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, y concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Cofepris le expidiera una autorización para la realización de los actos relacionados con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos (adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar) en relación exclusivamente con el estupefaciente *cannabis* y el psicotrópico THC, sin que ello implicara la autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de dichas sustancias.

A diferencia de los precedentes anteriores¹ en los que se concedió el amparo a la parte quejosa con efectos similares, en este asunto se estableció que debe autorizarse también la adquisición de la semilla, ordenando a la Cofepris establecer los lineamientos y modalidades de tal adquisición. Sin embargo, la metodología, consideraciones y

¹ Estos son los amparos en revisión [REDACTED] y [REDACTED] resueltos el primero en sesión de cuatro de noviembre de dos mil quince por mayoría de cuatro votos de los Ministros Olga María del Carmen Sánchez Cordero, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (ponente) y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en contra del emitido por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, y el segundo en sesión de once de abril de dos mil dieciocho por mayoría de cuatro votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, en contra del emitido por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo (ponente).

6- Sept 18
1531

efectos de la sentencia recuperan esencialmente el amparo en revisión [REDACTED]², por lo que refrendo las razones de mi concurrencia en este voto.

1. Introducción

La experiencia de los últimos cincuenta años demuestra que la política prohibicionista en materia de drogas ha fracasado y que, por lo tanto, la misma requiere un cambio. Sin que haya disminuido la prevalencia de las adicciones en el mundo ni en nuestro país, es claro que la política que limita el acceso a sustancias controladas ha contribuido a incrementar la violencia y la corrupción asociadas a la delincuencia organizada, ha lastimado tanto a comunidades como a individuos, y ha generado un mercado negro de millones de dólares, afectando con todo ello los derechos humanos y la salud de la población mundial y nacional.

En estas circunstancias, urge un debate amplio, incluyente e informado que lleve a todas las autoridades del Estado mexicano y a la sociedad, a replantearse el modo de aproximación al fenómeno del consumo y producción de drogas. Estoy seguro que ninguno de mis compañeros ministros, ni aún los más favorables a la legalización de las drogas, pretenden que ésta se lleve a cabo sin la apropiada regulación.

Ahora bien, en el presente asunto, la Primera Sala estaba llamada a responder si la negativa de la autoridad administrativa para emitir una

² Resuelto en sesión de cuatro de noviembre de dos mil quince por mayoría de cuatro votos de los Ministros Olga María del Carmen Sánchez Cordero, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (ponente) y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en contra del emitido por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

autorización a un individuo a fin de que adquiriera semillas, siembre, cultive, coseche, prepare, posea y transporte el estupefaciente conocido como *cannabis* y el psicotrópico THC para su uso lúdico o recreativo, es o no violatorio de sus derechos humanos. Partiendo del estudio realizado respecto al derecho al libre desarrollo de la personalidad en el amparo en revisión [REDACTED], la sentencia analizó la proporcionalidad de la medida legislativa que prohíbe realizar diversas actividades relacionadas con la producción y el consumo de marihuana, para concluir que tal medida no sólo es *innecesaria*, al existir medios alternativos igualmente idóneos que restringen menos el derecho, sino que además es *desproporcionada* en sentido estricto, toda vez que genera una protección mínima a la salud y al orden público frente a la intensa intervención al derecho de las personas a decidir qué actividades lúdicas desean realizar.

Como ya adelanté, si bien llegué a coincidir en que la negativa a otorgar la autorización administrativa al quejoso resulta violatoria de sus derechos, específicamente de su autonomía personal, difiero de la metodología utilizada para ello, así como de los alcances de los efectos. Estoy convencido de que nuestra resolución debió conllevar efectos mayores y más específicos, así como hacerse cargo de las medidas necesarias para una concesión integral del amparo. Es más, me parece que de no prever medidas exhortativas de carácter estructural, lejos de estar protegiendo los derechos de nuestros ciudadanos, los estaríamos poniendo en riesgo. Me explico.

2. Crítica a la metodología de la sentencia

En primer lugar y toda vez que nuestra decisión implicaba un pronunciamiento general sobre la política nacional en materia de drogas, en la que están involucrados diversos temas tales como la afectación a la salud de los individuos, la salud pública, el orden público, la violencia, la delincuencia y la corrupción, hubiera sido deseable acudir a conocimiento técnico y científico especializado *de manera formal*, así como escuchar las opiniones de diversos sectores.

Este modo de proceder lo ha llevado a cabo la Suprema Corte en ocasiones anteriores, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y en los Acuerdos Generales Plenarios 10/2007, por el que se establecen los lineamientos para la comparecencia de especialistas, y, el 2/2008, en el que se establecen los lineamientos para la celebración de audiencias relacionadas con asuntos cuyo tema se estime relevante, de interés jurídico o de importancia nacional.

Fue con base en dichos acuerdos que el Tribunal Pleno se allegó de conocimientos especializados y escuchó a la opinión pública en asuntos de relevancia y trascendencia, tales como los relativos a la interrupción del embarazo, las telecomunicaciones y el sistema de deducciones tributarias conocido como costo de lo vendido.

Recordemos que en las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra las leyes que autorizaban la interrupción del embarazo en el Distrito Federal, un tema particularmente sensible para la sociedad mexicana, se realizó un ejercicio amplísimo con la finalidad de que este Alto Tribunal se allegara de la mayor y mejor información posible sobre el tema debatido. En materia de salud, se requirió a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE y a los Institutos o



6423
428

VOTO CONCURRENTE
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Secretarías del ramo de cada una de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como al Consejo Nacional de Población. En materia de administración de justicia, se requirió a los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, a las Procuradurías Generales de Justicia de todas las entidades federativas y del Distrito Federal, a los Presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito en materia penal y mixta, y a los Magistrados de Tribunales Unitarios de Circuito y a los Jueces de Distrito, en las mismas materias. Asimismo, se ordenó el desahogo de diversas pruebas periciales médicas, bioquímicas y biológicas a cargo de expertos de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional e, incluso, de la Universidad Nacional de Colombia. Además, se celebraron diversas sesiones de comparecencia, a fin de que asociaciones, agrupaciones y particulares manifestaran sus ideas en audiencias públicas. Tal ejercicio involucró la participación de aproximadamente 80 personas de muy distinto origen, formación e ideología. Incluso, se creó un micrositio en la página electrónica de la SCJN, de acceso abierto al público, con todo el material documental y audiovisual recibido y generado en relación con el asunto.

Desde mi perspectiva, haber realizado respecto del tema de la legalización de la marihuana un ejercicio como el acabado de mencionar, con la intervención de todos los actores relevantes y de la opinión pública, hubiera permitido a esta Suprema Corte de Justicia no solo resolver este caso concreto, sino constituirse en el foro nacional para la discusión y futura implementación de una política integral en materia de drogas.

Un segundo aspecto metodológico que no comparto de la sentencia es que, al colocar el derecho al libre desarrollo de la personalidad como premisa mayor, dificulta la posibilidad de intervención estatal cuando estamos frente a una sustancia que produce una afectación “no tan grave” en la salud de las personas. En la lógica de la resolución, no se entiende por qué se requeriría una autorización administrativa para realizar las actividades relacionadas con su consumo, las cuales deberían considerarse siempre permitidas y sin posibilidad alguna de límite.

No coincido en que el Estado abdique de su facultad regulatoria simplemente porque una sustancia no sea “tan dañina”. La obligación constitucional es garantizar positivamente el derecho a la salud. Lo que resulta desproporcionado —y en esto concuerdo con la posición mayoritaria— es que el Estado pretenda utilizar el Derecho Penal para proteger el derecho a la salud y el orden público. Sin embargo, ello no puede ni debe traducirse en un coto vedado para la acción estatal. En otras palabras, que el consumo de cierta sustancia se encuentre permitido no tiene como consecuencia que el Estado esté impedido para regular las conductas asociadas a tal consumo ni prevenir, atender o tratar sus efectos. Si bien la misma resolución acepta que las campañas de información y las estrategias de salud pública serían más efectivas que la prohibición misma, al final su construcción argumentativa se centra en la *no intromisión estatal* frente a las libertades individuales, lo cual dificulta asumir y desarrollar un enfoque de **salud pública**, indispensable para proteger debidamente los derechos humanos de la población en general, y el derecho a la salud en particular.



428
429

VOTO CONCURRENTES
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Asimismo, me preocupa que conforme a la argumentación de la sentencia, el único valor a tomarse en cuenta para evaluar la proporcionalidad de la medida legislativa sea la magnitud del daño generado. Me parece, con todo respeto, que el grado de afectación no es el único criterio que el legislador puede tomar en cuenta legítimamente para regular una sustancia. Además de que la resolución denomina "magnitud del daño", el legislador puede tomar en cuenta, por ejemplo, las posibles formas de uso y abuso, las posibilidades legales y fácticas de combatir el abuso con éxito, las costumbres de la sociedad, el marco de cooperación internacional para el control y la lucha en contra de las drogas y, de manera muy relevante, la incidencia de la delincuencia organizada que participa en su comercialización.

En este sentido, soy de la opinión que cerrar la discusión a la oposición del libre desarrollo de la personalidad y la magnitud del daño que genera el consumo de cierta sustancia, es una sobresimplificación del problema que representa el análisis de la política estatal en materia de drogas, y deja en una pobre posición al Estado para generar la regulación que garantice los derechos humanos de la población a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales aplicables, tal como nos lo mandata el artículo 1º constitucional.

Tampoco me convence la comparación que realiza la resolución entre la marihuana con el tabaco y el alcohol, por ser sustancias que producen "un daño similar". Me parece que cada sustancia debe ser regulada conforme a sus especificidades y que, de hecho, sería plenamente justificado a la luz de la Constitución darle un tratamiento

diferenciado a cada una de ellas. Contrariamente a lo que sostiene la resolución, de que el tabaco y el alcohol se encuentren regulados y no prohibidos, no se sigue en automático que deba autorizarse la adquisición de semilla, siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión y transporte de la marihuana. Máxime que una traslación así obligaría también a aceptar su venta y comercialización, pues no habría justificación para negarlas, si el tabaco y el alcohol se venden y comercializan.

En suma, si bien estoy de acuerdo con los resolutivos de la sentencia, me parece que el camino propuesto para llegar a ellos resulta cuando menos problemático y carece del componente fundamental que debiera acompañar una resolución como la que fallamos: esto es, el enfoque de salud pública, pues la autorización de las sustancias necesariamente conlleva su regulación a partir del eje central de la salud pública.

3. Crítica a los efectos del amparo

En la sentencia se determinó la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud para el efecto de que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la COFEPRIS le expidiera una autorización al quejoso para la realización de los actos relacionados con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos (adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar) en relación exclusivamente con el estupefaciente *cannabis* y el psicotrópico THC, sin que ello implicara la autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier



481
435

VOTO CONCURRENTENTE
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de dichas sustancias.

Quiero llamar la atención en que la resolución no se refiere a una alternativa de despenalización general de las conductas relacionadas con la marihuana. Únicamente se refiere a la posibilidad de autorizar a un quejoso que solicitó un amparo para la realización de las conductas relacionadas con el uso lúdico o recreativo de la marihuana. La autorización que se debe otorgar no hace, entonces, ninguna diferencia para todos aquellos individuos que en el pasado realizaron idénticas conductas y que por lo mismo se encuentran ya privados de su libertad. Tampoco permiten la realización de las conductas señaladas por aquellas personas que no tengan el permiso de la autoridad sanitaria responsable. Esto es y en términos de los efectos de la sentencia, para la realización de las conductas indicadas sería necesaria, además de la solicitud de la autorización, la obtención de un amparo por cada individuo consumidor, ya que hasta en tanto la autoridad legislativa no modifique las disposiciones legales prohibicionistas, los sujetos que no cuenten con la autorización correspondiente podrán ser procesados.

Es por todo ello que, de la manera más franca y respetuosa, no coincido con los alcances de los efectos. Soy de la opinión que no debimos otorgar una autorización al quejoso sin acompañarla de lineamientos para el establecimiento de una política pública integral en materia de drogas. El hecho de que no exista evidencia científica concluyente sobre el grado de afectación que causa el consumo de la marihuana, como la propia sentencia lo reconoce, no nos permite

considerarla como una sustancia inocua, de ahí que tengamos frente a nosotros un reto enorme en términos de salud pública.

No hay que perder de vista que a nivel mundial, la permisión y descriminalización del uso recreativo de la marihuana se ha dado mediante procesos de deliberación democrática en el seno de congresos y parlamentos. Los cuatro casos que cita la sentencia, esto es, el de los estados de Colorado y Washington en los Estados Unidos de América, los Países Bajos y Uruguay, han sido producto de amplios procesos legislativos, acompañados de la implementación de políticas públicas muy sólidas. Si bien las causas, procesos de implementación, regulación y consecuencias varían de país en país, un elemento común es que dichas medidas se han dado en un marco regulatorio fuerte, ordenado, integral y consensado democráticamente.

Pongamos un par de ejemplos. En el caso específico de Uruguay, si bien estaba permitido el consumo personal desde 1974, fue hasta 2011 que se llevó a cabo el primer debate para la permisión del cultivo de marihuana, en el cual el Parlamento uruguayo discutió la posible despenalización del cultivo de *cannabis* y la reforma de la penalización para quienes comerciaran con dicho producto. Este debate no sólo tuvo resonancia legislativa, sino que el sector social, medios nacionales e internacionales apoyaron dichas medidas. En 2013, el Senado uruguayo aprobó la Ley 19.172 mediante la cual se reguló la producción, distribución y venta de *cannabis*. Con esto se estableció que era el Estado quien asumiría el control y regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de *cannabis* y sus derivados. Uno de los móviles o fuerzas motivantes de dicha Ley fue la de proteger a los



430
431

VOTO CONCURRENTES
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

habitantes del país de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico. Con este primer ejemplo quiero destacar que la legalización de la marihuana en Uruguay no se dio como una medida aislada, sino en el marco de un proceso regulatorio integral.

Por su parte, el estado de Colorado convocó a una iniciativa popular en 2012, en la que los ciudadanos votaron a favor de la enmienda 64 que reformó la Constitución del Estado, permitiéndose el uso recreacional de la marihuana, así como su cultivo comercial y venta. Este esfuerzo ciudadano tampoco se plasmó como algo aislado, ya que posteriormente a la aprobación de la citada enmienda, el Gobernador firmó un decreto mediante el cual creó un grupo especial encargado de analizar todos los temas relacionados con las políticas públicas y regulaciones de la misma. Este grupo especial tiene la encomienda de entregar cada determinado tiempo un reporte sobre la implementación y las medidas que se considera que deben ser tomadas por el gobierno del Estado al respecto. Así, lo que inició a través de un proceso de democracia directa, se reforzó por una política integral del Estado que busca darle respuesta efectiva a las decisiones de la población.

Contrariamente a las experiencias relatadas, nuestras sentencias están dando inicio a un proceso a la inversa, pues previo a la construcción de un marco regulatorio, se están otorgando autorizaciones administrativas con fundamento en una resolución *jurisdiccional*. Ello conlleva una enorme responsabilidad para este Alto Tribunal y por eso soy de la convicción de que nuestra sentencia debió

precisar de la mejor manera posible, no solo los efectos concretos sino también las medidas exhortativas de carácter estructural.

Desde mi perspectiva, esto es técnicamente posible ya que la Nueva Ley de Amparo así lo prevé y la Constitución así nos lo mandata. En efecto, los artículos 74, fracción V; 77 y 78, último párrafo, imponen a los juzgadores federales la obligación de establecer, no sólo los *efectos* en que se traduce la concesión de amparo, sino también las *medidas* adicionales a la inaplicación de las normas declaradas inconstitucionales para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado. Esto, en consonancia con el artículo 1º de la Constitución, que obliga a todas las autoridades a reparar las violaciones a los derechos humanos. El importante cambio llevado a cabo en la Nueva Ley de Amparo, nos ha despojado del carácter de meros legisladores negativos, y nos ha impuesto atribuciones propias de un auténtico Tribunal Constitucional, encargado de la más amplia protección de la Constitución y los derechos humanos.

En el sistema interamericano, la Corte ha sido enfática al interpretar que la obligación de reparación contenida en el artículo 63.1 de la Convención Americana, entraña el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias a fin de que hechos similares no se vuelvan a repetir y a contribuir a su prevención. Sobre este punto pueden verse lo resuelto en *Mack Chang vs. Guatemala*, *Cinco Pensionistas vs. Perú* o *Bulacio vs. Argentina*, por ejemplo.

Francamente, me parece que la sentencia se quedó corta asumiendo únicamente los efectos tradicionales del juicio de amparo. No debió pasarse por alto que la resolución introduce una modificación sustancial en la política estatal en materia de drogas. En razón de lo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

anterior, y a fin de prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos, como Tribunal Constitucional teníamos la obligación de identificar y después exhortar a todas las autoridades del Estado, a adoptar todas las medidas legales administrativas y de otra índole, que fueran necesarias para hacer efectivo el ejercicio pleno de los derechos humanos de todos los gobernados. Sobre el particular, la Corte Interamericana ha señalado que dicho actuar es el adecuado para cumplir con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos, ello desde el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras hasta casos recientes como Atavia Muñoz vs. Costa Rica o Cruz Sánchez vs. Perú.

Dicha obligación de reparar no debe ser extraña para el Estado mexicano. La Corte Interamericana, en todos los casos contenciosos en los que México ha sido condenado, ha ordenado la adopción de medidas de no repetición con el objeto de reparar integralmente el daño causado por las violaciones de derechos humanos en cada situación. Así, se le ha ordenado a nuestro país modificar la legislación en materia de acceso a la justicia electoral (Castañeda Gutman); fortalecer las capacidades institucionales del Estado mediante la capacitación de funcionarios de las Fuerzas Armadas sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos (Fernández Ortega y Rosendo Cantú); realizar reformas constitucionales y legislativas en materia de jurisdicción militar (Radilla Pacheco); fortalecer el funcionamiento y utilidad del marco del registro de personas detenidas en el país (Cabrera García y Montiel Flores) y, finalmente, capacitar a operadores de justicia para que puedan

identificar, reaccionar, prevenir, denunciar y sancionar el uso de técnicas de tortura (García Cruz y Sánchez Silvestre).

La emisión de resoluciones estructurales que contengan efectos mucho más ambiciosos y acordes con la dimensión del problema planteado, tampoco ha sido ajena en el Derecho comparado. No pretendo sostener, en modo alguno, que lo resuelto por los tribunales constitucionales nos resulte vinculante simplemente quiero ilustrar que los conflictos planteados ante este tipo de órganos jurisdiccionales han generado soluciones como las que actualmente nos otorga nuestro propio orden jurídico.

Un buen referente es el caso de la Corte Constitucional de Colombia, que en las sentencias T-153/98, T-025/04, y T-760/08, incluyó diversas medidas, no sólo para declarar la inconstitucionalidad del estado de cosas en relación con el establecimiento carcelario, la situación de la población interna desplazada y el acceso a los servicios de salud, sino para establecer los lineamientos que permitieran reformar de manera sistémica dichas problemáticas en el Estado colombiano. Este proceder judicial implicó la determinación de acciones reales y concretas ordenadas a las autoridades responsables, en el marco de un proceso público de debate, decisión y ejecución de políticas. Ejercicios semejantes se han realizado por otros tribunales constitucionales, destacando los de Argentina, Costa Rica, India y Sudáfrica, primordialmente.

En mérito de lo expuesto, considero que la resolución debió atender a **dos dimensiones** de los efectos y medidas propios de la concesión del amparo. La primera correspondía al caso concreto que efectivamente se traduce en el otorgamiento de una autorización



administrativa específica para el quejoso. La segunda dimensión era mucho más relevante, pues a través de ella debimos emitir una sentencia exhortativa de carácter estructural que posibilitara la creación de una política pública integral en materia de drogas.

4. Propuesta de efectos adicionales concretos para fortalecer el amparo otorgado

Por lo que hace a los efectos de la sentencia, y bajo la lógica de lo pedido por el quejoso, me parece que no debimos limitarnos a señalar que debían otorgarse autorizaciones, sino que desde aquí debimos tratar de modular la actuación de la autoridad sanitaria administrativa, en este caso Cofepris. No haberlo hecho así implica dejar a la autoridad con un amplio margen de discrecionalidad que, incluso, podría poner en predicamento el cabal cumplimiento de lo que se está ordenando en la sentencia. Si bien se ordena a la Cofepris a establecer lineamientos y modalidades respecto a la adquisición, los cuales deben dar cauce al derecho al libre desarrollo de personalidad del quejoso, lo anterior es insuficiente para definir la actuación administrativa.

Al respecto, es importante hacer notar que la sentencia implica el otorgamiento de autorizaciones que, hasta el momento, Cofepris no podía conceder por no estar reguladas de manera expresa en sus facultades. Por ello, era necesario señalar en el fallo ciertos lineamientos generales que podría seguir dicha autoridad, a partir de lo previsto en la Ley General de Salud, Títulos Décimo Sexto y Décimo Séptimo, relativos a autorizaciones y certificados, y vigilancia sanitaria,

respectivamente. Desde mi punto de vista, sólo así se hubiera logrado reparar de manera efectiva al quejoso en el goce de sus derechos al dotarlos de un marco jurídico certero que satisfaga la seguridad jurídica.

Así, conforme al artículo 368 de la Ley General de Salud, Cofepris debería otorgar una autorización sanitaria mediante la cual permita al quejoso la realización de los actos relacionados con el autoconsumo personal con fines recreativos (adquisición de semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar) del estupefaciente *cannabis* y el psicotrópico THC. Dicha autorización debería ser otorgada por tiempo indeterminado, en términos del artículo 370, en el entendido de que la misma podrá ser revocada si se incurre en alguno de los actos que la propia sentencia de amparo señala como no permitidos, tales como el comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de dichas sustancias.

De acuerdo con el artículo 378, esta autorización podría ser revisada por la autoridad sanitaria competente a través de las visitas de verificación previstas en los artículos 396, fracción I y 396 bis del mismo ordenamiento legal. La referida autoridad sanitaria podría revocar las autorizaciones en diversos supuestos, por ejemplo, cuando el ejercicio de las mismas exceda los límites fijados o se dé un uso distinto a éstas; en caso de que el autorizado desacate de manera reiterada las órdenes que dicte la autoridad sanitaria; cuando el interesado no se ajuste a los términos, condiciones, requisitos de sus autorización o haga un uso indebido de ésta; en el supuesto de que los objetos o productos dejen de reunir las condiciones o requisitos bajo las cuales se haya otorgado la autorización o cuando lo solicite el interesado, todo ello en términos de lo previsto en las fracciones II, III,



432
FONDA 432
431

VOTO CONCURRENTES
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

V, IX, X y XI del artículo 380 de la Ley General de Salud, y otorgando la garantía de audiencia establecida en el 382, para que los interesados ofrezcan pruebas y aleguen lo que a su derecho convenga.

5. Propuesta de sentencia exhortativa de carácter estructural

En lo tocante a la segunda dimensión necesaria de esta sentencia y con fundamento en los artículos 1º de la Constitución Federal, así como 74, fracción V, 77 y 78, último párrafo, de la Ley de Amparo, estimo que los efectos de la resolución debieron incluir, como mínimo, lo siguiente:

Exhortar a todas las autoridades del Estado mexicano involucradas en la política pública nacional en materia de drogas, a revisar el modelo prohibicionista a fin de replantear el marco normativo para evitar la violación de los derechos humanos de los gobernados y enfocar el problema desde el punto de vista de la salud pública integral, así como para ajustar todo el esquema de la prohibición sancionada penalmente al de la legalización regulada bajo los parámetros generales de la salud pública y la protección de los derechos humanos de los consumidores y no consumidores. Este ejercicio implicaba involucrar al menos a las siguientes autoridades:

A. Poder Legislativo

Exhortar al Congreso de la Unión para que, en el ejercicio de sus atribuciones, realice una revisión de todos los ordenamientos legales

relacionados con la política prohibicionista del Estado en materia de drogas.

Por ejemplo, tiene que considerar la modificación de la Ley General de Salud, concretamente los artículos 234, 235, 245, 247, 456, 474, 478 y 479 de dicho ordenamiento, con el fin de hacer posible la permisión para el uso lúdico de la marihuana, como conducta excluyente del delito. Y con particular relevancia, que las acciones de adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de la marihuana para fines lúdicos o recreativos, no pueden estar sujetas a los límites estrictos de la cantidad (5 gr.) establecida en la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato, prevista en el artículo 479 del aludido ordenamiento.

En caso de que en el nuevo marco legal se estimara necesaria la tramitación de una autorización para realizar estas actividades se requerirá también revisar los Títulos Décimo Sexto y Décimo Séptimo de la Ley General de Salud, relativos a autorizaciones y vigilancia sanitaria.

Exhortarlo también para que respecto al Código Penal Federal, el Congreso modifique los artículos 194, 195, y 195 bis, fracción II, lo anterior a efecto de incorporar la delimitación de las conductas que comprenden el uso lúdico y recreativo de la marihuana (adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte), a fin de que no pueda ser objeto de persecución penal.

Asimismo, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, modificar el artículo 2, fracción I, para hacer congruente el sistema normativo penal y comprender como excluyente de delito el uso de la



434
435

VOTO CONCURRENTE
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

marihuana para fines lúdicos, en los términos anteriormente precisados.

Convendría considerar también bajo el paradigma de la permisión, la expedición de una ley para regular la producción, consumo, control y vigilancia de dichas sustancias, en la que se determinen cuestiones como la cantidad de plantas de *cannabis* que una persona pueda sembrar para su consumo personal y los espacios propios en los que se podrá llevar a cabo el autoconsumo.

Adicionalmente, debimos *exhortar* al legislador a revisar las normas jurídicas que regulan la concesión de los beneficios para el cumplimiento alternativo o anticipado de las penas. Ello con el fin de suprimir como requisito para su otorgamiento, la prohibición de consumir el estupefaciente marihuana, ya sea en términos estrictamente lúdicos o por que el sentenciado tenga el carácter de farmacodependiente. Restricción que actualmente está reflejada en los artículos 84, fracción III, inciso c), y 90, fracción II, inciso d), del Código Penal Federal.

Finalmente, debimos *exhortar* a la Cámara de Diputados para que al aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, hubiera implementado las medidas presupuestarias con el fin de incrementar los recursos necesarios a las autoridades competentes en materia de prevención y control de adicciones.

B. Poder Ejecutivo Federal

Exhortar al Poder Ejecutivo Federal y a su Administración Pública, para que elabore un programa nacional en el que se fijen los objetivos, metas, estrategias y prioridades para delinear una política pública integral en materia de drogas. Asimismo, para que lleve a cabo la adecuación de los reglamentos correspondientes una vez que el Congreso de la Unión haya expedido las reformas relativas, con el objeto de incluir el uso recreativo de la marihuana.

En el ámbito de los órganos auxiliares del Poder Ejecutivo, se tendría que haber instado a las siguientes autoridades:

a. Autoridades sanitarias

i. **Secretaría de Salud**

- Tomar en consideración las opiniones rendidas por el Consejo Nacional contra las Adicciones y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud para la elaboración del anteproyecto de presupuesto para la prevención y el combate de las adicciones.
- Elaborar y expedir por conducto de la Cofepris, las normas oficiales mexicanas en materia de regulación, control y fomento sanitarios vinculados con la producción para el autoconsumo de la marihuana y vigilar su cumplimiento.
- Proponer a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud las políticas en las materias de prevención y promoción de la salud, en específico las necesarias para combatir las adicciones, así como coordinar el desarrollo de los Centros Nacionales para la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Prevención y Control de las Adicciones, y emitir las normas para la evaluación del desempeño de los centros estatales de salud en materia de prevención y el control de las adicciones.

- Instrumentar, supervisar y evaluar, por conducto del Consejo Nacional contra las Adicciones, las estrategias de comunicación social, materiales didácticos y metodologías para la capacitación del personal que operará los programas para el control de las adicciones.

Así, además de las cuestiones ya referidas, la resolución debió exhortar a tomar en cuenta las disposiciones administrativas aplicables al tratamiento de las adicciones. En especial, las repercusiones que tendrá el fallo en la NOM-028-SSA2-2009 Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

Adicionalmente, considero que la determinación que se tomó en este caso, debió tener repercusiones en otras normas oficiales mexicanas. Por citar algunos ejemplos, señalo las referidas a salud escolar, vigilancia epidemiológica y las que regulan la prestación de servicios de salud en general.

ii. Consejo de Salubridad General

- Emitir las disposiciones generales y las medidas que rediseñen la estrategia integral de prevención, consejería, tratamiento y control de adicciones y, en concreto, las

referentes al consumo de la marihuana desde el ámbito de la salud pública.

b. Autoridades educativas

Exhortar a la Secretaría de Educación Pública a:

- Evaluar en coordinación con la Secretaría de Salud, la inclusión en los programas académicos de información detallada sobre el consumo de drogas y sus riesgos, así como la prevención de las adicciones.
- Realizar campañas de sensibilización sobre los riesgos y daños asociados con el consumo de drogas.

c. Autoridades hacendarías

Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a tomar en especial consideración en los ejercicios fiscales posteriores al 2019, el proyecto de presupuesto que le envíe la Secretaría de Salud, el cual deberá recoger las observaciones de las autoridades administrativas competentes en materia de adicciones, para la elaboración de la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación que en los años sucesivos enviará al Congreso de la Unión.

d. Autoridades en materia de política exterior

Exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que considere los efectos que el cambio en la política nacional de drogas pueda llegar a



434
437

VOTO CONCURRENTE
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

tener en el ámbito del sistema de fiscalización internacional de estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas.

e. Autoridades encargadas de procuración e impartición de justicia

Exhortar a la Procuraduría General de la República y demás autoridades encargadas de la administración de justicia a realizar una revisión de las investigaciones y procesos penales en trámite, así como de los procedimientos de ejecución de penas impuestas derivadas de la comisión del delito contra la salud, que implique estrictamente la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de la marihuana para fines lícitos.

Ello, para el efecto de, en su caso, establecer la procedencia del no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, el sobreseimiento de causas penales o extinción de sanciones, derivado de la actualización de una causa excluyente de delito, de conformidad con lo prescrito en los artículos 56 y 117 del Código Penal Federal.

C. Autoridades estatales

Toda vez que las determinaciones que conlleva esta sentencia impactan a la totalidad del orden jurídico mexicano, esta Suprema Corte de Justicia debió de haber exhortado a las autoridades estatales, del Distrito Federal y municipales a adecuar sus normas jurídicas, planes, programas y presupuestos, a la realización de las acciones necesarias para regular, en el ámbito de sus competencias lo

necesario para hacer eficaz la implementación de una política nacional sustentada en el paradigma de la salud pública y no así en el de la criminalización.

6. Conclusiones

Si en contra de lo que ha sido la experiencia internacional, esta Suprema Corte dio un paso tan grande para lograr la legalización de las drogas, hubiera sido deseable ser igualmente previsores y responsables para generar una sentencia de la misma magnitud, dada nuestra jerarquía de jueces supremos de la Nación.

Por todo lo anterior mi voto fue a favor de los puntos resolutive de la sentencia, separándome de lo que he apuntado en el presente documento.



MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ



SECRETARIA DE ACUERDOS



LIC. MARÍA DE LOS ANGELES GUTIÉRREZ GATICA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

REFERENCIA
PS-02232

437438
VORAMA 2017
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

En diez de septiembre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acuerdos da cuenta a la Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el voto concurrente formulado por el **MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ**, recibido en esta Secretaría de Acuerdos; así como con el estado que guardan los presentes autos. Conste.

Ciudad de México, a diez de septiembre de dos mil dieciocho.

Agréguese a los autos el voto concurrente que formuló el **MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ**, anunciado en sesión de trece de junio del año en curso.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese copia digitalizada del voto concurrente en comento, vía MINTERSEJN, al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

En otro aspecto, visto el estado que guardan los presentes autos, en cumplimiento al proveído de cinco de julio del año en curso, dictado en el cuadernillo derivado del amparo en revisión en que se actúa, expídase y remítase copia certificada de la sentencia dictada en el presente asunto, a la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

Notifíquese.

Así lo proveyo y firma la **MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ**, Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciada María de los Ángeles Gutiérrez Gatica.

OACA

EL 11 SEP 2018

Se notificó el acuerdo anterior a los interesados por medio de lista, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de envío

Órgano requerido:	DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO
Fecha de ingreso de acuerdo de requerimiento:	10/09/2018 14:21:20
Fecha de envío:	10/09/2018 20:40:00
Fecha de acuerdo de requerimiento:	10/09/2018
Requerimiento:	DEL ACUSE DE RECIBO
Síntesis del acuerdo:	GLÓSESE EL VOTO DE CUENTA Y REMÍTASE COPIA DEL MISMO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE ANTECEDENTES PARA SU CONOCIMIENTO. POR OTRA PARTE, REMÍTASE COPIA DE LA RESOLUCIÓN A SECRETARÍA DE ANTECEDENTES. NOTIFIQUESE.
Tipo de expediente del órgano requirente:	AMPARO EN REVISIÓN
Núm. de exp. del órgano requirente:	623/2017
Núm. de oficio del órgano requirente:	MI/PS/7/4551/2018

Detalle de requerimiento y constancias remitidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo y núm. exp. del órgano requerido	Tipo de requerimiento o de constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente
Acuerdo	██████████ AMPARO EN REVISIÓN	DEL ACUSE DE RECIBO	(2) ORIGINAL
Fecha de acuerdo: 10/09/2018			
Constancia 1	██████████ AMPARO EN REVISIÓN	VOTO DEL MINISTRO	(25) ORIGINAL

* En el cómputo de número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
 Archivo Firmado: PeticionExterno-470_740114.pdf
 Secuencia: 2159728

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

490
6/29

Firmante	Nombre:	ALEJANDRO MARTIN LOPEZ CERVANTES	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	LXCA890921HDFPRL03			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000000012d8	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	11/09/2018T01:40:05Z / 10/09/2018T20:40:05-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	09 08 42 bc bc 0d 54 65 24 fb ab 9e 6c 18 65 42 62 70 68 05 4e d8 55 8f 23 59 fe f6 36 90 2a fa 8a b8 06 ac 8e 27 be 85 b7 95 e9 10 b9 55 65 ff b2 d9 52 e0 44 a7 77 8c 97 d9 72 1d 3e b8 04 3a a0 73 1a 25 93 1f 41 0e d6 e8 81 67 ad 9a 44 72 0a ab 58 e2 b1 b7 a8 42 de ea c7 e5 dc 2c 34 3a 3d 1a e5 4c 5a d2 b1 6c b9 88 2d 3a 1d 97 ab 1d bd 6b d8 2f 07 8a 36 69 5c d1 ec 0a 73 0e 70 df 46 06 4b 1b 8e f7 e6 7d d5 1b 2e fb 25 63 09 fd b4 39 e4 31 16 b6 fc f1 8e 7e 86 4d 10 5e 3e 72 e9 b3 18 fa 63 f5 44 de 4e ee 99 22 56 b3 64 89 f7 a1 0f 62 0f 06 66 d2 ee 9e 1b a1 d8 a7 7f 41 60 26 b9 d0 d8 fd aa 53 1d ab 78 2f 83 26 91 e7 1e fa e4 e9 a5 b3 df ae e0 b5 56 e7 3c be d0 5d 25 a2 01 ae 5c f7 d1 96 3c 40 ab 19 d4 49 c7 95 c4 17 fa dd 48 6a 95 a3 50 80 9f d6 06 00 ef 05			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	11/09/2018T01:40:06Z / 10/09/2018T20:40:06-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000000012d8			
JP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	11/09/2018T01:40:05Z / 10/09/2018T20:40:05-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2162583			
	Datos estampillados:	320AFC19C533A7BF4E055ABCD0FB6A4169651460			



440
COMA A-53

SECRETARÍA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

QUEJOSO: [REDACTED]

SECRETARÍA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA.

En la misma fecha, para notificar el acuerdo que antecede, se giró el siguiente oficio:

✓ OF. XIV-787-P

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE ESTE ALTO TRIBUNAL

ANEXO: COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA
DICTADA EN EL A.R. 623/2017

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2018


LIC. OSCAR ALEJANDRO CRUZ AGUILAR
SECRETARIO AUXILIAR DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

OACA/pab

1 OFICIO _____

1 MINUTARIO _____



Recibí de un abogado de la
Primera Sala Cudi

Copia certificada de una
Resolución en (89) F. J. C.

VICTOR JUAN RUIZ BARRON

441
FORMA A. 52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

OF. XIV-787-P

SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS DE ESTE ALTO TRIBUNAL

ANEXO: COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA DICTADA
EN EL A.R. 623/2017.

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN
2018 SEP 17 10:10
OFICINA DE COORDINACIÓN
JUDICIAL Y COORDINACIÓN

030300

En el expediente que se menciona al margen, la
Presidenta de la Primera Sala dictó el siguiente acuerdo:

"Ciudad de México, a diez de septiembre de dos mil
dieciocho.

Agréguese a los autos el voto concurrente que formuló el
MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, anunciado en sesión de
trece de junio del año en curso.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese
copia digitalizada del voto concurrente en comento, vía
MINTERSCJN, al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.

En otro aspecto, visto el estado que guardan los presentes
autos, en cumplimiento al proveído de cinco de julio del año en
curso, dictado en el cuadernillo derivado del amparo en revisión en
que se actúa, expídase y remítase copia certificada de la sentencia
dictada en el presente asunto, a la Subsecretaría General de
Acuerdos de este Alto Tribunal.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma la MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA
HERNÁNDEZ, Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, ante la Secretaria de Acuerdos que
autoriza y da fe, licenciada María de los Ángeles Gutiérrez Gatica."

Lo que comunico para los efectos legales a que haya
lugar.

Le reitero mi atenta consideración.

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2018.



SECRETARÍA DE ACUERDOS DE LA
PRIMERA SALA

PRIMERA SALA.
SR. DE ACOS.

A.R. 623/2017

52979 M
y 441
4412



Poder Judicial de la Federación

DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Acuse de Recibo

Folio electrónico: 57223/2018
Órgano requirente: Suprema Corte de Justicia de la Nación
Fecha de envío del órgano requirente: 10/09/2018 20:40:00
Tipo y núm. de exp. del órgano requirente: AMPARO EN REVISIÓN 623/2018
Núm. oficio del órgano requirente: MN/PS/7/4551/2018

Tipo y núm. de exp. del órgano requerido: AMPARO EN REVISIÓN [REDACTED]

Fecha de recepción: 11/09/2018 9:52:16

Recepción: RECEPCIÓN CONFORME

Detalle de requerimiento y constancias recibidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo de requerimiento o de constancia recibida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO	DEL ACUSE DE RECIBO	(2) ORIGINAL	SE ACUSA RECIBO
Fecha de acuerdo: 10/09/2018			
CONSTANCIA 1	VOTO DEL MINISTRO	(25) ORIGINAL	SE ACUSA RECIBO

*En el cómputo del número de fojas se incluye la hoja correspondiente a la evidencia criptográfica.

15:04
11/09/18

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
 Archivo Firmado: AcuseRecepcion74119.pdf
 Secuencia: 2180177

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:		Validéz:	OK	Vigente
	CURP:				
Firma	# Serie:	706a6620636a6600000000000000000000007120	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	11/09/2018T14:52:22Z / 11/09/2018T09:52:22-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	26 3b e2 53 2b 90 81 70 63 95 3c 92 6b d0 55 39 6b 5a 9a d1 7c 10 6c 6f 62 4c f5 d6 e7 1e 96 b6 0a b6 56 29 32 9f db 94 60 ca 5b db 55 ab af a3 fd d7 e3 35 5e 06 f8 9f aa 26 b7 93 e4 be d1 de db 50 67 b3 33 cb 10 91 53 39 7a 6b d0 f7 d3 1a e5 05 22 48 5b 91 1b 37 39 56 3d 97 b6 f6 77 ad 89 21 ca 4b 75 f9 59 a1 24 56 fd 85 45 f3 23 24 97 93 d3 8f a4 00 2a c8 b5 ff 18 98 35 5c 77 73 71 03 5e c4 8e 12 30 b7 77 55 d0 5f eb 24 0f 0b e6 a2 4e c3 51 62 e0 a4 e4 49 e9 75 04 a5 5f ec 51 63 de 70 4d 7f 87 9a 35 6d 9e b5 9c 8a 49 ab d4 c1 33 60 33 eb be e5 02 40 de d3 71 9c e3 e1 92 8c a7 09 8c 37 47 91 f8 a1 28 93 52 00 04 54 e3 e0 40 92 d8 20 cd 48 97 14 8b 92 3e 8b 70 73 52 b9 b2 3c 08 b9 4f 6b 83 32 48 36 7b 31 d4 f9 ba 52 56 2c f6 fe 1b e3 47 f3 9e ef 4b 51 1c			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	11/09/2018T14:52:23Z / 11/09/2018T09:52:23-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a6600000000000000000000007120			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	11/09/2018T14:52:22Z / 11/09/2018T09:52:22-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2163032			
	Datos estampillados:	85A720AC7BC8F92823161AD5E012EBEDAC402D8B			

Evidencia Criptográfica.

9

444
445

Folio y fecha de recepción SCJN: 52979-MINTER / 11/09/2018 10:04:34
Folio electrónico: 57223



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Recepción en SCJN del acuse de recibo de órganos del
PJF

Remitente: DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO
Fecha de envío a la SCJN: 11/09/2018 9:52:16
Tipo y núm de exp. en SCJN: AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

Ciudad de México, a

11 de Septiembre de 2018

Por acuerdo presidencial, la(e) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el acuse
de recibo 52979-MINTER, constante de 3 fojas incluida esta constancia, para efectos
legales correspondientes. Conste



LA SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PRIMERA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARIA DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA

J.C. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA.

OACA/ml.

SECRETARIA DE JUSTICIA DE LA NACION
2018 SEP 11 PM 2 17
PRIMERA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS



Poder Judicial de la Federación
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Acusa de envío, anexos y acusa de recibo relacionados con el folio electrónico 58555 recibidos por el MINISTERIO

Folio electrónico: 58555/2018
Órgano requirente: Suprema Corte de Justicia de la Nación
Fecha de envío al órgano requirente: 17/09/2018 19:05:35
Tipo y núm. exp. del órgano requirente: AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
Núm. de oficio del órgano requirente: MIP/S/7/4551/2018

Fecha de acuerdo u oficio del órgano requerido: 12/08/2018
Síntesis del acuerdo u oficio del órgano requerido: SE ACUSA RECIBO, SE TOMA CONOCIMIENTO
Núm. oficio del órgano requerido: 2018
Tipo y núm. de exp. órgano requerido: AMPARO EN REVISIÓN

Acuerdo u oficio respectivo y en su caso documentación remitida

Acuerdo u oficio (en su caso constancias)	Tipo de respuesta o constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Documentación remitida
ACUERDO U OFICIO Fecha de acuerdo u oficio 12/08/2018	ACUSA DE RECIBO LOS AUTOS DEL JUICIO AMPARO Y ANEXOS	(4) ORIGINAL	SE ACUSA RECIBO, SE TOMA CONOCIMIENTO

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

11.00

476

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign 4 -
Archivo Firmado: AcuseEnvio74119.pdf
Secuencia: 2171534

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	VANESA ZARATE VERGARA	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	ZAVV781211MDFRRN07			
Firma	# Serie:	706a6620636a66000000000000000000000007120	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/09/2018T00:05:55Z / 17/09/2018T19:05:55-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	0b 8c fb 3e 52 9a 7d 93 19 33 39 a1 c4 52 e6 54 7e 92 e6 fb fa f4 fb c4 1b 9c c8 9c 43 bd de 7c f2 dd ad ff fc 9a 9e 73 1f fc 0d 35 bf 03 90 e2 18 4d 80 3a 80 d4 a2 65 2c 49 a7 db 77 2d 9f 1d a7 3e e1 1a 5d 73 ab da 8e ed 90 0d fd 06 eb de 7c 7a e9 f1 04 f3 d5 03 c2 07 68 36 9f 5f b8 73 81 76 0d d3 50 2a 38 da eb 9c 51 e6 1f 70 d7 5b dd ec 75 52 d1 60 67 01 a2 4b c6 29 c3 12 04 79 65 da 02 20 76 e1 b1 c4 15 29 d8 e1 2c dc b0 6e 44 09 75 72 c5 cf 6b 79 81 52 a8 24 df 5f dd 0d 97 65 5c e8 b3 75 30 c0 53 58 9e a9 11 a2 76 1c b8 90 09 ee 8f d9 b4 7b 3e 28 af 46 e9 d2 09 ef 35 60 ba b8 68 18 37 d1 88 49 75 c9 ca 3d d3 f4 d8 36 bf 4a 8d be a1 8a bb dd a7 32 b1 2c 7e 32 1b 43 35 82 e1 60 1d a0 5b 82 60 73 7a 80 42 dd 65 46 ee 40 b4 4e 40 27 71 eb 26 1b 22 62 f6 6f			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/09/2018T00:05:55Z / 17/09/2018T19:05:55-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a66000000000000000000000007120			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	18/09/2018T00:05:55Z / 17/09/2018T19:05:55-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2174389			
	Datos estampillados:	140DE4A62DE7BDF0CCC74253A34D1673BE5414AE			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

REFERENCIA AMPARO EN REVISIÓN 623/2017 FORMAD-1

INL/Imp7

En doce de septiembre de dos mil dieciocho, la licenciada Isis Nayeli Landeros Muñoz, secretaria de acuerdos, da cuenta al magistrado Eugenio Reyes Contreras, presidente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con la copia certificada de los documentos impresos recibidos vía intranet **MINTERSCJN**, constante de "Acuse de envío" "Evidencia Criptográfica Transacción SeguriSign", en los que remite, acuerdo de diez de septiembre de dos mil dieciocho, "Evidencia Criptográfica Transacción SeguriSign", voto concurrente dictado en el recurso en revisión 623/2017, "Evidencia Criptográfica Firma Electrónica Certificada", "Acuse de Recibo" "Evidencia Criptográfica Transacción SeguriSign", que envía el Ministro integrante de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrado en el libro de correspondencia, con el folio 6262. Conste.

Ciudad de México, doce de septiembre de dos mil dieciocho.

Vista; la copia certificada de los documentos impresos, recibidos vía intranet **MINTERSCJN**, constante de "Acuse de envío" "Evidencia Criptográfica Transacción SeguriSign", en los que remite, acuerdo de diez de septiembre de dos mil dieciocho, "Evidencia Criptográfica Transacción

493

SeguriSign", ~~voto concurrente dictado en el~~ 4 -
~~recurso en revisión 623/2017~~, "Evidencia
Criptográfica Firma Electrónica Certificada" "Acuse
de Recibo" "Evidencia Criptográfica Transacción
SeguriSign", ~~que envía el Ministro integrante de la~~
~~Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de~~
~~la Nación, con los que remite voto concurrente~~ 7.1 -
~~formulado por el Ministro José Ramón Cossío~~
~~Díaz.~~

Con fundamento en el artículo 221, del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado
supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición
expresa en su precepto 2º; ~~agreguese al cuaderno~~
~~de antecedentes que nos ocupa el oficio de cuenta,~~
con las impresiones digitalizadas de referencia; y en
atención a su contenido, este Tribunal Colegiado
~~toma conocimiento para los efectos legales~~ 7.2 -
~~conducentes.~~

Nótiqúese; personalmente a la parte quejosa,
y via oficio a las autoridades responsables en el juicio
de amparo indirecto de origen, via MINTERSCJN a la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, así como al Juzgado Décimo Sexto de
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de
México.

Así lo proveyó y firma el magistrado **Eugenio
Reyes Contreras**, presidente del **Décimo Segundo**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

REFERENCIA AMPARO EN REVISIÓN 623/2017 FORMAS-1

INLM/mpr

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito, asistido de la secretaria de
acuerdos, licenciada Isis Nayeli Landeros Muñoz,
que autoriza y da fe de lo actuado. -DOY FE-

INLM/mpr.

2-77

REVISO SISE

RAZÓN.-ESTA FOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, DICTADO EN EL TÍTULO DEL RECURSO DE REVISIÓN R.A. [REDACTED] CONSTE.

13 SEP 2018

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL
SE NOTIFICÓ A LAS PARTES EL ACUERDO ANTERIOR POR
LISTA QUE SE FIJO A LAS [REDACTED]
CONSTE.

Dr. Jorge Alberto Velázquez Hernández

**SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
OFICINA DE CERTIFICACIÓN JUDICIAL Y
CORRESPONDENCIA**

Licenciado Gabriel de la Vega Urdaneta, Secretario adscrito a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo previsto en el artículo 18, fracción III, del Acuerdo General Plenario 12/2014 -----

----- **C E R T I F I C A:** -----

Que el presente documento constante de 4 fojas, es versión impresa fiel de la versión electrónica de las constancias indicadas en el acuse de envío recibidas por el **MINTER**, con el uso de la firma electrónica de los servidores públicos designados para su recepción.
Doy fe.

Ciudad de México, a **dieciocho** de **septiembre** de dos mil dieciocho.

10

401

Folio y fecha de recepción SCJN: 54235-MINTER 17/09/2018 20:59:35
Folio electrónico: 68655



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Respuesta de órganos del PJF a requerimientos realizados por la SCJN

Órgano requirente:	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Órgano requerido:	DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO
Oficio:	2018
Fecha de respuesta del órgano requerido:	17/09/2018 16:05:59
Tipo de recepción:	CONFORME
Fecha de acuerdo de requerimiento del órgano requirente:	10/09/2018 0:00:00
Síntesis del acuerdo del órgano requirente:	
Tipo de expediente del órgano requirente:	ACUSARIO EN REVISIÓN
Núm. de exp. del órgano requirente:	627/2017
Oficio de referencia del órgano requirente:	IPS/7/4551/2018

Detalle de respuesta y constancias recibidas (en su caso)				
Acuerdo (en su caso constancia)	Tipo y núm. de exp. del órgano requerido	Tipo de respuesta o de constancias recibidas	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación remitida
ACUERDO: Fecha de acuerdo: 10/09/2018	IMPARTIDO EN REVISIÓN	ACUSA DE RECIBO LOS AUTOS DEL JUICIO AMPARO Y ANEXOS	(4) ORIGINAL	DOCUMENTO LEGIBLE EN 4 PAGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseRecepcionRespuestaPeticionSCJN494191.pdf
Secuencia: 2171593

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	ARTURO GUTIERREZ CRUZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	GUCA651020HDFTRR09			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000f34	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/09/2018T01:59:48Z / 17/09/2018T20:59:48-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	52 89 73 82 5d a6 ca 73 6e 6d 02 63 a1 cb 3a 05 4c 6c 82 61 e8 04 e9 26 df 29 3f 3c 4a b3 60 97 e2 4b ca 46 ff 7f 6c 7d 03 b5 b7 a6 ad 0e 98 7d 73 99 56 8b 1a b2 a1 51 a2 27 de d1 a0 7c 02 5e 8e 0f d8 66 03 95 07 03 50 28 7c aa 43 23 89 56 00 72 50 5b 44 01 bf 4c b6 97 ce ba aa 18 81 39 ee ab 57 10 e1 72 d8 88 57 3c 64 12 df a8 dc 52 c3 e3 b8 97 02 a2 85 2f 67 68 01 9b 1ff 35 2fa7 bc 93 5c 10 ff 15 7b 64 11 48 70 15 ea 21 dd 72 2c a7 1f 6c ae a2 8a b4 de 5d 17 04 41 2d 69 3a 39 d3 a5 ba 77 50 5a d2 f2 3b e8 c9 f8 66 53 74 7e eb 13 58 93 3f 76 4f fa 62 da 3e cc db aa 5d 2d 6f 09 24 b0 df dd 00 7d dd 59 3f 08 02 9e 18 45 45 48 a0 45 df 20 84 8f ca e3 33 fd d5 21 53 de 15 53 f1 de a9 d1 09 0e 73 7d cd 2a 1c 1f 99 28 6d c7 ac 73 af ac 13 7e 66 3b 8b a3 fd f7			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/09/2018T01:59:49Z / 17/09/2018T20:59:49-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000000f34			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/09/2018T01:59:48Z / 17/09/2018T20:59:48-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2174448			
	Datos estampillados:	A3C839C4C5A287A2B17BD77C55BA342E831938FE			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PROMOCIÓN
54235-MINTER

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

En veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, la Secretaria de Acuerdos da cuenta a la Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el acuse electrónico y el anexo, recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia. Conste. (✓)

Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho.

Agréguese a sus autos el acuse y el anexo remitidos vía MINTERSCJN, por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, téngase a dicho Tribunal Colegiado informando que toma conocimiento del proveído de diez del mes y año en curso dictado en el presente asunto y del voto concurrente formulado por el **MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ**.

Sin embargo, es omiso en acusar recibo del oficio 4454 y de los anexos descritos en el mismo; por ello, solicítase lo haga a la brevedad, vía MINTERSCJN.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma la **MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ**, Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciada María de los Ángeles Gutiérrez Gatica.

OACA

El 25 SEP 2018

Se notificó el acuerdo anterior a los interesados por medio de lista, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de envío

Órgano requerido:	DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO
Fecha de ingreso de acuerdo de requerimiento:	24/09/2018 15:28:30
Fecha de envío:	24/09/2018 18:02:14
Fecha de acuerdo de requerimiento:	21/09/2018
Requerimiento:	DEL ACUSE DE RECIBO
Síntesis del acuerdo:	REQUIÉRASE A LA AUTORIDAD OFICIANTE PARA QUE ACUSE RECIBO DETALLADAMENTE. NOTIFIQUESE
Tipo de expediente del órgano requirente:	AMPARO EN REVISIÓN
Núm. de exp. del órgano requirente:	623/2017
Núm. de oficio del órgano requirente:	MI/PS/7/4561/2018

Detalle de requerimiento y constancias remitidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo y núm. exp. del órgano requerido	Tipo de requerimiento o de constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente
Acuerdo	AMPARO EN REVISION	DEL ACUSE DE RECIBO	(2) ORIGINAL
Fecha de acuerdo:			
21/09/2018			

* En el cómputo de número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
 Archivo Firmado: PeticiónExterno-470_747042.pdf
 Secuencia: 2184368

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	JONATAN EDUARDO LARA BAZA	Validex:	OK	Vigente
	CURP:	LABJ890628HDFRZN04			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e000000000000000000000000f6e	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	24/09/2018T23:02:19Z / 24/09/2018T18:02:19-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	0b 4a d0 7d 63 af e3 c8 72 61 4c a7 3f d4 46 66 f0 d7 c3 84 05 f7 25 6c 4a ce 04 70 2d ef 79 ae 73 89 38 01 c4 50 8b 9e 1d bb d8 db e4 f9 f2 6d 8f 37 0b 0b eb 40 71 9f b5 3b 09 6d 8f 68 d7 7c 11 ac 93 4b dc 8a 61 35 2a 51 cd f4 f9 9b 50 ef d5 74 b1 ca 93 3b b6 7d 3b 4b 33 0a 76 de 2a 39 f7 54 99 25 65 b8 a4 fd 19 bf d0 66 17 df 9c b6 e9 d5 dc 86 0c 81 e8 54 8f 7c d3 66 0e a0 d1 1e d4 64 f1 23 d2 d4 c4 1b 0e 27 4d f5 6c 1a ab 04 40 aa ed 40 0d 97 ba bb 10 1a be 71 aa 52 0c 1a bb 6e 6f 03 b9 00 98 da 79 4f 98 8f 2d af 8d 91 25 36 ad 24 26 a6 00 b3 98 5b c6 37 60 2c 33 40 b0 cd 76 a7 03 77 a1 66 d9 f1 9c 98 2a 13 ae 76 fb 3d 29 94 1e 52 ba 20 b0 d0 a5 bf 58 26 8d ef b0 70 52 e3 f8 06 8c 5f d4 5c cd a4 e7 64 5a c5 e7 91 9a 78 a3 82 c1 2f a4 c6 0f a0 6b 9c 4b 7b			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	24/09/2018T23:02:20Z / 24/09/2018T18:02:20-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e000000000000000000000000f6e			
P	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	24/09/2018T23:02:19Z / 24/09/2018T18:02:19-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2187239			
	Datos estampillados:	9EC15AC25C642E96360F63CA05E3932F3FCEC309			

456
55856-H



Poder Judicial de la Federación

DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Acuse de Recibo

Folio electrónico: 60334/2018
Órgano requerente: Suprema Corte de Justicia de la Nación
Fecha de envío del órgano requerente: 24/09/2018 18:02:14
Tipo y núm. de exp. del órgano requerente: AMPARO EN REVISIÓN 62/2017
Núm. oficio del órgano requerente: MHPS/7M561/2018

Tipo y núm. de exp. del órgano requerido: AMPARO EN REVISIÓN [REDACTED]

Fecha de recepción: 25/09/2018 10:37:13

Recepción: RECEPCIÓN CON FIRME

Detalle de requerimiento y constancias recibidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo de requerimiento o de constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO	DEL ACUSE DE RECIBO	(2) ORIGINAL	SE RECIBIÓ DOCUMENTO LEGIBLE EN DOS PÁGINAS
Fecha de acuerdo: 21/09/2018			

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia origtografica.

25-SEP-18
350

457

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseRecepcion76777.pdf
Secuencia: 2185097

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	EMMA MAGNOLIA AYALA RIVERA	Validex:	OK	Vigente
	CURP:	AARE750102MMCYVM09			
Firma	# Serie:	706a6620636a660000000000000000000000007596	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	25/09/2018T15:37:19Z / 25/09/2018T10:37:19-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	88 ba a0 86 ca fa ac 35 dd c1 bc 70 d2 f4 bc 9c 6e bb ab 68 9d a7 3d 5b 18 1c 23 c9 b8 f6 bd f4 55 dc 90 9f 30 9b 2d b9 af 70 65 0f 40 18 68 da 55 6b 69 4c a7 94 67 de 0f bd 79 1f c0 0d fd 88 a0 6c 92 53 4d 5b 3d 1a 31 92 48 4d b3 22 61 fb d4 6f a5 ce 6e 5f 92 aa 59 f0 b3 31 4c 8a 95 54 95 da 9e e2 ae 14 ca ec c4 32 6a 8a a3 9f 4a 94 f4 4b a8 eb 15 9c 8c ca 0a 73 4a 87 64 f2 d3 37 9e e9 50 d5 7c 96 98 8d 03 0d 7b fe 97 93 49 22 2d 75 f5 38 9e 6e b9 88 29 8b 18 2d d2 5a 10 8a a8 a0 a5 c0 cb c7 0b 50 7e 9f d1 05 a1 3e 40 7e a7 7d ee 8c fb d4 c1 35 b2 ca bc ba f6 85 19 a1 01 db 8c 74 fa 57 b0 99 09 5f 23 e1 94 17 77 b7 f8 5e 64 25 0a 0f 01 69 2e 1e 68 64 d4 88 25 09 64 8f e2 1d 7e 7c 69 5a a5 a4 ab e8 0a 1e dc 2a a7 af 97 55 d4 e9 1c 5a ba 0f ba be b8 ea a5			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	25/09/2018T15:37:20Z / 25/09/2018T10:37:20-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a660000000000000000000000007596			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	25/09/2018T15:37:19Z / 25/09/2018T10:37:19-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2187968			
	Datos estampillados:	450C90720FF6CDCC91E0C3555FA6C51FF76FE80			

DIGITALIZADO

Folio y fecha de recepción SCJN: 55856-MINTER 25/09/2018 11:20:34
Folio electrónico: 60334



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Recepción en SCJN del acuse de recibo de órganos del
PJF

Remitente	DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO	
Fecha de envío a la SCJN:	25/09/2018 10:37:13	
Tipo y núm de exp. en SCJN:	AMPARO EN REVISIÓN	623/2017

Ciudad de México, a

25 de Septiembre de 2018

Por acuerdo presidencial, la(él) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el acuse de recibo 55856-MINTER, constante de 3 fojas, incluida esta constancia, para efectos legales correspondientes. Conste



LA SECRETARÍA DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA

LIC. MARÍA DE LOS ANGELES GUTIÉRREZ GATICA

OACA/ml.

PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

2018 SEP 25 PM 3 12

SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN



Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Acusa de envío, anexos y acusa de recibo relacionados con el folio electrónico 60817 recibidos por el MINTERSCJN

Folio electrónico:	60817/2018
Órgano requirente:	Suprema Corte de Justicia de la Nación
Fecha de envío al órgano requirente:	26/09/2018 13:20:53
Tipo y núm. exp. del órgano requirente:	AMPARO EN REVISIÓN 823/2017
Núm. de oficio del órgano requirente:	MYPS/7/4561/2018
Fecha de acuerdo u oficio del órgano requerido:	26/09/2018
Síntesis del acuerdo u oficio del órgano requerido:	SE ACUSA RECIBO DEL OFICIO 4454 SIGNADO POR LA SUBSECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA, ASI COMO DE LOS ANEXOS REMITIDOS CON DICHO OFICIO
Núm. oficio del órgano requerido:	3191
Tipo y núm. de exp. órgano requerido:	AMPARO EN REVISIÓN [REDACTED]

Acuerdo u oficio respectivo y en su caso documentación remitida

Acuerdo u oficio (en su caso constancias)	Tipo de respuesta o constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electronicamente	Documentación remitida
ACUERDO U OFICIO Fecha de acuerdo u oficio: 26/09/2018	ACUSA DE RECIBO LOS AUTOS DEL JUICIO AMPARO Y ANEXOS	(3) ORIGINAL	SE ACUSA RECIBO DEL OFICIO 4454 SIGNADO POR LA SUBSECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA, ASI COMO DE LOS ANEXOS REMITIDOS CON DICHO OFICIO.

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia tipográfica.

27 sept-18
11:27

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign 14
Archivo Firmado: AcuseEnvio76777.pdf
Secuencia: 2189015

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	EMMA MAGNOLIA AYALA RIVERA	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	AARE750102MMCYYM09			
Firma	# Serie:	706a6620636a660000000000000000000000007596	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	26/09/2018T18:21:07Z / 26/09/2018T13:21:07-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	0a ae 82 00 ef 64 9e 66 08 e7 43 a9 05 86 92 62 33 0f f4 84 fd 4b 22 ca 40 8e 62 92 7f f5 47 cb 9a ce 6a c0 dd 8b da b4 ed 3e ed 55 ca 48 cd 12 9b f9 e1 32 46 44 95 70 f0 4f 49 a7 76 ea 68 3c 71 30 e3 1c 7b 69 06 b8 4b 77 8c e0 c9 22 41 62 09 3d f8 b9 9d ad 4d d1 9e 50 ae 73 14 58 b8 50 89 6c 78 95 3e f5 59 f5 09 2c 69 12 61 54 84 ec 81 70 ea 34 78 b2 59 16 09 6c 84 0b 83 9a 86 fb 77 39 a2 ec 27 0f b0 06 d8 32 4e e2 f0 44 bf 8e 9f 1d 79 fb 56 da e0 ac 21 0d 19 6d aa ae 76 37 45 ca 2a b5 2c 20 3b 7e 4a 41 7f f7 77 ec c2 58 94 4b c7 7f 12 70 02 9d c9 ad 62 bf 8b 6c 75 0a 42 78 83 e7 08 d7 5a ea 14 5b cb cd 74 e5 21 0f ee 23 70 c2 a6 bf dd 6d 4f ab f6 99 7d d2 63 2a 76 3a b5 77 62 85 d4 b3 8c 05 e8 db 05 e0 e3 40 b0 f4 83 9c cd 07 66 70 42 25 21 d9 87 11 fd 1d			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	26/09/2018T18:21:08Z / 26/09/2018T13:21:08-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a660000000000000000000000007596			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	26/09/2018T18:21:07Z / 26/09/2018T13:21:07-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2191886			
	Datos estampillados:	286E5AFABE146BC87AD22452216C1284FE68C4B3			





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 8-1

REFERENCIA AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
RUM/MP/OT

En veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, la licenciada Isis Nayeli Landeros Muñoz, secretaria de acuerdos, da cuenta al magistrado Eugenio Reyes Contreras, presidente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con la copia certificada de los documentos impresos, y recibidos vía intranet **MINTERSCJN**, consistentes en: "Acuse de Envío", "Evidencia Criptográfica Transacción SeguriSingn", ~~acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho~~, "Evidencia Criptográfica Transacción SeguriSingn", "Acuse de Recibo" y "Evidencia Criptográfica Transacción SeguriSingn", ~~que envía la Ministra Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación~~, registrado en el libro de correspondencia con folio, 6590. Conste.

Ciudad de México, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho.

Vista; la copia certificada de los documentos impresos recibidos vía intranet **MINTERSCJN**, consistentes en: "Acuse de Envío", "Evidencia Criptográfica Transacción SeguriSingn", ~~acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho~~, "Evidencia Criptográfica Transacción SeguriSingn", "Acuse de Recibo" y "Evidencia Criptográfica Transacción SeguriSingn", ~~que envía la Ministra Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación~~, mediante los cuales, en lo sustancial, solicita el ~~acuse de recibo del oficio 4454 de su estadística, con el que remitió a este Tribunal Colegiado el expediente~~.

original del recurso de revisión [REDACTED] del índice de este Tribunal Colegiado, así como los autos del juicio de amparo indirecto [REDACTED] del índice del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su precepto 2º; agréguese al sumario las impresiones digitalizadas de cuenta; y en atención a su contenido, ~~acúsese el recibo de estilo de las constancias que detalla~~, para lo que a bien tenga a determinar.

Notifíquese; y vía MINTERSCJN, a Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así lo proveyó y firma el magistrado Eugenio Reyes Contreras, presidente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, asistido de la secretaria de acuerdos, licenciada Isis Nayeli Landeros Muñoz, que autoriza y da fe de lo actuado. -DOY FE.

INL [REDACTED]

2.77

RAZÓN. ESTA FOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO EN EL TOCA DEL RECURSO DE REVISIÓN [REDACTED] CONSTE.

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
 Nombre del documento firmado: RespuestaAcuerdo.pdf
 Secuencia: 2189016

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.
 Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	EMMA MAGNOLIA AYALA RIVERA	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	AARE750102MMCYYM09			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a660000000000000000000000000007596	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	26/09/2018T18:21:07Z / 26/09/2018T13:21:07-05:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	15 ec f1 df 35 fa 1e 2b e1 84 d1 7c b8 54 e7 cc 9b c1 71 a0 f4 71 84 8f 99 56 53 ef 28 1a f5 5a a8 d7 4c 28 1b 1d 0a 3b 58 b1 0e 4d bd b2 88 3b fb 87 6e 9d c8 a9 72 26 50 56 05 f9 89 3b 6b 56 49 23 3f 70 c5 5e f9 af 51 28 79 92 9c 6e b2 81 1e 73 4d 33 8f b7 74 35 80 cb de 41 b3 24 8d 0a 4a 90 df 49 bb ef 44 b4 c0 0e 53 70 ca d3 41 02 2f a8 22 26 be c0 89 56 5f 9b 1f 23 17 56 56 43 9d 75 93 29 86 59 a5 27 c7 97 d6 1e db 5e 7c c0 8f 3f cd 13 88 3d c6 b8 94 41 b4 2f f0 2f 51 d1 2c 04 20 fc 2d 72 c9 9b 3a 15 80 ad 3d a4 ad de 0b b4 98 ad 56 b8 8d 7a cf 9a 12 72 4f d6 72 07 f0 36 89 b8 0d db 16 41 c7 25 4c bc cc 08 b7 d7 3e 86 d7 b6 a6 80 3f 2e ca 54 43 ed 3e 40 ba fb 5d 13 90 1a 9b 20 2a 78 02 53 ab 74 9a 26 b1 23 b2 db b5 bc 65 8b cf 3f bf 5c 91 e2 2e 93 db 20			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	26/09/2018T18:21:09Z / 26/09/2018T13:21:09-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a660000000000000000000000000007596			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	26/09/2018T18:21:07Z / 26/09/2018T13:21:07-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	2191887			
	Datos estampillados:	47BD3FC3A01FA73060A724650B6509CB7A7533A6			

SECRETARÍA DE JUSTICIA
 SUPLENTE DEL
 JESUITA

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
OFICINA DE CERTIFICACIÓN JUDICIAL Y
CORRESPONDENCIA

Licenciado Gabriel de la Vega Urdaneta, Secretario adscrito a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo previsto en el artículo 18, fracción III, del Acuerdo General Plenario 12/2014 -----

----- **C E R T I F I C A:** -----

Que el presente documento constante de 3 fojas, es versión impresa fiel de la versión electrónica de las constancias indicadas en el acuse de envío recibidas por el **MINTER**, con el uso de la firma electrónica de los servidores públicos designados para su recepción. Doy fe.

Ciudad de México, a **veintisiete** de **septiembre** de dos mil dieciocho.



12

464

Folio y fecha de recepción SCJN: 56345-MINTER 26/09/2018 16:59:45
Folio electrónico: 60817



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Respuesta de órganos del PJF a requerimientos realizados por la SCJN

Órgano requirente:	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN			
Órgano requerido:	DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO			
Oficio:	3191			
Fecha de respuesta del órgano requerido:	26/09/2018 13:21:11			
Tipo de recepción:	CONFORME ↓↓			
Fecha de acuerdo de requerimiento del órgano requirente:	21/09/2018 00:00:00			
Síntesis del acuerdo del órgano requirente:				
Tipo de expediente del órgano requirente:	AMPARO EN REVISIÓN			
Núm. de exp. del órgano requirente:	623/2017			
Oficio de referencia del órgano requirente:	M/PSJ/4581/2018			
Detalle de respuesta y constancias recibidas (en su caso)				
Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo y núm. de exp. del órgano requerido	Tipo de respuesta o de constancias remitidas	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación remitida
ACUERDO: Fecha de acuerdo 21/09/2018	AMPARO EN REVISIÓN	ACUSA DE RECIBO LOS AUTOS DEL JUICIO AMPARO Y ANEXOS	(3) ORIGINAL	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
 Archivo Firmado: AcuseRecepcionRespuestaPeticiónSCJN506941.pdf
 Secuencia: 2189886

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	JOEL IBÁÑEZ GONZALEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	IAGJ640115HDFBNL06			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e0000000000000000000010d2	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	26/09/2018T21:59:53Z / 26/09/2018T16:59:53-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	40 c2 9d 15 20 2f b7 8f a8 85 32 7f 12 31 a5 b4 c7 c8 09 52 01 5a ce 40 1d 56 0c 81 01 dc 44 31 db 81 28 ed 3b 3f b3 e0 df db 36 ff b2 d1 6b ad b1 54 2b c1 2b 00 fe e1 f7 a5 ab 54 cb 20 34 9c 95 df 30 b2 37 b7 d9 6b 16 46 89 ee 54 67 db 45 8e c5 65 7f 71 4a 35 45 86 cb 06 c0 97 53 b1 4e 80 04 86 2b 96 73 93 fc 24 5c c0 e4 d1 3a 10 8d 05 d2 91 43 25 0f 59 4f 15 2e 5b 9e 17 29 49 63 a7 3e 67 d0 cf 22 86 3a 9b b4 15 49 6d 9c f1 31 21 93 54 98 da ce 9a 6c 8f 88 5a 97 58 00 4d 54 18 f2 c7 be 26 b4 aa 29 da 33 7c 58 9d d7 e2 6a d1 ae 16 17 35 7b 7c b2 22 37 af 9b 53 a5 00 f5 62 a5 20 f6 a3 92 8d 65 60 b3 66 1f 21 7b 9e 41 3c c1 72 48 83 97 60 5e f4 45 3b 7b 47 76 1b ae 4a 9b a9 94 b7 ec 12 ca 32 06 aa 81 80 c9 31 20 09 86 95 4e 39 87 4c 5e 1b 3f 2f 86 d8 48 83 24			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	26/09/2018T21:59:54Z / 26/09/2018T16:59:54-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e000000000000000000000010d2			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	26/09/2018T21:59:53Z / 26/09/2018T16:59:53-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2192757			
	Datos estampillados:	3D66CF849E62FCD9642D20B37F192C00684D467E			

SECRETARIA DE JUSTICIA DE LA NACION

2018 SEP 27 AM 10 28

SECRETARIA DE ACUERDOS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PROMOCIÓN
56345-MINTER

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

466

En uno de octubre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acuerdos da cuenta a la Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el acuse electrónico y el anexo, recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia. Conste.

Ciudad de México, a uno de octubre de dos mil dieciocho.

Agréguese a sus autos el acuse y el anexo remitidos vía MINTERSCJN, por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, téngase a dicho Tribunal Colegiado acusando recibo del oficio 4454 y de algunos de los anexos descritos en el mismo.

Sin embargo, es omiso en acusar recibo de dos tomos de pruebas, de un disco compacto y de un sobre amarillo cerrado; así como en informar de la remisión de la copia certificada de la sentencia dictada en el presente asunto, al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; por ello, solicítase lo haga a la brevedad, vía MINTERSCJN.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma la **MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ**, Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciada María de los Ángeles Gutiérrez Gatica.

OACA
EJ 2 OCT 2018

Se notificó el acuerdo anterior a los interesados por medio de lista, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de envío

Órgano requerido:	DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO
Fecha de ingreso de acuerdo de requerimiento:	01/10/2018 16:00:30
Fecha de envío:	01/10/2018 19:38:51
Fecha de acuerdo de requerimiento:	01/10/2018
Requerimiento:	SOLICITUD DE INFORME DEL ACUSE DE RECIBO
Síntesis del acuerdo:	REQUIÉRASE A LA AUTORIDAD OFICIANTE PARA QUE ACUSE RECIBO DETALLADAMENTE E INFORME DE LA REMISIÓN DE LA COPIA RESPECTIVA AL JUZGADO DE ANTECEDENTES. NOTIFIQUESE
Tipo de expediente del órgano requirente:	AMPARO EN REVISIÓN
Núm. de exp. del órgano requirente:	623/2017
Núm. de oficio del órgano requirente:	MI/PS/7/4612/2018

Detalle de requerimiento y constancias remitidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo y núm. exp. del órgano requerido	Tipo de requerimiento o de constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente
Acuerdo	AMPARO EN REVISIÓN	SOLICITUD DE INFORME DEL ACUSE DE RECIBO	(2) ORIGINAL
Fecha de acuerdo:			
01/10/2018			

* En el cómputo de número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

1993

88034F01B95264



Poder Judicial de la Federación

DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Acuse de Recibo

Folio electrónico: 61881/2018
Órgano requirente: Suprema Corte de Justicia de la Nación
Fecha de envío del órgano requirente: 01/10/2018 19:38:51
Tipo y núm. de exp. del órgano requirente: AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
Núm. oficio del órgano requirente: M/PS/7/4612/2018

Tipo y núm. de exp. del órgano requerido: AMPARO EN REVISIÓN [REDACTED]

Fecha de recepción: 02/10/2018 9:54:12

Recepción: RECEPCIÓN CONFORME

Detalle de requerimiento y constancias recibidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo de requerimiento o de constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO	DEL ACUSE DE RECIBO	(2) ORIGINAL	SE TOMA CONOCIMIENTO
Fecha de acuerdo: 01/10/2018	SOLICITUD DE INFORME		

*En el cómputo del número de fojas se incluyó la foja correspondiente a la evidencia criptográfica

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign:
Archivo Firmado: AcuseRepcion77070.pdf
Secuencia: 2198121

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	VANESA ZARATE VERGARA	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	ZAVV781211MDFRRN07			
Firma	# Serie:	706a6620636a660000000000000000000000007120	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	02/10/2018T14:55:19Z / 02/10/2018T09:55:19-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	2a 64 17 c3 e5 5f 31 5a 1b 34 d5 3a c2 25 c3 55 97 e8 fc b5 4c 3d 8f 73 81 ea d3 06 9f 03 a6 e6 c7 d0 e2 a9 c2 9e 36 13 a4 b4 14 20 5d 18 48 98 cd 0f d0 f5 89 04 a2 15 99 5d a0 7c de 90 29 c6 3a 91 56 5f dd d5 85 29 e2 b4 98 9e 36 c2 43 a2 1b 2c 0c d8 6f 8d 27 65 18 07 ac 25 40 4b b4 d5 e0 a1 3d 83 7b e7 a0 43 e5 8a d0 97 a2 f8 74 23 18 16 f7 a0 85 db df 60 76 9a d8 67 4a 67 a0 32 dc 4f 0f d1 2c b0 ff 11 d8 1c e2 48 b7 dc 82 7c 77 6f 2e a6 c4 9c 53 8d 35 65 00 13 4d e5 94 61 7c 62 10 b7 56 0b 32 4e ca 55 02 54 ea 80 6a 0f c3 cd ba 06 a4 20 65 d9 e1 e5 43 6a a4 c7 d8 aa c5 8c 1b 60 cd 30 97 c5 9d 90 ee db 71 d1 46 43 b5 22 f2 6d ab 76 28 c5 4a 8c f8 5e 8b 9d a0 06 06 53 16 ec 91 93 b3 9c 3f ce 8c 7b 35 09 10 79 78 96 bb 04 f8 9b ee 38 20 b9 9d 69 8c 99 0b 0c			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	02/10/2018T14:55:20Z / 02/10/2018T09:55:20-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a66000000000000000000000000007120			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	02/10/2018T14:55:19Z / 02/10/2018T09:55:19-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2200992			
	Datos estampillados:	0E6E875E55A0BE233571B3D562ED2C3AB0CFCCE2			

13

471

018/10/2018

Folio y fecha de recepción SCJN:	57316-MINTER /	02/10/2018 10:41:22
Folio electrónico:	81881	



Suprema Corte de Justicia de la Nación
Recepción en SCJN del acuse de recibo de órganos del PJF

Remite	DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO		
Fecha de envío a la SCJN:	02/10/2018 9:54:12		
Tipo y núm de exp. en SCJN:	AMPARO EN REVISIÓN	623/2017	

Ciudad de México, a 2 de octubre de 2018

Por acuerdo presidencial, la(él) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el acuse de recibo 57316-MINTER, constante de 3 folios, incluida esta constancia, para efectos legales correspondientes. Conste



**LA SECRETARÍA DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA.**

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA.

SECRETARÍA DE ACUERDOS

2018 OCT 2 PM 12:10

SECRETARÍA DE ACUERDOS

OAC/Agbr

235 472



Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Acuse de envío, anexo y acuse de recibo relacionados con el oficio electrónico 62794 recibidos por el MINTERSCJN

Folio electrónico: 62794/2018
Órgano requirente: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Fecha de envío al
órgano requirente: 04/10/2018 14:09:15

Tipo y núm. exp. del
órgano requirente: AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

Núm. de oficio del
órgano requirente: MI/PS/7/4612/2018

Fecha de acuerdo u
oficio del órgano
requerido: 03/10/2018

AL DE LA FEDERACIÓN

DE JUSTICIA

ACUSADO

REQUERIDO

Síntesis del acuerdo u
oficio del órgano
requerido: SE INFORMA AL ALTO TRIBUNAL QUE POR AUTO DE TRES DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE REMITIÓ AL JUZGADO
DE ORIGEN, LA SENTENCIA DICTADA POR LA SCJN.

Núm. oficio del
órgano requerido: 3247

Tipo y núm. de exp.
órgano requerido: AMPARO EN REVISIÓN

Acuerdo u oficio respectivo y en su caso documentación remitida

Acuerdo u oficio (en su caso constancias)	Tipo de respuesta o constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Documentación remitida
ACUERDO U OFICIO Fecha de acuerdo u oficio: 03/10/2018	ACUSA DE RECIBO LOS AUTOS DEL JUICIO AMPARO Y ANEXOS	(10) ORIGINAL	SE INFORMA AL ALTO TRIBUNAL QUE POR AUTO DE TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE REMITIÓ AL JUZGADO DE ORIGEN, LA SENTENCIA DICTADA POR LA SCJN.

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia fotográfica.

1356
5/002/19

473

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseEnvio77070.pdf
Secuencia: 2204663

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	VANESA ZARATE VERGARA	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	ZAVV781211MDFRRN07			
Firma	# Serie:	706a6620636a660000000000000000000007120	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/10/2018T19:09:29Z / 04/10/2018T14:09:29-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	07 13 9a ff dc d8 d3 42 f9 98 5c 91 f6 fb 45 22 ba 12 99 5 78 0c e9 31 83 2e 14 5e b5 95 79 00 c5 9f 6d eb f4 29 57 cd be 04 d8 06 14 6a e7 89 75 10 bb c3 e2 a8 b8 7d 1 34 40 3f 98 00 ba 78 b8 35 6d 3d 5f a2 35 78 24 19 5b 80 49 90 69 8a 49 ca a2 4c 09 27 63 66 05 53 45 32 98 9a 5d 47 44 3a a1 f8 1c 39 d0 00 00 eb 59 bd 43 2f 18 ed a0 38 6e bf e2 ba cf cb 03 e2 a6 91 91 37 16 a8 7e 7e 2 35 f8 60 a9 57 dd a1 db 36 01 e7 55 71 c8 57 e3 e3 0f 4c d2 9b 9b 7c 8c 5c 27 db 30 87 4a 2d 5d 04 10 04 60 2e 48 89 5a 01 63 67 58 2a 0d 65 2f 3a 54 5c db 4d ce 67 56 a7 3e a5 93 c3 0d 06 9d f2 9f 1f d5 7c 21 86 0d e 86 3b 89 94 a4 b3 02 f9 5b e3 b8 d9 76 42 ff c7 4c 69 6a 19 e3 10 fd b5 81 93 28 3b 89 fc f4 7e 3f ad d1 29 2 dd d0 5f 28 f5 a6 a0 67 92 44 cf 8a d7 dd 0a			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/10/2018T19:09:30Z / 04/10/2018T14:09:30-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a660000000000000000000007120			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/10/2018T19:09:29Z / 04/10/2018T14:09:29-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2207534			
	Datos estampados:	DDE8468FFC7CD798CFD703C50B8489E8B5580F2			



PODERAR JICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 6-1

REFERENCIA AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
INL/M/TPD

En tres de octubre de dos mil dieciocho, la licenciada Isis Nayeli Landeros Muñoz, secretaria de acuerdos, da cuenta al magistrado Eugenio Reyes Contreras, presidente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con la copia certificada de los documentos impresos y recibidos vía intranet **MINTERSCJN**, consistente en: "Acuse de Envío", "Evidencia Criptográfica Transacción SeguriSingn", ~~acuerdo de uno de octubre de dos mil dieciocho~~, "Evidencia Criptográfica Transacción SeguriSingn", "Acuse de Recibo" y "Evidencia Criptográfica Transacción SeguriSingn", que envía la **Ministra Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, registrado en el libro de correspondencia con folio 6813.-Conste.

Ciudad de México, tres de octubre de dos mil dieciocho.

Vista: la copia certificada de los documentos impresos recibidos vía intranet **MINTERSCJN**, consistentes en: "Acuse de Envío", "Evidencia Criptográfica Transacción SeguriSingn", ~~acuerdo de uno de octubre de dos mil dieciocho~~, "Evidencia Criptográfica Transacción SeguriSingn", "Acuse de Recibo" y "Evidencia Criptográfica Transacción SeguriSingn", que envía la **Ministra Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, mediante los cuales, en lo sustancial, solicita el acuse de recibo en los siguientes términos:

475

"....Sin embargo, es omiso en acusar recibo de dos tomos de pruebas, de un disco compacto y de un sobre amarillo cerrado; así como en informar de la remisión de la copia certificada de la sentencia dictada en el presente asunto, al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; por ello, se solicita lo haga a la brevedad, vía MINTERSCJN".

Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su precepto 2º; agréguese al señario las impresiones digitalizadas de cuenta, y en atención a su contenido, acúsese el recibo de envío de lo pedido: esto es, de los dos tomos de pruebas, un disco compacto y del sobre amarillo cerrado que

refiere

Ahora como lo solicita, inférnese al alto tribunal que, mediante oficio II-3008, librado el tres de septiembre de dos mil dieciocho, se remitió al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, copia certificada de la sentencia dictada en sesión de trece de junio de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión 623/2017, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para mayor referencia, remítase copia certificada de las constancias que sustentan lo acordado en el contexto del presente proveído.

Notifíquese; y vía MINTERSCJN, a Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

476



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B.1

REFERENCIA: AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
INLM/mpr

Así lo proveyó y firma el magistrado **Eugenio Reyes Contreras**, presidente del **Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**, asistido de la secretaria de acuerdos, licenciada **Isis Nareli Landeros Muñoz**, que autoriza y da fe de lo actuado.-DOY FE.

INLM/mpr

RECURSO

RAZÓN: ESTA FOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO EN EL TOCA DEL RECURSO DE REVISIÓN. CONSTE.

-4 OCT 2018

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, E
SE NOTIFICÓ A LAS PARTES EL ACUERDO ANTERIOR POR
LISTA QUE SE FIJO A LAS ocho horas
CONSTE.

Lic. Jorge Alberto Velázquez Hernández

477



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

TRÁMITE ADMISIONES

JUZGADO DECIMOSEXTO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

- 34424/2018 PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD
- 34426/2018 DECIMOSEGUNTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO
- 34427/2018 CAMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNION (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 34428/2018 CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 34429/2018 SECRETARIO DE SALUD (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 34430/2018 COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 34431/2018 COMISIONADO DE AUTORIDAD SANITARIA DE LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 34432/2018 DIRECTOR EJECUTIVO DE REGULACION DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS DE LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (AUTORIDAD RESPONSABLE)

2018 SET 18 A D-57
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO
6398

En los autos del juicio de amparo promovido por [redacted] contra actos del CAMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNION, se dictó un acuerdo que a la letra dice:

CIUDAD DE MÉXICO, once de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho

Vistos, agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrita por el Actual del Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo, consistente de un tomo; asimismo, dos legajos de prueba y un sobre confidencial, emitido en cumplimiento de la resolución por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictada en el tomo A.R. 623/2017, del índice de ese alto tribunal; acórrase recibo y hágase el conocimiento de las partes que el órgano revisor resolvió:

PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a [redacted] en contra de la expedición y promulgación de los artículos 235, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, así como de su aplicación, consistente en el oficio número [redacted] expedido por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefuentes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en los términos expuestos en la presente sentencia.

TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a [redacted] en contra de la expedición y promulgación de los artículos 334, 368 y 413 de la Ley General de Salud.

CUARTO. El recurso de revisión adhesivo interpuesto por las autoridades responsables es infundado.

Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glócese únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes, toda vez que las demás son reproducciones de aquellas que ya obran en autos.

En tal virtud, y estricto cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requirase a la autoridad responsable:

1). Director Ejecutivo de Regulación de Estupefuentes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo y dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, informe a este Juzgado Federal los actos realizados para su eficaz cumplimiento, consistente en lo siguiente:

"A la luz de lo expuesto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que son inconstitucionales los artículos 235, último párrafo, 237, 248, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -adquirir la semilla, semabre, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transporta- del estupefaciente "cannabis" (sativa, indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: (5^a (10^a), (6^a (7), (7), (8), (9), (10), (9 (11) y sus variantes estereoisoméricas), en conjunto conocido como marihuana, declaratoria de



Inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros.

Por tanto, este Alto Tribunal proceda a revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo para el efecto de que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Cofepris, autoridad señalada como responsable en el juicio de amparo, otorgue al quejoso la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, en el entendido de que corresponderá a la Cofepris establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución."

Apercibido que de no llevar a cabo tales actos, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 258 de la Ley de Amparo, y se seguirá con el procedimiento establecido en el artículo 193 del propio ordenamiento.

Por otro lado, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al: 2) Comisionado, para que en su calidad de superior jerárquico del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, y como de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Para que dentro del término de TRES DÍAS acredite ante este Juzgado, haber ordenado al personal bajo su mando el cumplimiento de la sentencia de amparo.

Apercibido que de no hacerlo, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización.

Prevíngase a la autoridad directamente obligada y al superior jerárquico, que de continuar con una actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el artículo 107 de la Ley de Amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno, para que elabore el proyecto de separación del cargo para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, y sea consignado al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo.

No obstante, enbórese a las autoridades, que aun cuando dejen sus respectivos puestos, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL, durante el tiempo que duró su encargo y que por esa razón, también podrán ser designadas en términos de la fracción XVI, del artículo 107 constitucional y 193 de la Ley de Amparo.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma Ricardo Gallardo Vara, Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Mauricio Amado Burguete. Doy fe. Firmas y Rúbricas."

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales conducentes

Ciudad de México, a once de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.

El Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México

Mauricio Amado Burguete



471



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.A. [REDACTED]
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
J.A. [REDACTED]
INLM/mpr

9
FORMA B-1

En tres de septiembre de dos mil dieciocho, 511

la licenciada Isis Nayeli Landeros Muñoz, secretaria de acuerdos, da cuenta al magistrado Eugenio Reyes Contreras, presidente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el oficio 4454, registrado en el libro de correspondencia con folio, 5992, signado por la secretaria auxiliar de acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al que acompaña copia certificada del testimonio correspondiente a la sesión de trece de junio de dos mil dieciocho dictada por la Primera Sala del alto tribunal, en el amparo en revisión 623/2017, el toca del recurso de revisión [REDACTED] radicado en este Tribunal Colegiado, el oficio de amparo indirecto [REDACTED] dos legajos de papebas, un sobre cerrado que contiene información confidencial, del índice del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y un disco compacto. Conste.

Ciudad de México, tres de septiembre de dos mil dieciocho.

Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la secretaria auxiliar de acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al que acompaña copia certificada del testimonio correspondiente a la sesión de trece de junio de dos mil dieciocho dictada por la Primera Sala del alto

tribunal, en el amparo en revisión 923/2617, el toca del recurso de revisión [redacted] radicado en este Tribunal Colegiado, el juicio de amparo indirecto [redacted] dos legajos de pruebas, un sobre cerrado que contiene información confidencial, del índice del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, un disco compacto. Acúcese recibo de estilo.

• Norte

Con fundamento en el artículo 22, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su precepto 2º; agreguese a los presentes autos, oficio de cuenta y su anexo, y en atención a su contenido, este Tribunal Colegiado toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

> TOMA
CONOCIMIENTO
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FOLIO 10
DEL TRIBUNAL

Ahora, en la sentencia de trece de junio de dos mil diecisiete, la Superioridad resuelve:

" PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO.- La justicia de la Unión ampara y protege a [redacted] en contra de la expedición y promulgación de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, así como de su aplicación, consistente en el oficio número [redacted] expedido por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en los términos expuestos en la presente sentencia. TERCERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a [redacted] en contra de la expedición y promulgación de los artículos 234, 368 y 479 de la Ley General de Salud. CUARTO.- El recurso de revisión adhesivo interpuesto por las autoridades responsables es infundado."

481



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

J.A.

INLM/Imp

FORMA-1

Vuelvan los autos del juicio de amparo

indirecto al Juzgado de origen solicitándole el
acuse de recibo de los autos en un plazo de
veinticuatro horas, háganse las anotaciones en el
libro de gobierno, la actualización de datos en el
Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes
(SISE) y en su oportunidad, archívese como
totalmente concluido.

Notifíquese, personalmente a la parte quejosa,
por oficio al Juzgado de origen, a las autoridades
responsables, así como a la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así lo proveyo y firma el magistrado Eugenio
Reyes Contreras, presidente del Décimo Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito, asistido de la secretaria de
acuerdos, licenciada M^{sc}. Marieli Landeros Muñoz,
que autoriza y da fe de lo actuado.- Doy Fe.

INLM/Imp

REVISO SISE

RAZÓN.- ESTA FOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, DICTADO EN EL TOCA DEL RECURSO DE REVISIÓN [REDACTED] FONTE.



482

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 04 SEP 2018

SE NOTIFICÓ A LAS PARTES EL ACUERDO ANTERIOR POR
LISTA QUE SE FUNDÓ A LAS nueve horas
CONSTE.

Lic. Jorge Alberto Velázquez Hernández

LA QUE SUSCRIBE LICENCIADA ISIS NAYELI
LANDEROS MUÑOZ, SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO,
CERTIFICA: QUE LAS PRESENTES COPIAS
FOTOSTÁTICAS CONSTANTES DE TRES HOJAS ÚTILES
SON FIELMENTE SACADAS DE LOS ORIGINALES QUE
TUVE A LA VISTA Y QUE OBRAN EN EL TOCA DEL
RECURSO DE REVISIÓN R.A. [REDACTED] LO ANTERIOR EN
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE
TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, CIUDAD
DE MÉXICO, A TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO.- DOY FE

SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. ISIS NAYELI LANDEROS MUÑOZ

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: RespuestaAcuerdo.pdf
Secuencia: 2204664

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

[illegible]

**SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
OFICINA DE CERTIFICACIÓN JUDICIAL Y
CORRESPONDENCIA**

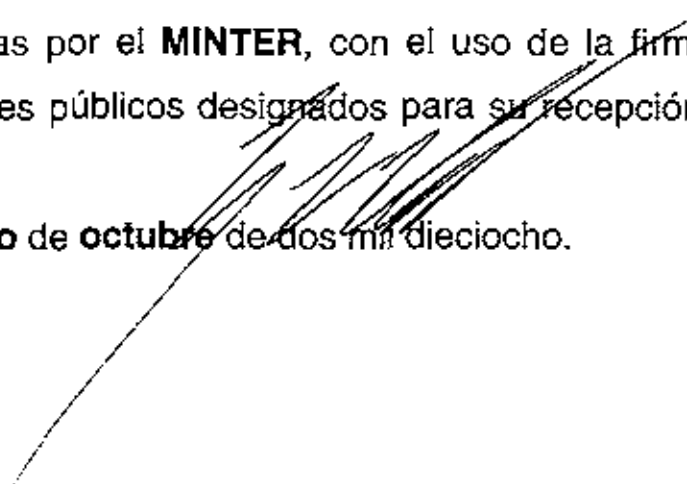
Licenciado Gabriel de la Vega Urdaneta, Secretario adscrito a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo previsto en el artículo 18, fracción III, del Acuerdo General Plenario 12/2014 - - - - -

-----**C E R T I F I C A:**-----

Que el presente documento constante de 10 fojas, es versión impresa fiel de la versión electrónica de las constancias indicadas en el acuse de envío recibidas por el **MINTER**, con el uso de la firma electrónica de los servidores públicos designados para su recepción.

Doy fe.

Ciudad de México, a **cuatro** de **octubre** de dos mil dieciocho.



134

484

Folio y fecha de recepción SCJN: 68235-INTER 04/10/2018 16:20:55
Folio electrónico: 62794



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Respuesta de órganos del PJR a requerimientos realizados por la SCJN

Órgano requerente:	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Órgano requerido:	DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO
Oficio:	3247
Fecha de respuesta del órgano requerido:	04/10/2018 09:33
Tipo de recepción:	CONFORME
Fecha de acuerdo de requerimiento del órgano requerente:	01/10/2018 00:00
Síntesis del acuerdo del órgano requerente:	
Tipo de expediente del órgano requerente:	AMPARO EN REVISIÓN
Núm. de exp. del órgano requerente:	623/2017
Oficio de referencia del órgano requerente:	MMPS/714612/2018

Detalle de respuesta y constancias recibidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo y núm. de exp. del órgano requerido	Tipo de respuesta o de constancias remitidas	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación remitida
ACUERDO: Fecha de acuerdo: 01/10/2018	AMPARO EN REVISIÓN	ACUSA DE RECIBO LOS AUTOS DEL JUICIO AMPARO Y ANEXOS	(10) ORIGINAL	DOCUMENTO LEGIBLE EN 10 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

485

Evidencia Criptográfica - Transacción Seguridad
 Archivo Firmado: AcuseRecepcionRespuestaPetitionSCJN510031.pdf
 Secuencia: 2205137

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	GERARDO ALEJANDRO GARCIA	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	GAXG640126HDFRXR00			
Firma	# Serie:	706a5673636a6e0000000000000000000000000000f31	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/10/2018T21:21:00Z / 04/10/2018 16:21:00-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	3a 28 38 28 21 a3 23 aa c4 1a 32 a1 50 b7 ea 4c 73 cc eb 3a 53 4d b0 4e 0f 76 0e ff 97 01 67 cb 41 b0 08 57 e7 99 53 80 56 c6 82 74 49 21 ca 9b a1 e3 29 f3 a6 0a 7b 25 e9 5b 9b ee 99 b8 54 94 08 77 63 c5 3f c5 9d b2 2f 09 09 f7 08 04 d8 82 80 13 69 30 cb 71 b0 05 3a c5 1b 4e 6a 0c 9a a5 84 7f 42 79 15 a7 a9 1e 9e f9 5f 89 3f 94 8f 3d 73 dd 24 69 50 93 a4 22 31 ff 38 8b 90 c8 54 ff 22 dd 17 b9 8f a5 22 0b c7 43 75 8c 4a 88 67 95 1e 4b db 52 26 7d d5 0d 20 4a d3 aa 46 7b b1 8a 21 66 31 f9 45 25 db 03 8c f0 cf 43 e0 d1 ae e6 de 10 5a 00 12 47 8c 88 7e b0 c4 82 1c ff d8 52 0f 32 23 a2 1e f6 ea b6 c1 c9 57 f9 3f 89 b7 cc 25 97 e8 69 a7 1f 68 63 65 40 18 46 03 e2 7f 7f 8d 82 67 6f 0b 6f 64 09 58 6f b1 7d fd 60 68 8f c9 70 74 f8 ae 01 37 ce a8 d1 3b 5d 29 ab 80			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/10/2018T21:21:02Z / 04/10/2018 16:21:02-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a5673636a6e0000000000000000000000000000f31			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/10/2018T21:21:00Z / 04/10/2018 16:21:00-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2208008			
	Datos de la plantilla:	FD60E01D0ED15FBF7519151E2A156A1A563A8EB4			

SUMARIO
JURISDICCION DE LA ACCION

2018 OCT 5 AM 10 47

SECRETARIA DE ACUERDOS





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PROMOCIÓN
58235-MINTER

486
FORMA A-34
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

En nueve de octubre de dos mil dieciocho, la Secretaria de Acuerdos da cuenta a la Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el acuse electrónico y el anexo, recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia. Conste. *[Firma]*

Ciudad de México, a nueve de octubre de dos mil dieciocho.

Agréguese a sus autos el acuse y el anexo remitidos vía MINTERSCJN, por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, téngase a dicho Tribunal Colegiado acusando recibo de dos tomos de pruebas, de un disco compacto y de un sobre amarillo cerrado; informando que por oficio II-3008 envió copia certificada de la sentencia dictada en el presente asunto, al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; y remitiendo copias digitalizadas de las constancias relativas.

Notifíquese.

Así lo previó y firma la **MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ**, Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciada María de los Ángeles Gutiérrez Gatica.

OACA

El 10 OCT 2018

se notificó el acuerdo anterior a los interesados por medio de lista, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.



SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

487
FORMA 1.5

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRO

2018 OCT 10 AM 11 30

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

SOLICITANTE: PRIMERA SALA DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN
DECLARATORIA GENERAL DE
INCONSTITUCIONALIDAD
NÚMERO: 1/2018

PS-02590

OF. SSGA-I-30839/2018. SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN.

DECLARATORIA
GENERAL DE
INCONSTITUCIONALIDAD

1/2018 /

Acuso a usted recibo de su atento oficio número

+ XIV-787-P, de trece de septiembre de dos mil dieciocho, mediante
el cual se recibió de conformidad en esta Subsecretaría General
de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, copia
certificada de la resolución de trece de junio de dos mil dieciocho,
dictada en el amparo en revisión 623/2017, y del voto particular
del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, lo anterior para los
efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, le protesto las seguridades de
mi atenta consideración.

Ciudad de México, a ocho de octubre de dos mil dieciocho.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE AMPAROS

LIC. DAVID ESPEJEL RAMÍREZ
SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Entregado

10-06T18
2-59



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

REFERENCIA
PS-02590

488
FORMA 1/82
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

En quince de octubre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acuerdos da cuenta a la Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el oficio SSGA-I-30839/2018, recibido en esta Secretaría de Acuerdos. Conste. *C*

Ciudad de México, a quince de octubre de dos mil dieciocho.

Agréguese a sus autos el oficio SSGA-I-30839/2018, del índice de la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. *○*

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, téngase a dicha Subsecretaría acusando recibo del // oficio XIV-787-P y del anexo descrito en el mismo.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firmó la **MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ**, Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciada María de los Ángeles Gutiérrez Gatica.

OAGA.

17 OCT 2018

El 17 OCT 2018, se notificó el acuerdo anterior a los interesados por medio de lista, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

69185-v 489



Poder Judicial de la Federación
JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Acuse de Recibo

Destinatario: Suprema Corte de Justicia de la Nación
Folio electrónico: 74604/2018
Fecha de envío de la SCJN: 27/06/2017 11:59
Tipo y núm. de exp. de la SCJN: AMPARO EN REVISIÓN 623/2017
Tipo de acuerdo: ADMISIÓN Y TURNO, ACUSE DE RECIBO PARA CONOCIMIENTO
Núm. oficio de la SCJN: MUP/LSSGAV/3820/2017

Tipo y núm. de exp. del órgano remitente: AMPARO INDIRECTO [REDACTED]
Fecha de recepción del órgano remitente: 28/11/2018 13:06
Recepción: RECEPCIÓN CONFORME

Detalle de documentación recibida

Acuerdo (en su caso constancias)	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Resumen sobre la documentación recibida
ACUERDO	(9) ORIGINAL	se toma conocimiento
Fecha de acuerdo: 14/06/2017		

*En el cómputo del número de fojas se incluyó la foja correspondiente a la evidencia cryptográfica.

6-110-18
3:42

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseRecepcion67629.pdf
Secuencia: 2302646

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MAURICIO AMADO BURGUETE	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	AABM830512HCSMRR00			
Firma	# Serie:	706a6620636a6600000000000000000000a936	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	26/11/2018T19:07:41Z / 26/11/2018T13:07:41-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	6d c4 c1 c1 4d a5 61 90 4f 7c 94 03 03 24 57 76 ea 7b 24 d0 1c 7c 5c f7 f7 b0 c2 8e 5d 24 0b 4f d8 93 5e df 68 6e 3a d5 fd 09 04 26 a9 93 51 70 00 33 df 76 54 28 ba 3d cf 11 54 76 9b f1 5b da ef 0b 3b 71 9f 6d 2c 54 c4 a4 92 59 83 23 9f 84 ee 94 bc 6f fe 82 22 7b fd d7 24 76 0c 1a 35 a9 89 48 32 55 90 01 a3 a3 40 1b f7 34 2a a4 d8 67 dd 5e ba fa 4a 89 39 ff 0a 59 5e 28 88 e4 e0 1a 90 e4 f5 09 14 0a 64 ef 22 f9 3b fa 12 ed 49 66 28 13 bd f8 46 23 20 ce 81 d8 46 07 14 df f1 bc 71 91 b5 77 7a 90 14 6e 7f fa 34 2a f5 44 44 39 c6 40 d3 7d c1 e8 6b b9 28 2f b6 26 98 00 a0 bd 75 e1 6d ca e0 91 85 5a 05 63 ed a7 38 16 ef 18 e7 ce ff 78 57 56 bc 12 d0 08 2d 77 3a 7b c7 23 3a e1 f1 04 05 1f 3f 1a 2d 9d be c8 1f c0 24 53 b2 44 f4 cf ac 3f 33 df e3 31 8b 52 0a c6 fc f9			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	26/11/2018T19:06:40Z / 26/11/2018T13:06:40-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a6600000000000000000000a936			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	26/11/2018T19:07:41Z / 26/11/2018T13:07:41-06:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2305533			
	Datos estampillados:	2B14AA3C247A23823EC6CD7F9578940717123A31			

Folio y fecha de recepción SCJN: 69185-MINTER 26/11/2018 13:38:05
Folio electrónico: 74604



Suprema Corte de Justicia de la Nación
Recepción en SCJN del acuse de recibo de órganos del
PJF

Remite: JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de envío a la SCJN: 26/11/2018 13:06:00
Tipo y núm de exp. en SCJN: AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2018.

Por acuerdo presidencial, la (el) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el acuse
de recibo 69185-MINTER, constante de 3 fojas, incluida esta constancia, para efectos
legales correspondientes. Conste

**LA SECRETARIA DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA.**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE ACUERDOS DE LA
PRIMERA SALA

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA.

OACA*P

PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

2018 NOV 26 PM 3 42

Suprema Corte de Justicia de la Nación



SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA

492
FORMA A-32

2018 NOV 28 PM 12:58

Lic Oscar

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA DE ACUERDOS
R. D. SECRETARÍA DE ACUERDOS
Y DECISIONES

Ciudad de México a 28 de noviembre de 2018.

US-03260

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA
SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
PRESENTE

PRIMERA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS

2018 NOV 30 PM 2:33

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por instrucción del Ministro Arturo Saldivar Lelo de Larrea le informo que no se formulará voto alguno en el amparo en revisión 623/2017 al estimarlo innecesario.

ATENTAMENTE

Maestro José Ignacio Morales Simón
Secretario de Estudio y Cuenta

Lic Oscar
Ermios 30/11/2018



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

REFERENCIA
PS-03260

493
REGISTRO
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

En cinco de diciembre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acuerdos da cuenta a la Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el oficio sin número, signado por el maestro José Ignacio Morales Simón, Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Ponencia del **MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, recibido en esta Secretaría de Acuerdos. Conste.

Ciudad de México, a cinco de diciembre de dos mil dieciocho.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, agréguese a sus autos el oficio sin número, signado por el maestro José Ignacio Morales Simón, Secretario de Estudio y Cuenta, a través del cual comunica que el **MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, no formulará el voto concurrente anunciado en sesión de trece de junio del año en curso.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma la **MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ**, Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciada María de los Ángeles Gutiérrez Gatica.

OACAgbr.

El **5 DIC 2018**, se notificó el acuerdo anterior a los interesados por medio de lista, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.



Lic. Oseay

499
FORMA A-13

SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
PRIMERA SALA

2018 DIC 10 PM 8 25

2018 DIC 11 PM 2 45

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ciudad de México, a cinco de diciembre de dos mil dieciocho.
SECRETARÍA DE ACUERDOS
REVISIÓN DE ENGRESOS
Y DEVOLUCIONES

PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA
SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
PRESENTE

PS-03547

Por este medio, le informo que no se elaborará voto en relación con la sentencia de la Primera Sala, de trece de junio de dos mil dieciocho, que resolvió el amparo en revisión 623/2017. ✓

Lo anterior en virtud de que después de analizar el engrose de la sentencia, se estima que no se elaborará voto concurrente. ✓

Agradeciendo de antemano sus atenciones, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA

DGS

9:49

12-DIC-18



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

REFERENCIA
PS-03547

495
FORMA A-54
AMPARO EN REVISIÓN 623/2017

En tres de enero de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el oficio sin número, signado por el **MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA**, recibido en esta Secretaría de Acuerdos. Conste.

Ciudad de México, a tres de enero de dos mil diecinueve.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, agreguese a sus autos el oficio sin número, signado por el **MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA**, a través del cual comunica que no formulará el voto concurrente anunciado en sesión de trece de junio de dos mil dieciocho.

Notifiquese.

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ**, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciada María de los Ángeles Gutiérrez Gatica.

OACA.

El - 4 ENE 2019

, se notificó el acuerdo anterior a los interesados por medio de lista, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.